CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTA ENCARGADA

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA

RICAURTE SOLER MENDIZÁBAL.
Profesor de Derecho del Trabajo
de la Universidad del Istmo.
Panamá.

RESUMEN

Las soluciones de los conflictos colectivos de trabajo son los mecanismos empleados por las diferentes legislaciones laborales para resolver las controversias que surjan entre los trabajadores organizados y los empleadores.

Estos métodos tienen por finalidad disminuir las diferencias entre los partícipes de la relación laboral, en la búsqueda de una armonía dentro de la empresa y que la huelga sea la última fórmula para solucionar los conflictos colectivos.

INTRODUCCIÓN

El Derecho Colectivo de Trabajo es un derecho dinámico por la relación existente entre el sindicato, federación y confederación, y el empleador o empleadores. Esto es motivado por buscar constantemente una evolución de las nuevas innovaciones y prestaciones que se producen como consecuencia de la relación laboral.

Este derecho comprende las relaciones con las organizaciones sociales de trabajadores, los requisitos para su formación, protección, función y disolución. Se incluye igualmente lo relativo a las convenciones colectivas de trabajo, procedimientos de solución de los conflictos colectivos de trabajo, clasificación de los conflictos colectivo y el derecho a huelga, entre otras cosas.

Por la importancia que tiene la solución de los conflictos colectivos de trabajo, en el ámbito económico como en lo laboral referente a la huelga y las consecuencias que ella podría ocasionar, es trascendental su estudio.

DEFINICIÓN

Los conflictos colectivos de trabajo son los que se producen como consecuencia de las relaciones laborales entre un grupo de trabajadores, un sindicato, federación o confederación, por una parte, y por otra, una empresa o grupo de empresa.

El Dr. Mario de la Cueva, en su obra Derecho Mexicano de Trabajo, lo define como:

> "Los conflictos de trabajo son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos, solamente entre éstos, en ocasión o con motivo de la formación, modificación, o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo."[1]

Cada vez que se mencionan los conflictos colectivos, es porque constituyen divergencias sobre determinados aspectos laborales dentro de la empresa y producto de las exigencias de uno u otro partícipe de la relación de trabajo.

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS COLECTIVO DE TRABAJO

El profesor Carlos Hernández Contreras cita al Dr. Hernández Rueda, quien señala tres causas que producen los conflictos de trabajo. Entre estas tenemos:

---

[1] De La Cueva, Mario: Derecho Mexicano de Trabajo. Edit. Porrúa. México, 1960, p. 729.

"A) Incumplimiento o violación de las normas legales y contractuales;

B) Las aspiraciones de los trabajadores, que tienen al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo o a la modificación de las existentes;

C) Los cambios que introducen los empleadores en el curso de la relación de trabajo, con el propósito de reducir los costos de producción y aumentar el redimiendo."[2]

CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO

La doctrina ha establecido diferentes tipos de clasificación de los conflictos colectivos de trabajo entre las que se puede mencionar: los conflictos impropios o impuros, los conflictos propios o puros, los conflictos individuales y colectivos, y los conflictos económicos o de intereses y jurídicos o de derechos, que están consagrados en el artículo 417 del Código de Trabajo.

Los conflictos jurídicos o de derechos son los que tienen por objeto la interpretación o aplicación de una norma legal, reglamentaria, convencional, decreto, entre otras, que interesan a un grupo de trabajadores.

Cuando se trata de un conflicto jurídico, éste es motivado por la interpretación de una norma legal o convencional y las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, para que intervenga por mediación antes de someterlo a los tribunales de trabajo.

Los conflictos jurídicos tienen por finalidad que no se produzcan violaciones de las disposiciones legales o convencionales, exigiendo su cumplimiento y obteniendo la observancia de las disposiciones legales que han sido vulneradas en forma reiterada. Con esto le permite a los trabajadores el ejercicio del derecho de huelga, para lo cual se debe presentar el pliego de peticiones y que surta el trámite de conciliación.

Los conflictos económicos o de intereses son aquéllos que tienen por objeto la celebración de una convención colectiva de trabajo o su modificación. Estos conflictos buscan cambiar la situación jurídica en la empresa y someterse a los medios de solución.

SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Dentro de los métodos de solución de los conflictos colectivos, el Código de Trabajo señala los siguientes: la conciliación (art. 432 del CT), el arreglo directo (art. 423 del CT) y el arbitraje (art. 452 del CT).

La Conciliación:

En cuanto a la conciliación, ésta es muy activa en la legislación laboral panameña, por el dinamismo que se imparte al momento de negociar una convención colectiva de Trabajo. La misma se inicia con el pliego de peticiones que deberá presentarse por triplicado en la Dirección Regional o General de Trabajo y contener los requisitos establecidos en el artículo 427 del Código de Trabajo.

"1. Nombre del o de los sindicatos que suscriben el pliego, con indicación de sus oficinas o locales que designen para recibir notificaciones, nombre, cédula y domicilio de su Presidente o Secretario General;

---

[2] Hernández Rueda, Lupo: "Manual de Derecho de Trabajo". Tomo II, pág. 685. Citado por Hernández Contreras, Carlos. Conflictos Colectivos de Trabajo y sus Medidos de Solución. Ponencia presentada en el XII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bolivia, del 16 al 20 de octubre de 1995, p.25.

2. Nombre y dirección comercial del empleador, empleadores u organizaciones contra quienes se dirige el pliego;

3. Nombre, número de cédula y domicilio de los delegados designados para la conciliación, que serán no menos de dos, ni más de cinco y si lo estiman conveniente, de un asesor sindical y un asesor legal; los delegados deben designarse con poderes suficientes para negociar y suscribir cualquier arreglo o, si fuere el caso, una convención colectiva;

4. Las quejas y peticiones concretas; si se pide la celebración de una Convención Colectiva, el pliego debe contener el proyecto correspondiente;

5. El número de trabajadores que prestan servicios para cada empleador en las empresas, negocios o establecimientos que se vean afectados por el conflicto, con indicación de aquellos que deben computarse para determinar la legalidad de la huelga, si la hubiera;

6. El número de trabajadores que apoya el conflicto en cada empresa, o si fuera el caso, en el o los establecimientos, o negocios de que se trate."

Además el pliego de peticiones debe ser acompañado con los siguientes requisitos:

1. Copia auténtica de la resolución que al efecto haya aprobado la Asamblea General de la organización de trabajadores de que se trate;

2. Nombre y firma de todos los trabajadores que apoyan el pliego;

3. Si el pliego lo presenta un grupo de trabajadores, debe acompañarse copia del acuerdo respectivo, firmada por todos los que apoyan el pliego;

4. Certificación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en la cual conste la inscripción del sindicato.

Procedimiento de Conciliación:

Presentado el pliego de peticiones en la Dirección Regional o General de Trabajo, esta no podrá rechazarlo; pero si encontrare defectos los señalará en el instante para que el sindicato los subsane. De igual forma, deberá comprobar que la empresa que va a negociar la convención colectiva de trabajo, se dedica a las actividades relacionadas con el sindicato, con lo cual se establecerá su legitimidad para pactar una convención colectiva.

En sentencia de Amparo de Garantías Constitucionales del 17 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia sostiene lo siguiente:

"A juicio de la Corte no se puede interpretar ni se puede aplicar aisladamente el artículo 435 del Código de Trabajo, en particular en aquellos casos en donde puedan surgir dudas acerca de la veracidad de la información contenida en el pliego que se haya presentado. Es importante comprobar la veracidad del contenido de este último documento utilizando los medios que la Dirección General de Trabajo tiene a su alcance, como por ejemplo investigando de oficio si la empresa realmente se dedica a una actividad relacionada con aquella a la que pertenecen los miembros del sindicato que gestiona el pliego; aspecto que puede ser aclarado por los propios trabajadores acompañando la certificación correspondiente del Ministerio de Comercio e Industrias o por la Dirección General de Trabajo a través de las peticiones correspondientes. Estos puntos son claves y hay que dejarlos aclarados antes de dictar la resolución que le da

> traslado al empleador del pliego intimándolo a contestar y a comparecer a la conciliación."

Una vez que el pliego de peticiones está en debida forma, el Director General de Trabajo, bajo el imperio de la Ley notificará dentro de los dos días siguientes a la presentación del pliego la existencia del conflicto. Esta notificación es personal y se entregará copia del pliego. En caso de que no se conozca el domicilio o paradero del empleador, se emplazará por edicto y se publicará en periódico de circulación nacional.

El empleador tiene cinco 5 días para contestar el pliego, el cual podrá adicionar, modificar y rechazar las propuestas presentadas por el sindicato. En caso de que no constate en el término señalado y se vaya a una huelga, se considerará imputable para él con la obligación de pagar los salarios caídos.

Contestado el pliego de peticiones, se nombrará a un funcionario de la Dirección Regional o General de Trabajo, que conciliará o mediará en el conflicto con el propósito de avenir a las partes dentro de un término de 15 días; pero se pueden pedir dos prórrogas de 10 días cada una si ambas partes están de acuerdo. Este mediador tiene amplias facultades en el proceso de conciliación, pues puede llamar a la conciliación en cualquier momento, aún en horas y días inhábiles.

La falta de comparecencia de alguna de las partes se considerará como desacato y la renuencia se estima como abandono de la conciliación, y, por ende, si se da la huelga será imputable a la parte que no asistió a la conciliación.

El Código de Trabajo señala en su artículo 443 que la conciliación termina en los siguientes casos:

> 1. Transcurridos 15 días hábiles desde que se notificó el pliego de peticiones, salvo que ambas partes con la anuencia del conciliador decidan prolongarlas hasta dos veces, cada una de ellas por un período no mayor de diez días hábiles;
>
> 2. Cuando el empleador no conteste el pliego de peticiones en el plazo de cinco (5) días, o cuando se retire de la conciliación o que se muestre renuente a comparecer a las citaciones;
>
> 3. Cuando antes de transcurrido el plazo de 15 días hábiles, o su prórroga, ambas partes, con la anuencia del conciliador, manifiesten su intención de dar por terminada la conciliación;
>
> 4. Cuando las partes lleguen a un arreglo o convengan en ir al arbitraje.

Si no se llega a un arreglo entre las partes, el conciliador o mediador levantará un informe, en el cual expondrá los puntos acordados y aquéllos que no fueron pactados. Terminada la conciliación por los motivos anteriormente señalados, correrá el término de 20 días para la declaratoria de la huelga.

El Arreglo Directo o el Avenimiento Directo:

El arreglo directo no es más que el acuerdo a que se llega entre el sindicato y empleadores, sobre una nueva convención colectiva de trabajo o su modificación sin la intervención de la autoridad administrativa de trabajo.

Cada día es más frecuente que los sindicatos y empleadores negocien las convenciones colectivas por esta vía, toda vez que no existen los términos tan rigurosos como se ha señalado. Esto facilita un entendimiento entre las partes sin presión alguna en la negociación. A partir del Código de 1972, se han incrementado las negociaciones colectivas por el arreglo directo y se han obtenido buenos resultados.

El Código de Trabajo dispone en el artículo 424 que en caso de que las partes lleguen a un acuerdo por la vía de arreglo directo, se levantará un acta, con indicación de todos los acuerdos por las partes, copia de la cual se remitirá

a la Inspección General de Trabajo dentro de los tres días siguientes. Se señala, igualmente, que para iniciar el procedimiento de conciliación no es necesario que las partes recurran primero a este mecanismo de solución.

Arbitraje:

El arbitraje es otro medio de solución de los conflictos colectivos de trabajo, en el cual se decide las diferencias a través de tribunal arbitral que no tiene la características de un tribunal jurisdiccional.

Para que se dé un arbitraje en Panamá, éste tiene que realizarse una vez se inicie la huelga y ser solicitado por ambas partes, por los trabajadores y, en los casos de los servidores públicos, cuando así lo decida la autoridad administrativa de trabajo. El arbitraje no puede ser propuesto por los empleadores.

Este compromiso arbitral se debe firmar en tres ejemplares y con la anuencia del conciliador que está dirimiendo el conflicto. Puede ser total o parcial en los casos en que no se haya llegado a un acuerdo; de igual forma, puede ser voluntario u obligatorio.

El arbitraje voluntario es cuando las partes así lo decidan y el arbitraje obligatorio es cuando lo decida la autoridad administrativa de trabajo. Se ha discutido mucho respecto a este tipo de arbitraje, expresando que afecta la importancia de la negociación colectiva de trabajo y el derecho a huelga.

Panamá ha tenido leyes que momentáneamente establecen el arbitraje obligatorio, entre las cuales podemos mencionar: la Ley 13 del 11 de octubre de 1990 y la Ley 95 de 1976. Estas Leyes en su tiempo establecieron este tipo de arbitraje, para que las empresas no se vean afectadas por una huelga prolongada. Por consiguiente, el arbitraje obligatorio tiene por finalidad evitar el desgaste total o parcial de una huelga y los efectos que esta pueda ocasionar a terceros.

El Código de Trabajo establece en los artículos 454, 462 y siguientes, el procedimiento del arbitraje; y comprende lo siguiente:

Una vez llegado al compromiso del arbitraje, ambas partes nombrarán sus árbitros de las listas que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o escogerán libremente los suyos. Escogidos los árbitros de cada parte, éstos tienen que designar al tercer árbitro dentro de dos días. Si no lo hacen en el término señalado, lo hará el Ministerio de Trabajo, que lo escogerá dentro del cuerpo de mediadores o conciliadores. Es de señalar que el funcionario designado no tiene que haber participado en el proceso de conciliación.

Formado el Tribunal Arbitral, se tendrá dos días para que las partes presenten sus pruebas y serán escuchadas dentro del proceso. Pasado dicho término, el Tribunal Arbitral tiene 10 días para dictar sentencia.

La sentencia o el laudo arbitral es de forzoso acatamiento para las partes, cuya notificación es personal; pero se declarará nulo si el laudo arbitral se pronuncia por hechos distintos a los plasmados para el arbitraje, desmejora las condiciones de los trabajadores o se falla fuera del término anteriormente señalado.

CONCLUSIÓN

Los conflictos colectivos de trabajo constituyen las discrepancias entre los interlocutores sociales de la relación laboral, que tiende a establecer mejoras, modificación o cumplimiento de las condiciones de trabajo. Además, estamos de acuerdo con el Dr. Arturo Hoyos cuando manifiesta lo siguiente:

> "Creemos que los conflictos de trabajo son inherentes a la sociedad sobre todo a la de tipo industrial y son, pues, inevitables. Debemos adoptar reglas jurídicas para que ellos se desenvuelvan y se ajusten y se les encuentren solución pero no debe haber norma jurídica que

busque su eliminación."[3]

Se deben emplear estos métodos de solución de los conflictos colectivos de trabajo para evitar las divergencias entre empleadores y trabajadores y llegar así a una verdadera armonía dentro de la empresa.

[3] Hoyos, Arturo: "Los Conflictos de Trabajo". en Derecho Laboral en Iberoamérica. compilador Baltasar Cavazos Flores. Editorial Trillas, México, 1981, p. 807.

ÍNDICE

PONENCIA i

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR NILKA TOVAR CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN AUTO DE 7 DE AGOSTO DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ANGELA GAUDIANO, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMUEBLES CONTINENTAL, S. A. -VS- JUEZ SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 5

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FIGDOLI CABRERA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 7

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR ABEL ABDIEL DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, CONTRA LA FISCALÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ANA DELGADO TORRES -VS- JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 10

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR FRANKLIN C. AROSEMENA, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA GORGONA, S. A. -VS- PROVIDENCIA S/N DE 21 DE AGOSTO DE 1996 DICTADA POR EL JUZGADO EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 12

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES (SIPAC) CONTRA LA ORDEN DE HACER EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DEL IRHE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR MIGUEL ÁNGEL VARGAS RICORD, CONTRA EL AUTO N° 278 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 8 DE AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN CONTRA DEL AUTO DE 23 DE JULIO DE 1996 EXPEDIDO POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 16

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR NIDIA MIREYA LASSO LOUIS VS. JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 17

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FIGDOLI CABRERA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 8 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ SALVADOR MUÑOZ CORREA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA NOTA N° 210-1157 DE 28 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JEFE DE AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 21

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ELIO CAMARENA EN REPRESENTACIÓN DE ENSEÑANZA PARTICULAR INCORPORADA, S. A. EN CONTRA DE LA SENTENCIA PJ/6/96 DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN N° 6 DEL MINISTERIO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 25

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR FRANKLIN RODOLFO CORRO BREA CONTRA SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN EL PROCESO DE TRABAJO PROMOVIDO POR MI PERSONA EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 27

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR REY H. LUQUE -VS- GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

RECURSO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR TORIBIO ACOSTA CERRUD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DISPLAY VARIEDADES ACOSTA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, LICENCIADO EMIDIO ALFREDO MANZANÉ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 30

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR NELVA COSIO DE RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 133-96 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 34

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR TEODOLBERTO D. CASTILLO P. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 1996 DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN ACADÉMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR GIOVANNI BUGLIONE CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

RECURSO DE HABEAS CORPUS 38

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO EN CONTRA DE LA FISCAL SÉPTIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 38

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DEL SEÑOR JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA Y EN CONTRA DE LA JUEZ SÉPTIMA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAMARIS EDITH MENDIETA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 42

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 43

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALCIDES GUERRERO EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 45

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 46

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ AÑINO CONTRA LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENEROSO CORONEL CARRERA EN CONTRA DE LA FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DROGAS DE COLÓN A CARGO DE AMINTA CORRO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 48

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ MOSQUERA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 51

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN MANUEL SCOTT EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE MANUEL HIPÓLITO TULIO PINEDA Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, CON SEDE EN ANCÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO ALBERTO CEDEÑO FALCÓN CONTRA LA SECRETARIA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NAYARITH AYDEE GUERRA ALLEYNE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JOSÉ OLMEDO GARCÉS CONTRA EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RODNEY MANRIQUE CASTILLO Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDISON GÓMEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, INTERPUESTA POR MARVIN MAURO SALAZAR HINES, CONTRA LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 63

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMEHLED ANTONIO APOLAYO (A) "BEBYGRON" CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR DIONISIO ÁBREGO CLIABUS EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 67

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES EN CONTRA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PRESIDIDA POR EL LEGISLADOR CÉSAR PARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ISABEL GARRIDO MORENO "YUYO" CONTRA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE RAFAEL BERNAL Y EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RICARDO RAÚL GÓMEZ, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE ERIC OMAR SAUCEDO, IMPUTADO DEL SUPUESTO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS CONTRA LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 84

RECURSO DE HABAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO VALENTINO HAMILTON DOWNER EN CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 88

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ADOLFO JOSÉ MENDOZA NOGUERA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 90

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JULIO CÉSAR CONTRERAS Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS CAICEDO MURILLO Y EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 95

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ISAAC GARRIDO CORTÉZ (A) "CHOLO" CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 97

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 100

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MÓNICA SOMOSA O DELIA MATILDE DE CONTRERAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ORLANDO DAUKINS Y EN CONTRA DEL FISCAL DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE COLÓN Y LA COMARCA DE SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, (VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HORACIO AGUIRRE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LINO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EDUARDO DAVID ÁLVEO Y MARCOS A. RAMÍREZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 107

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA CONTRA LA SECRETARÍA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 108

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO ROCK VASEL Y PEDRO MEJÍA GÓMEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELMIR DE LA ROSA MADRID EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAGALY CORTÉS DE IBARRA Y ELENA OROZCO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 113

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIONISIO LUNA, JUAN FRANCISCO LUNA Y RICARDO LUNA DENIS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 114

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE PEDRO JUAN JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA, SINDICADOS POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN CONTRA DE LA FISCAL PRIMERA DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 118

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO BROWN LASSO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ELISEO GONZÁLEZ BARUCO Y RIGOBERTO ABDIEL MURILLO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 124

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO APONTE SALAZAR EN CONTRA DEL FISCAL DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 125

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ VILLARREAL EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR ORTEGA FUENTES CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 129

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILLIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA EN CONTRA DEL JUEZ NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES Y OTROS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 133

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MELBOURNE CONSTANTINE WALKER NEVANS EN CONTRA DE LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 139

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ RICARDO BULTRÓN EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996). 142

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO VIETO ROLLIZO, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 144

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERROL CECILIO SEALES GRANT EN CONTRA DE FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 145

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 147

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO BERNARDINO GONZÁLEZ DENTRO DEL PROCESO LABORAL INSTAURADO POR HILDA DAMARIS JAÉN DE CENTELLA CONTRA AZUCARERA NACIONAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PRESENTADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CONTRA EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR PINO CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE JULIO DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA, APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO JANETH ANRIA VS BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO ÁNGEL GANDARA CONTRA EL BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO EN REPRESENTACIÓN DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES SOBRE EL ARTÍCULO 2486 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LCDO. MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ CONTRA EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY 47 DE 1946, ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 163

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, CONTRA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY N° 9 DE 18 DE ABRIL DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 164

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PROPUESTA POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES, CONTRA LA NORMA REGLAMENTARIA APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

TRIBUNAL DE INSTANCIA 169

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OMAYRA GARCÍA DE BERBEY DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A EDUARDO HARMODIO BERBEY MELGAR, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 169

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. GUERRA DE VILLALAZ, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE MUÑOZ Y ASOCIADOS, DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CARMELO VÁSQUEZ BARAHONA CONTRA LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 3 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LO QUE CORRESPONDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA CONTRA DE LA HONORABLE LEGISLADORA GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD, EN PERJUICIO DE NEILA ITZEL AYARZA AGUILAR, A FIN QUE SE FIJE LA FIANZA QUE HA DE CONSIGNAR LA DENUNCIANTE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 171

PROCESO DE QUEJA INTERPUESTO POR ÁNGEL RAÚL ORTEGA Y OTROS, CONTRA EL LICENCIADO HOMERO RODRÍGUEZ, MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 176

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 177

ILLUECA Y ASOCIADOS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DONALD LEE LANDRUM. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 177

APELACIONES 178

LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA APELAN CONTRA EL AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA CON LA ESCRITURA PUBLICA N° 6448 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, INGRESADO AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 1333 DEL TOMO 244 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 178

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL CASTILLO SANJUR CONTRA EL AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 3176 DE 10 DE ABRIL DE 1996, INGRESADA AL REGISTRO PUBLICO BAJO EL ASIENTO 9511 DEL TOMO 245 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 179

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (LOS MANGOS). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 182

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (EL CHORRO). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 183

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (LOS RUÍCES). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 184

APELACIONES EN PROCESO MARÍTIMO 185

AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO) LIMITED, C. F. P. CORPORATE FINANCE PARTNERS, INC., CARMELO CANNAVÓ ORTISI, SALVATORE CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI Y GUISEPPE CANNAVÓ ORTISI APELAN LA RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI, DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI Y GUISEPPE CANNAVÓ TRINGALI. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 185

CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. LE SIGUE A M/N MARHAVA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 194

SEABORD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. AHORA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. (POR FUSIÓN). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 205

EL LICENCIADO NICOLÁS CORNEJO CASTILLO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 13 DE AGOSTO DE 1996 PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR LILIA MURILLO CONTRA ROSARIO MARCELA CEDEÑO, MARÍA ISABEL CEDEÑO, MARÍA ANTONIO GUILLÉN DE CEDEÑO, ELISA ANTONIA VALLARINO GUILLÉN Y CESAR AUGUSTO GUILLÉN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 207

M/N SANTA BÁRBARA APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE DIQUES CANNAVO, C. A. LE SIGUE A M/N SANTA BÁRBARA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

NEDLLOYD LIJNEN B. V. ROTTERDAM APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 1995, DICTADO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE PARVANI INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 214

SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE

MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 221

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 223

MANUEL DE JESÚS QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARÍA TERESA RÍOS HERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ Y MARÍA ELVIA Ó MARÍA ELVIRA RÍOS HERNÁNDEZ A MANUEL DE JESÚS QUINTERO, ALBINO GÓMEZ GÓMEZ, RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ, ESPERANZA GÓMEZ GÓMEZ Y AURA GÓMEZ GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIÓ A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

YELITSUTTH, S. A. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVER STAR CORPORATION, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 228

RUTH HYACINTH THOMPSON RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAMES HILARY APOLLO MINOTT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 229

JOAQUÍN MELGAR MONTENEGRO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ENEIDA CEDEÑO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE EMANUEL DE JESÚS CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINACAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALLI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 240

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. Y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. CONTRA BANQUE SUDAMERIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

SAMI SAMIH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO DE IBEROAMÉRICA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 270

LUIS ROGELIO ESQUINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO INCOADO POR LUIS ROGELIO ESQUINA CONTRA SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (EN ESPAÑOL) Y PANAMANIAN TOURIST SERVICES, INC. (EN INGLÉS) Y COMERCIALMENTE NATIONAL CAR RENTAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 272

BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIO QUE INTERPUSO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (EN ESPAÑOL)

INDUSTRIAS INTERNACIONALES DE PESQUERÍA, S. A. Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ASYN CONTRA BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 275

JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ERNESTO CHARTER DU SAIRE Y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 280

BALTAZAR BETEGÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO DE PERTURBACIÓN INCOADO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGÓN Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 280

CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO, NULIDAD DE ACTO O CONTRATO, CARENCIA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA POR LA EJECUTADA DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A. CONTRA MARIELA OLIVARES DE RANGEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 282

RAGINA BAJWA GILL Y LUIS A. HINCAPIÉ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE RAGINA BAJWA GILL LE SIGUE A LUIS A. HINCAPIÉ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 282

RAFAEL REYES RICHA RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DEMETRIO DUTARY, LUIS PICARD AMI Y FRANCISCO BRAVO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

CONFLICTO DE COMPETENCIA 285

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL Y EL JUZGADO MUNICIPAL DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO EN EL PROCESO DE ALIMENTO INSTAURADO POR MAGALY E. RUIZ DOLANDE CONTRA LAWRENCE A. ROUSE JOSEPH Y A FAVOR DEL MENOR LAWRENCE ARTHUR ROUSE RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 285

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL Y EL JUZGADO MUNICIPAL DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO EN EL PROCESO DE ALIMENTO INSTAURADO POR MARY ESTHER URRIOLA CALDERÓN CONTRA EGIDIO JORGE FAMIGLIETTI Y A FAVOR DEL MENOR JORGE ANTONIO FAMIGLIETTI URRIOLA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

IMPEDIMENTO 287

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN PROPUESTO POR EL SEÑOR EUGENE MCGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 287

RECURSO DE HECHO 288

EL LICENCIADO AUBREY OLIVER DAWKINS SAMUELS INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 13 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) INTERPUESTA POR JULIO OSVALDO MOSQUERA CONTRA MOHAMED LAFI HAMDAN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 288

RECURSO DE REVISIÓN 289

EUGENE MCGRATH RENAULD INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 290

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 293

AUTO APELADO 294

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARCOS EMILIO RESTREPO Y BOLÍVAR E. ECHEVERRÍA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 297

PROCESO SEGUIDO A IRENE RODRÍGUEZ PERALTA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO EN PERJUICIO DE RODOLFO VEGA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

PROCESO PENAL SEGUIDO A MIGUEL RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE JOLAN CASTILLO CANDANEDO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 299

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL SUMARIO INSTRUIDO CONTRA ALEXANDER ALLIN Y JOSÉ ISABEL YANGÜEZ NÚÑEZ POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROBERTO CHEN SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 303

APELACIÓN DEL AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DIMAS ARIEL CORTEZ DE GRACIA, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE FERNANDO AGRAZAL POVEDA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 307

AUTO CONSULTADO 310

PROCESO SEGUIDO CONTRA VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ, POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE LEONARDO MOORE WEEKS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 310

PROCESO QUE SE SIGUE A JULIO MARMOLEJO, ÁNGEL DARÍO ARGUMEDEZ Y AGAPITO VERGARA, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE OSVALDO ARIEL GUTIÉRREZ Y FERNANDO GARIBELLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

PROCESO SEGUIDO A VICENTE DÍAZ MORENO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HERIBERTO PAZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 316

CONSULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUSTO GÁLVEZ RAMOS, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE FRANCISCO MEJÍA TAMARA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 318

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 319

RECURSO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL BURGOS SÁNCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA ALBERTO ANTONIO ALZAMORA GARCÍA POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE VERÓNICA GAITÁN DE ALZAMORA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR, PROPUESTA POR EL LICENCIADO RENÉ ATENCIO CONTRA MARÍA DEL C. MITRE, EMELINA VILLARREAL PITTÍ, HUMBERTO MOSQUERA Y COSME IDRYS MORENO, POR EL SUPUESTO DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, EN DETRIMENTO DE MARÍA DEL C. REYES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO, NIVALDO MADRIÑAN APONTE Y FELIPE CAMARGO AMAYA, POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE HUMBERTO MACEAS WILSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 324

ADMISIBILIDAD DE LA CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL GUSTAVO GUARDIA JAÉN Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (A. N. A. P.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 333

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JAIME BEMUDEZ VANEGAS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 334

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ALONSO DAVID COGLEY MOJICA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 334

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A JOSÉ MARÍA ZÚÑIGA, POR LA COMISIÓN DE DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ESTHER IVETH GÓMEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 335

PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO NORIEGA VÁLDEZ Y JACOBO HERNÁNDEZ NORIEGA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JESÚS JAÉN CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 336

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROBERTO OLMEDO LUNA PONCE, POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 337

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (LESIONES PERSONALES), EN PERJUICIO DE FLORENCIO ANTONIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 339

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ ARO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 340

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A CÉSAR AUGUSTO ROMERO A., POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 341

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ANTONIO SORIANO GONZÁLEZ, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 342

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A ALCIDES CHANIS CEDEÑO Y RAÚL ANTONIO RIVAS, POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE DISTRIBUIDORA LA FORTUNA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 344

INCIDENTE DE CONTROVERSIA 345

INCIDENTE DE CONTROVERSIA PROMOVIDO POR LA LCDA. KARIM CÉSPEDES EN CONTRA DEL PERSONERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LOS SANTOS, DENTRO DE LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR EL HOMICIDIO Y ROBO PERPETUADO EN PERJUICIO DE JOSÉ FÉLIX DE LEÓN CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 345

IMPEDIMENTO 348

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LICENCIADO JOAQUÍN ORTEGA Y LICENCIADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 348

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGDO. HUMBERTO COLLADO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A IRENE RODRÍGUEZ PERALTA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE RODOLFO VEGA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 349

RECURSO DE HECHO 349

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL CASTILLO SANJUR Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. (ADMISIBILIDAD). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 349

RECURSO DE REVISIÓN 353

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OCTAVIO ENRIQUE ALVAREZ IBARRA, SINDICADO POR DELITO DE HURTO, EN PERJUICIO DE BERTA ALICIA DE CORREIRA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 353

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARISTÓTELES SANTOS LEMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE LUIS ALBERTO SALAZAR CASAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 354

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ C., POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE APODEMIO GUTIÉRREZ DELGADO MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 356

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MELANIO CABALLERO BATISTA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 357

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, SINDICADO POR DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 364

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS, AGUSTÍN MONTILLA CAMPOS Y AGAPITO MARÍN FLORES, SINDICADOS POR EL DELITO DE PERJUICIO EN DETRIMENTO DE PACÍFICO DE LEÓN MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 367

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A VÍCTOR VÁSQUEZ PÉREZ, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA COOPERATIVA "NUESTRO PORVENIR" R. L. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 369

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR VÍCTOR PONCE BEITÍA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 370

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROGELIO MANUEL CLOUGH, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 371

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ A. ORTIZ, CONDENADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, COMETIDO EN PERJUICIO DE NICOLÁS SÁNCHEZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

FRECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALFIN THEOPHILUS FALCONER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 373

SENTENCIA APELADA 374

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HIPÓLITO MARTÍNEZ MURILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 374

PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ (A) "BETO MAFIA", POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO) EN PERJUICIO DE MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ (A) "MARCOS TRAUMA". MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 376

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENUEL MORALES LEZCANO, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JULIO ANTONIO SÁNCHEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE

OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ARCADIO GALLARDO PINZÓN, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, EN PERJUICIO DE SEVERINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 384

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 389

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN (APELACIÓN) A FAVOR DE DAVID ARJONA, SINDICADO POR DEL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 389

TRIBUNAL DE INSTANCIA 390

ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, SOLICITADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, CARLOS JOEL NAVARRO CARVAJAL, EDGARDO AUGUSTO DURAN RIVERA Y EULISES GUIZADO RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERICK ROLANDO GARCÍA BARSALLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 390

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA LUIS ALEXANDER PRADO VISSUETTI POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JACK GAONA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 391

DENUNCIA PRESENTADA POR JAIME PADILLA VELIZ CONTRA JORGE OBEDIENTE PECCHIO Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 392

DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LICENCIADO JOAQUÍN ORTEGA Y LICENCIADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 393

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEÑOR EUSTACIO FÁBREGA, POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 399

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 400

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO MARÍN EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO GÓMEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, SU EXCLUSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 400

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OSVALDO JIMÉNEZ CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA

RESOLUCIÓN N° DG-076-95 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE EN REPRESENTACIÓN DE EL TRIÁNGULO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3525-91-D. G. DE 16 DE DICIEMBRE DE 1991 DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE MOTORES COLPAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE LA MOROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO N° DG-308-94 POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE, PARA QUE SE LE CONDENE AL PAGO DE LA SUMA DE B/.7,282,895.37 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 063-93 Y POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL DEMANDANTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE BORIS SUCRE BENJAMÍN, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 3 Y 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 405

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BANCO AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN CBN N° 7-96 DE 21 DE MARZO DE 1996 Y LA RESOLUCIÓN CBN N° 12-96 DE 18 DE ABRIL DE 1996, DICTADAS POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 414

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO, ARJONA & BRID EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A. (INISA), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 019 DE 28 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 415

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. MIGUEL BATISTA EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL VIDAL FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 211 DE 25 DE OCTUBRE DE 1994, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 416

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE B., EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS A. JIMÉNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6400-94 DE 29 DE JUNIO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 424

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PATTON, MORENO Y ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD GRUPO MAYFER, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 981-96 D. G. DE 21 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. GERARDO A. DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DE DIOS CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-95 DE 5 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 427

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE VELKIS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO E 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 435

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL E. RODRÍGUEZ C., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 124 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 438

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA PROVIDENCIA N° 1 DE 14 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO GUARDIA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA SUCASA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1546 SLC, DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1990, EXPEDIDA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 444

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9334-94 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 445

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CASTRO & CASTRO EN REPRESENTACIÓN DE HORMOZ SAFI ARDESTANI Y SAFI HERMANOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 712-04-12 DE 29 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS, ZONA CENTRAL Y AZUERO, Y LA N° 715-04-033 DE 20 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 446

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LIC. JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO SANTOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO SANTA FAMILIA, SOR FAUSTINA DELGADO, LA RESOLUCIÓN N° 8 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA Y LA RESOLUCIÓN N° 5 DE 9 DE MARZO DE 1989, DICTADA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 447

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTELBLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. IRLENA BROWN VILLALOBOS, EN REPRESENTACIÓN DE AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 18 DE MAYO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 451

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA DOLORES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DE MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO GERENCIAL N° 14 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR LA GERENTE DE LA GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORROS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 464

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SANSÓN, TORRIJOS Y ASOCIADOS-ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SARA COSME CARVAJAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° C. P. N° 358-93 DE 5 DE ENERO DE 1993, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 467

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTY Y ASOCIADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CAMBRIDGE

CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE Y H. L. M., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 157 DEL 19 DE AGOSTO DE 1996, DICTADA POR LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO (PAN/95001) MIPPE-SALUD-PNUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 474

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 475

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ A. TEJADA M., EN REPRESENTACIÓN DE ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7397-95 DNP, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 484

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 201-850 DE 16 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 485

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN C. DOWNER PARCHMENT, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 1777-95 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 486

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VIVES, SAAVEDRA & BERROCAL, EN REPRESENTACIÓN DE AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE 7 DE JUNIO DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 487

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS DE MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13374-91 DE 29 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA RESOLUCIÓN N° 102008-95 J. D. DE 16 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 489

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RANDOLPH LAWSON, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE

EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CONTRA EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTA N° 95 (1001-01)22, DEL 25 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 491

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA WYNTER, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO PROFERIDO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN SU REUNIÓN N° 31-95 DE 26 DE JULIO DE 1995, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 499

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 501

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TERMINALES DAVID PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 88 DEL 14 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 501

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 31 Y N° 31-1, AMBAS DEL 20 DE ABRIL DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 502

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. EHRMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 140 DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 503

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. BOLÍVAR RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE PATRONATO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONAGRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 10 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHITRÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 505

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR JOSÉ CANO CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLEGA, PARA QUE SE DECLARE QUE ES ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DEL CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMANADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 506

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ABEL MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE JORGE H. BRISTÁN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS ELECCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL DARIÉN REALIZADAS EL 26 DE JULIO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 507

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS A. VALLECILLA EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA CONTENIDO EN EL ACTA N° 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE COCLÉ CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. FÉLIX ALBERTO PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL RENGLÓN N° 1. 2. 5 48 DEL ARTÍCULO 2° DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 13 DE 10 DE ABRIL DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE EUSEBIO VERGARA CERRUD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, DEL 26 DE OCTUBRE DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 512

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO J. VARGAS D., EN REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCIÓN N° 768 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1993 Y EL ARTÍCULO 7 DE LA RESOLUCIÓN N° 96 DE 9 DE FEBRERO DE 1994, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 524

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL J. OSSA, EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DOMÍNGUEZ, LASTENIA DE PRUETT, LUIS CARLOS JAÉN, JORGE CASTILLO GARCÍA Y OMAR DE FRÍAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 43 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1995, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 525

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARGO TOURS, S. A., Y AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS TRIBUTOS O GRAVÁMENES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL N° 9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TABOGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 532

IMPEDIMENTO 538

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. HOYOS DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CNR-17 DE 7 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 538

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PLUTARCO ANTONIO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4-1 DE 20 DE FEBRERO DE 1992, PROFERIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y EL CONTRATO CELEBRADO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 539

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. MOLINO MOLA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO H. ALLS J., PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 20-88 DE 30 DE MAYO DE 1988 Y LA N° 37-88 DE 20 DE JULIO DE 1988, DICTADAS POR EL CONSEJO

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 540

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NILSA CHUNG DE GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 541

JURISDICCIÓN COACTIVA 542

EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN QUE SE RECLAMA, COBRO DE LO NO DEBIDO Y PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE POSADAS DE AMÉRICA CENTRAL, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 542

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JUAN RAMÓN CASTAÑEDA EN REPRESENTACIÓN DE MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 543

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ISIDRO A. VEGA EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES LE SIGUE A HÉCTOR MELÉNDEZ ARAÚZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 545

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 546

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA, EN REPRESENTACIÓN DE ANGELINA DE BÁRCENAS CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 1988, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ANGELINA DE BÁRCENAS -VS-GRENBAY OVERSEA INTERNATIONAL, INC. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 546

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 548

CARTA ROGATORIA 549

CARTA ROGATORIA NÚMERO 002R6662, DE 1° DE MARZO DE 1996, LIBRADA POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL POR FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO QUE SE ADELANTA CONTRA LIBARDO BRU MACÍAS Y RODRIGO RONCALLO FANDIÑO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 549

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 553

SARA ENTEBI SMILOVICE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA PRO EL JUZGADO DEL CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR ERNEST HARLAN JILISON. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 553

JIMMY PHILLIPS ROJAS Y OLAGA GLADYS DE PHILLIPS, SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 337/96 DEL JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL DE LA PAZ, BOLIVIA, SOBRE DECLARATORIA DE HEREDEROS; RESOLUCIÓN N° 865/95 DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL SOBRE DECLARATORIA DE FALLECIMIENTO PRESUNTO DEL SEÑOR WILLIAMS PHILLIPS MENDOZA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 554

MIGUEL FUSHMAN Y YAEL FUSHMAN, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE SAN DIEGO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1978. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 558

JAQUELINE ESTHER MARÍA TUÑÓN BUSTAMANTE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA DOCEAVA CORTE DEL DISTRITO JUDICIAL CONDADO DE OTERO, ESTADO DE NUEVO MÉJICO, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FECHADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1992, EN LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR WILLIE EUGENE HEARN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 559

MIGUEL LEE ARAUZ, SOLICITA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDO POR EL JUZGADO DE CIRCUITO DE LA CIUDAD DE ALEXANDRÍA, ESTADO DE VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 560

EXHORTOS 562

EXHORTO S/N DE 24 DE AGOSTO DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL N° 453-1-95 SEGUIDO CONTRA TRILBY WASHINGTON CUMMNINGS Y OTROS POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO Y ESTAFA EN PERJUICIO DE ABDUL ALSAME. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 562

TRIBUNAL DE INSTANCIA 565

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR LUIS ERNESTO CAMPOS BOLAÑOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 80-96 DE 9 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 565

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO KOURUKLIS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 117-96 DE FECHA DE VEINTE (20) DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 567

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO, INTERPUESTO POR CALIXTO MALCOLM CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 117-96 DEL 20 DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 570

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

OCTUBRE 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **TRONCOSO, LACAYO & PORRAS**, en representación de la sociedad **AGRO GANADERA SANTA FE, S. A.**, presentó recurso de apelación contra el auto de 29 de agosto de 1996 mediante el cual el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial no admite la acción de amparo de garantías constitucionales formulada contra orden de no hacer contenida en el auto 2119 de 21 de septiembre de 1995 dictado por el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante el cual, según la accionante, se le impide a su representada intervenir en el juicio ejecutivo propuesto por **LUIS ERNESTO CHU** en contra de **EFRAÍN ALCIDES CORREA** para hacer valer su derecho de propiedad sobre la finca N° 42501, inscrita al tomo 1023, folio 272 del Registro Público.

Presentada y sustentada la apelación dentro del término legal, entra la Corte a decidir sobre la viabilidad jurídica de esta acción de naturaleza constitucional.

RAZONES DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

El Tribunal a quo considera que el libelo de la demandante cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 2609 y 2610 del Código Judicial, pero le objeta que la resolución demandada contenga una orden de hacer o de no hacer, por tratarse de una resolución judicial que niega un incidente de nulidad.

Sustenta su aserto en jurisprudencia reiterada, tanto de ese tribunal colegiado, como de la propia Corte Suprema de Justicia.

> "Existen precedentes continuados, tanto del Primer Tribunal Superior como de la Corte Suprema de Justicia, que dejan establecido, que la negativa de un incidente de nulidad por parte de un juzgador no constituye una orden de hacer ni de no hacer.
>
> "En el primer caso, este Primer Tribunal Superior así lo determinó en un amparo en contra del Juez Segundo Penal del Primer Circuito Judicial (ver Sentencia de fecha de 29 de julio de 1993) en que, por coincidencia, el mismo amparista de hoy lo utilizó contra el funcionario señalado. Y en el caso del pronunciamiento de la Corte, en una acción constitucional de esta índole interpuesta por el Dr. Rubén Arosemena Guardia en contra del Juez Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá ..." (F. 85).

RAZONES DE LA APELANTE

Por su parte, al sustentar el recurso de apelación la apoderada judicial de la sociedad recurrente expresa que la apreciación formulada por el Tribunal de Primer Instancia, es una orden de no hacer que viola garantías individuales, ya que es contraria a los derechos de la sociedad AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., porque le niega el derecho a intervenir como tercero incidental dentro del juicio ejecutivo propuesto por LUIS ERNESTO CHU contra EFRAÍN ALCIDES CORREA, se "desprotege frente a una futura decisión judicial que evidente afecta sus derechos patrimoniales sobre la finca N° 42501 inscrita al tomo 1023, folio 272 del registro Público" (f. 90) (Subraya la Corte).

Reafirma más adelante, que el derecho de propiedad de AGRO GANADERA SANTA FE, S. A. sobre la finca 42501 es violentado por la negativa del Juzgado Primero

del Circuito y del Primer Tribunal Superior al impedirle intervenir en el proceso ejecutivo mencionado "pues la finca que se pretende rematar en ese proceso no existe en la realidad, pues su cabida o área forma parte de la finca propiedad de nuestra representada" (f. 93) (Subraya la Corte).

DECISIÓN DE LA CORTE

Como cuestión preliminar, la Corte deja constancia de que tuvo ya ocasión de pronunciarse sobre esta misma causa cuando se inhibió de conocer de la acción por falta de competencia, al haber la firma accionante presentado un amparo de garantías constitucionales contra la misma resolución del Juez 1° Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, pero no ante el Primer Tribunal Superior de Justicia como debió hacerlo, sino ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. (Ver auto del Pleno de 28 de agosto de 1996).

En esa ocasión, como lo hace ahora, la Corte consideró que el libelo de la demanda cumple con los requisitos de forma comunes a toda demanda y específicamente a las de amparo de garantías constitucionales exigidos por los artículos 2609 y 2610 del Código Judicial.

Sin embargo, al entrar a considerar la naturaleza de la resolución judicial impugnada, y específicamente decidir si la misma contiene o no una orden de hacer o de no hacer al tenor de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional y 2606 del Código Judicial, comparte las razones expresadas por el Tribunal Superior para no admitir la acción impetrada.

Esta Superioridad en numerosas ocasiones ha dejado establecido que el auto que niega un incidente de nulidad no contiene intrínsicamente una orden ni positiva de hacer, ni negativa de no hacer, porque se limita a resolver una cuestión incidental del proceso sin ordenar al incidentista una conducta capaz de lesionar un derecho subjetivo tutelado constitucionalmente.

En este negocio, el Juez de primera instancia se limitó a negar un incidente de nulidad de un embargo decretado sobre una finca raíz objeto de un juicio ejecutivo en razón de que el incidentista no acreditó el título de propiedad exigido por la Ley.

Luego de esta negativa, no dictó ninguna orden de hacer o de no hacer en desmedro de los derechos constitucionales de la demandante.

Esta razón es suficiente para confirmar la resolución impugnada.

Pero hay otra razón jurídica que orienta a la Corte en tal sentido.

De acuerdo a las constancias procesales, la demandante ha estado haciendo gestiones en los tribunales civiles con relación al objeto de esta causa desde el año 1991.

Desde entonces ha agotado varias instancias judiciales e inclusive ha llegado en tres ocasiones hasta la Corte Suprema de Justicia, tanto en casación, como ahora con sendas acciones de amparo de garantías constitucionales.

Todo este tiempo transcurrido no parece compatible con la naturaleza sumaria de este tipo de acciones constitucionales, destinadas a lograr la revocación inmediata de órdenes arbitrarias graves e inminentes, susceptibles de lesionar derechos fundamentales tutelados por la Constitución.

Esta gravedad e inminencia por el daño que representan y que justifican la viabilidad jurídica de esta acción extraordinaria, no resulta acreditada en este proceso que a través de varias instancias se prolonga desde hace varios años.

Debe por tanto confirmarse la resolución impugnada y así procede la Corte.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 29 de agosto de 1996 mediante el cual el Primer Tribunal Superior de Justicia no admite

la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la firma TRONCOSO, LACAYO & PORRAS en representación de AGRO GANADERA SANTA FE, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR NILKA TOVAR CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN AUTO DE 7 DE AGOSTO DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR como apoderado especial de **NILKA TOVAR** ha interpuesto acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** contra la **ORDEN DE NO HACER** contenida en el Auto de 7 de agosto de 1996 dictado por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

El amparista señala que la orden de **NO HACER** atacada está contenida en el referido Auto, mediante el cual el Tribunal Superior de Trabajo resolvió **INHIBIRSE** de conocer un Incidente de Error Aritmético que le fuere remitido por el a-quo, siendo que dicha orden consiste:

> "...
> `A foja 110 del expediente reposa el auto PJ-7 del 30 de mayo de 1996, en el cual la Junta resolvió inhibirse de resolver el incidente del "Error Aritmético y dispuso remitir la actuación al Tribunal Superior "para que decida a lo que bien tenga".
>
> Sobre lo siguiente queremos exponer, no existe en el procedimiento laboral envío de expediente por razones genéricas. Los expedientes se envían a la superioridad por razones específicas.
>
> Como bien sabemos, todos los envíos son por apelación por consulta o para resolver conflictos de competencia, en el caso de este Tribunal. Notamos que, el expediente recibido no es un conflicto y las causas de consulta están especificadas en la ley. ...". (Fs. 8).

A juicio de la Corte, la resolución transcrita no es un acto prohibitivo emanado de la autoridad, que imponga un **NO HACER** al gobernado. Tampoco se trata de un acto negativo del funcionario ante lo solicitado por el amparista, que implique una conducta arbitraria o un proceder ilegal. Menos aún se colige la violación de algún derecho constitucional.

La resolución impugnada en amparo conlleva la remisión de un expediente contentivo de un proceso laboral del funcionario superior al inferior, por no haber sido enviado conforme al procedimiento legal. De modo que el acto impugnado no cumple las condiciones de aquellos que son considerados materia de amparos.

Así las cosas, esta Corporación debe concluir señalando que el amparo de garantías constitucionales propuesto en este caso es **MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE**, pues esta acción constitucional no es la vía para dilucidar situaciones acerca de cuál es el funcionario al que corresponde corregir errores aritméticos cometidos en la parte resolutiva de un fallo, como pretende el

demandante.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por NILKA TOVAR contra el Auto de 7 de agosto de 1996, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ANGELA GAUDIANO, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMUEBLES CONTINENTAL, S. A. -VS- JUEZ SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, en su calidad de apoderado judicial de la sociedad **INMUEBLES CONTINENTAL, S. A.**, contra el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, por haber dictado la orden de hacer contenida en el Auto N° 1741 de 19 de agosto de 1996, consistente en ordenar la práctica de una DILIGENCIA EXHIBITORIA sobre todos los libros reglamentarios, actas y cualesquiera otros papeles y documentos que guarden relación con diversas sociedades, entre las que figura **INMUEBLES CONTINENTAL, S. A.**

El recurso de apelación bajo examen ha sido interpuesto contra la resolución de 9 de septiembre de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior, mediante la cual **"NO ACOGE"** el amparo incoado por la sociedad. Para arribar a esta decisión, el a-quo expresó las siguientes consideraciones:

> "...
> De modo, pues, que pareciera ser que la acción de amparo cumple con todos los requisitos formales y presupuestos procesales, por lo que procedería su admisión.
>
> No obstante lo expuesto, advierte este Colegiatura que, según señala el amparista, "La diligencia exhibitoria contenida en la orden de hacer que recoge el auto N° 1741 del 19 de agosto de 1996, es un proceso de aseguramiento de pruebas propiamente tal ..."
>
> Es decir, pues, que la diligencia exhibitoria atacada fue solicitada y ordenada en los términos preceptuados por el numeral 2 el artículo 814 del Código Judicial, o sea como una medida asegurativa, precautoria y cautelar. Así lo confirma el numeral 2 del artículo 814 del Código Judicial. Además, el carácter de medida cautelar de la diligencia exhibitoria como prueba anticipada, lo reconoce la doctrina y nuestro connotado jurista Doctor Jorge Fábrega Ponce (véase FÁBREGA P., Jorge. Estudios Procesales, Tomo II, Editora Jurídica Panameña, 1990, Pág. 1096).
>
> Establecido que la orden atacada se trata de una medida cautelar, debe señalarse que éstas, como tales, cuentan con los medios de impugnación previstos en el numeral 10 del artículo 1116 y en el

artículo 1104 del mismo Código.

Es decir, pues, que la amparista no ha acreditado haber agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución objeto de este recurso, requisito indispensable para que pueda proceder la acción de amparo, tal como lo exige el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, según quedó reformado por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990.

Reiterada es la jurisprudencia de este nivel jurisdiccional y de nuestra más alta Corporación de Justicia en el sentido de que el amparista debe probar que ha agotado los recursos ordinarios y en el sentido de que en la demanda de amparo la prueba es preconstruida.

Además, nuestra Corte Suprema de Justicia ha sostenido enfáticamente tal criterio en su Sentencia de 14 de junio de 1996, dictada dentro de las acciones de amparo acumuladas promovidas por RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES contra una medida cautelar ordenada por el mismo Juez Segundo. En dicha sentencia se revocaron unas decisiones proferidas por esta Superioridad y se declararon no viables las acciones de amparo, porque no se habían agotado los medios de impugnación previstos en la Ley. Es decir, que la Corte consideró que las acciones de amparo ni siquiera debieron ser admitidas." (Fs. 20,22)

El Pleno de la Corte no comparte el criterio del Tribunal Superior ya que, si bien existe jurisprudencia que reitera la no viabilidad del amparo contra Medidas Cautelares, la jurisprudencia en relación con las órdenes de practicar DILIGENCIAS EXHIBITORIAS a los documentos de una sociedad ha sostenido el criterio de admitir la acción de amparo, si se encuentra debidamente formalizada, para entrar al fondo del asunto.

Sobre dicha materia la Corte se ha pronunciado en los fallos de 21 de abril de 1993 (R. J. PP. 43-46), 17 de octubre de 1994 (R. J. pp. 23-27), 19 de enero de 1995 (R. J. pp. 10-12), entre otros.

Consecuentemente, la Corte considera que el tribunal debió admitir la acción de amparo para poder entrar al fondo del negocio y determinar si realmente se han conculcado los derechos fundamentales de la sociedad amparista.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y le ORDENA que ADMITA la acción de amparo de garantías constitucionales.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FIGDOLI CABRERA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Ríos Molinar, en ejercicio de poder especial otorgado por **FIGDOLI CABRERA**, ha presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, acción de amparo de garantías constitucionales contra la providencia de 2 de febrero de 1996, mediante la cual la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 concede recurso de apelación interpuesto por la sociedad Pescadores Unidos, S. A. dentro del proceso laboral que a ésta le sigue el señor Figdoli Cabrera.

Pide el demandante a esta Superioridad que se revoque la resolución por extemporánea y porque infringe el artículo 32 constitucional que garantiza el debido proceso.

Debe la Corte entrar a decidir si la demanda cumple con los requisitos previstos en los artículos 2606, 2609 y 2610 del Código Judicial para que pueda ser admitida y pueda darse viabilidad jurídica a la acción.

Al verificar los requisitos formales del libelo, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2609 y 2610 citados, se observa que el demandante actúa debidamente legitimado por un poder especial para esta acción constitucional; que junto a los requisitos comunes a toda demanda, el libelo menciona expresamente la supuesta orden impugnada, el nombre de los servidores públicos que la impartieron, los hechos en que se fundamenta la pretensión, las garantías fundamentales que se dicen infringidas y el concepto en que lo han sido.

Además, se adjunta copia autenticada de la providencia de 2 de febrero de 1996 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 que se impugna con esta acción.

Sin embargo, al examinar los requisitos previstos en el artículo 2606 y confrontarlos con la demanda, se observa que no es posible dar curso jurídico a esta acción ya que la resolución judicial impugnada no contiene una orden de hacer o de no hacer según lo preceptuado en el primer inciso del artículo 2606 del Código Judicial.

La providencia que admite el recurso de apelación interpuesta por la sociedad Pescadores Unidos, S. A. dentro del proceso laboral que le sigue Figdoli Cabrera, es una resolución de mero trámite, conforme lo establece el tercer inciso del artículo 974 del Código Judicial ("Providencias: cuando se limitan a disponer sobre el trámite de la actuación"), y las mismas, por reiterada jurisprudencia de la Corte, no son susceptibles de ser impugnadas mediante amparo de garantías constitucional, precisamente, porque no constituyen jurídicamente órdenes.

Además, no resulta viable la demanda al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2606 citado, ya que no se han agotado para el accionante los medios y trámites previstos en la ley para la defensa de sus derechos, cuyo ejercicio excluye la vía del amparo ya que por ser acción extraordinaria no puede subrogarse a los medios de impugnación ordinarios puestos a disposición del demandante por la Ley.

En este caso, el demandante fue favorecido con la decisión proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, pero el abogado de la parte demandada apeló oportunamente de esa sentencia y la providencia que concede el recurso y dispone su envío al Tribunal Superior de Trabajo no es una orden de hacer que lesione las garantías del accionante, pues se trata del impulso procesal necesario que garantiza el debido proceso y por tanto es indispensable el cumplimiento de la fase procesal de segunda instancia, que agota los trámites y medios que la ley laboral prevé para la defensa de sus intereses y sólo en el supuesto de que esa decisión contenga una orden de hacer o no hacer que vulnere sus derechos y garantías consagrados en la Carta Fundamental, sólo entonces podrá acudir a esta vía procesal.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la acción

de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Eduardo Ríos Molinar, en representación de FIGDOLI CABRERA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR ABEL ABDIEL DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, CONTRA LA FISCALÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución del 26 de agosto de 1996 el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no admitió la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado Florencio Castillo Espinosa en nombre y representación del señor Abel Abdiel Domínguez Gutiérrez, contra la Fiscal Tercera de Circuito de Chiriquí, licenciada Berta Cerrud (fs. 19-23).

Contra esa decisión jurisdiccional el licenciado Castillo Espinosa interpuso recurso de apelación en tiempo oportuno.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Castillo Espinosa solicita la revocatoria del auto impugnado, se conceda el amparo de garantías y se revoque la orden contenida en la resolución de la Fiscalía Tercera de Circuito de Chiriquí; al no estar de acuerdo con los motivos que tuvo el tribunal para declarar no admisible la acción de amparo.

Sostiene que Domínguez Gutiérrez se encuentra sufriendo detención preventiva, lo cual es un daño grave y puede ser llamado a juicio en una resolución que no admite apelación, lo cual es también un daño grave; y la prueba solicitada haría desaparecer los motivos por los cuales se le vincula al delito investigado.

En cuanto al artículo 2274 del Código Judicial que establece las causas para promover incidentes de previo pronunciamiento, señala que no contiene entre los motivos, la resolución que niega pruebas durante la instrucción sumarial; por tanto no se trata de un medio para la impugnación de la resolución expedida por la funcionaria demandada y su defendido continuaría ante el peligro inminente de que se mantuviera su detención por un prolongado período.

Finalmente, que no es cierto que la vista fiscal no es una resolución que haga tránsito a cosa juzgada, es simplemente un escrito remisorio que refleja la opinión del fiscal. Las garantías penales deben ser objeto de atención y cuidado, siendo evidente que contra Domínguez Gutiérrez se han violentado el derecho a la defensa, presunción de inocencia y el debido proceso (fs. 25-28).

ANÁLISIS DE FONDO

El Tribunal de primera instancia sostiene que no existe ningún daño grave e inminente al cual se refiere el artículo 2606 del Código Judicial. Además, que el amparista incumple con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 2606 del Código Judicial, toda vez, que si el imputado y su defensor no fueron notificados

de la resolución que le niega la admisión de la prueba solicitada pueden interponer un incidente de nulidad que deberá ser decidido por el juez de la causa de conformidad con lo normado en los artículos 2297, 2298 y 2302 del Código Judicial.

Señala el tribunal a-quo que de concederse el amparo, "la Fiscal Tercera no podría practicar la prueba testimonial del señor Demóstenes Bernal porque el expediente está en el órgano jurisdiccional en donde deben cumplirse los términos indicados en el artículo 2204 del Código Judicial, dado que el amparo es contra la supuesta orden contenida en la resolución dictada por la Fiscalía Tercera, no pudiendo dicha acción anular la vista fiscal y la remisión del sumario al tribunal de la causa" (fs. 22).

Advierte el Pleno, que le cabe razón al tribunal de primera instancia, en el sentido que no han se agotaron los medios de impugnación ordinarios, como lo dispone en el numeral 2° del artículo 2606 del Código Judicial.

Es así, que si el recurrente estimó que se dio la violación de las normas que establecen las formalidades en el proceso penal, debió interponer un incidente de nulidad, mismo que cabe contra **"los autos y las providencias que acogen o niegan pruebas"** (art. 2297 ord. 5 del Código Judicial).

La nulidad como sanción jurídica, **"pone de manifiesto la falta de adecuación del acto jurídico a las normas que han de regirlo y viola gravemente las garantías procedimentales a que tienen derecho las partes durante todo el proceso, sin cuya observancia la aplicación de la ley sería acomodaticia e incierta y se convertiría en arbitrariedad"** (Gil Miller Puyo Jaramillo. Diccionario Jurídico Penal. Ediciones Librería Del Profesional. Bogotá-Colombia. 1981. Pág. 274).

Nuestro código procedimental establece que la nulidad puede declararse de oficio o puede ser propuesta por las partes mediante incidente de previo y especial pronunciamiento en cualquier momento procesal.

Esta Corte ha reiterado **"que el amparo de garantías constitucionales es una acción autónoma y extraordinaria, que sólo es viable cuando existe violación de los derechos fundamentales y no una acción sustitutiva de los medios y trámites de impugnación que prevé la ley"** (Resolución de 21 de agosto de 1996).

Por las consideraciones expuestas, el auto apelado merece la confirmación del Pleno.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 26 de agosto de 1996 mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no admite la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Florencio Castillo Espinosa en nombre y representación del señor Abel Abdiel Domínguez Gutiérrez contra la Fiscal Tercera del Circuito Judicial de Chiriquí.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ANA DELGADO TORRES -VS- JUEZ

SEXTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Benedicto De León Fuentes, actuando en nombre y representación de Ana Delgado Torres, ha presentado recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, contra la Resolución de 14 de agosto de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se deniega la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por el mencionado apoderado judicial contra el Juez Sexto de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

El apoderado judicial de la recurrente fundamenta el recurso de apelación en los siguientes términos:

> "1-a. La Resolución censurada ha desconocido que el Juez Sexto de Circuito Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá a emitir la Sentencia #47 del 22 de junio de 1995, violó flagrantemente el artículo 44 de Nuestra Constitución que a la letra dice: "Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales."
>
> Y mi representada como hemos sostenido, adquirió la propiedad en litigio, conforme a la norma citada, esto es con arreglo a la Ley.
>
> 1-b. Como consta en el expediente, el proceso de sucesión que dió (sic) como resultado que se le adjudicara a mi representada la totalidad de los bienes de la difunta CESÁREA TORRES FERNÁNDEZ (q. e. p. d.) se llevó a cabo sin ningun (sic) vicio, o sea, fue un debido proceso. De manera que si mi representada adquirió el bien en litigio siguiendo el debido proceso que nuestro ordenamiento señala, como puede una autoridad quitarle ese derecho adquirido sin que haya habido un vicio en su adquisición.
>
> Tal como lo manifiesta el Doctor ARTURO HOYOS en su obra "El Debido Proceso", vivimos en una época "Postutópica", es decir, la época de los Gobiernos dictatoriales de querer manejar la justicia a su antojo es cosa del pasado, ahora el debido proceso debe desarrollarse con más fuerza, (ver HOYOS, ARTURO, El Debido Proceso, Editorial Temis, S. A., Santa Fe, de Bogotá, Colombia, 1996, P1 y s. s.).
>
> 1-c. De aceptarse la Tesis planteada por el Tribunal Superior se abriria (sic) una gran puerta a la seguridad jurídica, ya maltrecha en nuestro mdio (sic), observese (sic) que los demandantes se presentaron al proceso 4 (sic) años y medio después de haber sido adjudicada la herencia, y con la única excusa de que "no se enteraron" del juicio, y hacia 16 (sic) años de la muerte de la causante. Nosotros entendemos y estamos de acuerdo con el A quo, en el sentido de que los demandantes son hijos también de la difunta CESÁREA TORRES FERNÁNDEZ, lo que no estamos de acuerdo es que sean incluidos en la herencia porque llegaron a ella de manera extemporánea. La Resolución censurada dice que la sentencia del Juez Sexto contiene en todo caso es un "error in judicando", por tanto no es materia de Amparo, pues esta es una nefasta apreciación, el error que contiene dicha sentencia es "in procedendo" porque el A quo violó el artículo 44 de Nuestra Carta fundamental."

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió no conceder la demanda de garantías constitucionales, toda vez que:

> "Al confrontar la actuación del funcionario acusado con las normas jurídicas que se dicen violadas por dicha actuación, el Tribunal

tiene que manifestar, categóricamente, que no le cabe la razón a la demandante ya que si se analiza el punto central de la controversia se concluirá sin mayor dificultad, que el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá se ha limitado a darle cumplimiento a las normas que regulan la sucesión intestada y la prescripción de las acciones, de las cuales es importante resaltar la siguiente, contenida en nuestro Código Civil (sic):

"Artículo 1563. Si después de ejecutoriado el citado auto en una sucesión ab-intestato, concurriera alguno a reclamar la herencia como heredero ab-intestato, deberá hacerlo por los trámites del proceso sumario, ante el mismo Tribunal."

La resolución que ha sido impugnada abunda en ilustraciones y motivaciones que aclaran con creces la decisión tomada por el Juez demandado. Adicionalmente, hemos visto que la decisión impugnada mediante Amparo, ya fue enjuiciada y confirmada en segunda instancia y excluye la revisión de actuaciones acusadas de cometer errores "in iudicando" por la sencilla razón de que se estaría creando una tercera instancia lo cual no es el propósito de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales."

El Pleno de esta Corporación comparte los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en cuanto a que no se ha configurado la violación de la propiedad privada, consagrada en el artículo 44 de la Constitución Nacional, puesto que, como se desprende del análisis del expediente, el Juez Sexto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá se limitó a darle cumplimiento a las normas que regulan la sucesión intestada y la prescripción de las acciones, ya que el artículo 1563 del Código Judicial así lo permite, por lo que, a todas luces, su actuación se ajusta a lo que establece dicha norma, tal como lo señaló el Primer Tribunal Superior.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en vista que el Primer Tribunal Superior de Justicia actuó conforme a derecho, lo procedente es, pues, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 14 de agosto de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se dispuso denegar el amparo de garantías constitucionales promovido por el licenciado Benedicto De León Fuentes, actuando en nombre y representación de Ana Delgado Torres.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR FRANKLIN C. AROSEMENA, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA GORGONA, S. A. -VS- PROVIDENCIA S/N DE 21 DE AGOSTO DE 1996 DICTADA POR EL JUZGADO EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARCO ANTONIO HERRERA MOW** en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSTRUCTORA GORGONA, S. A.**, cuyo Vicepresidente y Representante Legal lo es el **Ing. FRANKLIN COLÓN AROSEMENA ZAMBRANO**, ha interpuesto acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** contra la **ORDEN DE HACER** contenida en la Resolución (Providencia) s/n de 21 de agosto de 1996, dictada por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá.

Para decidir la admisibilidad de esta acción constitucional, el Pleno de la Corte considera lo siguiente:

En primer término, el acto impugnado no conlleva una orden de hacer, de las susceptibles de ser atacadas mediante amparo, pues no se trata de uno de aquellos actos imperativos en los que la autoridad impone al gobernado la obligación de hacer algo. El acto impugnado, en el caso subjúdice, no reviste la forma de un mandato sino de una actuación de mero trámite, ya que se trata de una Providencia en la que se expresa:

> "...
> Dentro del Proceso Ejecutivo por cobro Coactivo interpuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ contra CONSTRUCTORA GORGONA, S. A., se señala el día Dieciséis (16) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), para que dentro de las horas hábiles tenga lugar el remate de los bienes muebles, de propiedad de CONSTRUCTORA GORGONA, S. A., embargados, dentro de la presente ejecución.
>
> Expídase el Aviso de Remate correspondiente y remítase para su publicación legal. ..." (Fs. 20).

Conviene recordar que en la jurisprudencia sobre esta materia se ha sostenido que no se acepta el amparo contra un Proveído de mero obedecimiento, el cual no admite recurso de ninguna clase. Ello es así, pues el aceptar un medio de impugnación contra ese tipo de resolución (providencias) desvirtuaría la naturaleza del recurso y, por otro lado, se estaría brindando la oportunidad de acceder nuevamente a una instancia que ya precluyó.

En el libelo de amparo también se observa que, entre las normas que se citan como infringidas, se incluyen algunas del Código Judicial relativas a la notificación, lo que resulta improcedente, pues la viabilidad de este remedio está condicionada a la vulneración de normas de orden constitucional, siendo que para reparar deficiencias como las que se denuncian en cuanto a las notificaciones la ley le tiene reservado a las partes otros remedios procesales, como el Incidente de Nulidad ante la Sala Tercera de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Corte Suprema.

Finalmente, cabe recordar que la Corte ha dicho en casos de procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites, que únicamente se admite como defensa del ejecutado las excepciones de pago y prescripción; y, que los derechos que crea tener el ejecutado contra el acreedor por la venta sin trámite, podrá hacerlos valer oportunamente mediante el proceso sumario, conforme al artículo 1772 del Código Judicial (Ver Fallo de 7 de diciembre de 1992, R. J. Dic. 1992, p. 25-31 y Fallo de 14 de junio de 1993, R. J. Jun. 1993, p. 17-19).

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por FRANKLIN C. AROSEMENA, en su condición de Representante Legal de CONSTRUCTORA GORGONA, S. A. contra la Providencia de 21 de agosto de 1996, dictada por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA T.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES (SIPAC) CONTRA LA ORDEN DE HACER EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DEL IRHE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En la etapa de admisibilidad se encuentra la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado OMAR ALI MACIAS SALINAS, a nombre y representación del SINDICATO DE AVIADORES COMERCIALES (SIPAC), conforme al poder que le fue otorgado por su Secretario General JOSÉ ÁNGEL LIEBHARDT, contra la ORDEN DE HACER expedida en forma verbal por el señor Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

La orden de hacer impugnada, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, fue emitida en forma verbal y consiste en la suspensión del suministro de energía eléctrica que el IRHE suministra al SIPAC.

Es necesario dilucidar si la presente acción cumple con los requerimientos de los artículos 2606, numeral 2° y 2610 del Código Judicial.

En primer término, se observa que el accionante señala en su demanda el nombre del funcionario demandado, los hechos de la demanda, las garantías constitucionales que se estiman infringidas y al final manifiesta que "no se puede aportar la orden impugnada puesto que no fueron suministradas por los funcionarios del IRHE" (ver foja 7).

En fallos anteriores el Pleno de la Corte ha dejado establecido lo siguiente:

> "En efecto, se aprecia en primer término, que el amparo en relación con la orden verbal atacada, y sin precisar fecha de expedición, en manera alguna cumple con el requisito de presentar 'mención expresa de la orden impugnada', que exige el numeral 1 del artículo 2610 del Código Judicial. Este máximo Tribunal de Justicia ha reiterado en ocasiones similares a la que nos ocupa, que en los casos en que no hay constancia escrita de la orden, por haber sido ésta dictada verbalmente, el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda, dos testimonios hábiles, de acuerdo con la aplicación que por analogía debe hacerse del artículo 48 de la Ley 135 de 1943, dado que ésta sería la única manera en que la orden de hacer impugnada, por ser verbal, adquiere materialidad y certeza." (Sentencia de 25 de marzo de 1994, en la acción de amparo de garantías promovida por la Sociedad Corporación Istmeña de Ensamblaje, S. A. contra la orden verbal de no hacer dictada por el Director General de Aduanas).

Esa situación ocurre en el caso presente, en donde además de no identificarse plenamente la orden verbal que se impugna, pues no se precisa la fecha en que fue emitida, no se ha presentado el testimonio de dos personas hábiles que comprueben la existencia de la orden impugnada en la forma en que la jurisprudencia de esta Corporación tiene sentado.

Por otra parte, en el caso de que esa orden verbal sea cierta, contra la misma proceden los recursos ordinarios correspondiente para ese tipo de orden, como serían los de reconsideración y apelación; y una vez agotada la vía gubernativa tendría el accionante a su disposición la vía contencioso administrativa.

Al no haberse acreditado la existencia de la orden verbal que se impugna y al no existir evidencias de que contra dicha orden se hayan interpuesto los recursos ordinarios correspondientes, la presente demanda de amparo de garantías constitucionales resulta manifiestamente improcedente, lo que impide su admisibilidad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales presentado por el licenciado OMAR ALI MACÍAS SALINAS contra la orden de hacer emitida en forma verbal por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR MIGUEL ÁNGEL VARGAS RICORD, CONTRA EL AUTO N° 278 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 8 DE AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia de 6 de septiembre de 1996 del año en curso, esta corporación de justicia admitió la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Raúl Maldonado Leary, en representación de **MIGUEL ÁNGEL VARGAS RICORD**, contra el auto N° 278 del 9 de noviembre de 1995, emitido por la **JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 8** de la ciudad de Aguadulce, provincia de Coclé. En consecuencia, se requirió a la autoridad demandada el envío -dentro del término de ley- de la actuación correspondiente del caso, o en su defecto de un informe escrito de los hechos materia de la acción.

FUNDAMENTO DEL AMPARO

El amparista manifiesta su disconformidad con el auto N° 278 del 9 de noviembre de 1995 emitido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 8 de la ciudad de Aguadulce, provincia de Coclé, que rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia N° 36 del 27 de octubre de 1995, en la cual se resolvió la demanda por despido injustificado que su poderdante interpuso ante esa autoridad, contra Lago Sirino, S. A. y Alimentos y Harinas de Penonomé, S. A., en la cual éstos fueron absueltos de las demandas del actor Vargas Ricord.

Estima que con esa decisión se han infringido garantías fundamentales como los artículos 70 y 73 del Capítulo III de la Constitución Política de la República de Panamá.

Explica así, que la demanda presentada solicitaba en concepto de indemnización la suma de cuatrocientos cincuenta y siete balboas con treinta centavos (B/.457.30), más salarios caídos; que a la fecha de la sentencia habían transcurrido desde el día del despido **-16 de diciembre de 1993-** más de veintidós meses de salarios caídos, a razón de ciento cincuenta y un balboas con veinte centavos (B/.151.20), lo que hace una cuantía de tres mil trescientos veintiséis balboas con cuarenta centavos (B/.3,326.40), sólo en concepto de salarios caídos,

más la suma de cuatrocientos cincuenta y siete balboas con treinta centavos (B/.457.30) de indemnización, lo que suma un total de la reclamación de tres mil, setecientos ochenta y tres balboas con setenta centavos (B/.3,783.70). Lo que supera excesivamente el mínimo de dos mil balboas (B/.2,000.00), exigidos por el artículo 8 de la Ley 1 de 1986. Por tanto, el tribunal demandado obvió la segunda parte del artículo N° 8 al no ajustar su decisión jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto por la ley, y según lo señalan los artículos 70 y 73 de la Constitución Política (fs. 3-7).

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

La licenciada Maristella Fernández Jiménez, Coordinadora de la Junta de Conciliación y Decisión N° 8 con sede en Aguadulce, provincia de Coclé, remite por medio del oficio N° 126-JCD-96 de fecha 12 de septiembre de 1996, el informe requerido junto con el expediente del caso.

Señala la funcionaria, que el auto N° 278 del 9 de noviembre de 1995 se basó en el artículo 8 de la Ley 1 de 1986 para rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia N° 36 del 27 de octubre de ese año. Las razones de esa decisión, las explica de la siguiente manera:

> "El trabajador comenzó a laborar el 10 de enero de 1992 y la relación laboral terminó el 16 de diciembre de 1993, el trabajador no tenía 2 años de labores continuos y por tanto no le corresponden salarios caídos, situación establecida en diversas jurisprudencia laboral (artículo 212 del Código de Trabajo).
>
> Es por tal motivo que no fue contado los salarios caídos y la cuantía base fue de B/.457.30 y es procedente el recurso de apelación cuando la cuantía es de B/.2,000.00 contándose los salarios caídos cuando en realidad se tiene derecho" (fs. 13-14).

ANÁLISIS DE FONDO

El numeral 2° artículo 2606 del Código Judicial establece lo que **"sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate"**.

En ese sentido, observa el Pleno que el amparista pretende por medio del recurso de amparo que se conceda el recurso de apelación interpuesto y que le fue negado por la Junta de Conciliación y Decisión N° 8, de Aguadulce, provincia de Coclé, mediante auto N° 278 de 9 de noviembre de 1995; sin haber utilizado en su momento oportuno el recurso de Hecho, que precisamente establece el Capítulo V del Título VIII del Código de Trabajo para impugnar las resoluciones que niegan el recurso de apelación.

Por otra parte, el auto que niega el recurso de apelación, tomó como basamento que la suma a reclamar por el demandante presentaba una cuantía de cuatrocientos cincuenta y siete balboas con treinta centavos (B/.457.30), lo que no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 1 de 1986, en el sentido que en los procesos llevados por la Junta de Conciliación y Decisión sólo podrá interponerse el recurso de apelación siempre y cuando la cuantía exceda la suma de dos mil balboas (B/.2,000.00). La alegación expresada por el amparista, en el sentido de que tiene derecho al goce de los salarios caídos y que con ellos alcanza la suma de que trata el artículo arriba citado, se desvirtúa al constatarse que carece del requisito establecido en el artículo 212 del Código de Trabajo, ya explicado por la funcionaria demandada y constatado por el Pleno por medio de los antecedentes. Lo que significa que no se han violado las garantía fundamentales alegadas, pues su pretensión no plantea asuntos de rango constitucional.

Esta Corte ha reiterado **"que el amparo de garantías constitucionales es una acción autónoma y extraordinaria, que sólo es viable cuando existe violación de los derechos fundamentales y no una acción sustitutiva de los medios y trámites**

de impugnación que prevé la ley" (Resolución de 21 de agosto de 1996).

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Raúl Maldonado Leary en representación de MIGUEL ÁNGEL VARGAS RICORD contra la Junta de Conciliación y Decisión N° 8 de la ciudad de Aguadulce, provincia de Coclé.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN CONTRA DEL AUTO DE 23 DE JULIO DE 1996 EXPEDIDO POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense PATTON, MORENO & ASVAT, actuando en representación de la sociedad GRUPO MAYFER, S. A., ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Caja de Seguro Social.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una orden de hacer proferida por la Caja de Seguro Social mediante auto fechado el 23 de julio de 1996, a través del cual se ordena rechazar el recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución N° 981-96 D. G. de 21 de junio de 1996 en la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa HORACIO ICAZA Y CÍA, S. A., contra la Resolución N° 560-96 D. G. de 18 de abril de 1996 en la que se adjudica definitivamente a la empresa GRUPO MAYFER, S. A. la licitación pública N° 12-95 (20-11-95), para el suministro e instalación y mantenimiento de un microscopio operatorio con destino al Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón.

Considera el Pleno que estamos en presencia de un acto administrativo y sus actos confirmatorios, los cuales son impugnables en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, previo agotamiento de la vía gubernativa. En este sentido, no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar los mencionados actos administrativos, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma PATTON, MORENO & ASVAT en representación de la sociedad GRUPO MAYFER, S. A. contra la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR NIDIA MIREYA LASSO LOUIS VS. JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Aidelena Pereira, Juez Cuarta de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante apoderado judicial, sustentó el recurso de apelación que interpusiera contra sentencia de amparo de 19 de agosto de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

La resolución objeto de esta alzada "**CONCEDE** la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por **NIDIA MIREYA LASSO LOUIS** contra la Juez Cuarta del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá; y, en consecuencia, **REVOCA** la resolución de fecha 15 de junio de 1996, dictada por dicha funcionaria judicial", dentro del proceso ordinario promovido por Nidia Mireya Lasso Louis contra Empresas Gago, S. A. y otras.

Por sustentada la apelación en tiempo oportuno, debe la Corte decidir lo que en derecho corresponda, a lo que se procede.

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

Nidia Mireya Lasso Louis, por medio de apoderado judicial, interpuso proceso ordinario contra Empresas Gago, S. A. y otras, demanda que no fue admitida por el tribunal de la causa, mediante resolución de 2 de marzo de 1993, debido a que no fueron aportadas las certificaciones del Registro Público acerca de la existencia, vigencia y representación legal de las distintas personas jurídicas demandadas. Contra dicha resolución el apoderado judicial de la demandante, ahora amparista, interpuso recurso de reconsideración, el que fue decidido mediante Auto N° 983 de 2 de agosto de 1993, por medio del cual se "ORDENA se comunique al Registro Público para que a costas de la parte actora, se sirva expedir y remitir a este Tribunal las certificaciones individuales sobre la existencia legal y la representación de las sociedades demandadas" (f. 10, antecedentes). El Registro Público expidió la documentación con vista a la solicitud del tribunal de la causa, lo que motivó que la Juez Cuarta dictara la resolución de 15 de julio del año que decurre, en la que manifiesta la necesidad de reiterar "el contenido del Oficio N° 1049 de 2 de agosto de 1993 al Registro Público", con el objeto de que se expidieran nuevamente los certificados, esta vez con la leyenda "`esta certificación no es válida si no lleva adheridos los timbres correspondientes " (f. 42, antecedentes), dado que las certificaciones corren a costas de la demandante. La anterior resolución fue objeto de la presente acción constitucional, por considerarla la amparista violatoria del derecho al debido proceso que consagra el artículo 32 de la Constitución Nacional.

RAZONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El tribunal a quo, mediante sentencia de 19 de agosto del año que decurre, que cuenta con un salvamento de voto, concedió el amparo que ahora nos ocupa, por considerar que la resolución atacada vulnera el debido proceso de ley, ya que reviste la forma de un proveído de mero obedecimiento, cuando debió ser un auto. Lo anterior implicó -a juicio del Primer Tribunal Superior- la privación para la amparista de su derecho a hacer uso de los medios de impugnación que la ley consagra.

Por otro lado, en el salvamento de voto indicado se sostiene que el acto

atacado no constituye orden de hacer o de no hacer alguna y que la infracción atribuida a la juez no es materia constitucional, por lo que no debió admitirse la demanda.

DECISIÓN DE LA CORTE

Corresponde a la Corte Suprema determinar si la resolución atacada en esta vía constitucional subjetiva, a saber el proveído de 15 de julio de 1996, expedido por la Juez Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, reviste un acto de autoridad que pueda considerarse arbitrario por vulnerar el derecho fundamental del debido proceso de ley.

La infracción de la norma fundamental se hace consistir en que la juez de la causa desconoció el contenido del artículo 788 del Código Judicial, que establece que la ausencia de timbres fiscales en la expedición de algún documento no le resta valor probatorio. Aunado a lo anterior, indica la demandante que el tribunal de instancia no tomó en consideración el artículo 461 de la excerta procesal, cuyo texto es el que sigue:

> "Promovido el proceso, el Juez tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que la ley disponga que ello corresponde a las partes".

Agrega que la juez ha paralizado el proceso "en abierta violación del artículo 788 del Código Judicial", que no ha tomado en cuenta "que el objeto del proceso es el reconocimiento de derechos consignados en la ley substancial" y que la legislación procesal ha de interpretarse con este criterio.

Luego de confrontados los cargos de inconstitucionalidad que se endilgan contra al acto atacado con la sentencia apelada en esta causa, observa la Corte que el a quo se pronunció respecto a un vicio no demandado en la vía extraordinaria de amparo, lo que implica un desconocimiento del principio dispositivo o de **justicia rogada**, que rige predominantemente en esta materia. Según el referido principio procesal, las partes fijan el objeto del proceso limitando de esa forma las facultades del tribunal, de manera que el juzgador conoce sólo lo que las partes someten a su decisión y, por ello, debe fallar de conformidad con lo preestablecido en la demanda. El juez no puede resolver menos ni más de lo pedido, como tampoco sobre cosa distinta, pues todos estos vicios constituyen incongruencia del fallo (minus petita, ultra petita o extra petita). En tal virtud, el tribunal de amparo no puede sustituir la voluntad presunta de los posibles afectados, toda vez que ello deviene en una actuación oficiosa. El a quo debió entonces pronunciarse acerca de los vicios planteados en la demanda y no sobre un asunto no sometido a debate.

De otra parte, observa el Pleno que se pretende enervar por la vía del amparo una actuación jurisdiccional que no reviste las características y la importancia de un problema constitucional, en el que se plantee la real vulneración de derechos y garantías que la Carta consagra. Por medio de la resolución atacada mediante la presente iniciativa procesal se reitera "el contenido del Oficio N° 1049 de 2 de agosto de 1993, al Registro Público con miras a que esta Dependencia expida nuevamente los certificados; pero esta vez se les debe insertar la leyenda de que `esta certificación no es válida si no lleva adheridos los timbres correspondientes , en vista de que estas certificaciones corren a costas del Licenciado Randolph A. Lawson" (f. 42, cuaderno de antecedentes), lo que pone en evidencia que se dispone un acto de mero trámite, a los efectos de que se hagan llegar al expediente contentivo del proceso ordinario los certificados acerca de la existencia de todas las sociedades demandadas, de forma tal que se suple una carga procesal que le corresponde a la demandante de conformidad con el artículo 582 del Código Judicial. El acto va dirigido al Registro Público, a quien por ley le corresponde la expedición de la referida documentación. En todo caso, el que se hagan llegar al expediente los certificados del Registro Público debidamente expedidos en nada afecta o paraliza la tramitación del negocio. Por el contrario, la documentación fue solicitada precisamente para proceder con la admisión de la demanda ordinaria, de lo que se colige la inexistencia de infracción del debido proceso.

Son reiterados los pronunciamientos que señalan que el amparo de derechos fundamentales no constituye una instancia más para dilucidar cualquier problema o diferencia de índole procesal. En el plano estrictamente constitucional dicha acción está reservada a la protección de derechos y garantías consagrados en la propia Constitución, que pudieran afectarse por actos de autoridad, verdaderas órdenes de hacer o de no hacer, expedidos o ejecutados en el ejercicio de funciones públicas.

Constituye un abuso de los litigantes y sus apoderados judiciales, a todas luces reprochable, la utilización del instituto de amparo, mecanismo que integra la jurisdicción constitucional subjetiva, con el objeto de atacar cualquier acto de autoridad que no conlleve un daño grave e inminente que requiera de la pronta actuación del juez constitucional para su revocación.

En la causa que se examina, todo indica que el acto atacado no reviste la naturaleza y la forma que exigen la ley y la jurisprudencia para ser impugnados por esta vía extraordinaria.

Revisten la forma de una **orden de hacer** aquellos actos de carácter jurisdiccional o administrativo que contienen en su parte dispositiva un mandato de índole imperativo, dirigido directamente al afectado o a un funcionario estatal, con el fin de que sea cumplido, y que de ese mandato se derive la efectiva vulneración de los derechos fundamentales subjetivos del amparista. Reiterada jurisprudencia de este tribunal manifiesta el criterio externado, entre otras sentencias de 22 de octubre de 1993 y de 3 de mayo de 1994.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 19 de agosto de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior, venida en apelación, y en su lugar DECLARA NO VIABLE la demanda de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Randolph Lawson, en representación de Nidia Mireya Lasso Louis.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FIGDOLI CABRERA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 8 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, en su condición de apoderado especial de FIGDOLI CABRERA, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la Resolución de 8 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante la cual declaró nulo el proceso laboral incoado por su representado contra Pescadores Unidos, S. A., a partir de la notificación de la demanda.

En la resolución impugnada, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, señaló lo siguiente:

> "A juicio del Tribunal, se ha causado indefensión y perjuicio procesal a una de las partes por no haberse hecho debidamente y en forma legal la notificación de la demanda y la fecha de la audiencia, por lo que se considera obligante declarar la nulidad del proceso." (Fs. 5).

Considera el demandante que dicha resolución viola directamente el artículo 32 de la Constitución Política.

El artículo 2611 del Código Judicial preceptúa que el Tribunal a quien se dirija la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarla, para comprobar si reúne los requisitos comunes a todas las demandas y los indicados en el artículo 2610 del mismo Código, y además, para determinar si no es "manifiestamente improcedente".

En el presente caso la parte actora pretende que mediante la presente acción de amparo, se juzguen nuevamente los hechos que dieron como resultado la declaratoria de nulidad del proceso laboral a partir de la notificación de la demanda, convirtiendo a este Tribunal Constitucional en una tercera instancia.

El artículo 32 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra la garantía del debido proceso. Esta es una garantía de naturaleza instrumental, en virtud de la cual, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Pleno de la Corte Suprema de Justicia "debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la Ley e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la Ley contra resoluciones judiciales motivadas, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. También incluye ... el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa." (Sentencia de 22 de febrero de 1990, dictada para resolver la acción de amparo promovida por la compañía Servicios Helados, S. A. contra la orden de hacer expedida por la Dirección General de Trabajo).

El saneamiento del proceso laboral es una facultad concedida al juzgador de segunda instancia en el artículo 940 del Código de Trabajo, y cuando, como en la resolución atacada se declara la nulidad del proceso a partir de la notificación de la demanda, se da a las partes la oportunidad de ejercitar a su favor, todos los derechos y garantías del debido proceso durante la reposición del mismo.

En forma reiterada el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha expresado, en resoluciones dictadas en acciones de amparo de garantías constitucionales, que este recurso extraordinario tiene como objeto "revocar las órdenes de hacer o de no hacer dictadas en contra del amparista, en violación de las garantías constitucionales consagradas a su favor, para evitar que sufra daños graves e inminentes." (Resolución de 23 de agosto de 1993, dictada dentro del recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) contra la sentencia de 30 de julio de 1993, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo).

Como las acciones de amparo de garantías constitucionales no constituyen una tercera instancia y no proceden cuando son manifiestamente improcedentes, en mérito de lo expuesto, no debe admitirse la demanda en cumplimiento del artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la presente acción de amparo promovida por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar en representación de FIGDOLI CABRERA contra la orden de no hacer contenida en la Resolución de 8 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ SALVADOR MUÑOZ CORREA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA NOTA N° 210-1157 DE 28 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JEFE DE AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ SALVADOR MUÑOZ CORREA**, actuando en su propio nombre, presentó acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la nota N° 210-1157 de 28 de agosto de 1996, expedida por el Jefe del Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Por cumplidas las reglas de reparto, se pasó a examinar los requisitos formales previstos por la ley a fin de decidir la admisibilidad in limine de la pretensión, llegándose a la conclusión que procedía darle el trámite inicial de requerimiento de la autoridad demandada del informe sobe la actuación censurada.

En respuesta a la nota S. G. P. N° 1484-96 de 11 de septiembre se recibió la documentación que aparece de fojas 19 a 24 de este cuaderno, en la que el licenciado Alfonso Montenegro Solís señala lo siguiente:

> "**PRIMERO**: El 28 de agosto de 1996, se remite la Nota N° 210-1157 la cual literalmente expresa:
>
> "Me permito presentarle a usted a la Licda. ODAIRA DE GONZÁLEZ, auditora fiscal quien ha sido comisionada para realizar la siguiente investigación oficial:
>
> AUDITORÍA INTEGRAL PARA LOS AÑOS 1993, 1994 y 1995.
>
> Ruego a usted respetuosamente se sirva brindar la cooperación necesaria para nuestra funcionaria pueda cumplir a satisfacción la misión que establece el Código Fiscal, especialmente en sus artículos 710 y 755 y disposiciones legales concordantes.
>
> Aprovechamos para hacerle entrega de la "Carta al Contribuyente" la cual explica el mecanismos el (sic) proceso de la fiscalización y resalta los derechos de los contribuyentes".
>
> SEGUNDO: Que el Departamento de Auditoría Integral y el personal fiscalizador en su carácter de Auditor con fundamento en el artículo 19 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, tiene las siguientes facultades:
>
> "ARTÍCULO 19: El personal fiscalizador en su carácter de auditor, inspector e investigador, tendrá las siguientes facultades:
>
> a. Citar contribuyentes responsables y terceros en general para que contesten bajo juramento en forma verbal o por escrito, dentro de

los plazos prudenciales que fijan, todas las preguntas que les formulen sobre rentas, ventas, ingresos, egresos y en general sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho imponible previsto en las leyes respectivas;

b. Exigir, dentro de los plazos que estipule, la presentación de comprobantes, y demás elementos justificativos relacionados con el hecho imponible;

c. Auditar libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables;

d. Requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública para la debida realización de las tareas fiscalizadoras;

e. Realizar allanamientos, pesquisas y decomisos provisionales;

f. Realizar arrestos, cateos y portar armas.
PARÁGRAFO: Las facultades enunciadas en el inciso "f" del presente artículo, no podrán ser ejercidas por los auditores.

TERCERO: Con fundamento en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993, los contribuyentes y responsables están obligados a cumplir los deberes formales relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Dirección General de Ingresos y en especial deberán:
...,
"e) proporcionar cuando los funcionarios fiscales autorizados lo requiera, los registros y comprobantes de contabilidad y los estados financieros y demás documentación relativa a sus actividades productoras de renta y facilitan las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte.

f) presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informaciones, documentos ...,"

La orden de hacer impugnada N° 210-1157 de 28 de agosto de 1996, como podemos apreciar se refiere a "Carta de Presentación" realizada al Licenciado José Salvador Muñoz Correa, en su condición de contribuyente, mediante la cual se le anuncia auditoría integral para los años 1993, 1994 y 1995, no como apoderado especial de ningún contribuyente en particular.

Nos permitimos hacerle notar a la Honorable Magistrada Sustanciadora que la orden de hacer impugnada no fue expedida como funcionario con mando y jurisdicción, tal como lo señala el artículo 2607 del Código Judicial, sino en cumplimiento de las facultades que nos confiere el artículo 19 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970 y los artículos 710 y 755 del Código Fiscal.

En esta forma como funcionario requerido respetuosamente damos respuesta al informe escrito solicitado por la Honorable Magistrada Sustanciadora, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 2611 y 2612 del Código Judicial". (Fs. 19-21).

Al tenor de los hechos en que se basa esta acción y la documentación adjunta al escrito contentivo de libelo se puede apreciar que el 31 de julio del presente año, el accionante como apoderado del Dr. Carlos Raúl Anguizola Vial, presentó ante la Dirección General de Ingresos un escrito solicitando que se declararan nulas las declaraciones de renta rectificativas hechas por su cliente por los años 1991, 1992 y 1993, aduciendo intimidación. Tal solicitud fue contestada mediante la nota 201-850 de 16 de agosto del año en curso, en la que

se niega la intimidación alegada y se afirma que dicha dependencia oficial no puede haber cometido un acto intimidatorio al ejercer las facultades previstas por la ley para fiscalizar los eventuales incumplimientos de las obligaciones tributarias.

Afirma también que las declaraciones de renta rectificativas del representado del amparista fueron voluntarias y que a éste no se le ha negado el debido proceso ya puede presentar nuevas declaraciones rectificativas modificando las anteriores, las que podrán ser revisadas por la Dirección General de Ingresos con sus consecuencias legales.

Si bien en Sala Unitaria se decidió admitir de manera preliminar esta acción de amparo de garantías constitucionales con el propósito de recabar mayores elementos de juicio que permitieran al Pleno considerar la posible violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política y aducidos por el demandante, un examen exhaustivo del negocio llevan a la convicción de que el amparo impetrado debe ser declarado no viable.

En efecto, sin entrar siquiera a considerar los aspectos de fondo del negocio, es evidente que el amparista impugna un acto administrativo recurrible ante la jurisdicción contenciosa administrativa y contra el cual, por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad, no caben acciones de amparo de garantías constitucionales, como se desprende, entre otras, de la sentencia de 22 de octubre de 1993.

En ésta, al demandarse mediante un amparo un resuelto del Ministerio de Educación que trasladaba un educador a la provincia de Darién, estableció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia:

> "El examen del libelo revela que la resolución impugnada constituye un acto administrativo cuya revocatoria no es viable mediante la acción de amparo de garantías constitucionales, ya que ha sido doctrina jurisprudencial de esta Corporación de Justicia, que tales actos deben ser impugnados a través del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción que conoce la Sala Tercera de esta Corte Suprema de Justicia". (Caso Angélica Reluz de García vs. Ministro de Educación).

En igual sentido preceptúan las sentencias de 25 de junio de 1993, de 5 de septiembre de 1991, y 31 de enero de 1991.

En el negocio subjudice, no hay duda que el Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro al remitir la nota N° 210-1157 de 28 de agosto de 1996 en la que designa una auditora fiscal para que realice una auditoría integral de las declaraciones de renta del demandante para los años 1993, 1994 y 1995, expidió un acto administrativo que eventualmente puede infringir derechos subjetivos, pero sobre cuya legalidad no puede entrar a conocer el Pleno por ser facultad privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, es el propio demandante quien con sus argumentos confirma que lo impugnado es la legalidad de este acto administrativo.

> "Es evidente que la Dirección General de Ingresos abusando del poder que le confieren las leyes, cosa que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder, ha desatado no solamente contra JOSÉ SALVADOR MUÑOZ CORREA, que es el caso concreto, sino contra varios ciudadanos que también se quejan contra ese proceder, persecución, cuando el contribuyente no se aviene a las arbitrariedades de ese despacho. (F. 11).
>
> "Lo anterior implica necesariamente que después de que el funcionario estime que la declaración de un año determinado no se ajusta a la ley debe así comunicarlo al contribuyente para iniciar la investigación correspondiente, pero no puede ad libitum ordenar auditorías integrales para tres años sin haber previamente cumplido

con el trámite que señala el artículo 719 del Código Fiscal." (F. 12) (Subraya la Corte).

Para reforzar este aserto, el demandante cita a los administrativistas colombianos HERNÁN GUILLERMO ALDANA y GUSTAVO PENAGOS, quienes se refieren a la arbitrariedad como causal de nulidad de los actos administrativos, vicios que no alcanzan rango constitucional, sino de control de la legalidad, cuyo conocimiento como se dijo antes, compete a la Sala Tercera.

El Pleno al resolver esta acción abrigó dudas sobre la cobertura territorial de la jefatura de auditoría integral de la Dirección General de Ingresos, ya que por razones de competencia el artículo 2607 del Código Judicial establece la categoría y jerarquía de los Tribunales de Justicia que deben conocer de estos casos. En ese sentido, gestiones adelantadas por la Secretaría General de la Corte, dan cuenta de que el Jefe de Auditoría Integral sólo era un jefe de una dirección sin mando ni jurisdicción, no obstante del texto del Decreto de Gabinete 109 de 1970 y el Decreto Ejecutivo N° 4 de 20 de enero de 1984, se colige que entre las funciones del Jefe de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos, se encuentran varias como la de auditar en todo el país a los contribuyentes, lo que nos demuestra que sus funciones tienen alcance nacional.

En conclusión, al no haber escogido el demandante la vía idónea de impugnación, debe el Pleno de la Corte declarar no viable jurídicamente la acción de amparo incoada.

Por las anteriores razones, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por JOSÉ SALVADOR MUÑOZ CORREA en su propio nombre contra el Jefe de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ELIO CAMARENA EN REPRESENTACIÓN DE ENSEÑANZA PARTICULAR INCORPORADA, S. A. EN CONTRA DE LA SENTENCIA PJ/6/96 DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN N° 6 DEL MINISTERIO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Elio Camarena, actuando en representación de la sociedad anónima Enseñanza Particular Incorporado (Instituto Justo Arosemena), ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la sentencia N° PJ/6/96 dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 del Ministerio de Trabajo, por medio de la cual se resuelve condenar a la mencionada empresa al pago de salarios dejados de percibir en favor de Jorge Luis Santana Rodríguez.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.

La parte demandante considera como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Alega la parte demandante que la resolución impugnada viola la garantía fundamental contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional, pues la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 no llevó a cabo los trámites legales pertinentes para garantizar las derechos constitucionales de la sociedad en cuestión, pues la sociedad Enseñanza Particular Incorporada no fue notificada de la demanda interpuesta en su contra, quedando en indefensión e inhibida de preparar su defensa, de presentar pruebas y ser escuchada en juicio.

II. DECISIÓN DE LA CORTE.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia pasa a resolver la presente controversia previa las siguientes consideraciones.

Se trata, de una resolución emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, mediante la cual se condena a la sociedad Enseñanza Particular Incorporada, S. A. (Instituto Justo Arosemena) al pago de salarios dejados de percibir en favor de Jorge Luis Santana Rodríguez por la suma de novecientos cincuenta y seis balboas con veinticinco centésimos.

El examen de esta Corporación debe circunscribirse a determinar si en el proceso laboral seguido se pretermitió el cumplimiento de la debida notificación legal a la parte demandada, puesto que, de ser así, la empresa Enseñanza Particular se ha visto afectada por la sentencia expedida, negándosele el derecho a su defensa y consecuentemente, vulnerándose la garantía fundamental del debido proceso.

Las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. De acuerdo al principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercerse conforme a los trámites establecidos en la Ley, lo que implica el acatamiento de las formalidades esenciales que rigen la actividad jurisdiccional, entre las que se encuentra el asegurar la notificación de la demanda y la providencia que fija fecha de audiencia (artículo 8 de la Ley 7 de 1975) al demandado, las garantías de incorporación de los medios probatorios lícitos y la utilización de los medios de impugnación legalmente autorizados, de tal manera que puedan ser defendidos efectivamente sus derechos.

El punto central de la controversia planteada es la necesidad de que se surtiese la notificación personal de la fecha de audiencia a la parte demandada en el proceso. En este caso el recurrente estima que esta situación no se verificó con lo cual se le dejó en estado de indefensión. Esta Corporación Judicial advierte que pese ser dirigida la acción planteada a obtener la revocatoria de la sentencia N° PJ/6/96, el acto que le ocasiona el estado de indefensión aducido, es la falta de notificación de la resolución de 27 de octubre de 1995.

En este sentido cabe señalar, que se observa a foja 1 del expediente que la demanda interpuesta por el señor Jorge Luis Santana Rodríguez fue promovida, en primer lugar, contra la Sociedad Fomento Cultural que opera el Colegio Instituto Justo Arosemena.

Posteriormente, la representante legal (ver foja 30) de la sociedad Instituto de Fomento Cultural, S. A. (Instituto Justo Arosemena), señora Berta de Moscote, otorgó poder legal a la firma Camarena, Guerra, Morales & Vega para que ejerciera su representación dentro del proceso legal interpuesto, actuando por la mencionada firma forense el Lcdo. Jairo Morales Olivares.

A foja 11 del expediente reposa la corrección de la demanda presentada por el apoderado judicial del señor Santana, en la cual se elimina a la Sociedad Fomento Cultural, S. A., como parte demandada, cuyo representante legal es la señora Berta de Moscote, y se introduce a la sociedad Enseñanza Particular Incorporada (Instituto Justo Arosemena), como nuevo ente demandado. La

representación legal de este último es ejercida, de igual manera, por la señora Berta de Moscote (ver foja 39).

Seguidamente se admite la corrección y se le da traslado de la admisión y de la fecha de audiencia de la demanda a la parte demandada. Esta resolución se notifica el Lcdo. Jairo Morales en representación de la empresa (ver reverso de la foja 40), sin que conste poder otorgado por la representante legal de la sociedad demandada.

Luego, el Lcdo. Morales sustituye el poder, otorgado por el Instituto de Fomento Cultural, en el Lcdo. Pedro Fuentes, para que sea éste último quien actúe en la audiencia programada.

El acta de audiencia que obra de fojas 43 a 52 del expediente establece que una vez analizados los argumentos y practicadas las pruebas, en fallo oral inmediato se produce la sentencia que condena al Instituto Justo Arosemena a pagar al señor Santana los salarios dejados de percibir durante el período comprendido entre 12 de marzo y el 29 de mayo de 1988.

Como indicáramos con anterioridad, de la documentación existente dentro del expediente se corrobora la circunstancia aducida por la parte actora, en el sentido de que la admisión de la corrección de la demanda y la fecha de celebración de audiencia se notificó al Lcdo. Jairo Morales, sin que se evidencie poder alguno otorgado por la representante legal de la sociedad Enseñanza Particular Incorporada, a la firma Camarena, Guerra,Morales & Vega, para ejercer su representación judicial dentro del proceso laboral incoado.

Por lo que, a juicio de este Tribunal, es perfectamente viable la pretensión del amparista, toda vez que el debido proceso legal es una garantía de orden instrumental, en virtud de la cual debe asegurársele a las partes oportunidad razonable de ser oídas, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte y, para hacer viable tal oportunidad, el interesado (en este caso la sociedad anónima Enseñanza Particular Incorporada,) debe ser debidamente puesto en conocimiento de la existencia de un acto jurisdiccional que le afecte, elemento que palmariamente se desprende, no aconteció en este negocio, ya que la firma Camarena Guerra,Morales & Vega,no tenía poder para actuar en representación de la sociedad Enseñanza Particular Incorporada y tampoco fue ratificada su gestión dentro del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, el PLENO considera que en este caso es inconstitucional la sentencia expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, pues la misma se presenta como resultado de un procedimiento nulo toda vez que no se notificó de la admisión de la corrección de la demanda ni de la fecha de audiencia, a la sociedad Enseñanza Particular Incorporada, S. A. (parte demandada), siendo ésta condenada sin que se le diera oportunidad razonable de ser escuchada en el proceso.

En consecuencia la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la acción de amparo interpuesta por el Licenciado Elio Camarena en representación de Enseñanza Particular Incorporada, S. A. y REVOCA la sentencia N° PJ/6/96 emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR FRANKLIN RODOLFO CORRO BREA CONTRA SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN EL PROCESO DE TRABAJO PROMOVIDO POR MI PERSONA EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor Rolando Murgas Torraza, actuando en su calidad de apoderado judicial de **FRANKLIN RODOLFO CORRO BREA**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la sentencia de segunda instancia de 3 de junio de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en el proceso de trabajo promovido por **FRANKLIN RODOLFO CORREA BREA**, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. o INTEL, S. A.

En la referida sentencia, el Tribunal Superior de Trabajo, revoca la sentencia PJ-6 de 13 de diciembre de 1995, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 en la que se condenó al INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. (INTEL, S. A.) al reintegro del Trabajador y el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido, hasta el cumplimiento de la orden de reintegro y en su lugar absuelve a la demandada de las prestaciones formuladas.

La presente demanda fue acogida dado que fue formulada debidamente y con observancia de las formalidades legales correspondientes; sin embargo, al entrar a resolver la misma, este Tribunal observa que es manifiestamente improcedente ya que pretende de manera exclusiva, enervar el juicio apreciativo externado por el Tribunal Superior de Trabajo, quien al conocer en segunda instancia del Proceso Laboral por despido injustificado del Señor **FRANKLIN CORRO**, decidió revocar la sentencia proferida por la Junta de Conciliación y Decisión, y en su lugar declaró justificado el despido del prenombrado **FRANKLIN RODOLFO CORRO**.

Esta acción de amparo se fundamenta en los siguientes hechos:

1. El señor **FRANKLIN RODOLFO CORRO BREA**, inició relación laboral con el INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. o INTEL, S. A., el día 5 de abril de 1993, mediante Decreto de Personal N° 011-31, ocupando el cargo 0822 como asistente Ingeniero, tal cual consta a fojas 10 del expediente principal.

2. El día 23 de marzo de 1995 la empresa comunicó despido con preaviso de treinta días a mi representado, pero no concedió el período correspondiente al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, numeral 3, de la ley 8 de 1975.

4. El plazo de preaviso debía iniciarse, según el artículo en mención, a partir del período de pago siguiente al día en que se recibió el preaviso. Conforme a esto, el preaviso se computaba a partir del 1° de abril de 1995.

5. La precitada ley 8 de 1975, a diferencia del Código de Trabajo, no permite la sustitución del preaviso por dinero o a voluntad del empleador, sin perjuicio de la indemnización sustitutiva correspondiente.

6. La empresa liquidó al trabajador el importe del preaviso y de la indemnización el 30 de mayo de 1995.

7. Al momento del despido, el Ing. **CORRO**, tenía un año, once meses y diecinueve días de prestar sus servicios al INTEL, S. A., es decir que al momento de cumplirse el plazo del preaviso, el trabajador tenía más de dos años de antigüedad por lo que no resultaba aplicable el libre despido y, por consiguiente, estaba amparado por la garantía constitucional de prohibición de despido sin justa causa.

El amparista considera que se ha violado el artículo 70 de la Constitución Nacional.

Encontrándose el presente negocio en estado de resolver, el Pleno advierte que el amparo ha sido interpuesto con la finalidad de utilizar esta vía como una tercera instancia, pues resulta notorio que lo que realmente se pretende con esta acción es hacer del presente proceso un marco propicio para revisar la valoración hecha por el Tribunal Superior de Trabajo, pretensión que claramente desborda la naturaleza y alcance de este instituto constitucional.

La decisión que se impugna obedeció a que a juicio del Tribunal Superior de Trabajo, el trabajador no gozaba de estabilidad y en consecuencia era menester revocar el fallo apelado, por lo que la Corte puede constatar que el punto materia de controversia en este negocio no es la norma constitucional cuya violación se alega, sino el juicio externado por Tribunal Superior de Trabajo en aspectos procesales que a la Corte no le es dable contrariar por esta vía extraordinaria. En este sentido los errores in judicando no son materia de amparo, solamente los errores in procedendum.

En jurisprudencia reiterada el Pleno ha sostenido que el amparo de garantías constitucionales no puede ser utilizado para valorar circunstancias propias de la apreciación del juez, la cual es aplicada conforme a la sana crítica y al conocimiento experimental de las situaciones que rodean el negocio. En este orden de ideas se ha manifestado la Corte Suprema en resoluciones de 15 de enero de 1993, 24 de abril de 1990, 28 de febrero de 1991, y 13 de enero de 1994.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, la acción de amparo de garantías Constitucionales propuesta por el Doctor Rolando Murgas Torraza, en representación de FRANKLIN RODOLFO CORRO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR REY H. LUQUE -VS- GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MARIO LUQUE V. ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 20 de septiembre de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que decidió no admitir la acción de amparo de garantía constitucionales que el apelante propuso contra resolución dictada por la Gobernadora de la Provincia de Panamá.

El apelante solicita a esta Corporación que admita la demanda de amparo y se revoque la resolución T-116-96 de 9 de septiembre de 1996, expedida por la Gobernación de la Provincia de Panamá, pues, según señala, la Sra. Gobernadora infringió el artículo 32 de la Constitución al no aplicar al proceso de tránsito el artículo 119 del Decreto 160 de 7 de junio de 1993, en materia de notificación del fallo. Indica entonces que, la gravedad e inminencia del daño se evidencia, ya que de no revocarse la resolución "habría que notificar nuevamente y en forma personal la Resolución de Tránsito lo que conllevaría desconocer el procedimiento legalmente contemplado en el artículo 119 del Reglamento de Tránsito".

En otro orden de ideas, según expresa la resolución apelada, que consta de

fojas 10 a 11, la presente acción de amparo está dirigida contra la Resolución N° T-116-96 de 9 de septiembre de 1996 de la Gobernación de Panamá, que decreta la Nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 52 del expediente administrativo de tránsito, en que son partes JOSÉ ROBERTO MUÑOZ ANGUIZOLA -vs- REY HILDEBRANDO LUQUE.

El a-quo decidió no admitir el amparo por dos razones:

La primera, porque con la demanda no consta el poder que según el licenciado MARIO LUQUE le fue conferido por el doctor Rey H. Luque V., a nombre de quien dice actuar, lo cual contraviene el artículo 2609 del Código Judicial, que indica que las partes deberán nombrar abogados que las representen.

La segunda razón consiste en que la resolución impugnada no contiene una orden de hacer o de no hacer de las que pueden tenerse como recurribles en amparo, es decir, de aquellas que violen derechos y garantías constitucionales.

La Corte ha podido comprobar que, en efecto, tal como señala el tribunal de amparo, en este caso no consta con el libelo de amparo el poder que debe otorgar el amparista a su abogado para que lo represente, lo que hace pensar que existe falta de legitimidad en la representación. En diversos casos esta Corporación ha dicho que la acción de amparo es independiente a cualquier proceso, de allí que debe acreditarse la representación para efectos de la misma, ya sea mediante un poder especial o bien en uno general siempre que haya sido otorgado en instrumento público y esté debidamente inscrito. (Ver fallo de 25 de junio de 1992).

Igualmente, el Pleno comparte el criterio del fallo apelado en el sentido de considerar que la resolución atacada no conlleva una orden arbitraria de hacer o no hacer contra el demandante, conculcatoria de algún derecho o garantía fundamental. Por el contrario, se trata del pronunciamiento de la autoridad administrativa, de segunda instancia, dentro de un proceso de tránsito, mediante el cual se decreta la nulidad de la actuación a partir de cierto momento por observar en el expediente algunas irregularidades que la vician. Por lo que la decisión implica que se retrotraiga la actuación, a fin de que se realice nuevamente la notificación del fallo de primera instancia.

Obviamente, todo lo anterior implica cuestionamientos de índole procesal, cuya solución no pueden obtenerse mediante el amparo de garantías como si se tratara de una tercera instancia, pues, como lo ha reiterado la jurisprudencia, ello traería como consecuencia la desnaturalización de esta extraordinaria acción de orden constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 20 de septiembre de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por REY H. LUQUE contra la Gobernadora de la Provincia de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR TORIBIO ACOSTA CERRUD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DISPLAY VARIEDADES ACOSTA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, LICENCIADO EMIDIO ALFREDO MANZANÉ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor TORIBIO ACOSTA CERRUD, representante legal del establecimiento comercial DISPLAY VARIEDADES ACOSTA, por conducto de apoderado legal, ha promovido acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, dentro del proceso administrativo que le sigue la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, contra la orden contenida en la Resolución N° 6, de 29 de julio de 1994, mediante la cual se le impone al accionante multa de CUATRO MIL BALBOAS (B/.4.000.00), orden que estima viola sus derechos constitucionales, singularmente la garantía del debido proceso.

El amparista conceptúa que la violación al artículo 32 se escenifica por las razones que se transcriben:

"...

a) Emite una providencia el día 20 de mayo de 1996 (y que en la Resolución impugnada habla de marzo) mediante la cual Emplaza a mi representado a que en un plazo de 15 días a partir de la fecha de esa Resolución, para que presente pruebas de los descargos a su favor. Esta Resolución se la notifican personalmente el 28 de mayo de 1996.

Evidentemente, que al plantear la providencia el plazo de 15 días a partir de la fecha de su emisión para la presentación de pruebas, y no a partir de su notificación personal, dado que para la fecha de su notificación ya habían transcurrido 7 días, quedándole solamente la mitad del término, con lo cual se redujo la posibilidad de que se aportaran las pruebas a su favor entendiendo el domicilio de mi representado que es la Ciudad de Santiago. En este sentido la Resolución impugnada es incoherente en este aspecto, ya que en ella se expresa que la providencia habla de 15 días (sic) partir de la notificación, cuando la propia providencia habla de "para que en el término de quince (15) días a partir de la fecha presente a esta Dirección las documentación (sic) ..."

Desde el momento de que se emite una providencia deficiente y contraria al procedimiento, se viola el debido proceso, independientemente de que se afirme que esa deficiencia no afectó el término establecido, ya que de lo que se trata es de respetar el debido proceso, el cual recomiendo darle al enjuiciado, la garantía a su legítima defensa, y que en este caso, el restringirle el plazo aunque sea en un sólo día, ya se le violó esa garantía a una adecuada defensa. Por ello, si el procedimiento contempla que la providencia que abre todo proceso a prueba, debe establecer el plazo para su práctica así como la mención de que el mismo es a partir de su notificación personal, entonces, no hay excusa que pueda INVOCAR el funcionario para no hacerlo.

b) Vuelve la Dirección Nacional de Derecho de Autor a violar el debido proceso, al proceder a notificar la Resolución N° 6 del 29 de junio de 1996, mediante edicto (sin número) fijado el 7 de agosto y desfijado el día 8 días hábiles siguientes: a la emisión de la Resolución. Esta Resolución por mandato legal debió ser notificada personalmente al afectado personalmente al afectado (sic) o en su defecto al Apoderado Judicial dado que es una Resolución de primera instancia, ya que el no hacerlo de ésta forma le impide al afectado interponer en tiempo oportuno los Recursos de Reconsideración y Apelación respectivamente. Violentó el funcionario la propia norma que caprichosamente utiliza para la fejación (sic) del edicto (Art. 988 del Código Judicial) porque esta norma remite a su vez a artículo 989, que en su ordinal se habla que se notificará personalmente,: "La sentencia de primera instancia". No hay excusa para no proceder a la notificación personal de esta resolución, dado que en el expediente existen Informe (sic) secretariales que hablan de llamadas telefónicas efectuadas al suscrito y al afectado, en

donde se Informa sobre la necesidad de concurrir a notificarse con todo el respecto (sic) que le profesamos a funcionario, hemos de puntualizar, que hasta donde tenemos, conocimiento, todavía no se ha instituido en materia de procedimiento para la notificación de un acto proceral (sic), y muchos menos tratandose (sic) de una sentencia de primera instancia, la vía telefónica y los mensajes. Proceder de esta (sic) forma es recurrir a la Ley del menor esfuerzo, que contradice el debido proceso, y mucho más conociendo perfectamente el funcionario mi domicilio profesional ubicado en Vía España, a unas cuantas cuadras del Despacho Administrativo.

El funcionario violó el debido proceso, al proceder de ésta manera, dejando en total estado de indefensión a mi representado quien (sic) no pudo hacer uso de los recursos que la ley le otorga para su defensa maxima (sic) cuando se toma la atribución de mandar el día 29 de agosto de 1996, al Ministerio de Hacienda y Tesoro, copia autenticada de la misma, para su ejecución: ...". (Fs. 28, 29 y 30).

La acción constitucional fue admitida, mediante resolución de 30 de septiembre de 1996, la que ordenó a la autoridad demandada el informe de su actuación, informe éste que fue emitido el 3 de octubre de 1996, acompañando copia del expediente contentivo del proceso administrativo en referencia.

En dicho informe, la autoridad denunciada, que señala no haber violado la garantía del debido proceso, explica tal conclusión, de la siguiente forma:

"...

El 12 de marzo de 1996, esta Dirección acogió QUEJA promovida por la Sociedad SONY MUSIC ENTERTAINMENT (PANAMÁ), S. A. por conducto de su Apoderado Legal, licdo. ERIC LÓPEZ C., con el propósito de que se efectuaran las diligencias necesarias de hechos que pudieran constituir infracción a la Ley de Derecho de Autor, en los terrenos de la Feria Internacional de David, Provincia de Chiriquí, y determinar si las personas naturales o jurídicas que se encontraban comercializando en dicha Feria, contaban con las licencias respectivas.

La autoridad competente para el respeto y goce de los derechos de autor y derechos conexos, es la Dirección Nacional de Derecho de Autor de conformidad con la Ley 15 de 8 de agosto de 1994. Esta función adscrita legalmente también responde a pactos internacionales de los cuales la República de Panamá es parte, y se compromete por ende a establecer mecanismos rápidos y eficaces que garanticen una adecuada protección, tales como:

Convención Interamericana sobre Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Washington, 1946. Aprobada mediante Ley N° 5 de 9 de noviembre de 1982.

Convenio de Berna de 1886, con sus consecuentes enmiendas hasta la última de fecha 28 de septiembre de 1979, entró en vigor el 8 de junio de 1996, fecha en que también la República de Panamá, formará parte de la Unión de Berna.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, procedió en efecto a la inspección previamente solicitada, con fundamento en el Artículo 109, numerales 1, 5 y 7 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, y los Artículos 71 y 72, numeral 6 del Decreto 261 de 3 de octubre de 1995. Nos presentamos al local comercial denominado C. D. WORD DISPLAY VARIEDADES ACOSTA, cuyo Representante Legal es el Señor TORIBIO ACOSTA, y luego de la inspección se determinó la existencia de materia fonográfico, el cual constituía en parte producto legal. Sin embargo, se pudo observar gran cantidad de material fonografico (sic) que no reunía características esenciales que debe contener toda obra. Por lo tanto, se procedió a preguntar "¿Tiene usted licencia para reproducir ese material discográfico?, a lo que contestó que no".

> El 20 de mayo de 1996, la Dirección Nacional de Derecho de Autor dispone emplazar a TORIBIO ACOSTA C., para que en el término de 15 días presentara a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la documentación contentiva de las licencias o autorizaciones otorgadas por los respectivos productores de fonogramas para la reproducción y venta de los fonogramas producidos por SONY MUSIC ENTERTAINMENT (PANAMÁ), S. A.
>
> Dicha resolución fue notificada al Apoderado Especial del señor TORIBIO ACOSTA, licenciada KENIA E. CÁRDENAS, el 28 de mayo de 1996.
>
> A pesar de la notificación personal a la letrada, el término de 15 días venció sin que el Sr. TORIBIO ACOSTA C., en su condición de Representante Legal de DISPLAY VARIEDADES ACOSTA, presentara la documentación respectiva para acreditar la legalidad del material encontrado en la Feria Internacional de David, presuntamente infractor.
>
> Mediante Resolución N° 6 de 29 de julio de 1996, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, luego de haber transcurrido más de dos (2) meses después de haberse expedido la Resolución, por la cual se emplazaba a la empresa, se resolvió imponer a TORIBIO ACOSTA C., como representante legal de esta Sociedad, la sanción consistente en multa de CUATRO MIL BALBOAS (B/.4,000.00).
>
> De fojas 39, 40 y 41 aparecen los informes secretariales que dan cuenta de todas las gestiones realizadas por esta Dirección, con el propósito de lograr la notificación personal del señor TORIBOP ACOSTA C., o, en su defecto, al Apoderado Especial designado posteriormente, en este caso EMIDIO MANZANÉ. Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que ninguna de las partes se presentaran a notificarse de dicha Resolución.
>
> Es conveniente señalar al Señor Magistrado Ponente, que la Secretaría del Despacho, el 31 de julio de 1996, a las 11:20 a. m., conversó incluso vía telefónica con el Licdo. EMIDIO MANZANÉ, y le manifestó la necesidad de que se presentara para la debida notificación. El Licdo. Manzané señaló que pasaría por estas oficinas ese mismo día, a las 2:30 p. m., pero no cumplió con su promesa. ...". (Fs. 36, 37 y 38).

El Pleno considera que la función administrativa de verificación del cumplimiento de la ley que regula el Derecho de Autor, se realiza a través de un procedimiento administrativo al cual le son, naturalmente, aplicables las reglas del debido proceso, procedimiento administrativo éste que debe seguirse conforme a las disposiciones de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, y el Libro I° del Código Judicial, con las reglas especiales que señale la Ley N° 15, de 8 de agosto de 1994, y, supletoriamente, las disposiciones del Código Judicial, por expresa remisión a este cuerpo por el artículo 36 de la Ley 33 de 1946 y por el artículo 99 del Código Judicial.

Observa de entrada el Pleno que la acción de amparo está dirigida contra una resolución administrativa dictada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, acto administrativo de naturaleza sancionadora contra el cual cabe recurso de reconsideración ante la misma autoridad que lo pronunció y el de apelación ante el superior jerárquico, es decir, el Ministro de Educación, vías recursivas éstas que no fueron utilizadas por el amparista; y, además, el hecho de que, por tratarse de materia administrativa, la vía procesal idónea es la acción contencioso-administrativa ante la Sala Tercera de esta Corporación Judicial. Estas dos consideraciones bastan para negar la acción constitucional de amparo, siguiendo al efecto jurisprudencia constante del Pleno.

Advierte el amparista que el emplazamiento realizado por la autoridad administrativa acusada ha violado el debido proceso, por cuanto el término concedido en el mismo ha debido computarse a partir de la notificación de dicho emplazamiento, lo que se produjo, como afirman tanto la autoridad demandada como

el amparista el día 28 de mayo de 1996. Dicha afirmación releva al Pleno de determinar si, en efecto, el emplazamiento se hizo en debida forma, no obstante que no consta en el expediente la notificación de dicho emplazamiento. Este, al guardar silencio la legislación administrativa aplicable, debe ser, preferentemente la notificación personal y, en su defecto, la notificación edictal. Es obvio, por lo tanto, que el requisito de puesta en conocimiento del acto emplazatorio fue debidamente notificado. El hecho de que el cómputo del término ofrecido en el edicto emplazatorio se haya hecho a partir de su fecha y no a partir de su notificación, es tema que carece de relevancia constitucional, por lo que ha podido ser atacado en sede recursiva ante la misma autoridad que dictó el acto o ante el superior jerárquico. Todo esto se expresa para destacar la conveniencia de que las autoridades administrativas, ante este tipo de procedimientos, dejen constancia en el expediente la notificación del emplazamiento, trámite impuesto por el artículo 113 de la Ley 15 de 1994, toda vez que su omisión es susceptible de corrección por el afectado ante la vía ordinaria, mediante la utilización, en el procedimiento gubernativo, de los correspondientes recursos.

La resolución que se ataca por la acción constitucional promovida, es decir, la Resolución N° 6, de 29 de julio de 1996, fue notificada por edicto, luego de que la autoridad demandada desplegó esfuerzos que exceden el celo normal, actitud digna de encomio en las actuaciones administrativas, no obstante que el edicto debió expedirse y mantenerse expuesto en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, durante 5 días, como ordena el artículo 31 de la Ley 33 de 1943, modificado por el artículo 18 de la Ley 33 de 1946. No obstante, la omisión de la autoridad cuestionada ha sido, en apreciación del Pleno, saneada por la conducta concluyente del actor, conforme se desprende de la lectura del precepto contenido en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, tal como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, **dándose por suficientemente enterada**, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales." (El énfasis es del Pleno).

Es evidente que tanto el amparista como su procurador judicial tenían conocimiento de la resolución mencionada, y el expediente refleja una resistencia a cumplir la notificación de la resolución que los afectaba adversamente, como lo acreditan los informes secretariales visibles en fojas 39, 40 y 41 del expediente principal,por cuya razón se entiende debidamente cumplido el trámite de notificación de la resolución objeto de esta acción constitucional de amparo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales interpuesto por TORIBIO ACOSTA CERRUD como Representante Legal del establecimiento DISPLAY VARIEDADES ACOSTA a través de su apoderado legal, licenciado EMIDIO ALFREDO MANZANÉ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR NELVA COSIO DE RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 133-96 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Humberto Mosquera Bethancourt, actuando en representación de la señora NELVA COSIO DE RODRÍGUEZ, ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, del Órgano Judicial.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una orden de hacer proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil mediante Resolución N° 133-96 de 19 de septiembre de 1996, a través del cual se establece la lista de seleccionables para el concurso N° 373-96 (interno) de la posición (Pos. N° 857) de estenógrafo del Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil de Panamá e igualmente se establece la lista de no seleccionables en relación a dicho concurso dentro de la cual aparece la demandante.

Considera el Pleno que no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar la Resolución N° 133-96 de 19 de septiembre de 1996, por cuanto la misma es clara al establecer -en su artículo segundo- que los que se consideren afectados por ésta disponen del recurso de reconsideración con apelación en subsidio para impugnar dicha decisión. Así lo establece el artículo 32 del Acuerdo N° 46 de 27 de septiembre de 1991.

En este sentido, el numeral 2 del artículo 2606 es claro al disponer que "solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". El Pleno de esta Corporación ha sido reiterativo al señalar, con fundamento en la norma antes citada, que no cabe el recurso de amparo contra resoluciones que admiten medios ordinarios de impugnación. De modo pues, que sólo es admisible la presente acción de amparo, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Humberto Mosquera Bethancourt, en representación de la señora NELVA COSIO DE RODRÍGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR TEODOLBERTO D. CASTILLO P. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 1996 DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN ACADÉMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Castillo & Castillo actuando en su calidad de apoderado judicial del señor **TEODOLBERTO DAMIÁN CASTILLO PEREA**, ha presentado ante esta

Superioridad Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución s/n, emitida el siete (7) de octubre de 1996 por el Director Nacional de Educación Media Académica del Ministerio de Educación, profesor Juan José Chen, por la cual se suspende de su cargo como funcionario del Ministerio de Educación al Profesor **TEODOLBERTO DAMIÁN CASTILLO PEREA**, actual Director Titular del Primer Ciclo Balboa del Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá.

El Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia procede en primer término al examen del libelo presentado, en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos de admisión exigibles para estos procesos.

En este punto se percata el Tribunal, que la acción en estudio adolece de defectos que impiden su admisión, tal como se procede a indicar de inmediato:

La acción instaurada pretende la revocatoria de una resolución de **carácter administrativo**, propia de las funciones que en esta materia ostenta la Dirección Nacional de Educación Media Académica del Ministerio de Educación.

Esta Máxima Corporación de Justicia, al avocarse al conocimiento de las acciones de amparo de garantías constitucionales, ha venido reiterando de manera permanente la imperiosa necesidad de que en aquellos casos en que los actos acusados sean susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley, resulta imprescindible el agotamiento previo de esas vías procesales **antes** de la presentación de la Acción Extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales (principio de definitividad).

En el negocio sub-júdice se evidencia de manera palmaria que, por ser de carácter eminentemente administrativo el acto acusado, una vez agotada la vía gubernativa el amparista está facultado para la instauración de un proceso contencioso administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Existen copiosos pronunciamientos jurisprudenciales del Pleno de la Corte, en los cuales se ha reiterado que en estos casos, no se consideran agotados los medios de impugnación correspondientes si se encuentra pendiente o fuere posible, la instauración del proceso contencioso administrativo, con la consideración adicional de que esa es también la vía procesal **más idónea** para ventilar la litis, puesto que en aquella instancia existe la posibilidad de revisar toda la actuación administrativa, practicar pruebas y realizar todos los trámites procesales pertinentes para satisfacer la pretensión del demandante, cuando así es del caso, es decir, se puede examinar con mayor profundidad la alegada violación, lo cual no es posible dentro de la Acción de Amparo. Por ello se ha manifestado que cuando se utiliza una vía procesal que no es la más efectiva o la más adecuada para el caso que se juzga, se puede colocar en una situación de desventaja procesal a una de las partes.

Sobre el particular son consultables las resoluciones calendadas 20 de abril de 1990, 30 de enero de 1991, 2 de mayo de 1990, 21 de febrero de 1992, 27 de enero de 1993, de 13 de enero de 1994 y 26 de septiembre de 1994, entre otras.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por la firma forense Castillo & Castillo, actuando en su calidad de apoderado judicial del señor TEODOLBERTO DAMIÁN CASTILLO PEREA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR GIOVANNI BUGLIONE CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Rubino, ha interpuesto recurso de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 3 R. V.-C de 16 de agosto de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Menores y en la Resolución N° 4 R. V.-C de 5 de septiembre de 1996, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 3 R. V.-C de 16 de agosto de 1996.

Mediante la Resolución N° 3 R. V.-C de 16 de agosto de 1996, el Tribunal Superior de Menores resolvió lo siguiente:

> "1. **MODIFICAR** lo dispuesto en la resolución N° 036 S. de F. de cinco (5) de marzo del Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá, dictada dentro del proceso de **REGLAMENTACIÓN DE VISITAS** promovido por NELSON ERIC RETALLY GUARDIA, contra ANTONIETA ASUNCIÓN BUGLIONE, en favor de la menor DUNETTE SELLEN RETALLY BUGLIONE.
>
> 2. **ORDENAR** la entrega de la menor DUNETTE SELEN RETALLY BUGLIONE, a su padre, señor NELSON ERIC RETALLY, a quien se le concede la **guarda, crianza y educación** de la citada menor.
>
> 3. **INDICAR** al Juzgado que establezca un reglamento de visitas en favor de GIOVANNI BUGLIONE.
>
> 4. **MANTENER** lo dispuesto en el punto N° 3 de la Resolución N° 036 de cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), del Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá.
>
> FUNDAMENTO JURÍDICO: Artículo 835 del Código de la Familia y 120 del Código Civil." (Fs. 12).

Considera la demandante que dicha resolución viola los artículos 17, 32, 50 y 52 de la Constitución Política.

El artículo 2611 del Código Judicial preceptúa que el Tribunal a quien se dirija la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarla, para comprobar si reúne los requisitos comunes a todas las demandas y los indicados en el artículo 2610 del mismo Código, y además, para determinar si no es "manifiestamente improcedente".

En la presente demanda de amparo se cita como violada la garantía fundamental del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional. El Doctor Arturo Hoyos, en su ensayo "El Debido Proceso", recoge los elementos fundamentales de esta garantía instrumental en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual esta garantía cubre todos los procesos regulados en el derecho panameño, sean estos de índole penal, civil, laboral, u otros; los trámites de estos procesos, como regla general, deben estar establecidos mediante la ley; el juzgador que actúe en la causa debe ser un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial. Además integra esta garantía en la jurisprudencia constitucional nacional el derecho de las partes de ser escuchadas en el proceso, de pronunciarse, de contradecir las pretensiones y pruebas de la contraparte, de presentar pruebas lícitas, de hacer uso de los medios legales de impugnación contra las resoluciones judiciales, y de que se respete la cosa juzgada, a fin de que se cumpla el principio "non bis in idem". También ha sostenido la Corte que el Artículo 32 de la Constitución

contiene además el derecho de las personas a acudir a los tribunales de justicia a fin de obtener la tutela de sus derechos. (HOYOS, Arturo, El Debido Proceso, Capítulo III, Editorial Temis, S. A., Colombia 1996, páginas 58 a 76).

En la presente demanda de amparo de garantías constitucionales, la parte actora pretende que se revoque la orden de hacer, porque es violatoria de la garantía instrumental del debido proceso, pero no dice qué normas procedimentales aplicables al caso fueron violadas, sino que cita artículos del Código Civil y del Código de la Familia de carácter sustantivo, que no contienen normas procesales, cuya violación pueda lesionar la garantía constitucional consagrada en el mencionado artículo 32 de la Constitución Política.

Además se cita como violado el artículo 50 de la Constitución Política, en el cual se establece la acción de amparo y el artículo 52 ibídem que es una norma de carácter programático y como tal no consagra ninguna garantía constitucional individual cuya violación da derecho a promover la acción de amparo de garantías constitucionales.

Por lo expuesto debe concluirse que la presente acción de amparo es manifiestamente improcedente y no debe admitirse, en cumplimiento de los artículos 2609 y 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Luis Rubino B., en nombre y representación de GIOVANNI BUGLIONE, contra la orden contenida en la resolución N° 3 R. V.-C de 16 de agosto de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO EN CONTRA DE LA FISCAL SÉPTIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **ERNESTO CASTILLO ALMENGOR** ha formalizado apelación contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior fechada veintiuno (21) de agosto de 1996, mediante la cual se declaró **LEGAL** la detención preventiva de su representada la señora **HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO**.

El Segundo Tribunal Superior sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:

"A la señora HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO le imputan la comisión de varios delitos, a saber:

1° Peculado por extensión

Este es un delito que cometen aquellas personas que aún cuando no son servidores públicos, los servicios que prestan ofrecen especial interés a la colectividad y por ello tienen el carácter de funcionarios públicos. La doctrina le denomina **peculado por extensión** y está tipificado en el Código Penal, en el artículo 327, para referirse, entre otros supuestos, a los empleados pertenecientes a un establecimiento de instrucción pública.
...
Obsérvese que el concepto citado tiene como única referencia la enseñanza en planteles educativos y, el texto del artículo 327 del Código Penal Panameño tiene la finalidad de referirse a los empleados pertenecientes a un establecimiento de instrucción pública.
...
Obsérvese que el concepto citado tiene como única referencia la enseñanza en Planteles educativos y, el texto del artículo 327 del Código Penal Panameño tiene la finalidad de referirse a los establecimientos de enseñanza privada, porque los establecimientos regentados por Estado no es necesario incluirlo en una norma, pues toda aquella persona que presta servicios al Estado tiene la calidad de servidor público y el objeto o filosofía de la excerta legal citada, consiste en abarcar aquellos servicios que aun cuando son ofrecidos por la empresa, tiene interés la colectividad.

Partiendo de ese concepto, a nuestro juicio, la imputada está vinculada con el delito de Peculado por Extensión, de carácter doloso, por el apoderamiento de los bienes que debía administrar o custodiar y ello implica aplicarle el artículo 322 del texto legal citado, cuya sanción es de 2 a 10 años de prisión y hasta 250 días multa, permitiendo la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva porque la pena mínima no es menor de 2 años de prisión.

2° También existe Asociación Ilícita.

3° Falsificación de Documento, tipificada en el artículo 265 del Código Penal, cuya sanción es de 2 a 5 años de prisión.

Dentro de otro contexto, es evidente el perjuicio ocasionado a la escuela ofendida, la cual presta un servicio público y en este proceso están cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, para declarar legal la detención preventiva cuestionada, además no han concurrido las circunstancias excepcionales contempladas en las normas de procedimiento, para la aplicación de una medida cautelar personal diferente a la detención preventiva." (Fs. 30-32 del cuadernillo)

Por su parte el recurrente expresa su inconformidad con el fallo impugnado en los siguientes términos:

"TERCERO: Que tanto la señora Fiscal, como los Honorables Magistrados del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, no han tomado en cuenta que con la QUERELLA antes mencionada, existe una NULIDAD DE CARÁCTER ABSOLUTA, en base al artículo 722 numerales 3 y 7 del Código Judicial, ya que la posible agraviada ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ, no tiene la legitimidad de su Personería, y existe claramente la suplantación de la persona del Demandante o Querellante, tal como lo preveen los artículos 2030, 2032, y 2034 del Código Judicial, por lo que debió declararse NULO todo lo actuado y archivarse el expediente, por lo que existe una detención ilegal, en base a los artículos 2565 y 2566 numeral 1 del Código Judicial, concordante con los artículos 21, 22, 23 y 32 de la Constitución Nacional.
...
En este caso que nos ocupa, debió ser la Junta de Conciliación y

> Decisión N° 4 del Ministerio de Trabajo, la que debió realizar el Audito (sic) a Solicitud (sic) de los afectados que son los trabajadores secuestrantes de la ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ, ya que esta se encuentra fuera de comercio, y le adeuda en prestaciones laborales la suma de B/.85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL BALBOAS).
>
> Por lo tanto la detención preventiva es ilegal por existir una NULIDAD ABSOLUTA, por falta de Personería Jurídica y jurisdicción, que puede ser alegado por cualquiera de las partes, o puede ser declarada de oficio en el momento que se advierta, en violación a los artículos 22 y 32 de la Constitución Nacional.
>
> QUINTO: La Resolución que impugnamos trata de incluir nuevos delitos que no se contemplan en la QUERELLA, como es el delito de Peculado por extensión, por la mala interpretación que se le da al artículo 327 del Código Penal, al afirmar que "la ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ", la supuesta afectada, es una empresa de Serviciso (sic) Públicos en la que tiene participación económica el Estado, lo cual no esta probado en la QUERELLA, ya que existe una clara suplantación entre la Asociación sin carácter (sic) lucrativo y la ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ, plenamente probado que tiene interés lucrativo, como empresa privada, violando los artículos 9 del Código Civil y 1133 del Código JUdicial (sic), siendo ilegal la detención preventiva de la señora DE CASTILLO." (Fs. 36-38)
>
> OCTAVO: Tanto la Fiscal Séptima (sic) del Circuito de Panamá, como el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, a pesar de haber sido Solicitada como prueba la declaración de la señora HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO, a fin de acreditar su estado meternal (sic) de lactante de su hija de ocho (8) meses de nacida, y que en la actualidad amamanta en la Cárcel de Rehabilitación Femenina, le impidió probar que se encuentra dentro de las medidas excepcionales que señala el artículo 2147-D del Código Judicial ...".

Sigue diciendo el recurrente que la Resolución del Tribunal Superior llega "al extremo de perfeccionar a última instancia, el delito de Asociación ilícita," cuando el Auto que decreta la detención preventiva de su representada y la del señor **MIGUEL FLORES** no incluye a **DAYRA QUIROZ** ni a **AKENDA GUERRA**; que se ha violado el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 22 de la Constitución Nacional; que a foja 1758 la Fiscalía Séptima de Panamá sostiene que está probada la existencia jurídica de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA PRO ESCUELAS ACTIVAS sin mencionar a la ESCUELA MONTESSORI, y que además se limita a mencionar el delito de Apropiación Indebida, excluyendo los otros supuestos delitos mencionados en la querella, y que este delito tiene señalada pena mínima de seis (6) meses de prisión y por tanto es posible otorgar otra medida cautelar personal.

Para resolver el presente recurso, hacemos las siguientes consideraciones.

A foja 1 del cuaderno principal se lee la Querella que fuera presentada por la señora **LIDIA BERTOLI DE PALAU**, Presidente y Representante Legal de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA PRO-ESCUELAS ACTIVAS (ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ), contra los señores **HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO**, **MIGUEL FLORES**, **DAYRA QUIROZ y AKENDA GUERRA**, por los delitos de Apropiación Indebida, Hurto, Asociación Ilícita, Falsificación de Documentos Privados y por cualquier otro que pudieren haber cometido en perjuicio de la mencionada Asociación.

A foja 5 del cuaderno principal se lee, igualmente, Certificación del Registro Público en la cual consta que se encuentra inscrita la ASOCIACIÓN PANAMEÑA PRO-ESCUELAS ACTIVAS (ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ) desde el 18 de enero de 1971; lo cual explica por qué cuando se solicitó certificación a nombre de la sociedad ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ, (LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA PRO-ESCUELAS ACTIVAS), el Director General del Registro Público manifestó que no se encontraba inscrita (ver foja 19 del cuadernillo de habeas corpus).

Lo anterior prueba que, contrario a lo afirmado por el recurrente, la querellante se encuentra debidamente legitimada para tal efecto, pues es la representante legal de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA PRO-ESCUELAS ACTIVAS (ESCUELA MONTESSORI DE PANAMÁ) que constituyen una misma persona jurídica.

Por otro lado, respecto a lo alegado por el recurrente en el sentido de que el Segundo Tribunal Superior ha incluido nuevos delitos que no aparecen en la Querella ni constan en el proceso seguido a su representada, debemos llamar la atención sobre el hecho de que, en el escrito visible a foja 1 del cuaderno principal, se hace mención claramente de los delitos de que se acusa a **HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO** y **"por cualquier otro que puedieren (sic) haber cometido en el camino en perjuicio de la Asociación que represento"**; de modo pues, que el Tribunal no ha creado ni incluido un delito nuevo al mencionar el de Peculado por extensión, puesto que la querellante dejó abierta la posibilidad de que el Juzgador contemplara algún otro delito que la sindicada hubiere cometido.

En este orden de ideas, el Pleno comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior, en cuanto a la posible comisión por parte de la detenida, del delito de Peculado por extensión contemplado en el artículo 327 del Código Penal, pues resulta claro que la instrucción pública es un servicio público que interesa al Estado, aún cuando sea brindada por instituciones particulares.

Este delito se encuentra sancionado con una pena mínima de dos (2) años de prisión; no obstante en el presente caso no cabe la detención preventiva de la sindicada, ya que a solicitud del Magistrado sustanciador, el Doctor AQUILES ESPINO, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, certificó mediante Oficio N° 69-26080 de 23 de septiembre de 1996, la condición de lactante de la recurrente en los siguientes términos:

> "Actualmente con secreción lactea (sic) abundantes por las mamas, que indica que está lactando a su hija."

Lo anterior evidencia claramente que la señora **ARAUZ DE CASTILLO** se encuentra amparada por la excluyente contenida en el artículo 2147-D del Código Judicial, que dice:

> "... Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o **que amamante a su propia prole**, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad ...". (Lo resaltado es de la Corte).

Existen en el sumario suficientes indicios que vinculan a la recurrente con el ilícito investigado, sin embargo, por tratarse de una madre lactante, no es posible aplicar la medida cautelar de detención preventiva. Procede entonces, la sustitución de la medida cautelar por las enumeradas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B, del Código Judicial vigente, sin perjuicio de que esta situación pueda ser variada en cuanto se supere la excepción de lactante invocada a favor de la sindicada.

De esta forma ha procedido esta Corte con anterioridad, en procesos instruidos a mujeres embarazadas, incluso en delitos relacionados con drogas, donde se han reemplazado las medidas cautelares por medio de recursos de habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior fechada veintiuno (21) de agosto de 1996, mediante la cual se declaró LEGAL la detención preventiva de la señora HERMELINDA ELENA PEÑA ARAUZ DE CASTILLO, y en su lugar REEMPLAZA la medida cautelar de detención preventiva, por las enumeradas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DEL SEÑOR JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA Y EN CONTRA DE LA JUEZ SÉPTIMA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial ingresó en grado de apelación a la Secretaría General de la Corte Suprema el expediente contentivo de la acción de Habeas Corpus instaurada por la licenciada NIVIA ANGELA ÁBREGO MUÑOZ, apoderada judicial del señor JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, contra la Juez Séptima Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Así las cosas, al ingresar el expediente al despacho sustanciador y encontrándose el proyecto para lectura del resto de los Magistrados que conforman el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia, se recibió por secretaría escrito de DESISTIMIENTO presentado por la licenciada proponente de la acción de Habeas Corpus que a su letra dice:

"HONORABLES MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Yo, NIVIA ANGELA ÁBREGO MUÑOZ, abogada en ejercicio y con generales conocidas en autos, concurro ante vuestro tribunal con el fin de desistir de la apelación de la acción del Habeas Corpus interpuesto el 4 de junio de 1996, en contra de la Resolución del II Tribunal Superior del I distrito judicial de Panamá.

Agradezco la atención en curso de la presente; de usted:

ATTE.
(fdo.) DRA. NIVIA ANGELA ÁBREGO M."

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado, ORDENA EL CESE del procedimiento y EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAMARIS EDITH MENDIETA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GILBERTO BERNAL, presentó ante esta Corporación de Justicia, demanda de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y a favor de DAMARIS EDITH MENDIETA, quien se encuentra privada de su libertad en el Centro de Rehabilitación Femenino de Panamá.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada informó a esta Superioridad que las sumarias seguidas a DAMARIS EDITH MENDIETA fueron remitidas con Vista Fiscal, mediante Oficio 9880 de 20 de septiembre de 1996, al Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en turno, a objeto de someter dichas sumarias a las reglas de reparto correspondiente.

De conformidad con el artículo 2588 del Código Judicial, el mandamiento de habeas corpus debe dirigirse automáticamente contra la autoridad a órdenes de la cual haya sido puesto el detenido. Esta misma norma dispone que si el asunto no continua siendo del conocimiento del juez de la causa, los autos serán enviados sin dilación alguna, al funcionario judicial competente, para que continúe la tramitación del caso y lo resuelva.

Dicha autoridad resulta ser el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por lo que procede la declinatoria de la presente acción de habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA EL CONOCIMIENTO del presente negocio ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ramón Andrade Valencia ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor de **SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID**, contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, ya que considera que la detención que sufre es ilegal.

Fundamenta la parte actora que el día 27 de agosto de 1996, en horas de la mañana, en la Provincia de Colón, fue detenida la prenombrada, por un inspector del Departamento de Migración de Colón y conducida a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización de Panamá (Departamento de Investigación) por órdenes del Director Nacional de Migración.

Agrega que la detención de la señora **SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID** le fue ordenada en forma verbal, sin mediar un mandamiento escrito de autoridad competente. En otras palabras, la ilegalidad de la detención radica, explica el apoderado, en que a su representada no se le informó en forma que le fuera comprensible las razones de su detención y de sus derechos constitucionales, como

por otro lado no se le expidió copia de la misma.

Acogido el presente recurso de habeas corpus, el Sustanciador procedió a librar el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración, quien contestó el cuestionario de rigor mediante Nota N° DNM-AL-311-96 de 18 de septiembre de 1996, en los términos que a continuación transcribimos:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora Silvia Martínez de Madrid, de nacionalidad dominicana. La misma fue aprehendida por funcionarios de Migración del Sector de Coco Solo el día 28 de agosto de 1996, remitida a la dirección central ese mismo día y ordenada la detención mediante Resolución DNMSI-0026, del 28 de agosto de 1996, por encontrarse indocumentada.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:
>
> PRIMERO: Que el día 28 de agosto de 1996, funcionarios de Migración del Sector de Coco Solo procedieron a remitir a la Dirección central a la mencionada ciudadana; ya que contra ella pesaba denuncia interpuesta por su esposo.
>
> SEGUNDO: Que la denuncia presentada ante esta Dirección en contra de la señora SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID, por su esposo de nacionalidad panameña, consistía en que el denunciante manifestaba que no convivían juntos y que dicho matrimonio se había realizado por conveniencia.
>
> TERCERO: Que al revisar en nuestros archivos sobre el status migratorio de la Señora SILVIA MATÍNEZ DE MADRID, de nacionalidad dominicana, pudimos percatarnos que desde su llegada a Panamá, el 21 de febrero de 1991, dicha ciudadana no se había apersonado a nuestras instalaciones con la intención de arreglar su status migratorio.
>
> CUARTO: Que a la fecha, dicha señora se encuentra indocumentada y no comprendemos por qué motivo si la misma contrajo matrimonio en el año de 1992, no presentó su documentación como casada con panameño cuando tuvo la oportunidad.
>
> QUINTO: Que por tal motivo se procedió a ordenar la deportación del territorio nacional de la señora SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID, mediante Resolución N° 5956 de 30 de agosto de 1996, la cual se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada. ...

El Pleno de la Corte al examinar los argumentos expuestos considera que existen suficientes elementos que permiten que el Director Nacional de Migración y Naturalización mantenga detenida a la señora **SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID.** En este sentido, consta en el expediente que, desde el 21 de febrero de 1991 hasta la fecha, la precitada no ha llevado a cabo gestión alguna para legalizar su status migratorio dentro del territorio panameño.

Este Tribunal se percata que sí existe una orden de detención que corresponde al N° DNMSI-0026, (v. f. 15 del expediente), que la misma fue dictada en tiempo oportuno y con fundamento plasmado en el Decreto Ley N° 16 de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 16 de 1960 y por la Ley N° 6 de 1980, los cuales facultan al Director Nacional de Migración y Naturalización a tomar todas las medidas pertinentes sobre aquellas personas que no cumplan con las leyes migratorias nacionales. También el referido Decreto Ley, específicamente en el artículo 65, señala que los extranjeros que permanezcan en el país después de la fecha del vencimiento de su visa o tarjeta de tránsito, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia. De igual manera el artículo 16 del mismo Decreto Ley, faculta a las autoridades migratorias a detener a cualquier extranjero que fuera sorprendido dentro del territorio Nacional, sin sus documentos en regla. Y el artículo 53 del referido Decreto Ley, autoriza la aprehensión de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional sin

ser residentes autorizados, a lo que la Corte sólo añade que tales detenciones han de efectuarse de conformidad con las formalidades legales y constitucionales consagradas en nuestro ordenamiento.

La detención de la señora **SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID** se ajusta a tales exigencias, por lo que se encuentra en espera de su deportación del territorio nacional y dar cumplimiento, así, a lo establecido en la Resolución N° 5675 del 22 del agosto de 1996.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de SILVIA MARTÍNEZ DE MADRID, y ordena que sea puesta nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALCIDES GUERRERO EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El detenido **CARLOS ALCIDES GUERRERO** presentó recurso de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, y el PLENO de la Corte Suprema de Justicia libró mandamiento de habeas corpus en cumplimiento de lo que dispone la Ley en estos casos. Al informar el Fiscal expresa que CARLOS ALCIDES GUERRERO, portador de la cédula de identidad personal 7-98-2296 está a órdenes del Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá (de turno).

En consecuencia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2602 del Código Judicial, la competencia le corresponde al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Por tanto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus interpuesta por el señor CARLOS ALCIDES GUERRERO, ante el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS,** ha presentado ante esta Superioridad Acción de Habeas Corpus a su favor, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 13 de septiembre de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus al funcionario respectivo, quien contestó señalando que sí es cierto que dicha Agencia de Instrucción ordenó la detención de **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS, mediante resolución motivada de 24 de julio de 1996, tal como consta a fojas 163-168 del expediente.**

Advierte el informe que los hechos que explican la detención preventiva del sindicado **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS,** se originaron a raíz de las declaraciones de **JULISSA DEL CARMEN GARCÍA,** lo que obligó a practicar una diligencia de allanamiento en casa de **CÓRDOBA HOYOS,** encontrándose siete barras rectangulares de color blanco, que resultaron ser cocaína.

Es oportuno indicar que el artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar la detención del imputado, previo cumplimiento de las formalidades previstas en dicho Código. El artículo 2159 de ese mismo cuerpo de leyes, a su vez, señala los requisitos que debe contener la diligencia de detención, so pena de nulidad. Valga entonces determinar si se han cumplido estas exigencias, a la luz del caudal probatorio que presentan las sumarias.

Un examen del expediente revela que el señor **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS,** ha sido detenido preventivamente en virtud de que existe vinculación entre el precitado y el hecho punible tipificado de manera genérica dentro del Capítulo V, Título VII, del Libro II, del Código Penal, bajo el título de delito **CONTRA LA SALUD PÚBLICA.** Trátase específicamente de tráfico de droga.

Los hechos se originaron a raíz de las detenciones de **LUZ MARÍA SÁNCHEZ CURIEL** y **JULISSA DEL CARMEN GARCÍA,** efectuadas por Inspectores de Aduana de la Zona Aeroportuaria, cuando intentaban transportar en forma oculta cierta cantidad de sustancia ilícita que se determinó era cocaína.

JULISSA DEL CARMEN GARCÍA, al ser sometida a los rigores de la indagatoria, manifestó que los artefactos dentro de los cuales iba oculta la sustancia ilícita se los entregaron en una casa que resultó ser la N° 16 de la urbanización Camino Real de Juan Díaz, donde luego se practicó una diligencia de allanamiento, lográndose la detención, entre otros, del sindicado **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS,** de nacionalidad colombiana, quien reside en dicho inmueble y es el beneficiado con esta acción de habeas corpus. En dicho operativo se incautaron siete (7) barras rectangulares de color blanco, que resultaron ser cocaína.

Es así que el cuerpo del delito está plenamente acreditado con los resultados que el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la P. T. J., brinda a fojas 224 y 228 del expediente, siendo el primero positivo para la determinación de cocaína en la cantidad de 9,015.00 gramos y heroína en 786.71 gramos; y el segundo para cocaína en la cantidad de 1,055.0 gramos.

La vinculación del recurrente con el hecho punible lo evidencian las declaraciones de **LUZ MARÍA RIVAS CURIEL (fs. 125-132), JULISSA DEL CARMEN GARCÍA (fs. 15-20, 109), CARLOS ZÚÑIGA (fs. 118-124)** y las del propio **ALFONSO CÓRDOBA HOYOS,** al admitir este último, tal como se aprecia en la declaración indagatoria a fojas 152 del expediente, lo siguiente:

> **"PREGUNTADO:** ¿Diga el indagado, por qué usted manifiesta no tener conocimiento del Microondas marca SHARP de color blanco que se le incautó en el aeropuerto a las ciudadanas **LUZ MARÍA SÁNCHEZ CURIEL y JULISSA DEL CARMEN GARCÍA**, si el señor **CARLOS ZÚÑIGA**, manifiesta que usted y él prepararon dicho Microondas con la sustancia ilícita en su interior?
>
> **CONTESTÓ:** Señor fiscal, yo dije anteriormente que no sabía nada del Microondas SHARP, color blanco que se incautó a las ciudadanas en el aeropuerto **porque tenía miedo** de que mi familia le pasara algo ya que ellos no tienen conocimiento de esto, **es verdad que yo con el señor CARLOS ZÚÑIGA, preparé el Microondas en mí casa con la droga en su interior pero nadie de mi familia tenía conocimiento de eso, ni mis hijas, ni mi esposa".**

Sabido es que la acción promovida no busca establecer si los detenidos son inocentes o culpables, por lo que el tribunal de habeas corpus no está destinado a hacer una valoración de la prueba que determina el grado de participación de los imputados. Sin embargo, el examen del material fáctico tiende a establecer que sí existen elementos suficientes para mantener la detención preventiva de **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS.**

En estas circunstancias resulta pertinente invocar el texto legal del artículo 2148 del Código Judicial, que ha dispuesto que la medida cautelar personal de detención preventiva sólo procede en aquellos casos en que el delito investigado tiene pena mínima de prisión de dos años, y en el caso sub-judicie la pena mínima es de cinco años, lo que demuestra que el delito excede la pena mínima fijada en la ley.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que la detención decretada contra el señor **ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS**, se ajusta a la formalidad que debe revestir la medida preventiva.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ALFONSO MARÍA CÓRDOBA HOYOS.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ AÑINO CONTRA LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, interpuso acción de habeas corpus a favor de JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ AÑINO contra la orden de detención girada por el Director de la Policía Técnica Judicial.

Antes de que esta Superioridad librara mandamiento de Habeas Corpus contra el funcionario demandado, el apoderado judicial del beneficiado con esta acción presentó desistimiento de la acción en referencia, ante la Secretaría General de la Corte el 2 de octubre de 1996, en los siguientes términos:

"Quien suscribe, Licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, de generales conocidas en autos, por este medio acudo ante su digno despacho, con la finalidad de ponerle en conocimiento que DESISTIMOS de la acción de Habeas Corpus que interpusiéramos a favor del señor JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ AÑINO.

Fundamento de derecho: Artículo 2565 y siguientes del Código Judicial."

En virtud de lo que dispone el artículo 1073 del Código Judicial en cuanto al derecho de desistir expresa o tácitamente de toda demanda, incidente o recurso, es perfectamente viable el desistimiento formulado en el presente negocio por el accionante.

Por todo lo antes expuesto la Corte Suprema Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Edilberto Vásquez A., en la acción de Habeas Corpus promovida a favor del señor JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ AÑINO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENEROSO CORONEL CARRERA EN CONTRA DE LA FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DROGAS DE COLÓN A CARGO DE AMINTA CORRO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al PLENO de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la acción de Habeas Corpus interpuesto por el Licdo. Cecilio Cedalise Riquelme en favor de **GENEROSO CORONEL CARRERA**, quien se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, en Colón, por orden de la Fiscal Delegada de Drogas de la Provincia de Colón, Licda. Aminta Corro, sindicado por el delito de Tráfico Internacional de Drogas.

Los antecedentes del caso revelan que el 12 de agosto del presente año, el Sr. **CORONEL CARRERA**, quien para esa fecha fungía como jefe de bodega de la empresa **SUDAMERICANA IMPORT, S. A.** -empresa de la Zona Libre de Colón-, como a las 12:30 p. m. recibió en dicha compañía al conductor de una camioneta color blanco, americana, quien llegó de parte del Sr. **SEVERO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ** -de la empresa **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MÁRQUEZ, S. A.**-, pidiéndole prestada una carretilla para trasladar aproximadamente 12 a 15 bultos de abanicos al contenedor que estaban cargando frente a la empresa MÁRQUEZ, por lo que le facilitó una mula hidráulica con una paleta.

Al recibir la Fiscalía Delegada de Drogas de Colón noticias de que estas anomalías que estaban llevando a cabo en el Puerto de Manzanillo, Contenedor Texu 440797, de 40 pies, enviada al exterior por la Cía. **IMPORT AND EXPORT MÁRQUEZ, S. A.**, decidió decretar mediante resolución de 13 de agosto, la práctica de la Diligencia de Allanamiento y Registro, tal como consta a foja 8 del expediente principal.

Dicha práctica se realizó ese día sobre el contenedor mencionado,

encontrándose 334 paquetes forrados con cintas adhesivas y plástico transparente, que presumiblemente contenían cocaína, en 15 cajetas de abanicos.

El expediente también permite conocer que existía una relación comercial previa entre la Sra. **ÁNGELA MARÍA MÁRQUEZ AVILÉS DE LEGUIAS** -quien funge como jefa de **GENEROSO CORONEL** en la empresa **SUDAMERICANA IMPORT, S. A.**- y **SEVERO RODRÍGUEZ**, porque ambos habían acordado anteriormente la exportación de mercancías.

Consideró el Licdo. Cedalise en su acción original que no se cumplía el tercer requisito de legalidad de la detención, contenido en el artículo 2159 del Código Judicial, y que estriba en que la orden de detención debe señalar las pruebas que vinculan al detenido con la comisión del ilícito.

Ello es así, porque el Sr. **CORONEL**, como jefe de bodega de **SUDAMERICANA IMPORT, S. A.**, era su deber revisar la documentación de la mercancía que se estibaba en dicha empresa, y no hacer el registro físico de la misma.

También afirmó que su defendido dio aviso inmediatamente a la gerencia de su empresa de la carencia de documentación relacionada con los abanicos, no presentados por el chofer de Panasonido, S. A., **RENÉ CUADRA SALAZAR**. Además, sostiene, la autorización de estibar la mercancía la dio **SEVERO RODRÍGUEZ** a la Sra. **ÁNGELA MÁRQUEZ** "quien no lo desautorizó por lo que la orden fue implícitamente dada o aceptada por ella."

Pero estas consideraciones fueron ignoradas -manifiesta el letrado- por la Fiscalía Delegada de Drogas de Colón, a cargo de la Licda. Aminta Corro.

Esgrimió el letrado como elemento de juicio a favor de **GENEROSO CORONEL**, las declaraciones de **WENCESLAO ARISPE LUZCANDO**, **JUAN OCALAGAN**, **ALCIBIADES RANGEL RIVERA**, quienes coincidieron en que el día de los hechos estaban presentes **SEVERO RODRÍGUEZ** y la Sra. **ÁNGELA MÁRQUEZ**; de dichos testimonios el Licdo. Cedalise deduce que lo afirmado por el detenido es la "verdad en su descriptiva y detallada deposición."

Por último, manifestó el Licdo. Cecilio Cedalise que -según la declaración de su defendido- la sospecha de que se preparaba una irregularidad podía ser un ilícito de naturaleza aduanera que no tenía la suficiente fuerza para justificar la revisión del contenido de una mercancía que le llegó para estibar, porque ello constituiría una "ligereza no permitida en su relación de trabajo."

El Segundo Tribunal Superior de Justicia emitió el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por la Fiscalía Delegada de Drogas de Colón, señalando principalmente:

1. Que era cierto que había detenido a **GENEROSO CORONEL CARRERA**, en virtud de providencia del 14 de agosto de 1996;

2. Que los fundamentos de hecho partieron de la Diligencia de Inspección Ocular, Registro y Decomiso practicada por dicha Agencia el 13 de agosto sobre el contenedor TEXU 440797 localizado en Manzanillo International Terminal, en el que se hallaron 334 paquetes forrados con cinta adhesiva y plástico transparente, con contenido presumible de cocaína, en virtud de prueba de campo realizada por agentes de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial.

Además, **CORONEL CARRERA** era el jefe de bodega y encargado de recibir y revisar los bultos o cajetas de mercancía, que eran enviados a **IMPORT & EXPORT MÁRQUEZ**, lugar donde se realiza la operación de carga y transporte de la mercancía que sería exportada, al momento de ser detectada por las autoridades del puerto.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en fallo del 17 de septiembre del año que decurre, luego de exponer un número plural de piezas procesales establecidas en el expediente, consideró legal la detención, toda vez que se verifica en la conducta del detenido, la tipificación de una de las modalidades

del Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el artículo 255 del Código Penal.

Consideró el a-quo, que contra el procesado opera su propia declaración indagatoria, "porque ofrece una confesión explicada, aceptando que era consciente de una actividad ilícita o irregular con respecto al contenedor, pero no sabía que era drogas y dice que guardó silencio por miedo, sin embargo, esos extremos no están comprobados y, también está demostrado que desempeñaba los servicios de jefe de la bodega, debía recibir y entregar mercancía, firmar los documentos."

Estimó el Segundo Tribunal Superior probada la existencia del hecho punible a través de los medios probatorios establecidos en el artículo 2073 del Código Judicial, que constan graves indicios de responsabilidad penal contra el beneficiario de la presente acción, de estar vinculado al hecho punible, considerando que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En tiempo oportuno presentó el Licdo. Cedalise Riquelme recurso de apelación ante esta Colegiatura, fundamentándolo en que el a-quo calificó indebidamente de confesión, "... la detallada y descriptiva declaración indagatoria ..." que rindió su defendido.

Disiente de dicha calificación, por cuanto la declaración en comento contenía indicaciones precisas de lo ocurrido el día de los hechos, resaltando que anteriormente se habían dado situaciones similares, pero sin admitir ni reconocer que hubiera participado en los actos preparatorios o de ejecución del delito a él imputado.

Resalta el accionante que **CORONEL CARRERA** sólo tenía la obligación laboral de revisar la documentación de la mercancía a estibar; además, él no introdujo las cajas en el contenedor.

Por ello, no puede considerarse la declaración del detenido como una "confesión simple o calificada", porque no ha reconocido su participación en el hecho punible, por lo que no hay elemento vinculante en este caso, contra **GENEROSO CORONEL CARRERA**.

Luego de examinado el caso, considera esta Corporación de Justicia que la legalidad de la detención del sindicado depende básicamente de la declaración del reo.

Opera contra el inculpado, la sospecha de que algo ocurría, cuando en su propia declaración manifestó que anteriormente **SEVERO RODRÍGUEZ** le había hecho comentarios como "TU TIENES FAMILIA", "¿COMO LA ESTÁN PASANDO?", "¿CUANTOS HIJOS TIENES?", "CUÍDALAS QUE ESO ES EL FUTURO DE UNO".

También le hizo **RODRÍGUEZ** comentarios como "ACUÉRDATE SOBRE LO QUE HABLAMOS LA VEZ PASADA DE TU FAMILIA", "RECUERDA A TUS NIÑAS", "RECUERDA QUE ESO VALE MUCHO PARA TI" y "QUE TENÍA QUE DEJAR SUBIR TODOS LOS BULTOS", aunque en ningún momento le dijo que llevaba drogas, ni esa vez ni las anteriores.

Entonces la raíz del asunto está en que la declaración de **GENEROSO CORONEL** sí lo inculpa del delito que se le acusa, máxime que recordó que **SEVERO RODRÍGUEZ** le dijo que "TENÍA QUE DEJAR SUBIR TODOS LOS BULTOS".

No prospera la tesis esgrimida por el abogado defensor, toda vez que si bien como él sostiene, la declaración de **GENEROSO CORONEL CARRERA** no constituye una confesión, la misma contiene elementos que incriminan al precitado, como los ya expuestos comentarios que le hizo **SEVERO RODRÍGUEZ**, que hacen suponer su conocimiento de lo que estaba pasando.

Por consiguiente, considera la Corte que sí se cumple el supuesto del numeral 3° del artículo 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la LEY, CONFIRMA el fallo del 17 de

septiembre de 1996, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y pone a GENEROSO CORONEL CARRERA a órdenes de la Fiscalía Delegada de Drogas de Colón y San Blas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ MOSQUERA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Humberto Mosquera interpuso verbalmente acción de Habeas Corpus en favor de **LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ MOSQUERA**, contra el Jefe de la Policía Técnica Judicial de Juan Díaz, que fue acogida por la Juez Cuarta Municipal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, quien libró el mandamiento de Habeas Corpus contra la mencionada autoridad.

El Jefe de la Agencia de la Policía Técnica Judicial de Juan Díaz, Inspector I, Jorge E. Castillo V. contestó el mismo afirmando que no ordenó la detención de **MARTÍNEZ MOSQUERA**; por ello no había fundamento de hecho, y que el detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República; también manifestó la autoridad requerida que **MARTÍNEZ MOSQUERA** estaba relacionado con tres delitos distintos.

Como consecuencia, la Licda. María de Lourdes Estrada Villar, Juez Cuarta Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, dictó el auto N° 5 del 27 de agosto de 1996, en el que se inhibió de conocer el caso y lo remitió al PLENO de esta Corporación de Justicia arguyendo falta de competencia, basado en el artículo 2588 del Código Judicial.

Recibida la acción en la Secretaría General de la Corte Suprema, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo inicialmente al Director de la Policía Técnica Judicial, quien al señalar que **MARTÍNEZ MOSQUERA** estaba a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, enderezó la solicitud de informe a esa autoridad.

En consecuencia, el Señor Fiscal Auxiliar, Licdo. Carlos Augusto Herrera respondió, en primer lugar, que remitió el expediente a la Fiscalía Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 12693 del 27 de agosto del presente año y, en segundo lugar, que mediante Nota N° 12692, dirigida a la Policía Técnica Judicial, dejó sin efecto la aprehensión de **LUIS MARTÍNEZ**.

La finalidad de la acción de Habeas Corpus es la de examinar la legalidad de la detención de los individuos, con la finalidad de ordenar su inmediata libertad en caso de que la misma no se haya efectuado mediante el cumplimiento de los requisitos legales, con independencia del estado procesal del caso por el cual está la persona detenida.

Se advierte que la Nota N° 12692 que le dirigió la Fiscalía Auxiliar de la República a la Policía Técnica Judicial, donde estaba detenido el prenombrado **MARTÍNEZ**, dejó sin efecto su detención.

Por consiguiente, al desaparecer el motivo de la presente acción, se verifica el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, motivo por el cual carece de objeto continuar el presente negocio.

En mérito de lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que en el presente negocio ha operado el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, por lo que ORDENA EL CESE de todo procedimiento dentro de la presente acción de Habeas Corpus y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN MANUEL SCOTT EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se ha recibido la apelación presentada por el licenciado MODESTO E. BROWN F., contra la sentencia dictada por esa Corporación el 5 de septiembre de 1996, mediante la cual se declara legal la detención decretada por el Fiscal Cuarto de Circuito de Colón contra JUAN MANUEL SCOTT, dentro del sumario que se le instruye por el delito de robo en perjuicio de la Estación de Combustible Nuevo San Cristóbal.

En la sentencia apelada se indica que existen suficientes elementos para mantener la detención preventiva de JUAN MANUEL SCOTT sindicado por el delito de robo.

El Tribunal Superior en parte del fallo manifiesta:
"...
Aun cuando el defensor técnico del señor JUAN MANUEL SCOTT (a) CHOCHO hace un extraordinario esfuerzo en la defensa de su representado, ensayando una tesis de que no constan indicios de responsabilidad penal contra SCOTT, ese argumento es inadmisible porque contra el señor JUAN MANUEL SCOTT declara MAURICIO ALLEN JOHN, quien lo ubica en el teatro de los acontecimientos y en las etapas previas a la comisión del hecho punible e incluso en ampliación de su declaración visible a fojas 65, dice que a CHOCHO le tocaron B/.15.00 en la comisión del hecho, además los miembros de la policía que le aprehendieron, señores Carlos Pimentel y Alejo Prado, concuerdan en que MAURICIO ALLEN JOHN (a) VARÓN los llevó al lugar donde se encontraba SCOTT, a quien señalan como partícipe del hecho punible.

Siendo ello así, es incuestionable que han concurrido los presupuestos legales exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para sustentar la detención preventiva cuestionada, porque en el proceso esta acreditada tanto la existencia y propiedad del dinero robado, como la comisión del hecho punible, a través de los medios probatorios idóneos permitidos por los artículos 2073 y 2090 ordinal, 8° del Código Judicial. En otro extremo constan elementos probatorios demostrativos de que el señor JUAN MANUEL SCOTT (a) CHOCHO participó en el programa del hecho punible y fue a

> la materialización del mismo e incluso recibió dinero, además el proceso es conducido por autoridad competente y el delito imputado permite aplicar la detención preventiva. Al procesado le han garantizado el debido proceso legal y es asistido por un abogado defensor. ...".

El proponente del habeas corpus indica que la participación de JUAN MANUEL SCOTT en el hecho punible que se le imputa, no ha sido suficientemente acreditada dentro del expediente, por lo que debe ser declarada su libertad inmediata.

Procede el Pleno a resolver el presente proceso constitucional, confrontando los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, que establecen los presupuestos legales que deben concurrir para considerar fundamentada la detención preventiva del individuo.

En primer término, resulta evidente que el delito del cual se acusa al favorecido con la acción de habeas corpus, conlleva pena superior a dos (2) años de prisión; y es así, ya que según se desprende de las investigaciones, los sospechosos, planean el asalto, lo perpetran, y se reparten el botín, de acuerdo al trabajo realizado por cada uno en el robo.

De conformidad con lo normado por el artículo 2159 del Código Judicial, la detención fue dictada por funcionario competente mediante resolución motivada, en que se expresa el hecho punible, los elementos que demuestran su existencia y las pruebas que existen contra JUAN MANUEL SCOTT (a) CHOCHO.

La Corte coincide pues, plenamente con lo planteado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y en este caso concurren las exigencias preliminares que hacen procedente la detención del favorecido con esta acción de habeas corpus. Por ello, hasta el momento se justifica la detención del prenombrado JUAN MANUEL SCOTT (a) CHOCHO, sin perjuicio de que posteriormente pueda cambiar su situación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 5 de septiembre de 1996, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta por JUAN MANUEL SCOTT (a) CHOCHO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor DIDIO POTES TRONCOSO ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del ciudadano dominicano **MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA**, quien se encuentra detenido desde el día 7 de septiembre de 1996 a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Acogida la presente acción, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra el aludido funcionario quien, mediante Oficio de 20 de septiembre de 1996, rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

"a) El señor MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA, de nacionalidad dominicana, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional del Área D, el día 8 de septiembre de 1996 y remitido a esta Dirección mediante nota con fecha 8 de septiembre de 1996. Posteriormente, se procedió a emitir la orden de detención contra el mencionado señor, mediante Resolución N° DNMSI-0051, del 8 de septiembre de 1996 por encontrarse indocumentado.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:

PRIMERO: Que el día 8 de septiembre de 1996, unidades de la Policía Nacional del Área D en un Operativo de Profilaxis Social, detuvo al señor MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA, de nacionalidad dominicana; ya que el mismo no portaba documentación que acreditase su residencia legal en el país.

SEGUNDO: ... Se pudo comprobar entonces, que de acuerdo a nuestros archivos, desde su llegada al país en enero de 1995, dicho señor no se había apersonado a nuestra Dirección con la intención de legalizar su situación migratoria.

TERCERO: Que debido a ello, se procedió a emitir orden de deportación en contra del señor MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA, de nacionalidad dominicana, mediante Resolución N° 6179 del 10 de septiembre de 1996, la cual le fue debidamente notificada.

CUARTO: Que haciendo uso del derecho que le otorga el Artículo 86 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, el señor MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA, de nacionalidad dominicana, por medio del licenciado Tomás A. González F., presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio, el cual le fue negado mediante Resolución #6451 del 19 de septiembre de 1996.

QUINTO: Que en estos momentos dicho Recurso se encuentra para ser notificado al afectado y así poder remitir el expediente al Ministerio de Gobierno y Justicia, a fin de que sea resuelto el Recurso de Apelación.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 65, 85 y 86, ...". (Fs. 4-5).

Adjunto al informe de conducta, el Director Nacional de Migración envió copia de la Filiación en el Registro de Inmigrantes de **MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA**; copia de la nota de la Policía Nacional de 8 de septiembre, a través de la cual lo remiten a Migración; copia del informativo que en las Oficinas de Migración rindiera **RAMÍREZ PANIAGUA**; copia de la Resolución N° DNMYN 6179 de 10 de septiembre de 1996, mediante la cual dicha Dirección ordena la deportación de este ciudadano dominicano; copia de la Resolución N° 6451 DMYN de 19 de septiembre de 1996, que resuelve el recurso de reconsideración que se interpuso a favor de **MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA**. El funcionario acusado no envió copia de la orden de detención a que hizo alusión en su informe de conducta, por ello, el sustanciador solicitó dicho documento en el Oficio N° 1584 de 25 de septiembre de 1996. Mediante Oficio del 27 de septiembre de 1996, el Director de Migración manifestó que por "error involuntario" no incluyó la orden de detención y anexó copia de la misma, que descansa en el cuadernillo de habeas corpus.

Del contenido del informe anteriormente transcrito se colige que la detención corporal de la persona favorecida con el mandamiento de habeas corpus obedece a que fue aprehendido sin portar documentos que acreditaran su permanencia legal en el país.

La Ley 16 de 30 de junio de 1960, modificada por el Decreto-Ley N° 13 de 1965 y la Ley N° 6 de 1980, que reglamenta la materia migratoria, indica en su artículo 60 lo siguiente:

> "Los funcionarios de Migración tendrán facultad para aprehender a cualquier extranjero que en su presencia o a su vista pretenda ingresar la territorio de la República violando los preceptos del presente Decreto Ley o **que fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal, residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales** ...". (El resaltado es nuestro).

MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA se encuentra detenido en espera de que se de cumplimiento a la orden de deportación proferida mediante la Resolución N° 6179 del 10 de septiembre de 1996. Dicha Resolución se basa en que desde el mes de enero de 1995, fecha en que ingresó a nuestro país, no posee documentos ni realizó en ningún momento los trámites necesarios para obtenerlos y así legalizar su permanencia.

La orden de deportación encuentra su fundamento en los artículos 36, 65, 80, 85 y 86 de la Ley 16 de 30 de junio de 1960. Dicha Resolución fue debidamente notificada al afectado, quien, en efecto, ha hecho uso de su derecho de interponer los recursos que consagra la ley; reconsideración, y apelación en subsidio, éste último que se encuentra pendiente de resolver en el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Esta Corporación, en consecuencia, vistas las anteriores circunstancias, estima que **MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA** ha sido detenido por autoridad competente y de acuerdo con los trámites de la ley; pues, resulta evidente que a la luz de las normativas que regulan la Migración en nuestro país, el Director Nacional de Migración y Naturalización está facultado para aprehender a cualquier extranjero que permanezca en el territorio nacional en violación de los preceptos legales que rigen la materia, como ya hemos visto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del ciudadano dominicano MANOLO RAMÍREZ PANIAGUA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE MANUEL HIPÓLITO TULIO PINEDA Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, CON SEDE EN ANCÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Reyes Martínez N. ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Manuel Hipólito Tulio Pineda y contra el Director de la Policía Técnica Judicial, con sede en Ancón.

Observa el Pleno que encontrándose en estado de resolver la acción de habeas corpus que nos ocupa, el señor Reyes Martínez N. presentó el día 26 de

septiembre de 1996, escrito mediante el cual desiste de la acción interpuesta. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta por el señor Reyes Martínez N. a favor de Manuel Hipólito Tulio Pineda y contra el Director de la Policía Técnica Judicial, con sede en Ancón.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO ALBERTO CEDEÑO FALCÓN CONTRA LA SECRETARIA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **SERGIO ALBERTO CEDEÑO FALCÓN** presentó en su propio nombre, acción de habeas corpus contra la Agencia Regional de Drogas de las Provincias de Herrera y Los Santos.

Esta Corporación advierte de inmediato que esa Agencia del Ministerio Público tiene mando y jurisdicción en dos provincias, de allí que la competencia para conocer de este caso radica en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2602, numeral 1 del Código Judicial, por lo que, en virtud de dicha norma, procedemos a resolver la presente demanda de habeas corpus.

Por admitida esta iniciativa constitucional, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus. El funcionario acusado contestó mediante oficio fechado 19 de septiembre de 1996. En su informe admite haber ordenado la detención de **CEDEÑO FALCÓN**, mediante resolución calendada 9 de septiembre de 1996, y detalla los fundamentos de hecho y derecho que motivan la medida restrictiva de la libertad.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de **Cedeño Falcón**, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delito contra la salud pública, concretamente tráfico de sustancias ilícitas, que lleva aparejado pena mínima de 5 años de prisión, según lo preceptuado por el artículo 258 del Código Penal.

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **CEDEÑO FALCÓN** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o, si por lo contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigenciaslegales correspondientes.

En las sumarias, a fojas 10-12 del expediente, consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, el Informe del Operativo de Compra Controlada de Droga, realizado en el Jardín 19 de octubre (El Patio) ubicado en el Paseo E. Gensier de Chitré. Al momento de la aprehensión de **CEDEÑO FALCÓN**, se le encontró entre sus pertenencias los billetes con serie F-87495142-B, G-42534946-C Y G-40467223-C, los cuales habían sido marcados por la Secretaría de Drogas para la compra controlada. Dicho dinero formaba parte de los cinco balboas que había autorizado la Fiscalía para el respectivo operativo.

Aunado a lo anterior consta en el proceso referido la declaración indagatoria rendida por el señor **NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA**, quien de manera directa formuló cargos por venta de drogas al precitado **CEDEÑO FALCÓN**, los cuales ratificó en posterior declaración jurada. (V. fs. 23-28 del expediente principal).

También consta a folio 13 de del cuaderno original la diligencia de prueba de campo efectuada a la sustancia producto de la compra controlada en mención, la cual dio resultados positivos para la determinación de Cocaína.

Este Tribunal Colegiado conceptúa que de las piezas probatorias que reposan en el expediente se desprenden indicios de presencia y oportunidad que vinculan al señor **CEDEÑO FALCÓN**, con la venta de sustancia ilícita, hecho punible que amerita la detención preventiva del imputado en este caso. Tanto es así que se encontró en poder del imputado el dinero que había marcado la Fiscalía de Droga, dinero éste que debía entregar el agente encubierto al sujeto que le vendiera la droga.

La presencia de estos elementos justifican, al menos en esta etapa de la investigación, la medida de detención preventiva ordenada contra el prenombrado, por tratarse de elementos que pueden perfectamente ser indicativos de la práctica de venta y traspaso de sustancia ilícita.

Se concluye del examen minucioso de las piezas que componen la encuesta penal en estudio que la detención del señor CEDEÑO FALCÓN se ajusta a las formalidades constitucionales y legales que regulan la medida cautelar personal al haberse comprobado:

1. la existencia del hecho punible: pues se produce el hallazgo del dinero marcado para el operativo en poder del señor **CEDEÑO FALCÓN;**

2. la vinculación del imputado con el hecho punible: según los reportes e informes policiales que reposan en el cuaderno sumarial, es irrefutable que el imputado fue detenido portando el dinero en las condiciones antes expuestas, y pesan sobre el mismo los señalamientos específicos de la venta de la droga, circunstancias recogida en los informes policiales y en las declaraciones de **NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA** a fojas 25-27.

Nada impide, sin embargo, que durante el transcurso de la investigación sumarial surjan nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, pero tal calificación corresponderá al Tribunal de la causa, toda vez que en esta instancia sólo corresponde a esta Superioridad examinar si la detención preventiva se ajusta a las formalidades legales establecidas, circunstancia que efectivamente acontece en este caso.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de SERGIO ALBERTO CEDEÑO FALCÓN, y dispone que se sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Regional de Drogas de las Provincias de Herrera y Los Santos.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NAYARITH AYDEE GUERRA ALLEYNE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **REYNALDO ROJAS** ha interpuesto acción de **Habeas Corpus** a favor de **NAYARITH GUERRA** contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus el funcionario demandado contestó mediante oficio que corre de fojas 6 a 11 de este expediente, expresando que sí ordenó la detención preventiva de **NAYARITH AYDEE GUERRA ALLEYNE** en forma escrita, a través de providencia fechada 4 de julio de 1996. Asimismo, hace un recuento de los fundamentos de hecho y de derecho que lo motivaron a dictar dicha resolución.

El Pleno de la Corte ha podido verificar lo indicado por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Drogas sobre la detención que ordenara contra la favorecida con esta acción constitucional, por lo que es compartida la conclusión arribada sobre la legalidad de la medida adoptada.

En tal sentido, se observa en los antecedentes enviados por la acusada dependencia del Ministerio Público la resolución motivada que decreta la detención preventiva (fs. 22 a 24). En la misma se relata que la detención de **NAYARITH GUERRA ALLEYNE**, al igual que la del menor **JOSÉ IVÁN AGUILAR ALLEYNE**, fue realizada por Unidades de la Policía, por la supuesta conducta ilícita enmarcada de manera genérica entre los delitos contra la SALUD PUBLICA (Capítulo V, Título VII, Libro II del Código Penal).

Entre los hechos que motivaron la detención se tiene el informe de novedad de los agentes captores, en el cual relatan que, durante el recorrido rutinario que realizaban en Avenida Ancón, Patio Pinel, al visualizar a personas en actitud sospechosa procedieron a registrarlas, encontrándole al menor JOSÉ IVÁN AGUILAR ALLEYNE de 13 años, 18 sustancias compactas de color crema, que posteriormente se comprobó era droga (piedra o crack), y a **NAYARITH HAYDEE GUERRA ALLEYNE** se le encontró la cantidad de B/.169.65 dólares en efectivo, divididos en 94 billetes de un dolar, 4 billetes de cinco dólares y el resto en monedas de distintas denominaciones.

El menor de edad informó a los agentes que la droga se la había entregado la joven **NAYARITH**, quien es su prima. Esta, por su parte, señaló que el dinero le pertenecía a una vecina y que en ningún momento había entregado la droga al menor.

El funcionario de instrucción consideró que, como a la sindicada se le encontró la aludida cantidad de dinero en forma fraccionada y en billetes de baja denominación, ello hacía presumir que esa suma era producto del ilícito investigado; lo que sumado al señalamiento que en su contra manifestó el menor de edad, más el informe de los agentes de la policía y el resultado de la prueba de campo de las sustancias incautadas, permite concluir que existen elementos de presencia y oportunidad que vinculan a la detenida con el delito contra la Salud Pública ante el cual nos encontramos.

Por lo que se deja expuesto, a juicio de esta Corporación la detención preventiva de la prenombrada NAYARITH GUERRA, hasta el momento, está legalmente fundamentada, tal como cita el Fiscal de Drogas, en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de NAYARITH HAYDEE GUERRA ALLEYNE y, DISPONE que sea puesta nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JOSÉ OLMEDO GARCÉS CONTRA EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MARINA MORALES SOTO** ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del ciudadano colombiano **JOSÉ OLMEDO GARCÉS**, contra el Director de Migración y Naturalización.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado procedió a rendir informe sobre los puntos requeridos por esta Corporación, en los siguientes términos:

> "a) El señor JOSÉ OLMEDO GÁRCES MURILLO, de nacionalidad colombiana, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional del Área D y remitido a esta Institución mediante nota del 29 de septiembre de 1996 (sic). Posteriormente, se procedió a emitir la orden de Detención N° DNMI-0030 del 29 de agosto de 1996, por indocumentado.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:
>
> PRIMERO: Que el día 29 de agosto de 1996, unidades de la Policía Nacional del Área D, procedieron a aprehender al señor JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO, de nacionalidad colombiana, ya que el mismo no portaba documentos que acreditasen su residencia legal en el país.
>
> SEGUNDO: Que posteriormente, dicho ciudadano fue remitido a esta dirección, para que fuera verificado su status migratorio, pudiendo comprobarse que de acuerdo a nuestros archivos, desde su llegada en junio de 1994, el señor JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO, de nacionalidad colombiana, no ha tenido la intención de apersonarse a esta Institución a legalizar su situación migratoria.
>
> TERCERO: Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se procedió a confeccionar el Resuelto N° 5991 del 3 de septiembre de 1996 por medio del cual se ordena la deportación de dicho sujeto del territorio nacional por indocumentado.
>
> CUARTO: Que posteriormente y haciendo uso del derecho que le asiste el Artículo 86 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, el señor JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO, de nacionalidad colombiana, a través de su apoderado legal, la licenciada Marina Morales, presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio, en contra de la Resolución anteriormente mencionada. Dicho recurso fue negado

mediante Resolución N° 6268 del 13 de septiembre de 1996 y dicho expediente está por ser enviado al Ministerio de Gobierno y Justicia, para que el mismo resuelva el concebido recurso de Apelación.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65, 85 y 86, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: ...
ARTÍCULO 65: ...
ARTÍCULO 85: ...
ARTÍCULO 86: ...
...
c) El señor JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO, de nacionalidad colombiana, se encuentra a nuestras órdenes para ser deportado del territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones N° 5991 del 3 de septiembre de 1996 y 6268 del 13 de septiembre de 1996, una vez sea resuelto la acción de habeas corpus interpuesta en nuestra contra y el Recurso de Apelación.

Por imperio de la Ley, ponemos a órdenes de la Suprema Corte, al señor JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO.
Atentamente,

(fdo.)
LCDO. GERMÁN G. SÁNCHEZ T.
DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN
Y NATURALIZACIÓN"

Con el informe transcrito el Director de Migración aportó la documentación que demuestra lo expresado, entre la que se encuentra copia de la orden de detención (fs. 11), fundamentada en que el ciudadano colombiano no portaba documentos que acreditaran su permanencia en el país (arts. 60 y 62 de la Ley 16 del 30 de junio de 1960). Igualmente, figura copia de la resolución mediante la cual se ordena su deportación (fs. 13), en base al hecho de haber sido detenido por unidades de la Policía Nacional Área "D", Parque Lefevre y no portar documentos que acrediten su residencia legal en el país.

Tal como lo ha sostenido el Pleno de esta Corporación de Justicia, la adopción de una medida cautelar de carácter personal que limite o restrinja la libertad ambulatoria de las personas, debe estar debidamente sustentada. Por tanto, en este caso, la detención del ciudadano colombiano es legal, pues fue ordenada mediante resolución escrita, por la autoridad correspondiente y al tenor de las formalidades que establece la ley.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, la detención de JOSÉ OLMEDO GARCÉS MURILLO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RODNEY MANRIQUE CASTILLO Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Reyes Martínez Navarro ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **RODNEY MANRIQUE CASTILLO**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió que el beneficiario de la presente acción constitucional se encontraba a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

En consecuencia, se libró mandamiento contra el Fiscal Auxiliar quien, a su vez, respondió que el expediente contentivo de las sumarias que se adelantan contra el señor RODNEY MANRIQUE CASTILLO se había remitido a la Fiscalía Cuarta del Circuito de Panamá. Igualmente, señaló que había ordenado dejar sin efecto la aprehensión del señor CASTILLO, mediante Oficio N° 14867 de 2 de octubre de 1996, dirigido a la Policía Técnica Judicial.

Del informe rendido por el Fiscal Auxiliar se colige que debe ordenarse el cese de la presente acción de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial, en virtud de que su beneficiario ha recuperado la libertad.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, ORDENA el cese del procedimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor RODNEY MANRIQUE CASTILLO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDISON GÓMEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Donatilo Ballesteros presentó ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de EDISON GÓMEZ y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, donde explica que la detención de Gómez fue decretada mediante resolución de 13 de agosto del año en curso, indicando las circunstancias de hecho y de derecho que dieron lugar a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Gómez, la orden

de detención se fundamenta en la presunta comisión de delito contra la salud pública, concretamente el de tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la incautación, durante una operación de compra simulada de sustancias ilícitas realizada por unidades de la Policía Técnica Judicial, de una bolsa color blanco que contenía 10 paquetes forrados con cinta adhesiva, contentivos de una sustancia en forma de polvo. Sometida la referida sustancia a la prueba técnica de rigor, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA** en la cantidad de **9,895 gramos** (f. 91, cuaderno de antecedentes).

En relación a la vinculación del imputado con el ilícito investigado, afirma el funcionario de instrucción en la resolución atacada que "se tienen fuertes indicios de que la droga incautada salió del apartamento donde el mismo fue capturado" (f. 70, sumarias). En respaldo de esta afirmación, consta en el expediente informe de los agentes captores, visible de fojas 5 a 7 del cuaderno de antecedentes, en el que se da cuenta de que Worman Regino Moreno Asprilla, sujeto que pretendía vender la droga al intermediario de los agentes de investigación, ingresó al edificio Torre 200, ubicado en Vía Fernández de Córdoba, Vista Hermosa, "retornando luego de unos 3 minutos con una bolsa de color blanco de regular tamaño" (f. 6, antecedentes). El propio Gómez acepta su presencia en el apartamento y corrobora el ingreso de Moreno Asprilla al mencionado inmueble, cuando manifiesta que:

> "El día viernes nueve (9) en la tarde me llamó REGINO al cual conozco por NENE ... y me dijo que fuera al apartamento ubicado en Vista Hermosa, no sé el nombre del edificio, apartamento N° 3E, llegué a las siete de la noche, estaba REGINO solo, me quedé en el apartamento durmiendo ya que tenía que esperar al señor que venía o que iba a llamar, como a las seis de la mañana REGINO bajó, subió nuevamente y tocó el timbre porque se le había (sic) quedado las llaves, y se retiró y no vino más hasta que llegaron los agentes de la policía" (f. 52, sumarias, subraya la Corte).

A juicio de la Corte, lo anterior es indicativo de que pesa sobre el detenido la grave circunstancia de presencia y oportunidad, como indicios de naturaleza a justificar la medida cautelar tomada en su contra, sobre todo en delito de la naturaleza del investigado.

Como quiera que la resolución que decreta la detención preventiva de Gómez, de 13 de agosto de 1996, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, corresponde resolver de conformidad.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Edison Gómez y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, INTERPUESTA POR MARVIN MAURO SALAZAR HINES, CONTRA LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante oficio N° 3753-S de 27 de septiembre de 1996, el Secretario encargado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, hizo llegar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el manuscrito que obra de fojas 1 a 3 de este cuaderno, mediante el cual el señor **MARVIN M. SALAZAR HINES**, detenido preventivamente en la Cárcel Modelo, con motivo de las sumarias que se adelantan en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, por el delito de homicidio de **DAVID MARTÍN RODRÍGUEZ ESQUINA.**

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el Fiscal Cuarto Superior dio respuesta al mismo mediante oficio N° 3198 de 2 de octubre de 1996, al que adjunta copia auténtica de varios documentos, entre ellos, el protocolo de necropsia de David Martín Rodríguez Esquina, la resolución de 3 de marzo de 1996, mediante la cual ordena la detención del accionante y dispone que se le reciba declaración indagatoria, al igual que tres diligencias en las que la Fiscalía le recibe dicha declaración a Marvin Mauro Salazar Hines.

Según el escrito presentado se objeta la vinculación que le hace la Fiscalía al hecho investigado, pues estima que hay un manejo irregular del expediente porque su detención se registra ocho meses después de ocurrido el homicidio investigado, a base de una huella dactilar que se capta en el automóvil que se utilizó para trasladar a los autores de la muerte del agente de la policía Rodríguez Esquina, hecho ocurrido el 4 de junio de 1995 en la ciudad de Colón. Añade que a pesar del tiempo transcurrido, no se le ha participado de ninguna diligencia judicial, como sería la de reconocimiento del automóvil, careo o reconstrucción.

Del informe recibido se deduce que la detención de Salazar Hines no sólo se fundamenta en la identificación de su huella en el auto, sino también en varios testimonios que lo ubican en el lugar de los hechos, tales como los de Yajaira Isabel Fuentes Wong (fs. 23-26), Clariza Elizabeth Stoute Morales (fs. 27-34), los cuales se relacionan con el informe policial que lo identifica como una de las personas que abordó un taxi con posterioridad al homicidio investigado y cuya actitud sospechosa dio lugar a que el taxista los condujera a una estación de la policía.

Si bien es cierto que en los casos de homicidio doloso, la fase instructoria excede los términos fijados por la ley procesal, el volumen de casos, sumado a otras dificultades, como la dilatada cooperación institucional y de la comunidad para concurrir como testigos, convierte este tipo de investigaciones en prolongados procesos.

Las fallas anotadas por el detenido no son materia de una acción de habeas corpus, ni de un amparo de garantías constitucionales, como aparece en su escrito, sino de una queja ante el agente del Ministerio Público responsable de la investigación, en primera instancia, y ante su superior jerárquico, subsidiariamente.

Respecto a la legalidad de la detención, basada en indicios graves de vinculación a un delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de un agente del orden público, no se advierten omisiones, irregularidades o excesos que afecten la competencia o las formalidades que deben concurrir en toda medida cautelar personal privativa de la libertad.

El Pleno anota que todos los servidores judiciales, al igual que el personal del Ministerio Público que integra el sistema de administración de justicia en Panamá, estamos obligados y empeñados en imprimir a todos los casos la celeridad necesaria, más aún en los procesos donde hay personas afectadas por medidas cautelares de detención preventiva, para procurar dentro de las limitaciones materiales y de recursos personales técnicos suficientes, el ideal de justicia pronta y cumplida.

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de MARVIN MAURO SALAZAR HINES decretada por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la investigación penal seguida con motivo del homicidio de DAVID MARTÍN RODRÍGUEZ ESQUINA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMEHLED ANTONIO APOLAYO (A) "BEBYGRON" CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Amehled Antonio Apolayo, (a) "Bebygron ó Beby" ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial quien, mediante Oficio N° 963 de 26 de septiembre de 1996, rindió el siguiente informe:

> "1. Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor AMELET (SIC) ANTONIO APOLAYO RIVAS, mediante la resolución calendada veinte (20) de septiembre de este año, por encontrarse imputado por la supuesta comisión de Delitos Contra la Salud Pública (droga), dicha resolución se encuentra visible de fojas 114 a 119 del proceso principal.
>
> 2. Los motivos de hecho que dieron origen a la privación preventiva de la libertad al señor Apolayo Rivas tiene su fundamento en la investigación que al mismo y otros se le sigue ante esta Agencia del Ministerio Público por la comisión de Delitos Contra la Salud Pública (droga).
>
> El inicio de la investigación correspondiente se debió a una gran cantidad de información que a nivel confidencial recolectaron las Agencias de las Policías Técnicas (sic) Judiciales y Zonas de Policias (sic) (Sub-DIIP) del área con respecto a la asociación para la venta y distribución de drogas en La Villa de Los Santos por parte de los señores RICARDO, ELIÉCER, CARLOS y JOSÉ ISABEL GARRIDO, AMELET (sic) Y ALEXANDER APOLAYO, OMAR SAUCEDO, ADRIAN QUINTERO, ERICK QUICTON GARRIDO, LEONEC BAZAN y unos sujetos conocidos como JAQUELINE LA MULA Y TELETON, dejamos constancia que en (sic) fase inicial de la investigación de la mayoría de estos señores sólo se conocían sus apodos.
>
> En vista de esta situación se procedió a montar un operativo encubierta (sic) de compra controlada de drogas el cual resultó positivo para detectar y posteriormente encontrar droga ilícita así como para la captura del señor ELIECER GARRIDO quien fué (sic) señalado como el vendedor en este operativo y de los señores Carlos Garrido, Ricardo Garrido y Amelet Antonio Apolayo quienes posterior

a la operación llegaron al lugar del hecho tal cual se detalla en las diligencias de folios 9 a 27.

Continuando con el curso de las investigaciones la Policía Tecnica (sic) Judicial (PTJ) de Los Santos y P. T. J. de Las Tablas, remitieron todos y cada uno de los informes de seguimiento que tienen relación con el presente caso y entre ellos existen (sic) información obtenida, vigilancia y ubicación de las personas y lugares de la venta de drogas, apareciendo el apodo de Bebygron o Beby.

Debe destacar la Fiscalía que de folios 69 a 72 existe el informe de inteligencia suscrito por el Inspector Cristóbal Herrera y el detective Manuel Reyes en donde señalan que uno de los componentes de la organización que dirigían los hermanos Garrido era el señor Amelet Apolayo quien prestaba un auxilio para la comisión del hecho delictivo.

También debe destacarse la declaración jurada rendida por el señor JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA de fojas 42 a 47 del proceso principal en donde indica que el sujeto Bebygron era uno de los que aportaba dinero para comprar droga conjuntamente con los hermanos Garrido para su posterior venta.

Tambié (sic), consta en la investigación el informe de análisis de documentos de fojas 84 a 87 en donde se detalla que en los documentos encontrados en la diligencia de allanamiento efectuada en la residencia de los hermanos Garrido existía suscrito en los mismos la contabilidad de la organización y en los documentos de foja 89 aparece el apodo de Beby que es Amelet Apolayo, en lo que indica la P. T. J. era la cantidad de pases que al mismo le correspondía. Por último debemos destacar el informe de relación suscrito por el Detective Secundino Ávila de la Organización Regional Anti-drogas, en donde explica la manera en que estaba organizada la banda así como la relación directa de todos y cada uno de los sujetos involucrados en el presente proceso; también de manera técnica diagrama dicha relación.

Como ustedes podrán observar Honorables Magistrados nos encontramos ante una serie de conductas que mantienen relación directa con delitos de Drogas, entre ellos podemos mencionar la Asociación ilícita, la venta y tráfico de droga en el área de La Villa de Los Santos por lo tanto de acuerdo al Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994, así como a los Artículos 2148 y 2159 de Código Judicial para ordenar como en efecto se ordenó la Detención preventiva del accionane (sic) Apolayo Rivas.

3. El señor Apolayo Rivas se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de Chitré pero por indicaciones de la Resolución de fojas 4 y 5 del presente cuadernillo procedemos a ponerlo a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia hasta que se decida la causa que nos ocupa." (Fs. 6-8).

Por su parte, el señor Amehled Antonio Apolayo estima que la detención preventiva de la cual es objeto es ilegal, ya que carece de fundamento legal.

La Corte observa que de fojas 114 a 119 de las sumarias, reposa la resolución fechada el 20 de septiembre de 1996, mediante la cual la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, una vez efectuado un análisis inicial de los hechos, estimó que los mismos vinculan al señor Amehled Antonio Apolayo, razón por la cual ordenó su detención preventiva.

Observa el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que al señor Amehled Antonio Apolayo se le imputa delito contra la Salud Pública.

El Pleno estima que existen fuertes indicios que vinculan al señor Amehled Antonio Apolayo con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, toda vez que obran en el expediente una serie de informes expedidos por la Policía Técnica Judicial (Agencia de Los Santos) y Zonas de Policías (Sub-DIIP), que revelan la existencia de un grupo de personas en la Villa de Los Santos que se dedican a la venta y distribución de sustancias ilícitas, y entre ellas figura el nombre de Amehled Antonio Apolayo (a) "Bebygron ó Beby".

Aunado a ello, observa el Pleno que, a raíz de la información antes recabada, se efectuó una operación encubierta consistente en una compra controlada de droga, que fue debidamente autorizada por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, y se destinó para ello la suma de diez balboas (B/.10.00) en billetes detallados en su numeración. Como resultado de lo anterior, se pudo detectar al momento de registrar a Eliécer Garrido Cortez, señalado como el vendedor en el operativo, dos de los billetes que estaban autorizados por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial para la operación encubierta. En vista de esta situación, se procedió a realizar una diligencia de allanamiento en la residencia que ocupan los hermanos Garrido y en ella se encontró una serie de documentos que llamaron la atención de los funcionarios de instrucción que intervinieron en la misma.

El Pleno observa que consta de folios 69 a 72 el informe de inteligencia suscrito por el Inspector Cristóbal Herrera y el Detective Manuel Reyes, donde señalan que uno de los colaboradores de la organización que dirigían los hermanos Garrido era el señor Amehled Antonio Apolayo, (a) "Bebygron ó Beby", quien prestaba su ayuda para la comisión del hecho punible.

Igualmente, consta de fojas 42 a 47 del sumario la declaración jurada rendida por el señor José Lonny Vásquez Ávila, donde indica que "Bebygron" era uno de los que aportaba dinero para comprar droga conjuntamente con los hermanos Garrido para su posterior venta. También se observa de fojas 84 a 87 el informe de análisis de documentos, donde se señala que los documentos encontrados en la diligencia de allanamiento efectuada en la residencia de los hermanos Garrido detallan la contabilidad de la organización y que a foja 89 de los mismos aparece el apodo de Beby, que es Amehled Antonio Apolayo.

Por último, dado que la asociación con el propósito de cometer delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas tiene fijada una pena mínima de prisión superior a dos años, según la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, el Pleno considera que en la orden de detención preventiva del señor Amehled Antonio Apolayo, no se ha violado el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y las Leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, razón por la cual lo procedente es declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor Amehled Antonio Apolayo, (a) "Bebygron ó Beby" y, por tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR DIONISIO ÁBREGO CLIABUS EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **DIONISIO ÁBREGO CLIABUS** interpuso a su favor acción de habeas corpus, contra el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, por considerar que se encuentra ilegalmente detenido.

Librado el mandamiento de habeas corpus, a fin de que el detenido fuese puesto a órdenes de esta Superioridad y rindiera el informe que dispone el artículo 2582 del Código Judicial, el funcionario demandado expidió nota fechada 24 de septiembre de 1996, en la que señaló que en la actualidad el detenido se encuentra a órdenes del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por haberse remitido a dicho ente jurisdiccional la actuación que se instruyó en su contra.

Informa además que el Tribunal en mención, mediante Auto Penal del 17 de los corrientes, resolvió declarar la APERTURA DE CAUSA CRIMINAL contra **DIONISIO ÁBREGO CLIABUS**, razón por la cual éste se encuentra detenido a órdenes del prenombrado Despacho, y recluido en la Cárcel Pública de David.

En vista de que el señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial informó tal situación, se dio traslado al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, quien contestó en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Este Tribunal Superior no ordenó la detención preventiva del señor DIONISIO ÁBREGO CLIABU. Dicha detención fue dispuesta por la Fiscalía del Circuito de Bocas del Toro mediante resolución del 1° de septiembre de 1995 tal y como se observa a fojas 134-137 del expediente. La Honorable Corte Suprema de Justicia en decisión del 9 de febrero de 1986 declara legal la detención preventiva del señor DIONISIO ÁBREGO CLIABU. Este tribunal colegiado mediante auto del 17 de septiembre pasado abre causa criminal en contra de DIONISIO ÁBREGO CLIABU por presunto infractor de las normas legales contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Abelardo Morales Garay. En dicha resolución se mantiene la detención preventiva dispuesta por la Fiscalía del Circuito de Bocas del Toro en contra de DIONISIO ÁBREGO CLIABU por considerar comprobado el cuerpo del delito de homicidio y de existir graves indicios de responsabilidad en su contra que son los requisitos necesarios para la prosecución de causa criminal ...".

Por su parte, el señor **DIONISIO ÁBREGO CLIABUS** ha fundamentado su acción, alegando que los testigos son de poca credibilidad, dado su supuesto parentesco con el occiso y que los mismos han presentado un sinnúmero de pruebas falsas.

Resulta de interés señalar que el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia, en sentencia de 9 de febrero de 1996, bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola, resolvió declarar legal la detención del señor **DIONISIO ÁBREGO CLIABUS**, al concluir, en aquella oportunidad, que en la instrucción reposan suficientes elementos indiciarios que vinculan al imputado con el hecho punible en perjuicio de **ABELARDO MORALES ÁBREGO**, puesto que así se desprende de las versiones ofrecidas por testigos coincidentes en modo, tiempo y lugar. En dicha resolución se plantearon, además, las razones de derecho que fundamentaban mantener la medida cautelar preventiva.

Considera el Pleno que las razones y méritos para que procediese la detención del señor **DIONISIO ÁBREGO**, fueron acusiosamente examinados en la resolución citada, y la misma sirve de fundamento al negocio que se encuentra en estudio.

En esta nueva acción de habeas corpus, el actor se limita a enjuiciar el

valor probatorio de los testimonios que lo comprometen, y a cuestionar que los mismos presten mérito suficiente para abrir un proceso criminal contra él, lo que evidentemente sólo corresponde dilucidar al Tribunal de la causa una vez se califiquen las sumarias respectivas. Es preciso pues, recalcar que la competencia del Tribunal de Habeas Corpus está circunscrita al examen de las formalidades que debe observar toda detención.

En atención a esta circunstancia cabe señalar que sí se cumplieron los requisitos constitucionales y legales para decretar la detención, son éstos: la orden escrita proferida por una autoridad competente, expedida conforme a las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley. De igual manera se han cumplido los requisitos del artículo 2159 del Código Judicial, pues la detención preventiva se hizo mediante diligencia escrita con señalamiento del hecho punible (que tiene prevista pena mínima de 2 años de prisión), y se allegaron los elementos probatorios para la comprobación del hecho.

La razón que fundamenta la detención del accionante ha quedado expuesta a lo largo de este análisis, por lo cual existen méritos suficientes para considerarla legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor DIONISIO ÁBREGO CLIABUS, y ORDENA que sea puesto a órdenes del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES EN CONTRA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PRESIDIDA POR EL LEGISLADOR CÉSAR PARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **IRLENA BROWN VILLALOBOS** ha interpuesto en su propio nombre recurso de habeas corpus en favor del MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, contra la **ASAMBLEA LEGISLATIVA**, representada por su Presidente, el Legislador César A. Pardo, por razón de que en el auto de enjuiciamiento, dictado en el proceso penal que se le sigue al MAGISTRADO FAÚNDES, se le aplica la medida cautelar de prohibirle abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, medida que establece el ordinal (a) del artículo 2147-B del Código Judicial.

La copia del auto de enjuiciamiento que acompaña la demanda, en vez de la medida cautelar aludida anteriormente (ordinal (a), artículo 2147-B del Código Judicial), ordena que debe "mantenerse recluido en su residencia"; o sea, la del ordinal (d) del mismo artículo.

Se trata de que la copia acompañada es de la proposición original de medida cautelar. El Presidente de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, Legislador César A. Pardo, explica en el informe rendido con motivo de este proceso de habeas corpus:

> "Hacemos la observación, que la copia del Auto Penal incorporada a la Acción de Habeas Corpus corresponde a la propuesta original y no

> a la aprobada con la modificación introducida que reposa a folios 1121 y sgts. Tomo IV". (F. 75, expediente del habeas corpus).

Ciertamente, a f. 1121 del proceso penal contra el MAGISTRADO FAÚNDES, se inicia el auto de enjuiciamiento, y a f.1186, en la parte resolutiva, como ordinal 3° aparece:

> "3° Se le aplica la Medida Cautelar de no salir del territorio nacional sin autorización de la Asamblea Legislativa". (F. 1186, proceso penal).

En el punto coincide la propia Licenciada IRLENA BROWN VILLALOBOS, porque en el libelo de demanda de habeas corpus, al enunciar los Hechos, expresa:

> "SEGUNDO:
> ...
> En dicho auto se resuelve aplicar medida cautelar al MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES consistente en impedirle la salida del territorio nacional ...".
> Luego:
> "TERCERO: Sobre el MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, pesan medidas cautelares de carácter cautelar que afectan su libertad ambulatoria de acuerdo con lo previsto en el acápite a) del artículo 2147-B del Código Judicial".

De manera que el objeto de la demanda de habeas corpus consiste en determinar si la medida cautelar prevista en el ordinal (a) del artículo 2147-B del Código Judicial, aplicada, equivale a una detención fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, como reza el artículo 23 de la Constitución, que establece el recurso de habeas corpus.

Por la importancia que los Hechos de una demanda tienen para interpretarla, ya que constituyen la causa de pedir, se transcriben a continuación:

> "**PRIMERO:** La Asamblea Legislativa inició un proceso contra el HONORABLE MAGISTRADO **JOSÉ MANUEL FAÚNDES**, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por su posible vinculación con los delitos contra la libertad individual, usurpación de funciones públicas, delitos contra la autoridad pública; abuso de autoridad e infracción de los deberes de funcionario público.
>
> **SEGUNDO:** Mediante Resolución del 23 de agosto de 1996, se dictó auto de enjuiciamiento contra el **MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES**.
>
> En dicho auto se resuelve aplicar medida cautelar al **MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES** consistente en impedirle la salida del territorio nacional. También se ordena la separación de su cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
>
> **TERCERO:** Sobre el **MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES**, pesan medidas cautelares de carácter personal que afectan su libertad ambulatoria de acuerdo con lo previsto en el acápite a) del artículo 2147-B del Código Judicial.
>
> **CUARTO:** Se han aplicado medidas cautelares, substitutivas de la detención preventiva, a pesar de que los delitos que se investigan acarrean pena mínima inferior a dos (2) años de prisión.
>
> **Artículo 151:** El que ilegalmente prive a otro de su libertad, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años.
>
> **Artículo 336:** El servidor público que, con abuso de su cargo ordene o someta en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses o de 25 a 75 días-multa.

Artículo 343: El que ejerza funciones públicas sin autorización legal o el servidor público que continúe ejerciéndolas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo o después de haber recibido del órgano competente comunicación oficial que ordenó la cesantía o suspensión, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año.

Artículo 344: El que con violencias o amenazas impida, obstaculice o le imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia a requerimiento de éste, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año.

QUINTO: Que el artículo 2147C del Código Judicial establece lo siguiente:

Artículo 2147-C: serán aplicables las medidas cautelares ...

b) Cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión; (El subrayado es nuestro).

SEXTO: Que el artículo 1972 del Código Judicial nos indica que toda norma legal que limite la libertad corporal, como son las relativas a las medidas cautelares, deben interpretarse restrictivamente y únicamente pueden ordenarse cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la Ley.

SÉPTIMO: Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en innumerables ocasiones declarando la ilegalidad de las medidas cautelares que restringen la libertad de los procesados cuando no se dan los presupuestos exigidos para ello en la ley tal como se hizo el 24 de marzo de 1995, al resolver el Habeas Corpus interpuesto contra el Fiscal Auxiliar de la República y en favor de ALEXIS LEDEZMA CEDEÑO, en los siguientes términos:

"La anterior información pone de relieve que al sindicado se le han aplicado medidas cautelares personales substitutivas de la detención preventiva. Sin embargo, el Pleno de la Corte observa que el delito imputado es el consagrado en el artículo 183 de nuestra legislación penal, castigado con pena de prisión con intervalo de 20 a 50 meses. Según establece el artículo 2147-c del Código Judicial en su acápite b; Artículo 2147-c; Serán aplicables las medidas cautelares;
...
b) cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión. (Subraya la Corte).

Resulta incuestionable, entonces, la imposibilidad de que el agente de instrucción decrete medidas cautelares cuando el delito que se investiga acarrea pena mínima inferior a dos años de prisión. Por ello, como quiera que la conducta delictiva que se le atribuye a Ledezma Cedeño tiene asignada pena con mínimo de 20 meses, no procede la aplicación de medidas cautelares de carácter personal".

Se trata, pues, de que al MAGISTRADO FAÚNDES se le ha aplicado la medida cautelar de no abandonar el territorio de la República, que esa medida afecta la libertad de transitar libremente; que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha establecido que vedamientos de esa naturaleza son susceptibles de ser corregidos mediante habeas corpus; que las medidas cautelares (cualquiera de ellas) sólo son aplicables cuando el delito contemple pena mínima de dos años de prisión.

En cuanto a que la imposición de la medida cautelar del ordinal (a) del artículo 2147-B del Código Judicial puede ser causa de acción de habeas corpus, ello es cierto. El PLENO de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha sostenido que la

limitación del derecho de transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración (artículo 27 de la Constitución), es un derecho desde luego constitucional, que el recurso de habeas corpus protege, con las limitaciones señaladas. Tal derecho comprende la prerrogativa de viajar al exterior.

El PLENO de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha de considerar, en consecuencia, si la medida ha sido tomada fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, para los efectos de que, en caso de que fuere así, sea revocada, en virtud del recurso de habeas corpus.

Al respecto la demandante deduce, como se ha visto en la exposición de los Hechos de la demanda, que para que proceda la imposición de cualquiera de las medidas cautelares, enumeradas en el artículo 2147-B del Código Judicial (individualmente considerada), es necesario que el delito de que se trate contemple pena mínima de dos o más años de prisión.

Agrega que ninguno de los cuatro delitos por los cuales se desarrolla el proceso contra el MAGISTRADO FAÚNDES, contra la libertad individual, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones públicas, y delitos contra la autoridad pública, tiene pena mínima de prisión que llegue a los dos años.

En su razonamiento la demandante, Licenciada IRLENA BROWN VILLALOBOS, invoca el artículo 2147-C del Código Judicial.

Para analizar el planteamiento formulado en la demanda, se transcriben las siguientes disposiciones legales, de las cuales ya se han mencionado los artículos 2147-B y 2147-C del Código Judicial.

> "**ARTÍCULO 2147-A**: La libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada mediante la aplicación, por el Juez o por el funcionario de instrucción, de las medidas cautelares previstas en esta sección.
>
> Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra. Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren causas de justificación, eximentes de punibilidad o causas de extinción del delito o de la pena que pudiere serle impuesta.
>
> **ARTÍCULO 2147-B**: Son medidas cautelares personales:
>
> a) La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial;
>
> b) El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública;
>
> c) La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente;
>
> d) La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso;
>
> e) La detención preventiva.
>
> Las resoluciones sobre medidas cautelares personales sólo admitirán el recurso de apelación en el efecto diferido.
>
> **ARTÍCULO 2147-C**: Serán aplicables las medidas cautelares:
>
> a) Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;

> b) Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión;
>
> c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.
>
> **ARTÍCULO 2148**: Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva previo cumplimiento de las formalidades previstas en este Código.

El artículo 2147-B enumera las medidas cautelares sin perjuicio de que otras disposiciones de la misma Sección de ese Capítulo entren en más detalles, v. gr., el artículo 2147-J, que establece la facultad del juez o funcionario de instrucción de "ordenar al imputado el deber de no alejarse de su propia casa, habitación o establecimiento de salud o de asistencia donde se encuentre recluido".

El artículo 2147-B ordena las medidas cautelares que enuncia, en orden ascendente de gravedad, desde la que nos ocupa, la más leve, de prohibir abandonar el territorio nacional, hasta la quinta, la más grave, de la detención preventiva. Entre los extremos hay una gran diferencia en la severidad de las medidas. De allí se colige que en justicia, las ocasiones en que se aplica una u otra, son ocasiones distintas.

A ello se debe que las razones para disponer una determinada de esas medidas, enunciadas en el aludido artículo 2147-B, no sean las mismas razones que para aplicar otra de ellas. Es decir, no son razones homogéneas.

El artículo 2147-C no pretende establecer un orden de cosas contrario a esa realidad. Enumera las distintas ocasiones en relación con las cuales son aplicables las medidas cautelares, sin exigir que esas circunstancias se den conjuntamente para cada una de ellas; lo que sería equipararlas, cuando todo indica que ello no procede.

El artículo 2148 transcrito, sí establece una relación entre una situación, la de que "el delito contemple pena mínima de dos años de prisión", y la medida preventiva determinada, "la detención preventiva".

Así dice:

> "Cuando se proceda por delito que tenga señalado pena mínima de dos años de prisión, ... se podrá decretar su detención preventiva ...".

Si fuera cierto que el artículo 2147-C requiere la concurrencia de situaciones que enumera, ¿para qué prescribiría luego el artículo 2148 que para que la detención preventiva proceda se requiere pena mínima de dos años? Ya estaba dicho.

Debe reconocerse, sin embargo, que la licenciada IRLENA BROWN VILLALOBOS se ha referido a pronunciamiento de este PLENO, de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en el mismo sentido de su argumentación. Trajo a los autos la Sentencia dictada también en un recurso de habeas corpus, fechada el 24 de marzo de 1995. No obstante, el PLENO tuvo ocasión de corregir ese planteamiento, mediante sentencia de habeas corpus fechada el 15 de febrero de 1996, que se transcribe:

> "Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que el recurrente no se encuentra privado de su libertad en ningún centro penitenciario. No obstante, sobre su persona pesan las medidas cautelares de carácter personal establecidas en las letras ordinales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, las cuales afectan la libertad ambulatoria del señor F.

De acuerdo con las constancias procesales, dichas medidas cautelares fueron impuestas por el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto proferido el 20 de diciembre de 1995 que decretó, "APERTURA DE CAUSA CRIMINAL contra H. F. ... como presunto vulnerador de las disposiciones legales señaladas en el Capítulo I, Título III, Libro II del Código Penal, es decir, por los delitos genéricos de CALUMNIA E INJURIA." Además, señaló que en vista de que dichos delitos no ameritaban detención preventiva, en su lugar debían ser aplicadas las siguientes medidas cautelares personales:

"1. La prohibición de salida del país sin la correspondiente autorización judicial.

2. La obligación de comparecer a la sede de este Tribunal, los días 15 y 30 de cada mes, para lo cual se le llevará el debido registro de comparecencia.

3. La obligación de residir dentro de la circunscripción territorial correspondiente a la jurisdicción de este Tribunal." (Foja 120 del cuaderno principal).

Del texto transcrito se colige que la conducta ilícita que se le imputa al recurrente se encuentra consagrada en los artículos 172 a 175 del Código Penal. Dichos artículos contienen los delitos contra el honor, sancionados con días multa y con pena mínima de prisión inferior a los dos años.

Al respecto, el apoderado judicial del señor H. F. alega que en vista de que el delito por el cual se le investiga no tiene pena mínima de prisión de dos años, no es aplicable ninguna medida cautelar personal.

Sin embargo, la Corte considera que la ley establece esa limitación únicamente para la detención preventiva y no para las demás medidas cautelares que contempla el artículo 2147-B del Código Judicial.

Así, el artículo 2147-C del Código Judicial se refiere, en general, a cuándo son aplicables las medidas cautelares; pero no a los casos particulares en que procede cada una de dichas medidas cautelares.

Eso explica que el artículo 2148 del mencionado código señale de manera particular, que la medida cautelar de prisión preventiva sólo procede cuando el delito de que se trate tenga pena mínima de dos años de prisión. Significa, entonces, que ese requisito no es necesario para imponer el resto de ellas.

Consecuentemente, las medidas cautelares decretadas contra el recurrente son legales y, por tanto, debe confirmarse la decisión del Tribunal Superior, en vista de que se ajusta a derecho".

Si bien es cierto que en los casos que tienen como punibilidad penas privativas de libertad inferiores a dos años, no cabe la medida cautelar personal de detención preventiva, el juzgador con base en el artículo 2147-C del Código Judicial al aplicar una medida cautelar está legalmente obligado a explicitar las razones por las que impone cualquiera de las medidas cautelares personales que enumera el artículo 2147-B de la misma excerta citada. Ello es así, porque el principio de individualización judicial exige que se tomen en consideración las condiciones y circunstancias materiales y personales que rodean el hecho objeto de este proceso especial, a fin de justificar la aplicación de la medida cautelar.

En el presente caso, la Asamblea Legislativa constituida en Tribunal penal en funciones judiciales omitió la fundamentación de la medida cautelar personal adoptada, lo que constituye un defecto formal. Sin embargo, ello no enerva la facultad que la ley confiere al Juez o funcionario de instrucción para limitar

la libertad personal del imputado mediante la aplicación de las medidas cautelares previstas en la normativa procesal penal, aunque la medida adoptada resulte innecesaria, dadas las particularidades de este caso y de la persona afectada con ella.

Se concluye de lo expuesto, que la ASAMBLEA LEGISLATIVA no incurrió en las violaciones de la Constitución y de la Ley que son invocadas como causa de la interposición del presente recurso de habeas corpus.

Por todo lo anterior, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA LEGAL la medida cautelar decretada por el PLENO de la ASAMBLEA LEGISLATIVA en el auto de enjuiciamiento dictado en el proceso que se le sigue al MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, que consiste en no salir del territorio nacional sin autorización de la Asamblea Legislativa.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ISABEL GARRIDO MORENO "YUYO" CONTRA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **JOSÉ GARRIDO MORENO**, sindicado de delito contra la Salud Pública (Drogas) y detenido en la Cárcel Pública de Chitré, interpuso en su propio nombre, acción de Habeas Corpus ante el Primer Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, contra la Agencia Regional de Drogas de las Provincias de Herrera y Los Santos.

Alega el actor que se le dijo que se había realizado un allanamiento en casa de sus padres y que no se encontró allí nada ilícito.

Dicho allanamiento se efectuó el día 18 de septiembre, 2 días antes de su detención (20 de septiembre).

Que luego de su detención, le quieren tomar declaración por un delito que desconoce.

El "Secretario de droga" ordenó su detención sin valorar debidamente el hecho ilícito que se le imputa, en el que no tiene responsabilidad.

Luego de haber ordenado su detención, el Fiscal le dijo que "... habían encontrado un cajita de una supuesta droga, después de verificar en el allanamiento que no habían encontrado nada ilícito."

El a-quo, mediante resolución del 26 de septiembre de 1996, señaló que la competencia para conocer dicha solicitud le correspondía al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la Agencia Regional de Drogas tiene mando y jurisdicción en las dos provincias, tal como lo norma el numeral 1° del artículo 2606 del Código Judicial, pero que:

"No obstante por razones prácticas y de economía procesal se procede

a avanzar la actuación hasta donde sea viable.

Por lo tanto, se **ACOGE** la presente demanda de Habeas Corpus a favor de **JOSÉ GARRIDO MORENO**, y se prosigue el trámite contra la **Agencia Regional de Drogas de Herrera y Los Santos**.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado Sustanciador administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **LIBRA MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS** contra la **Agencia Regional de Drogas de Herrera y Los Santos**, quien debe poner al detenido a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia ..."

Mediante Oficio N° 965 del 26 de septiembre, la Licda. Nereyda Díaz de Castillo, Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial contestó el mismo en tiempo oportuno, de la siguiente manera:

"1- Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor JOSÉ ISABEL GARRIDO, mediante la Resolución calendada veinte (20) de septiembre de este año, por encontrarse imputado por la supuesta comisión de Delitos Contra la Salud Pública (droga), dicha Resolución se encuentra visible de fojas 114 a 119 del proceso principal.

2- Los motivos de hecho que dieron origen a la privación preventiva de la libertad al señor JOSÉ ISABEL GARRIDO tiene su fundamento en la investigación que al mismo y otros se le sigue ante esta Agencia del Ministerio Público por la comisión de Delitos Contra la Salud Pública (droga).

El inicio de la investigación correspondiente se debió a una gran cantidad de información que a nivel confidencial recolectaron las Agencias de las Policías Técnicas Judiciales y las Zonas de Policías (Sub-DIIP) del área, con respecto a la asociación para la venta y distribución de drogas en La Villa de Los Santos por parte de los señores RICARDO, ELIÉCER, CARLOS Y JOSÉ ISABEL GARRIDO, AMELET Y ALEXANDER APOLAYO, OMAR SAUCEDO, ADRIÁN QUINTERO, ERIC QUICTON GARRIDO, LEONEC BAZÁN y unos sujetos conocidos como JAQUELINE LA MULA Y TELETÓN, dejamos constancia que en fase inicial de la investigación de la mayoría de estos señores sólo se conocían sus apodos.

En vista de esta situación se procedió a montar un operativo encubierto de compra controlada de droga el cual resultó positivo para detectar y posteriormente encontrar droga ilícita así para la captura del señor ELIÉCER GARRIDO, quien fue señalado como el vendedor en este operativo.

Continuando con el curso de las investigaciones la Policía Técnica (sic) Judicial de Los Santos y la P. T. J. de Las Tablas así como la Sub-DIIP de Los Santos nos remitieron todos y cada uno de los informes de seguimiento en donde constaba la información obtenida, vigilancia y demás información de campo en donde se detallaba la actividad delictiva a la que se venían dedicando los sujetos arriba señalados entre los cuales figuraba el señor JOSÉ ISABEL GARRIDO (a) YUYO como uno de los vendedores de droga en el área de La Villa de Los Santos, tal cual consta en los documentos de fojas 29 a 41, 49 a 68, y 78 a 83 del proceso principal.

También consta de foja 69 A 72 el informe de inteligencia suscrito por el Inspector Cristóbal Herrera y el Detective Manuel Reyes en donde se detalla la manera en que operaba la organización delictiva compuesta por los imputados en este proceso y entre los cuales se señala al señor José I. Garrido como partícipe de las actividades delictivas a las cuales se dedicaba la misma, como lo era la venta de droga.

De igual forma debe destacarse la declaración jurada del señor JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA, visible de folio 42 a 47 del presente proceso en donde formula cargos directos a YUYO GARRIDO (José I. Garrido) como uno de los vendedores conjuntamente con sus hermanos de la droga conocida como cocaína en el área de Los Santos.

Por último debemos destacar el informe de relación suscrito por el Detective Secundino Ávila de la Organización Regional Anti-Droga, en donde explica la manera en que estaba organizada la banda compuesta por los imputados, así como la relación directa de todos y cada uno de los sujetos involucrados en el presente proceso; también de manera técnica diagrama para mejor comprensión dicha relación.

La Fiscalía quiere señalar que a pesar que el accionante GARRIDO no fue detenido en el lugar del hecho sino posteriormente, ello, no es obstáculo para proceder a indicar que de acuerdo a la investigación levantada por la Policía Judicial y llegada a la Agencia Regional de Drogas existe una vinculación entre el señor José I. Garrido y los delitos de droga por los cuales se procedió a ordenar su detención preventiva ya que, en nuestro concepto nos encontramos ante una serie de conductas que mantienen relación directa con delitos de Drogas, ante ello podemos mencionar la Asociación Ilícita, La Venta y Tráfico de drogas en el Área de La Villa de Los Santos, por lo tanto de acuerdo al Texto Único Refundido de las Leyes 23 del 30 de diciembre de 1986 y 13 del 27 de julio de 1994, así como los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, para ordenar como en efecto se ordenó la detención preventiva del señor GARRIDO (a) YUYO.

3- El señor GARRIDO (A) YUYO (José I. Garrido), se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de Chitré pero por indicaciones de la Resolución de fojas 4 y 5 del presente cuadernillo, procedemos a ponerlo a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, hasta que se decida la causas que nos ocupa."

En primer lugar, hay que manifestar que en el presente caso lo que le correspondía hacer al Primer Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial era inhibirse inmediatamente de conocer el negocio, y remitirlo a esta Corporación de Justicia; pero en aras de decidir lo más rápidamente posible sobre la privación de libertad del accionante, se obvia esa situación.

Observa esta Corporación de Justicia que -tal como señala el Fiscal de Drogas de Herrera-Los Santos en su informe- a fojas 114 a 119 del expediente principal está contenido el auto que ordena la detención preventiva de **GARRIDO MORENO**.

El mismo contiene la denominación del delito que motiva la detención, los hechos que prueban la comisión del mismo y la relación del detenido con la comisión del ilícito, ya que detalla el inicio de la investigación, la red de venta de drogas que se había desarrollado en el sector, y la participación de **GARRIDO MORENO**, cumpliendo con ello lo normando por el artículo 2159 del Código Judicial.

Por la información recabada por la Fiscalía de Drogas, estaba justificado el operativo, así como la detención del sindicado, pese a que no se haya encontrado sustancia ilícita en la residencia de su madre, tal como él manifiesta en su acción.

En este sentido, es visible a foja 42 del infolio, la declaración jurada que rindió **JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA** en Sub Agencia de la Policía Técnica Judicial en Los Santos, donde manifestó la venta de cocaína en casa de los Hnos. **GARRIDO**, ofreciendo detalles de esa actividad.

Los delitos por los que ha sido encausado -asociación ilícita, venta y tráfico de drogas- tienen pena de prisión superior a los dos (2) años, motivo por el que se cumple el requisito establecido en el artículo 2148 de la misma

excerta, que faculta al funcionario instructor a disponer su detención.

Por lo tanto, no prospera la pretensión del actor, y debe declararse legal la detención.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de JOSÉ ISABEL GARRIDO MORENO, alias "YUYO"; en consecuencia, lo pone a órdenes de la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE RAFAEL BERNAL Y EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Víctor Manuel Caicedo interpuso acción de Habeas Corpus en favor de **RAFAEL BERNAL** y **EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ**, detenidos en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial sin haber sido puestos a órdenes de ninguna autoridad competente.

Fundamenta el defensor su acción, principalmente en los siguientes hechos:

Que los detenidos fueron aprehendidos el 25 de septiembre en la mañana, en las oficinas de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito;

Que las detenciones fueron motivadas por un supuesto hurto de materiales del Instituto De Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I. D. A. A. N.) por la suma aproximada de B/.2,500.00;

Que después de estar detenidos por más de 24 horas, no han sido puestos a órdenes de autoridad competente;

Que el expediente se encontraba en la Secretaría de la Policía Técnica Judicial desde el día anterior a la presentación de la presente acción -25 de septiembre- sin que fuera remitido a la Fiscalía Auxiliar de la República;

Que la detención en comento violó el derecho de libertad, de presunción de inocencia, derecho de defensa y el debido proceso legal;

Que en el expediente no existe elemento alguno que vincule a los detenidos con la comisión del ilícito.

Inmediatamente recibida la acción, se libró el correspondiente mandamiento de Habeas Corpus contra el Director General de la Policía Técnica Judicial, quien señaló que no ordenó la detención de los beneficiados con la presente acción; que por lo tanto hay fundamentos de hecho y de derecho; y que tiene bajo custodia a **RAFAEL BERNAL**, pero fue puesto a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República; en cuanto a **EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ**, éste fue puesto en libertad por orden del Fiscal Auxiliar de la República.

En consecuencia, se enderezó el mandamiento de Habeas Corpus contra el señor Fiscal Auxiliar de la República, quien lo respondió de la siguiente manera:

"A. Es cierto, que se ordenó la Detención Preventiva del señor RAFAEL BERNAL ÁVILA y la misma se hizo mediante resolución motivada con fecha del 27 de septiembre de 1996; en cuanto al señor EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ, el mismo fue dejado sin efecto la aprehensión, mediante providencia calendada 28 de septiembre de 1996.

MOTIVOS DE HECHO

La medida cautelar adoptada en contra del prenombrado BERNAL ÁVILA, obedece a que según la deposición jurada de CARLOS ULLOA MARTÍNEZ, consultable a fojas 24 y 25 del cuaderno principal, se infiere que los presuntos sindicados salieron de las instalaciones de la entidad Estatal afectada, en el camión Toyota Dina, siendo posteriormente vistos por el testigo, viniendo de la dirección que había tomado el referido vehículo.

Aunado a ello, consta a foja 27 y 28 del sumario, un informe de entrevista efectuado a JOAQUÍN SALAZAR SOTO, en la agencia de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, según el cual expresa que el señor BERNAL ÁVILA, tenía un negocio en el que iba a sacar algo y que vio llegar un camión, de color blanco, con una lona verde en la parte trasera, el cual se retiró; y posteriormente, llegó un carro grande al cual se le acercó el prenombrado BERNAL ÁVILA, desde adentro de la cerca, indicándole a los ocupantes que el negocio no iba, ya que el contacto se había arrepentido; haciendo con ello clara alusión a la comisión de un ilícito, del cual por el cargo que ejerce como seguridad, estaba en la obligación de poner en conocimientos a las autoridades y aunque si bien es cierto, señala que el negocio no se llevó a cabo en esa ocasión, consta en el expediente, declaración jurada de MIGUEL ANTONIO BARRÍA, quien señala que efectivamente hubo un faltante de sacos de cal hidratadas y de tanques de polímero líquido, después de efectuar un inventario.

Los hechos expuestos en el párrafo precedente, determinan una actitud ilícita de parte de RAFAEL BERNAL ÁVILA quien como funcionario público, con cargo de supervisor de planta, en la planta potabilizadora de Chilibre, debió tener la percepción de los materiales sustraídos.

FUNDAMENTO DE DERECHO

La conducta desplegada por RAFAEL BERNAL ÁVILA, en nuestro concepto se encuentra tipificada en el libro II, Título X, Capítulo I, del Código Penal, por cuanto en su persona concurren, primero la calidad de funcionario público, segundo el cargo de supervisor de planta y por razón del mismo tuvo la percepción de los bienes sustraídos.

Dicha conducta tiene señaladas en nuestro ordenamiento jurídico, pena mínima de prisión de 2 años, en virtud de lo cual el Despacho ordenó la Detención Preventiva del prenombrado BERNAL ÁVILA.

C. Actualmente el señor BERNAL ÁVILA, se encuentra detenido a órdenes de este Despacho, en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, hasta tanto sea cumplido el trámite de remisión del expediente, a la Fiscalía Delegada, en turno, de la Procuraduría General de la Nación."

Advierte el PLENO que -según expusieron tanto el Director General de la Policía Técnica Judicial y el Fiscal Auxiliar de la República en su contestación de los mandamientos de Habeas Corpus a ellos girados- el señor **EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ** fue dejado en libertad por mandato del señor Fiscal Auxiliar de la República mediante providencia del 28 de septiembre de 1996; por lo tanto, al extinguirse el objeto de la acción presentada en su favor, la Corte observa que

en su caso se verifica el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, por lo que se abstiene de ventilar esta parte del negocio, y solo analizará la legalidad de la detención de **RAFAEL BERNAL ÁVILA.**

Por ello, corresponde a esta Superioridad verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial, que parecen ser los atacados en el libelo de la acción que nos ocupa.

Del contenido del mandamiento de Habeas Corpus se desprende el cumplimiento del artículo 2148, toda vez que el supuesto delito tipificado por la acción que nos ocupa -como señala el Señor Fiscal Auxiliar de la República- tiene una pena de prisión de 2 a 10 años, por lo que se satisface el requerimiento de la norma en cita.

En cuanto a los requisitos de la detención propiamente tal, establecidos en los artículos 2158 y 2159 de la misma excerta, el expediente revela mediante Informe Secretarial del 25 de septiembre, suscrito por el Detective I. Guillermo Meneses -f. 31 del cuaderno principal- que el sumariado **RAFAEL BERNAL ÁVILA** se presentó a declarar voluntariamente a la Agencia de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito.

En ese sentido, el Informe de Entrevista rendido por el Inspector I. Manuel Bonome R. y el Detective I. Orlando M. Lewis -rubricado por el primero- calendado 25 de septiembre de 1996 -f. 32- señala que se entrevistó a **RAFAEL BERNAL ÁVILA;** en la misma se le puso en conocimiento los cargos hechos en la denuncia, pero que él manifestó no saber nada del hurto de los materiales del I. D. A. A. N.

Cabe destacar que el día anterior, 24 de septiembre, mediante Informe Secretarial el Sr. **JOAQUÍN SALAZAR SOTO** -fs. 27 y 28 del cuaderno principal- había manifestado en esa misma Agencia de Investigación que **BERNAL ÁVILA** era el responsable de los hurtos ya mencionados.

A foja 36 del expediente, se observa el Oficio N° SG-797 del 26 de septiembre, en el cual el Secretario General de la Policía Técnica Judicial, Licdo. Aníbal Ramos, remite todas las diligencias relacionadas con el presente caso al Fiscal Auxiliar de la República, poniendo a su disposición a los entonces detenidos -ya que **EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ** fue puesto en libertad-.

El artículo 2158 señala que luego de ser aprehendido el sujeto sindicado por un delito, debe ser puesto a órdenes de autoridad competente dentro de las 24 horas a su detención; dicha autoridad, tendrá un término de 24 horas para mantener la detención preventiva.

El signatario de la presente acción expuso como uno de los hechos en que fundamenta la misma, que **RAFAEL BERNAL** fue detenido "... desde ayer en la mañana ..."; como el Habeas Corpus se presentó el 26 de septiembre, se entiende que la detención se verificó el 25 de septiembre.

Como ya se expuso, mediante Oficio N° SG-797 del 26 de septiembre, la Policía Técnica Judicial puso al sindicado a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República, lo que demuestra que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente dentro del período señalado por el artículo 2158 del Código Judicial.

Además, mediante auto S/N de ese mismo día, 26 de septiembre, la precitada autoridad ordenó la detención preventiva de **BERNAL** y de **PÉREZ**, cumpliendo también ese sentido, lo establecido por la norma en comento.

El auto en cuestión cumple también con las exigencias del artículo 2159 del Código Judicial, toda vez que expresa debidamente el hecho imputado; manifiesta coherentemente los elementos que acreditan la existencia del hecho punible, así como explica la relación de los sindicados con la comisión del mismo.

Por lo tanto, considera esta Corporación de Justicia que la detención de **RAFAEL BERNAL ÁVILA** cumple todas las exigencias procesales establecidas en la ley, por lo que considera legal su detención.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en cuanto a la situación de EUFEMIO PÉREZ CHÁVEZ ha operado el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y por lo tanto ORDENA EL CESE de todo procedimiento en esta acción; en cuanto a RAFAEL BERNAL ÁVILA, DECLARA LEGAL su detención preventiva y ordena que el mismo sea puesto a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RICARDO RAÚL GÓMEZ, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Angélica Johnson Lowe** ha promovido ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y a favor de **RICARDO RAÚL GÓMEZ.**

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió de la siguiente manera:

> "A. Sí, es cierto que este Despacho ordenó la detención del señor RICARDO RAÚL GÓMEZ, mediante resolución calendada dos (2) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> B. FUNDAMENTOS DE HECHO:
>
> Los hechos se inician el día (30) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuando se procede a realizar diligencia de allanamiento en el corregimiento de Curundú, Sector el Palomar, casa N° 12-13 propiedad del señor RICARDO RAÚL GÓMEZ, quien se encontraba en dicho inmueble, toda vez que según declaración de las unidades de la Policía, Departamento de Información e Investigación Policial, se tenía información de que en el inmueble arriba descrito se dedicaban a la venta y consumo de sustancias ilícitas.
>
> Al efectuar el registro al inmueble se encuentra en un envase de plástico de color negro con tapa gris, utilizado para rollos de película, el cual contenía en su interior cincuenta y tres (53) sustancias sólidas de color crema.
>
> A la sustancia incautada se le practica el respectivo análisis, realizado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, el cual arroja un resultado positivo para la presencia de COCAÍNA (CRACK), en un peso de 8.20 gramos, el cual se encuentra visible a fojas 26 y 27 del sumario".

Para sustentar la ilegalidad de la detención la parte actora se pronuncia en los siguientes términos:

"Somos de la opinión, que el tipo penal vulnerado por el imputado pareciera ser el tipificado en el artículo 260 del Código Penal Patrio.

Mantener la detención preventiva a la que se encuentra sometido nuestro representado, sería ni más ni menos que perpetuar una ilegalidad, violentando nuestra Constitución nacional y el Derecho Procesal Positivo.

Esto lo manifestamos debido a la circunstancias que se encuentran bien definidas en las sumarias adelantadas, la cual la podemos resumir de la siguiente manera:

1. Ha quedado comprobado a lo largo de toda la investigación sumaria que la Detención Preventiva que hasta la fecha sufre nuestro patrocinador se realizó con una diligencia de allanamiento (ver fojas de la 1 a la 5).

2. Se ha comprobado que los Agentes Captores que participaron en la Vigilancia de allanamiento (Cabo 1° Miguel Araúz y Cabo 2° Ricardo Araujo) se afirman y ratifican de su informe de novedad visible de fojas 1 a la 5 en donde ponen en conocimiento al Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas que el ciudadano Ricardo Raúl Gómez fue detenido mediante diligencia de allanamiento (fojas 1-5).

3. De igual manera ha quedado plenamente comprobado que dentro del Cuaderno Penal no consta la diligencia de allanamiento ni copia de la misma debidamente autenticada.

Estas consideraciones de tipo fácticas jurídicas nos mueven a solicitar a este augusto Tribunal Colegiado que se sirva ordenar la ilegalidad de la detención preventiva a la que se encuentra sometido nuestro patrocinador. ...

Es por todo la antes expuesto, en el presente escrito, es que respetuosamente reitero mi solicitud de declaratoria de ILEGALIDAD de la Detención Preventiva de nuestro representado, debido a que dentro del expediente no está la diligencia de allanamiento, lo cual constituye una violación al debido Proceso".

Pareciera que el actor pretende basar la impugnación en la ausencia de la diligencia de allanamiento dentro del sumario. A este respecto, observa la Corte que ya para la fecha de la audiencia preliminar, el 9 de septiembre de 1996, (véase acta, folios 66 a 72), el Juez había ordenado que se agregara al expediente el acta de la diligencia de allanamiento; en cumplimiento de lo cual, tal acta fue incorporada prontamente al expediente por el señor Fiscal Especial, lo que vino a sanear la omisión, tal como consta en las últimas hojas (sin enumerar) del expediente principal. De igual manera, señala la apoderada del señor **RICARDO GÓMEZ** que la Detención Preventiva que hasta la fecha sufre su patrocinador se realizó con una diligencia de allanamiento, lo que nos lleva a suponer que en realidad su disconformidad con la medida radica en que, supuestamente, no existía orden de detención motivada. Frente a ésto, la Corte observa que a fojas 16-17 del expediente sí se aprecia la resolución por la cual se ordena la detención motivada, dictada el día 2 de enero de 1996 por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Hecha esta salvedad, procedemos al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al ciudadano **RICARDO**

RAÚL GÓMEZ, tiene su origen en la resolución fechada 2 de enero de 1996 (visible a folio 7 del sumario), mediante la cual la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, aprehende al conocimiento de las sumarias por supuesto delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

Sin embargo, dicha investigación tiene por base el Informe de la Policía Nacional Anti-Droga de fecha 30 de diciembre de 1995 en el que se hace constar lo ocurrido en la diligencia de allanamiento efectuada en Curundú, ese mismo día, exactamente en Santa Cruz, sector el Palomar, en la casa N° 12-12, propiedad del señor **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, quien se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento.

En dicho operativo, al efectuar el registro de rigor, se encontró sobre un sillón de la sala, un (1) envase de plástico color negro con tapa de color gris (estuche de rollo de película para cámara fotográfica) contentivo de cincuenta y tres (53) sustancias sólidas que posteriormente, realizada la prueba de campo (v. f. 27), resultaron positivas para la determinación de **COCAÍNA (CRACK)**, en la cantidad de 8.20 gramos. Porción superior a la mínima establecida, que oscila entre 0.2 a 1,5 gramos para que pueda ser considerada como "droga en cantidad escasa destinada a uso personal".

Por su parte, **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, al ser llamado a rendir indagatoria, negó que se dedicara a la venta de sustancias ilícitas, y admitió ser consumidor de "piedras" desde hacía dos meses (v. fs. 10-15).

No obstante, el examen médico psiquiátrico de **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, señaló que el prenombrado no evidencia psicopatología compatible con proceso psicótico en la actualidad y que no hay evidencia médica de dependencia a droga alguna, sino que sólo por historia referida ha tenido consumo de drogas, piedra y cocaína. (V. fs. 46-47).

Al rendir declaración indagatoria (v. fs. 10-14), el señor **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, confesó:

> "PREGUNTADO: Diga el indagado si usted pensaba consumirse cincuenta y tres (53) sustancias compactas que se presumen sean piedras o crack? CONTESTÓ: Señor Fiscal, yo exactamente sólo no pensaba consumírmelas, pero sí la gran mayoría ya que como era año nuevo yo pensaba tener una gran cantidad porque además venían otros amigos que también se dedican a consumir crack e incluso el muchacho que fue a comprarlas también iba a consumir drogas y como usted sabe para esas fechas todas las personas compran bastante drogas, ya que si yo fuera alcohólico o tomara alcohol compraría por galones, no por botellitas". (Subrayado nuestro).

De dicha confesión se desprende que el prenombrado pretendía **suministrar** la droga a otras personas, y no sólo para consumo propio. De allí que en el presente caso resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, donde claramente se señala que si se demuestra que lo que se pretende es suministrar la droga en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será de 5 a 10 años de prisión. Estima la Corte que adquirir 8.2 gramos de la ilícita substancia para traspasarla a título de mera liberalidad, para consumo ajeno, reviste consecuencias sociales negativas más graves que venderlas.

Todo lo anterior, aunado a la forma y cantidad en que la droga fue incautada, (8.20 gramos, porción que no corresponde a la medida posológica limitada a una dosis), evidencian que hay suficientes elementos probatorios que en el caso que nos ocupa, nos llevan a mantener la medida cautelar personal aplicada.

En virtud de lo expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que, la detención preventiva del señor **RICARDO RAÚL GÓMEZ**, no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo

tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de RICARDO RAÚL GÓMEZ, y por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE ERIC OMAR SAUCEDO, IMPUTADO DEL SUPUESTO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS CONTRA LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JULIO LU OSORIO ha presentado acción de habeas corpus preventivo en favor de ERIC OMAR SAUCEDO, cuya detención fue ordenada por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Librado el mandamiento se ordenó al funcionario demandado rindiera el informe por escrito, tal como lo señala el artículo 2582 del Código Judicial.

La Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial procedió a dar cumplimiento al mandato del Magistrado Sustanciador y remitió el informe a ella solicitado, mediante Oficio N° 970 de 27 de septiembre de 1996, el cual fue recibido en la Secretaria de la Corte, el día 30 de septiembre de 1996, adjuntando al mismo un expediente que contiene las sumarias constantes de 133 fojas.

El referido informe es del tenor siguiente:

"Honorable Magistrado:

Por medio de la presente, procedo en el término que me confiere la ley a rendir el informe solicitado dentro del mandamiento de Habeas Corpus propuesto a favor del señor ERIC OMAR SAUCEDO, en nuestra contra, de la siguiente forma:

A) Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor conocido como OMAR SAUCEDO, mediante la resolución calendada 20 de septiembre del presente año y visible de folios 114 a 119 del proceso principal que al mismo y otros se instruye ante esta Agencia del Ministerio Público, por la supuesta comisión de delitos Contra la Salud Pública (drogas).

B) Los motivos de hecho que fundamentaron la privación preventiva de la libertad ordenada por nuestra Agencia de Instrucción, se originaron en base a una investigación adelantada a nivel preliminar por las Agencias de las Policías Técnicas Judicial de Los Santos y Las Tablas, así como la información que a nivel confidencial manejaba la Sub-DIIP de Los Santos y la Sub-DIIP de Herrera en donde se detallaba una organización dedicada al tráfico y venta de drogas

en el área de La Villa de Los Santos, y señalando como sujetos involucrados en dichas actividades a los señores RICARDO, ELIÉCER, CARLOS Y JOSÉ ISABEL GARRIDO, AMELET Y ALEXANDER APOLAYO, OMAR SAUCEDO, ADRIÁN QUINTERO, ERIC QUICTON GARRIDO, LEONEX BAZÁN, cabe resaltar que de estos sujetos en primera instancia sólo se manejaban con sus apodos como lo eran RIQUI, ELIE, CHOLO, YUYO, BEBIBRÓN, SALSITA, OMAR, PATO, PAPEL Y PIYOYO, respectivamente, así como a los sujetos conocidos con apodos de JACQULINE (A) LA MULA Y TELETÓN.

En vista de esta situación, y por razones de orden investigativo se procedió a montar un operativo encubierto de compra controlada de droga y con ello corroborar las informaciones que a nivel de inteligencia manejaba la Policía, resultando el mismo positivo para la detención en ese momento del señor ELIÉCER GARRIDO, quien fue señalado como el vendedor de la sustancia que se obtuvo en la compra en mención, así como también la detención de los señores RICARDO GARRIDO (A) RIQUI, CARLOS GARRIDO (A) CHOLO, Y AMELET APOLAYO (A) BEBIGRÓN, quien también era conocido como el hermano de Salsita. Luego en dicho operativo se ubicó sustancia ilícita (droga) adicional a la de la compra controlada.

Como podrá percatarse, posterior al operativo arriba señalado consta de folios 30 a 41, y 49 a 68, la gran cantidad de información que manejó la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) de Los Santos y en donde se detallan las acciones investigativas relacionadas con el caso que nos ocupa detallando entre ellas la participación del señor de nombre OMAR en dichas pesquisas y a quien se le vincula directamente con la banda en mención.

También debe señalar la Fiscalía que de folios 69 a 72 del proceso principal consta el informe de inteligencia elaborado por el Inspector CRISTÓBAL HERRERA y el Detective MANUEL REYES en donde se detallan los integrantes de la organización investigada y entre los que figura OMAR SAUCEDO, quien es el accionante en este proceso Constitucional; de igual forma, señala la inteligencia dentro del modus Operandi de los sujetos investigados que el señor OMAR SAUCEDO fue la persona que suministró el dinero para iniciar las labores ilícitas de venta de droga y a la vez lucraba ganancias de dicha situación.

Como puede observarse consta de fojas 42 a 47 del proceso principal la declaración jurada de JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA, quien señalaba expresamente que una de las personas que daba dinero a los hermanos GARRIDO era el sujeto conocido como OMAR, quien vive cerca de los mismos; esta situación señalada por el señor Vásquez puede corroborarse con el croquis de fojas 58 y en donde se observa la cercanía entre las residencias de los indicados GARRIDO Y OMAR.

La Fiscalía adicional a lo anterior tuvo como base también el informe de folios 84 a 87 sobre análisis de documento en donde aparece el nombre OMAR dentro de un documento que fue recuperado en la diligencia de allanamiento efectuada a la residencia de los señores GARRIDO y visible a fojas 89 en donde según el informe se detalla la cantidad de pases de Cocaína que le correspondía al mismo para la venta de Cocaína correspondiente.

Por último, tomó la Fiscalía como base para la detención preventiva del accionante el informe de relación elaborado por el Detective SECUNDINO ÁVILA, en donde se detalla de manera pormenorizada como se establecía la relación directa entre el accionante OMAR SAUCEDO y los demás integrantes de la banda entre los cuales figuraban los señores GARRIDO; para mayor ilustración el Detective ÁVILA procedió a diagramar como estaba formada la organización y la relación directa entre los imputados en el presente proceso.

Todo este caudal probatorio acopiado en la investigación que hemos

detallado anteriormente sirvió de base para proceder de acuerdo a los artículos 2148 y 2149 del Código Judicial, así como al Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994, así como, al Capítulo V, del Título II del Libro I del Código Penal, a ordenar la detención preventiva del accionante OMAR SAUCEDO.

C) En este momento el señor OMAR SAUCEDO no ha sido detenido, por lo tanto, no podemos proceder a la transferencia de lugar a vuestra Máxima Autoridad.

Para sus conocimientos Honorables Magistrados me permito indicarles que el proceso principal seguido a los imputados arriba detallados por la supuesta comisión de delitos Contra la Salud Pública (droga) (copias) ha sido remitido a esa Augusta Corporación a través de la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, ya que por esa vía se tramitaron sendas acciones de habeas corpus en nuestra contra por otros imputados de ese mismo proceso". (Fs. 11, 12 y 13).

El presente negocio tuvo su génesis en la investigación preliminar realizada por las Agencias de la Policía Técnica Judicial de Los Santos y Las Tablas, en base a la información que a nivel confidencial manejaban la SUB-DIIP de Herrera y Los Santos sobre la organización de una banda dedicada al tráfico y venta de drogas, en el área de la Villa de Los Santos, en la cual se encuentra involucrado, entre otros, el beneficiado con esta acción de habeas corpus.

El proponente del habeas corpus manifiesta que a su representado se le vincula de manera subjetiva, como la persona que financia la actividad delictiva del narcotráfico de los hermanos GARRIDO, y que la orden de detención preventiva emitida en su contra resulta a todas luces ilegal, ya que no se dan los presupuestos legales que demandan los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Por otra parte sostiene que su representado no ha sido llamado a rendir indagatoria y se ha enterado que pesa sobre su persona una orden de detención.

Sobre este punto, el PLENO advierte, que las sumarias se inician con el informe remitido a la Fiscalía Superior del Cuarto Distrito Judicial por el Jefe de la Sub Agencia de la Policía Técnica Judicial de Los Santos (f. 1), en donde solicitan la autorización para una operación encubierta de compra controlada de drogas, debido a la gran cantidad de informes de seguimiento y vigilancia que tienen contra los Hermanos GARRIDO, quienes residen en la Calle Tomás Herrera, Sector de Llano del Río, de la Villa de Los Santos. A tal efecto, el representante del Ministerio Público procedió a ordenar la referida solicitud mediante providencia de fecha 16 de septiembre de 1996, por la cual se autoriza a la Policía Técnica Judicial de Los Santos para realizar el operativo en mención y asignándose la suma de Diez Balboas, con la descripción de las denominaciones de cinco billetes de un balboa y un billete de cinco balboas (f. 3), para ser utilizados en dicha operación.

Consta a foja 7 del expediente el informe sobre el operativo encubierto en el cual el agente encubierto particular denominado "El Arrepentido" manifestó que la compra se la había realizado al sujeto conocido como ELIE GARRIDO, haciendo entrega de dos (2) sobrecitos transparentes que en su interior contenían una sustancia en polvo de color blanco. En este informe se detalla que una vez que fue sometida a la prueba de campo, dio como resultado positivo para la conocida droga COCAÍNA. Ello se corrobora en la diligencia de prueba de campo visible a foja 12 del expediente.

Posteriormente la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, ordenó el allanamiento y registro del sujeto descrito como vendedor, señor ELIÉCER GARRIDO CORTEZ, encontrándose los billetes que fueron utilizados en la operación, además, en el área donde estaba el prenombrado señor GARRIDO, se localizó un envase de Vick Vaporub que contenía en su interior dos sobrecitos plásticos transparentes con polvo color blanco que se presume sea cocaína. Además, se procedió al allanamiento de las viviendas de los Hermanos GARRIDO CORTEZ y la del señor ADRIÁN QUINTERO HIGUERA.

De conformidad con las constancias de autos, en la declaración jurada rendida por el señor JOSÉ LONNY VÁSQUEZ AVILA, quien denunció la venta de cocaína que se da en la residencia de los hermanos GARRIDO (f. 427), y quienes son sus vecinos y señaló al beneficiado con esta acción de habeas corpus (f. 44) como la persona que da la plata a los hermanos GARRIDO para que compren la droga, manifestando que "él se llama OMAR h (sic) de Aida, que maneja un bus Colegial, de color amarillo y que vive cerca de los Hermanos GARRIDO". A fin de ilustrar al funcionario de instrucción este testigo (JOSÉ LONNY VÁSQUEZ) confeccionó un croquis, visible a foja 48 en el que describe la estructura de la casa de los referidos Hermanos GARRIDO. Observa el Pleno que el apoderado judicial del señor SAUCEDO indica que su representado es conductor de un bus colegial de propiedad de la Licenciada ILKA SANTOS DE PINZÓN, corroborando en parte lo aseverado por este testigo.

Se observa también en el informe de inteligencia (f. 72) una síntesis del modus operandi de esta banda, concluyendo que:

> "Una vez analizadas las denuncias y los informes de vigilancias, nos hemos podido percatar, que nos encontramos frente a una organización encabezada por los hermanos GARRIDO, quienes se han asociado para traficar y vender sustancias ilícitas en nuestra región, lucrándose y haciéndose de esta actividad su forma de vida, utilizando también a los señores ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR (Salsita), AMELETH ANTONIO APOLAYO RIVAS (Bebigrón), ADRIÁN QUINTERO HIGUERA (Pato), PIYOYO y JACKELINE LA MULA, para que sirvan como colaboradores en este negocio.
>
> El sujeto de nombre OMAR SAUCEDO, figura en la Organización, como la persona que incentivó materialmente, la actividad ilícita que originó esta investigación".

Por otra parte, en el allanamiento realizado se encontró un documento identificado como documento B, donde aparecen unos apodos que se identifican con los nombres de las personas que se encuentran involucradas en este ilícito y en el cual está incluido el nombre de "OMAR, después de cada nombre o apodo aparecen unas cantidades, que se presumen la cantidad de droga repartida para la venta.

A pesar de que el apoderado judicial sostiene que su defendido no ha sido llamado a rendir indagatoria, existe en el expediente a foja 91-92 la providencia dictada por la Fiscalía Primera del Cuarto Distrito Judicial, en la cual se ordena requerir declaración indagatoria de los señores "ELIÉZER GARRIDO CORTEZ, RICARDO GARRIDO CORTEZ, JOSÉ ISABEL GARRIDO CORTEZ, CARLOS GARRIDO CORTEZ, OMAR SAUCEDO, ADRIÁN QUINTERO, ALEXANDER APOLAYO, AMELETH APOLAYO, PIYOYO, JAQUELINE, PAPEL Y TELETÓN, por su vinculación directa en la comisión de delitos relacionados con Drogas (CONTRA LA SALUD PÚBLICA)".

Por último, se lee a foja 114 del expediente que el 20 de septiembre de 1996 la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante diligencia motivada, ordenó la detención preventiva de las personas supuestamente involucradas en el ilícito, en la cual se incluye al señor OMAR SAUCEDO.

Así las cosas, en el estado en que se encuentra la incipiente imvestigación, dan cuenta los autos a cargo del funcionario instructor, de la existencia de por lo menos graves indicios que vinculan al señor OMAR SAUCEDO con el ilícito investigado, pues el conjunto de los elementos probatorios allegados a la investigación, en esa fase inicial del presente proceso penal, así lo acreditan, sobre todo cuando los hechos objeto de investigación penal están relacionados con una organización dedicada al tráfico y venta de drogas.

Se concluye, pues, que la detención preventiva decretada por el funcionario de instrucción se justifica legalmente, al tenor de los presupuestos contemplados por el artículo 2159 en concordancia con el artículo 2148 del Código Judicial, sin que ello impida que posteriormente cambie la situación procesal del presunto implicado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dictada contra el señor OMAR SAUCEDO, por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO VALENTINO HAMILTON DOWNER EN CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **GONZALO ANTONIO MONCADA LUNA** ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 19 de septiembre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declaró legal la detención preventiva de **RICARDO VALENTINO HAMILTON.**

El apelante sostiene que el Auto impugnado se aparta de la verdad material del expediente, ya que en el mismo no existe "ningún ELEMENTO PROBATORIO que establezca la comisión de un ilícito, mucho menos pruebas en contra de RICARDO HAMILTON, que sirvan para fundamentar una orden de detención preventiva". Por tanto, sostiene que no se cumple con los requisitos que establece el artículo 2159 del Código Judicial, pues no figura elemento probatorio contra la persona cuya detención se ordena, ni para la comprobación del hecho punible, por lo que se vulneran los derechos fundamentales de su defendido.

En la resolución apelada se informa que el habeas corpus fue interpuesto contra el Juez Quinto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, en base a que la orden de detención que éste dictó carece de consistencia jurídica en la actualidad, porque el expediente contentivo de las sumarias seguidas a **RICARDO VALENTINO HAMILTON** se encuentra extraviado, por lo que al confirmar el auto de llamamiento a juicio, no figuran en el expediente las pruebas invocadas para ordenar la detención.

Así, del informe del funcionario acusado se desprende que el fallo apelado expresa como antecedentes que, mediante Auto N° 15 de 4 de marzo de 1993, el Juez de Circuito ordenó la detención preventiva del favorecido con esta acción quien, junto a otras personas, fue llamado a juicio, como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el capítulo V, Título VII, Libro II del Código Penal. Este auto fue apelado y confirmado por el Tribunal Superior, mediante resolución de 28 de agosto de 1996, por lo que a la fecha se encuentra pendiente la captura del imputado.

Destácase que, en la resolución que confirma el auto de enjuiciamiento, se dejó constancia de que no existe vicio de forma en este proceso, pues el juzgador de instancia satisfizo los requerimientos procesales para remediar lo relativo al extravío del expediente, de conformidad con las normas sobre reposición de expedientes.

En mérito de lo anterior, concluye el tribunal de habeas corpus, señalando:
"...
Luego de examinar las piezas procesales, pareciera que la parte

demandante pretende intentar una nueva revisión de la calificación de la fase intermedia a través de un Juicio Especial Constitucional de Habeas Corpus, aun cuando este Tribunal ha examinado las piezas procesales y determinó que están reunidos los presupuestos legales exigidos por el artículo 2222 del Código Judicial, para someter al imputado RICARDO VALENTINO HAMILTON DOWNER a los rigores de un enjuiciamiento criminal, esto significa que está comprobada la existencia del hecho punible, constan graves indicios de responsabilidad penal contra el imputado y fueron satisfechas las exigencias legales para sustentar la medida cautelar personal aplicada al imputado HAMILTON DOWNER.

Los argumentos del demandante no son admisibles, porque el hecho punible está comprobado, consiste en un delito Contra la Salud Pública relacionado con Drogas, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas y permite la detención preventiva, por consiguiente, fueron satisfechos los presupuestos legales contemplados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para esta finalidad.

Siendo ello así, debe declararse legal la detención preventiva porque no han concurrido los cargos de injuridicidad formulados por la parte demandante, además existe un pronunciamiento de este Tribunal que en segunda instancia ha confirmado el auto de enjuiciamiento. ...". (Fs. 9-10).

A juicio de la Corte, la legalidad de la detención declarada por el Segundo Tribunal Superior está justificada, pues el examen que realizó se limitó a la constatación de los presupuestos legales que debía contener el fallo de 4 de marzo de 1993, mediante el cual ordenó la detención de **RICARDO VALERIO HAMILTON** y, también lo llamó a responder en juicio criminal por delito contra la Salud Pública.

Si bien es cierto que el expediente estuvo extraviado, el mismo fue repuesto siguiendo lo normado en el Código Judicial. Los presupuestos establecidos por los artículos 2148 y 2159 del citado texto legal, en el caso concreto, fueron corroborados en la resolución de 28 de agosto de 1996, que consta de fojas 189 a 196 del expediente antecedente, en la que se alude a la comprobación de la existencia del delito contra la Salud Pública relacionado con Drogas; a las piezas probatorias recuperadas en copias que demuestran la vinculación objetiva y subjetiva del procesado **HAMILTON** con el hecho punible, así como los cargos que en su contra formula el señor RIVERA, los informes policivos ratificados y el testimonio de un agente de aduanas de los Estados Unidos, sobre la droga que llegó al aeropuerto de Nueva York procedente de Panamá.

Por tanto, considera el Pleno que, debido a que el delito imputado conlleva pena mínima privativa de libertad superior a dos años de prisión y como se ha comprobado que existen méritos para llamar a juicio al favorecido con la acción de habeas corpus, resulta procedente mantener la orden de detención preventiva hasta que se decida la causa.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución apelada, de 19 de septiembre de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ADOLFO JOSÉ MENDOZA NOGUERA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **ADOLFO JOSÉ MENDOZA NOGUERA** ha interpuesto acción de **HABEAS CORPUS** a su favor contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Librado el Mandamiento de habeas corpus, la autoridad acusada contestó en los siguientes términos:

> "Con la finalidad de darle respuesta al mandamiento de habeas corpus, librado en contra del Fiscal Auxiliar, y a favor del señor JOSÉ ADOLFO MENDOZA NOGUERA, comunico a usted que el prenombrado ha sido investigado por varios casos, e informo lo siguiente:
>
> a. Denunciado por el delito de ESTAFA, suscrita por señor OVIDIO CORONADO SÁNCHEZ, entrada N° 2419 del día 2 de julio del 96. Traspaso a la Cárcel Modelo N° 10248.
>
> b. Denunciado por el delito de ESTAFA, suscrita por OVIDIO MENDOZA SÁNCHEZ, entrada N° 2414 el día 2 de julio del 96, y remitido a la Fiscalía 3era. del Circuito, con el oficio N° 10293, el día 4 de julio del 96. Traspaso a la Cárcel Modelo N° 10292.
>
> c. Denunciado por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, suscrita por HERMENEGILDO MIRANDA GRAJALES, entrada N° 2587, del día 15 de julio del 96, y remitido a la P. T. J., con el oficio N° 10938, el 18 de julio del 96.
>
> d. Denunciado por el delito de FALSIFICACIÓN, por el señor NAJAT HAILE BURGOS MATA, entrada N° 2438 del día 3 de julio del 96, y remitido a la Fiscalía 3era. del Circuito, con el oficio N° 10505, el 12 de julio del 96.
>
> En virtud de lo anterior, los casos ventilados en esta Agencia del Ministerio Público, fueron tramitados a otras Agencia de instrucción, con la finalidad de cumplir el principio del "impulso procesal".

Debido a la circunstancia expresada en el informe transcrito, de que el favorecido con esta acción no se encuentra a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República debido a que las denuncias interpuestas en su contra fueron remitidas a diversas Fiscalías de Circuito, el Pleno de la Corte no es competente para conocer de esta acción constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor ante el Pleno de la Corte Suprema y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario del Ministerio Público rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "A- La orden de detención del ciudadano ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de fecha diecinueve (19) de agosto de 1996.
>
> B- Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS, se reflejan en que ..., siendo las 14:30 horas del día miércoles 14 de agosto del presente año, unidades de policía de San Miguelito recibieron información relativa a la presencia de varios sujetos, entre ellos CARLOS CASAS (a) Calito, se habían introducido a la casa 29-98, ubicada en el sector 29 de Nuevo Veranillo, y quienes portaban posiblemente drogas, las cuales procederían a empacar. Por lo antes señalado se trasladan las unidades al lugar, encontrando en la residencia al señor ROBERTO HERNÁNDEZ, a quien le solicitaron su debida identificación y le preguntaron si adentro de la residencia habían otras personas contestando que no. En ese momento se visualizó a un sujeto en actitud sospechosa en la parte de atrás de dicha residencia, por lo que le solicitaron al señor ROBERTO HERNÁNDEZ autorización para entrar en los predios de su residencia, por lo que el propio HERNÁNDEZ se (sic) solicitó a las personas que salieran, siendo estas CARLOS ALEXIS MARTÍNEZ, JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ y ADANARIS CRISTY AROSEMENA. Le solicitaron nuevamente al señor HERNÁNDEZ les facilitara el registro de la propiedad, accediendo este a la misma, encontrando el sgto. JOSÉ TAJU en uno de los huecos de la última línea de bloques del muro un cartucho plástico blanco que contenía en su interior dos (2) bolsitas plásticas transparentes que contenían 60 envoltorios de papel aluminio con sustancias sólidas color crema presumiblemente droga (crack), una (1) bolsita plástica transparente que contenía 65 envoltorios de papel aluminio de un fragmento sólido color crema presumiblemente droga (crack), una (1) bolsita plástica transparente que contenía la cantidad de 28 envoltorios en papel aluminio de un fragmento sólido color crema presumiblemente droga (crack), cincuenta y ocho carrizos plásticos contentivos de polvo blanco presumiblemente droga (cocaína), una (1) bolsita transparente que contenía 17 sobresitos (sic) plásticos transparentes con un polvo color blanco presumiblemente droga (cocaína).
>
> A fojas 32-38 se observa la declaración indagatoria rendida por el señor ROBERTO HERNÁNDEZ, quien manifestó que el pasado día 14 de agosto se encontraba repellando, que llegaron dos menores agitados y le pidieron agua, por lo que les dijo que pasaran a su casa y que tomaran el agua. Luego a los pocos minutos llegaron los funcionarios del D. I. I. P., le preguntaron que quien (sic) era el propietario de la residencia respondiendo que era él. Que la porquería que encontraron al otro lado de la casa del vecino el (sic) pensaba que era del menor. A fojas 24 del dossier se observa la prueba de campo efectuada a las sustancias encontradas resultando posistivas (sic) para COCAÍNA y CRACK." (Fs. 6-8).

Tenemos, pues, que **ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS** fue detenido en momentos en que se encontraba en su casa repellando un muro. Tal como lo afirmó el señor Fiscal, en su declaración indagatoria, el señor **HERNÁNDEZ**, negó ser dueño de la sustancia incautada y explicó que los dos menores (CARLOS ALBERTO CASAS y ADANARIS CRISTY AROSEMENA TREJOS) habían entrado minutos antes a su residencia pidiéndole agua y que piensa que la droga le pertenece al menor **CARLOS ALBERTO CASAS**. Este último al declarar (fs. 28-29) negó la propiedad de la droga, y dijo que la primera vez que vio a **ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS** fue el día de los hechos, pues le pidió agua en su casa.

Al rendir declaración la menor **ADANARIS KRISTIN AROSEMENA TREJOS** (fs. 30-31) explicó que al llegar los agentes captores, ella se metió en una casa ajena y corrió hacia atrás para esconder la droga que tenía en su poder; que al incautársele la droga ella dijo que era suya porque se iban a llevar a una muchacha, al dueño de la casa que estaba en una escalera haciendo un trabajo y a unos muchachos que estaban por allí durmiendo y que no sabe quiénes son. Dijo que en los dos años que tiene en la actividad ilícita, es la primera vez que la detienen y que no conoce a **ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS y a CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS** sólo "de vista".

A fojas 40 y 41 del sumario se lee la orden de detención preventiva de **ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS**, que en su parte motiva indica como fundamentos para la detención los "suficientes elementos incriminatorios que vinculan la persona del señor **ROJAS** con la perpetuación del mismo ... se tiene el indicio de oportunidad en contra del mismo, toda vez que la sustancia ilícita ... fue encontrada en su residencia ... No ofrece serios argumentos que justifiquen la presencia de los menores en su residencia, situación esta que se traduce en mala justificación.".

Observa la Corte que en el presente caso no se encuentran claramente evidenciados los indicios contra el recurrente que la Fiscalía explica en la orden de detención. Veamos. Los agentes captores coinciden con **HERNÁNDEZ ROJAS** en que al momento de presentarse los primeros, éste se encontraba en su residencia, arriba de una escalera repellando un muro; al solicitarse la revisión de la residencia **HERNÁNDEZ ROJAS** accede y descubierta la sustancia, la menor **ADANARIS KRISTIN AROSEMENA TREJOS** manifiesta que es de su propiedad, y al rendir declaración niega conocer al dueño de la casa. Tanto ella como el menor **CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS** coinciden con **HERNÁNDEZ ROJAS** en afirmar que no lo conocen y que entraron a su casa el día de los hechos pidiéndole agua.

El Sargento **JOSÉ TAJU**, uno de los agentes que participó en la aprehensión, declaró a foja 56 que el dueño de la casa en ningún momento opuso resistencia y que accedió a la revisión tanto del patio de la casa como del interior; y que fue en el muro posterior de la casa donde se localizó la droga. También explicó que la menor desde el primer momento manifestó que la droga era de su propiedad.

Por otro lado, en el informe visible a foja 1 del sumario se lee que las informaciones que condujeron a la aprehensión de **ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS**, indicaban la presencia en la casa N° 29-98 del sector de Veranillo, de un menor de nombre **CARLOS CASA (A) CALITO** que presumiblemente se estaba dedicando al tráfico y venta de sustancias ilícitas. Similar información se observa a fojas 3 del expediente, donde el informante telefónico afirmó que en la residencia 29-98 en la que entraron los dos menores de edad, se encontraba un hombre afuera trabajando en una escalera y que se llama **ROBERTO**.

A fojas 50 del sumario aparece una certificación expedida por el Dr. **ALEJANDRO PÉREZ MÉNDEZ**, Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, quien al examinar a ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS, en el punto tres (3) indicó: "**La evaluación revela Retraso Mental**"; mientras que a foja 52 explica: "FLUJO Y CONTENIDO DEL PENSAMIENTO: Concreto, no hace abstracciones. ... FUNCIONES INTELECTUALES Y CAPACIDAD DE JUICIO CRITICO: **Deficiente**."

Todo lo anteriormente explicado nos lleva al convencimiento de que en el presente caso existen serias dudas en cuanto a la responsabilidad de **HERNÁNDEZ ROJAS** en la comisión del ilícito. La mala justificación que, según la Fiscalía,

da el recurrente de la presencia de los menores en su casa, es comprensible si se toma en cuenta que se trata de una persona con retardo mental que de buena fe permitió el paso de los menores a su casa porque tenían sed. Por otro lado, la versión de la menor **ADANARIS KRISTIN AROSEMENA TREJOS** coincide perfectamente tanto con lo que manifestó **HERNÁNDEZ ROJAS** en cuanto a que entraron a pedirle agua, como con el sitio en que fue encontrada la droga (ver foja 30 línea 21) por el agente captor (foja 55, línea 4).

Advierte la Corte que ninguno de los aprehendidos en la presente encuesta le formula cargos a **HERNÁNDEZ ROJAS**, quien en nuestra opinión, ha sido involucrado por las circunstancias en este hecho en el cual, hasta el momento, no pareciera caberle responsabilidad alguna. Por ello, y en atención a los principios de *in dubio pro reo* y *favor libertatis*, consideramos que lo procedente es declarar ilegal la detención preventiva del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra ROBERTO HERNÁNDEZ ROJAS y en consecuencia, ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, siempre y cuando no tenga otra causa pendiente por la cual deba permanecer detenido.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JULIO CÉSAR CONTRERAS Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CÉSAR AUGUSTO RAMOS CANDELARIA ha interpuesto acción de **Habeas Corpus** a favor de **JULIO CÉSAR CONTRERAS GÓMEZ** contra el Director de Migración y Naturalización.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado contestó expresando lo siguiente:

"...

a) El señor JULIO CESAR CONTRERAS, de nacionalidad peruana, fue aprehendido por funcionarios de Migración de Río Sereno, posteriormente remitido a la señora Esther Barrera, encargada de migración Chiriquí, mediante nota del 15 de septiembre de 1996. La señora Barrera procedió a enviar al señor JULIO CESAR CONTRERAS a la Dirección Central, mediante nota #577-DMCH-96 del 16 de septiembre de 1996. Posteriormente, se procedió a emitir la orden de detención contra el señor JULIO CÉSAR CONTRERAS, de nacionalidad peruana, mediante Resolución N° DMSI-0070 del 16 de septiembre de 1996, por indocumentado.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:

PRIMERO: Que el día 13 de septiembre de 1996, el señor JULIO CESAR CONTRERAS fue detenido por funcionarios de Migración de Río Sereno, ya que el mismo se encontraba en actitud sospechosa en un lugar

fronterizo, llamado la Unión de Río Sereno, junto con dos (2) personas más, de nacionalidad ecuatoriana. Al momento de solicitarle su documentación, el mismo carecía de la visa requerida para ingresar a nuestro territorio.

SEGUNDO: Que posteriormente, se procedió a remitir a dicho ciudadano al Departamento de Migración de la provincia de Chiriquí, junto con un informe que realizara el señor Víctor Manuel Serracín M., encargado de Migración Río Sereno. En dicho informe hace alusión al hecho de que, de acuerdo a investigaciones realizadas al señor JULIO CÉSAR CONTRERAS GÓMEZ, de nacionalidad peruana, era el guía de un grupo de indostanes que fueron detenidos por autoridades de Costa Rica y enviados a nuestro país.

TERCERO: Que la directora encargada de Migración Chiriquí procedió a trasladar al ciudadano en mención y una vez en nuestras instalaciones se pudo comprobar que mediante Resolución #3699 del 25 de junio de 1996, se había deportado del territorio nacional al señor JULIO CÉSAR CONTRERAS GÓMEZ, por no portar documentos que acreditasen su residencia legal en el país.

CUARTO: Que en esa primera ocasión, dicho señor también fue encontrado en actitud sospechosa y según informativo tomado al señor Contreras, con fecha del 21 de junio de 1996, ingresó al territorio nacional con las mismas intenciones; ya que fue el encargado del traslado de varios ciudadanos indostanes.

QUINTO: Que, de acuerdo a todos estos elementos, esta Dirección procedió a emitir la Resolución #6681 del 26 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aplica lo establecido en el artículo 67 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, por haber ingresado nuevamente al territorio nacional, luego de haber sido deportado en junio de este mismo año.

SEXTO: Que, dicha resolución le fue debidamente notificada y a la fecha, existe un recurso de reconsideración con Apelación en subsidio, el cual está siendo resuelto por esta Dirección.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1990, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6a. del 5 de marzo de 1990, específicamente los artículos 67, 85 y 86, que al tenor establecen lo siguiente: ..." (Pág. 7-8)

Como se desprende del informe citado, el favorecido con esta acción, JULIO CESAR CONTRERAS de nacionalidad peruana, fue capturado con otros extranjeros en el área fronteriza de Río Sereno por encontrarse indocumentado. De acuerdo a informes de la autoridades de Migración en Chiriquí se tuvo conocimiento de que dicho ciudadano se dedicaba al traslado de indostanes al territorio de Costa Rica y que contra él ya se había dictado y ejecutado orden de deportación en junio de este mismo año, por lo que se procedió a girar, por segunda vez, orden de deportación, en atención a lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, por haber ingresado nuevamente al territorio nacional, luego de haber sido deportado.

Aunado a lo anterior, como se hace saber en el punto a) del informe y se ha podido comprobar en el expediente, contra el señor JULIO CÉSAR CONTRERAS se emitió orden de detención, mediante Resolución N° DNMSI-0070 del 16 de septiembre de 1996, debido al hecho de no poseer documentos que acrediten su permanencia legal en el país, con fundamento de derecho en los artículos 58, 60, 61 y 62 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960.

Por lo expresado, resulta evidente que en este caso se cumplen los presupuestos legales para mantener la detención preventiva de ciudadano extranjero, hasta que se decidan los recursos de reconsideración y apelación, determinándose en forma definitiva si procede su deportación.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de JULIO CÉSAR CONTRERAS y, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Director de Migración.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS CAICEDO MURILLO Y EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

ALEXIS CAICEDO MURILLO interpuso acción de habeas corpus a su favor ante el Pleno de la Corte Suprema y contra el Fiscal Cuarto Superior quien, mediante oficio N° 3173 de 1° de octubre de 1996, manifestó que dicho detenido se encuentra a órdenes del Segundo Tribunal Superior, para la calificación del sumario que se le instruye por el delito de homicidio en perjuicio de TEODORO HENRÍQUEZ SALAZAR.

Enderezada la acción hacia el Segundo Tribunal Superior, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus, que fue contestado por el Magistrado ANDRÉS ALMENDRAL, mediante informe de conducta, visible de foja 9 a 10:

> "a) No es cierto que ordené la detención del recurrente;
>
> b) Dada la respuesta anterior, me es imposible exponer los motivos de hecho y de derecho que tuve para ello; y
>
> c) Es cierto que en la actualidad tengo a mis órdenes a dicho detenido, por lo que en esta misma fecha y mediante oficio, cuya copia adjunto, le estoy comunicando al señor Director de la Cárcel Modelo que se sirvan poner bajo vuestras órdenes al señor CAICEDO MURILLO.
>
> ... el señor CAICEDO MURILLO se encuentra en la actualidad vinculado en un sumario que se le instruyó en la Fiscalía Cuarta Superior por el delito de homicidio en perjuicio de quien en vida se llamara Teodoro Henríquez Salazar, debido a un incidente cruento acontecido el día 2 de diciembre de 1995 en la Barriada de Curundu del Distrito de Panamá. La Fiscalía Auxiliar de la República, quien fue el primer despacho oficial que tuvo conocimiento de lo ocurrido ordenó la detención preventiva de CAICEDO en los términos de la diligencia escrita que figura de fojas 32 a 34 y que per se explica.".

Consta en el sumario la orden de detención de **ALEXIS CAICEDO**, a que hace alusión el Magistrado ALMENDRAL; la misma contiene los fundamentos de hecho y de derecho que la motivan, entre los cuales se destaca el hecho de que en las investigaciones iniciales se determinó que el hoy occiso, TEODORO HENRÍQUEZ SALAZAR, fue ultimado a tiros el día 2 de diciembre de 1995 frente a la abarrotería LAU en el sector de Curundú, en momentos en que se encontraba con su hermano mellizo **TEODOSIO ENRIQUE SALAZAR**, quien también resultó herido en un pie, por dos sujetos identificados como **ERNESTITO (A) CALAVERITA** y un sujeto apodado

TORD.

Las declaraciones rendidas por TEODOSIO ENRIQUE SALAZAR, indican que el día del suceso, tres sujetos se bajaron de un vehículo Toyota, color chocolate, y al rato escuchó varias detonaciones, empezó a correr y fue alcanzado en el pie izquierdo, pero optó por seguir corriendo, pudiendo percatarse que los sujetos **ERNESTITO, TORD,** y un tercer sujeto señalado por el nombre de **ALEXIS CAICEDO**, le disparaban a su hermano TEODORO. Manifestó que ALEXIS CAICEDO tenía una pistola calibre 9mm. color negra, y TORD tenía un revólver calibre 38 color negro.

El menor de doce años y hermano del occiso, **TELIO HENRÍQUEZ SALAZAR,** declaró haber sido testigo presencial del homicidio y manifiesta que ERNESTITO y TORD le dispararon en la pierna y espalda a TEODORO, y que por otro lado, ALEX CAICEDO, perseguía al otro hermano (TEODOSIO), hiriéndolo en el pie pero sin lograr alcanzarle, y luego uniéndose a los otros compañeros y entre los tres (3) ultimaron, de varias detonaciones, ya que estaban todos armados, a TEODORO HENRÍQUEZ SALAZAR.

Respecto a la vinculación de **ALEXIS CAICEDO** con el delito el funcionario de instrucción indicó lo siguiente:

> "Aunado a lo antes señalado, cabe advertir que existen señalamientos directos concretos contra los sujetos involucrados, y en particular obra en autos el señalamiento directo en la persona de ALEXIS CAICEDO, sujeto este que se mantiene detenido en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, de acuerdo a informe de novedad de la Policía Nacional, en el sentido de que fue uno de los sujetos que en complicidad con los otros dos (2) sujetos autores del hecho criminoso, descargó su arma sobre el cuerpo del infortunado e indefenso ciudadano.
>
> ... hubo premeditación en la ejecución del delito, lo cual se refleja en el modus operandi desplegado por los tres (3) sujetos, en forma simultánea, igualmente cabe advertir que el sujeto aprehendido ALEXIS CAICEDO, mantiene una hoja de pésimos antecedentes criminales orientada hacia el mismo tipo criminoso, lo cual muestra que es un sujeto reincidente en este tipo de conducta típica y de alta peligrosidad.". (Fs. 33-34).

De fojas 397 a 417 del expediente principal, se aprecia la Vista Fiscal N° 130 de 14 de agosto de 1996, en la cual la Fiscalía solicita el encausamiento criminal de **ALEXIS CAICEDO**, contra quien también pesan las declaraciones de **ANDREIR HENRÍQUEZ SALAZAR y LEÓN TUGRI SALAZAR**, que afirman que fue él quien en compañía de TORD y ERNESTITO dispararon a TEODORO.

Pese a que el sindicado niega toda participación en el homicidio, resulta además vinculante el hecho de que habiendo declarado no conocer a TORD, ERNESTITO, TEODOSIO HENRÍQUEZ SALAZAR y el hoy occiso, la testigo que apoya la coartada de CAICEDO, **URSULA BETHANCOURT** declaró que entre él y los mellizos SALAZAR existía grave enemistad.

Por todo lo anterior, debemos concluir que, en el caso de **ALEXIS CAICEDO MURILLO**, existen graves indicios que lo vinculan con el ilícito investigado, por lo cual se hace necesario que el proceso continúe su trámite y se determine su posible responsabilidad en el mismo.

Se trata de delito sancionado con pena mínima superior a dos (2) años, por tanto, se encuentran cumplidos los requisitos del artículo 2148 del Código Judicial para que una persona pueda ser detenida preventivamente y así procede declararlo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ALEXIS CAICEDO MURILLO, y en consecuencia, ORDENA que sea filiado nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ISAAC GARRIDO CORTÉZ (A) "CHOLO" CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 2 de octubre de 1996 se recibió en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el cuadernillo acción de habeas corpus promovida por el interno **CARLOS GARRIDO** y contra la **Agencia Regional de Drogas de las provincias de Herrera y Los Santos**; el cual contiene el auto de 27 de septiembre de 1996 en el cual el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial por razón de competencia se inhibió de conocer la demanda interpuesta y en su lugar, lo envía a esta corporación de justicia.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

El recurrente Carlos Garrido, afirma que se le están violando sus derechos constitucionales por la detención que sufre desde el 18 de septiembre de 1996.

Explica que se dirigía a la casa de sus padres y en ese momento se estaba realizando un allanamiento; que casi al llegar el señor Marquel Mora le informó que tenía que acompañarlo a la Policía Técnica Judicial de las Tablas y luego lo llevaron al cuartel de Guararé. Al día siguiente fue llamado a declarar, siendo informado que estaba acusado por la Secretaría de Drogas de ser cómplice en un delito contra la Salud Pública. Afirma que no se le encontró nada ilícito en su poder.

Por tales motivos estima que carece de legalidad su detención y que por su parte no existe vinculación con algún hecho que sea punible (fs. 1-2).

SUSTANCIACIÓN

La licenciada Nedelka Díaz de Castillo, Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, da respuesta al libramiento de Habeas Corpus, mediante oficio N° 964 de 26 de septiembre de 1996 en el cual informa:

> "1- Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor CARLOS GARRIDO, mediante la Resolución calendada veinte (20) de septiembre de este año, por encontrarse imputado por la supuesta comisión de Delitos Contra la Salud Pública (drogas), dicha resolución se encuentra visible a fojas 114 a 119 del proceso principal.
>
> 2- Los motivos de hecho que dieron origen a la privación preventiva de la libertad al señor Garrido, tiene su fundamento en la investigación que al mismo y otros se le sigue ante esta Agencia del Ministerio Público por la comisión de Delitos Contra la Salud Pública (droga).
>
> El inicio de la investigación correspondiente se debió a una gran

cantidad de información que a nivel confidencial recolectaron las Agencias de las Policías Técnicas Judicial y Zonas de Policías (Sub-DIIP) del área con respecto a la asociación para la venta y distribución de drogas en La Villa de Los Santos por parte de los señores RICARDO, ELIECER, CARLOS Y JOSÉ ISABEL GARRIDO, AMELET Y ALEXANDER APOLAYO, OMAR SAUCEDO, ADRIÁN QUINTERO, ERIC QUICTON GARRIDO, LEONECE BAZÁN y unos sujetos conocidos como JAQUELINE LA MULA Y TELETÓN, dejamos constancia que en la fase inicial de la investigación de la mayoría de estos señores sólo se conocían sus apodos. En vista de esta situación se procedió a montar un operativo encubierto de compra controlada de drogas el cual resultó positivo para detectar y posteriormente encontrar droga ilícita así como para la captura del señor ELIECER GARRIDO quien fue señalado como el vendedor en este operativo.

Continuando con el curso de las investigaciones la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) de Los Santos y P. T. J. de Las Tablas, así como la Sub-DIIP de Los Santos nos remitieron todos y cada uno de los informes de seguimiento en donde constaba la información obtenida, la verificación de la información, la vigilancia y las demás investigaciones de campo detallando la actividad delictiva a la que se dedicaban los sujetos arriba señalados y entre los que se contaba el señor CARLOS GARRIDO (A) CHOLO como uno de los vendedores de droga en área de Los Santos. Véase fojas 29 a 41, 49 a 68, 78 a 83 del proceso principal.

También consta de fojas 69 a 72 el informe de inteligencia suscrito por el Inspector Cristóbal Herrera y el Detective Manuel Reyes en donde se detalla la manera en que operaba la organización delictiva compuesta por los imputados de este proceso y entre los cuales figura el señor CARLOS GARRIDO (A) CHOLO.

De igual forma debe destacarse la declaración jurada del señor JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA visible de folios 42 a 47 en donde le formulan cargos directos al señor (A) CHOLO (CARLOS GARRIDO), como vendedor de drogas conjuntamente con sus hermanos en el área de Los Santos, así como la persona que hacía de una especie de mula para el traslado del material ilícito (droga).

También cobra importancia la declaración indagatoria rendida por el señor ADRIÁN QUINTERO HIGUERA y visible a fojas 120 a 123 en donde se le formula cargos a CHOLO GARRIDO (CARLOS GARRIDO) como vendedor de sustancia ilícita (droga) en el área de Los Santos.

Por último debemos destacar el informe de relación suscrito por el Detective Secundino Avila de la Organización Regional Anti-Drogas, en donde explica la manera en que estaba organizada la banda así como la relación directa de todos y cada uno de los sujetos involucrados en el presente proceso; también de manera técnica diagrama dicha relación. Como ustedes podrán observar Honorables Magistrados nos encontramos ante una serie de conductas que mantienen relación directa con delitos de drogas, ante ello podemos mencionar la Asociación Ilícita, La Venta y Tráfico de Drogas en el área de La Villa de Los Santos por lo tanto de acuerdo al Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y de 13 de 27 de julio de 1994, así como a los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, para ordenar como en efecto se ordenó la detención preventiva del señor Garrido (a) Cholo.

3. El señor GARRIDO (a) CHOLO se encuentra detenido a nuestras órdenes en la cárcel Pública de Chitré pero por indicaciones de la Resolución de fojas 4 y 5 del presente cuadernillo procedemos a ponerlo a órdenes de la honorable Corte Suprema de Justicia hasta que se decida la causa que nos ocupa".

CONSIDERACIONES DEL PLENO

A objeto de determinar si la detención que está sufriendo el señor Carlos Isaac Garrido Cortez tiene soporte legal, corresponde al Pleno verificar lo afirmado tanto por el recurrente como por la autoridad demandada; para lo cual nos remitimos al expediente principal.

En efecto, las constancias procesales son indicativas de que desde el mes de julio las autoridades recibieron diversas informaciones en las cuales se involucraba a los hermanos Garrido **-Ricardo**, **José Isabel**, **Eliecer y Carlos-** en la venta y tráfico de drogas en el sector de La Villa de Los Santos.

En consecuencia, correspondió a la Policía Técnica Judicial y a la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial, de las distintas zonas de policías del área, adelantar las investigaciones al respecto. Con base a la información recolectada y a la vigilancia desplegada (fs. 60-66), se concluyó en el Informe de Inteligencia de 20 de septiembre, que se trataba de una organización encabezada por los hermanos Garrido, cuya finalidad era traficar y vender sustancias ilícitas en esa región y se captó además la forma como operaban y se distribuían el trabajo en turnos rotativos para la venta, vigilancia, seguridad y la administración del dinero (fs. 69-72).

La Policía Técnica Judicial -previa autorización- llevó a cabo un operativo encubierto de compra controlada de droga a los hermanos Garrido, efectuado el 19 de septiembre de este año, del cual resultó que a Eliecer Garrido se le encontró en su poder los billetes autorizados por la fiscalía.

Seguidamente se procedió al allanamiento y registro de la residencia de los mencionados hermanos, en la cual estaba presente Carlos Isaac Garrido Cortez. La sustancia y documentos encontrados fueron sometidos a análisis.

Es así que dos sobrecitos plásticos transparentes que en su interior contenían polvo blanco, resultaron positivos para la presencia de la droga conocida como cocaína (f. 24). Del análisis de los documentos, el detective II Manuel Reyes, entre otras cosas, concluyó que las cifras y el calendario con los apodos de los hermanos Garridos, al ser comparados con las informaciones obtenidas, corresponden a las sumas de dinero obtenidas de la venta de los pases de cocaína (fs. 84-87).

Ante esas pruebas, se ordenó la detención de los hermanos Garrido en resolución de 20 de septiembre (fs. 114-119). Hasta el momento no se cuenta con declaración indagatoria de Carlos Isaac Garrido, quien se acogió al derecho de ser asistido por un abogado.

Luego de verificar el contenido del informe de la autoridad demandada, el cual se ajusta al del expediente judicial, se concluye que la detención provisional de Carlos Isaac Garrido no viola disposiciones constitucionales ni legales.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención provisional del señor CARLOS ISACC GARRIDO (a) Cholo y dispone que se le ponga a órdenes de la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Cristóbal Garrido Romero, abogado, con cédula 8-103-863 desde el teléfax 9963736 del "Cotel Chitré", interpuso el 8 de octubre de este año, acción de habeas corpus contra el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y a favor de **JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO**, enjuiciado por el delito de homicidio.

Librado el mandamiento de habeas corpus, se recibió el 11 de octubre a las 10:30 de la mañana el informe sobre los puntos requeridos, adjunto a los dos tomos originales del expediente incoado con motivo de la investigación del homicidio y robo perpetrado en perjuicio de **ROSAURA CAMPOS** y **JOSÉ DE LA CRUZ OJO**, los cuales contienen 1151 fojas útiles.

Como fundamento de la acción presentada, el accionante señala que "considera que la privación de libertad es ilegal por cuanto en la causa que se le sigue no existe mérito para llamarlo a juicio siquiera y menos aún para mantenerlo detenido".

Al revisar los antecedentes del caso se advierte que la presente acción de habeas corpus fue propuesta por un abogado en ejercicio, un día antes de la celebración de la audiencia oral fijada en este caso mediante providencia de 3 de septiembre de 1996 (fs. 1134) y después que uno de los abogados de la defensa solicitara posposición de la audiencia, la que fue pospuesta, señalando como nueva fecha el 14 de octubre a partir de las 8:00 a. m.

En un proceso penal en el que se ha fijado fecha de audiencia, previo llamamiento a juicio, confirmado en segunda instancia, por los delitos genéricos de homicidio y robo, la acción de habeas corpus carece de idoneidad procesal y vitalidad jurídica para suspender el curso del proceso, ni la celebración de la audiencia oral que en este caso es la segunda fecha que se le fija.

El mecanismo dilatorio es tan burdo que lejos de abogar y defender el derecho a la libertad, se configura como una argucia deleznable, impropia del correcto ejercicio profesional de la abogacía, conforme lo ordena el artículo 462 del Código Judicial.

Por otra parte, es necesario indicar que los antecedentes del caso, ya sea en la etapa instructoria o intermedia, cuando se opta por remitirlos adjunto al informe de la autoridad demandada, no debe afectar el curso del proceso, por lo que se recomienda el envío de copias autenticadas de las piezas fundamentales, pues de lo contrario se propicia la lentitud de los trámites y en alguna medida, como en el caso que nos ocupa, se facilita la eficacia de la medida dilatoria propuesta.

La detención preventiva de Jaime Raúl González está sustentada conforme a la Ley, la impuso la autoridad competente, los delitos que se le imputan no admiten libertad provisional ni siquiera bajo caución, lo que es un indicador claro de la gravedad de los mismos.

Cabe anotar además que este caso fue conocido por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación del auto encausatorio y fue confirmado respecto al enjuiciamiento de Jaime Raúl González Delgado, al considerar que en la investigación se habían recogido las pruebas suficientes para acreditar la aplicación de los artículos 2159 y 2222 del Código Judicial.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención decretada contra JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO, enjuiciado por los delitos genéricos de homicidio

y hurto y SANCIONA a CRISTÓBAL GARRIDO ROMERO, con cédula 8-103-863 a quinientos balboas (B/.500.00) de multa por infracción del artículo 462 del Código Judicial que deberá pagar al Tesoro Nacional.

Remítase copia de esta resolución al Ministerio de Hacienda y Tesoro para los fines legales pertinentes.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora ANA ISABEL POLANCO ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor del señor PEDRO PORFIRIO GUERRA o PEDRO PORFIRIO RODRÍGUEZ GUERRA, contra el Director Nacional de Migración.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración, dicho funcionario contestó mediante la Nota N° 330-DNMYN-96 de 7 de octubre de 1996, lo siguiente:

> "a) El señor PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRERAS, de nacionalidad dominicana fue aprehendido por unidades de la Corregiduría de Capira y remitido por nuestra institución, mediante Nota N° 55 del 13 de septiembre de 1996. Posteriormente, se procedió a dictar la orden de detención mediante Resolución N° 0067 de 16 de septiembre de 1996, por indocumentado.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:
>
> PRIMERO: Que, el día 13 de septiembre de 1996, unidades de la Corregiduría de Capira, procedieron a aprehender al señor PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, por indocumentado.
>
> SEGUNDO: Que posteriormente, se procedió a remitir al mencionado señora (sic) a esta institución, a fin que se verificara su status migratorio.
>
> TERCERO: Que de acuerdo a nuestros Archivos, el señor PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, desde su llegada a nuestro país en febrero de 1994, nunca ha manifestado su intención, ante esta Dirección, de arreglar su situación migratoria.
>
> CUARTO: Que, de acuerdo a lo antes mencionado, se procedió a ordenar la deportación del territorio nacional del señor PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mediante Resolución N° 6423 del 18 de septiembre de 1996, la cual le fue notificada mediante Edicto N° 31 del 19 de septiembre de 1996, en vista de que el mencionado señor se negó a firmar.

QUINTO: Que a la fecha, dicha resolución se encuentra ejecutoriada.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 65, 85 y 86 que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito, sin residencia autorizada serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar.

ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración despachará y decidirá en primera instancia los asuntos relacionados con la Migración en general.

Las resoluciones dictadas por este funcionario de conformidad con las disposiciones de este Decreto Ley, serán notificadas personalmente al interesado o a su representado apoderado. Si no pudieren ser notificados personalmente, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho por el término de tres (3) días hábiles, con inserción de la parte dispositiva de la resolución.

ARTÍCULO 86: Las resoluciones del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los negocios de que trata el Artículo anterior, quedarán sujetas a los siguientes recursos administrativos:

1. El de reconsideración ante el Director del Departamento de Migración.

2. El de apelación que se surtirá ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.

c) El señor PEDRO PORFIRIO GUERRA CONTRERAS, de nacionalidad dominicana se encuentra a nuestras órdenes para su deportación del país y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 6423 del 18 de septiembre de 1996."

Al entrar a considerar el mérito del presente recurso de habeas corpus, la Corte observa que el señor PEDRO PORFIRIO GUERRA o PEDRO PORFIRIO RODRÍGUEZ entró al país el día 14 de febrero de 1991 en calidad de turista y, a la fecha, según el informe de filiación visible a foja 8 del expediente, no efectuó diligencia alguna a fin de legalizar su permanencia en el país. En ese sentido tenemos que el Decreto Ley 16 de 1960 modificado por la Ley 6 de 1980, faculta al Director Nacional de Migración y Naturalización para tomar medidas directas sobre quienes permanezcan en nuestro territorio nacional. Así vemos que el primer párrafo del artículo 65 del Decreto 16 de 1960, faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia a deportar del país a "los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal ..."

De todo lo anterior se desprende que el señor PEDRO PORFIRIO GUERRA o PEDRO PORFIRIO RODRÍGUEZ ha sido privado de su libertad mediante la Resolución N° DNMSI-0067 de 16 de septiembre de 1996, expedida por autoridad competente y de conformidad con lo dispuesto el Decreto Ley 16 de 1960, razón por la cual lo procedente es, pues, declarar legal la medida cautelar de privación de libertad impuesta a dicho señor, por el Departamento de Migración y Naturalización.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la medida

cautelar de privación de libertad expedida y practicada por el Departamento de Migración y Naturalización contra PEDRO PORFIRIO RODRÍGUEZ GUERRA o PEDRO PORFIRIO GUERRA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MÓNICA SOMOSA O DELIA MATILDE DE CONTRERAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Sydney Sittón, actuando en representación de MÓNICA SOMOSA o DELIA MATILDE DE CONTRERAS, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra dicho funcionario quien mediante Oficio N° A. L.-1287-96 de 16 de septiembre de 1996, expuso que no ordenó la detención preventiva, no obstante, afirma que tiene bajo su custodia a la prenombrada y fue puesta a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Mediante providencia de 17 de septiembre de 1996, se libró nuevamente mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República quien mediante Oficio N° 13851-FAR de 17 de septiembre de 1996, expuso lo siguiente:

> a) Sí es cierto que este despacho ordenó la detención de la señora MÓNICA SOMOZA o DELIA MATILDE CONTRERAS y la misma se hizo por escrito, mediante Resolución calendada para esta fecha del mes y año que decurre, visibles a fojas 26 y 27 del negocio de marras.
>
> b) En cuanto a los fundamentos de hecho que se dieron para tal medida, los mismos está relacionados con los Oficios N° DNMSI-617-96, suscrito por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, por medio del cual se remitió a esta instancia a la prenombrada. Dicha nota señala que la encartada intentó salir del territorio Nacional, con un pasaporte de este país, el cual de acuerdo a las investigaciones le pertenece a la señora DELIA MATILDE CONTE DE GRACIA, con cédula de identidad personal N° 2-8-825 y se encontraba alterado.
>
> Que ante el Departamento de Migración, la sindicada, señaló que no conoce a la persona que le hiciera entrega del pasaporte y que por la adquisición del mismo no entregó suma de dinero alguna.
>
> Igualmente expuso que la fotografía le fue tomada en su apartamento y que el referido documento le fue entregado antes de salir para el aeropuerto.
>
> En consecuencia, existen en contra de la encartada serios señalamientos toda vez que le fue encontrado en su poder el pasaporte de marras, objeto de la presente investigación y que como hemos señalado y acreditado es falso.

En cuanto a los fundamentos de derecho, que tuvo para ello, están consagrados en los artículos 2147-B, literal e, 2148 y subsiguientes del Código Judicial, toda vez que el delito imputado a la recurrente, conlleva penas mínimas de dos años.

c). No mantenemos a órdenes de este despacho a la señora MÓNICA SOMOZA GARCÍA o DELIA MATILDE DE CONTRERAS, toda vez que la misma mediante Oficio N° 13820 de esta fecha, dirigido al Director del Centro Femenino de Rehabilitación, fue puesta a órdenes y disposición de la Fiscalía Octava del Circuito."

Frente a la situación planteada, se deduce que en el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo, como quiera que según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según lo expresa el Fiscal Auxiliar de la República, la misma fue puesta a órdenes y disposición de la Fiscalía Octava de Circuito de Panamá.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada por el Lcdo. Sydney Sittón en representación de MÓNICA SOMOSA y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se continúe con el trámite que la ley establece.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ORLANDO DAUKINS Y EN CONTRA DEL FISCAL DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE COLÓN Y LA COMARCA DE SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, (VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Samuel H. Mathews presentó ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia acción de habeas corpus contra el Fiscal Delegado de Drogas de Colón y San Blas, en favor de Rolando Daukins, quien se encuentra detenido.

Se sostiene la ilegalidad de la medida cautelar personal alegando: 1° que, según el artículo 263 F) del Código Penal, por la pequeña cantidad de la droga incautada "solamente se decretará detención bajo medida de seguridad curativa" (f. 2), y 2° que fue capturado el día 31 de agosto de 1996 "y hasta la fecha no ha sido puesto a órdenes de autoridad competente" (f. 2), argumento este que desmiente el hecho de la interposición de la acción.

Por considerar que se trata de tráfico ilícito de drogas, el tribunal a-quo declaró legal la detención demandada y, mediante manuscrito visible a folio 12 del cuaderno, el propio sindicado se dio por notificado de la sentencia y apeló de la misma, por lo que corresponde a la Corte Suprema conocer de la alzada.

Se trata de una investigación incipiente en la que, a pesar de las

gestiones del funcionario de instrucción, no ha sido posible aun indagar al sindicado. Ello no obstante, se comprueba la existencia de una resolución, debidamente motivada, que ordena la detención de Daukins (fs. 9 y 10, antecedentes). En cuanto a la prueba de la vinculación del sindicado con el hecho delictivo, el informe de novedad, visible a folios 2 y 3 de las sumarias, da cuenta de la detención previa de un sujeto de nombre Gregorio Goods Lucero, a quien se le encontró en posesión de dos envoltorios que contenían una sustancia presumiblemente crak o piedra. Goods manifestó a quién la había comprado la droga, y acompañó a los agentes policiales Adonio Castañedas Maffla y Augusto Barraco al lugar donde se encontraba Daukins, a quien reconocieron; este sujeto, al ver a los agentes del orden se tragó unos envoltorios, pero le fue encontrado en un bolsillo del pantalón la suma de B/.67.95 y en el área donde se encontraba un envase de cartón con seis envoltorios de papel plateado que contenían crack (fs. 5-6) en la cantidad de 0.54 gramos.

A pesar de la escasa cantidad de la droga encontrada, el cargo consistente en la venta que hiciera a Goods y el dinero ocupado apuntan hacia la comprobación de tráfico de estupefacientes, delito que tiene asignada pena mínima superior a dos años.

Aun cuando resulta evidente que se trata de una investigación en vías de desarrollo, las evidencias recabadas hasta ahora no permiten menos que endosar la medida cautelar acusada.

Por las anteriores consideraciones, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HORACIO AGUIRRE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rafael E. Collins Núñez interpuso acción de Habeas Corpus a favor de **HORACIO AGUIRRE**, de nacionalidad colombiana, quien capitaneaba la Motonave "Katiuska Kelly", y detenido en las instalaciones del Servicio Marítimo Nacional, ubicadas en la isla de Naos, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Fundamenta el Licdo. Collins su acción en los siguientes hechos:

1. Que **HORACIO AGUIRRE**, en su condición de Capitán de la Motonave KATIUSKA KELLY, fue apresado por el organismo anti-narcóticos de los Estados Unidos -D. E. A.- junto con su tripulación en aguas jurisdiccionales de la República de Colombia y llevado a las instalaciones del Servicio Marítimo Nacional de la isla de Naos.

2. Que en territorio panameño, el Capitán **AGUIRRE**, su tripulación y la nave fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

3. Que fue informado -el Licdo. Collins- en el Servicio Marítimo Nacional que no podía ver al Capitán **AGUIRRE** ni a la tripulación sin una orden de la Fiscalía ya mencionada.

4. Que trató infructuosamente durante varios días de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas le permitiera visitar al beneficiario de la presente acción, y a su tripulación.

Expuso el letrado, otras consideraciones de derecho sobre la detención del Capitán **HORACIO AGUIRRE**, como las siguientes:

Que se infringió el artículo 32 de la Constitución Nacional, garante del principio del debido proceso, toda vez que el detenido fue aprehendido por la D. E. A., que es un organismo extranjero, sin existir orden de detención ni en su contra, ni el la de los demás marinos. Dicho organismo no tiene jurisdicción dentro del territorio nacional ni del colombiano para apresar en nombre de autoridades panameñas.

Que hasta la fecha no se le ha formulado cargos de ninguna naturaleza, ni se le ha explicado la causa de su privación de voluntad ni la de su tripulación, que desconoce.

Que en la Fiscalía señalada no existe ni se tramita ninguna causa en contra de **AGUIRRE** ni de su tripulación, por lo que su detención "... es ilegal desde todo punto de vista."

Que la forma como se efectuó su apresamiento y posterior detención viola claramente el artículo 32 Constitucional, solicitando se ordene su libertad.

Recibida la acción, se libró el mandamiento de Habeas Corpus contra el señor Fiscal Especial de Delitos Relacionados con Drogas, quien lo respondió manifestando que no era cierto que dicha Agencia hubiera decretado la detención preventiva de **HORACIO AGUIRRE**, ni de manera verbal ni por escrito; que el prenombrado fue remitido a dicha Agencia de Instrucción el miércoles 2 de octubre por el Servicio Marítimo Nacional, por capitanear la motonave Katiuska Kelly, contra la que pesaba una orden de aprehensión provisional, por su presunta vinculación en Delitos Contra la Salud Pública, relacionado con drogas.

Que a **AGUIRRE** se le recibió declaración jurada y fue puesto a órdenes de la Dirección de Migración, al igual que al resto de la tripulación de la nave, mediante oficio N° 10529 del 4 de octubre del presente año.

En vista de esto último, se enderezó el mandamiento de Habeas Corpus contra el señor Director de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, quien lo respondió de la siguiente manera:

> "A. No es cierto que ordenamos la detención del ciudadano HORACIO AGUIRRE, de nacionalidad colombiana.
>
> B. No existen al momento motivo, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención del señor HORACIO AGUIRRE.
>
> C. No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes al ciudadano HORACIO AGUIRRE. El mismo salió del país el día 8 de octubre de 1996, en calidad de devuelto a su país de origen."

Se observa entonces que tanto el Capitán **HORACIO AGUIRRE** como la tripulación de la Motonave Katiuska Kelly, ya fueron devueltos a su país, por lo que la presente acción, por su naturaleza, carece de objeto; por ello, se verifica el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y debe cesar el presente procedimiento.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente negocio ha operado el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, por

lo que ORDENA EL CESE de todo procedimiento en la presente acción de Habeas Corpus, y ordena el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LINO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EDUARDO DAVID ÁLVEO Y MARCOS A. RAMÍREZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 1756 de fecha 15 de octubre de 1996, expedido por el Juez Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, se remitió a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por razones de competencia el cuadernillo contentivo de la acción de Habeas Corpus presentada por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, en favor de los señores **LINO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EDUARDO DAVID ÁLVEO y MARCO A. RAMÍREZ** (f. 8).

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien, mediante Oficio N° 15552 de 18 de octubre de 1996 (f. 11), manifestó que los prenombrados fueron puestos en libertad a través del Oficio N° 15459 cursado al Director de la Policía Técnica Judicial.

La acción de habeas corpus está destinada constitucionalmente a preservar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la ley señala y en el presente caso, las personas a favor de quienes se les promovió la acción correspondiente se encuentran en libertad; luego entonces, no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA CONTRA LA SECRETARÍA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Napoleón Saucedo Mendoza ha presentado acción de habeas corpus a su favor contra de la Agencia de Drogas de Herrera y Los Santos.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la Secretaría de Drogas de Herrera y Los Santos, se dio respuesta al mismo mediante el Oficio N° 934 ARD, de 20 de septiembre de 1996, en los siguientes términos:

> ... "A) Sí es cierto que ordené, mediante la Resolución calendada nueve (9) de los corrientes la detención del señor NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA, quien se encuentra imputado por la comisión de delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Drogas).
>
> B); Los motivos de hecho que nos llevaron a decretar la privación preventiva de la libertad del señor SAUCEDO MENDOZA, tuvieron su origen en un operativo encubierta (sic) de compra controlada de droga, efectuado en el Bar 19 de octubre, de la ciudad de Chitré en donde fue ubicado en posesión del mismo la suma de dos balboas que formaban parte de los cinco balboas que había autorizado la Fiscalía para el respectivo operativo.
>
> Adicional a lo anterior consta en el proceso principal referido, la declaración indagatoria rendida por el señor SERGIO ALBERTO CEDEÑO FALCÓN, quien de manera directa formuló cargos por venta de drogas al precitado SERGIO CEDEÑO, los cuales rectifico (sic) en posterior declaración jurada ... También consta a folio 13 del cuaderno original la diligencia de prueba de campo efectuado (sic) a la sustancia producto de la compra controlada en mención, la cual dio resultados positivos para la presencia de la droga conocida como cocaína.
>
> De igual forma se observa el informe operativo localizable de folio 10 a 12 del proceso principal en donde se detalla el operativo en comento, así como la participación del sujeto, quien respondían a las descripciones y nombre de NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA.
>
> Todo este caudal probatorio recogido en la investigación que se encuentra en estas primeras etapas, llevaron al ánimo de la Fiscalía a considerar que se había comprobado un acto contrario a la Ley penal y que existían graves indicios en contra del indagado en ese momento SAUCEDO M., y de acuerdo a los artículos 2147,2148 y 2159 del Código Judicial en asocio con las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 12 de 27 de julio de 1994, para decretar y como en efecto se decretó la detención preventiva del citado SAUCEDO MENDOZA ..."

En este momento corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA se le imputa delito contra la salud pública relacionado con drogas.

En este sentido, consta como elemento que prueba la existencia del hecho punible el Informe de Operativo elaborado por el Sargento Jaime Calderón, en el cual se involucra al señor Napoleón Saucedo (a) Napo, en una venta de sustancias ilícitas, realizada dentro de un operativo de compra controlada de droga en el Jardín 19 de octubre, ubicado en el Paseo E. Gensier de Chitré. En dicho informe se señala que el señor Saucedo, en compañía del señor Sergio Alberto Falcón, le vendió al "Agente Encubierto" un sobrecito contentivo de una sustancia blanca, por el precio de cinco balboas. Sometida la evidencia a las pruebas técnicas de rigor, resultó positiva para la determinación de COCAÍNA.

Luego, al momento de la detención de los señores Saucedo y Cedeño, se encontró en posesión de Napoleón Saucedo dos de los billetes de un balboa

marcados, autorizados por la Fiscalía para el Operativo encubierto de Compra de Drogas.

Seguidamente, visible de fojas 29 a 33 de las sumarias, se encuentra la declaración indagatoria rendida por el ciudadano SERGIO ALBERTO CEDEÑO, vinculado en este caso, en la cual señala directamente al recurrente como la persona que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas en ese sector.

Con fundamento en lo anterior, la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial ordenó la detención preventiva del señor NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA entre otros, por considerar que existían suficientes pruebas que lo involucraban en delitos relacionados con drogas.

Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación estima que el Informe de Operativo del Sargento Jaime Calderón, así como la declaración indagatoria rendida por el señor Sergio Cedeño, constituyen indicios suficientes para vincular al NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA con los hechos a él imputados, ya que pesan sobre éste graves indicios de presencia y oportunidad.

En virtud de los señalamientos expuestos, el Pleno considera que en la orden de detención preventiva del señor Napoleón Saucedo no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en la leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, razón por la cual lo procedente es, pues, declarar legal dicha orden de detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor NAPOLEÓN SAUCEDO MENDOZA y, por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Secretaría de Drogas de Herrera y Los Santos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO ROCK VASEL Y PEDRO MEJÍA GÓMEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Narciso Herrera Grau, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de los señores Rigoberto Rock Vasel y Pedro Mejía Gómez y contra el Fiscal Especial en los Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el auto se libró el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, quien contestó mediante Oficio N° 9267 de 11 de septiembre de 1996, lo siguiente:

> "PRIMERO: Los señores ROCK y MEJÍA fueron detenidos por orden escrita de esta Fiscalía fechada diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motivan la detención del sindicado, tienen inicio el día seis (6) de septiembre del presente año, mediante diligencia de allanamiento practicada por el

> corregidor de Parque Lefevre, sobre el cuarto N° 11, de la casa N° 8, de calle 15 Parque Lefevre, lugar donde son encontradas dos (2) personas, una de las cuales, el señor ROCK, es visualizado cuando lanza fuera de la residencia un estuche de cuero, que mantenía en su interior cuatro (4) sobrecitos plásticos y una bolsita más grande, contentivos de polvo blanco, presumiblemente droga COCAÍNA.
>
> Efectivamente las sustancias incautadas fueron sometidas a la prueba de campo de rigor, arrojando resultados positivos en la determinación de la droga conocida como COCAÍNA.
>
> TERCERO: A pesar de haberlo solicitado, mediante oficio N° 9591-96 de 10 de septiembre de los corrientes, el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, de la Policía Técnica Judicial, aún no nos ha remitido el respectivo análisis a practicar sobre la sustancia en comento.
>
> El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva de los señores ROCK y MEJÍA, se encuentra contemplado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Actualmente los prenombrados se encuentran detenidos y filiados a vuestras órdenes, por este Despacho haberlo ordenado así mediante oficio N° 9266 de esta misma fecha, dirigido al Director de la Policía Técnica Judicial, tal como lo exige el artículo 2580 del Código Judicial." (Fs. 4 y 5).

Por su parte, el licenciado Narciso Herrera Grau estima que la detención preventiva de la cual son objeto los señores Rigoberto Rock Vasel y Pedro Mejía Gómez es ilegal, ya que en la diligencia de allanamiento ordenada en los cuartos N° 11 y 18 de la casa N° 8, no se encontró nada de carácter ilícito.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de los señores Rigoberto Rock Vasel y Pedro Mejía Gómez, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública relacionado con drogas.

La Corte observa a foja 8 de las sumarias la diligencia de allanamiento con fecha de 6 de septiembre de 1996, suscrita por el Corregidor de Parque Lefevre, asistido por su secretaria en funciones de "agente especial", y conjuntamente con miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Técnica Judicial en la que se señala que se procedió a revisar el inmueble en presencia del dueño sin encontrarse nada.

El Pleno observa a foja 9 de las sumarias, el informe de novedad Sub-Dirección de Información e Investigación Policial del Área "D" Parque Lefevre, de fecha 6 de septiembre de 1996, suscrito por el Cabo 1° 6612 Luis Zapata y el Cabo 2° 12752 Orlando Sánchez, donde se destaca que visualizaron a un sujeto de tez morena, el cual al notar la presencia de las unidades de la SUB-DIIP, agarró un estuche de cuero color chocolate el cual se encontraba en una mesa de vidrio, y procedió a arrojarlo por la ventana. Al momento de ingresar a dicho cuarto, se encontró al ciudadano de tez morena que responde al nombre de Rigoberto Rock Vassel en compañía de Pedro Mejía Gómez. Igualmente, consta a foja 10 de las sumarias, el informe de novedad de la Policía Nacional, Área "D" de fecha 6 de septiembre de 1996, suscrito por el Cabo 1° 7019 Ruperto Palomeque Julio y el Agente 10338 Omar Estrada, en el que se señala que observaron de una de las ventanas correspondientes al cuarto # 11, salió un objeto color chocolate y que dentro de su interior mantenía envuelto en un forro de papel higiénico cuatro (4) envolturas plásticas chicas y una envoltura plástica mediana en cuyo interior contenía un polvo blanco que se presumía era droga (cocaína).

Consta igualmente, a foja 28 de las sumarias, el informe de laboratorio que certifica que la sustancia incautada es la droga conocida como COCAÍNA en la cantidad de 34.78 gramos. Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que los

informes de novedad y el informe de laboratorio constituyen indicios suficientes que vinculan a los señores Rigoberto Rock Vasel y Pedro Mejía Gómez con los hechos a ellos imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que los mismos fueron detenidos **in fraganti**, ya que se visualizaron dos personas dentro del cuarto donde se iba a realizar el allanamiento, uno de los cuales fue identificado como el señor Rock, arrojó de manera precipitada un estuche de cuero que mantenía en su interior cuatro sobrecitos plásticos y una bolsa de mayor tamaño que contenía droga, justifica la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial, es claro en señalar que la misma sólo procede por delitos que tengan señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de los señores Rigoberto Rock Vasel y Pedro Mejía Gómez, y por lo tanto, DISPONE que los detenidos sean puestos nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELMIR DE LA ROSA MADRID EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ERIC ELIÉCER PRADO IZQUIERDO** ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a favor de **ELMIR DE LA ROSA MADRID**, y en contra del Director de la Policía Técnica Judicial, por considerar que la detención que sufre su patrocinado es ilegal.

Acogida la acción de Habeas Corpus y expedido el correspondiente mandamiento, el Director de la Policía Técnica Judicial contestó el libramiento mediante Mota N° A. L. 1414-96 del 21 de octubre de 1996, lo siguiente:

> "Respuetuosamente me dirijo a Usted para dar contestación a Mandamiento de **HABEAS CORPUS** presentado a favor del señor **ELMIR DE LA ROSA MADRID** en contra del suscrito Director General de la Policía Técnica Judicial.
>
> De acuerdo a lo establecido mediante el Artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el presente informe:
>
> 1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **ELMIR DE LA ROSA MADRID.**
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. El prenombrado **DE LA ROSA MADRID** fue puesto en libertad el día 20 de octubre del año en curso, por así ordenarlo el Agente de Instrucción Delegado de la Fiscalía Auxiliar de la República.

De esta forma damos contestación a la providencia calendada 21 de octubre del presente año emitida por esa Máxima Autoridad de Justicia".

Lo anterior demuestra que el señor **ELMIR DE LA ROSA MADRID**, persona a cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus, en la actualidad, no se encuentra privada de su libertad, por lo que no tiene objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAGALY CORTÉS DE IBARRA Y ELENA OROZCO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Sarai Isabel Blaisdell Núñez** se apersonó el día 4 de octubre de 1996 a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de interponer Acción de Habeas Corpus a favor de la señora **MAGALY CORTÉS DE IBARRA**, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de habeas corpus en fecha 7 de octubre de 1996, el funcionario demandado contestó ese mismo día mediante oficio N° 10731. En su informe el agente del Ministerio Público admite haber decretado la detención preventiva de **MAGALY CORTÉS DE IBARRA**, mediante resolución calendada de 1° de octubre del año en curso, y suministra los elementos de hecho y derecho de la medida acusada.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de **MAGALY CORTÉS DE IBARRA**, la medida cautelar decretada tiene su origen en la supuesta comisión de delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

Como elemento probatorio allegado a la actuación para comprobar la existencia del hecho punible, aparece la incautación de un cartucho con raya de color chocolate que al verificarlo escondía tres cartuchitos transparentes, estos a su vez, contenían en su interior, respectivamente, la cantidad de 25, 31 y 25 carrizos de plástico transparente con polvo blanco. Las sustancias incautadas fueron sometidas a la respectiva prueba de campo, arrojando resultados positivos en la determinación de la droga conocida como COCAÍNA. Además se encontró otra bolsa con cierta cantidad de carrizos vacíos, y Seiscientos Setenta y Siete Balboas (B/.677.00) en billetes de diversas denominaciones en poder de la señora **ELENA OROZCO** quien se encontraba con **MAGALY CORTEZ** al momento de la diligencia de allanamiento.

Respecto a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra **MAGALY CORTÉS DE IBARRA**, consta el informe de novedad de los agentes captores, quienes dan cuenta de que la droga fue encontrada en el patio trasero de la

residencia de **MAGALY CORTÉS**, debajo de una hoja de zinc (f. 2, antecedentes).

Aún cuando la prenombrada niega cualquier vinculación con los hechos que se le imputan, manifestando que el dinero incautado lo tenía su amiga Elena Orozco para pagar el traspaso de un lote de terreno al Banco Hipotecario y que la droga pudo haber sido puesta en ese preciso lugar por las personas que identifica como YUL IBARGUEN y ALFONSO IBARGUEN para causarles perjuicios, debe éste Tribunal reiterar que la acción de habeas corpus se entiende separada del problema de fondo que tenga relación con la causa penal. El habeas corpus es eminentemente formal en cuanto al cumplimiento de los **requisitos para la privación de libertad de una persona**, es decir, que exista orden escrita de autoridad competente, expedida de acuerdo a las formalidades legales, por motivos previamente definidos en la ley y con respecto a los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Aún cuando la presente investigación se encuentra en estado incipiente, existen elementos de presencia y oportunidad que parecieran vincular a **MAGALY CORTEZ** al ilícito investigado. La existencia de tales elementos, justifican, al menos en esta etapa de la investigación, la medida de detención preventiva ordenada contra la prenombrada, por tratarse de piezas que pueden perfectamente ser indicativos de la venta y traspaso de sustancia ilícita.

Se concluye del examen minucioso efectuado a la encuesta penal en estudio que la detención de la señora **MAGALY CORTÉS DE IBARRA**, se ajusta a las formalidades constitucionales y legales que regulan la medida cautelar personal.

Nada impide, sin embargo, que durante el transcurso de la investigación sumarial surjan nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, pero tal calificación corresponderá al Tribunal de la causa, toda vez que en esta instancia sólo corresponde a esta Superioridad examinar si la detención preventiva se ajusta a las formalidades legales establecidas, circunstancia que efectivamente acontece en éste caso.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora MAGALY CORTÉS DE IBARRA, y DISPONE que sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIONISIO LUNA, JUAN FRANCISCO LUNA Y RICARDO LUNA DENIS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Ovidio Caballero** presentó acción de Habeas Corpus a favor de los señores **DIONISIO LUNA**, **JUAN FRANCISCO LUNA Y RICARDO LUNA DENIS** sindicados por delito contra la salud pública y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la detención que sufren sus patrocinados es ilegal.

Expedido el mandamiento de habeas corpus el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado Rosendo Miranda, lo contestó de la siguiente manera:

"1. Sí es cierto que se ordenó la detención de los señores **DIONISIO LUNA, JUAN FRANCISCO LUNA** y **RICARDO LUNA DENIS**, la misma fue emitida en forma escrita y decretada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución de nueve (9) de noviembre de 1993, la cual se acredita a fojas 77 a 78 del expediente de marras.

2. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de los encartados, se refleja en el operativo denominado "Operación Fenicio" dirigido a través de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, el día 2 de noviembre de 1993.

Este operativo se basaba en investigaciones dirigidas a un grupo de personas que se dedicaban al trasiego de drogas; las cuales reflejaban que uno de los involucrados de mayor intensidad lo era el mencionado **RICARDO LUNA DENIS**, ya que se pudo establecer que presuntamente por instrucciones de éste, un cargamento de droga ilícita sería enviado desde la Provincia de Colón hacia la Provincia de Panamá, utilizando la vía transístmica y vehículos marca Vans DODGE color negro con amarillo o un bus ASIA COMBI color crema con matrícula 8B-89 y 8C-10715.

En efecto se hizo efectivo dicho operativo, detectándose para la referida fecha, tras un seguimiento continuo, al vehículo bus Kia o Asia Combi con matrícula 8B-89, en el sector de la "Y" en Chilibre, estando a bordo los señores **JUAN FRANCISCO LUNA SANTIZO Y DIONISIO LUNA SANTIZO**, encontrándose en el interior del bus 237 envoltorios contentivos de una sustancia blanca que se presumía fuera la droga Cocaína. Posteriormente se pudo corroborar con el caudal de declaraciones existentes en las sumarias, que el vehículo utilizado le pertenecía al señor **RICARDO LUNA DENIS**, quien es pariente cercano de los antes mencionados, pudiéndose comprobar que éste era el autor intelectual y de apoyo logístico en la fallida acción criminal.

Se incorporó a la encuesta penal, el análisis realizado a los doscientos treinta y siete (237), paquetes forrados en material de caucho color negro, contentivos de polvo blanco, dando resultado positivo a la COCAÍNA en la cantidad de 259,935.00 gramos.

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de los señores **JUAN FRANCISCO LUNA SANTIZO, DIONISIO LUNA SANTIZO Y RICARDO LUNA DENIS**, se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Es importante esclarecer el hecho de que en la presente carpeta penal, si bien se juzgó a los sindicados en una instancia que no era la competente, este hecho fue remediado, por el Segundo Tribunal de Justicia de Panamá, al ser consultado en grado de apelación en su Sentencia de veintidós (22) de mayo de 1996 (fs. 601-605), precediendo a decretar la nulidad relativa de algunos actos que se dieron en el proceso (ver fojas 604) y ordena declinar el negocio penal, a la esfera de Circuito, Ramo Penal, del Circuito Judicial de Colón, para que se pronuncie al respecto.

Es por ello, que el Legislador Patrio, deja la potestad de subsanar cualquier irregularidad ante un Tribunal de Segunda instancia, tal como se desprende del artículo 2301 del Código Judicial, que dice:

`Artículo 2301. Siempre que un proceso se halle en un Tribunal de Segunda instancia por razón de recurso o consulta, el superior debe examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la cual haya de ordenarse la reposición del proceso'.

En ese sentido podemos advertir que la sentencia a la cual hace mención el ilustre abogado recurrente (ver fojas, 493-539), jamás fue ejecutoriada y por lo tanto nunca cedió tránsito a Cosa Juzgada; luego de que en el efecto suspensivo el Segundo Tribunal de Justicia, anuló ciertos actos dentro de ese proceso (a partir del auto de proceder del 11 de noviembre de 1994, dictado por el Juez Primero del Circuito Judicial de Panamá), que fueron considerados por el propio Tribunal A-Quem, de estar "contaminadas del mismo vicio de incompetencia". Por lo tanto al no quedar ejecutoriada dicha sentencia, mal podemos definir el hecho de que los sindicados en la presente sumarias, serán juzgados dos veces por una misma causa.

3. Sí es cierto de que en la actualidad, los sumariados **JUAN FRANCISCO LUNA SANTIZO, DIONISIO LUNA SANTIZO Y RICARDO LUNA DENIS,** están a órdenes de este despacho de instrucción; ya que el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal de la Provincia de Colón, nos remitió dicho sumario, a efecto de que procediéramos a emitir concepto, debido a la reposición que se ordenara, por mandato del Segundo Tribunal de Justicia de Panamá."

El licenciado **Ovidio Caballero** funda su escrito de habeas corpus, principalmente, en las siguientes razones:

"TERCERO: Dentro de los argumentos expuestos siempre por la defensa, lo estaba el hecho de que el proceso de marras estaba siendo ventilado por un Tribunal sin competencia para ello, toda vez que el delito se había configurado dentro de los límites de la provincia de Colón, y la causa había sido desarrollada y ventilada en su totalidad por un Juzgado de la provincia de Panamá.

CUARTO: A pesar de ello, se siguió adelante, hasta que luego de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia emitiera auto de mejor proveer en ese sentido en el mes de Abril del presente año, logró allegarse al proceso una serie de certificaciones que indicaban sin lugar a dudas que el lugar en que se incautó la droga el Marte dos (2) de Noviembre de 1993, estaba comprendido dentro de los límites de la provincia de Colón (ver fs. 586 y 590).

QUINTO: En razón de lo anterior, luego de que el Magistrado Ponente de la causa en segunda instancia, Mag. Andrés Almendral, hiciese una serie de correctas consideraciones al respecto, erró lamentablemente al resolver declarando, mediante resolución fechada al 22 de Mayo de 1996, **nulidad relativa de lo actuado, cuando claramente lo que procedía era decretar la nulidad absoluta y el consiguiente archivo del proceso.**

SEXTO: Se dispuso igualmente, en la misma resolución de segunda instancia, declinar el conocimiento en grado de primera instancia al Juzgado de Circuito de lo Penal, en turno, de la provincia de Colón, a fin de que se surta nuevamente todo el proceso.

SÉPTIMO: Lo anterior es claramente violatorio de disposiciones constitucionales y legales, toda vez que se está tratando de someter a los mencionados ciudadanos a un nuevo juzgamiento por el mismo delito, en detrimento del artículo 32 de nuestra Carta Magna, a saber:

Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

OCTAVO: El anterior texto constitucional es desarrollado diáfanamente tanto por nuestro Código de Procedimiento Penal como por nuestro Código punitivo Penal, en las siguientes excertas

legales:

Artículo 1968 (C. J.): Nadie podrá ser Juzgado sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme a trámite legal y con plena garantía de su defensa.

Artículo 2 (C. P.): Nadie podrá ser sancionado sino por Tribunal competente, en virtud de proceso legal previo, seguido de acuerdo con las formalidades legales vigentes.

Nadie será sometido ...

Tampoco se podrá juzgar a nadie más de una vez por la misma causa penal.

NOVENO: Es el caso que ambas disposiciones son precedidas por una norma imperativa, que exige que la actuación llevada a cabo en detrimento de éstas sea sancionada sin apremiantes con nulidad:

Artículo 1974 (C. J.): Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos, y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal.

Artículo 3 (C. P.): Los procesos que se sigan en contravención a los artículos precedentes son nulos, y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal.

Como vemos, son uniformes la norma sustantiva procesal con la adjetiva penal, orientadas únicamente a preservar el apego al procedimiento legal.

DÉCIMO: Verificado el plenario y emitida una decisión de fondo, el apego estricto a la ley no dejaba otra opción que declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado, con el consecuente archivo del negocio, ya que no es posible la reposición de un proceso en el cual los protagonistas ya fueron sometidos a juicio oral y objeto de un veredicto. Ello equivaldría a un doble juzgamiento, excluido por ser de nuestra Constitución Nacional en su artículo 32, el mismo que consagra la obligatoriedad del debido proceso.

UNDÉCIMO: A pesar de que correctamente el ponente citó el numeral 2 del artículo 2297 del Código Judicial para fundamentar la nulidad de lo actuado, de manera inexplicable erró al considerar que la actuación debía surtirse nuevamente, lo que equivaldría a considerar una vez más la situación jurídica de los imputados, desconociendo que esto no conlleva más que a un doble juzgamiento por el mismo delito, vetado como hemos dicho por nuestra Constitución Nacional.

DUODÉCIMO: La situación expuesta encaja a cabalidad en el contenido del numeral 2 del artículo 2566 del Código Judicial, que en materia de Habeas Corpus enumera distintas situaciones consideradas como actos sin fundamento legal, siempre relacionadas con el contenido del artículo 2565 del mismo Código:

Artículo 2565: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de Habeas Corpus, a fin de comparecer inmediata y públicamente ante la justicia para que lo oiga y resuelva si es fundada tal detención o prisión y para que, en caso negativo, lo ponga en libertad y

restituya así las cosas al estado anterior.

Artículo 2566: Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como actos sin fundamento legal:
...
2. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA A QUIEN SE INTENTA JUZGAR MAS DE UNA VEZ POR LA MISMA FALTA O DELITO; ..."

Un examen del expediente penal demuestra que efectivamente el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en auto de 22 de mayo de 1996, declaró nulo todo lo actuado, de conformidad con el artículo 1999 del Código Judicial, por falta de competencia territorial del Juez Primero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá y decidió que se **DECLINARA** el conocimiento de primera instancia al Juez de Circuito, Ramo Penal, del Circuito Judicial de Colón, de turno y ordenó que al Juez de Circuito de Colón que le corresponda por reparto la adjudicación del negocio le otorgue el impulso de rigor.

Un examen de los hechos demuestra que en un operativo denominado **"FENICIO"**, efectuado el 2 de noviembre de 1993 por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, detuvieron en la Carretera Transístmica a las 5:40 de la mañana en el lugar conocido como la "Y" de Chilibre un minibus Kia Combi identificado con la matrícula 8C-10715, en el cual se encontraban los señores **JUAN FRANCISCO LUNA SANTIZO Y DIONISIO LUNA SANTIZO**, y en su presencia se decomisó dentro de dicho automóvil un arma de fuego, un radio portátil de comunicaciones y cinco sacos de henequén contentivos de 237 paquetes de forro color negro, que al efectuarle una prueba de campo resultó ser positivo en la droga ilícita conocida como clorhidrato de cocaína y que más adelante se determinó en la cantidad 259,935.00 gramos.

Posteriormente se detuvo al señor **RICARDO LUNA DENIS** por considerar que era el dueño del vehículo en que se encontró la droga y al cual posteriormente también se le decomisó la suma de B/.10,750.00 en efectivo en su vehículo Ford Taurus, cuando se dio el allanamiento del mismo y de sus negocios. Que igualmente se consideraba que el señor **RICARDO LUNA DENIS** se encontraba también vinculado con unas investigaciones llevadas a cabo con el hallazgo de 633,150.00 gramos de cocaína contenidos en 570 paquetes forrados con cinta adhesiva de diferentes colores, que fueron encontrados dentro del Yate nombrado **"EL GUAYABO"**, el que se dice que estuvo varado por largo tiempo en la casa residencial de **RICARDO LUNA DENIS** en Villa Zaita (ver foja 526 del expediente).

Las constancias procesales demuestran que la orden de detención ordenada por el Procurador General de la Nación y mantenida por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionado con Drogas, mediante providencia de 24 de julio de 1996 y que se aprecia a foja 625 del expediente, cumple con los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, ya que del expediente claramente se desprende que la pena es superior a dos años, se expresa el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible así como los elementos probatorios que figuran en el proceso contra las personas cuya detención se ordena.

La falta de competencia subsanada por el Tribunal de Segunda Instancia no afecta la validez de la privación de la libertad de los acusados, así como tampoco es cierto que estamos en presencia de un doble juzgamiento como alega el abogado que interpone el habeas corpus, ya que con base en el artículo 2301 del Código Judicial procedía la reposición del proceso, tal como lo ordenó el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Por las razones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de los señores DIONISIO LUNA, JUAN FRANCISCO LUNA Y RICARDO LUNA DENIS, sindicados por delito contra la salud pública.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE PEDRO JUAN JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA, SINDICADOS POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN CONTRA DE LA FISCAL PRIMERA DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Priscilla Díaz Osorio ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de los señores Pedro Juan Jaramillo y Nicolás Ortega y contra la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Manifiesta la parte actora que los señores Nicolás Ortega y Pedro Juan Jaramillo, actualmente están ilegalmente detenidos en el centro penitenciario El Renacer a órdenes de la Fiscal Primera Delegada, por la supuesta comisión de delito contra la administración pública en perjuicio del establecimiento comercial "El Fuerte", porque los hechos investigados en el sumario como delito contra la Administración Pública y contra la Seguridad Colectiva, a su juicio, no configuran esos delitos. Afirma la demandante que con los elementos probatorios que reposan en el expediente no se acredita la existencia de ninguna de las formas de peculado regulado en el artículo 322 del Código Penal.

Mediante auto de 30 de septiembre de 1996 se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente y se solicitó un informe al funcionario demandado, quien lo rindió mediante Oficio N° 2716 de 1 de octubre de 1996, en los siguientes términos:

> "PRIMERO: No es cierto que este Despacho ordenara la detención de los precitados. La misma fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante proveído motivado fechado dos de marzo del año que decurre.
>
> SEGUNDO: La Fiscalía Auxiliar tuvo como fundamento para ordenar la detención de los mismos, el hecho que los precitados **JARAMILLO Y ORTEGA**, en su calidad de miembros de la Policía Nacional y en cumplimiento del deber al aprehender a personas sospechosas de cometer un hecho punible, se apropiaron de evidencias sobre las cuales tenían custodia por motivo de la detención.
>
> Dado que el delito imputado fue el de Peculado, ya que se cumplen con todos los elementos de dicho tipo penal, y el mismo tiene una pena mínima privativa de libertad de dos años, y atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, es por lo que el Despacho de Instrucción Primario, ordenó la detención de éstos.
>
> TERCERO: Sí tenemos bajo nuestra órdenes a los señores **PEDRO JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA**."

Consta en el expediente la denuncia criminal N° 1-138-96 que fue interpuesta en la Policía Técnica Judicial, Agencia de San Miguelito el 26 de febrero 1996, por el señor Tomas Gabriel Pérez Lara, en la cual señala que en la madrugada del 25 de febrero el Centro Comercial El Fuerte S. A., fue objeto de un hurto con penetración al local, del cual sustrajeron la suma de sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis balboas con veinticinco centésimos (B/.62,696.25)

entre cheques, dinero en efectivo y lotería premiada, y una escopeta calibre 12.

A foja 2 del sumario se lee copia del memorándum 32-PN-96, de 1 de marzo de 1996, remitido por el Director de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, al Director General de la Policía Nacional, en el que, entre otras cosas, se señala lo siguiente: "El día 26 de febrero del presente, se recibió en estas oficinas una llamada telefónica del CAPITÁN DIEGO DE LEÓN, Jefe de **DINECOA**, en la misma solicitaba la presencia de Entrevistadores de esta Oficina, ya que en las instalaciones de DINECOA en Ancón, tenían detenido al señor **DIOMEDES ABDIEL MONTENEGRO RODRÍGUEZ**, con Céd. 8-440-931, conductor del TAXI 8T-1479; que el mismo manifestaba que unos policías le habían tumbado un dinero al pasajero que él llevaba."

Con motivo de la denuncia hecha por el conductor del taxi Montenegro Rodríguez se inició una investigación en la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional sobre los supuestos hechos ilícitos ejecutados por los policías acusados, la cual fue posteriormente enviada al señor Fiscal Auxiliar de la República, quien ordenó la detención de los imputados.

En el expediente reposa la diligencia, fechada el 2 de marzo de 1996, por medio de la cual el Fiscal Auxiliar decretó la detención preventiva de los policías Sebastián González Vargas, Rafael Ángel Butler, Nicolás Ortega Pérez, Pedro Juan Jaramillo Ábrego y Víctor Manuel Ospino Domínguez y la suspensión del ejercicio de los cargos públicos que desempeñan, en virtud de las razones de hecho y de derecho que se señalan a continuación:

> "De parte del Director General de la Policía Nacional recibimos el Oficio N° ORP-185-pn-96 en donde nos remiten copia debidamente autenticada de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Responsabilidad Profesional sobre posibles actos ilícitos ejecutados por miembros de esa institución, del mismo modo la remisión de los cinco señalados. Dentro de los documentos adjuntos reposan los informes de entrevista tomados para tales fines de los que se desprende que el día 25 de febrero del año en curso aproximadamente a las tres de la madrugada, el señor DIOMEDES ABDIEL MONTENEGRO, conductor del TAXI 8T-1479, recogió un pasajero en la calle 16 de Monte Oscuro, por las inmediaciones del Bar Los Caracoles. El sujeto portaba un maletín y un envoltorio bien forrado de color negro, el cual fue introducido en el maletero de auto. Que a la altura de la Piquera de Villa Rica, fue detenido por un patrulla de la Policía Nacional. Del patrulla se bajó un sargento que preguntó por qué no tenía el carro pintado en los laterales los números de la placa de circulación, del mismo modo, que la lámpara de TAXI en su lugar. En esos momentos llegó otro patrulla y mientras el conductor del TAXI entregaba la licencia al Sargento, otros policías procedieron a registrar al pasajero. Al pasajero le encontraron una pistola, lo que motivó que lo esposaran y procedieran a revisar el carro. Le pidieron que abriera el maletero donde estaba el maletín ya mencionado y al abrirlo tenía dentro envuelto en un cartucho de papel blanco, fajos de billetes de 20 balboas. Inmediatamente cerraron el carro, esposaron a los dos ocupantes del vehículo a quienes llevaron a uno de los patrullas. El taxi lo condujo uno de los policías hasta frente al minisuper Yudy en la calle 9a. Río Abajo. Todos los policías se bajaron de los carros y se reunieron frente al maletero del taxi, mientras los dos esposados se mantuvieron en uno de los patrullas. En esos momentos un oficial se acercó a los aprehendidos para preguntar por el propietario del dinero. Este le contestó que tenía entre 30 ó 40 mil dólares. El subteniente comentó que trataría de transar, volviendo al lugar en donde estaba, o sea detrás del maletero del Taxi. Luego uno de los policías sacó del maletero el dinero y lo trasladó a uno de los patrullas que transitó rumbo a la calle que va a la porqueriza, con dirección a la bodega Carlitos. El resto se dirigió a la Subestación de Pueblo Nuevo. Allí bajaron el maletín el cual contenía dinero en plata blanca, dos armas grandes y unos billetes de lotería.

Se tomó otro informe de entrevista, ahora al Sargento Primero Sebastián González Vargas quien admite que el sábado 24 de febrero de este año entró a laborar en el turno de las 18 horas hasta las 6 horas del domingo 25 de febrero. Que estaba asignado al área B, de Betania en compañía los Cabos Segundo Pedro Juan Jaramillo y Nicolás Ortega. Ellos hicieron los recorridos acostumbrado, aunque frente a la Estación de gasolina La Futurista alcanzó a escuchar una conversación entre los cabos que decían que ocurriría una novedad en la noche que el sargento desconocía, que posteriormente a la altura de calle 16, Monte Oscuro, el cabo Ortega visualizó un auto que resultó el TAXI, tantas veces mencionado expresando: "Allá va el taxi de la vaina". Más tarde como a las 3 de la madrugada observó nuevamente el TAXI por las inmediaciones de la empresa "La Futurista", lugar en donde está la estación de gasolina y en la que se estacionó el patrulla. El sargento le preguntó a los cabos: "Hey, qué es lo que está pasando"?.. Díganme! En eso el cabo Ortega contestó: "Tengo un dato que van a golpear en este lugar", señalando que se usaría el TAXI como transporte para el hecho. Minutos después el TAXI salió con cierta velocidad, tomando por calle 16, Monte Oscuro. De inmediato le dieron persecución, logrando su detención frente a la Piquera de buses de Villa Rica. Allí se ordenó a los ocupantes que se bajaran del automóvil y mientras se hablaba con el conductor del taxi, llegó al lugar el patrulla 8445, comandado por el Subteniente Ospino, sin que se le hubiese solicitado y menos radiado. Allí inmediatamente el oficial ordenó el registro del TAXI, encontrando en el maletero una bolsa plástica negra amarrada con una correa en la que se notaba la culata de un arma de fuego y un cañón de otra arma, también dentro del maletero había un maletín de nylon que procedieron a abrir y dentro encontraron un cartucho blanco con papel moneda suelto y otros cartuchos pequeños con monedas envueltas en rollos. Allí estaban presente los cabos Ortega, Jaramillo, el Subteniente Jaramillo y el sargento segundo Butler. Cerraron el maletero del carro Taxi y los sujetos esposados fueron conducidos al patrulla y el Taxi lo manejó el cabo Ortega. Allí por órdenes del subteniente Ospino se movilizaron, hasta la calle 22 Patersona, lugar en donde está el minisuper Yudy, luego todos los policías se fueron al maletero. Allí se le llamó la atención al cabo Jaramillo porque se metía billetes en los bolsillos del pantalón de fatiga. Luego todos, empezaron a tomar dinero lo que produjo temor, aunque recibió 63 balboas y ochenta dólares en monedas con las cuales cubrió ciertas deudas pendientes. Termina mostrando arrepentimiento y manifestando que fue utilizado por los otros para cometer el ilícito.

En legajo hay las otras entrevistas del Subteniente VÍCTOR OSPINO, Sargento Segundo RAFAEL BUTLER, los cabos segundo PEDRO JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA que admiten que ocurrió lo referente a los hechos aunque en el taxi solo hubo monedas en el maletero y las dos armas. Por otro lado tenemos que en efecto, existe el expediente de esta misma fecha y procedente de la Policía Técnica Judicial, Agencia de San Miguelito en el que consta la denuncia 1-138-96, suscrita por TOMÁS GABRIEL PÉREZ LARA por un hurto con penetración contra el Centro Comercial El Fuerte, S. A. hecho ocurrido en la madrugada del 25 de febrero, por la suma de sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 25 centésimos, entre cheques, dinero en efectivo y lotería, además, una escopeta calibre 12. En el expediente están involucrados OCTAVIO JOSÉ CARRASQUILLA, ERINEL SINPH Y DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO. En uno de los informes se conoce de la detención de DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO, OCTAVIO JOSÉ CARRASQUILLA a bordo del Taxi 8T-1479 por calle 16, Monte Oscuro.

Con todos estos elementos se estableció la existencia de la comisión de DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, así como la vinculación a los mismos por parte de los señores VÍCTOR MANUEL OSPINO, SEBASTIÁN GONZÁLEZ, RAFAEL BUTLER, PEDRO JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA, lo que motivó que mediante

providencia de esta misma fecha se dispusiera recibirle a los mismos declaración indagatoria a fin de que hicieran los descargos que a bien tengan.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ VARGAS en su declaración indagatoria mantuvo la versión que expresó en el informe de entrevista rendido ante el despacho de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional y en declaración jurada se ratificó de los cargos contra VÍCTOR OSPINO, RAFAEL BUTLER, PEDRO JARAMILLO Y NICOLÁS ORTEGA, haciendo énfasis en que los arriba mencionados tenían conocimiento de que el Centro Comercial El Fuerte iba ser hurtado y que el taxi involucrado sería utilizado para transportar la mercancía. Igualmente señaló que de toda la evidencia encontrada en el maletero del vehículo los otros sindicados se apropiaron del paquete que contenía la suma de dinero y un saquito de enequén, señala que en el informe que confeccionó no incluyó al subteniente Ospino porque así él se lo ordenó, pero asegura que el mismo se encontraba en el lugar y dio instrucciones. Sigue relatando que una vez finalizado el trabajo global en el cuartel de San Miguelito regresó a su base a entregar su uniforme y las armas de reglamento retirándose a su residencia. Que como a las tres de la tarde de ese día se presentó a buscarlo el Cabo Guevara quien le notificó que tenía que presentarse nuevamente al DIIP de San Miguelito para relatar nuevamente el informe, que estando en el lugar aproximadamente a las siete de la noche el subteniente OSPINO lo llamó por teléfono para preguntarle a qué hora lo pasaba a buscar y que él contestó que cuando estuviera listo le devolviera la llamada, cosa que ocurrió como a las once de la noche indica que en el transcurso del camino, el sargento BUTLER y el subteniente OSPINO le entregaron la suma de B/.143.00 y le dijeron que se quedara callado, aceptó el dinero y le entregó el informe a los mismos a fin de que estos lo llevaran a la base.

Por su parte los señores RAFAEL ÁNGEL BUTLER RODRÍGUEZ, NICOLÁS ORTEGA PÉREZ, VÍCTOR MANUEL OSPINO DOMÍNGUEZ en sus indagatorias afirmaron que en efecto ese día de los hechos se detuvo al vehículo taxi de marras, así como a dos personas que viajaban en el mismo, pero niegan que entre las evidencias encontradas existiera alguna suma fuerte de dinero.

No obstante, el indagado PEDRO JUAN JARAMILLO ÁBREGO a pesar que concuerda con los tres anteriores sobre la captura del taxi y sus ocupantes, señala que uno de los sujetos a quien describe como "el morenito Gustavo" le informo que entre las evidencias encontradas había aproximadamente B/.30,000.00 y le insistía al Sargento González que se quedara con todo a cambio de su libertad.

Ahora bien, luego de recibida dichas declaraciones indagatorias y una vez analizadas las mismas junto con el contexto del expediente colegimos que en efecto existen en el expediente suficientes elementos probatorios que establecen la comisión de los ilícitos contemplados en los Capítulos I y II del Título X y en el Capítulo III, Título VII, del libro Segundo del Código Penal, denominado genéricamente como DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA respectivamente y esto es así puesto que está fehacientemente comprobado que al local comercial El Fuerte le fueron sustraído los artículos encontrados en el taxi mencionado entre los cuales señalan el hurto de más de cuarenta mil balboas en efectivo, dinero este que de acuerdo al Sargento SEBASTIÁN GONZÁLEZ fue apropiado por sus compañeros, todos miembros de la Policía Nacional, aceptando él haber recibido la suma de ciento cuarenta y tres balboas. Se desprende que todos formaron una asociación ilícita para apropiarse del dinero que de una u otra forma entraba bajo su custodia aceptando la invitación a delinquir por parte del pasajero del taxi OCTAVIO JOSÉ CARRASQUILLA quien de acuerdo a GONZÁLEZ y al cabo JARAMILLO les indicaba que se quedaran

todo a cambio de su libertad".

En el sumario instruido se investiga la comisión del delito de Peculado, el cual está tipificado en el artículo 322 del Código Penal y es sancionado con pena mínima de dos años de prisión.

Además, la detención preventiva de los señores Pedro Juan Jaramillo y Nicolás Ortega fue decretada mediante diligencia en la cual se señalan los elementos probatorios allegados al sumario para comprobar la comisión del delito investigado y los graves indicios de responsabilidad que vinculan a los detenidos con la comisión de este delito.

En mérito de lo expuesto, el Pleno considera que la detención preventiva decretada, mediante la providencia de 2 de marzo de 1996 antes trancrita, es legal porque cumple con la formalidades señaladas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad personal.

De consigiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA LEGAL la detención de los señores Pedro Juan Jaramillo y Nicolás Ortega ordenada por el señor Fiscal Auxiliar de la República, mediante providencia fechada el 2 de marzo de 1996, por delitos contra la Administración Pública y la Seguridad Colectiva y ORDENA que sean puestos nuevamente a órdenes de la Fiscalía Primera Delegada de la Procuraduría General De la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO BROWN LASSO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Irlena Brown Villalobos ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Ricardo Brown Lasso y contra el Director de la Policía Técnica Judicial porque según afirma, el día 15 de octubre de 1996, el señor Brown Lasso se presentó en la policía de San Francisco para llevarle alimentos a un detenido y fue arrestado ilegalmente por agentes de la policía.

La parte actora solicitó que se declare ilegal la detención del señor Brown, porque no le han hecho cargos y no ha sido puesto a órdenes de autoridad competente alguna.

Mediante Auto de 17 de octubre de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención del señor Ricardo Brown Lasso, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante la Nota A. L.-1407-96 de 18 de octubre de 1996, en la cual informó lo siguiente:

"1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **RICARDO BROWN LASSO**.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **BROWN LASSO;** no obstante el mismo fue puesto en libertad por así ordenarlo la Fiscalía Auxiliar de la República a través del Oficio 15489 de 17 de octubre de 1996."

Como el detenido Brown Lasso ha sido liberado y la autoridad demandada no ha girado orden de detención en su contra, debe ordenarse el cese del procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en el proceso de habeas corpus promovido por la licenciada Irlena Brown Villalobos a favor de Ricardo Brown Lasso y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ELISEO GONZÁLEZ BARUCO Y RIGOBERTO ABDIEL MURILLO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Feliciano Batista Martínez promovió el 22 del presente mes de octubre acción de habeas corpus a favor de los señores **RIGOBERTO ABDIEL MENDOZA MURILLO y ROBERTO ELISEO GONZÁLEZ BARUCO** y en contra del señor Director de la Policía Técnica Judicial.

El día 23 del mismo mes de octubre, Estando el licenciado Feliciano Batista Martínez desistió de la acción de habeas corpus promovida, mediante escrito fechado ese mismo día y presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Feliciano Batista Martínez dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de los señores Roberto Eliseo González Baruco y Rigoberto Abdiel Mendoza Murillo y contra el señor Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO APONTE SALAZAR EN CONTRA DEL FISCAL DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Superioridad, proveniente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, David, la acción de habeas corpus propuesta por el licenciado JORGE LUIS MORALES VÁSQUEZ a favor de PABLO APONTE SALAZAR y contra la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, por considerar que la detención de su representado es ilegal.

ARGUMENTOS DEL APELANTE

Expresa el recurrente que el Sustanciador no consideró todos los elementos incorporados al sumario que se le sigue a su representado. En tal sentido señala que a fojas 105-107 se encuentra la declaración indagatoria rendida por PABLO ERNESTO APONTE ÁLVAREZ, quien se hizo responsable de la sustancia ilícita incautada y excluye a su padre (PABLO APONTE SALAZAR) y sus hermanos de la comisión de este delito.

Por otra parte, señala que la persona descrita por el informante como el individuo a quien le compró la droga en la operación encubierta, y que en la diligencia de allanamiento y registro resultó ser el ciudadano PABLO ERNESTO APONTE ÁLVAREZ, incautándosele el dinero utilizado en la operación encubierta de compra controlada de drogas.

Considera también que el hecho de que su representado sea el propietario del Taller de Reparación de Llantas allanado, en donde se traficaba con sustancias ilícitas, no lo ubica como autor o cómplice del hecho punible investigado. En cuanto a los efectos personales encontrados a su defendido, es decir, la cajetilla con cierta cantidad de papelitos blancos, identificados como papel de arroz "SMOKING", estima que no puede ser considerado como pruebas en su contra, sino más bien, indicios, por tanto, sostiene que no se han reunido los presupuestos establecidos en el aparte tercero del artículo 2159 del Código Judicial.

Por último manifiesta que, aún considerando que su representado tenía conocimiento de la actividad ilícita a la que se dedicaba su hijo, no estaba obligado a denunciar tales hechos, amparándose en el artículo 25 de la Constitución Nacional.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

EL Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, declaró legal la detención del señor PABLO APONTE SALAZAR, haciendo la aclaración que ese Cuerpo Colegiado ya había dictado tres sentencias en negocios de habeas corpus previos, correspondiente al expediente donde figura la detención preventiva de PABLO APONTE SALAZAR. En las referidas sentencias, pese haber reconocido dicho tribunal, la competencia de la autoridad que dispuso tales medidas, se pronunció en cuanto a la ilegalidad de la detención, por no llenar los presupuestos contemplados en el numeral tercero del artículo 2159 de la misma excerta legal.

Ahora bien, en el negocio que es objeto de apelación, el Tribunal se

pronunció en base a que se identifica al beneficiado con esta acción, como el propietario del taller de reparación de llantas, en donde se comprobó que se traficaba con sustancias de circulación ilícita (marihuana). Además, se hace alusión en la sentencia apelada, que al momento del allanamiento se apersonó el prenombrado APONTE SALAZAR, descubriéndose en su persona una cajetilla que contenía cierta cantidad de papelitos blancos identificados como papel de arroz "smoking". Por último, estima el Tribunal que las evidencias incorporadas al expediente permiten declarar la licitud de la orden de detención del señor PABLO APONTE SALAZAR.

DECISIÓN DEL PLENO

Es importante destacar brevemente los antecedentes que originaron la detención preventiva de PABLO APONTE SALAZAR, y a ello procede el Pleno, una vez examinados los antecedentes que contienen las sumarias en el caso en estudio.

La Fiscalía de Drogas de Chiriquí autorizó a la Policía Técnica Judicial de la provincia, para que procediera a la práctica de una Operación Encubierta (compra controlada de drogas), debido a informaciones recibidas por ese despacho, en el sentido de que PABLO APONTE se dedicaba a la venta y distribución de sustancias ilícitas o drogas (Marihuana) en un inmueble que es utilizado para la reparación de llantas, el cual se encuentra ubicado en la parte trasera del Cuartel de Bomberos de esa Ciudad.

Para tal fin, se utilizó un agente encubierto, quien realizó la compra de la sustancia ilícita, en las instalaciones del taller ya mencionado, que resultó ser marihuana, una vez realizada la prueba de campo.

Ordenada también la diligencia de allanamiento, la misma se llevó a cabo, encontrándose graves indicios que vinculan al señor APONTE SALAZAR con el ilícito investigado, así como también a sus hijos. Tales como: la presencia en el taller de los señores PABLO APONTE SALAZAR (propietario del taller allanado), a quien se le encontró una cajetilla con papelitos blancos y la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO BALBOAS (B/.185.00); FRANKLIN GABIEL QUIROZ GUEERA, quien sacó del bolsillo delantero de su pantalón un envoltorio de papel, arrojándolo al suelo. Al ser recogido por la señora Fiscal, se percató que contenía en su interior hierba seca de color chocolate y semillas que dieron el resultado positivo para la determinación de marihuana; PABLO ERNESTO APONTE ÁLVAREZ, a quien se le encontró los tres billetes que habían sido utilizados en la operación encubierta, cuya descripción consta a foja 2 del cuadernillo que contiene los antecedentes; TILCIO DEL ROSARIO APONTE DÍAZ, encontrándosele la suma de CUARENTA BALBOAS (B/.40.00); CARLOS OMAR APONTE ÁLVAREZ, se le encontró TREINTA BALBOAS (B/.30.00); FRANKLIN GABRIEL QUIROZ, tenía la cantidad de TRECE BALBOAS (B/.13.00) y LUIS ALBERTO RÍOS, a quien se le encontró CUARENTA Y SEIS BALBOAS (B/.46.00). Al registrar la parte trasera del taller se encontró una bolsa plástica de pañales desechables, la cual contenía en su interior diez (10) envoltorios de papel amarillo contentivos cada uno de hierba seca de color chocolate, que resultó ser positiva en la determinación de Marihuana, una vez practicada la prueba de campo. También se encontró un maletín color rojo vino de propiedad de PABLO APONTE SALAZAR que contenía en su interior tres cajetillas de papel de arroz marca "smoking". En ese mismo lugar, se encontró detrás de unos rines, pedazos de papel amarillo que es similar al utilizado en los envoltorios con sustancias ilícitas que se compraron en la operación tantas veces mencionada.

Observa el Pleno que también existen las declaraciones de las señoras GLADYS YOLANDA CASTILLO (f. 3) quien señala textualmente que "... los APONTE que son vendedores de MARIHUANA, el nombre de ellos es ESTHER DE APONTE y PABLO APONTE y es conocido que los APONTE distribuyen MARIHUANA en la casa de ellos donde siempre llegan carros a comprar, ellos viven cerca de mi casa como dos casas después del Centro de Salud de la Barriada"; y LIZBETH NAVARRO RUTINELLY, quien en su declaración jurada (f. 6) manifestó: "... los APONTES que son los únicos que venden marihuana en la Barriada San José, quiero decir la familia APONTE".

Se ha comprobado la vinculación del señor PABLO APONTE ZAPATA con el ilícito investigado, con lo que se dan los presupuestos señalados en el artículo

2159, y la penalidad por tráfico de droga es superior a los dos (2) años, por tanto se cumplen las exigencias contenidas en el artículo 2148, ambos del Código Judicial.

Definitivamente la detención que se llevó a cabo en la persona de PABLO APONTE SALAZAR, se ha ejecutado de acuerdo a la Ley, por lo que la aprehensión es legal.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ VILLARREAL EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La ciudadana ELIZABETH DE VALENCIA ha promovido ante esta Superioridad acción de habeas corpus a favor de su hijo CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ VILLARREAL contra la Directora Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Una vez acogida la acción mediante providencia de fecha 8 de octubre de 1996, se libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, quien contestó mediante Nota N° 3491-DNC. 96. S, el 9 de octubre de 1996. El informe está concebido en los siguientes términos:

"...

a. En ningún momento la suscrita ha ordenado la detención del señor **CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ:**

b. No podemos hacer referencia a motivos, fundamentos de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

c. El recurrente, señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ con cédula de la identidad personal N° 8-459-520, se encuentra bajo la custodia de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención con la supervisión de la Dirección del Centro de Rehabilitación El Renacer; toda vez que fue condenado, mediante sentencia de fecha 14 de febrero de 1996, proferida por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, a sesenta (60) meses de prisión y confirmado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por la comisión del delito de Posesión Ilícita de Drogas Agravadas. De conformidad con el Mandamiento N° 1668-DNC de 8 de octubre de 1996, confeccionando por esta Dirección.

El señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ, concluirá la precitada pena el día 10 de mayo de 2,000, toda vez que el mismo según informes remitidos por la sección judicial del centro penal, comenzó a cumplirla el día 10 de mayo de 1995. ...".

Observa el Pleno que la accionante manifiesta la disconformidad en cuanto a la privación de la libertad del beneficiado con esta acción, basando su petición en los artículos 2039 del Código Judicial y 76 del Código Penal, y adjunta copia del examen expedido por el doctor JOSÉ KALED, Médico Psiquiatra del DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA y del doctor JOSÉ CALDERÓN, Psiquiatra Forense del INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL.

El artículo 76 citado se refiere a "Si antes de comenzar la ejecución de la pena de prisión o después de iniciada ésta, el sancionado padeciera enfermedad mental, el Tribunal suspenderá el cumplimiento de la pena ...".

Como se puede apreciar, en las evaluaciones médicas solicitadas por el Juez Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal, a petición de la defensa del imputado, las mismas reflejan, en términos generales que el señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ VILLARREAL, no presenta alteración mental de tipo psicótica. Ello se aprecia en la certificación expedida por el doctor JOSÉ CALDERÓN quién, además, certifica que ÁLVAREZ VILLARREAL presenta una crisis "ansioso-depresiva" (f. 2). Por su parte, el doctor JOSÉ KALED (fs. 6-7) recomienda que se le conceda al sancionado un tratamiento médico en la medida que la ley establece, para que sea asistido semanalmente en un centro médico, por un psiquiatra y una trabajadora social, en virtud de que presenta una "neurosis adaptiva", que es frecuente en los jóvenes que son víctimas de la pobreza por el medio cultural en que viven.

De conformidad con las evaluaciones médicas antes indicadas, estima la Corte que en el caso en estudio prospera la suspensión del cumplimiento de la pena, a objeto que el sindicado sea trasladado al Centro Médico o establecimiento adecuado y, una vez que haya sanado, sea transferido al centro penitenciario correspondiente, para que cumpla el resto de la pena, si la misma no ha prescrito.

Ahora bien, cualesquiera medida de seguridad que corresponda al sancionado, deberá ser ordenada por el tribunal que dictó la sentencia condenatoria. Ello significa que esta Superioridad no es competente para decretar tal medida, en virtud de que su labor como Tribunal de Habeas Corpus es determinar si la detención, se ajusta al ordenamiento jurídico-procesal.

Esta Corporación de Justicia, al examinar el informe del funcionario acusado, advierte que la prisión que sufre el señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ, radica de manera central en que fue condenado mediante sentencia de 14 de febrero de 1996, proferida por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, a SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN, siendo CONFIRMADA dicha sentencia por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por la "comisión del delito de Posesión Ilícita de Drogas Agravadas".

De conformidad con la certificación expedida por la Directora Nacional de Corrección, señala que la Sección Judicial del Centro Penal, informó que el señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ, comenzó a cumplir la pena impuesta, el día 10 de mayo de 1995 y la misma concluirá el 10 de mayo del 2000.

Como se desprende de la certificación remitida por la Dirección Nacional de Corrección a este Máximo Tribunal de Justicia, el señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ, se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación El Renacer, en la etapa de ejecución de la pena antes indicada, impuesta por una sentencia en firme.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención que sufre el señor CRISTÓBAL WENCESLAO ÁLVAREZ VILLARREAL; y DISPONE que el mismo sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR ORTEGA FUENTES CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES, en su propio nombre ha elevado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus, por considerar que la privación de su libertad es ilegal, quien se encuentra detenido en la Isla Penal de Coiba, a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El Magistrado Sustanciador acogió la acción de habeas corpus y ordenó al funcionario demandado que rinda el informe dentro del término de dos (2) horas, contadas a partir de la notificación del proveído. Con respecto a ello, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante nota de 12 de septiembre de 1996, comunicó a esta Corporación de Justicia, que no habían ordenado la detención del beneficiado con esta acción, que el expediente que contiene lo actuado contra ORTEGA FUENTES, fue enviado mediante oficio N° 20-S del 28 de diciembre de 1995, a la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, a fin de cumplir con la ampliación del sumario.

En virtud de lo expresado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, se enderezó el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, quien dio contestación a lo ordenado mediante Oficio N° 1808 de 16 de septiembre de 1996, cuyo informe pasamos a transcribir, en su parte pertinente:

"Señor Secretario:

Con el respeto que siempre nos caracteriza, me dirijo a esa honorable Corporación de Justicia con la finalidad de contestar el Recurso de Habeas Corpus librado a favor de OSCAR ORTEGA FUENTES, quien se encuentra sindicado por el delito "CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL" (HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA), cometido en perjuicio de DANILO PINEDA QUIJADA.

Así entonces procedo a informar lo siguiente:

a). Esta Agencia del Ministerio Público no ordenó la detención preventiva del señor OSCAR ORTEGA FUENTES. Sin embargo, el mismo, sí está detenido a órdenes de este despacho debido a que las sumarias en que se encuentra, presuntamente, implicado, han sido remitidas en ampliación a esta Fiscalía Superior, por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Como podemos observar (fjs. 33 a 35 del sumario) la Fiscalía Auxiliar de la República, ordenó dicha detención, el día 3 de octubre de 1994 y se fundamentó en los contextos de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

b). De los elementos probatorios reunidos en el sumario y de la propia declación (sic) indagatoria del detenido señor OSCAR ORTEGA FUENTES, colegimos que entre OSCAR ORTEGA FUNENTES (SIC) Y DANILO PINEDA hubo una pelea en el Jardín-Bar "JORÓN VERAGUENSE", ubicado en Tocumen. Al concluir la pelea, el señor ORTEGA FUENTES fue a su casa, buscó un arma y posteriormente se dirigió a la residencia de PINEDA y le efectuó varios disparos, después que lo correteó,

encontrándose PINEDA en el suelo debido a que se cayó al tratar de huir a su agresor.

c). Adjunto copia autenticada del sumario que nos ocupa".

El Pleno, en su calidad de tribunal de habeas corpus, tiene la responsabilidad de determinar si la detención ordenada es legal, es decir, si está presente en el expediente la configuración del hecho punible, y si, en dicha comisión, aparece al menos un vínculo del imputado penalmente.

El Pleno entra al estudio de los elementos que constan en el cuadernillo contentivo de la instrucción sumarial del señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES, iniciado el 18 de diciembre de 1993, por la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá.

Del examen verificado se colige que, la apertura del sumario tiene como fundamento la denuncia formulada por la señora ILKA IVETH GONZÁLEZ VILLAMIL, contra el señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES, por los hechos acaecidos el día 17 de diciembre de 1993, en las inmediaciones del Jorón Veraguense, ubicado en el Sector N° 2 de Belén, Tocumen, en la cual se suscito una pelea entre el prenombrado señor y el esposo de la denunciante, señor DANILO PINEDA QUIJADA.

De conformidad con la denuncia (fs. 1-3), en la pelea participaron, además de OSCAR ELIÉCER ORTEGA QUIJADA, los señores DIDIER ORTEGA FUENTES, ALBERTO ALBERT (a) "CONEJO" y otro que le dicen "ÑERÍN", quienes también le pegaban a su esposo y al meterse ella a defenderlo, fue golpeada con una botella cerca del ojo izquierdo, indicando que lo hizo el señor DIDIER ORTEGA FUENTES. Se lee también en la denuncia que la señora ILKA IVETH GONZÁLEZ VILLAMIL manifestó que ella se encontraba en estado de gravidez.

Señala la denunciante, que una vez terminada la riña, se retiró a su residencia con su esposo, en donde se apersonó el señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES en compañía de DIDIER ORTEGA FUENTES y ALBERTO ALBERT y le gritaban a DANILO PINEDA que peleara, a tal punto que le tumbaron la puerta del cuarto de la señora "MEBIS", pensando que era el cuarto de DANILO PINEDA, y le apuntaron con el arma al esposo de la señora MEBIS. Seguidamente expresa "luego mi Señor salió y al observar que uno de estos sacó el Arma o sea el que se llama OSCAR mi esposo salió corriendo hacia la parte de atrás de mi residencia pero cuando iba por donde está una sanja (sic) mi esposo se resvaló (sic) y OSCAR vino y le dio cuatro disparos, uno en la parte de atrás y le salió en la parte adelante del muslo, otro más arriba de la tetilla derecha y dos (2) en las rodillas, luego de todo esto las personas que acompañaban a OSCAR salieron huyendo y lo dejaron solo ...".

Observa el Pleno que en la declaración indagatoria rendida por el imputado, señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES, indica que el señor PINEDA QUIJADA le pegó sin haberle hecho nada y que al verse ensagrentado fue a su casa a buscar el arma que tenía de la Fuerza Pública. Más adelante señala que se apersonó a la residencia de PINEDA QUIJADA, como a la una de la madrugada y le llamó para que arreglaran el problema, que cuando tocó la puerta "él (refiriéndose a Danilo) me salió con machete como para cortarme y cuando yo me vi así, me caí ya que estaba desesperado y débil por la sangre que había votado (sic) y fue cuando saqué mi arma y le hice cuatro (4) disparos en los pies, esto lo hice en defensa propia". En esta indagatoria también se aprecia que el imputado señala algunas personas que presenciaron los hechos que dieron origen a este proceso.

En el caso en estudio, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ha ordenado una ampliación del sumario, por tanto, se encuentra actualmente en esta etapa.

Es evidente, por lo dicho, que existió el hecho punible, homicidio en grado de tentativa, y la vinculación del imputado con el ilícito, ya que, según la declaración anterior, fue la persona que persiguió y la disparó a la victima del homicidio frustrado, por lo que aparece acreditado el grado de vinculación, sumado a la existencia del hecho punible.

Este Pleno ha determinado, en número plural de ocasiones, que no le corresponde adentrarse en el análisis del expediente, cuya labor le corresponde a la agencia del Ministerio Público y, en su momento, al tribunal de instancia, sino limitarse, como ha ocurrido en el presente caso, a determinar si se dan los presupuestos previstos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Se percata, no obstante, el Pleno que a OSCAR ORTEGA FUENTES se le sindica por la comisión del delito de homicidio , en grado de tentativa, y de lesiones en donde la pena señalada por el artículo 131 lleva aparejada pena de privación de la libertad de cinco a doce años.

No obstante, este Pleno advierte que, si bien se le sindica por el delito de homicidio doloso, en grado de tentativa, y de lesiones, la penalidad, en grado de tentativa, es: "no menor a un tercio del mínimo", que es de cinco años, por lo que no procede, en la presente encuesta, medida cautelar de privación de la libertad, sin perjuicio de que el tribunal de la causa pueda determinar otra medida cautelar distinta, lo que es de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor OSCAR ELIÉCER ORTEGA FUENTES y, ORDENA sea puesto inmediatamente en libertad, sino existe otra causa en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILLIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA EN CONTRA DEL JUEZ NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor de la señorita **ILLIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA**, contra el Juez Noveno del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución de 24 de septiembre de 1996, declaró legal la detención de la beneficiaria de la presente acción constitucional, por considerar que existen suficientes elementos que la vinculan con el delito contra la salud pública por el que se le investiga, el cual conlleva pena de prisión superior a los dos años que exige nuestro ordenamiento jurídico.

Es preciso indicar que aún cuando la presente acción de habeas corpus fue interpuesta por el señor Samuel Mathews James, fue el Dr. Egbert Wetherborne quien apeló de ella, al momento de notificarse de la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Esta apelación fue presentada en ejercicio del poder que le fuera otorgado por la señorita ILIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA, el cual es consultable a foja 63 del cuaderno principal.

En el escrito de apelación se alega que el allanamiento practicado por el Corregidor del Chorrillo, como consecuencia del cual se produjo la detención de la señorita ORTIZ ACUÑA, constituye "un acto sin fundamento legal ya que el

Corregidor no está autorizado para realizar ningún tipo de allanamiento relacionado con drogas y el mismo Corregidor Lic. César Contreras, pretende justificar la ilegalidad del allanamiento al decir que la diligencia fue en busca de un ciudadano que no menciona el nombre." (Foja 12).

En relación con este punto, el Pleno estima que no le asiste razón al apoderado de la señorita ORTIZ ACUÑA, ya que la diligencia fue practicada de acuerdo con los requisitos que establece la ley.

Así, el Corregidor del Chorrillo ordenó el allanamiento del apartamento N° A-4, ubicado en calle 26, de ese Corregimiento, con el objeto de lograr la captura de un ciudadano que se encontraba prófugo, para lo cual dictó la orden de allanamiento consultable a foja 10 del expediente principal. Durante la práctica de esa diligencia se encontró la sustancia ilícita y el dinero incautado, por lo que se procedió a la detención de los ciudadanos que se encontraban en el lugar y a la retención de las evidencias, como se desprende del acta de Diligencia de Allanamiento visible a fojas 13 y 14 del cuaderno principal. Tanto los ciudadanos como las evidencias incautadas se remitieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, para la instrucción del sumario, por lo que no puede calificarse de ilegal la actuación del Corregidor.

En cuanto a los requisitos que establece el artículo 2159 del Código Judicial se observa, en primer lugar, que la detención fue ordenada mediante resolución motivada de 11 de marzo de 1996, proferida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En segundo lugar, el hecho imputado se encuentra acreditado tanto en el informe de filiación consultable a foja 1, como en el acta de allanamiento que consta de foja 11 a 14 del cuaderno principal. Igualmente, a foja 56 de ese mismo cuaderno aparece el informe rendido por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, que certifica que los veinticuatro carrizos y las tres sustancias compactas que fueron incautados, resultaron positivos para la determinación de cocaína, en la cantidad de 2.88 gramos.

En tercer lugar, en cuanto a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la señorita ILLIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA, se encuentra el informe suscrito por el Oficial Agustín Reyes, en el que señala lo siguiente:

> "Al salir del cuarto de baño una de las ocupantes de sexo femenino y tez morena, se dirigió a la sala donde yo me encontraba, trayendo consigo una cartera negra en la mano izquierda y en la mano derecha algo oculto, lo cual le ordené que me mostrara, procediendo la aludida a entregarme una bolsita plástica transparente que contenía en su interior la cantidad de 24 carricitos plásticos transparentes contentivos de una sustancia en polvo de color blanco que se presume sea, droga (cocaína), la cual le entregué de inmediato al Señor Corregidor del Chorrillo, Licenciado **César Contreras**, que fue quien ordenó el allanamiento.
>
> La sospechosa responde al nombre de **Ilis Yamileth Ortiz Acuña**, mujer panameña de 19 de años de edad, con N° de C. I. P. 8-707-2096 residente en el antes mencionado inmueble." (Foja 3 del expediente principal).

De lo anteriormente señalado se colige que la detención preventiva de la señorita ORTIZ ACUÑA es legal, en vista de que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2159 del Código Judicial y de que el delito por el cual se le investiga, tiene pena mínima de prisión que excede los dos años que establece el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, CONFIRMA la resolución dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 24 de septiembre de 1996, que declaró legal la detención preventiva de la señorita

ILLIS YAMILETH ORTIZ ACUÑA.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES Y OTROS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Miguel Ángel Rodríguez Guerrero presentó acción de habeas corpus a favor de los señores **DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES** "y todas aquellas personas detenidas el lunes 13 de octubre de 1996 en los predios de las instalaciones principales del Ministerio de Vivienda, a fin de que se decrete la ilegalidad de su detención." (foja 1) Igualmente, el señor Carlos Brooks Lansiquot presentó habeas corpus a favor del señor **ROGELIO BROOKS**, quien fuera detenido como parte del grupo mencionado anteriormente.

Los habeas corpus fueron interpuestos contra el Juez Primero de Policía Nocturno del Distrito de Panamá, ante el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal. Luego de librado el mandamiento correspondiente, dicho juzgado de circuito, mediante resoluciones de 22 y 24 de octubre de 1996 respectivamente, se inhibió de pronunciarse en relación con dichas demandas de habeas corpus y remitió los expedientes al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En vista de que ambas demandas de habeas corpus se refieren a la misma situación, esta corporación judicial procedió a acumularlas, para decidirlas en una sola resolución.

La Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia respondió el mandamiento de habeas corpus, mediante Nota N° 3710-DNC. 96. S. de 24 de octubre de 1996, en la que señala que no ordenó la detención de los beneficiarios de la presente acción y que "Todas las personas mencionadas fueron sancionadas con 20 días de arresto por el Juzgado Nocturno de Policía de Turno y se encuentran a órdenes de ese Tribunal." (Foja 55).

En ese sentido es preciso señalar que los beneficiarios del presente habeas corpus se encuentran cumpliendo la sanción de arresto impuesta por el Juez Nocturno de Policía, razón por la cual están a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, aunque ésta sostenga lo contrario. Consecuentemente, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2602 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir el presente recurso de habeas corpus.

Los argumentos que utiliza el recurrente para sustentar la acción son los siguientes:

> "1- Que el día 13 de octubre del presente año, fueron detenidos los señores DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES Y OTRAS MAS que participaron en marcha pacífica al Ministerio de Vivienda en ciudad capital.

2- Que los prenombrados, se encuentran detenidos algunos en la Isla Penal de Coiba y otros en la Cárcel de Mujeres; bajo órdenes del juzgado nocturno de policía de San Felipe.

3- Que dicha detención y posterior sanción son ilegales en virtud de que los hechos acaecidos que motivaron su arresto, se dieron alrededor de las 3 de la tarde, lo cual indica y de acuerdo a lo que establece la Ley 112 de 1974, que señala que al que le corresponderá sancionar, es al corregidor del área correspondiente y no así al juez nocturno de policía, quien de acuerdo a la precitada ley atenderá los casos correspondientes a un turno de 6 pm a 6 am.

4- Que el artículo 32 de la Constitución Nacional, ha sido violada, ya que el Juez Nocturno de Policía de San Felipe, no es autoridad competente para juzgar a las personas arriba señaladas, lo cual violenta así el principio universal del debido proceso.

5- Que la ley es clara en la vía gubernativa cuando se dan sanciones administrativas pertinentes, el funcionario cuando se trata de sanción de esta naturaleza, está obligado a dar a conocer al procesado el derecho que le asiste a apelar la sanción proferida la cual quedaría suspendida a fin de que la Comisión de Consulta y Apelaciones pueda decidir la misma; reiteradas jurisprudencias han consignado la nulidad absoluta en los casos en que las personas procesadas no se les informa debidamente el derecho de apelación correspondiente." (Foja 1).

A fojas 8 y 9 del cuadernillo de habeas corpus consta el informe rendido por los Jueces Primero y Segundo de Policía Nocturnos del Distrito de Panamá, en el que se señalan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la detención de los beneficiarios de esta acción, que a la letra dice:

"1. La detención de los ciudadanos DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, ALFREDO FORBES y todos los demás ciudadanos detenidos el lunes 14 del presente mes de octubre a excepción del ciudadano LUIS LADEUT, el cual fue puesto a órdenes del Departamento Nacional de Migración, fue hecha por los miembros de la Fuerza Pública a solicitud del apoyo solicitado por las autoridades del Ministerio de Vivienda a la cual se le había hecho imposible el control de una masa de ciudadanos exaltados que habían incursionado en las instalaciones del mencionado Ministerio.

Posteriormente después de la filiación del total de los 138 ciudadanos, los mismos fueron puestos a órdenes de este despacho, el cual iniciaba funciones después de haber sido filiados.

2. Los motivos y fundamentos de derecho que se tuvieron para procesar a todos estos ciudadanos fue la acusación formal por parte del Secretario General del Ministerio de Vivienda RAÚL ALBERTO BETHANCOURT PENNEL y del Jefe de Seguridad de dicho Ministerio ROGELIO ANÍBAL TUÑÓN DEL CID y del Seguridad del Ministerio de Vivienda, los cuales coinciden en el hecho de que miembros del movimiento "REACCIÓN 3", dirigidos por LADEUT, SALAZAR, LÓPEZ, irrumpieron a las instalaciones del Ministerio violentamente, provocando, insultando, amenazando, tanto a los directivos como a personal subalterno del Ministerio, tornándose la situación incontrolable, motivo por el cual debido a la anarquía imperante, los efectivos de policía tuvieron que intervenir.

La acción de estos ciudadanos al no respetar a las autoridades constituidas, desoyendo las recomendaciones de éstas constituye una típica acción de alteración del orden público, aunado al hecho de amenazar, ultrajar de palabra y provocar a dichas autoridades.

3. A todos los ciudadanos antes mencionados, así como a los demás ciudadanos participantes de los disturbios están sancionados y bajo

> custodia del Centro Penitenciario "Cárcel Modelo" y las damas bajo custodia del Centro de Rehabilitación Femenino, a fin de que cumplan la pena impuesta."

Por otra parte, de fojas 12 a 14 de ese mismo cuadernillo se encuentran copias autenticadas de las Resoluciones fechadas 14 de octubre de 1996, por medio de las cuales se sancionó con veinte días de arresto a los recurrentes, por provocación, amenazas y alteración del orden público, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda.

De lo anteriormente expuesto se colige que la detención que sufren los beneficiarios de la presente acción es legal, porque, en primer lugar, fue dictada por la autoridad de policía competente para ello, esto es el Juzgado de Policía Nocturno del Distrito de Panamá, ya que si bien los hechos que motivaron la sanción ocurrieron alrededor de las tres de la tarde, no fue hasta tempranas horas de la noche que se terminó de filiar a todos los ciudadanos involucrados en ellos.

Los Juzgados de Policía Nocturnos funcionan todos los días desde las seis pasado meridiano hasta las seis antes meridiano, con el objeto de que la administración de justicia policiva sea continua; así lo dispone el artículo 12 de la Ley 112 de 1974.

Y el artículo 1° de la misma Ley expresa que la justicia administrativa policiva en los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón será ejercida "en especial por los Corregidores y Jueces de Policía Nocturnos."

En segundo lugar, la sanción fue impuesta en cumplimiento del procedimiento que establecen los artículos 1708 a 1714 del Código Administrativo y con fundamento en las disposiciones que se refieren a la Policía Moral, Correccional, que según los artículos 859 y 860 del Código Administrativo tiene por objeto mantener el orden, la paz y la seguridad; e impone los castigos por las contravenciones de los preceptos de Policía.

El artículo 901 del Código Administrativo establece que los empleados de Policía deben impedir que se formen o promuevan tumultos, o que se procure impedir que funcionarios y empleados públicos ejecuten sus funciones, debiendo aprehender a los culpables a quienes entregarán para su juzgamiento a la autoridad competente.

La pena de arresto está autorizada por el artículo 878 ibídem. Y la extensión de la pena de arresto impuesta no excede los límites señalados por el artículo 898 del mismo Código.

No obstante es preciso señalar que varios de los detenidos se encuentran cumpliendo en la Colonia Penal de Coiba los veinte días de arresto que les fueran impuestos, lo que contraviene el literal a del artículo 4° de la Ley 87 de 1941, que establece este centro penitenciario para los varones mayores de dieciocho años de edad "que deban sufrir pena de prisión por más de tres años de prisión", situación que no corresponde a los detenidos en este caso.

Así mismo, ese proceder contradice el artículo 844 del Código Administrativo, que dispone:

> "**ARTÍCULO 884.** El condenado a arresto será puesto en la Cárcel de Distrito o en algún otro lugar del mismo Distrito, como cuartel, puesto de guardia o estación de Policía, cuando para ello hubiere motivo a juicio de la autoridad."

Las personas que se encuentran en la Colonia Penal deben, pues, ser trasladadas de inmediato.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA LEGAL la detención de los señores DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES Y OTROS; ORDENA que sean puestos, nuevamente, a órdenes de la

Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia y en cuanto a los detenidos que se encuentran en la Colonia Penal de Coiba, DISPONE que sean trasladados inmediatamente a otro centro penitenciario del Distrito de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Rosario Granda de Brandao, Defensora de Oficio, interpuso acción de Habeas Corpus en favor de **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA**, actualmente detenido en la Cárcel Modelo, y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licdo. Rosendo Miranda.

Funda la actora su pretensión, en que en la declaración indagatoria observable a fojas 54 a 60 del expediente, el detenido admitió ser consumidor de droga, aunque la encontrada no era de su propiedad.

Que en el informe de allanamiento realizado se estableció que **TUÑÓN PETAÑA** fue detenido dentro de la residencia del señor **ARISTIDES CAMARENA** y que la supuesta droga incautada se encontraba dentro de dicho inmueble. De ahí -a juicio de la accionante- que la ilegalidad de la detención estriba en que el defendido no se encontraba cerca del lugar donde fue encontrada la sustancia ilícita, al momento de ser detenido.

Que a **TUÑÓN PETAÑA** no se le encontró ninguna evidencia que induzca a considerar que pretendiera el traspaso de la droga.

Que no existe ninguna declaración o prueba indiciaria que ubique al detenido dentro de algún tipo penal establecido en la ley.

Luego de recibida la acción en cuestión, se libró el mandamiento de rigor contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo respondió de la siguiente manera:

> "PRIMERO: Si es cierto que ordené la **DETENCIÓN PREVENTIVA** de **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA**, mediante providencia fechada diecinueve (19) de agosto de 1996, lo cual corre de fojas 65 a fojas 68 del expediente principal.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que nos llevaron a tomar la decisión de ordenar la **DETENCIÓN PREVENTIVA** de **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA**, se basa en lo siguiente:
>
> El día quince (15) de agosto del año en curso, efectivos de la Policía Nacional, reciben información en su centro de comunicaciones en el sentido de que se había cometido Secuestro a un menor de edad en el Corregimiento de Chorrillo, que los mismos viajaban en un auto

taxi, el cual fue interceptado en el Distrito de San Miguelito.

Los ocupantes del auto eran los señores **LUIS GABRIEL SAAVEDRA (conductor), ENRIQUE TERCERO GONZÁLEZ, IRVIN FUENTES TERRADO, GABRIEL JOAQUÍN QUIÑONES** y el menor **EUCLIDES ISACC MORENO TUÑÓN.**

Le fue recibida declaración jurada al menor **EUCLIDES ISACC MORENO TUÑÓN,** quien explica los motivos de su posible secuestro, añadiendo además, que sabe en donde guardan drogas y armas la personas detenidas. Con base a ello el Señor Corregidor de Belisario Porras, Distrito de San Miguelito, lleva a cabo diligencia de allanamiento a la residencia número 1719 del sector 4-D de Samaria, lugar donde fueron incautados **CIENTO SETENTA (170)** carrizos de **COCAÍNA,** una sub-ametralladora marca UZI y una escopeta, además de algunas municiones. En el inmueble se encontraba presente el ciudadano **JUAN ENRIQUE CEDEÑO GUERRA.**

De igual forma se procede al allanamiento de la residencia del mismo sector, lugar que había sido señalado por el menor, como el sitio en donde habita uno de los posibles secuestradores de nombre **ENRIQUE TERCERO GONZÁLEZ,** en ese lugar se logra encontrar dos (2) cartuchos blancos contentivos de presunta droga. Fuera de la residencia son detenidos los señores: **JAVIER JOSÉ ZÁRATE TORRES, RAÚL ANTONIO MATURIN QUIÑONES y JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA,** todos con sumas de dineros en efectivo.

El menor **EUCLIDES ISACC MORENO TUÑÓN,** quien es la persona que ofrece las informaciones precisas sobre los lugares en donde se ocultaba la droga y las armas, brinda detalles sobre las personas colaboradoras del señor **ENRIQUE TERCERO GONZÁLEZ,** quien es uno de los principales integrantes de una banda de facinerosos dedicados a cometer diferentes ilícitos, entre ellos la venta de estupefacientes, señala que su tío **JORGE ROMÁN TUÑÓN** es una de las personas que 'trabaja' para **TERCERO GONZÁLEZ. (Ver fojas 27-33).**

JUAN ENRIQUE CEDEÑO GUERRA es indagado en este proceso, señalando que la droga encontrada en su residencia es del señor **ENRIQUE TERCERO GONZÁLEZ,** que este tiene un grupo de personas que se encargan de venderle la droga, que solamente cuidaba la sustancia nociva al momento del allanamiento.

Como advierte el despacho, se trata de un grupo de personas organizadas para delinquir, en este caso se ha logrado incautar cierta cantidad de droga, armas de fuego, y la detención de un número plural de personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar, con sumas de dinero en efectivo que no han podido justificar.

Los fundamentos de derecho para ordenar la **DETENCIÓN PREVENTIVA** de **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA** fue el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

TERCERO: Actualmente el detenido **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA** ha sido puesto a órdenes de la Corte Suprema de Justicia para los fines legales pertinentes."

Advierte esta Corporación de Justicia que mediante una persecución realizada como parte del operativo ordenado por el Corregidor del Corregimiento Belisario Porras de San Miguelito -y motivado por informaciones de que un grupo de personas traficaba con drogas- y realizado por unidades de la Policía Nacional, fue aprehendido junto con otras tres personas el señor **JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA** afuera de la habitación N° 1050 ubicada en Samaria, sector 4 todos con sumas de dinero en sus bolsillos; además, se encontró en la habitación un cartucho blanco que llevaba en su interior dos cartuchos transparentes que en su

interior contenían un polvo blanco, que resultó ser cocaína mediante prueba de campo realizada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial (visible a f. 23 del cuaderno principal).

Manifestó el Director de la Zona de Policía de San Miguelito en su Nota N° 783 ZPSM/DIIP. calendada 16 de agosto de 1996 (f. 8 del expediente) al Jefe de la Sección de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, que presumía que el dinero incautada en dicho allanamiento era producto de la venta de droga, ya que **TUÑÓN PETAÑA** se encontraba en el lugar donde se realizó el allanamiento, donde se encontró la supuesta droga.

También dijo el funcionario en dicha Nota, que el reloj que portaba **JORGE ROMÁN TUÑÓN** fue mencionado en la denuncia N° 2A-414-96 interpuesta por el ciudadano Ricardo Gutiérrez, el 13 de agosto del presente año en la P. T. J. de San Miguelito.

Este hecho coincidió con la declaración del menor **EUCLIDES ISAAC MORENO TUÑÓN**, quien fue rescatado por la Policía luego de haber sido secuestrado en un automóvil por **LUIS GABRIEL SAAVEDRA**, **IRVIN FUENTES TERRADO** y **GABRIEL JOAQUÍN QUIÑONES.** El secuestrado manifestó en declaración jurada, que sus secuestradores se proponían guardar armas y drogas, y que sabía dónde podían estar guardadas.

La información por él suministrada, originó el allanamiento ya mencionado, coincidiendo sus afirmaciones con las personas y sustancias encontradas en las direcciones por él suministradas.

Todo lo anterior demuestra que existe justificación suponer la participación del sindicado **TUÑÓN PETAÑA**, y por ende, de su detención.

En cuanto a la detención en sí, la misma cumple con lo normado por el artículo 2148 del Código Judicial, ya que el delito por el cual está sindicado el detenido tiene una pena superior a los dos (2) años de prisión; además, las circunstancias del allanamiento encuadran con la detención en flagrancia.

La aprehensión se realizó el 15 de agosto del año que decurre, y consta en el expediente (f. 26) la orden de detención de **JAVIER JOSÉ ZÁRATE TORRES**, **RAÚL ANTONIO MATURIN QUIÑONES** y **JORGE ROMÁN TUÑÓN**; ello denota que a las 24 horas de su detención, éstos señores ya estaban a órdenes de la autoridad competente y fue emitida su orden de detención, por lo que se cumple lo normado en el artículo 2158 del Código Judicial.

De igual manera, se satisface el requerimiento del artículo 2159 de la misma excerta, toda vez que la orden de detención determina el delito que motivó la misma, estableció los hechos constitutivos del ilícito, así como los que relacionan al detenido con el mismo.

Por todo lo hasta aquí expuesto, es el criterio de esta Colegiatura que la detención de **ROMÁN TUÑÓN** fue realizada conforme lo establece la ley.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de JORGE ROMÁN TUÑÓN PETAÑA, y lo pone a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MELBOURNE CONSTANTINE WALKER NEVANS EN CONTRA DE LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila interpuso acción de Habeas Corpus en favor del señor **MELBOURNE CONSTANTINE WALKER NEVANS**, condenado a una pena de 15 años de prisión por haber sido declarado responsable del delito de homicidio en perjuicio de JESÚS HÉCTOR GALLEGOS, la cual está cumpliendo en el Centro Penitenciario El Renacer, y contra la Directora del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Fundamentó el letrado su petición, principalmente en los siguientes hechos:

Que el justiciado ha desmejorado notablemente su salud, al extremo que las autoridades del Centro Penitenciario El Renacer le han tenido que brindar atención médica permanente -y en algunos casos de urgencia- para evitar su muerte en esa cárcel.

Que **WALKER** es ciudadano panameño, tiene 66 años de edad y una familia desprotegida.

Que el justiciado está por cumplir las dos terceras partes de su condena, y según el artículo 85 del Código Penal, satisface los parámetros necesarios para obtener la libertad condicional.

Que el 26 de septiembre del año que decurre, presentó ante la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia una solicitud de "APLAZAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN" y aún no ha recibido respuesta, a pesar de que dicha Dirección tiene conocimiento de los hechos expuestos en esta acción.

El fundamento de derecho estriba en los artículos 22 -que garantiza el derecho que tiene el detenido de ser informado inmediata y comprensiblemente de la razón de su detención y de sus derechos, a que presuma su inocencia y a la asistencia de un abogado- y 28 de la Constitución Nacional -que establece los principios en que se fundamenta el sistema penitenciario, prohíbe el maltrato, se establece la obligatoriedad del Estado de capacitar a los detenidos, y establece el régimen especial que ha de aplicarse a los menores.

Considera el peticionario que ambas normas han sido violadas por la Dirección Nacional de Corrección, porque conoce la situación de **MELBOURNE WALKER** y no ha dado respuesta a su solicitud, ni ha tomado las medidas legales para proteger su vida, manteniéndolo -según el letrado- en un estado depresivo.

Arguye también el Licdo. Carrillo Gomila el artículo 75 del Código Penal, que establece que la pena de prisión deberá diferirse si la persona a cumplirla está en grave peligro de muerte próxima por razón de enfermedad, hasta que el riesgo desaparezca.

Para sustentar sus afirmaciones, el defensor adjuntó a la presente acción varias Certificaciones emitidas por los médicos que han atendido a **WALKER NEVANS** y que confirman el cumplimiento de las circunstancias descritas en la norma.

Por lo tanto, "... al no haber suspendido el Departamento de Corrección la pena de prisión que cumple el señor WALKER NEVANS, debe declararse ILEGAL la misma y suspenderse hasta cuando el riesgo desaparezca."

También esgrimió el letrado el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 212 del 13 de septiembre de 1996 -por el que se establece y desarrolla el funcionamiento del Consejo Técnico y las Juntas Técnicas de Establecimientos Penitenciarios, se Reglamenta el Programa de Permisos de Salidas Laborales, de Estudio Especiales y se adoptan Otras Medidas-, que señala que en caso de que un recluso esté en la

fase terminal de su enfermedad, él mismo o la Junta Técnica podrá pedir la concesión de un "... depósito hospitalario o domiciliario ..." ante la Dirección de Corrección, previo análisis del médico forense.

Afirma el Licdo. Carlos Carrillo que las nuevas corrientes criminológicas tienden a buscar la rehabilitación de los reclusos, las mejores condiciones, y garantizan su vida; también lo hacen las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, y Panamá es signataria del Pacto de San José, que en su artículo 1° establece la obligación de respetar los derechos; el artículo 4, numeral 1°, establece el derecho a la vida, y el artículo 5, numeral 2°, establece el derecho a la integridad personal.

Luego de recibida la acción, se libró inmediatamente el mandamiento de Habeas Corpus contra la Licda. Sandra Osorio, quien lo contestó de la siguiente manera:

> "A. En ningún momento la suscrita a (sic) ordenado la detención del señor **MELBOURNE WALKER NEVANS.**
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, dado que esta Dirección no la ha ordenado.
>
> C. El señor **MELBOURNE CONSTANTINO WALKER NEVANS**, se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, cumpliendo pena de QUINCE (15) años de prisión por la comisión del delito de Homicidio en perjuicio de JESÚS HÉCTOR GALLEGOS en el Centro de Rehabilitación El Renacer, toda vez que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Panamá mediante sentencia de fecha 29 de abril de 1994, misma que fuera confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 1994.
>
> En virtud de lo anterior y de conformidad con el Mandamiento N° 677-DNC del 4 de mayo de 1995, el precitado se encuentra detenido desde el 6 de junio de 1990, por lo que cumplirá las dos terceras partes de la pena el día 26 de junio del año 2,000 y el total de la pena impuesta el día 26 de junio del año 2,005."

Considera esta Corporación de Justicia, que en el presente caso hay varias aristas que hay que ventilar: los fundamentos de hecho, y los de derecho, de la presente acción.

En cuanto a los primeros, el Licdo. Carlos E. Carrillo expone una serie de hechos referentes al mal estado de salud del señor **MELBOURNE WALKER**, que sostiene con un cúmulo de fotocopias de exámenes médicos, así como diagnósticos y recomendaciones realizados a su representado, para tratar de probar la realidad física del justiciado.

En este sentido, es importante la misiva contenida a fojas 3 y 4 del cuaderno, dirigida por la Cardióloga del Hospital Santo Tomás, Edna L. Acuña, al Sub-Director Médico de Atención del mismo Hospital, Dr. Enrique Rodríguez A., en la cual contesta la solicitud de evaluación médica enviada por éste al Dr. Roberto Blandón, mediante Nota N° 923, en la que -en resumen- concluye que **WALKER** padece de una enfermedad cardíaca que denomina "**CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA - CARDIOMEGALÍA GRADO 1-2. -RITMO SINUSAL E HIPERCOLESTEROCEMIA**", y describe el tratamiento aplicado.

También consta -f. 9- el informe de evaluación psicológica practicada al detenido por el Psicólogo Marco A Rentería A., en el que concluye afección emocional, recomendando para ello terapias de apoyo.

Sin embargo, observa esta Superioridad que no es cierto lo afirmado en el hecho cuarto del libelo que señala que el sentenciado está por cumplir las dos terceras partes de la pena, ya que la contestación del mandamiento de Habeas Corpus inserto a foja 44 del cuaderno, señala que **WALKER NEVANS** cumplirá los dos

tercios de su pena el día 26 de junio del año 2,000, y la totalidad el 26 de junio del año 2,005.

En cuanto a los fundamentos de derecho, no se observa en el presente negocio las características de un caso de privación de libertad que sea susceptible de la acción.

Ello es así, por cuanto **MELBOURNE CONSTANTINE WALKER NEVANS** es sujeto de una sentencia ejecutoriada y en etapa de ejecución; por lo tanto, no se trata de un Habeas Corpus Clásico o Reparador, en el que se pretende que se declare la ilegalidad de la detención. Podría enmarcarse la acción en la categoría del Habeas Corpus Correctivo.

El Licdo. Carrillo Gomila esgrime el artículo 22 de la Constitución Nacional para fundar su pretensión; la norma reza de la siguiente manera:

> "Artículo 22: Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.
>
> Las personas acusadas de haber cometido un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La Ley reglamentará esta materia."

Esta norma no puede ser aplicada en absoluto al caso que nos ocupa, pues no se trata de una persona a la que se acaba de aprehender, ni se puede presumir su inocencia, porque fue encontrado responsable de un delito mediante sentencia ejecutoriada y ejecutada.

El artículo 28 de la misma excerta, que establece los principios rectores del sistema penitenciario, también es utilizado por el actor; pero considera esta Corporación de Justicia que este artículo carece de la trascendencia necesaria en esta acción para lograr la pretensión del petente; ello es así, toda vez que si bien puede considerarse que la situación por la que está atravesando **WALKER NEVANS** no corresponde a la naturaleza de los principios establecidos en la norma que nos ocupa, el mecanismo utilizado -como veremos- no es el apropiado para que se apliquen dichos principios al reo.

En efecto, el mismo representante del actor esgrime el artículo 75 del Código Penal para justificar la necesidad de la medida solicitada.

La norma, contenida en el Capítulo VI del Título III del Libro I del Código Penal -referente al Aplazamiento de la Ejecución de la Pena-, establece lo siguiente:

> "**Artículo 75**: La ejecución de la pena de prisión deberá diferirse:
> 1. Si la persona que debe cumplirla se halla en grave peligro de muerte próxima por razón de enfermedad, hasta cuando el riesgo desaparezca.
> 2. ..."

La norma, efectivamente establece la facultad de diferir la pena por causa de peligro de muerte del reo, hasta que dicha causa desaparezca, caso en el que regresará a la cárcel para continuar el cumplimiento de su pena.

Por otra parte, el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 212 del 13 de septiembre de 1996 -por el cual se Establece y Desarrolla el Funcionamiento del Consejo Técnico y las Juntas Técnicas de Establecimientos Penitenciarios, se Reglamenta el Programa de Permisos de Salidas Laborales, de Estudio, Especiales y se Adoptan Otras Medidas-y que fue traído a colación por el letrado, aclara la situación confiriéndole la potestad para conceder "un depósito hospitalario o

domiciliario" a la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia; la norma señala que:

> "Artículo 15: En caso de que un interno sancionado se encuentre en la fase terminal de una enfermedad, éste o la Junta Técnica podrá solicitar la concesión de un depósito hospitalario o domiciliario ante la Dirección Nacional de Corrección, previa evaluación del médico forense."

Entonces, le corresponde a la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia determinar si difiere la ejecución de la pena aplicada a **MELBOURNE WALKER**, en base a la evaluación que haga de la documentación proporcionada por su representante. El hecho de que la Dirección de Corrección no haya tomado una decisión inmediata sobre la situación referida, no significa que la detención sea ilegal.

En complemento a lo anterior, las normas invocadas por el Licdo. Carrillo Gomila sobre las Convenciones sobre Derechos Humanos de las que Panamá es signataria, se cumplen en las normas ya observadas, sin perjuicio de que su ejecución se realice de la manera instituida en normas como la aquí transcrita, que se establecen precisamente para darle cumplimiento a esos Pactos.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de MELBOURNE CONSTANTINE WALKER NEVANS, y lo pone a órdenes de la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ RICARDO BULTRÓN EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema, la acción de habeas corpus interpuesta por el señor JUAN PAULINO RODRÍGUEZ a favor del ciudadano **JOSÉ RICARDO BULTRÓN SAMANIEGO**, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado rindió su informe de conducta, visible de fojas 7 a 8 del cuadernillo, en los siguientes términos:

> "PRIMERO: El señor BULTRÓN fue detenido por orden escrita de esta Fiscalía fechada doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motivan la detención del sindicado, tienen inicio el día nueve (9) de septiembre del presente año, cuando unidades de la Policía Técnica Judicial, solicitan la autorización y fiscalización de este Despacho, para la puesta en

> práctica de una operación de compra simulada, en el área de la Pedro Obarrio, lugar donde había sido identificado un sujeto de tez morena, cabello encrespado de unos treinta años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias prohibidas.
>
> Previa autorización de esta oficina se procede al lugar, donde el ciudadano antes descrito le pidió al informante que regresara en veinte (20) minutos porque en el momento no tenía sustancias ilícitas para vender. A continuación el prenombrado se dirigió en compañía de una menor al sector de Barraza y al regresar pudo notarse nerviosa a la menor por lo cual ambos fueron retenidos y trasladados a este Despacho donde fueron sometidos a revisión pudiéndose encontrar en la ropa interior de la citada menor un envoltorio de papel plateado con un paquete de plástico transparente que contenía a su vez cierta cantidad de uan (sic) sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea la droga conocida como COCAÍNA.".

Sigue diciendo el señor Fiscal en su informe que una vez indagado el señor **BULTRÓN**, se acogió al derecho constitucional de ser asistido por un abogado. Respecto a la certificación que debe expedir el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, indicó que aunque fue solicitada mediante Oficio N° 9633-96 de 12 de septiembre de los corrientes, aún al momento de confeccionar el informe de conducta, no habían recibido respuesta.

Recibida la presente acción en el despacho del ponente, se dirigió nota a dicho Laboratorio para que remitieran la certificación pedida por la Fiscalía de Drogas, la cual nos fue enviada mediante Oficio N° SG-3233 de nueve (9) de octubre de 1996, y que en su parte pertinente indica:

> "Certificamos, que las muestras analizadas resultaron **POSITIVAS**, para la determinación de **COCAÍNA**, en la cantidad de 43.39 gramos.".

De las constancias que obran en el expediente principal, se desprende que a la fecha en que fuera detenido el recurrente, éste había sido objeto de vigilancia por parte de miembros de la Policía Técnica Judicial, quienes tuvieron comunicación en el sentido de que **BULTRÓN** se encontraba vendiendo sustancias ilícitas.

Mediante providencia de 9 de septiembre de los corrientes, la Fiscalía de Drogas autorizó la operación de compra simulada, y a tal efecto, el señor **RAÚL POLO** fingió ser el supuesto comprador. Una vez en el sitio, el señor **POLO** le solicitó a **BULTRÓN** que le vendiera la droga, (ver foja 4 y 5 del expediente principal) a lo cual éste le indicó que regresara en veinte (20) minutos, al cabo de los cuales, el sujeto regresó acompañado de la menor de nueve años, **MARISIN DEL CARMEN CONTRERAS DE LA CRUZ**, quien se mostraba muy nerviosa y detenidos ambos, se encontró en poder de la menor un paquete contentivo de la droga, cuyo peso ya indicó el informe del Laboratorio.

Por su parte, el recurrente indica en su escrito de habeas corpus que, "en la presente investigación ha habido Abuso de Autoridad y extralimitación de funciones" pues, en su opinión, la menor no debió ser interrogada por ningún agente de la P. T. J. ni por el Fiscal de Drogas, ya que no son ellos los funcionarios competentes ni especializados. Luego transcribe literalmente los artículos 522, 523, 524, 525, 528 del Código de la Familia, reiterando que la detención preventiva de **JOSÉ RICARDO BULTRÓN SAMANIEGO** "está basada en actos contrarios a la Constitución y a la Ley" y solicita su libertad.

La Corte estima que en el presente caso la detención preventiva se justifica, puesto que contra **JOSÉ RICARDO BULTRÓN SAMANIEGO** concurren una serie de indicios y señalamientos que evidencian la comisión por su parte de un delito relacionado con drogas.

Esto es así, puesto que en nota dirigida al Fiscal Especial de Drogas, el Inspector ROLANDO REINA JAÉN, Jefe de la División de Estupefacientes de la P. T.

J., indica tener conocimiento de que un sujeto de tez morena, cabello encrespado de unos treinta años de edad, y una señora de treinta y cinco años de edad aproximadamente, obesa, se encontraban vendiendo drogas, por ello solicita autorización para la compra controlada.

Al llevarse a cabo dicha operación, efectivamente, **JOSÉ RICARDO BULTRÓN** le dijo al comprador que esperara veinte (20) minutos; al cabo de los cuales regresó acompañado de la menor que portaba la sustancia ilícita.

Resulta evidente que contra **BULTRÓN** no sólo pesa el señalamiento de la menor, que el recurrente tacha de ilegal, sino también y más significativo es el señalamiento que hacen sus captores, los detectives **ANEL BRADIEL**, **ÁNGEL ATENCIO**, **MANUEL GARCÍA**, **y RIBETH ROBLES.**

Igualmente, es deplorable la actitud de **BULTRÓN** al utilizar a una menor de edad para que sirviera de "mula", y así evadir él la responsabilidad penal que le pudiera caber por dedicarse a esta actividad ilícita.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de JOSÉ RICARDO BULTRÓN SAMANIEGO, y ordena que sea nuevamente filiado a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en el Centro Penitenciario respectivo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO VIETO ROLLIZO, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 23 de octubre de 1996, la señora Mónica Chavarría, se apersonó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de presentar escrito contentivo de la acción de Habeas Corpus a favor del señor DANILO VIETO ROLLIZO, contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien, mediante Oficio N° 15910 de 24 de octubre de 1996 (f. 5), manifestó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor DANILO VIETO ROLLIZO.
>
> 2. No tiene razón de ser en base a la respuesta anterior.
>
> 3. El día 23 de octubre del año en curso, fue remitido a este despacho el sumario seguido contra DANILO VIETO ROLLIZO y EDUARDO V. GREAVES, imputados por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en perjuicio del señor RICARDO AGUILAR NAVARRO, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 2158 del Código Judicial se procedió a examinar el expediente concluyendo que existen suficientes elementos de juicio vinculantes contra el señor EDUARDO V. GREAVES, más no así

> contra DANILO VIETO ROLLIZO. En consecuencia se decretó la detención preventiva del primero y del señor DANILO VIETO ROLLIZO se dispuso dejarlo sin aprehensión, mediante el oficio N° 15898 fechado 24 de octubre de 1996, cuya copia autenticada se les adjunta al presente informe como constancia."

Del informe transcrito (f. 5) y de la copia autenticada del Oficio N° 15898 de fecha 24 de octubre de 1996 (f. 6), se concluye que el señor DANILO VIETO ROLLIZO se encuentra en pleno goce de su libertad ambulatoria y la acción de habeas corpus está destinada constitucionalmente a preservar ésta libertad, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la ley señala y en el presente caso, la persona a favor de quien se le promovió la acción correspondiente se encuentran en libertad; luego entonces, no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERROL CECILIO SEALES GRANT EN CONTRA DE FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Felipe A. Waisome promovió recurso de habeas corpus a favor del detenido Errol Cecilio Seales Grant ante esta Superioridad y mediante resolución, de 13 de septiembre de 1996, se declinó competencia en el Segundo Tribunal Superior de Justicia porque la autoridad bajo cuyas órdenes está el detenido, sólo tiene competencia en la provincia de Colón y la Comarca de San Blas. Ahora, el negocio ha reingresado a esta Corporación para conocer, en grado de apelación, la mencionada acción de Habeas Corpus.

El licenciado Waisome al sustentar el recurso presentado manifestó lo siguiente: "Discrepamos respetuosamente con los Honorables Magistrados Del (sic) Segundo Tribunal de Justicia por cuanto que no existe ningún elemento probatorio que vincule a Errol Cecilio Seales Grant con el ilícito, sino únicamente lo señalado por la propia funcionaria instructora en su informe del 19 de septiembre y que se sustenta en una percepción errónea sin absolutamente ningún sustento en los hechos o declaración alguna que repose en el expediente"

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por medio de sentencia fechada el 23 de septiembre de 1996, resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención de Errol Cecilio Seales Grant con base en las siguientes razones:

> "El examen de los medios probatorios sugiere la existencia de un delito Contra la Salud Pública relacionado con Drogas, y para los efectos de decidir el Juicio Especial Constitucional de Habeas Corpus bajo examen, debemos calificar el hecho punible de acuerdo con la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, contemplada en el

artículo 255 del Código Penal, modificado por el artículo 2 de la Ley 13 de 1994, que tipifica como delictiva la conducta humana llevada a cabo con previsión, al menos momentánea, intención, voluntad y desarrollo de los actos idóneos para intentar sacar, en tráfico o tránsito internacional, con destino hacia otros países, drogas ilícitas y la sanción es de 8 a 15 años de prisión, este delito permite aplicar la medida cautelar personal de detención preventiva, porque la pena mínima es menor de dos años de prisión y quienes están vinculados con el mismo quedan excluidos del derecho de excarcelación, tal como lo contempla el artículo 2181, ordinal 2°, del Código Judicial, modificado por el artículo 1 de la Ley 15 de 1994.

Ahora bien, contra el procesado ERROL CECILIO SEALES GRANT, constan graves indicios de responsabilidad penal porque estaba presente cuando abrieron el contenedor contentivo de 334 paquetes en cuyo interior había cocaína y, en su declaración indagatoria rendida con la asistencia de un abogado defensor, esgrime en su defensa una supuesta actuación ingenua, producto de un favor que le solicitó quien le había ayudado a trasladarlo a tomar el avión para dirigirse de la Provincia de Colón a Panamá, es decir, que trasmitiera a un tal Carrillo que el señor Juan Ocalagan debía llamar a Márquez, pero no fue posible comunicarse con esas personas y lo invitaron donde estaba el contenedor, coincidiendo con la diligencia de allanamiento, sin embargo, esa excepción no está comprobada en este proceso, por el contrario, queda vinculado con el hecho punible, no por una opinión subjetiva, sino objetiva, debido a las circunstancias o componentes de tal situación.

Ante tales circunstancias, es incuestionable que han concurrido los presupuestos legales exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, para sustentar la medida cautelar personal de detención preventiva cuestionada, porque el delito imputado permite su aplicación, el proceso es conducido por autoridad competente, al procesado le asiste su abogado defensor, está acreditada la existencia del hecho punible y constan graves indicios de responsabilidad penal contra el señor ERROL CECILIO SEALES GRANT.

Durante las fases del proceso penal correspondiente, será debatido todo lo concerniente a la responsabilidad penal y culpabilidad del procesado, porque tales aspectos no deben dilucidarse en un Juicio Especial Constitucional de Habeas Corpus, cuya finalidad se circunscribe a determinar si están cumplidas las formalidades legales para privar de libertad ambulatoria a una persona." (Fs. 20 a 22).

Se lee en el sumario, como elemento de prueba del hecho punible, la diligencia que llevaron a cabo, el día 13 de agosto de 1996, la Fiscal Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y los agentes de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de Colón, en el puerto de Manzanillo International Terminal, ubicado en Coco Solo. En esta diligencia se inspeccionó, registró y decomisó al contenedor TEXU 440797-1 que iba a ser embarcado en la Motonave Seabord Ocean, por la Compañía Import & Export Marquez, S. A., con destino a Miami Florida (fs. 12-14). Dentro del contenedor encontraron cajas de abanicos de techo y de pie marca Crown que además de los abanicos contenían 334 paquetes de un polvo blanco que se presumió era cocaína, envueltos en plástico forrados con cinta adhesiva. Además, en el acta de la diligencia se dejó constancia de que al lugar de los hechos se presentó el señor Errol Cecilio Seales Grant, quien se identificó como empleado de la empresa Márquez S. A., y manifestó que estaba encargado de investigar cual era el problema que se presentaba con la mercancía, sin embargo, con las investigaciones que se llevaron a cabo se comprobó que este señor no laboraba en dicha empresa.

Al rendir declaración indagatoria Errol Cecilio Seales Grant negó toda vinculación con el hecho punible investigado, y se excepcionó diciendo que su presencia en el lugar de los hechos fue meramente circunstancial ya que estaba

allí haciéndole un favor a un individuo llamado González, quien le había pedido que localizara en la compañía Seabord Ocean al señor Juan Ocalagan para darle un mensaje, hecho que no ha comprobado. Además negó haberse identificado ante los funcionarios de la Fiscalía como un empleado de la empresa Márquez S. A. (Fs. 674-679).

De lo expuesto se infiere que le asiste la razón al Tribunal de primera instancia al determinar que en este caso la detención es legal, porque los hechos investigados configuran el delito contra la Salud Pública denominado Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el primer párrafo del artículo 255 del Código Penal, modificado por el artículo 2 de la Ley 13 de 1994, sancionado con la pena de prisión de ocho (8) a quince (15) años y, por otro lado, de la presencia del imputado en el lugar de los hechos surgen indicios graves de responsabilidad que lo vinculan al hecho punible investigado.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la detención preventiva decretada contra el señor Errol Cecilio Seales Grant no viola las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y por tanto, la sentencia apelada debe confirmarse.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia dictada el 23 de septiembre de 1996 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara LEGAL la detención del señor ERROL CECILIO SEALES GRANT, ordenada por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón y la Comarca de San Blas y DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO BERNARDINO GONZÁLEZ DENTRO DEL PROCESO LABORAL INSTAURADO POR HILDA DAMARIS JAÉN DE CENTELLA CONTRA AZUCARERA NACIONAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Bernardino González Jr., actuando en nombre y representación de **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia advertencia de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 del Código de Trabajo en el proceso laboral HILDA DAMARIS JAÉN DE CENTELLA vs. AZUCARERA NACIONAL, S. A.

Para decidir sobre la admisibilidad de la citada advertencia de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima necesario comprobar si cumple con los correspondientes requisitos legales.

El artículo 2551 del Código Judicial establece como requisitos para la interposición de una acción de inconstitucionalidad que, además de cumplir con los requisitos comunes a toda demanda, establecidos por el artículo 654 del

Código Judicial, se transcriba literalmente la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales y se indique, las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de la infracción.

En la presente advertencia de inconstitucionalidad, no se transcribió literalmente el artículo 155 del Código de Trabajo, norma que se acusa de inconstitucional, así como tampoco se señaló el concepto en que esta norma infringe el artículo 32 de la Constitución Política, que se considera violado. Además, es necesario resaltar que lo que plantea el demandante no es la inconstitucionalidad del artículo 155 del Código de Trabajo, sino la ilegalidad de su aplicación en el caso concreto, asunto que no corresponde dilucidar a este Tribunal Constitucional mediante la acción promovida.

Por lo expuesto, a la advertencia de inconstitucionalidad presentada no puede dársele el trámite legal, con fundamento en el artículo 2552 del Código Judicial, cuyo párrafo final establece que la inobservancia de los señalados requisitos producirá la inadmisibilidad de la demanda.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Bernardino González Jr., en su calidad de apoderado de AZUCARERA NACIONAL, S. A. contra la aplicación del artículo 155 del Código de Trabajo, dentro del proceso laboral instaurado por HILDA DAMARIS JAÉN DE CENTELLA contra AZUCARERA NACIONAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PRESENTADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Candelario Santana, actuando en nombre y representación de ANGELA MARÍA MENESES, interpuso ante la Junta de Conciliación y Decisión Número Siete, advertencia de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por su poderdante contra la sociedad Banco de la Exportación, S. A., demanda que fue remitida al Pleno de esta Corporación de Justicia, para su tramitación.

Al decidir sobre la admisibilidad de la citada advertencia de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima necesario examinar, si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.

La exposición del concepto de la infracción de las normas constitucionales que se estima violadas constituye un requisito esencial para la admisión de las advertencias, consultas o acciones independientes de inconstitucionalidad, tal como lo establece el artículo 2551 del Código Judicial y lo ha indicado el Pleno de la Corte en reiterados pronunciamientos, entre ellos, lo fallos de 5 y 27 de enero 1995 (Registro Judicial, Enero 1995, págs. 105 a 106 y 140 a 141).

Ha dicho el Pleno que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar en forma detallada y lógica las

razones o motivos en que se fundamenta las infracciones al ordenamiento jurídico constitucional, de modo que se ilustre acerca de las violaciones que se alega. En otras palabras, se requiere que quien advierte la inconstitucionalidad de una norma no sólo enuncie formalmente cuál es el concepto de la violación, sino que dé una explicación pormenorizada del mismo, que permita examinar el fondo de la violación que se alega.

En el caso en estudio, como el actor no explica, ni da a conocer, las causas o los motivos por los que, en su opinión, son infringidas las normas constitucionales que cita como violadas por el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, no cumple con el señalado requisito y, por tanto, la presente acción de inconstitucionalidad no debe admitirse.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la acción de inconstitucionalidad presentada dentro del proceso laboral por despido injustificado promovido por ANGELA MARÍA MENESES contra el Banco de la Exportación, S. A., para que se declare que es inconstitucional el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CONTRA EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado **Abel Augusto Zamorano**, Magistrado Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, ha elevado al Pleno de esta Máxima Corporación Judicial la Advertencia de Inconstitucionalidad que contra el párrafo segundo del artículo 38 del Reglamento Interno del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación formulara el licenciado **JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ALDERETE**, en representación del **INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE).**

Esta incidencia reposa dentro del escrito de oposición al Recurso de Apelación incoado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos Electrificación (SITIRHE) contra la sentencia N° 8 del 1° de marzo de 1996, proferida por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección mediante la cual "DECLARA que no es posible aplicar el artículo 405 del Código de Trabajo a los trabajadores del IRHE y descontar en forma obligatoria la cuota sindical a quienes no se encuentren afiliados al Sindicato".

Esta Superioridad procede en primer término al análisis del escrito contentivo de la advertencia presentada, de acuerdo con el artículo 203 de la Constitución Nacional y los artículos 2545, 2548, 2550 y 2151 del Código Judicial, en vías de determinar si el mismo cumple con los requerimientos formales que condicionan su viabilidad.

En este punto se percata el Tribunal que la advertencia de inconstitucionalidad en estudio adolece de serios defectos que impiden su

admisión.

Conforme al contenido del artículo 203 de la Constitución Nacional, son presupuestos procesales para la procedencia de la advertencia de inconstitucionalidad, que se den los siguientes requisitos:

1. La existencia de un proceso o procedimiento.
2. Que una de las partes integrantes del proceso advierta el probable vicio.
3. Que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso, se cite como violatoria de la Constitución.
4. Transcripción de las normas constitucionales infringidas.
5. Concepto de la violación.
6. Que la disposición acusada no haya sido objeto de pronunciamiento constitucional por parte de la Corte Suprema.

En atención al 2545 numeral 2, 2548, 2550 y 2551 del Código Judicial, se colige además de los parámetros antes mencionados, que es indispensable que el advirtiente elabore la petición instaurada tomando en consideración y aplicando los requisitos comunes a las demandas de inconstitucionalidad y a las demandas en general.

Cabe indicar que en reiteradas oportunidades esta Superioridad ha señalado que las advertencias de inconstitucionalidad deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen a las demandas de inconstitucionalidad, previstos en el artículo 2551 del Código Judicial, tal como se constata en la copiosa jurisprudencia de la Corte en esta materia, entre las cuales son consultables las sentencias de 23 de noviembre de 1990; 26 de febrero de 1993; 20 de mayo de 1994; 26 de septiembre de 1994; y de 3 de mayo de 1994.

En este orden de ideas, se observa que la advertencia de inconstitucionalidad fue formulada por el apoderado del IRHE dentro del mismo escrito de oposición al Recurso de Apelación incoado contra la sentencia N° 8 de 1° de marzo de 1996, dictada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, y no en un libelo aparte como debe ser presentada toda demanda en materia de constitucionalidad.

De tal modo, la advertencia en cuestión primeramente no guarda apariencia de demanda, y mucho menos cumple con los requisitos contenidos en las normas antes mencionadas, dado que no indica, ni transcribe, la disposición o disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y en qué concepto se produce la supuesta infracción del precepto constitucional (sea por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación). De igual manera se aprecia que tampoco cumple con los requisitos comunes a toda demanda, pues no expone los hechos en que se fundamenta.

Las razones anotadas imposibilitan al Tribunal de conocer de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada, tal como lo ordena el artículo 2552 del Código Judicial, cuyo inciso final preceptúa:

> "Artículo 2552.
> ...
> La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores producirá la indamisibilidad de la demanda". (Subrayado nuestro).

En estas circunstancias, y en virtud de todo lo expuesto, este Tribunal Colegiado debe negarle curso legal a la advertencia de inconstitucionalidad presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia presentada por el licenciado JOSÉ LUIS JIMÉNEZ contra el párrafo segundo del artículo 38 del Reglamento Interno del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR PINO CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE JULIO DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Oscar Pino, actuando por intermedio de su apoderado judicial, el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra sentencia de 25 de julio de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral que interpusiera contra la empresa Astilleros Braswell International, S. A.

De acuerdo con lo que sostiene el demandante, la resolución atacada viola los artículos 32 y 70 de la Constitución Política vigente.

El negocio se encuentra para decidir sobre la admisibilidad de la demanda, a la luz de lo que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial, consagratorios de los presupuestos procesales que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, así como con los establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación.

Un análisis de los hechos de la demanda, así como de las pruebas aportadas, permite conocer que la pretensión va encaminada a que se revise en la esfera constitucional, por la vía principal de control de constitucionalidad o de la acción constitucional objetiva, una materia cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a la jurisdicción especial de trabajo, de conformidad con el artículo 73 de la Carta Política, con la particularidad de que la pretensión ya fue decidida en el aludido proceso laboral.

En efecto, de los hechos primero, tercero, cuarto, quinto y séptimo del libelo de demanda se desprende claramente que el actor busca que el tribunal constitucional reexamine la causa, concretamente que realice la valoración de las pruebas aportadas al cuaderno contentivo del negocio laboral, lo que constituye una pretensión a todas luces inadmisible.

Conviene reiterar el criterio vertido en profusa jurisprudencia de este tribunal, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad no es un medio procesal idóneo ni vía equivalente a una tercera instancia, para que el tribunal constitucional proceda a un nuevo examen del caudal probatorio de un proceso, como tampoco para que se adentre en consideraciones en materia de interpretación de la ley, tareas que corresponden privativamente a la jurisdicción ordinaria, tanto al juez de la causa como tribunal de apelaciones. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete-operador de la Constitución, no puede pasar entonces a la verificación de supuestos de errores in iudicando, tal como se pretende en esta causa.

Valga recordar que los procesos constitucionales son aquellos instituidos para la impugnación, con carácter preventivo o reparador, de las normas o actos que se consideren contrarios a la Carta Fundamental (jurisdicción constitucional objetiva) y para la tutela o defensa de los derechos fundamentales consagrados, en forma expresa o implícitamente, en la Ley Suprema (jurisdicción constitucional subjetiva), así como también los relativos a la función jurisdiccional constitucional, como el "Impeachment" o juicio político de altos funcionarios del

gobierno, los conflictos de competencia entre órganos superiores del Estado (Cf. SERRA, María Mercedes; Procesos y Recursos Constitucionales, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 39).

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Eduardo E. Ríos, actuando en representación de Oscar Pino, contra la sentencia de 25 de julio de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA, APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO JANETH ANRIA VS BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Candelario Santana, actuando en nombre y representación de **JANETH DE ANRIA**, interpuso ante la Junta de Conciliación y Decisión Número Cuatro, advertencia de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, subrogado por el artículo 39 de la Ley N° 44 de 1995, dentro del proceso promovido por su poderdante contra la sociedad Banco de la Exportación, S. A. (BANEXPO), demanda que fue remitida al Pleno de esta Corporación de Justicia, para su tramitación.

Antes de decidir sobre la admisibilidad de la citada advertencia de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima necesario examinar si cumple con los requisitos legales para su presentación.

La exposición del concepto de la infracción de las normas constitucionales que se estima violadas constituye un requisito esencial para la admisión de las advertencias, consultas o acciones de inconstitucionalidad, tal como lo establece el artículo 2551 del Código Judicial y lo ha indicado el Pleno de la Corte en reiterados pronunciamientos, entre ellos, los fallos de 5 y 27 de enero de 1995 (Registro Judicial, Enero 1995, págs. 105 a 106 y 140 a 141), y en reciente resolución de 10 de octubre de 1996, dictada en la advertencia de inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, promovida dentro del proceso laboral interpuesto por ANGELA MARÍA MENESES contra el Banco de la Exportación, S. A. (BANEXPO).

Ha dicho el Pleno que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar en forma detallada y lógica las razones o motivos en que se fundamentan las infracciones al ordenamiento jurídico constitucional, de modo que se ilustre acerca de las violaciones que se alegan. En otras palabras, se requiere que quien advierte la inconstitucionalidad de una norma no sólo enuncie formalmente cuál es el concepto de la violación, sino que de una explicación pormenorizada del mismo, que permita examinar el fondo de la violación que se alega.

En el caso en estudio, como el actor no explica, ni da a conocer, las

causas o los motivos por los que, en su opinión, son infringidas las normas constitucionales que cita como violadas por el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, no cumple con el señalado requisito y, por tanto, la presente advertencia de inconstitucionalidad no debe admitirse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Candelario Santana Vásquez, dentro del proceso laboral por despido injustificado promovido por JANETH DE ANRIA contra BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO), para que se declare que es inconstitucional el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO ÁNGEL GANDARA CONTRA EL BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del proceso laboral que ha promovido ÁNGEL GANDARA contra el BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO), con motivo de excepción de inexistencia de la relación laboral, el licenciado CANDELARIO SANTANA, procurador judicial de la parte demandante, ha promovido advertencia de inconstitucionalidad del artículo 242, segundo párrafo, del Código de Trabajo, aplicable, en apreciación del actor, en el proceso en referencia.

Corresponde en esta instancia determinar si la demanda de inconstitucionalidad se encuentra estructurada conforme al artículo 2551 y si, además, cumple con los requisitos que, para su admisibilidad, ha sentado este Pleno.

El Pleno advierte que los requisitos señalados en el artículo 2551 no han sido cumplidos por el demandante, toda vez que la advertencia ha sido formulada en el mismo escrito en que contesta la excepción de inexistencia de la relación laboral, propuesta por la parte demandada, y, además, no cumple con los requisitos que debe contener la demanda de inconstitucionalidad, es decir, en primer término cumplir con los requisitos de toda demanda, consignados en el artículo 654 del Código Judicial, y, además, no ha cumplido con la exigencia de señalar el concepto de la infracción de los artículos constitucionales que infringe la norma de rango legal. Se aprecia que el demandante, de manera escueta, señala consideraciones generales que no pueden asimilarse al requisito de exponer el concepto de la infracción en que incurre el legislador, al haber dictado el artículo cuestionado como contrario al Estatuto Fundamental.

Sobre el particular, en un fallo muy reciente, de 10 de octubre de 1996, este Pleno tuvo que analizar otra advertencia de inconstitucionalidad, propuesta por el mismo procurador judicial, contra la misma parte demandada, en aquella ocasión representando a la señora ÁNGELA MARÍA MENESES, y el Pleno tuvo ocasión de exponer lo que a continuación se transcribe:

"...

Al decidir sobre la admisibilidad de la citada advertencia de

> inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima necesario examinar, si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.
>
> La exposición del concepto de la infracción de las normas constitucionales que se estima violadas constituye un requisito esencial para la admisión de las advertencias, consultas o acciones independientes de inconstitucionalidad, tal como lo establece el artículos 2551 del Código Judicial y lo ha indicado el Pleno de la Corte en reiterados pronunciamientos, entre ellos, lo (sic) fallos de 5 y 27 de enero de 1995 (Registro Judicial, Enero 1995, págs. 105 a 106 y 140 a 141).
>
> Ha dicho el Pleno que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar en forma detallada y lógica las razones o motivos en que se fundamenta (sic) las infracciones al ordenamiento jurídico constitucional, de modo que se ilustre acerca de las violaciones que se alega. En otras palabras, se requiere que quien advierte la inconstitucionalidad de una norma no sólo enuncie formalmente cuál es el concepto de la violación, sino que dé una explicación pormenorizada del mismo, que permita examinar el fondo de la violación que se alega.
>
> En el caso en estudio, como el actor no explica, ni da a conocer, las causas o los motivos por los que, en su opinión, son infringidas las normas constitucionales que cita como violadas por el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, no cumple con lo señalado requisito y, por tanto, la presente acción de inconstitucionalidad no debe admitirse".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el licenciado CANDELARIO SANTANA, apoderado de la parte actora en el proceso ÁNGEL GANDARA contra el BANCO DE LA EXPORTACIÓN (BANEXPO).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO EN REPRESENTACIÓN DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES SOBRE EL ARTÍCULO 2486 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del proceso que se le sigue al Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES ante la Asamblea Legislativa, la defensa técnica del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha promovido advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2486 del Código Judicial, por entender que el precepto legal mencionado, que debe ser aplicado al proceso del cual es parte el Magistrado FAÚNDES, es inconstitucional por ser violatorio de los artículos 4, 22 y 32 de la Constitución Política, en escrito fechado el día 26 de agosto de 1996, y presentado ante la corporación legislativa el día 27 del mismo mes y año. Mediante resolución de 5 de septiembre de 1996, el Magistrado Sustanciador

admitió la advertencia de inconstitucionalidad y se le corrió traslado de la acción constitucional a la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración, mediante Vista N° 408, de 13 de septiembre de 1996, luego de un comprensivo examen de la pretensión de inconstitucionalidad, estimó que la disposición legal cuestionada no vulnera ninguno de los artículos de la Constitución.

Colocado en lista el asunto constitucional para la fase de alegaciones, ninguna se produjo en esta etapa procesal, por lo que, estando, por lo tanto, el negocio pendiente de decisión, a ello procede la Corte, previas las consideraciones que se expresan a continuación.

El artículo 2486 del Código Judicial, cuya constitucionalidad se cuestiona, es del siguiente tenor:

> "Artículo 2486. La Comisión Judicial una vez admitida la denuncia o acusación, la pasará con sus documentos al Procurador General de la Nación para que informe sobre el mérito de ello, en un término no menor de diez (10) días con las recomendaciones legales procedentes.
>
> Recibida la opinión del Procurador General de la Nación la Comisión llevará el asunto al Pleno para la correspondiente calificación.
>
> Si el Pleno resuelve que debe proseguirse la causa dictará auto de enjuiciamiento; en caso contrario, dictará sobreseimiento y ordenará el archivo del expediente.
>
> La resolución que se dicte será notificada al imputado y al acusador y no procederá contra ella recurso alguno.
>
> Antes de la calificación de que habla este artículo el Pleno designará de su seno un legislador, quien actuará como fiscal en el juicio cuando exista enjuiciamiento.
>
> Si se procede por acusación, el acusador podrá actuar en juicio como coadyuvante del Fiscal Legislador".

El advertidor encuentra que la disposición que acusa de inconstitucional, viola tres normas constitucionales, a saber, las contenidas en el artículo 4, 22 y 32 de la Constitución Política, respectivamente.

Conviene, por razones metodológicas, analizar las violaciones que estima el advertidor pesan sobre el artículo 2486, en el mismo orden en que aparecen en nuestro Estatuto Fundamental, si bien el advertidor señaló las inconsistencias del precepto que forma parte del ordenamiento procesal penal, en un orden distinto.

Conviene, por ello, en primer lugar, analizar los cargos de inconstitucionalidad que se le formulan al precepto acusado, de constituir una norma que viola el artículo 4° de la Constitución Política, al desatender la normativa procesal patria el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por Ley N° 13, de 28 de octubre de 1977) y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobada mediante Ley N° 14 de 28 de octubre de 1975).

El Pleno de esta Corporación se ha pronunciado sobre el alcance del artículo 4° de la Constitución Política, cuyas sentencias son finales, definitivas y obligatorias y forman parte del bloque de la constitucionalidad, (sin perjuicio de la potestad del Pleno de variar su criterio, cuando así lo estime oportuno, que no lo encuentra justificado en el presente asunto), por lo que se remite el Pleno al alcance del citado artículo constitucional, contenido, entre otros, en la sentencia de 30 de diciembre de 1993, en la que señaló:

> "Primeramente debemos analizar el alcance del artículo 4 de la Constitución, cuyo texto es bastante claro y ya ha sido objeto de

interpretación por la Corte Suprema. El Pleno de la Corte, con la ponencia del Dr. César Quintero, analizó el artículo 4 de la Constitución, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 25 de diciembre de 1990 de cuyo análisis se extrae el siguiente párrafo.

"Pero, la circunstancia de que Panamá haya ratificado más de un centenar de convenciones de la O. I. T., obliga, sin duda alguna, a nuestro país con respecto a dichas convenciones, independientes de lo que la Constitución panameña diga con respecto al acatamiento del Derecho Internacional.

Si bien es cierto que los Convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Panamá pueden ser aplicables a los empleados públicos en materia de libertad sindical, no es menos cierto que aún si, en gracia de discusión, se admitiera que la Ley 25 de 1990 se opone a ello la consecuencia jurídica que seguiría no sería la inconstitucionalidad de la Ley 25 sino la obligación del Gobierno de Panamá de adecuar su legislación interna a lo dispuesto en dicho convenios internacionales, tal como los señalan éstos" (Registro Judicial, mayo de 1991, pág. 85).

Luego entonces, el artículo 4 de la Constitución Nacional es una declaración que hace nuestro país a la comunidad internacional, en el sentido de que se somete a las normas que se dicten en busca de una mejor convivencia mundial, las que irá adecuando a su ordenamiento jurídico interno".
(R. J. Diciembre de 1993. Pág. 107).

Una simple lectura del Libro III del Código Judicial y del Reglamento Orgánico relativo al Régimen Interno de la Asamblea Legislativa refleja, sin la menor duda, que la República de Panamá a través de la Asamblea Legislativa en sesiones judiciales le ha dado cumpliento a las normas contenidas en los artículos pertinentes que invoca el advirtiente. Es más, hasta tal punto ha cumplido con dichos Pactos que, a nivel de ejemplo, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) ha sido incorporado por este Pleno al bloque de constitucionalidad, sirviendo, por tanto, como parámetro para enjuiciar el cumplimiento, por las autoridades judiciales, de la garantía del debido proceso, como lo hizo en la sentencia de constitucionalidad de 19 de marzo de 1993. De donde se desprende que no solamente la legislación procesal tiene incorporados los principios del debido proceso que en las disposiciones citadas se mencionan, sino que, además, las ha incorporado al parámetro de que se vale el Pleno para medir las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, en punto a la observancia de esta fundamental garantía.

La Procuradora de la Administración, al referirse a este aspecto en su vista, ha señalado:

"...
14. Finalmente, el artículo 4 de la Constitución Política tampoco ha sido vulnerado, a nuestro parecer, por cuanto no se ha contrariado el texto Constitucional, ni de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos contenida en la Ley N° 14 de 28 de octubre de 1976, dado que en el proceso que se ventila ante la Asamblea Legislativa se le ha concedido el derecho al recurrente para ser oído o indagado, se le han asegurado las garantías procesales que el Estatuto Fundamental y la Ley le conceden, está siendo juzgado por autoridades competentes, que actúa de forma independiente e imparcial, se ha mantenido vigente el principio de presunción de inocencia, de contradicción, de publicidad, de inmediación, así como la utilización de los recursos contemplados en la Ley, igualdad entre las partes, entre otros". (F. 26).

Seguidamente, se invoca por el advertidor que la disposición legal acusada, viola el artículo 22 de la Constitución Política.

El advertidor, en este punto, cuestiona el respeto al derecho de defensa

por parte de la Asamblea Legislativa, sobre cuyo aspecto conviene transcribir sus propias expresiones:

"...
Y cuestionamos nosotros como puede darse una adecuada defensa si el imputado, no comienza ha (sic) tener mayores derechos y prerrogativas sustantivas y procesales, sino precisamente cuando ya es llamado a responder en juicio criminal. De allí deviene la inconstitucionalidad de la norma y la ausencia de plenas garantías para la defensa, ya que la norma señalada como inconstitucional (art. 2486 C. J.), no permite que antes de la calificación el procesado pueda dentro de un marco estrictamente legal y no de hecho, entablar su defensa. Por otra (sic) lado la norma implica también una violación constitucional, en virtud de que no deja abierta ninguna posibilidad revestida de amparo legal, para entablar una adecuada defensa, prueba de ello, es que todas las actuaciones surtidas hasta el momento se han realizado de hecho y no dentro de un estricto marco jurídico sustantivo, ...". (F. 6-7).

La Procuradora de la Administración, sobre la violación al artículo 22, se ha pronunciado en la forma que se transcribe:

"...
13. El artículo 22 de la Carta Magna tampoco ha sido conculcado, por razón que al Magistrado Faúndes se le ha informado de los hechos que se le imputan, se ha presumido su inocencia hasta tanto se demuestre su culpabilidad en juicio público en el Pleno de la Asamblea Legislativa; se le han concedido todas las garantías para su defensa, incluyendo el derecho a contar con un profesional de la Abogacía para que lo represente". (F. 25-26).

El artículo 22 recoge, en su esencia, tres derechos fundamentales: el derecho a toda persona detenida de ser informada de las razones de su detención, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de la asistencia de consejero legal, en la forma que la ley lo establezca.

Sobre el contenido del artículo 22 ha tenido ocasión de pronunciarse este Pleno, en varias ocasiones. En la sentencia de 31 de julio de 1995, por ejemplo, señaló:

"El artículo 22 de la Constitución Nacional consagra tres garantías fundamentales de orden penal. La primera de ellas guarda relación con el derecho que tiene toda persona de ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención, así como de sus derechos constitucionales y legales; la segunda, se refiere al derecho a la presunción de inocencia que tiene el acusado de haber cometido un delito, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías de su defensa; y, por último, el derecho de quien es detenido, de contar desde ese momento con la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. De estas tres garantías constitucionales, sólo nos interesa referirnos a la última, ya que es la única que guarda relación con la problemática constitucional planteada por el actor respecto del artículo 2358 del Código Judicial, tal como él mismo expone en el concepto de la infracción. Estas tres garantías deben ser reguladas por Ley, por disponerlo así el mismo artículo constitucional.

La garantía constitucional consagrada en la última parte del artículo 22 de la Carta Fundamental está dirigida a proporcionar a todo aquel que es detenido, la asistencia de un profesional del derecho. Esta disposición constitucional ha sido desarrollada por normas del Código Judicial a través de las cuales el legislador pretende hacerla efectiva. El artículo 2038 del Código Judicial dispone en su párrafo final que el imputado tiene derecho, desde el momento de su detención, a designar un defensor o pedir que se le designe uno de oficio; y el artículo 2043 del mismo Código que preceptúa, que toda persona tiene derecho a nombrar un defensor

desde el momento en que es aprehendida o citada para que rinda indagatoria".

No corresponde, por lo tanto, este derecho fundamental al derecho de contradicción, de ofrecer pruebas, alegar y de ejercer otros derechos insertos dentro del derecho de defensa, siendo que tales derechos formarían parte de la garantía del debido proceso, que tutela el artículo 32 de la Constitución, el que, a su vez, incluye tanto el derecho de acceso a la jurisdicción como las garantías procesales que se deben seguir en todo proceso, el penal incluido. Tampoco tutela este derecho el principio nullum crimen sine lege, que es instituido por el artículo 31 de la Constitución Política, como ha tenido ocasión de manifestar este Pleno en sentencia de 21 de julio de 1959, citada por el doctor CÉSAR A. QUINTERO ("Derecho Constitucional", 1967, pág. 149).

No aprecia este Pleno la forma en que los derechos que consagra el artículo 22 hayan podido ser vulnerados en el proceso que se le sigue al Magistrado Faúndes, toda vez que los derechos fundamentales relacionados con la detención preventiva claramente no son aplicables en el presente proceso, que dicha medida cautelar ha sido decretada por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y tampoco se le ha privado del derecho fundamental a contar con la adecuada defensa técnica, la que ha ejercido en toda su extensión, como la acreditan las acciones constitucionales y legales que, dentro del proceso que se le sigue al Magistrado Faúndes, ha hecho pleno uso, por conducto de su defensa técnica.

Por su lado, en lo que se refiere específicamente al derecho a la presunción de inocencia, ésto se encuentra incorporado al procedimiento penal en el Libro III del Código Judicial, cuyo artículo 1.966 preceptúa que "toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia" (Subraya el Pleno).

Aún a riesgo de adelantarse al análisis del derecho fundamental al debido proceso, el que más adelante se analiza dentro del contexto de la advertencia de inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 2486 del Código Judicial, los derechos del debido proceso en materia penal, como tuvo ocasión de precisar este Pleno en la sentencia de amparo que se reproduce:

> "Los recoge nuestro Código de Procedimiento Penal en su artículo 1968 que en forma clara establece que "Nadie podrá ser juzgado sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía para su defensa". De la norma transcrita se desprenden como elementos básicos del debido proceso (sin ser los únicos): **a)** el derecho a ser juzgado por un tribunal competente y previamente establecido; **b)** el derecho a que ese juzgamiento se realice conforme al trámite legal; y, **c)** el derecho a que, durante ese juzgamiento, se permita al imputado el ejercicio de todas garantías para su adecuada defensa.
>
> De los tres aspectos mencionados, la "tramitación del proceso penal conforme a los trámites legales", reviste trascendental importancia, pues, es evidente que bajo tal aspecto se cobijan un sinnúmero de elementos integradores del debido proceso legal, entre los cuales podríamos mencionar, a manera de ejemplo, el derecho a ser oído en el acto de audiencia; el derecho a impugnar, cuando proceda, las resoluciones judiciales; a aportar pruebas lícitas durante la etapa probatoria; y a alegar."

No advierte este Pleno en qué forma se ha omitido, en el ordenamiento procesal que regula este tipo de procesos, la garantía del derecho de defensa. Es obvio que si se analiza aisladamente el artículo 2486, éste no contiene en sí el desarrollo normativo de las diversas manifestaciones del derecho de defensa, por cuanto -es necesario reiterarlo- este artículo no regula la totalidad del proceso especial contra servidores públicos, sino establece una síntesis de los diferentes momentos procesales que integran este proceso; por lo que, aspectos específicos del procedimiento que tutela las diversas manifestaciones del derecho

de defensa han de ser tomados en cuenta, al haberlos incorporado en la regulación de los procesos especiales, a los cuales, salvo las reglas singulares inherentes a su especialidad, le son aplicables todas las normas que gobiernan el proceso penal, tanto en su fase sumaria, como es su fase plenaria (Artículos 47 y 48 del Reglamento Orgánico relativo al régimen interno de la Asamblea Legislativa). Como la Asamblea Legislativa en la fase plenaria del proceso penal (artículo 2488 del Código Judicial). Para determinar, si, en efecto la norma en cuestión infringe el artículo 22 de la Constitución, resultaría necesario que el proceso especial, dentro del cual está inserta la norma advertida como inconstitucional, le niegue las diversas manifestaciones del derecho de defensa al imputado, lo que, como con acierto destaca la Procuradora de la Administración, no ha ocurrido en la presente encuesta. Es más, dentro de las normas especiales que deben seguirse en procesos como el que nos ocupa, se le aplican, supletoriamente, las normas relativas a los procesos penales ordinarios, dentro de los cuales, también se encuentra adecuadamente protegida y tutelada la garantía de defensa, a que se contrae el artículo 22 de la Constitución Política.

Para concluir, el advertidor señala como infringido el artículo 32, que instituye la garantía del debido proceso en las actuaciones jurisdiccionales. No resulta pertinente señalar el concepto y alcance del debido proceso, por cuanto dicha institución garantista fundamental del Estado de Derecho ha sido precisado, en su concepción y alcance, en un número crecidísimo de decisiones de este Pleno, a cuyos pronunciamientos, por lo tanto, basta remitirse.

La disposición legal transcrita se refiere a normas que resultan de aplicación por la Asamblea Legislativa a las distintas fases del proceso contra el MAGISTRADO FAÚNDES, con arreglo a las normas de procedimiento común instituido por el Título III del Título III del Libro III del Código Judicial ("Del Plenario"), salvo que alguna norma en materia de procesos especiales regulados por el Capítulo III del Título IX del Libro III del Código Penal haga incompatible la aplicación de una disposición del proceso penal general, en cuya circunstancia la Asamblea Legislativa, en ejercicio de funciones jurisdiccionales que le atribuye la Constitución Política, debe tomar en cuenta que la aplicación de las normas generales debe ceder ante la aplicación de la norma especial, en acatamiento a canones de hermenéutica harto conocidos.

Sobre este particular el Pleno, actuando como Tribunal de Amparo, se pronunció en la sentencia de 13 de septiembre de 1996, en los términos que, a continuación, se transcriben:

> El Título IX del Libro III del Código Penal, denominado "Procesos Especiales", contiene en el Capítulo I una disposición preliminar (artículo 2467), en la cual ordena que en los negocios sujetos a procedimientos especiales a que se refiere ese Título IX, serán aplicables las disposiciones de los procesos ordinarios, en cuanto no se opongan a las dadas especialmente para cada procedimiento.
>
> En el Capítulo III del Título IX del Libro III comentado se regula, como uno de los procesos especiales, los que se tramitan ante la Asamblea Legislativa. Este Capítulo III tiene dos Secciones. La primera se refiere a la "Instrucción y Sustanciación del Proceso" y la Segunda, a la "Vista y Decisión de la Causa". Todo el Capítulo consta de 15 artículos, numerados del 2482 al 2496. Una de estas normas (artículo 2488) remite al Plenario establecido en el Capítulo III del Libro III, y otras dos (artículos 2483 y 2489) se refieren a la aplicación en estos procesos del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, contenido en las Leyes N° 49 de 1984 y N° 7 de 1992 (Gacetas Oficial N° 22,111 del 31 de agosto de 1992), modificado por las Leyes N° 3 de 1995 y N° 39 de 1996.
>
> Por lo expuesto, en este proceso penal que tramita la Asamblea Legislativa son aplicables en primer lugar las normas del Código Judicial que desarrollan ese proceso (2482 al 2496). En segundo lugar, las normas procesales contenidas en el Libro III, Título III del Código Judicial, en tercer lugar las disposiciones de los procesos penales ordinarios contenidos en el Código Judicial, normas

> procesales penales que remiten a los artículos que regulan el proceso civil, **"en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal"** (Artículo 1971 del Código Judicial), y por último las normas parlamentarias del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, como complementarias de este proceso especial.

El Pleno no debe entrar a considerar las advertencias de inconstitucionalidad contra los dos primeros párrafos del artículo 2486, toda vez que estos párrafos ya han sido aplicados y, por lo tanto, y en consonancia con reiteradísima doctrina de este Pleno, no cabe pronunciarse, dentro de la consulta constitucional, contra preceptos o normas jurídicas que ya han sido aplicadas en el proceso respectivo.

El párrafo tercero del artículo 2486 era la etapa procesal en la cual se encontraba este proceso al momento de presentación de la advertencia, por lo que debe el Pleno entrar a considerar si el auto de llamamiento a juicio y las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, son consistentes con la Constitución Política; es decir, si la atribución que el citado artículo le atribuye al Pleno de calificar las sumarias y determinar si hay lugar a seguimiento de causa penal al Magistrado FAÚNDES o, por el contrario, si la investigación sumarial no acredita, al menos, indicios de la comisión del hecho punible, en cuyo caso debe dictar sobreseimiento. Esta atribución del juzgador es consistente con la labor de todos los jueces en el ramo penal que, si habiendo calificado el sumario, llegan a la conclusión de que existen méritos para ello, debe dictar el auto de llamamiento a juicio o, en caso contrario, dictar sobreseimiento. A estas materias se refieren los artículos 2207 y 2208 del Código Judicial, normas éstas aplicables a los procesos especiales por determinación expresa del artículo 2467 del mismo Código. Es evidente, por ello, que el tercer párrafo del artículo 2486 del Código Judicial se ajusta totalmente al Estatuto Fundamental.

El cuarto párrafo del artículo 2486 dispone que una vez expedido el auto de llamamiento a juicio debe imprimírsele el trámite de comunicación que establece la Ley, es decir, la notificación, que en este caso ha de ser personal, y la misma es irrecurrible. El Pleno debe señalar, con respecto a este cuarto párrafo, que para que el mismo se ajuste al ordenamiento constitucional, la notificación debe ser realizada en forma personal, tanto al procesado como a su apoderado, cuyos trámites, de forzoso cumplimiento, en caso de ser pretermitidos, ocasionan la nulidad de la notificación. La notificación, vislumbrada como derecho del procesado y deber del Juzgador, constituye uno de los derechos que integran la garantía del debido proceso.

El debido proceso, en su relación con los recursos, amerita el análisis de dos problemas, de distinta naturaleza: el primero, si se niega el ejercicio del derecho a recurrir, cuyo recurso esté previsto en el ordenamiento, y el segundo, la necesidad de que contra toda resolución judicial el ordenamiento legislativo que organiza los procesos jurisdiccionales, tenga prevista la utilización de recursos, necesariamente, de tal suerte que la determinación de si una resolución es irrecurrible, vendría a ser inconstitucional por violación al debido proceso.

Es evidente que, el derecho a ejercitar oportunamente los recursos existentes en todo proceso forma parte de los diferentes derechos que integran la garantía del debido proceso, por lo que la negativa al acceso a la vía recursiva constituiría, en apreciación del Pleno, una violación al debido proceso. El Magistrado Arturo Hoyos, en su obra "El Debido Proceso" señala:

> "El derecho a hacer uso de los recursos contra resoluciones judiciales previstos en la ley constituye, claramente, un elemento de la garantía constitucional del debido proceso legal, y, por lo tanto, serán violatorios de dicha garantía los actos administrativos o resoluciones judiciales que arbitrariamente impidan o nieguen a una persona la utilización de los medios de impugnación consagrados por la ley contra sentencias, autos u otras resoluciones judiciales".
> (Arturo Hoyos. "El Debido Proceso", Editorial Temis, 1996, pág. 74).

En el mismo sentido se ha pronunciado IÑAKI ESPARSA LÉIBAR:

> "El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos, pero no en todo caso y siempre sino en relación a los recursos establecidos por la ley.
>
> Se afirma igualmente y de forma repetida por la jurisprudencia del TC (SSTC 19/1983, de 14 de marzo; 57/1984, de 8 de mayo; 60/1985, de 6 de mayo; 36/1986, de 12 de marzo; 3/1987, de 21 de enero; 185/1988, de 14 de octubre; 46/1989, de 21 de febrero; 121/1990, de 2 de julio; 51/1992, de 2 de abril, entre otras) que el derecho a la utilización de los recursos constituye uno de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
>
> Son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24. 1 de la CE, todas aquellas decisiones judiciales que inadmiten un recurso por omisión de un requisito formal subsanable, sin antes dar oportunidad a que sea subsanado o que, concedida esta oportunidad, la parte haya subsanado".
> (IÑAKI ESPARZA LEIBAR. "El Principio del Proceso Debido", Barcelona-1995, Pág. 225).

Otro aspecto de singular importancia, se contrae a determinar si la circunstancia de que el auto de llamamiento a juicio, debidamente notificado, no sea susceptible de recurso, o sea, como se dispone expresamente en la norma contenida en el cuarto párrafo del artículo 2486 del Código Judicial "irrecurrible", constituye una violación a la garantía del debido proceso.

Como cuestión previa, el Pleno advierte que resulta imposible de proponer algún recurso jerárquico en la vía ordinaria en este tipo de procesos, por cuanto no existe otra instancia jurisdiccional con competencia para juzgar, entre otros altos funcionarios, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, juzgamiento éste que constituye un privilegio de los Órganos Legislativos en los regímenes que, como el nuestro.

La opción del legislador de discriminar los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales, en la elaboración de leyes que organicen procedimientos jurisdiccionales, constituye parte de la política legislativa del Estado, por lo que un ordenamiento jurídico que restringiese el uso de un recurso determinado, no resulta violatorio per se del debido proceso. La posibilidad de permitir el recurso de reconsideración, único recurso que cabría, o declarar que el mismo es irrecurrible, no es materia constitucional, sino legal, y responde a cuestiones relacionadas con la política legislativa del Estado, como ha quedado precisado. Caso distinto sería -como es elemental destacar- si en la regulación de un determinado proceso se le niega a una de las partes el ejercicio de todo recurso, puesto que una ley que restringiese de tal forma el derecho a recurrir, violaría el contenido esencial del derecho a recurrir, uno de los derechos que integran la garantía constitucional del debido proceso.

Sobre este segundo aspecto de la cuestión, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional de España, desde la vertiente de la tutela judicial efectiva, que el Pleno reitera que es parte integrante del debido proceso en la República de Panamá, como tuvo ocasión de señalarlo en sentencia de constitucionalidad de 29 de octubre de 1992 (citada por el Magistrado ARTURO HOYOS, en su obra "El debido proceso"), jurisprudencia que ha sido analizada por FRANCISCO CHAMORRO BERNAL, expresándose, con respecto a este tema, en los siguientes términos:

> "Si bien el art. 24. 1 de la Constitución garantiza a cada uno el derecho a la tutela judicial, ello no significa que contra todas las resoluciones esté abierto necesariamente un recurso ya que no forma parte de tal derecho el que todas las decisiones judiciales puedan ser recurridas o que se puedan promover incidentes en relación con las mismas. El art. 24. 1 CE no es susceptible de una interpretación que lleve a concluir que establece un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional.

> Por ello, aun cuando pueda entenderse que el derecho a la tutela jurisdiccional implica haber tenido alguna posibilidad de recurso - posibilidad que podría considerarse satisfecha a través del generalizado recurso de reposición-, en abstracto, es perfectamente posible la inexistencia de recursos contra las resoluciones judiciales o el condicionamiento de los previstos al cumplimiento de determinados requisitos, perteneciendo al ámbito de libertad del legislador establecer unos u otros en la forma que considere oportuna, sin otros límites que los que impone la propia Constitución".
> (FRANCISCO CHAMORRO BERNAL. "La tutela judicial efectiva", Editora Bosch, Barcelona, 1994, Pág. 79).

El Pleno, en sentencia de constitucionalidad de 9 de junio de 1995, se refirió, por lo demás, a la competencia jurisdiccional de la Asamblea Legislativa en este tipo de procesos especiales, en la siguiente forma:

> "El Pleno considera que la frase "y juzgarlos si a ello hubiere lugar", contenida en el artículo 200 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, obviamente se refiere a los funcionarios sobre los cuales ese Órgano del Estado tiene competencia para juzgar, y, por ende, facultad para conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten en contra de dichos funcionarios (solamente del Presidente de la República, en los casos del artículo 186 de la Constitución y de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia)".
> (Registro Judicial. Junio de 1995. Pág. 140).

Los párrafos restantes se refieren a la acusación por parte del Estado y de la defensa del sindicado, cuya intervención resulta necesaria, por cuanto constituye uno de los elementos del debido proceso, y cuya omisión, también, viciaría de nulidad el acto. No obstante, es evidente que la aplicación en esta advertencia de inconstitucionalidad de las normas relativas al proceso penal ordinario en todos aquellos aspectos que no tengan una regulación especial, conduce a admitir que el uso de letrado para las partes, no resulta desconocido en el ordenamiento jurídico aplicable a este tipo de procesos, que, se repite, lo constituye el proceso penal ordinario, que se aplica en toda su extensión, salvo que el proceso especial que gobierna esta materia contenga normas incompatibles con otras del proceso ordinario. Si ello es así, la normativa aplicable a éstos no ha desconocido el derecho a ser representado por abogado idóneo, es decir, con legitimación procesal. Tampoco prospera, por tanto, la violación del artículo 32, del precepto legal impugnado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 2486 del Código Judicial, párrafos 3, 4, 5 y 6.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LCDO. MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ CONTRA EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY 47 DE 1946, ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez ha presentado, en su propio nombre, acción autónoma de inconstitucionalidad, con la finalidad de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el artículo 138 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

Lo que corresponde ahora es determinar si el libelo presentado cumple con los requisitos especiales de la demandas de inconstitucionalidad contenidos en los artículos 102 y 2551 de la excerta procesal, así como los presupuestos procesales comunes a toda demanda, establecidos en el artículo 654 del Código Judicial.

El citado artículo 102 establece que: "Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta ...". En el libelo de esta demanda el peticionario pretermite ese mandato, por encontrarse dirigido a los "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Pleno)".

Si bien la anterior omisión es óbice, por sí sola, para conocer de la pretensión, toda vez que en nuestro Derecho Procesal rige el principio atenuado de desformalización de la justicia, se advierte que el demandante incumple con la fundamental exigencia del artículo 654 numeral 6 del Código Judicial, que hace de cargo del demandante el deber de indicar "los hechos que sirvan de fundamento a la pretensión, determinados y numerados en cifras o por medio del adjetivo ordinal correspondiente".

La exigencia anterior obedece al hecho de que un planteamiento ordenado de los hechos facilita a la autoridad jurisdiccional el juzgamiento de la causa, especialmente cuando se invocan vicios constitucionales de tipo formal relativos a normas de carácter general, o cuando se sostiene la vulneración del debido proceso en actos de carácter individualizado.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Miguel Deen Rodríguez, contra el artículo 138 de la Ley 47 de 1946.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, CONTRA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY N° 9 DE 18 DE ABRIL DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Resolución calendada el 19 de octubre de 1994, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la denuncia por falta a la ética profesional presentada ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por Funcionarios de la Policía Técnica Judicial contra la Licenciada María Josefa Carrillo Brux, dispuso consultar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad del artículo 34 de la ley 9 de 1984.

LA NORMA OBJETO DE CONSULTA

En la resolución antes mencionada, la Sala Cuarta, al elevar la consulta de inconstitucionalidad, estima que no es aplicable a los casos de carácter disciplinario el artículo 34 de la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía y que reza así:

Artículo 34: En todo proceso de juzgamiento por falta de ética será oído el Procurador de la Administración".

La entidad consultante considera que, como quiera que los abogados en su ejercicio profesional no son servidores públicos y los procesos sobre ética no plantean una controversia de tipo administrativo, no hay una razón jurídica que justifique la intervención del Ministerio Público, pues no se está ante actos administrativos, ni ante funcionarios de esa naturaleza.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

La Procuraduría General de la Nación, al contestar el traslado del negocio, en su Vista N° 18 de 30 de marzo de 1995, se opuso a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma consultada porque considera que no procede, dada su extemporaneidad, la que se deduce de la resolución de la Sala mediante la cual se eleva la consulta mencionada, cuando afirma que la misma se hizo "encontrándose en etapa de decidir el proceso", afirmación que es indicativa del cumplimiento de todas las fases del proceso, entre ellas la aplicación de la norma objeto de la consulta. La segunda razón que expuso para sustentar su criterio adverso a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley 8 de 1984, se basa en las atribuciones que la Constitución Política le asigna al Ministerio Público en sus artículos 216 y 217, al ampliar tales responsabilidades con "las demás funciones que determine la Ley", lo que permite colegir que el legislador tiene la potestad de atribuirle al Ministerio Público otras funciones en adición a las que le asigna el poder constituyente, siempre que no pugnen con la naturaleza y finalidad de la razón de ser de esta entidad del Estado.

A los argumentos anteriores, agrega la cita de una sentencia del Pleno de la Corte, de 26 de Octubre de 1994, referente a la demanda de inconstitucionalidad del numeral l del artículo 55 de la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República, mediante la cual se le reconoce al Contralor General de la República el derecho a asistir a las reuniones del Consejo de Gabinete, en virtud de que la Constitución Política, al describir sus atribuciones, señala con claridad que la Ley podrá establecer otras funciones distintas a las contempladas en el texto constitucional.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al tenor del artículo 203 constitucional, la consulta de inconstitucionalidad procede en aquellos casos en que el funcionario público encargado de administrar justicia, al momento de tramitar un proceso se percata por sí mismo o mediante advertencia de alguna de las partes, que la norma de carácter legal o reglamentaria aplicable al caso, adolece del vicio de inconstitucionalidad. Como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene el control de la constitucionalidad, debe elevarse a ésta la consulta correspondiente, salvo que se trate de disposiciones legales o reglamentarias sobre las cuales ya existe un pronunciamiento de la Corte.

Según constancias de autos, el expediente bajo Entrada N° 348-94, de la Sala Cuarta de Negocios Generales, ingresó el 7 de octubre de 1994, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, y sin haberse realizado otro trámite, se dictó la resolución de 19 de octubre del mismo año, mediante la cual se hizo la consulta de la inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley 8 de 1984, aplicable a los procesos de juzgamiento por falta a la ética en el ejercicio profesional de la abogacía. Si bien es cierto que aparecen en el cuaderno correspondiente otros trámites procesales, como el traslado a la parte denunciada y el agotamiento de las instancias procesales hasta colocarlo en estado de decidir, no aparece providencia alguna o nota que indique el traslado

del caso a la Procuraduría de la Administración para ser oída. Esto demuestra entonces, que al momento en que se produjo la consulta de la norma, la misma no había sido aplicada.

Respecto a la naturaleza de los procesos disciplinarios que se le siguen a los abogados en ejercicio, por denuncias presentadas en su contra por faltas al Código de Ética y ejercicio profesional de la abogacía, hay que tener en cuenta que nos encontramos frente a una profesión liberal, cuyo libre ejercicio reconoce el artículo 40 constitucional. Es por ello, que la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre protección y saneamiento de la profesión es responsabilidad de los abogados a través de asociaciones, colegios o gremios, al igual que los controles de orden disciplinario, de manera tal que la intervención de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Cuarta de Negocios Generales, obedece a la facultad legal que se le ha asignado para "declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía" (artículo 101, numeral 4° del Código Judicial).

Lo anotado antes no contraría la misión que tienen los abogados litigantes y los asesores jurídicos como colaboradores de la justicia, pero en cuanto al otorgamiento, suspensión o cancelación del certificado de idoneidad para ejercer la abogacía, compete pronunciarse sobre el particular a la Sala Cuarta de Negocios Generales, fundamentalmente en los casos en que dicha suspensión o cancelación es consecuencia de la comisión de una falta a la ética en el ejercicio de la profesión, no así cuando se trate de conductas delictivas cometidas por dichos profesionales, cuya investigación, como en todos los hechos punibles, está asignada al Ministerio Público por imperativo legal.

Por otra faz, en nuestro país el sistema al que se adhiere el Ministerio Público, que concentra funciones duales en los procesos penales como funcionario de instrucción y fiscal o acusador en representación de la sociedad, sumado a la defensa que debe hacer de los intereses del Estado o del Municipio, la vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos, servir de consejero jurídico de los funcionarios administrativos, representa una carga laboral compleja que se resiente con la adición de otras funciones que no se avienen con la naturaleza y finalidad que la Constitución en su artículo 217 le atribuye. En el caso que nos ocupa se trata de la incursión en los procesos de control disciplinario de una profesión liberal, cuyo saneamiento, superación, mejoramiento y estímulo, debe provenir en primera instancia a lo interno de los agremiados, a través de sus pares, con ideales, propósitos y necesidades comunes.

El artículo 40 de nuestra Carta Fundamental al consagrar la libertad de profesión u oficio incluye la profesión de abogado que es una profesión liberal, la que por su propia naturaleza se ejerce con entera libertad y amplia autonomía, sin otras limitaciones que las que se refieren a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social. Sus controles disciplinarios que nacen del interés privado, sólo revisten el carácter de función pública cuando los abogados como sujetos procesales presentan técnicamente las pretensiones de su cliente e intervienen como mandatarios en el proceso.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el artículo 34 de la ley 8 de 1984 es inconstitucional en cuanto pugna con los principios y garantías contenidas en los artículos 40 y 217 de la Constitución Política.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Considero que el artículo 34 de la Ley 9ª de 1984 no viola la Constitución cuando establece que sea oído el Procurador de la Administración en los procesos por falta a la ética que se les siga a los abogados.

Las razones que invoca la decisión de mayoría consisten en que la profesión de abogado es una profesión liberal, y que por ello la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre protección y saneamiento de la profesión es responsabilidad de los abogados a través de las asociaciones, colegios, y que la intervención de la Corte Suprema obedece a que el artículo 101 numeral 4 del Código Judicial le ha asignado a la Corte la función de calificar quienes reúnen la condición necesaria para ejercer la abogacía (f. 4).

No veo razón en estas razones.

En cuanto a lo que se refiere al Ministerio Público el Proyecto considera que tiene ya una carga laboral compleja que se reciente con la adición de otras funciones que no se avienen con la naturaleza y finalidad que la Constitución en su artículo 217 le atribuye (f. 5).

De tales argumentos se podría deducir que tampoco la Corte Suprema debería conocer de estos procesos, porque es por disposición legal, no constitucional, el artículo 101 numeral 4 del Código Judicial, que se dispone que tiene (la Corte) la facultad de declarar quienes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía. Parejamente es el artículo 34 de la Ley 9ª de 1984 el que establece la intervención del Procurador de la Administración en los procesos por falta de ética que se le siga a los abogados.

Como bien expresa el Procurador General de la Nación, al Ministerio Público (que incluye al Procurador de la Administración, artículo 216 de la Constitución), constitucionalmente le corresponde ejercer las demás funciones que determine la Ley (artículo 217 de la Constitución), en tanto que dichas funciones no sean contrarias a la naturaleza de su cargo. Y la que atribuye el artículo 34 de la Ley 9ª de 1984 ciertamente es compatible, porque se trata de una sanción relativa a una conducta que no se deja puramente en la esfera de la apreciación ética o moral, sino que se sanciona por Ley, con intervención del Órgano Judicial. De manera que la intervención del Procurador de la Administración groso modo equivale al papel que juega en los juicios penales.

Considero por otra parte que de acuerdo con la consistente jurisprudencia del Pleno, el escrito de consulta de inconstitucionalidad debe cumplir con los requisitos de una demanda, y el presentado en este caso no cumple con tales requisitos. Debiera por tanto declararse inadmisible.

Por estas razones respectivamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ELIGIO SALAS

Como no comparto el criterio de la mayoría del Pleno en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley 9ª de 1984 cuando establece que el Procurador de la Administración sea oído en todo proceso por falta de ética que se le siga a los abogados, respetuosamente, salvo mi voto en este caso.

La amplitud que el artículo 217 de la Constitución le confiere a las atribuciones del Ministerio Público es suficientemente abarcadora para permitir que la Ley le asigne a sus representantes deberes y facultades como la comprendida en la norma cuya inconstitucionalidad fue consultada y, luego, declarada por la mayoría del Pleno. En mi opinión, el texto legal recusado no desnaturaliza la labor que debe desempeñar el procurador de la Administración,

sino que por el contrario le impone el deber de coadyuvar con la administración de justicia que se ejercita, en este caso, en los procesos éticos disciplinarlos que se realicen contra los abogados, lo cual es conforme a sus atribuciones constitucionales.

Por otro lado, no percibo en qué medida, como lo asegura el Pleno, se atenta contra el principio de la libertad de profesión u oficio consagrado por el artículo 40 de la Constitución, porque se acepte la simple posibilidad de escuchar la opinión del Procurador de la Administración en el juzgamiento por falta a la ética de un abogado llevado a cabo con la participación de la Corte Suprema de Justicia, intervención que le confieren a ésta las disposiciones legales y no precisamente una norma de rango constitucional.

Por las razones anteriores, salvo el voto.

Panamá, veintinueve (29) de octubre de 1996.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.)CARLOS H. CUESTAS G
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PROPUESTA POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES, CONTRA LA NORMA REGLAMENTARIA APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Omar Macias Salinas**, en nombre y representación del **SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES**, interpuso Advertencia de Inconstitucionalidad con base a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Nacional, numeral 1° en concordancia con el artículo 2549 del Código Judicial; dentro del proceso que contiene la denuncia que SIPAC presentó contra la Compañía Panameña de Aviación (COPA) por infracción del artículo 17 del Código de Trabajo, en concordancia con el artículo 29 del Decreto de Gabinete N° 13 de enero de 1969, que crea la Dirección de Aeronáutica Civil como ente autónomo del Estado y ordena taxativamente que todo personal aeronáutico de servicio en las empresas nacionales de aviación y en todas las aeronaves comerciales y de transporte, con matrícula panameña sean panameños.

Solicita así, la declaratoria de Inconstitucionalidad de la resolución que emitirá el señor Director Nacional de Empleos del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, otorgando los permisos de trabajos solicitados por COPA, para pilotos extranjeros.

La Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, dando cumplimiento a lo establecido por la ley, remitió a la Secretaria General de la Corte Suprema el escrito respectivo, el cual fue recibido del 8 de octubre de 1996.

Al examinar el escrito de la advertencia de inconstitucionalidad a objeto de determinar si cumple con los requisitos procesales, el Pleno observa:

1. Que se omiten los requisitos comunes de toda demanda.

2. Que no aparece la transcripción literal de la disposición legal acusada de inconstitucional.

3. Que no se indica con precisión la disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de esas infracciones.

4. El objeto de las advertencias de inconstitucionalidad debe ser una disposición legal o reglamentaria lo cual no se da en este caso.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Omar Macias Salinas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OMAYRA GARCÍA DE BERBEY DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A EDUARDO HARMODIO BERBEY MELGAR, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por la Licenciada Omayra García de Berbey de los artículos 44 y 132 ordinal 8°, ambos del Código Penal, en virtud de acusación particular por ella introducida en las sumarias seguidas a **EDUARDO BERBEY**, la Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer la misma, por los siguientes motivos:

> "1. La licenciada Omayra García de Berbey promovió demanda en mi contra ante la Asamblea Legislativa, en mi calidad de Magistrada integrante de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que dictó resoluciones relacionadas con la Jueza Aidelena Pereira.
>
> 2. He sido separada el conocimiento del proceso penal dentro del cual se ha promovido la presente acción de inconstitucionalidad.
>
> 3. Aún cuando en el presente negocio lo que deberá dilucidarse es la constitucionalidad de artículos del Código Penal, la decisión que aquí se tome afectará el resultado del proceso penal de cuyo conocimiento he sido separada.
>
> 4. El numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial, en su numeral tercero señala como causal de impedimento en los procesos constitucionales: 'Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del caso'."

Considera el PLENO que la situación descrita por la Honorable Magistrada Franceschi de Aguilera se enmarca dentro de la norma invocada, y como quiera que el fallo que se dicte en este negocio constitucional puede afectar el resultado del proceso principal, por tratarse de la tipificación de la tentativa -art. 44- y de la agravante de homicidio de un funcionario público en ejercicio de sus funciones -art. 132, numeral 8°-, se considera fundada la solicitud de impedimento.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Honorable Magistrada MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA; en consecuencia, LA SEPARA del conocimiento del presente negocio y DISPONE llamar a su suplente para que la reemplace.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. GUERRA DE VILLALAZ, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE MUÑOZ Y ASOCIADOS, DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CARMELO VÁSQUEZ BARAHONA CONTRA LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 3 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LO QUE CORRESPONDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz, mediante escrito fechado el 30 de septiembre de 1996, ha manifestado impedimento para conocer del negocio contentivo de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por la firma MUÑOZ Y ASOCIADOS, dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por Carmelo Vásquez Barahona contra la Comisión de Vivienda N° 3, del Ministerio de Vivienda.

La Magistrada fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "Para su admisibilidad, ha ingresado a este Despacho el presente negocio contentivo de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por la firma forense MUÑOZ Y ASOCIADOS, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por Carmelo Vásquez Barahona, contra la Comisión de Vivienda N° 3, del Ministerio de Vivienda.
>
> Como quiera que el abogado en la presente advertencia, es el doctor CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, quien funge como mi suplente personal, a fin de mantener más allá de toda duda el principio de imparcialidad y transparencia de la administración de justicia, solicito al resto de los Magistrados que componen esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento de este caso."

El Pleno observa que la circunstancia invocada por la Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz, si bien es cierto no se subsume en las causales de impedimento previstas en el artículo 2562 del Código Judicial, no es menos cierto que en este caso podría ser aplicable el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, dado que la unen lazos de amistad personal y una relación derivada de una antigua sociedad con el doctor Carlos Enrique Muñoz Pope.

En razón de lo antes expuesto, lo procedente es, pues, declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la manifestación de impedimento de la Magistrada AURA E. GUERRA VILLALAZ para conocer de esta acción y, DISPONE llamar al Magistrado Suplente que corresponda, de acuerdo al

sorteo respectivo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA CONTRA DE LA HONORABLE LEGISLADORA GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD, EN PERJUICIO DE NEILA ITZEL AYARZA AGUILAR, A FIN QUE SE FIJE LA FIANZA QUE HA DE CONSIGNAR LA DENUNCIANTE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado el día 9 de octubre de 1996, el Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS, manifiesta impedimento para conocer del presente negocio, contentivo del proceso de Querella interpuesta contra la H. L. GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR por el delito contra la libertad, en perjuicio de NEILA ITZEL AYARZA AGUILAR, a fin que se fije la fianza que ha de consignar la denunciante.

La manifestación de impedimento esta concebida en los siguientes términos:

"HONORABLES MAGISTRADOS DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Este negocio se encuentra relacionado con la querella promovida por Neila Itzel Ayarza Aguilar contra Gloria Young Chizmar, Legisladora de la República, quien se hace representar judicialmente por la firma forense Berríos & Berríos.

Como es de conocimiento público, durante muchos años de mi ejercicio profesional mantuve una asociación con el doctor Julio E. Berríos, bajo la razón social "Echevers, Berríos y Asociados", relación que duró hasta la fecha de mi nombramiento como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Por la "transparencia" de la actuación jurisdiccional, tanto mía como de la Corporación de Justicia, estimo que esa consideración recomienda se me separe del conocimiento de la causa.

Panamá, 9 de octubre de 1996.

FABIÁN A. ECHEVERS"

La Sala observa que, la circunstancia invocada por el Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS se encuentra consagrada como causal de impedimento y recusación en el numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS, y DISPONE LLAMAR, a su Magistrado Suplente para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(con salvamento de voto) (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Salvo el voto porque considero que el Magistrado Fabián Echevers no está dentro de los supuestos de la norma que trata de los impedimentos para el caso.

El Doctor Echevers no era socio del Doctor Julio Berríos sino que compartían físicamente las mismas instalaciones de despacho profesional, según tengo entendido.

De manera que sólo hay entre ellos una relación de amistad, que no es causal de impedimento.

Respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO DE QUEJA INTERPUESTO POR ÁNGEL RAÚL ORTEGA Y OTROS, CONTRA EL LICENCIADO HOMERO RODRÍGUEZ, MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **José de Jesús Góndola Molinar**, en nombre y representación de **Ángel Raúl Ortega**, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia queja contra el **licenciado Homero Rodríguez**, Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Trabajo.

En cumplimiento del procedimiento señalado en la ley, una vez admitido el escrito contentivo de la queja, el licenciado Góndola, mediante declaración rendida el 24 de junio de 1996, bajo la gravedad de juramento se ratificó de los cargos formulados contra el funcionario acusado (cfr. fojas 41-43). Posteriormente se corrió traslado de la queja al Magistrado Suplente Homero Rodríguez, quien contestó los cargos contra él formulados mediante escrito fechado el 8 de julio de 1996 (cfr. fojas 46-49).

Las pruebas presentadas fueron admitidas, se ordenó practicarlas y, finalizado el procedimiento, esta Corporación de Justicia debe examinar los hechos en que se fundamenta la queja y decidir si estos constituyen o no una falta disciplinaria, al tenor de los artículos 540 y 781 del Código de Trabajo en relación con el artículo 285 ordinal 10 del Código Judicial.

La parte actora fundamenta la queja en las siguientes razones de hecho y de derecho:

El Tribunal Superior de Trabajo actuando como tribunal de segunda instancia en el proceso laboral promovido por Raúl Ángel Ortega y otros contra Environmental Protection Services, Inc., y otras empresas, mediante auto para mejor proveer, solicitó al Director General de Autoridad Portuaria Nacional la ampliación de una prueba, para aclarar su contenido y alcance. Esta prueba

consiste en una certificación expedida en abril de 1992 por la mencionada Autoridad.

Contra el auto para mejor proveer la parte demandante interpuso un Amparo de Garantías Constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mediante Sentencia de 1 de diciembre de 1995, esta acción fue declarada no viable.

La Dirección de la Autoridad Portuaria, por medio de su Nota 0368-LEG de 5 de marzo de 1996, dio respuesta a lo solicitado por el Tribunal Superior de Trabajo e informó: "... que las actividades que realiza la empresa Environmental Protection Services, INC., es decir, las enumeradas en la Cláusula Segunda del contrato N° 2-002-91, no han sido determinadas como funciones o labores portuarias por la Autoridad Portuaria Nacional."

La parte actora en defensa de sus representados el día 11 de marzo de 1996, interpuso contra la mencionada Nota 0368-LEG de 5 de marzo de 1996, un incidente de tacha de documento público por falsedad intelectual o ideológica de su contenido, con el fin de que no fuera estimada como prueba en el fallo. Sin embargo este incidente de tacha fue rechazado, por lo que, según afirma el apoderado judicial del quejoso, el Magistrado suplente Homero Rodríguez, quien actuaba como sustanciador en el proceso laboral, ha incumplido su deber de acuerdo con los artículos 540 en concordancia con el 781 del Código de Trabajo, incurriendo en la falta disciplinaria contemplada en el ordinal 10° del artículo 285 del Código Judicial.

La Corte, luego de analizar las razones en que el apoderado judicial del demandante fundamenta la queja estima que el Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Trabajo no ha incurrido en falta disciplinaria sino que actuó conforme a la ley. Veamos por qué. En primer lugar, la Nota N° 0368-LEG-96 de 5 de marzo de 1996, emitida por el Director General de Autoridad Portuaria visible a foja 11 del expediente, no constituye una nueva prueba aportada al expediente dentro del proceso laboral propuesto por Angel Raúl Ortega y otros contra Environmental Protection Services, Inc., y otras empresas demandadas, sino la aclaración de una prueba ya practicada, ordenada por el Tribunal Superior de Trabajo mediante auto para mejor proveer. Antes de resolver, el Tribunal estimó necesario se aclarara el alcance y contenido de una certificación expedida en abril de 1992 por Autoridad Portuaria, que es una prueba documental que reposaba en el proceso. Ordenar la ampliación de pruebas en un proceso laboral es una facultad de los juzgadores de segunda instancia, de conformidad con los artículos 740 en concordancia con el 973, ambos del Código de Trabajo, que en lo pertinente preceptúan:

> "Artículo 740. Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el Juez de primera instancia debe ordenar en la audiencia o en el momento de fallar, sin limitación ni restricción alguna, la práctica de todas aquellas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso; y el de segunda, practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso.
> ...
> El Juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente."
>
> "Artículo 973. ...
> Cuando en la primera instancia se hubiere negado indebidamente o dejado de practicar las pruebas, a petición de parte en el escrito de lista o de oficio puede el Tribunal decretar su práctica, como también las demás que a su prudente arbitrio considere necesarias para resolver la apelación o la consulta." (Lo subrayado es nuestro).

Además, tal como lo señaló el funcionario demandado en su escrito de contestación a la queja, la Nota N° 0368-LEG-96 de 5 de marzo de 1996 expedida

por el Director de Autoridad Portuaria Nacional, fue emitida en respuesta a la aclaración solicitada por el Tribunal de Segunda Instancia en relación con una prueba ya existente en el expediente, que fue aportada en el momento procesal oportuno.

Como este documento no constituía una nueva prueba, y el proceso no estaba en etapa de presentación o impugnación de pruebas mal podía el Magistrado Suplente de Tribunal Superior de Trabajo en esta instancia aceptar el escrito de tacha de documento público presentado por el apoderado judicial del demandante contra la mencionada nota expedida por la Dirección de Autoridad Portuaria, a solicitud del Tribunal de Segunda Instancia.

En su demanda el quejoso afirma que el escrito mediante el cual interpuso el incidente de tacha no le fué admitido por la Secretaría, por instrucciones expresas del Magistrado Suplente Homero Rodríguez, y por tanto, este funcionario incumplió los artículos 540 y 781 del Código de Trabajo. El artículo 540 preceptúa que todo escrito para que sea agregado al expediente se debe presentar dentro del respectivo término. Sin embargo, si el interesado insiste en que se le reciba, el Secretario consultará con el Juez, quien deberá darle curso si estima oportuna la presentación o rechazarlo, mediante proveído de mero obedecimiento.

Al presentar sus descargos el Magistrado Suplente manifestó que el escrito presentado por el quejoso no fue admitido por la Secretaría, que aquél pasó a su despacho, le expuso sus argumentos por espacio de una hora sin convencerlo de que el escrito era admisible, y luego salió del Tribunal "sin necesidad de impartir ninguna orden expresa a la Secretaría, ya que él se retiró de inmediato ante el resultado de la entrevista." Como en este cuaderno no hay pruebas que confirmen o desvirtúen las afirmaciones de las partes, debe tenerse no probada este cargo.

El artículo 781 del Código de Trabajo se refiere a la tacha de documentos e indica en que momentos la prueba instrumental puede impugnarse. El último momento procesal a que se refiere esta norma es el de dos días posteriores a la audiencia y el documento contra el cual el quejoso presentó la tacha se allegó al proceso cuando estaba en estado de resolver y ya ese último término había precluido con exceso.

Con relación a la posible vinculación del funcionario público que ejerce la función de Director General de Autoridad Portuaria con una de las partes que intervienen dentro del proceso laboral que se ventila contra la empresa Environmental Protection Service, Inc., en el expediente que contiene el proceso laboral no existe prueba alguna de que el Tribunal Superior, al momento de emitir el auto de mejor proveer, tuviese conocimiento de su existencia.

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que no le asiste la razón al apoderado judicial del demandante, ya que no hay pruebas en autos de que el licenciado Homero Rodríguez, al ejercer el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de Trabajo, dentro del proceso laboral interpuesto por el señor Raúl Angel Ortega y otros contra Environmental Protection Service, Inc.y otras empresas, hubiera infringido alguna prohibición o incumplido sus deberes como juzgador.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, DESESTIMA la queja presentada por el licenciado José de Jesús Góndola contra el licenciado Homero Rodríguez, Magistrado Suplente de Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

OCTUBRE 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

ILLUECA Y ASOCIADOS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DONALD LEE LANDRUM. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO** en su calidad de apoderado especial de **DONAD LEE LANDRUM**, parte demandante en el proceso ordinario que le sigue a **ILLUECA Y ASOCIADOS**, solicita a esta Sala de lo Civil **ACLARACIÓN** de la **SENTENCIA** dictada por esta Corporación el 24 de septiembre de 1996, en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

La aclaración de la sentencia formulada, en síntesis consiste en los siguiente:

> "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL.
>
> Yo, LIC. JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO, de generales conocidas en autos, en mi condición de apoderado especial del actor en el proceso ordinario de mayor cuantía promovido por DONALD LEE LANDRUM contra ILLUECA Y ASOCIADOS, dentro del término legal respectivo, solicito aclaración de la sentencia del 24 de septiembre de 1996 que casa "la sentencia de 17 de abril de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y, revoca la sentencia de 26 de julio de 1990, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil, del Primer Tribunal Superior de justicia y, en su lugar DECLARA que ABSUELVE a ILLUECA Y ASOCIADOS de pagar a DONALD LEE LANDRUM la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.750.000.00), más los intereses y gastos de este juicio, correspondiente al monto de los cheques número 2224019 (sic) de 29 de octubre de 1986, girado a favor de ILLUECA Y ASOCIADOS Y, del número 224020 de 18 de noviembre de 1986, girado a favor de BANCO EXTERIOR, S. A./DEW ASSOCIATES INC.".
>
> Nos ha causado sorpresa el fallo cuya aclaración pedimos porque la demanda se fundó en claros preceptos sobre culpa extracontractual, y fue decidida aplicando disposiciones sobre el mandato civil.
>
> Por consideraciones a la persona que representa el bufete judicial demandado no recurrimos a la acción penal.
>
> Del salvamento de voto del Magistrado Rafael A. González transcribimos.
> `...
> "De manera, pues, que si la causal probatoria es la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba de un mandato, y el conflicto no se refiere al mandato, la causal de casación hay que desecharla, no brindar pie para casar la sentencia.
>
> "La corte en casación, como recurso extraordinario, debe limitarse a lo que plantea el recurrente. Esta circunscrita a la causal que invoca, porque no se trata de una tercera instancia.
> "...
> "Estimo que esa causal no justifica la decisión de casar la sentencia de segundo grado, lo que observo respetuosamente ".
>
> Solicitamos, pues, que esta máxima corporación judicial aclare la sentencia del 24 de septiembre de 1996, en el sentido de limitarse a lo que plantea el recurrente.

DERECHO: Artículo 1109 del Código Judicial.
Panamá, 1 de octubre de 1996.

(fdo.) LIC. JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO
Cédula N° 8-153-1617."

Luego de lo expuesto, para resolver esta Sala de la Corte considera:

Que en base al artículo 986 del Código Judicial, la aclaración o modificación de sentencia procede sólo en cuanto a los frutos, intereses, daños y perjuicios y costas. También, respecto a frases oscuras o de doble sentido, contenidas en la parte resolutiva de la misma.

Es evidente, por tanto, que el contenido de la solicitud de aclaración en este caso no se ajusta a los aspectos específicos determinados en la citada norma, por lo que la misma no es pertinente.

Por otro lado, esta Sala de la Corte no puede, como parece pretender el apoderado de la parte actora, por motivo de una solicitud de ACLARACIÓN DE SENTENCIA, fundamentada en el Salvamento de Voto de uno de sus miembros, realizar un nuevo examen sobre las cuestiones o puntos sometidos a su consideración mediante el extraordinario recurso de casación, sobre los cuales ya se pronunció mediante fallo mayoritario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA ACLARACIÓN solicitada de la Sentencia de 24 de septiembre de 1996 dictada por esta Sala de la Corte, que decide el recurso de casación interpuesto dentro del proceso ordinario que DONALD LEE LANDRUM le sigue a ILLUECA Y ASOCIADOS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES

LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA APELAN CONTRA EL AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA CON LA ESCRITURA PUBLICA N° 6448 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, INGRESADO AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 1333 DEL TOMO 244 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Fábrega, en representación de la sociedad anónima denominada **COSTA ESMERALDA, S. A.**, presentó escrito de desistimiento del recurso de reconsideración presentado el 28 de junio del año que decurre contra la resolución de 21 de junio de 1996 emitida por ésta SALA DE LO CIVIL, que negó la apelación interpuesta contra el auto de 20 de marzo de 1996, mediante el cual el Registro Público suspendía la inscripción del asiento 1333 del tomo 244 del Diario.

Cuenta el expediente que en virtud de demanda ordinaria interpuesta por **JOSÉ LUTRELL** contra **COSTA ESMERALDA, S. A.**, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial remitió al Registro Público los Oficios 1658 del 6 de octubre de 1995 y 1836 del 8 de noviembre de 1995, en virtud de los cuales se anotó la demanda señalada, según consta en el asiento 9893 del Tomo 241 y en el asiento 5583 del Tomo 242 del Diario.

A consecuencia de ambos oficios, el Director del Registro Público a través del auto impugnado, suspendió las inscripciones posteriores referentes a la segregación de la finca 46675 del Tomo 1101, Folio 288 de la Sección de Propiedad de Panamá, perteneciente a **COSTA ESMERALDA, S. A.**, a partir del Asiento 133 del Tomo 244 del Diario del Registro Público, ya mencionados.

Fundamenta su desistimiento la firma **MORENO Y FÁBREGA**, además de lo ya expuesto, en los siguientes hechos:

> "TERCERO: El Primer Tribunal Superior mediante auto de 12 de septiembre de 1996 confirmó la resolución 1233 de 18 de abril de 1996 proferida por el Juez Tercero de Circuito de lo Civil en la que se Declara Probado el Incidente en que se decreta la caducidad de la instancia y además se ordena la cancelación de la anotación de demanda. Objeto de la suspensión aludida en el punto primero bajo el asiento 1333.
>
> CUARTO: En virtud de lo que procede en el Juzgado a quo, resulta procedente desistir del presente recurso de reconsideración para que una vez surtido el trámite se pueda proceder a la inscripción del asiento 1333 y los demás posteriores que afectan la finca 46645."

De acuerdo con el artículo 1073 del Código Judicial, toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente. Si el desistimiento cumple con las formalidades que señala la ley, el Juez debe admitirlo y dar por terminado el proceso.

En vista de que el escrito presentado en esta oportunidad llena los requisitos exigidos, y que el apoderado judicial del recurrente posee facultad expresa para hacerlo, esta Colegiatura admite el mismo y ordena el archivo del expediente.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del recurso de reconsideración interpuesta contra el auto del 21 de junio de 1996, emitido por esta SALA DE LO CIVIL de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL CASTILLO SANJUR CONTRA EL AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 3176 DE 10 DE ABRIL DE 1996, INGRESADA AL REGISTRO PUBLICO BAJO EL ASIENTO 9511 DEL TOMO 245 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El señor ABRAHAM DAVID MIZRACHI, mediante apoderado judicial legalmente constituido, ha presentado ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, escrito de apelación contra el Auto de 14 de junio de 1996, dictado por la Directora General del Registro Público, por la cual se "niega la inscripción de los asientos 9511 y 11081 del tomo 245 del diario, manteniendo en todas sus partes el Auto de 12 de julio de 1996" y, cuyo escrito corre de fojas 39 a 43 del expediente.

Seguidamente se lee de fojas 44 a 47, la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por el apoderado judicial de ABRAHAM DAVID MIZRACHI, ante el Magistrado Sustanciador de la Sala Primera de la Corte Suprema, contra el numeral 2° del artículo 94 del Código Judicial, por considerar que dicha norma es violatoria al artículo 293, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, siendo ésta la que se aplicaría en el presente proceso.

La Sala debe examinar, en primer lugar, algunos aspectos relacionados con la advertencia, fundamentalmente derivados de reiteradas sentencias del Pleno de esta Corporación, en el sentido de que los jueces, en las advertencias que se le formulen dentro de un proceso que está conociendo, deben rechazar tales advertencias cuando la norma cuya constitucionalidad se advierte ya ha sido aplicada y en los casos en que ha habido pronunciamiento del Pleno sobre la misma norma, como se aprecia de la lectura de las sentencias de 20 de noviembre de 1990, de 29 de noviembre de 1990, y, en dos sentencias de 21 de noviembre de 1992. En la última de ellas, se lee lo que a continuación se transcribe:

"...

De allí que la ocasión sea propicia para advertir, en primer lugar, lo deplorable que resulta la dilación con que este caso ha sido sometido al conocimiento de la Corte y, en segundo lugar, insistir a los juzgadores, ante los cuales se presentan advertencias de inconstitucionalidad, que las mismas deben rechazarse de plano en casos como el presente, en los cuales resulta patente la improcedencia. Así se expresó el Pleno de la Corte en resolución del 20 de noviembre de 1990:

"La Corte viene señalándole a los juzgadores que no deben enviar escritos de advertencia a esta Superioridad cuando la norma ya ha sido aplicada, cuando la resolución ya ha sido expedida o cuando existe jurisprudencia en que la Corte ha sostenido que la disposición advertida como inconstitucional se viene utilizando como un medio para dilatar los procesos, y en estos casos evidentes de improcedencia los jueces deben rechazar de plano tales advertencias. (Advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Rubén Darío Cogley en representación del señor Santos Rodríguez contra la resolución (auto) del 29 de noviembre de 1989, emitido por el Juzgado Primero Municipal de Panamá, Ramo Civil, en el proceso de lanzamiento iniciado por REBEROSA, S. A. contra Santos Rodríguez)".

En aras de librar a la advertencia de inconstitucionalidad del uso dilatorio que la desprestigia, la Corte recomienda a los juzgadores ante los cuales se presentan las advertencias que apliquen el criterio transcrito con anterioridad, de tal manera que esta institución de garantía perfeccione su función como instrumento de control de la constitucionalidad de las disposiciones legales y reglamentarias".

(Registro Judicial. Febrero de 1992, pág. 290).

Sin desconocer que la competencia para conocer y decidir las advertencias de inconstitucionalidad y de las demandas de inconstitucionalidad le corresponde, de manera privativa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ello no obsta para que, en aquellos casos en que se encuentre el juzgador en las hipótesis señaladas por el Pleno, y cuando dicha advertencia es manifiestamente improcedente y persigue, además, finalidades ostensiblemente dilatorias, el juzgador pueda, aplicando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que, además, está incorporada a la doctrina del bloque de constitucionalidad del Pleno de la Corte, supuestos previstos en las sentencias ya citadas que se dan en el presente caso, rechazar de plano la advertencia, con fundamento en el artículo 462 del Código Judicial.

En efecto, de la lectura del expediente, salta a la vista que la norma cuya constitucionalidad se cuestiona ya ha sido aplicada en la presente causa, como lo acredita el hecho de que el recurso de apelación contra calificación registral que realiza el Registrador, concedido por éste previa desestimación del recurso

de reconsideración, ya ha sido aplicado por el Sustanciador en este recurso, primeramente al correr traslado del recurso de apelación para que la formulación de las oportunas oposiciones y alegaciones, y por el hecho de que, dentro del recurso de apelación que está conociendo la Sala, ya las partes han presentado sus respectivos planteamientos, el apelante a foja 39 y el opositor a foja 35, por lo que la norma que le confiere competencia a la Sala para conocer de las apelaciones contra actos del Registrador, ya ha sido aplicada.

Desde otra perspectiva, salta a la vista la finalidad manifiestamente dilatoria el hecho de constituir la norma cuestionada como inconstitucional, el artículo 94, ordinal 2° del Código Judicial, la misma norma en que se ha apoyado para proponer recurso de apelación contra el acto del Registrador, lo que, además, es contrario al principio de derecho sintetizado en el brocardo "venire contra factum propium nulli conceditur" o "adversus factum suum quis vaenire non potest" (Accureio).

Con fundamento en las consideraciones que anteceden debe la Sala rechazar la advertencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la advertencia de inconstitucionalidad dentro del proceso de calificación de la Escritura Pública N° 3176 de 10 de abril de 1996, ingresada al Registro Público para su inscripción bajo el Asiento N° 9511 del Tomo N° 245 del Diario.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Estoy de acuerdo con no remitir la advertencia de inconstitucionalidad al Pleno, porque toda la gestión del apelante desde la presentación del documento al Registro Público carece de seriedad.

Pero no comparto el concepto que de "norma aplicada", se emplea en la resolución.

En el presente caso se apela ante la Sala Primera contra la resolución del Registrador Público, de acuerdo con el artículo 94 del Código Judicial.

El Registrador concede la apelación apoyándose en la misma disposición. La Sala Primera admite la apelación aplicando la norma, y ... luego viene la advertencia de inconstitucionalidad.

Ciertamente ya se aplicó el artículo 94 mencionado, que asigna competencia a ésta Sala; pero también es cierto que hasta cuando no se dicte la resolución que decida la apelación, el artículo 94 va a seguir aplicándose. En otro giro, mientras el negocio esté bajo nuestra competencia (de la Sala), el artículo 94 del Código Judicial se estará aplicando, en razón de que la competencia que estará ejerciendo la Sala hasta decidir la apelación, surge del artículo 94 aludido. Si se observa bien, la competencia de Sala no deriva de la resolución del Registrador que concede la apelación, porque la Corte, contrariamente, si fuera el caso, perderá considerar y hacer valer que no es competente.

Basta eso (que se vaya todavía a aplicar), aunque ya se haya aplicado, para que proceda la advertencia. Téngase en mientes que el control constitucional, que normalmente se persigue por medio de la advertencia, tiene como desiderátum la vigencia del orden constitucional en forma continuada. Nada justifica que porque el Registrador concedió la apelación para ante la Sala, sin que ello, como hemos visto, constituye cosa juzgada o Ley del proceso, se desconozca una institución jurídica judicial y se obvíe el orden constitucional.

Por estas razones salvo el voto; pero reitero mi conformidad con que se rechace de plano la advertencia.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (LOS MANGOS). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada MAYRA E. LEZCANO, en representación de el señor OSVALDO SAGEL VEGA, anuncia formal recurso de apelación, por encontrarse inconforme con lo decretado por el Auto del 5 de noviembre de 1992, en el cual se rechaza de plano el incidente de nulidad promovido por OSVALDO SAGEL VEGA contra COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A.

Surtidos los trámites correspondientes, el Tribunal Superior concede la apelación en el efecto suspensivo y remite a esta Alta Corporación de Justicia el presente negocio.

Después de efectuado el reparto respectivo, se concede el término de tres días para que el apelante sustente el recurso y los tres días siguientes para que el opositor haga valer sus objeciones.

Vencido el término de alegatos, sin que los mismos fueran aprovechados por las partes, este Tribunal debe decidir en cuanto a la apelación y para ello, basa su decisión en el artículo 1122 del Código Judicial el cual expresa:

> "ARTÍCULO 1122: Interpuesto en tiempo una apelación, el tribunal la concederá por lo que resulte de lo actuado y ordenará al mismo tiempo que el secretario notifique a las partes la providencia que concede el recurso y remita enseguida el expediente al superior.
>
> Recibido el expediente por el Superior, si la ley no determinare procedimiento especial que deba seguirse en la misma providencia señalará un término de tres (3) días para que el apelante la sustente y tres (3) días siguientes para que el opositor haga valer sus objeciones.
>
> Si el apelante no sustentaré su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto, con imposición de costas.
> ...".

No obstante lo expuesto, es del caso aclarar que, el incidente de nulidad que nos ocupa, no es un negocio del cual conoce en primera instancia un Tribunal Superior. Como negocio, el Tribunal Superior conoce de él en segunda instancia, ya que el proceso dentro del cual se interpuso el incidente que nos ocupa, se encuentra en ese Tribunal pendiente de decidir la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia. Lo anterior, guarda relación directa con lo pautado en el artículo 1116 del Código de Procedimiento que autoriza la apelación de las resoluciones que se describen en sus nueve (9) numerales cuando han sido dictadas en primera instancia, además de las sentencias.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento del recurso de apelación interpuesto por OSVALDO SAGEL VEGA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (EL CHORRO). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada **MAYRA E. LEZCANO**, en su condición de apoderada sustituta del demandado **OSVALDO SAGEL VEGA** en el proceso ordinario instaurado por **COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A.**, ha interpuesto **Recurso de Apelación** contra el Auto de 5 de noviembre de 1992 dictado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual "**RECHAZA DE PLANO**" el Incidente de Nulidad promovido por **OSVALDO SAGEL VEGA** dentro del aludido proceso.

La Sala ha podido observar que el recurso de apelación bajo examen fue anunciado formalmente mediante escrito que corre a fojas 34 de este expediente.

Seguidamente el Tribunal Superior concedió la apelación en el efecto suspensivo y remitió el expediente a la Secretaría de esta Corporación, que, a su vez, previas las reglas de reparto, concedió al recurrente el término de tres (3) días para que sustentara el aludido medio de impugnación y (3) tres días para que el opositor hiciese valer sus objeciones.

Según se infiere de las constancias de autos, el apelante dejó vencer el término sin sustentar el recurso de apelación que había anunciado contra el Auto que resolvió el Incidente de Nulidad. Por lo tanto la Sala se encuentra imposibilitada para emitir un pronunciamiento de fondo en relación al mismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 1122 del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente expresa:

> "...
> Si el apelante no sustentare su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto con imposición de costas. ..."

No obstante lo expuesto, es del caso aclarar que, el incidente de nulidad que nos ocupa, no es un negocio del cual conoce en primera instancia un Tribunal Superior. Como negocio, el Tribunal Superior conoce de él en segunda instancia, ya que el proceso dentro del cual se interpuso el incidente se encuentra en ese Tribunal pendiente de decidir la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia. Lo anterior guarda relación directa con lo pautado en el artículo 1116 del Código de Procedimiento que autoriza la apelación de las resoluciones que se describen en sus nueve (9) numerales cuando han sido dictadas en primera instancia, además de las sentencias.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE DE CONOCER el Recurso de Apelación anunciado por la Licenciada MAYRA E. LEZCANO contra el Auto de 5 de noviembre de 1992, dictado por el Tribunal Superior de Segundo Distrito

Judicial en el Incidente de Nulidad propuesto dentro del Proceso de Oposición que COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. le sigue a OSVALDO SAGEL VEGA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA E. LEZCANO CONTRA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD CON CARÁCTER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR OSVALDO SAGEL VEGA CONTRA COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A. (LOS RUÍCES). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada Mayra E. Lezcano, en nombre del señor **OSVALDO SAGEL VEGA,** apeló de la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 5 de noviembre de 1992, que rechazó de plano el incidente de nulidad interpuesto por la parte recurrente, dentro del proceso de oposición a título que le sigue **COMPAÑÍA HERMANOS VEGA RUIZ, S. A.**

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y lo remitió a esta Sala de la Corte para su tramitación.

Ingresado el negocio a la Sala, se le concedió el término a la parte recurrente para que lo sustentara y al opositor para que hiciera valer sus objeciones.

Este término transcurrió sin que fuera utilizado por las partes, por lo que debe decidirse la presente apelación.

En primer lugar, debe determinarse si la Sala Civil tiene competencia para conocer del recurso de apelación que nos ocupa. Al respecto, el ordinal 1° del artículo 94 del Código Judicial establece lo siguiente:

"**ARTÍCULO 94.** La Primera Sala conoce en segunda instancia:

1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y, ..."

De las constancias procesales se colige que en este caso no se trata de un proceso cuya competencia le corresponde decidir al Tribunal Superior en primera instancia. Como negocio, el Tribunal Superior conoce de él en segunda instancia, ya que el proceso dentro del cual se interpuso el presente incidente de nulidad, se encuentra en ese Tribunal pendiente de decidir la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia. Esto guarda relación con lo que establece el artículo 1116 del Código Judicial, que autoriza la apelación de las sentencias y de las resoluciones que se enumeran en sus nueve ordinales, cuando han sido dictadas en primera instancia.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, SE INHIBE del conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del señor OSVALDO SAGEL VEGA.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES EN PROCESO MARÍTIMO

AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO) LIMITED, C. F. P. CORPORATE FINANCE PARTNERS, INC., CARMELO CANNAVÓ ORTISI, SALVATORE CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI Y GUISEPPE CANNAVÓ ORTISI APELAN LA RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI, DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI Y GUISEPPE CANNAVÓ TRINGALI. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **CARREIRA, PITTY, P. C. Y ABOGADOS,** representada personalmente por el Licenciado **FRANCISCO CARREIRA PITTY** y la firma forense **MORGAN Y MORGAN** representada personalmente por el Doctor **ENRIQUE DE ALBA** hablando en nombre de la parte demandante y demandada respectivamente, en este proceso ordinario marítimo, **(FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI, DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI, GIUSEPPE CANNAVÓ TRINGALI** Vs. **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA) LIMITED, AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO) LIMITED, C. F. P. CORPORATE FINANCE PARTNERS, INC., CARMELO CANNAVÓ ORTISI, SALVATORE CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI, Y GIUSEPPE CANNAVÓ ORTISI),** han presentado escrito en que declaran que han celebrado transacción. A dicho escrito acompañan el documento en que consta, lo cual significa la voluntad de dar por terminado este proceso, en los términos expresados.

Se transcribe la transacción convenida entre las partes:

"Nosotros: **ANTONIO DUGARTE SÁNCHEZ,** quien es Venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad Número V-3.550.216, actuando en este acto en mi carácter de Apoderado General de los ciudadanos **CARMELO CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI, GIUSEPPE CANNAVÓ ORTISI Y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI,** todos Venezolanos, domiciliados en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, mayores de edad de profesión agro-industriales, casados y titulares de las Cédulas de Identidad N° V-8.426.870, V-8.426.871, V-8.637.002, V-8.646.220, respectivamente, actuando en este acto por sus propios derechos y además como apoderados generales de sus respectivas cónyuges, **ANTONIA LORENZO DE CANNAVÓ, ELVIRA DI FRANCO DE CANNAVÓ, MARÍA MORELLO DE CANNAVÓ,** todas Venezolanas, domiciliadas en la ciudad de Cumaná Estado Sucre, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad N° V-8.430.669, V-8.430.046, V-10.947.438, respectivamente y **FRANCESCA D' AUGUSTA DE CANNAVÓ,** de nacionalidad Italiana, domiciliada en la ciudad de Cumaná Estado Sucre, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-575.753 como consta en el poder otorgado por ante la Notaría Pública de Cumaná el Día 22 de Agosto de 1.996, quedando anotado bajo el Número 18, Tomo 63, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría y que fue posteriormente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Sucre del Estado Sucre el día 23 de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis, bajo el Número 49 Protocolo Tercero, poder que presento ad-efectum videndi para que el

ciudadano Notario Público certifique su existencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, certifique su existencia y las facultades para otorgar el presente convenio al pie del presente documento, por una parte, y por la otra, el Ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, Venezolano, mayor de edad, productor agropecuario, casado y titular de la Cédula de Identidad N° V.-8.646.221, domiciliado en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, y aquí de tránsito, actuando en este acto por sus propios derechos y con el carácter de apoderado general de administración y disposición su cónyuge **CONCETTA TRINGALI DE CANNAVÓ**, quien es mayor de edad, Venezolana, de su mismo domicilio y titular de la Cédula de Identidad V.-10.950.194, según se evidencia del instrumento poder que le fuera conferido por ante la Notaría Pública de la Ciudad de Cumaná, el veintitrés de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, donde quedó anotado bajo el número 64, Tomo 2 de los libros respectivos, posteriormente registrado por ante la Oficina Subalterna del Registro del Municipio Sucre del Estado Sucre, Cumaná, en fecha treinta de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Tres, bajo el Número 18, Protocolo Tercero, que en original se presenta ad efectum videndi, para que el ciudadano Notario Público, a tenor de lo estatuido en el Artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, certifique su existencia y las facultades para otorgar el presente documento al pie del presente documento. Acuerdan realizar el presente convenio con arreglo a las cláusulas que a continuación se transcriben:

PRIMERO: Las antes identificadas partes son los únicos y exclusivos propietarios del cien por ciento (100%) de las acciones que componen el capital accionario de las empresas que forma el denominado Grupo de Empresas CANNAVÓ, a razón del veinte por ciento (20%) para cada una de ellos, las cuales están integradas por tres grupos de firmas constituidas en la República de Venezuela, República de Vanuatu y República de Panamá; las firmas constituidas en Venezuela, tienen como denominaciones comerciales: CANNAVÓ, S. A., HIELO CANNAVÓ, C. A., DIQUES CANNAVÓ, C. A., PESCA DE ALTURA CANNAVÓ, S. A. CAÑEROS CANNAVÓ, S. A. Y EMPRESA VENEZOLANA DE HELICÓPTEROS, COMPAÑÍA ANÓNIMA (EVHELCA), las empresas constituidas en la República Vanuatu, tiene como razón social: **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU), Limited**; **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL), Limited**; **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA) Limited**; **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO) Limited**; la empresa constituida en la República Panamá, tiene como razón social **PESQUERA ATLÁNTICA, S. A.** cuyas características, datos registrales y demás especificaciones se señalarán más adelante en el presente documento; siendo la última de las nombradas, la empresa que ha servido de base para las operaciones comerciales de todas las firmas constituidas en la República de Vanuatu.

SEGUNDO: Mediante documento otorgado por ante la Notaría Pública de Cumaná el 22 de Diciembre de 1994, el cual quedó asentado bajo el número 84, del Tomo 81, de los libros de Autenticaciones llevados por la mencionada Notaría, los accionistas de las empresas citadas recibieron la pretensión del accionista **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, de separarse de las empresas a objeto de que el referido ciudadano operara por su única y exclusiva cuenta, con los bienes que de dicha división le pudieran corresponder, documento que todos los identificados propietarios del capital accionario de las empresas antes descritas mediante el otorgamiento del presente compromiso, dejamos sin efecto jurídico y administrativo. Por lo que de mutuo y común acuerdo y mediante la presente cláusula decidimos anular el indicado convenio o acta de compromiso, de manera que desde la firma del presente documento, el acta de compromiso, no tendrá efecto ni hacia el futuro, "ex nunc, ni ex tunc", lo que queda concebido desde el momento de la autenticación del presente documento.

TERCERO: Como quiera que bajo la creencia de estar actuando de buena fe, el ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, por una parte y los ciudadanos **CARMELO, ELIO, GIUSEPPE Y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI**, por la otra unas veces conjuntamente y otras actuando separadamente, alguno de ellos y también terceros con vinculaciones familiares, iniciaron diversos procedimientos judiciales, por ante distintos Tribunales de las Repúblicas de Venezuela, Panamá, y Vanuatu; por medio de este convenio los demandantes desisten formalmente del procedimiento y de la acción de todos y cada uno de los juicios incoados tanto en Venezuela como en el Exterior y los demandados aceptan el desistimiento y así deberán formalizarse ante las diferentes jurisdicciones donde cursen cada uno de los respectivos juicio que con el otorgamiento del presente documento acuerdan desistir.

Esta declaración se hace para que surta los efectos legales consiguientes. En caso de ser necesario, las partes se obligan por este mismo medio y a los fines de materializar los desistimientos arriba enunciados, a convenir personalmente o por medio de apoderado con suficiente facultad para ello, ante los organismos jurisdiccionales donde cursen las demandas, para ratificar el desistimiento o su aceptación, según corresponda, de todas las acciones intentadas; desistimiento y aceptaciones, que aquí quedan hechas, siendo pacto expreso de las partes, que en el desistimiento del procedimiento y de la acción de todo y cada uno de los juicios y acciones seguidas por ambas partes en la República de Venezuela, República de Panamá y República de Vanuatu y la correspondiente aceptación de la otra parte, implica la renuncia expresa de las costas procesales, honorarios de abogados y cualquier acción de daños y perjuicios derivados de la instauración del proceso desistido. Estas acciones judiciales son las siguientes:

En la República de Panamá:

1. De las acciones que se ventilan ante el Tribunal Marítimo de Panamá, y de la correspondiente apelación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, contentivo del expediente número 84 del año 1996, caso **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI, DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI, GIUSEPPE CANNAVÓ TRINGALI**, contra **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU), Limited; AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL), Limited; AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA), Limited; AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO), Limited, C. F. P. CORPORATE FINANCE PARTNERS, INC., CARMELO CANNAVÓ ORTISI, GIUSEPPE CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI Y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI.**

2. De las acciones que se siguen por acusación particular, ante la Personería Segunda del Distrito de Panamá, Juez Primero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal por **ELIO CANNAVÓ ORTISI**, como apoderado de **CANNAVÓ, S. A.** contra **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI** y **DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI.**

3. Acusación particular que se instruye en la Personería Primera del Distrito de Panamá y el Juez Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, intentado por **ELIO CANNAVÓ ORTISI**, como apoderado de las empresas **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL), Limited; AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA), Limited; AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO), Limited; contra DOMENICO CANNAVÓ TRINGALI Y GIUSEPPE CANNAVÓ TRINGALI.**

4. Caso Civil, Juicio ordinario de mayor cuantía promovido por **ELIO CANNAVÓ ORTISI**, contra **PESQUERA ATLÁNTICA, S. A.**, llevado por ante el Juzgado Séptimo del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

B) En la República de Venezuela:

1. De las acciones que se ventilan por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y del Trabajo, del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, expediente número 14.742.

2. De las acciones incoadas que se siguen por ante el Tribunal de los Municipios Sucre y Cruz Salmeron Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en el expediente número 1895-96.

3. De las acciones, apelaciones y anuncios de los recursos de casación, de los juicios que se siguen por ante los Tribunales Segundo y Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, asignados con número 5869 y 2095 respectivamente.

CUARTO: Para poner fin a los precitados juicios y llevar a cabo la partición a que se contrae el documento que dio origen a todos los litigios, las partes convienen en distribuirse las acciones que forman el conjunto accionario de las empresas en la siguiente forma:

El accionista **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, cese y traspasa en plena propiedad a los Señores **CARMELO, ELIO, GIUSEPPE Y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI**, la totalidad de sus acciones representadas en un veinte por ciento (20%) del paquete accionario que se detalla a continuación:

a) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario representado por 69.497 acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES** (Bs.1.000,00) cada una, de la firma Mercantil **CANNAVÓ, S. A.**, inscrita originalmente como **LAS AVES, C. A.**, según asiento hecho por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agraria y del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el número 148, del Tomo I, Libro I, de fecha 28 de Junio de 1972, siendo modificada a su denominación actual según asiento hecho por ante la misma oficina del Registro, bajo el número 416 del año 1977.

b) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por 8.760 acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00)** cada una, de la firma Mercantil **HIELO CANNAVÓ, C. A.**, inscrita originalmente como **HIELO CUMANÁ, C. A.** por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el número 29, Folio 48 vto. al 52, de fecha 31 de Enero de 1975, modificada a su denominación actual según asiento hecho por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo número 90, folio 178 al 180, libro 5, Tomo 6, de fecha ocho de noviembre de 1982.

c) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **VEINTISIETE MIL (27.000)** acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00)** cada una, de la firma Mercantil **DIQUES CANNAVÓ, C. A.** inscrita originalmente como **FRIGORIFICOS Y TALLERES CUMANA, C. A.** por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el número 219, de fecha 8 de Julio de 1975, modificada a su denominación actual según asiento hecho por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo número 113, folio 248 vto., Tomo I de fecha veintidós de Junio de 1981.

d) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **DOSCIENTAS (200)** acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00)** cada una, de la firma Mercantil **PESCA DE ALTURA**

CANNAVÓ, S. A. Inscrita por ante el Registro Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre bajo el número 80, Tomo IV, libro 1 de fecha veintiuno de Noviembre de 1985.

e) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (22.268)** acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00)** cada una, de la firma Mercantil **CAÑEROS CANNAVÓ, S. A.** Inscrita por ante el Registro Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre bajo el número 46, Tomo IV, libro 2 de fecha quince (15) de Octubre de 1985.

f) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **Diez MIL (10.000)**, acciones nominativas de **DIEZ DOLLARES AMERICANOS ($.10)** cada una contenidas en el certificado Número dos (2), identificadas por los Números 8.001 al 16.000 ambos inclusive, de la firma Mercantil **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (VANUATU)**, Limited; constituida bajo las disposiciones de la sección 20, subsección (1) de la Ley de Sociedades número 12 de 1986 en Port Vila, República de Vanuatu, bajo el número 3837.

g) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **OCHO MIL (8.000)**, acciones nominativas de **DIEZ DOLLARES AMERICANOS ($.10)** cada una contenidas en el certificado Número dos (2), identificadas por los Números 8.001 al 16.000 ambos inclusive, de la firma Mercantil **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (SEA ROYAL)**, Limited; constituida bajo las disposiciones de la sección 20, subsección (1) de la Ley de Sociedades número 12 de 1986 en Port Vila, República de Vanuatu, bajo el número 4077.

h) **EL VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital accionario, representado por **OCHO MIL (8.000)**, acciones nominativas de **DIEZ DOLLARES AMERICANOS ($.10)** cada una contenidas en el certificado Número dos (2), identificadas por los Números 8.001 al 16.000 ambos inclusive, de la firma Mercantil **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (MARINERO)**, Limited; constituida bajo las disposiciones de la sección 20, subsección (1) de la Ley de Sociedades número 12 de 1986 en Port Vila, República de Vanuatu, bajo el número 4079.

i) El ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI** se compromete a entregar en plena propiedad a los ciudadanos **CARMELO, ELIO, GIUSEPPE**, y **SALVATORE CANNAVÓ ORTISI, TRES (3)** Helicópteros propiedad de la firma Mercantil **EMPRESA VENEZOLANA DE HELICÓPTEROS, C. A. (EVHELCA)** los cuales están distinguidos con las matrículas YV-269 CP, YV-645 CP, YV-301 C, para los efectos de la condición ó status operacional de los equipos de vuelo señalados, las partes aceptan la información de los componentes instalados y vigente para la fecha contenidos en el libro de almacén o diario llevado por la empresa como control del movimiento de repuesto, y las partes se reservan el derecho a cotejarlos con los inventarios realizados en Marzo del año 1995.

j) Las partes acuerdan distribuirse los repuestos, componentes y aparejos de pesca, almacenados en los depósitos de Pesquera Atlántica, S. A. y de la Jaula de Puerto Balboa, en la siguiente proporción: Para los barcos Sea Royal y Marinero 2/3 del total del inventario, y para el Tiuna 1/3 del mismo. Para los Helicópteros a cada parte le corresponde el Cincuenta por ciento (50%) del inventario de repuestos de los mismos, la repartición acordada en esta cláusula también contempla el Stock de repuestos adquiridos desde Marzo de 1.995 con su correspondiente movimiento y soporte contable.

k) En virtud de que los bienes asignados a **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI** sobrepasa lo que le corresponde por su **VEINTE POR CIENTO** (20%) del capital accionario en la suma de **QUINIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS**

($ 500.000,00), el referido cedente se compromete a cancelar a los cesionarios la cantidad antes señalada en dos cuotas iguales y consecutivas por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS ($ 250.000,00),** la primera de ellas al momento del otorgamiento del presente documento y la otra suma igual a los noventa días contados a partir de la fecha de otorgamiento del presente documento. El referido pago se realizará en la República de Vanuatu, en virtud de que la tradición de los bienes, cedidos será realizados en la República de Vanuatu.

l) Igualmente los cesionarios ya identificados se comprometen a cancelar en el acto del otorgamiento de este documento a **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI,** la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.25.000.000,00),** otra suma igual a los noventa días contados a partir de la fecha de otorgamiento del presente documento correspondiente a los dividendos del ejercicio finalizado al treinta y uno de Diciembre de 1994, de las empresas ubicadas en Venezuela, y los cuales se encuentran en caja por devolución voluntaria del socio antes señalado.

m) En relación a los dividendos que pudieran arrojar las empresas ubicadas en Venezuela correspondientes al año 1.995, y lo que va del año 1.996, **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI** declara renunciar a tales beneficios como contra partida a la paralización de la flota de las empresas ubicadas en la República de Panamá.

n) El socio **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI,** declara entregar libre de deudas y de obligaciones las empresas de las cuales era administrador responsable, para dicho acto se hace necesario previamente la rendición de cuentas o en su defecto las auditorías correspondientes.

Siendo pacto expreso de esta cesión, que el ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI** en su propio nombre y como apoderado de su cónyuge **CONCETTA TRINGALI DE CANNAVÓ** se obliga, por él o por medio de apoderados, a firmar la cesión de las acciones en los libros de accionistas de las ya identificadas compañías, y en los títulos contentivos de las mismas, en el momento que para ello sea requerido por los cesionarios. **CARMELO, ELIO, GIUSEPPE y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI** en su carácter de cesionarios mediante el presente documento, declaran que aceptan la cesión de las acciones que a su nombre por medio del presente documento se les hace. Ambas partes declaran que para la determinación del número de acciones que aquí se señalan, se tomó como base, los balances que reposan en el Registro Mercantil en los expedientes de las respectivas compañías correspondientes a los cierres de los ejercicios económicos finalizados el treinta y uno (31) de Diciembre de 1993.

QUINTO: Por su parte los ciudadanos **CARMELO, ELIO, GIUSEPPE y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI** ceden y traspasan en plena propiedad y a razón del **VEINTE POR CIENTO** (20%) cada uno, al ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI,** los siguientes bienes:

1.0 EL OCHENTA POR CIENTO (20%) del Capital accionario de la firma Mercantil **AUGUSTA FISHERY CORPORATION (TIUNA)** Limited, constituida bajo las disposiciones de la sección 20, subsección (1) de la Ley de Sociedades Número 12, de 1.986 en Port Vila, República de Vanuatu, bajo el número 4078. Las acciones en Número de TREINTA Y DOS MIL (32.000), que se ceden y traspasan en plena propiedad, están contenidas en cuatro (4) certificados de OCHO MIL acciones cada uno. Estos certificados están extendidos de la siguiente forma:

1.1 SALVATORE CANNAVÓ ORTISI: certificado Número uno (1) contentivo de OCHO MIL (8.000) acciones que van desde el Número 1 a la 8.000, ambos inclusive.

1.2 GIUSEPPE CANNAVÓ ORTISI: certificado Número tres (3) contentivo de OCHO MIL (8,000) acciones que van desde el Número 16.001 a la 24.000, ambos inclusive.

1.3 CARMELO CANNAVÓ ORTISI: certificado Número cuatro (4) contentivo de OCHO MIL (8.000) acciones que van desde el Número 24.001 a la 32.000, ambos inclusive, y

1.4 ELIO CANNAVÓ ORTISI: certificado Número cinco (5) contentivo de OCHO MIL (8.000) acciones que van desde el Número 32.001 a la 40.000, ambos inclusive.

2.0 Igualmente los ciudadanos **CARMELO CANNAVÓ ORTISI, ELIO CANNAVÓ ORTISI, GIUSEPPE CANNAVÓ ORTISI y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI** ceden a favor del ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, todo y cada uno de los derechos y acciones que poseen en propiedad en la firma mercantil **PESQUERA ATLÁNTICA, S. A.** constituida el 22 de agosto de 1980, bajo la Ficha 59003 del Rollo 4389, Imagen 57 en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

3.0. EL OCHENTA POR CIENTO (80%) del Capital accionario representado por CUATROCIENTAS (400) acciones nominativas de **UN MIL BOLÍVARES(Bs.1.000,00)** cada una de la firma mercantil **EMPRESA VENEZOLANA DE HELICÓPTERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, (EVHELCA)** inscrita por ante el Registro Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, bajo el Número 25, Tomo I, libro 3, folios 133 al 141, en fecha 31 de Julio de 1.984.

Siendo pacto expreso de esta cesión que los cedentes ciudadanos **CARMELO, ELIO GIUSEPPE y SALVATORE CANNAVÓ ORTISI**, en su propio nombre y como apoderados de sus cónyuges **ANTONIA LORENZO DE CANNAVÓ, ELVIRA DI FRANCO DE CANNAVÓ, MARÍA MORELLO DE CANNAVÓ y FRANCESCA D' AUGUSTA DE CANNAVÓ** se obligan a firmar la cesión de las acciones en los libros de accionistas de las ya identificadas compañías y a efectuar los traspasos de los títulos contentivos de las mismas. Y por otra parte, el cesionario **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, declara que acepta la cesión que mediante el presente documento se le hace.

SEXTO: En cuanto a los fondos existentes en la actualidad en las empresas domiciliadas en Panamá, así como en las cuentas que desde ellas se manejaban las partes convienen en que una vez revisados los soportes correspondientes a los servicios de reparación, suministro de repuestos y equipos adquiridos hasta la fecha de la firma del presente convenio, así como los servicios de muelle y otras deudas contraídas hasta la fecha en que se ejecutó la medida de secuestro, e imputándole al administrador personalmente los gastos de muelle durante el lapso que duro el secuestro, se procederá a su cancelación. Realizada esa actividad las partes se distribuirán el saldo restante, el cual será entregado en cheques y montos iguales a los cinco (5) integrantes de la sociedad.

Las partes otorgantes del presente convenio de partición, declaran que expresamente desisten de todos los Derechos y acciones que les puedan corresponder, derivados y/o relacionados con el contrato de sociedad que entre las partes existió, incluyendo en este desistimiento la renuncia recíproca a las costas procesales, honorarios de abogados y a cualquier acción de daños y perjuicios derivados de la instauración de los proceso señalados al comienzo de este documento.

SÉPTIMO: Como quiera que se han otorgado documentos, cruzado correspondencias y formulado alegatos en los diferentes libelos, donde se usaron conceptos que pudieran afectar la honorabilidad de las partes involucradas en el mismo, a título de aclaratoria, todos los intervinientes en la presente acta convenio manifiestan quedar

conformes con los términos de la misma y señalan al efecto que dichos conceptos en ningún momento se emitieron para poner en entredicho la honorabilidad de alguna de las personas citadas o nombradas en los citados escritos y documentos.

OCTAVA: En razón del otorgamiento de este convenio el cual pone fin a todos los litigios que hubieran intentado las partes por ante cualquier Tribunal o Jurisdicción Nacional o Extranjera, solicitan respectivamente a los Tribunales donde se intentaron dichos juicios, donde se hubieren solicitado medidas precautelativas o de cualquier género que se hubieren decretado con motivo del juicio, piden al Tribunal, libre cuantas participaciones sean necesarias a los efectos de hacer efectiva la suspensión de las medidas decretadas. Igualmente, las partes que intervienen en el presente convenio extra judicial, declaran expresamente que renuncian a cualquier acción civil penal que se derivare o pudiera derivarse directa o indirectamente de las acciones deducidas y de las defensas incoadas, por lo que se dan el más absoluto y total finiquito, con respecto a ellas.

NOVENA: Las partes convienen en realizar una entrega de cuentas de las operaciones habidas en las diferentes empresas del denominado Grupo de Empresas CANNAVÓ, así como de las cuentas mancomunadas de los Bancos Provincial y Consolidado N. V. caso de no quedar satisfecho con las cuentas presentadas, las partes quedan autorizados mutuamente para realizar las auditorías administrativas y operaciones correspondientes a los ejercicios comprendidos desde el primero de Enero de 1.990 hasta la fecha de la firma del presente convenio, en todas y cada una de las firmas mercantiles que forman lo que hemos denominada **GRUPO DE EMPRESAS CANNAVÓ**, siendo pacto expreso que los administradores del momento serán los responsables de dicha gestión, quedando expresamente entendido que para las fechas comprendidas entre el año 1.990 y 1.994, el presidente de las empresas ubicadas en Venezuela era el Ciudadano **FRANCESCO CANNAVÓ ORTISI**, manteniéndose como responsable administrativo de las empresas ubicadas en la República de Panamá, responsabilidad esta que fue delegada en forma personal por el socio administrador, en virtud de sus viajes, en Domenico Carmelo Cannavó Trigales y Giuseppe Domenico Cannavó Trigales, igualmente las parte convienen que en relación a la entrega o rendición de cuentas o a las auditorías a practicarse, si en estas no pudiera comprobarse la ubicación o destino de montos, fondos u ingresos de dinero, será imputable a la parte responsable de la administración. En este sentido se establece que de existir algún faltante, el socio responsable de la administración, se compromete a subsanarlo, en un plazo no mayor de noventa días, estableciendo la correspondiente garantía de algún bien producto de esta operación y que tenga valor mayor que las cifras arrojadas como faltantes. Las partes acuerdan que será contratada una empresa única escogida de mutuo acuerdo para que realice las auditorías, del Grupo tanto en Venezuela, como en Panamá. Este proceso se iniciará en las Empresas ubicadas en la ciudad de Panamá y en caso de que estas, sean declaradas no auditables por cualquier vicio, sea este administrativo, o de cualquier otra naturaleza, que no permita conocer la situación real de su administración sin renunciar a las acciones legales que se derivan de esta situación, las partes acuerdan continuar la auditoría en las Compañías ubicadas en Venezuela. Es pacto expreso entre los otorgantes, que con la firma del presente documento, cada parte queda en posesión y pleno dominio de los bienes que se les han cedido, por consiguiente, a partir de la firma del presente convenio cada parte tiene el uso goce y disfrute de los bienes cedidos, excepto la disponibilidad de las motonaves Sea Royal, Marinero, y Tiuna, por lo que no podrán ser enajenadas o gravadas hasta que se formalice la entrega de cuenta a satisfacción de las partes. Igualmente las partes acuerdan expresamente que los bienes dados en

garantía, aquí señalados no podrán ser objeto de medidas judiciales tales como embargo o secuestro como consecuencia del presente convenio hasta tanto no exista sentencia definitiva.

Los honorarios profesionales que cause el aludido trabajo, de auditoría será sufragado a razón del **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** por cada una de las partes contratantes. Las partes se comprometen a en lapso de quince (15) días, a presentar los candidatos para realizar las referidas auditorías, y el elegido tendrá un tiempo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la firma de la auditoría para presentar el respectivo informe con el resultado de las mismas. Las partes acuerdan en nombrar dos representantes, con los cuales se entenderán la firma auditora siendo designados como representantes, para dirigir la operación al **DR. RAFAEL DE ARMAS ATTIAS** y la **Lic. ROSITA CANNAVÓ DI FRANCO.**

DÉCIMA: Los accionistas en funciones directivos de las diferentes empresas del grupo **CANNAVÓ**, anteriormente identificadas, acuerdan que una vez terminadas las auditorías y resueltas las diferencias que surjan se otorguen finiquitos en nombre de su representadas, de las obligaciones existentes entre las mismas y con terceros, de tal manera que en función del mismo ninguna empresa queda a deberle a otra por ningún concepto, ya que el presente convenio extingue las obligaciones existentes inter-empresa del Grupo CANNAVÓ y con terceros, tanto en la República de Venezuela como las domiciliadas en el Exterior.

DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen expresamente en otorgar por separado cada uno de los documentos que amparen las cesiones de las acciones, y celebrar Asambleas de Accionistas por cada una de las Empresas. Igualmente se comprometen asistir per se o por medio de apoderados con facultad suficiente para materializar los desistimientos y su correspondiente aceptación en todos y cada uno de los juicios anteriormente citados por ante cada uno de los Tribunales donde curse el correspondiente juicio.

DÉCIMA SEGUNDA: Ambas partes eligen como domicilio especial, para todos los efectos derivados de la presente convenio a la Ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran acogerse.

DÉCIMA TERCERA: Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caracas a la fecha de su presentación. (Págs. 1698-1715).

Como medio excepcional de terminación de los procesos la Ley 8ª de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, por la cual se crea los Tribunales Marítimos y se dictan normas de procedimiento, establece la transacción. Su artículo 441 expresa que en cualquier estado del juicio, y dentro de las condiciones establecidas por el derecho común, podrán las partes transigir la controversia. Agrega que para que la transacción produzca sus efectos se acompañará el documento que la contenga o se hará constar en memorial dirigido al Juez que conoce del asunto. También establece que en ambos casos el escrito será presentado personalmente.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estima que en el presente caso se cumplen los requisitos exigidos por la Ley para aprobar la transacción, en vista de que los apoderados judiciales tienen facultad, según sus respectivos poderes para transigir, y han presentado personalmente la transacción ante este Despacho.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, APRUEBA la transacción celebrada entre las partes de este proceso, en todo lo que concierne al mismo; con lo que se PONE FIN a la controversia.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. LE SIGUE A M/N MARHAVA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En sentencia proferida el 26 de mayo de 1995 el Tribunal Marítimo de Panamá desató en primera instancia el Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado que, en su condición de parte actora, propuso CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. contra la M/N MARHAVA, con la finalidad de que se condenase a la demandada al pago de B/.139,541.54, más los intereses, costas y gastos del proceso. El fallo del Tribunal Marítimo resolvió exonerar totalmente a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por la demandante, dando esta actuación lugar al recurso de apelación que la Sala debe decidir en función de tribunal de instancia.

ANTECEDENTES.

Los autos de este proceso indican que el origen de la demanda presentada por CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. se ubica en la operación de transporte de una carga de 2,302.46 toneladas métricas de cemento a ser entregadas en Puerto Príncipe, Haití, partiendo de Puerto Cortés, Honduras, mediante el uso de la M/N MARHAVA, barco de registro panameño, de propiedad de la Compañía Naviera Forli, S. A.; ocurriendo que, por no efectuarse la descarga en el puerto de destino, le fueron provocados supuestos perjuicios a CEMENTOS DE HONDURAS, S. A., pues el destinatario y comprador de los bienes, ADAM INTERNATIONAL, ante la falta de entrega, se abstuvo de pagar el precio de venta, ocasionándole, en consecuencia, una lesión patrimonial que se estima en la suma demandada como principal. En virtud de los acontecimientos anteriores CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. invocando el numeral 5 del artículo 1507 del Código de Comercio, interpuso el juicio especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado contra la M/N MARHAVA para lograr que se le condenara a pagar los daños y perjuicios causados hasta la cantidad antes mencionada, más los intereses, costas y gastos del proceso, tal como ha quedado dicho. La M/N MARHAVA, al dar contestación a la demanda, opúsose a las pretensiones de la parte actora aduciendo que la carga de cemento no fue, en verdad, puesta a bordo del buque por CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. sino por el señor HENRI CHAUMIN, en su condición de fletador de la nave y conforme a los términos de un contrato o póliza de fletamento por viaje (VOYAGE CHARTER PARTY) que con tales propósitos fuera celebrado. Explicó que la M/N MARHAVA no procedió a efectuar la descarga al arribar a Puerto Príncipe, optando por retirarse con la mercancía, en virtud de que ni el fletador, HENRI CHAUMIN, ni el consignatario de los bienes, ADAM INTERNATIONAL, cumplieron con el pago del flete en las condiciones y en el monto acordado, a pesar de que la M/N MARHAVA estuvo presta a descargar durante un período de tiempo razonable y en exceso, pero aguardando, sin lograrlo, el pago del flete convenido. Adujo la demandada que la copia del Conocimiento de Embarque (BILL OF LADING) N°1 que se acompañó con el libelo de demanda fue emitido "para ser usado con el Contrato de Fletamento" (Bill of Lading to be used with CHARTER PARTIES), por lo que la descarga estaba contractualmente sujeta a la previa cancelación del flete y de las demoras en caso de que estas ocurrieran; pago que, de acuerdo al contrato, debió hacerse efectivo mediante giro bancario a la cuenta que en el Republic International Bank of New York de Miami, Florida, Estados Unidos de América, poseía la demandada, algo que, como se dejó dicho arriba, no llegó a cumplirse. La parte demandada

objetó la copia del Conocimiento de Embarque presentado como prueba; no en cuanto a su contenido, sino porque no se trata del original del documento, lo que a su juicio es importante pues el pago del flete, en caso de que se hubiese hecho efectivo, es decir la constancia de su cancelación, sólo puede demostrarse a base de un original de dicho Conocimiento de Embarque.

Seguidamente la parte demandada introdujo una Excepción de Inexistencia de la Obligación basándose en el contrato de fletamento celebrado para el transporte de la carga que se concertó entre la Compañía Naviera Forli, S. A. en su condición de propietaria de la M/N MARHAVA, como fletante, y HENRI CHAUMIN como fletador. Según dicho contrato toda la nave fue contratada por un viaje (VOYAGE CHARTER PARTY) conforme quedó establecido en la cláusula 16 de dicho documento. El flete sería pagadero por adelantado, dentro de los tres días siguientes a la carga de la nave; pago que debió hacerse efectivo en Miami, Florida, Estados Unidos de América. En cuanto a la emisión de los Conocimientos de Embarque respectivos lo acordado fue que los mismos se entregaran antes de producirse la descarga en el puerto de destino (Haití), pero siempre y cuando el flete se encontrase debidamente cancelado. Indica el excepcionante que "el conocimiento de embarque N° 1 en que aparece CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. como embarcador y ADAM INTERNATIONAL como consignatario, explícitamente se remite al Contrato de Fletamento para regular las condiciones y términos del pago del flete. El conocimiento en efecto -dice el excepcionante- establece que el flete se pagará conforme se convino en la póliza de fletamento suscrita el 20 de abril de 1990 ("Freight payable as per CHARTER PARTY dated April 20, 1990").

Continúa indicando el excepcionante que ni el fletador (HENRI CHAUMIN) ni el consignatario de la carga (ADAM INTERNATIONAL, de la cual el primero es Director General y Representante), ni CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. pagaron el importe del flete ni las demoras, tal como había sido convenido, aparte de que no existe ninguna evidencia de que hubiese algún tipo de obligación, de parte de los primeros frente a la última, por razón del contrato de fletamento celebrado o del Conocimiento de Embarque N° 1, cuya copia fue incorporada al proceso con el libelo de la demanda.

La parte demandada, además, interpuso una solicitud de nulidad por ilegitimidad de personería para demandar en Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado, basándose en que, de acuerdo a la ley sustantiva panameña, no es admisible ninguna acción en juicio de esta naturaleza relativa a la póliza de fletamento o al conocimiento de embarque, si con la interposición de la misma no se acompaña alguno de los ejemplares debidamente reconocidos del documento respectivo que le sirve de fundamento, requisito que no ha sido cumplido por la parte demandante, por lo cual se descalifica para sustentar la alegada y supuesta falta de entrega de la carga, por la sencilla razón de carecer de personería o capacidad de legitimación activa para comparecer como accionante que pide la ejecución de créditos o privilegios contra la nave demandada dentro de un proceso in rem como lo es el presente.

La parte demandante presentó escrito en donde se opone tanto a la excepción de inexistencia de la obligación como a la solicitud de nulidad por ilegitimidad de personería que fueran interpuestas en su contra. A la primera solicitud le responde aludiendo a la circunstancia de que el cemento embarcado en la M/N MARHAVA es de propiedad de CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. y sostiene que CEMENTOS DE HONDURAS, S. A., como embarcador, la puso a bordo de la nave, previamente fletada por una persona interesada en la compra de la carga, con el propósito de que esta fuese entregada en el puerto de destino a su comprador, acontecimiento que nunca llegó a suceder por el incumplimiento en que incurrió el fletante. Dice el incidentado lo siguiente:

> "...
> Aquí cabe preguntar cuál era el objeto mismo del contrato de transporte de carga celebrado; el transporte y entrega de los cementos puestos a bordo o embarcados por CEMENTOS DE HONDURAS, S. A.
> ...
> La parte demandada basa su supuesta excepción de inexistencia de obligación, cosa que no es cierta, en una serie de circunstancias que se dan entre fletante y fletador, y no entra a demostrar la

> supuesta inexistencia de obligación; así, el mero hecho de arribar a aguas haitianas, no releva a la nave y a sus propietarios de su obligación hasta tanto no entregue los bienes transportados a su consignatario; en el puerto de entrega." (F. 113).

La solicitud de nulidad por falta de personería fue contestada por el incidentado aduciendo que el artículo 311 del CPM en su ordinal 3 le otorga valor probatorio a las copias fotostáticas o reproducciones hechas por otros medios técnicos de los conocimientos de embarque, y que el artículo 204 de ese cuerpo legal también le concede a ese tipo de piezas de convicción el carácter probatorio que les permite ser utilizados en juicio, añadiendo, en cuanto al derecho que tiene a demandar legítimamente la acreencia reclamada, el amparo que le confiere el ordinal 4to. del artículo 557 de la Ley 8 de 1982 reformada. Sobre el particular sostiene el incidentado:

> "El argumento emitido por la parte demandada en su punto cuarto de su solicitud por ilegitimidad de personería, no es aplicable a CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. tanto por lo que establecen el artículo anteriormente citado en el punto número uno de nuestra oposición a esta solicitud y por el hecho de que CEMENTOS DE HONDURAS, S. A., en base a lo que establece el Artículo 1259 del Código de Comercio, no ha demandado en juicio ni al Capitán ni a los cargadores o aseguradores, CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. ha demandado IN REM, siendo CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. un embarcador".
> ...
> CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. desde el inicio de su demanda ha procedido conforme a las normas procesales de ejecución de crédito marítimo privilegiado y ha probado su legitimidad de personería jurídica." (F. 116).

Subsiguientemente, la parte demandada presentó solicitud de llamamiento al proceso para que se hiciese comparecer al señor HENRI CHAUMIN, a fin de integrarlo como demandado en este juicio y se le declarase como responsable de las pretensiones que CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. reclama contra la M/N MARHAVA. A esta petición se opuso formalmente la parte actora indicando que la misma era por completo extemporánea y, además, una medida dilatoria que no tenía cabida en el proceso por tratarse en este caso del ejercicio de una "actio in rem".

Con fecha 19 de octubre de 1994 el Tribunal Marítimo dictó Auto mediante el cual resolvió denegar el incidente de nulidad por ilegitimidad de la personería propuesto, así como también el llamamiento de tercero dentro de este proceso "in rem", declarándose como única demandada a la M/N MARHAVA. El primer incidente fue estimado improcedente porque, en opinión del Tribunal, "el incidentista confundió la falta de personería para actuar en el proceso de naturaleza más bien formal, con la falta de personería <<ad causan>> de naturaleza sustantiva, que es lo que realmente se opone en el incidente planteado, siendo ésta (sic) un cuestionamiento de la titularidad que pueda ostentar el demandante en la causa para pretender una sentencia en el fondo a su favor".

La solicitud de llamamiento del tercero a juicio fue rechazada por el tribunal porque se formuló dentro de un proceso "in rem", en el cual no caben acciones "in personam" como sería la que se ejercería contra un tercero convertido en litis consorte cuya intervención no dejaría de ser forzosa y obligada. Para respaldar su decisión citó fallo concerniente a esta materia dictado por la Corte Suprema de Justicia el 12 de julio de 1994:

> "`En este orden de ideas no puede explicarse la Sala cómo podría incluirse dentro de este especialísimo procedimiento in rem una persona, aunque ella sea persona jurídica. En varias ocasiones la Sala ha señalado que no cabe la acción mixta dentro del procedimiento marítimo (cita sentencia pronunciada el 27 de septiembre de 1990).
> ...
> Introducir a una persona como demandado dentro del procedimiento de ejecución de créditos privilegiados sería contrario a las decisiones

> anteriores adoptadas por ese mismo Tribunal Marítimo y esta Sala Primera de la Corte ". (F. 162).

Luego de celebrada la audiencia preliminar, el día 20 de marzo de 1995, y posteriormente la audiencia ordinaria, el 24 de mayo de ese mismo año, el juez marítimo profirió la sentencia oral desatando la controversia en primera instancia y exonerando, por medio de ese acto tal como hemos dicho, a la M/N MARHAVA, en los términos que a continuación se expresan textualmente:

> "Así entonces, el Tribunal Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: ABSUELVE a la motonave "MARHAVA" de responsabilidad por indemnización de conformidad con la pretensión de CEMENTO DE HONDURAS sustentada en el artículo 1507 numeral 5 del Código de Comercio.
>
> No habrá condena en costas, por estimarse que se ha litigado evidente buena fe."

PUNTOS MEDULARES Y SOBRESALIENTES DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO.

De la extensa sentencia dictada por el juez marítimo en esta causa la Sala tratará de extraer aquellos pronunciamientos y consideraciones que le sirvieron de fundamento medular al juzgador de primera instancia a la hora de adoptar la decisión que en grado de apelación debe ser examinada por la Corte.

Para el juzgador marítimo era importante resolver en este juicio si a favor de CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. existía o no un derecho que debía hacerse prevalecer contra el transportista de la carga de cemento, o sea en contra de la M/N MARHAVA la que, con motivo de no haber recibido el pago del flete pactado en el Contrato de Fletamento que celebró con el señor HENRI CHAUMIN, ejerció sobre la carga (el cemento embarcado) un derecho de retención o de propiedad para, por medio de esa acción, cobrarse el precio del transporte ante la falta de pago en que incurrió el fletador, es decir, el mencionado señor CHAUMIN tal como ha quedado planteado. Conviene, para un mejor entendimiento, advertir que, después de negarse a descargar el cemento en Puerto Príncipe, Haití, la M/N MARHAVA abandonó aguas territoriales haitianas y se dirigió a la República de Panamá en donde fue tramitado ante nuestra jurisdicción marítima un proceso "in rem" contra la carga (el cemento) sita a bordo de la nave, interpuesto por la propietaria de la misma, la Compañía Naviera Forli, S. A. La sentencia dictada por el Tribunal Marítimo en esta causa, calendada el 8 de enero de 1993, decidió que la retención de la carga efectuada por el Capitán de la M/N MARHAVA estaba legalmente justificada en razón de la falta del pago del flete en que incurrieron tanto el fletador de la nave, HENRI CHAUMIN, como el consignatario de los bienes, es decir la Compañía ADAM INTERNATIONAL.

Entre las consideraciones importantes que para motivar su fallo hiciera el a-quo, se destaca que el Conocimiento de Embarque, copia del cual aportó la parte demandada para acreditar su condición de embarcador de la carga, no es propiamente ni se puede considerar como el contrato de fletamento, aún cuando sí se admite que puede llegar a constituir una excelente evidencia de los términos pactados en el contrato o póliza de fletamento celebrado. Recordó el juez marítimo que el contrato de transporte o póliza de fletamento nace antes de emitido el Conocimiento de Embarque, ya que este es preparado por el transportista (el armador o el propietario de la nave) para luego entregarlo al embarcador o al fletador, según sea el caso, quienes se adherirán al mismo, documento que una vez endosado se puede tornar en una evidencia de los términos y condiciones consignados en el contrato de transporte. Sin embargo, el juez marítimo tuvo el cuidado de aclarar, después de haber examinado las particularidades de la operación efectuada entre aquellos que en ella intervinieron y que es objeto de análisis en el caso subjúdice, que en la oportunidad que se estudia no se produjo ningún endoso a favor de terceros del Conocimiento de Embarque elaborado, o sea, que dicho documento fue expedido a la orden de ADAM INTERNATIONAL, en su condición de consignatario de la mercancía imponiéndosele un sello en el cual se advertía que el documento no era

negociable, tal como se desprende claramente de la propia copia aportada por la parte actora en este juicio y que ya ha sido identificada como reproducción fotostática del Conocimiento de Embarque N° 1 visible a fojas 11, así como también a fojas 25 del expediente. La Sala estima muy importante lo que sobre el tema dejó plasmado el juez marítimo en los siguientes términos:

> "El Tribunal, luego de las explicaciones anteriores, en principio no estimaba que en el presente caso se daban las características del "waybill" o el "straight bill", **porque parecía que el conocimiento de embarque sí representaba la titularidad de los bienes a la orden de ADAM INTERNATIONAL,** sin embargo, al observar que los tres (únicos) ejemplares del conocimiento se emitieron no-negociables, ADAM INTERNATIONAL (HENRY CHAUMIN) no estaba en la posibilidad de negociar o endosar más adelante dichos documentos pues contenía (todos) la advertencia o restricción (pues el documento representaba fundamentalmente el recibo de la mercancía dentro de un(sic) relación contractual de fletamento por viaje). O sea que ADAM INTERNATIONAL era la única persona que podía recibir la mercancía por estar nombrada en los conocimientos y ello se compagina con el hecho de que la mercadería como se ha visto, fue vendida a ADAM INTERNATIONAL por CEMENTO DE HONDURAS, S. A. y con la emisión del Conocimiento de Embarque nombrando al comprador ADAM INTERNATIONAL y CEMENTO DE HONDURAS, por conducto de ADAM INTERNATIONAL, le dio titularidad de la mercadería (del cemento) a ADAM INTERNATIONAL, con esa emisión que quedó en manos del transportista (transporte contratado por ADAM INTERNATIONAL a través de HENRY CHAUMIN). Obviamente aquí se ve una situación de extrema (ubérrima) buena fe de CEMENTO DE HONDURAS, que no solamente le da la titularidad a ADAM INTERNATIONAL, sino que pone en sus manos la responsabilidad de contratar el flete para el transporte de esas mercadería, con los consecuentes riesgos que ello conlleva, y como en efecto se dieron en este caso. Porque también CEMENTO DE HONDURAS, S. A. hubiera podido retener o girado las instrucciones de retener esos Conocimiento de Embarques cancelando previa la cancelación del flete hasta que se le pagase el precio de la venta del cemento. Sin embargo no los retiene ni interviene o contrata el transporte, sino que al permitir al señor CHAUMIN a través de ADAM INTERNATIONAL que contrate motu propio (independientemente) el transporte de una mercadería que éste no había pagado, permitiéndole comprometerse contractualmente con un fletador el pago del flete a la entrega de la mercancía, en un contrato de fletamento (repetimos) que establece un derecho de retención y un gravamen contra la carga por falta de pago del flete". (F. 356, 357).

Refiriéndose de manera copiosa y abundante a la doctrina, a las prácticas y a los usos del comercio marítimo, así como a la jurisprudencia dictada a nivel internacional, el juez se preocupó en destacar que un Conocimiento de Embarque expedido a la orden, en las condiciones en que lo fue el que nos ocupa en este caso, no es un documento negociable. Sólo un Conocimiento de Embarque emitido al portador podía haber sido endosado para que sirviera como un documento mediante el cual la carga por él amparada se constituyera en objeto de negociación entre su tenedor, y/o el consignatario de la mercancía, con terceros de buena fe, quienes a través de esa clase de operaciones podrían adquirir la titularidad de los bienes transportados, por mar, durante su travesía.

El Tribunal Marítimo en la sentencia apelada no deja de precisar que en este caso particular el o los ejemplares del Conocimiento de Embarque emitidos en tres originales nunca salieron de la posesión del capitán de la nave, por la sospecha que a él le embargaba en cuanto al posible incumplimiento del pago del flete por parte del fletador, pues aún cuando se había pactado un flete pre-pagado esa condición no había sido cumplida, razón que lo indujo a conservar consigo los originales del Conocimiento de Embarque durante toda la travesía y nunca se los entregó ni a HENRI CHAUMIN (fletador de la nave) ni a ADAM INTERNATIONAL consignatario de la carga. Por otro lado, en la copia expedida se dejó constancia expresa de que el Conocimiento de Embarque era de naturaleza no

negociable. En esas condiciones cualquiera que se hubiese convertido en tenedor del Conocimiento de Embarque, pongamos por caso ADAM INTERNATIONAL, en su carácter de consignatario de la mercancía y a la orden de quien fuera emitido el documento, no estaba en capacidad de transferir la propiedad de los bienes durante el tránsito de los mismos, aunque hubiese tenido oportunidad de endosar el documento, oportunidad que nunca tuvo por no haberlo tenido jamás en su poder, y por no ser negociable el documento.

También el Tribunal Marítimo puso de presente en la sentencia dictada la función que, como garantía de una deuda, puede desempeñar el Conocimiento de Embarque; papel que le asignó en este caso a ese documento el capitán de la nave cuando decidió no entregarlo con el fin de hacer efectivo el pago de la deuda contraída por el fletador en concepto del precio del transporte contratado, ejercitando, por ese camino, un derecho de retención sobre la carga, es decir, sobre el cemento transportado.

No se olvidó la sentencia de consignar las tres funciones clásicas que generalmente son aceptadas como el papel que primordialmente desempeña un Conocimiento de Embarque dentro de las operaciones marítimas. Estas son: 1) la de recibo o constancia de que los bienes han sido recibidos a bordo del buque para su transportación; 2) la de constancia o evidencia de los términos del contrato de fletamento, sea este celebrado por viaje o por tiempo; y, 3) como documento de título de los bienes que permite la transferencia de su propiedad mediante endoso.

El juez marítimo hizo énfasis en el hecho de que los tres ejemplares originales del Conocimiento de Embarque emitidos quedaron en el buque en poder del capitán como una garantía para proteger el pago del flete; no siéndole enviado ninguno de ellos al consignatario de la carga en Haití con el premeditado propósito de hacer su entrega solamente contra el pago del flete acordado.

Con respecto al tipo de contrato de transporte o póliza de fletamento celebrado el juez tuvo en consideración que el concertado entre las partes fue un "Private Carriage" y no un "Common Carriage". El llamado "Private Carriage" es el que se celebra cuando se contrata para el transporte a uno de los llamados "tramp shipping", o sea un barco no perteneciente a una naviera de línea, de las que hacen viajes en forma más o menos periódicas dentro de rutas marítimas regulares y predeterminadas. El "tramp shipping", en cambio, es un barco especialmente contratado para efectuar un determinado viaje o por un determinado período de tiempo, por un fletador que desea usarlo para un propósito específico y determinado. En éstos caso, como se sabe, el contrato viene a ser la póliza de fletamento por viaje o por tiempo y cuando, con motivo de esta clase de contratación, se emite el Conocimiento de Embarque, este documento sirve, por supuesto, para acreditar el recibo y título sobre la carga, pero debe presumirse, sobre todo, como ocurre en el caso subjúdice, que sólo hay un fletador a quien la carga completa le pertenece, a menos que otra cosa se haya hecho constar en la póliza de fletamento.

EL DERECHO A RETENER LA CARGA POR PARTE DEL TRANSPORTISTA PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL FLETAMENTO.

En atención con este aspecto del problema en debate, de cualquier manera medular para lo que está en disputa en este juicio, el Tribunal Marítimo consideró que la parte demandada, cuando adoptó la decisión de no hacer la descarga ni la entrega de los bienes al consignatario al arribar al puerto de destino, no violentó ninguna prohibición ni actuó al margen de la ley, puesto que su conducta estaba debidamente amparada en lo que fue consignado en las cláusulas 16 y 8 del Contrato de Fletamento celebrado entre las partes. Dichas cláusulas establecen lo siguiente:

> "16. El flete debe ser 100 por ciento pagado por adelantado en Miami, Florida, por Transferencia Cablegráfica en dólares de Estados Unidos dentro de los tres días bancarios después de completar la carga y la firma/liberación de los Conocimientos de Embarque, pero siempre antes de comenzar la descarga en el puerto de descarga, sin descontar y no retornable, la pérdida o no pérdida de la nave y/o

carga.

Una vez que la nave haya entrado en demora, los Fletadores pagarán diariamente, a la tasa de $2,600.00 por día de 24 horas consecutivas o prorrata de un día. Libres de días de plancha.

La transferencia cablegráfica se hará en el Republic International Bank of New York,
1451 Brickell Avenue
Miami, Florida 33131
Teléfono: (305)379-4000
Atención: Sra. Daisy Castro
para acreditar a GÉMINIS SHIPPING CO., S. A. Cuenta N° 033-700-9093 ABA N° 0660-10445.

"Cláusula de Embargo.
8. Los propietarios tendrán un embargo sobre la carga por flete, falso flete, demora. Los Fletadores seguirán siendo responsables por falso flete y retraso incurrido en el puerto de cargo. Los Fletadores también seguirán siendo responsables por flete y retraso incurrido en puerto de descarga." (F. 368 y 369).

Se hizo notar en la sentencia dictada que, si en el contrato de fletamento se pactó que el flete debía ser pre-pagado -lo que quiere decir pagado por adelantado- - cláusula 16- y también que el transportista gozaba de un "posesory lien" (derecho de retención de la carga) en concepto del flete adeudado, o por falso flete, o por la demora en el pago del mismo, e incluso por el retraso que pudiera darse en el puerto de descarga -cláusula 8-, sin que, por otro lado se afectasen los derechos de un tercero adquirente de buena fe (supuesto que no podía presentarse porque el Conocimiento de Embarque fue retenido por el capitán, aparte de ser de naturaleza no negociable), jamás podría gravitar sobre el capitán de la nave ningún impedimento legal que lo obligara a abstenerse de actuar como lo hizo.

El juez marítimo destacó, como un elemento importante para respaldar su decisión, el hecho de que el fletador del barco y el consignatario de la mercancía constituyeran en la práctica una misma entidad pues, como se desprende de autos, HENRI CHAUMIN (el fletador) es Director y Representante de ADAM INTERNATIONAL, consignatario de la carga.

Resalta el juzgador de primer grado que el derecho de retención sobre la carga pactado a favor del transportista sólo se podría hacer efectivo antes de que se produjera la entrega de la mercancía al consignatario, independientemente de que, en éstos casos se debe ser cuidadoso de que el título o propiedad sobre los bienes transportados no haya sido transferido a una tercera parte inocente o adquirente de buena fe, circunstancia que, se vuelve a reiterar, no podía presentarse en este caso porque el capitán tomó la precaución de no entregarle ningún Conocimiento de Embarque ni al embarcador, ni al fletador ni al consignatario, fuera de que el Conocimiento de Embarque fue preparado con el carácter de no negociable. No existía entonces ninguna posibilidad de que el Conocimiento de Embarque se convirtiese en objeto de negociación con terceros, acontecimiento que de haber ocurrido habría eliminado automáticamente el derecho del fletante a retener la carga por la falta del pago del flete.

No perdió de vista el Tribunal Marítimo la alegación del demandante en el sentido de que en la fotocopia del Conocimiento de Embarque N° 1, que aportó con el libelo de demanda, aparece como fletador o como embarcador de la carga la parte actora de este juicio, CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. Sin embargo, el Tribunal hizo la salvedad de que no podía pasar por alto dos circunstancias que anulan los efectos que pudiese haber tenido esa mención que se hace en el texto del documento. En primer lugar está el hecho de que en el documento también se establece expresamente que el Conocimiento de Embarque es para ser usado con el Contrato de Fletamento. En conexión con lo apuntado se tuvo en cuenta que a fojas 100 y siguientes del expediente reposa la copia de la Póliza de Fletamento en donde consta que CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. no fue realmente el fletador de la nave; fuera de que en ese contrato se dejó claramente explicado que se autorizaba

al fletante a retener la mercancía en caso de que no se cumpliera con el pago del flete por parte del fletador.

APLICACIÓN DEL DERECHO SUSTANTIVO PANAMEÑO EN ESTE CASO.

Frente a las alegadas restricciones que las normas pertinentes del derecho sustantivo panameño contienen, limitando la facultad del capitán o del armador de la nave en el ejercicio del derecho a retener la carga que se transporte por falta de pago del flete contratado, el juzgador hizo notar que ello es cierto, pero que las partes gozan del derecho y la libertad de pactar términos y condiciones distintas a los consignados en la ley cuando celebren los contratos correspondientes, siempre y cuando se trate de acuerdos que no sean ilícitos ni contrarios a las buenas costumbres. En consecuencia, si en la póliza de fletamento se pactó el derecho de retención para el caso en que faltase el pago del flete, el tribunal no encontró razón alguna para considerar que el fletante hubiese actuado al margen de la legalidad.

EXCEPCIÓN ALEGADA.

No consideró el Tribunal Marítimo la Excepción de Inexistencia de la Obligación alegada por la parte demandada contra CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. y en cambio reconoció otra excepción distinta a la que denominó de contrato no cumplido, a propósito de lo dispuesto en los artículos 985 y 1009 del Código Civil, atinentes a la mora en las obligaciones recíprocas y a la condición resolutoria tácita que permite resolver las obligaciones cuando uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.

EL RECURSO DE APELACIÓN.

La parte demandante ha sustentado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia indicando, en primer lugar, que el veredicto no fue dictado en concordancia con las peticiones formuladas en la demanda, o lo que es equivalente a decir que se dictó en incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 389 del la Ley 8, reformada de 1982. Se le endilga a la sentencia el cargo de haber sido indebidamente motivada y de haber incurrido en la falsa aplicación de la ley sustancial, así como en la no aplicación de la ley procesal correspondiente. Se denunció como violado el artículo 206 del CPM, que hace recaer sobre las partes la carga de probar los hechos y los datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les sean favorables. También asegúrase que se infringió el artículo 205 de ese cuerpo legal por no haberse apreciado las pruebas en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica. Se añade infringido el artículo 319 al no habérsele dado valor probatorio a ciertos documentos presentados como prueba por la parte actora. Se agrega que el artículo 557 de la ley marítima dejó de observarse porque supuestamente la sentencia no aplicó la ley sustantiva panameña, concretamente los artículos 1132, 1300, 1507 y 1172 del Código de Comercio al no hacer valer la prohibición que pesa, tanto para el capitán como para el armador, en donde se les veda la retención a bordo de los efectos de la carga con el propósito de asegurar el pago del flete, privilegiando, en cambio, la vigencia de un principio de derecho marítimo anglosajón que permite la aplicación de esa figura al regular las relaciones entre fletante y fletador. Del Código Civil se estima violado el artículo 986 que le impone la obligación de indemnizar daños y perjuicios causados a aquella parte que hubiese incurrido en mora, culpa o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, además del artículo 9 de ese cuerpo legal. Por último también se considera infringido el artículo 212 de la Constitución ya que, según el criterio del apelante, la sentencia no reconoció los derechos consagrados en la ley sustancial que obran a favor de CEMENTOS DE HONDURAS, S. A.

DECISIÓN DE LA SALA.

Para dejar establecida la posición de esta Sala Primera de la Corte, actuando como tribunal de instancia en este juicio, se procederá a confrontar las objeciones que el apelante le ha formulado a la sentencia del juzgador primario y para ello se ha de comenzar por manifestar la falta de coincidencia con lo sostenido por el recurrente cuando acusa al a-quo de pretermitir el trámite que le permite a las partes el derecho de alegar, por escrito y de manera resumida,

con posterioridad a la celebración de la audiencia oral ordinaria llevada a cabo en los estrados del Tribunal Marítimo. Es claro que se produjo una renuncia tácita de las partes en cuanto al ejercicio del derecho que en ese sentido consagra el artículo 504 del CPM, sin que se vislumbre ninguna clase de violación de parte del tribunal en relación con ese privilegio.

En lo atinente a la supuesta violación del artículo 389 de la Ley 8, como quiera que la parte demandante no ha sido capaz de precisar en qué consistió realmente el yerro atribuido a la sentencia, referente a que no se falló conforme a la pretensión formulada en la demanda, la Sala deduce que el cargo en sí mismo no es otra cosa que una expresión de desacuerdo provocada por la conclusión final a la que arribó el tribunal, puesto que el examen que hemos hecho en extenso de la sentencia recurrida revela todo lo contrario. De ninguna manera se puede afirmar con seriedad que el juez marítimo se haya apartado de lo medular y de la disputa central que se debate en este proceso. Ello no es así, ni en relación a los hechos, ni en cuanto a las pruebas, ni con respecto al derecho que cada una de las partes, en especial la demandante, aducieran, demandaran e invocaran dentro y a lo largo de este proceso. Una acusación en esa dirección sólo puede calificarse de caprichosa y antojadiza, provocada por el disgusto de no haber resultado favorecido y complacido por los términos de la sentencia que se impugna.

Injusta, pero mucho más que eso infundada, le parece a la Sala la acusación que se formula acerca de la no aplicación de las reglas de la sana crítica en lo que atañe a la valoración y apreciación que se hizo de las pruebas incorporadas en el proceso. La parte demandante olvida a conveniencia que el sistema de la sana crítica no consiste en la obligación del juzgador de asignarle fuerza probatoria a cada una de las piezas de convicción que las partes hayan logrado incorporar al expediente, por el mero hecho de haberlas hecho llegar a ese destino. Muy claro está, como con tino y acierto lo consideró el juez marítimo, que la declaración notarial emitida por el señor HENRI CHAUMIN relacionada con la falta de entrega de la carga por parte de la M/N MARHAVA, su capitán o sus agentes, no es una prueba idónea para que, a partir de ella, se pueda establecer la responsabilidad pretendida en contra de la parte demandada, ya que su dicho resulta, sin lugar a dudas, altamente sospechoso por ser persona con evidentes intereses económicos en los resultados del proceso (art. 261 de la ley 8 de 1982). Téngase en cuenta que fue ese señor quien celebró, en representación de ADAM INTERNATIONAL, el contrato de fletamento cuyo incumplimiento por falta de pago del flete es exactamente el origen de este pleito. Asimismo no cree la Sala que pueda el recurrente intentar con éxito el reprocharle a la sentencia no haber desestimado la copia del Conocimiento de Embarque N° 1 (fs. 11 y 25 del exp.) en donde se hace referencia a que ese documento es para ser usado con el contrato de fletamento celebrado entre las partes, sin que al alegar ese vicio se incurra en una aberrante contradicción jurídica. Ese documento fue incorporado como prueba por la propia parte actora y la parte demandada al referirse al mismo se limitó sólo a manifestar que estaba de acuerdo con su contenido. Sí, en fin de cuentas, el documento aportado no le ayudó al actor a conseguir sus objetivos procesales y, por el contrario, le ha resultado perjudicial en cuanto a sus pretensiones, ese desenlace no le da autorización para descalificarlo y mucho menos para denostar y afrentar al juez marítimo en los términos en que lamentablemente lo ha hecho al sustentar el escrito de apelación presentado.

Es probable que la crítica más grave, desde el punto de vista jurídico, que se le enrostra a la sentencia apelada radique en el cargo que le endilga por haberse apartado de la aplicación de las normas de derecho sustantivo panameño, para someter la causa a las normas, principios y regulaciones que en otras jurisdicciones nacionales extranjeras rigen y tienen vigencia en casos semejantes. Como queda dicho, es cierto que los artículos pertinentes de naturaleza marítima que recoge el Código de Comercio panameño al referirse al derecho que sobre la carga tiene el fletante o el armador en virtud de la falta de pago del flete, exigen la previa intervención de la autoridad judicial para hacer efectivo el embargo, el secuestro o el depósito judicial de la carga o la mercancía de que se trate, sin estarle permitido al fletante o al capitán de la nave ejercer directamente esa especie de derecho de propiedad ("posesory lien"), derecho consagrado, sobre todo, por la legislación marítima anglosajona, en donde se le concede al transportista por mar el derecho a retener la carga para

garantizarle de esa manera el pago del flete que se le adeuda. No obstante, sabido es que en materia de derecho marítimo muchas de las prácticas y operaciones comúnmente observadas por quienes están involucrados en ella se van convirtiendo, poco a poco y gradualmente, en reglas que se incorporan, por imperio de la necesidad del tráfico marítimo, en normas de uso común y generalizado. En el presente caso, el Contrato de Fletamento celebrado incorporó, a través de la cláusula 16 de la póliza, la obligación del fletador de pagar el flete por adelantado, y la cláusula 8 se encargó de establecer, a favor del fletante no pagado, la capacidad de retener directamente la carga en virtud del incumplimiento de aquella obligación. Esas cláusulas las entiende la Sala incorporadas al contrato por las partes en ejercicio de la libertad de contratación y, por tratarse de condiciones que no se encuentran reñidas ni con la ley ni con las buenas costumbres, su concertación es perfectamente válida y viene a ser ley para las partes del contrato. Así las cosas, mal puede aseverarse que el capitán de la nave al negarse a descargar y a entregar los bienes al consignatario en Haití haya incurrido en incumplimiento del contrato o que por ese motivo su conducta pueda ser calificada de ilegal o conceptuada de responsable por culpa o negligencia.

La Sala es de opinión que los acuerdos que las partes incorporaron al contrato dentro de las cláusulas 8 y 16 de la Póliza de Fletamento relevaron, tal como lo estimó el Tribunal Marítimo, al fletante de ajustarse a lo dispuesto por los artículos 1172, 1300, 1312 y 1507 del Código de Comercio panameño. Tampoco entiende la Sala en qué términos pudiese ser respaldada la acusación vertida acerca de la violación del artículo 212 de la Constitución Nacional.

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Ya hemos visto que el Tribunal Marítimo decidió declarar no probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación propuesta en este juicio por la parte demandada, resolviendo en cambio declarar que lo que se produjo fue la Excepción de Contrato no Cumplido. No coincide la Sala con esa decisión. Existen en el expediente elementos suficientes que se encargan de demostrar que entre CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. y la M/N MARHAVA nunca surgió, ni contractual ni extracontractualmente, obligación alguna que sirviese de fundamento para respaldar el ejercicio de la acción que como demandante fue interpuesta por la parte actora contra la demandada en este proceso. No existe confusión posible en cuanto a que la Póliza de Fletamento se celebró entre HENRI CHAUMIN y/o ADAM INTERNATIONAL, en su condición de fletador, y M/N MARHAVA y/o Compañía Naviera Forli, S. A., como fletante. Lo que revela la copia del Conocimiento de Embarque N° 1 en donde se menciona a CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. como embarcador queda aclarado al examinar el contenido de la Póliza de Fletamento en donde consta, en verdad, cuáles eran las partes del contrato. La doctrina, la jurisprudencia de los tribunales y la práctica corriente en las operaciones de transporte marítimo son unánimes en reconocer que si al Conocimiento de Embarque se le incorpora por referencia algunos de los términos de la Póliza de Fletamento, esos términos y condiciones (los del CHARTER PARTY) surtirán efectos en contra de la persona a quien se le haya extendido el Conocimiento de Embarque o lo haya adquirido por cualquier forma y lo tenga en su poder. La evidencia de autos demuestra que el Conocimiento de Embarque en este caso se emitió para ser usado de acuerdo a la Póliza de Fletamento (Bill of Lading to be used with CHARTER-PARTIES). En este caso es muy claro que el Conocimiento de Embarque cumplió esa función de evidenciar y reflejar los términos que las partes pactaron en la Póliza de Fletamento a las cuales quedó por entero subordinado. No se debe perder de vista que aún cuando el Conocimiento de Embarque es una evidencia del contrato de transporte, el Conocimiento no es en sí mismo ese contrato, por lo que, está universalmente aceptado, que son los términos y condiciones recogidos en la Póliza de Fletamento las que en definitiva constituyen los derechos y obligaciones pactados en el contrato de transporte.

No probó CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. ser el titular o propietario del cemento que como carga se transportó hacia Haití utilizando a la M/N MARHAVA. Por el contrario lo que se infiere de las pruebas y las evidencias acopiadas en el expediente es que CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. efectivamente le vendió el cemento a ADAM INTERNATIONAL por intermedio del señor HENRI CHAUMIN, comprador que probablemente no le pagó el precio de la venta, circunstancia que de haber

ocurrido no le otorga a CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. ningún derecho de titularidad o propiedad sobre la carga, sobre todo cuando en el propio Conocimiento de Embarque se consigna que la mercancía tenía como consignatario a ADAM INTERNATIONAL lo cual, para los efectos de la titularidad de los bienes hace presumir que el dueño de los mismos era precisamente el consignatario.

Ninguna fuente contractual o extracontractual se ha podido esgrimir con propiedad para fundar el ejercicio de la "ACTIO IN REM" invocada por la parte actora en este juicio.

Contribuye, por otro lado, a poner de manifiesto la ausencia de elementos vinculantes desde el punto de vista contractual entre el demandante y el demandado el desenlace del juicio ventilado ante el Tribunal Marítimo cuyas partes fueron COMPAÑÍA NAVIERA FORLI, S. A. -vs- la Carga a Bordo de la M/N MARHAVA que culminó con una sentencia favorable a la parte demandante, a raíz de la falta de pago del flete en que se incurriera con motivo del mismo Contrato de Fletamento que ha sido examinado en la presente causa. Bien lo indica el Tribunal Marítimo cuando sostiene que hubiese sido incoherente e inconsistente que, después de haberse proferido aquella sentencia, ahora el tribunal, en este caso, reconociese como buenos los derechos alegados por CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. contra la M/N MARHAVA, cuando se está en presencia de la misma obligación cuya fuente fue el Contrato de Fletamento celebrado entre la M/N MARHAVA y HENRI CHAUMIN en representación de ADAM INTERNATIONAL. En todo caso si alguna obligación puede ser exigida por CEMENTOS DE HONDURAS, S. A. en relación con los hechos que se debaten en este juicio ésta no puede ubicarse sino en contra del comprador del cemento vendido y no contra el transportista de la carga.

Por los motivos apuntados la Sala estima que el excepcionante tenía razón al invocar como defensa la Excepción de Inexistencia de la Obligación, por lo que se debe entender probada la excepción en ese sentido interpuesta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia del 26 de mayo de 1995 proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá, en el sentido de declarar probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación invocada por la demandada; y la CONFIRMA en todo lo demás.

Las costas de segunda instancia se fijan en la suma de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00), más los gastos del proceso que se deben liquidar por la Secretaría del Tribunal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SEABORD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. AHORA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. (POR FUSIÓN). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

A este Despacho ingresó, en virtud de reparto el recurso de apelación interpuesto por SEABOARD MARINE LIMITED y SEA CARGO, S. A. contra la resolución dictada por el Tribunal Marítimo con fecha de 28 de marzo de 1996, dentro del proceso ordinario marítimo que le sigue SEABOARD MARINE LTD Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. AHORA ASSA COMPANÍA DE SEGUROS, S. A.

Encontrándose el presente negocio para resolver, se recibió en la Secretaría de la Sala escrito de desistimiento presentado por el licenciado PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA, en carácter de apoderado especial de COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A., (ahora) ASSA CÍA. DE SEGUROS, S. A. (por fusión). Dicho desistimiento, a su vez, fue aceptado por la doctora CELMA MONCADA, en calidad de apoderada judicial de SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A., tal como consta en el expediente (f. 292) y cuyo contenido nos permitimos transcribir:

> "Yo, PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ ARROCHA, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal N° 8-155-555, con oficinas profesionales en Vía Porras, Edificio Don Antonio, Planta Baja, ciudad de Panamá, donde recibo notificaciones personales, Apoderado Legal de la parte Demandante en el proceso enunciado en el marginal superior derecha, por este medio acudo respetuosamente ante vuestro Despacho con el propósito de desistir de la demanda interpuesta en el presente Proceso Ordinario, como en efecto hago, de forma total e irrevocable, a fin de poner fin al mismo, con el consentimiento de la parte Demandada, quien acepta mediante este documento, renunciar expresamente a cualquier reclamación en contra de los Demandantes, como consecuencia de la interposición de esta demanda en el presente proceso, inclusive en lo referente a las costas, gastos y perjuicios ocasionados.
>
> Asimismo mediante este escrito las partes se dan por notificadas y se allanan del Auto que se dice admitiendo el desistimiento, por lo que solicitan el archivo del expediente.
>
> Panamá, 15 de julio de 1996.
>
> POR LA PARTE DEMANDANTE:
>
> (fdo.)
> LIC. PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA
>
> POR LA PARTE DEMANDADA:
>
> (fdo.)
> DRA CELMA MONCADA".

Esta Sala advierte que la parte demandante puede desistir del proceso o de la pretensión, con requerimiento de la aceptación de la demandada después de que se haya entablado la litis, no obstante que, tanto el Código Procesal Civil, como la Ley Procesal Marítima advierten la improcedencia de dicho desistimiento después que se haya dictado sentencia de primer grado, conforme se aprecia de la lectura del artículo 1080 de la ley procesal ordinaria y del artículo 451 de la legislación procesal marítima. Una lectura del denominado impropiamente desistimiento pone de manifiesto que, mas que un desistimiento, el escrito refleja la existencia de una transacción judicial, entendida por ésta como el convenio mediante el cual las partes acuerdan evitar el inicio de un proceso o de ponerle fin a un litigio ya comenzado (artículo 1500 del Código Civil).

De otra suerte, constituye un principio de derecho procesal, derivado de la finalidad de obtener la verdad material del asunto ventilado en un proceso, que el tribunal le debe dar el trámite que corresponda a una petición o recurso, atendiendo de la naturaleza de la petición o recurso derivada, de manera inequívoca, del querer de las partes, con independencia de la denominación con que éstas hayan bautizado el recurso o la petición, principio de derecho procesal elevado a la categoría de norma de derecho positivo por el artículo 469 del Código Judicial, aplicable por disposición del artículo 30, a sensu contrario y 35 de la legislación procesal marítima.

Es evidente que la voluntad de las partes de ponerle fin al proceso por transacción, por cuanto que el escrito lo denominan solicitud de "desistimiento y acuerdo expreso", y el cuerpo del escrito refleja que la intención de las partes es el de ponerle fin al proceso en forma total e irrevocable, renunciando a cualquier reclamo contra la parte demandante y señalando, además, no haber

sufrido perjuicio alguno por razón o como consecuencia de la demanda interpuesta, todos éstos acuerdos aceptados por la parte demandada.

Por lo demás, consta en el expediente que ambas partes tienen facultades expresas para transigir y desistir.

La Sala debe reiterarle a las partes la conveniencia de utilizar un mayor rigor técnico en las actuaciones, solicitudes o recursos promovidos ante los órganos jurisdiccionales del Estado, deficiencia que le fuera señalada en otro proceso similar a las mismas partes, ASSA COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. y SEABORD MARINE LIMITED.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN entre las partes ASSA COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. y SEABORD MARINE LIMITED y SEA CARGO, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO NICOLÁS CORNEJO CASTILLO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 13 DE AGOSTO DE 1996 PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR LILIA MURILLO CONTRA ROSARIO MARCELA CEDEÑO, MARÍA ISABEL CEDEÑO, MARÍA ANTONIO GUILLÉN DE CEDEÑO, ELISA ANTONIA VALLARINO GUILLÉN Y CESAR AUGUSTO GUILLÉN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Nicolás Cornejo Castillo, apoderado judicial de la señora **LILIA MURILLO**, ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de agosto de 1996, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, promovido por la parte recurrente contra **ROSARIO MARCELA CEDEÑO**, **MARÍA ISABEL CEDEÑO**, **MARÍA GUILLÉN DE CEDEÑO**, **ELISA ANTONIA VALLARINO GUILLÉN y CESAR AUGUSTO GUILLÉN.**

El Primer Tribunal Superior de Justicia en la decisión impugnada mediante el presente recurso de hecho, negó el término para la formalización del recurso de casación anunciado por el apoderado de la señora MURILLO, contra la sentencia proferida por ese mismo Tribunal Superior el 29 de julio de 1996, la cual decidió en segunda instancia el citado proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

En vista que se estimó necesario complementar las copias que acompañaban el presente recurso de hecho, se solicitó el expediente contentivo del proceso, el cual fue remitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia. Consecuentemente, la Sala debe decidir si concede el presente recurso de hecho o, en otras palabras, si le concede al recurrente el término de diez días para que formalice el recurso de casación que anunciara.

Se ha podido constatar que el recurrente cumplió con los requisitos formales que exige el Código Judicial, por lo que debe determinarse si la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de julio de 1996, es recurrible en casación.

La negativa del Tribunal Superior de conceder el término para la formalización del recurso de casación, se fundamentó en que "... si bien está

enmarcada en el Ordinal 1° del Artículo 1149 del Código Judicial, la misma no cumple con el Artículo 1148 del Código Judicial, toda vez que la cuantía no excede de la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) prevista en el artículo antes citado."

Por su parte, el recurrente alega lo siguiente:

"SEGUNDO: La resolución objeto del recurso de casación se trata de una sentencia dictada en un proceso ordinario de Prescripción Adquisitiva en donde no era requisito indispensable la fijación de una cuantía dada la naturaleza del proceso;

TERCERO: El último párrafo del numeral 2 del artículo 1148 ha previsto la posibilidad de que el recurso de casación sea viable en los proceso que por su naturaleza no requieran de fijación de cuantía o que el promotor no le hubiese fijado cuantía, siempre y cuando "... Hubiere suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso, si excediere de la suma antes prevista." (Art. 1148).

CUARTO: En el proceso de marras consta que la adquirente aportó pruebas de toda clase a objeto de demostrar los hechos materiales ejercidos sobre la finca objeto de la controversia, como lo es el plano del inmueble edificado por ella, en donde aparece su nombre y copias de la diligencia pericial en donde se determinó que dicho inmueble fue edificado a sus expensas (fs. 102 y 103). Esto indica que la cuantía del proceso puede ser determinable.

QUINTO: En la sentencia de primer grado la juez a-quo (sic) externó lo siguiente: "... fojas 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 al 74 inclusive demuestra que la señora MURILLO construyó una casa sobre ese lote la cual consta las facturas sobre materiales comprados para esa construcción ..." (F. 127).

SEXTO: Si bien el precitado artículo no de la fórmula para determinar la cuantía es el tribunal quien tiene el deber de fallar ante el silencio de la ley (art. 2 del C. C.)" (Fojas 1 y 2).

El numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial expresa lo siguiente:

"ARTÍCULO 1148. Para que el recurso de casación pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes circunstancias:
...
2. Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de cinco mil balboas (B/.5,000.00), o que verse sobre intereses nacionales, municipales o de instituciones autónomas o semiautónomas, o sobre hechos relativos al estado civil de las personas o que haya sido dictada en procesos de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio, o en proceso de oposición a título de dominio, sin atenerse en estos casos a la cuantía.

En caso de que no se haya fijado la cuantía en la demanda pero hubiere suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso, si excediere de la suma antes prevista."

El estudio de la demanda que dio inicio al presente proceso ordinario de prescripción adquisitiva, consultable a fojas 2 y 3 del expediente principal, pone de manifiesto que la parte demandante, ahora recurrente en casación, no fijó la cuantía del negocio. Aún cuando alegue que "aportó pruebas de toda clase", la Sala no ha encontrado dentro del expediente suficientes elementos que permitan determinarla, como requiere la disposición transcrita.

Por otra parte y a pesar de lo señalado por el apoderado judicial de la recurrente, es preciso señalar que tampoco se trata de alguno de los supuestos

que, como excepciones, contiene la citada norma legal para los cuales no se exige cuantía. Consecuentemente, el presente recurso debe ser rechazado, en virtud de que la resolución que se pretende impugnar en casación no cumple con el requisito que exige el artículo 1148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el apoderado judicial de la señora LILIA MURILLO, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de agosto de 1996, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva instaurado por la parte recurrente contra ROSARIO MARCELA CEDEÑO y OTROS.

Las costas se fijan en setenta y cinco (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

M/N SANTA BÁRBARA APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE DIQUES CANNAVO, C. A. LE SIGUE A M/N SANTA BÁRBARA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ante la Sala Primera de la Corte, en su condición de Tribunal de Instancia, han acudido los apoderados de la parte demandada en sustentación del recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la sentencia del 14 de noviembre de 1995 dictada por el Juez Marítimo de Panamá, quien decidió en primer grado el proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado propuesto por DIQUES CANNAVO, C. A. contra la M/N SANTA BÁRBARA.

La sentencia proferida por el Tribunal Marítimo donde se desata la controversia que le fuera sometida a su jurisdicción se pronunció en los siguientes términos:

> "Con relación al punto medular de la controversia, en el sentido, de si los servicios provenientes de reparar y equipar buques, según la Ley Sustantiva aplicable, el Código de Comercio de Honduras, se constituye como un Crédito Marítimo Privilegiado o no, el Tribunal arribó a la conclusión de que según el Artículo 739 de dicha excerta sí existe Crédito Marítimo Privilegiado a favor de DIQUES CANNAVO, S. A. Por tanto, resuelto el punto controvertido central que es de puro derecho, SE CONDENA a la M/N "SANTA BÁRBARA" a pagarle a la demandante DIQUES CANNAVO, C. A. la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES CON 00/100 (US$.45,000.00) más los intereses y gastos del proceso, igualmente se imponen las costas que por el Trabajo en Derecho que se fijan en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES (US$4,500.00)."

El estudio de los autos de este proceso le revelan a la Sala que la M/N SANTA BÁRBARA, buque con matrícula hondureña, fue objeto de las reparaciones que, en Cumaná, Estado de Sucre, Venezuela, le prestara la Compañía de esta nacionalidad DIQUES CANNAVO, C. A. Constancias suficientes encuéntranse en el expediente que acreditan los servicios de reparación prestados a la nave, así como aquella parte insoluta del precio del contrato que la beneficiaria de los servicios prestados tiene pendiente de pago. Los documentos que corren de fojas

9 a 17 y de fojas 144 a 180 del expediente confirman a satisfacción esos extremos. Cabe resaltar, como punto relevante, que con dichas pruebas se ha demostrado que la parte demandada expidió a favor de la parte actora un cheque por valor de $45,000.00 dólares americanos con el entendido propósito de cubrir el pago de las reparaciones efectuadas en la M/N SANTA BÁRBARA, documento que con posterioridad a su emisión no pudo ser cobrado, en virtud de la orden de suspensión de pago (stop payment) que el banco girado recibió en ese sentido de la parte demandada en este juicio. La documentación aportada por la parte demandante comprueba a plenitud los hechos señalados.

Demandante y demandada convinieron en que el Tribunal Marítimo de Panamá conociera de la causa, sobre la base de que se dirimiese el pleito conforme lo dispone la ley sustantiva de la República de Honduras -país del registro de la nave-, particularmente en este caso, por lo dispuesto en el Código de Comercio de dicho país.

Ya hemos tenido oportunidad de apreciar que el Tribunal Marítimo consideró que, de acuerdo a la legislación aplicable, la obligación contraída y existente entre las partes, cuyo cumplimiento se encuentra pendiente de pago, constituye un crédito marítimo privilegiado; decisión esta que es la cuestionada mediante el recurso de apelación interpuesto. Correspóndele a la Sala examinar las objeciones del apelante antes de pronunciarse de manera concluyente en esta causa.

Los argumentos de que se vale y utiliza la demandada destacan que, según lo dispone la legislación hondureña -concretamente los artículos 739, numeral 8, y 742 del Código de Comercio de ese país- la obligación surgida entre las partes no entra en la categoría de un crédito marítimo privilegiado y, en consecuencia, su cumplimiento no puede ser demandado o exigido por medio de los trámites especiales del proceso que para la ejecución de esa clase de créditos ha empleado la parte demandante, siendo el subsecuente fallo dictado por el Tribunal Marítimo de la República de Panamá, en desfavor de la M/N SANTA BÁRBARA, inválido. Dicho en otros términos, por carecer la obligación demandada de la naturaleza especial de un crédito marítimo privilegiado no cabía demandar en el ejercicio de una acción in rem a la M/N SANTA BÁRBARA, pues de acuerdo a la ley sustantiva hondureña la deuda u obligación contraída es un crédito ordinario incapaz de servir de soporte a una acción in rem contra la nave, como equivocadamente ha sido admitido y aceptado por el Tribunal Marítimo de Panamá, incurriendo con ello en una decisión desacertada.

El artículo 739 del Código de Comercio de Honduras establece la prelación y el orden con que los diferentes acreedores del buque tendrán derecho a ser pagados una vez que la nave sea sometida a la venta judicial. La disposición ubica el crédito proveniente de la reparación del buque en el octavo rango en relación con otros créditos privilegiados que lo anteceden. De manera expresa dice lo siguiente:

> "`Artículo 739: En toda venta judicial de un buque para pago de acreedores tendrán prelación por el orden en que se numeren:
> ...
> 8. La parte del precio que no hubiere sido satisfecho al último vendedor, los créditos pendientes de pagos por materiales y mano de obra de la construcción del buque, cuando no hubieren alegado, y los provenientes de reparar y equipar el buque y de proveerle de víveres y combustibles en el último viaje.
>
> Para gozar de esta preferencia, los créditos contenidos en el presente número deberán constar por contratos inscrito en el Registro Mercantil o si fuere de los contraídos para el buque, estando en viaje y no habiendo regresado al puerto de su matrícula, estando con la autorización requerida para tales casos, y anotados en la certificación de la inscripción del mismo buque. "
>
> El artículo 742 del aquel cuerpo legal es del tenor siguiente:
>
> "`Artículo 742.- Si encontrándose en viaje necesitare el capitán

> contraer alguna o algunas de las obligaciones expresadas en los numerales 8° y 9° del artículo 739, acudirá al Juez o Tribunal Civil si fuese en territorio hondureño, y si no, al Cónsul de Honduras, caso de haberlo, y en su defecto, al Juez, tribunal o autoridad local correspondiente y los documentos que acrediten la obligación contraída.
>
> El Juez o tribunal, el Cónsul o la autoridad local en su caso, en vista del resultado del expediente instruido, harán en la certificación la anotación provisional de su resultado, para que se formalice en el Registro cuando el buque llegue al puerto de su matrícula o para ser admitida como legal y preferente en el caso de venta antes de su regreso, por haberse vendido el buque a causa de la declaración de incapacidad para navegar.
>
> La omisión de esta formalidad impondrá al capitán la responsabilidad personal de los créditos perjudicados por su causa. "

Apoyándose en las anteriores disposiciones legales, ¿qué aduce el recurrente? Dejemos que sea él quien se encargue de decírnoslo:

> "Como decíamos, la ley hondureña exige ciertos requisitos para que el crédito goce de preferencia, siendo uno de estos requisitos, que el crédito provenga de la reparación, en el último viaje.
>
> El Juez al estudiar este requisito desestimó esta excepción, siendo evidente que la reparación no fue realizada en el último viaje. Así, según la misma demandante, Hecho Quinto de la Demanda, el buque zarpó de los Astilleros el 22 de mayo de 1993, y según los documentos presentados por la defensa, zarpó de las Antillas Holandesas el 26 de octubre de 1993, atracando en el Puerto de Coco Solo el 1 de noviembre de 1993. En virtud de esta excepción, podemos afirmar, que al no haberse realizado la reparación de la Motonave Santa Bárbara en el última (sic) viaje, (entendiendo por tal la reparación que pone el buque en condiciones de navegabilidad inmediatamente anterior al zarpe) le resta valor de privilegio al supuesto crédito por la reparación de dicha nave en Cumaná, Estado de Sucre, Venezuela en el mes de mayo de 1993.
>
> La ley hondureña (Art. 739 Numeral 8) exige además que el crédito por la reparación, estando el viaje debe estar visado o autorizado por autoridad competente, la cual según el Art. 742 es el Cónsul o en su defecto el Juez o tribunal del lugar donde se encuentre atracado el buque. No consta en el proceso esta autorización, y no constando, no goza de privilegio el crédito presentado por Diques Cannavo." (Fs. 236, 237).

En conclusión, por no haberse cumplido ni el primer requisito (reparación de la M/N en su último viaje) ni el segundo (inscripción de la obligación en el Registro Mercantil), no se está en presencia de un crédito maritímo privilegiado de acuerdo a lo establecido por la ley sustantiva aplicable.

No porque se trate de lo más importante para desentrañar esta controversia, sino para ajustarnos al orden en que vienen señaladas las objeciones contra la sentencia del juez marítimo, la Sala considerará en primer lugar el asunto que atañe a lo del último viaje de la nave. Dentro de este contexto, el viaje, la aventura o la expedición marítima, como también es llamada la travesía que emprenda una nave en cumplimiento de la operaciones propias del tráfico marítimo, es un concepto cuyo significado y definición siempre estará sujeto a las particularidades que ofrezca cada caso por separado. Sobre este aspecto de la controversia en la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo, el juez hizo algunas consideraciones muy atendibles. El juez llamó la atención en el sentido de que no bastaba probar que la M/N SANTA BÁRBARA antes de arribar al puerto de Coco Solo en Panamá, había zarpado del Puerto de San Martín en las Antillas Holandesas, para asegurar por ese hecho que tal tránsito correspondía efectivamente al último viaje realizado por la nave. Advirtió el juez marítimo

que en materia de viaje, para establecer el significado que pueda asignársele a tal noción, se requiere precisar si la nave involucrada es un buque de línea, de conferencia, o si, por el contrario, se trata de un "trampero" (**tramp ship**), o bien si la incógnita sólo es despejable a la luz de los términos de la póliza de fletamento, ya sea que ésta haya sido pactada por tiempo (time charter party) o por viaje (voyage charter party). Para tener la certeza y poder hablar con propiedad de cuándo se está en presencia del último viaje de la nave es indispensable conocer los términos y las condiciones del contrato de transporte marítimo que se haya celebrado entre el fletante y el fletador, independientemente de cuál haya sido la modalidad empleada. Eso quiere decir que para determinar con exactitud cuál ha sido el último viaje de la nave tendrán que ser conocidas las condiciones y la naturaleza del contrato de transporte celebrado y al que se encuentran sometidos la nave y su propietario.

El apelante empleó en defensa de sus intereses una excepción basada en el supuesto hecho de que la M/N SANTA BÁRBARA no fue reparada antes de su último viaje, buscando demostrar en esa forma la ausencia de uno de los requisitos que a su juicio la ley hondureña señala como condición para que el crédito pueda ser calificado como privilegiado; en este caso el surgido de la reparación de la nave. La parte demandada (excepcionante) se limitó a demostrar cuál fue el itinerario de la nave luego de haber zarpado del puerto venezolano en donde se le hicieran las reparaciones, e hizo énfasis en que el "buque zarpó de los astilleros el 22 de mayo de 1993, y según documentos presentados por la defensa, zarpó de las Antillas Holandesas el 26 de noviembre de 1993, atracando en el Puerto de Coco Solo el 1 de noviembre de 1993".

Como es sabido, incumbe al que propone la excepción demostrar los hechos y los supuestos en que fundamenta la defensa con que pretende enervar las consecuencias de una acción procesal esgrimida en su contra. Si el excepcionante no logra incorporar al juicio los datos procesales que acrediten la verdad de sus aserciones la excepción que se haya empleado carecerá de eficacia. Concerníale a la parte demandada probar de manera indubitable que la nave no fue reparada inmediatamente antes de su último viaje, o sea, que el último viaje (entendiendo por éste no el simple itinerario o el arribo del buque entre un puerto y otro, sino el recorrido completo correspondiente a la aventura o expedición marítima en que la nave estaba involucrada) no se inició en el puerto venezolano, sino en el Puerto de San Martín en las Antillas Holandesas. En opinión de la Sala cuando el Tribunal Marítimo procedió a desestimar la excepción interpuesta por la parte demandada en relación con el tema del último viaje lo hizo ajustándose a derecho, pues hicieron falta los elementos probatorios capaces de llevar al ánimo del juzgador el convencimiento de que el último viaje de la M/N SANTA BÁRBARA no se inició en el puerto venezolano en el cual se le efectuaron las reparaciones cuyo pago se reclama en este juicio. Por esas razones, la Sala está de acuerdo con el criterio del Tribunal Marítimo cuando denegó la excepción y, por tanto, también debe rechazarla.

En cuanto al segundo aspecto del cual se sirve el apelante para sustentar las tesis de su defensa técnica en sus intenciones de descalificar el crédito de la demandante, que ha sido reconocido por la sentencia de primer grado como un crédito marítimo privilegiado, valgan los siguientes comentarios. Tanto la doctrina como las legislaciones que contemporáneamente se ocupan de esta materia le confieren a los acreedores marítimos del buque una posición privilegiada y preferente frente a cualquier otra clase de acreedores, a la hora de hacer valer los créditos que a su favor pudiesen ostentar en relación con las obligaciones y derechos que surjan respecto a una nave determinada. Los créditos marítimos privilegiados constituyen la matriz o el origen de un derecho de persecución de la nave, destinado a que ésta responda con preferencia por las obligaciones vinculadas directamente al propio medio de transporte que sirve al tráfico marítimo. Las legislaciones marítimas permiten el ejercicio de la acción in rem contra la nave, como la que se ha ejercido en este caso ante el Tribunal Marítimo, produciendo una afectación real del bien. Esa clase de créditos marítimos privilegiados se configuran con el propósito de aumentar las garantías de los acreedores que arriesgan su patrimonio en beneficio de un bien que, por su propia naturaleza, no es de sencilla ubicación en un lugar determinado. Los créditos marítimos privilegiados pueden nacer antes del viaje del buque (créditos a favor de la hacienda pública, por ejemplo), durante el viaje del buque (como

son los que nacen de los sueldos del capitán y la tripulación), o después de efectuado el viaje (costas judiciales, pagos a depositarios, etc.), sin olvidarnos de aquel que pueda estar representado por una hipoteca naval cuyo surgimiento es por completo independiente de los tres momentos que hemos dejado señalados.

Pues bien, sostiene el apelante que, de acuerdo con el artículo 739, numeral 8 del Código de Comercio de Honduras, para que se puedan considerar las deudas adquiridas por la reparación de la nave como un crédito marítimo privilegiado, es necesario que se haya dado cumplimiento al requisito de inscribir ese crédito en el Registro Mercantil de ese país y, en caso de que las reparaciones se hubiesen realizado encontrándose la nave en el extranjero, acreditándose ante un juez o ante una autoridad consular de Honduras, según lo dispone el artículo 742 del cuerpo legal al que se ha hecho referencia. Como el crédito reclamado en el caso subjúdice no fue inscrito en el Registro Mercantil de Honduras y tampoco ante las autoridades mencionadas en el artículo 742 ibídem, el apelante alega que, faltando tales requisitos, no existe ningún crédito marítimo privilegiado que se pueda demandar contra la M/N SANTA BÁRBARA y, en vez de ello, simplemente la que se tiene contraída por el deudor, es una obligación ordinaria que, como tal, sólo se puede reclamar ante los tribunales ordinarios hondureños.

Es opinión de la Sala que para dirimir este conflicto no es relevante ni trascendente tomar en cuenta el análisis y los puntos de vista vertidos por los profesionales del derecho de nacionalidad hondureña que, por iniciativa de la parte actora, presentaron un dictamen asegurando que el llamado Registro Mercantil a que se refiere el artículo 742 del Código de Comercio de ese país, es inoperante y ha caído en desuso. Allí no reside lo medular del problema. Bien mirado, lo que en verdad debe dirimirse es la cuestión de determinar si la obligación contraída por las partes, por su propia naturaleza y por su esencia, pertenece o no a las calificadas como un crédito marítimo privilegiado sin contradecir lo dispuesto por la legislación hondureña. Sin necesidad de salirse de la órbita del artículo 739 del Código de Comercio de Honduras, démonos cuenta que dicha norma se encarga de enumerar cuáles son aquellas obligaciones que en ese país alcanzan el rango y la categoría de preferentes respecto al buque, incluyendo entre ellas las que surgen como producto de la reparación de la nave. Ahora bien, es cierto que en este último caso se establece como requisito el de la inscripción del crédito en el Registro Mercantil. Querrá decir esto que, si un crédito no se encuentra inscrito, perdería el mismo su condición de crédito marítimo privilegiado? La Sala entiende que eso va a depender de ciertas circunstancias. Volvamos a lo que nos dice la norma en su encabezado: "En toda venta judicial de un buque para pago de acreedores tendrán prelación por el orden en que se enumeren ...".

No es el que se decide un juicio o un proceso especial de concurso de acreedores marítimos privilegiados. Aquí, ni hay concurso de acreedores, ni está de por medio la venta de una nave. Aquí de lo que se trata es del ejercicio de una acción in rem individualizada que nace de un crédito marítimo a raíz de una obligación específica contraída por la M/N SANTA BÁRBARA. Es explicable que en caso de concurso de acreedores o de la venta judicial de la nave cuando se pretenda hacer valer un crédito privilegiado, surgido por supuestas reparaciones realizadas en el extranjero, se le exija al acreedor alguna demostración que produzca la seguridad de que no se está ante una obligación ficticia que se quiere hacer prevalecer en perjuicio de los auténticos acreedores de la nave sometida al remate o a la subasta pública para su venta. Es decir, es comprensible que de alguna manera se evite esa posible clase de fraudes. Desde ese punto de vista la Sala entiende que la segunda parte del numeral 8 del artículo 739 del Código de Comercio de Honduras tiene el propósito de exigir como garantía que, si se produce la venta de una nave y concurren los acreedores a hacer efectivo sus créditos, el de la reparación del buque sólo podrá ser tomado en cuenta si el mismo se encuentra debidamente inscrito. O sea, el requisito de la inscripción cumple fines publicitarios cuyo propósito legal es el de convertir la obligación en una claramente oponible a terceros; sobre todo, oponible a los restantes acreedores marítimos privilegiados que participan en la distribución de los pagos que deban hacerse con el producto de la venta judicial de la nave.

No parece tener mucho sentido que se acepte el criterio del apelante cuando se esfuerza por hacernos creer que la naturaleza del crédito marítimo privilegiado derivado de los servicios que efectivamente le fueron prestados al deudor mediante la reparación de la M/N en los astilleros de la parte demandante debe depender, en última instancia, de que el capitán o el dueño de la nave hayan actuado con la diligencia necesaria y hayan procedido con el apremio que se requiere para llevar a acabo la inscripción del crédito en el Registro Mercantil de Honduras, de tal suerte que, como ello no llegó a ocurrir, desapareció por entero el carácter de privilegiado que en contra del bien beneficiado con los servicios del acreedor pudo haber alcanzado el crédito que ante la jurisdicción marítima panameña ha sido demandado. No comparte la Sala esa postura ya que equivaldría, por una parte, a premiar la conducta omisa del deudor que, de acuerdo con la ley hondureña, es el obligado a registrar esta clase de compromisos en ese país (art. 742 ibídem), si es que realmente el tal registro en la práctica funciona. Descalificar un crédito marítimo, que lo sea por su propia naturaleza, en los términos pretendidos por la parte demandada correspondería a tirar literalmente por la borda principios generales de derecho marítimo universalmente aceptados, sobre todo entre las naciones dedicadas con intensidad a este tipo de tráfico (no se olvide que Honduras es una de ellas), permitiéndose de paso que el rango y la categoría de tales créditos puedan quedar sujetos a la mera voluntariedad con que se conduzca, luego de contraída la obligación, el deudor de la misma.

La sentencia del Tribunal Marítimo se apoya además en la aceptación expresa y voluntaria que las partes de este juicio asumieron en relación a su jurisdicción y competencia y, a partir de ese sometimiento de las partes, el Tribunal estimó acertadamente que para juzgar esta causa resultaba del todo legítimo el ejercicio de la acción in rem como esta se encuentra incorporada en nuestro Código de Procedimiento Marítimo contra la M/N SANTA BÁRBARA y surgida en virtud de un típico crédito marítimo privilegiado.

No considera la Sala pertinentes las alusiones que el apelante ha hecho cuando invoca disposiciones del derecho sustantivo de Venezuela. Desde un principio se aceptó y fue decidido que la ley sustantiva aplicable era la hondureña, por lo tanto no se detendrá la Sala en la consideración de esa parte de los alegatos.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre e la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de primera instancia de fecha 14 de noviembre de 1995, dictada por el Juez Marítimo de Panamá, dentro del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que DIQUES CANNAVO, C. A. le sigue a la M/N SANTA BÁRBARA.

Las costas de segunda instancia se fijan en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.2,250.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE.
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NEDLLOYD LIJNEN B. V. ROTTERDAM APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 1995, DICTADO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE PARVANI INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso marítimo ordinario promovido por PARVANI INTERNACIONAL,

S. A., sociedad domiciliada en la República de Panamá, y NEDLLOYD LIJNEN, B. V., sociedad domiciliada en el Reino de Holanda, se ha promovido excepción de prescripción que, conforme al ordenamiento procesal marítimo, debe ser objeto de previo y especial pronunciamiento. La excepción de prescripción fue resuelta en sentido negativo, señalando el Tribunal Marítimo que la acción no había prescrito. Contra la decisión del Tribunal Marítimo, la parte afectada, NEDLLOYD LIJNEN, B. V. interpuso y sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación, cuya decisión le corresponde a esta Sala, a lo que se procede.

Como presupuesto de la actuación de la Sala, ésta debe determinar, en primer término, si es competente para conocer del recurso y, en segundo término, las limitaciones que tiene como tribunal de apelación, a la luz de lo que señala el artículo 483 del ordenamiento procesal marítimo.

Este tema ya ha sido abordado en reiteradas ocasiones, en el sentido de que la Sala sólo puede pronunciarse sobre aspectos netamente jurídicos de la apelación y no puede enjuiciar los elementos fácticos que tuvo en cuenta el Tribunal Marítimo.

A este respecto, se pronunció la Sala en sentencia de 30 de julio de 1996, en los términos que se permite transcribir:

"Debe la Sala, como cuestión previa, determinar la competencia y sus límites, para conocer y decidir el recurso interpuesto. Por ello, debe analizar la naturaleza de la competencia que, para conocer del recurso de apelación contra las sentencias del Tribunal Marítimo, le confiere el ordenamiento jurídico procesal en la materia. Lo primero que debe reiterar la Sala, es que la competencia para conocer el recurso de apelación, viene limitada o restringida al tipo de ejercicio de la función jurisdiccional, le adscribe el ordenamiento". Es decir, la jurisdicción marítima, en caso de apelaciones contra las sentencias, viene limitada o restringida, en cuanto a la decisión, a los aspectos meramente jurídicos de la decisión apelada, y carece, por lo tanto, de competencia para pronunciarse y analizar los aspectos probatorios que han sido tomados en cuenta por el Tribunal Marítimo.

En dos ocasiones, al menos, ha tenido oportunidad la Sala de pronunciarse sobre estos aspectos, mediante sentencia de 24 de febrero de 1994, y mediante sentencia de 28 de septiembre de 1995. En la primera de ellas, se expresó en los siguientes términos.

"...

> Cuando la ley procedimental marítima señala que en esta instancia solamente pueden discutirse asuntos de derecho, significa que le está vedado al sentenciador de segunda instancia entrar a realizar cualquier análisis del elemento probatorio obrante en autos, ya se trate de apreciación o de valoración. Es evidente que la apelación en materia marítima es mucho más restrictiva que la casación porque no contempla los errores probatorios, lo cual a todas luces resulta lógico debido a esa percepción directa que tiene el juez marítimo con la prueba que le permite formarse un mejor concepto sobre el poder demostrativo de la misma ...".

La segunda de las sentencias citadas expresó, en lo pertinente, lo que a continuación se transcribe:

"...

> 1. La apelación, en materia marítima, es controladora no renovadora, todo ello, como consecuencia del mandato claro y expreso contenido en la ley procedimental marítima en el sentido de que el proceso marítimo ha de ser sustanciado y resuelto fundamentalmente en la primera instancia, lo cual guarda una estrecha relación con el principio de la oralidad. Dicho principio descansa en la concentración y en la inmediación.
>
> 2. Dentro de los principios que informan el proceso marítimo se encuentra el de que "Los juicios marítimos serán de única instancia, pero, admitirán el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente".

> Al estudiar las normas que contemplan la apelación (Arts. 481 hasta el art. 492) nos encontramos ante una excerta legal que es la piedra angular en el ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil. Se trata del artículo 483, cuya letra es así:
>
> "ARTÍCULO 483: En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia".
>
> La norma legal en comento es diáfana y no deja dudas al respecto: en la apelación marítima, como regla general, no se contemplan los errores probatorios (de contratación o de valoración), dada la percepción directa que tiene el juzgador marítimo con la prueba.
>
> 3. El principio genérico al que hemos hecho alusión no es óbice para esta Sala, puesto que, si al momento de revisar las causas marítimas observa que se presentan errores en la labor de constatación de los hechos realizada por el tribunal a-quo, en donde los mismos (errores) tienen como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la norma de derecho establezca en beneficio de alguna de las partes, a dicho estudio se adentrará. La labor que realiza la Sala en estos casos marítimos es individual".
>
> (Registro Judicial. Septiembre de 1995. Págs. 172-173)."

Como ha quedado dicho, la sentencia (sic) del Tribunal Marítimo ha sido apelada y dicha apelación ha sido objeto de oposición por la parte contraria. Resultará oportuno, por lo tanto, si bien en forma somera, exponer las principales argumentaciones de las partes, a lo que se procede.

Al sustentar la apelación, los apoderados de NEDLLOYD LIJNEN, B. V., manifestaron que la excepción de prescripción presentada a favor de su representada, es procedente, debido a que la controversia surge de un embarque de mercancía que PARVANI INTERNACIONAL, S. A., utilizando su nombre usual "BON DON" suscribió un contrato de transporte marítimo con la naviera NEDLLOYD, a través de sus agentes navieros locales PACIFIC DODWELL, S. A., para transportar la mercancía desde Zona Libre de Colón, Panamá hasta Santos, Brasil, la cual fue descargada en este país el 28 de abril de 1993.

Sostiene el recurrente que el transporte de dicha carga fue respaldado por el conocimiento de embarque (bill of lading, visible a foja 17), distinguido con el N° NLBUCTBA-9186, que cubre dos contenedores: KNLU-419909-9, sello 21544780 y ICSU-138677-0, sello 2514761, el cual fuere emitido el 12 de abril de 1993.

Acepta el recurrente que la empresa PARVANI INTERNACIONAL, S. A. solicitó a la naviera NEYLLOYD, por medio de sus agentes locales, PACIFIC DODWELL, S. A., que la referida mercancía no fuera entregada en Brasil, sino que se procediera a devolverla a Cristóbal, Panamá. A pesar de ello, su representada hizo entrega de la mercancía al consignatario, el día 4 de mayo de 1993, sin que fuere presentado el conocimiento de embarque, sino en base a una fianza o Carta de Garantía emitida por la empresa brasilera ASSETEC "a nombre o y a solicitud del consignatario", y que la empresa PARVANI INTERNACIONAL, S. A., tuvo conocimiento de dicha entrega, a partir del 25 de mayo de 1993.

Estima el apelante que el término legal para el ejercicio de la acción que reclama responsabilidad con respecto a las mercancías transportadas por vía marítima es de un (1) año, a partir de la entrega de la mercancía o de la fecha en que la misma debía ser entregada.

Por otra parte, manifiesta que la acción legal fue ejercida por PARVANI INTERNACIONAL, S. A. ante el Tribunal Marítimo el seis (6) de junio de 1994, excediéndose el término de prescripción aplicable a esta controversia. En cuanto al derecho aplicable, según criterio del apelante, rige lo pactado por las partes en el conocimiento de embarque, es decir, la Ley de Holanda, mejor conocida como Reglas de la Haya-Visby.

La parte apremiada presenta su oposición a la apelación debido a que su representada conserva el original del conocimiento de embarque de la mercancía transportada por la demandada, la cual no era posible, de manera legal alguna, ser entregada sin este documento. Adicional a ello, reitera la orden dada al transportista de devolver la mercancía a Panamá.

Mantiene en esta oposición que su representada intercambio una serie de correspondencia con la compañía PACIFIC DODWELL, S. A. a objeto de conocer el paradero de la mercancía. Con respecto a ello, los agentes de la naviera NEDLLOYD remitieron una carta fechada el 1° de junio de 1993 a la empresa PARVANI INTERNACIONAL, S. A., en la cual manifestaban que habían solicitado al puerto de descarga, Santos, un reporte de la situación y ubicación de la mercancía, amparado con el conocimiento de embarque ya mencionado.

Como consecuencia de lo anterior, considera la parte opositora que resulta contradictorio que la apelante manifieste que la mercancía fue entregada el 4 de mayo de 1993, si a la fecha del 1° de junio no se sabía aún sobre el destino de la misma. Más adelante señala que el 8 de junio de 1993, su representada PARVANI INTERNACIONAL, S. A. recibe carta de PACIFIC DODWELL, en donde no hace alusión sobre el paradero de la mercancía, sino que se refiere a un "supuesto acuerdo", en la entrega de la mercancía realizada sin que mediasen los respectivos originales del conocimiento de embarque. El acuerdo en mención, consultable de fojas 15 a 18 del expediente, no indica que se haya realizado algún tipo de entrega, ya que no se menciona fecha, ni lugar donde se dio la supuesta entrega de la mercancía, así como tampoco quién la recibiera.

Como consecuencia de lo anterior, el oposicionista presentó demanda ante el Tribunal Marítimo de Panamá, el día 6 de junio de 1994.

En cuanto a la ley aplicable a la prescripción, señala el oposicionista que existen dos criterios para determinar la ley sustantiva aplicable al caso y, por ende, lo relativo a la prescripción. Se refiere primeramente al artículo 557 en sus ordinales 16 y 10 de Código de Procedimiento Marítimo, en cuanto a la Ley de embarque de la mercancía o la legislación del país que las partes hayan acordado en el contrato. Más adelante expresa que las reglas pactadas entre las partes fue la Ley de Holanda, conocida como "Las Reglas de la Haya Visby", la cual en el artículo 1, ordinal 2 establece que la prescripción para el ejercicio de la acción contra el portador o el buque, es de un año, a partir de la fecha de entrega de la mercancía o de la fecha en que deberían ser entregadas.

Si bien la norma se refiere a fecha cierta y determinada de cuándo ocurrió la entrega de la mercancía o de cuándo debió ser entregada, considera el apoderado judicial de la parte demandante que esta fecha debe ser de conocimiento de ambas partes, lo que no ocurrió en el presente caso, debido que no fue sino en fecha posterior a la presentación de la demanda ante el Tribunal Marítimo de Panamá que el agente local PACIFIC DODWELL mediante nota de fecha 8 de junio de 1993, le notificó la forma en que se realizó la referida entrega. Ello significa que no fue hasta esta fecha en que PARVANI INTERNACIONAL, S. A. tuvo conocimiento de que la mercancía no le sería devuelta, pese haber dado instrucciones oportunamente con relación a la devolución de las mismas.

Por tanto, considera que no es procedente la acción de prescripción de la acción formulada por el apelante, ya que no es hasta el 8 de junio de 1993 que su representada tuvo conocimiento sobre el destino de la mercancía y la acción por él instaurada ante el Tribunal Marítimo, es de fecha 6 de junio de 1993. Por otra parte, no puede contarse como fecha de entrega de la mercancía, es decir, 4 de mayo de 1993, para que opere la prescripción, cuando en el proceso no se probó la misma, ya que el propio demandante admitió que hasta el 1° de junio de 1993 se estaba investigando sobre el paradero de la referida mercancía. Aunado a ello, manifiesta el oposicionista que existe una contradicción entre la fecha de entrega de la mercancía, es decir, 4 de mayo de 1993, y que fuera entregada en base a un "acuerdo" de fecha 12 de mayo de 1993, cuya fecha es posterior a la mencionada entrega.

De lo expuesto anteriormente, se desprenden varios puntos que deben ser objeto de consideración por parte de la Sala.

En primer término, el aspecto relacionado con la legislación aplicable. Resulta evidente que, de conformidad con el conocimiento de embarque, la legislación aplicable era la legislación de Holanda. No obstante, en el acto de audiencia, ambas partes aceptaron que la causa se ventilase conforme a la legislación panameña. Así, vemos, manifestaciones en ese sentido, por ambas partes, a foja 550 y 557. No obstante, aprecia la Sala, que uno de los aspectos básicos de la apelación, consiste precisamente en la aplicación de la legislación holandesa.

La Sala debe resaltar que constituye un principio general de Derecho, que vincula a los Tribunales, el que no permite que las partes en el proceso se comporten de manera contraria a conductas procesales previas, concluyentes, e incompatibles con esta actuación. Dicho principio, proviene, como sabemos, del Derecho Intermedio, y ha sido también aceptado por la doctrina anglosajona, bajo la figura del "stoppel", que, si bien no es exactamente lo mismo, la idea matriz que la preside es ésta. El profesor LUIS DIEZ-PICAZO, en una monografía clásica sobre el particular, se refiere a la doctrina del "stoppel" como "aquella doctrina según la cual, dentro de un proceso, una persona está impedida para hacer una alegación -aunque sea cierta que esté en contradicción con el sentido objetivo de su anterior declaración o de su anterior conducta". Con respecto al principio "adversus factum suum quis venire non potest", se expresa en los siguientes términos:

> "la regla, que normalmente se expresa diciendo que "nadie puede venir contra sus propios actos" ha de interpretarse en el sentido de que toda pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa, por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esta pretensión, debe ser desestimada".
>
> Señala el autor citado como presupuestos de su aplicación:
>
> "1° Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz.
>
> 2° Que posteriormente esta misma persona intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una determinada pretensión.
>
> 3° Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
>
> 4° Que en ambos momentos, conducta anterior y pretensión posterior, exista una perfecta identidad de sujetos. (Véase, por el autor citado, "la Doctrina de los propios actos", Editorial Bosch, 1963).

Si bien en forma más esquemática, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, se ha referido al principio, indicando que "es aberrante" que una persona "venga ahora contra sus propios actos". (Véase Dulio Arroyo, "20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia", pág. 175, número 365).

> "No puede ser vicioso en su principio el acto honrado del demandante de reconocer la legitimidad de los créditos comprometiéndose a pagar las deudas por consumo de agua de los inmuebles, por ser la única persona beneficiada con la herencia. Sencillamente es aberrante que venga ahora contra sus propios actos".
> (Sentencia de 3 de mayo de 1972. Registro Judicial N° 11, enero-junio 1972.)

Otro aspecto, de singular importancia, es la validez de pactos mediante los cuales se reduzca el término de prescripción, como se hace en el presente caso, en el conocimiento de embarque, que, señala un término de prescripción menor de 9 meses, que, tanto en la legislación holandesa, como de la legislación panameña, tienen un término idéntico de prescripción de un año. Como es notorio, las normas que regulan la prescripción son normas de orden público, irrenunciables e

inmodificables por las partes, por cuanto las mismas van enderezadas a que el transcurso del tiempo sin ejercer las acciones jurisdiccionales correspondientes, tiene como efecto jurídico el de impedir que, transcurrido ese término, se propongan las mismas. No resulta pertinente en este contexto que la Sala se distraiga analizando la naturaleza jurídica de la institución (presunción de renuncia de derechos, sanción, etc.), pero sí de hacer énfasis en que la consideración que tiene la prescripción como materia de orden público, impide que, por voluntad de las partes al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, éstas reduzcan el término de prescripción previsto en los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En terreno más sustancial, el reducir, mediante pacto, el término de la prescripción, encerraría una limitación al derecho al acceso a la jurisdicción, uno de los derechos que integran la garantía del debido proceso, como ha tenido ocasión de precisar la jurisprudencia del Pleno de esta Corte, vinculante, por lo tanto, a los tribunales en virtud de la doctrina del bloque de la constitucionalidad.

El aspecto medular, en la apelación, como ha quedado planteado, se refiere al cómputo del término de la prescripción. La excepción de prescripción fue negada por el Tribunal Marítimo, motivando su decisión en base a las consideraciones que se externan a continuación:

> "Y aquí el Tribunal observa que hay una íntima relación con el fondo de la controversia, o sea en cuanto a la entrega y el término a partir del cual comienza a correr la prescripción.
>
> Por lo tanto este Tribunal, no puede ni considera correcto resolver favorablemente la pretensión incidental o de Excepción (incidental de la parte demandante) y declarar prescrita la acción, pues está aún en entredicho si esa fue una entrega correcta o incorrecta (si fue una entrega legal o ilegal. En consecuencia toma gran relevancia la última frase sobre de la cláusula sobre la prescripción:
>
> "En la fecha en que los bienes debieron haber sido entregados".
>
> Eso le indica al Tribunal -dentro de la controversia que se suscita, y que se hace patente en la resolución de esta Excepción de Prescripción- que ha quedado como en el aire si los bienes debieron haber sido entregados. Así que para todos los efectos, pudiera decirse que todavía no han sido entregados los bienes, no fueron entregados a la persona que correspondía, más aún, escuchando los testimonios de los propios Agentes de la compañía transportista, lo cual a su vez, se confunde en una forma tan patente con el fondo de la controversia, y no quisiera decir con esto ... decir que fue una entrega correcta o incorrecta-, yo creo que eso tenemos que definirlo en la Sentencia.
>
> Con esto no se está diciendo que fue una entrega, sino que tendrá que establecerse en este Tribunal a través del proceso probatorio en Audiencia Ordinaria, si esa entrega, en la forma como se hizo, puede considerarse una entrega correcta para los efectos de la responsabilidad, lo cual, reitero, se confunde íntimamente con el sustento de la prescripción.
>
> En este momento el Tribunal no puede decir que esa entrega en la forma que se hizo, supuestamente el cuatro (4) de mayo de 1993, era la fecha en que los bienes debieron haber sido entregados, porque hay una duda clara, si esos bienes han debido ser entregados en la forma en que se hizo. Por lo tanto el Tribunal considera que no procede decretar la Prescripción en el presente caso y debemos continuar con el mismo y resolverlo en el fondo de conformidad con el proceso ordinario y luego en la Audiencia Ordinaria correspondiente."

La regla general, en materia de cómputo de prescripción, y salvo que exista

una norma especial en contrario, es que el cómputo para determinar la prescripción de la acción es de un año, contado a la fecha en que los derechos pudieron ser ejercitados, y esta Sala ha determinado que, en asuntos marítimos, es el momento de la entrega de la mercancía, aquél en virtud del cual se inicia el cómputo de un año. La Sala, por lo tanto, no concuerda con la interpretación que a las normas relativas al cómputo de la prescripción le formula el Tribunal Marítimo. Dicha disposición contenida en el artículo 1521, numeral 3° del Código de Comercio, se refieren al hecho concreto de la entrega física de la mercancía, que está a disposición del consignatario a partir del momento en que la nave llega al puerto prefijado y se encuentra en disposición de realizar la descarga correspondiente, o el momento en que las partes hayan pactado cuando se entienda realizada la entrega. La interpretación del Tribunal en el sentido de que, en consideración a que existen discrepancias en torno al hecho de si la entrega fue regular o defectuosa, que es la pretensión principal del demandante, impediría, por ese sólo hecho, que se pueda invocar la prescripción, sobre la base de que ha existido, como la denomina el Tribunal, "mala entrega", lo que equivaldría, sin más, a sostener que, a menos que la entrega haya sido correctamente realizada, no cabe sostener prescripción de la acción. Esta interpretación contradice la esencia y razón de ser del instituto de la prescripción. Es evidente que tan pronto se ha producido la entrega, queda disponible para el fletante el ejercicio de las acciones relacionadas con el contrato de fletamento y las cláusulas contenidas en el conocimiento de embarque. El hecho que se discuta el cumplimiento de la entrega, por parte del portador, en el proceso ordinario, no es óbice para que la discusión procesal de ese extremo se realice dentro del término en que la acción no se encuentre prescrita, prescripción que ocurre al término de un año contado a partir de la fecha de la entrega de la mercadería, como bien ha tenido ocasión de señalarlo la Sala, en sentencia, invocada por el apelante, de 18 de mayo de 1990.

No puede entrar la Sala a dilucidar en qué momento fue, en efecto, entregada la mercancía, por cuanto ello constituiría la valoración de las pruebas, para lo que carece de competencia, como hemos visto. Pero, en todo caso, las dos fechas de referencia que pudiesen aplicarse, de 4 de mayo (f. 385) o de 28 de abril (fs. 445-77), respectivamente, indicaban que, al momento de presentarse la demanda, la acción se encontraba prescrita por haber transcurrido el término de un año para promover la demanda correspondiente, término éste que, se reitera, es de un año contado a partir de la entrega, entendiendo por tal la entrega física o aquélla que hayan pactado las partes en las que se estime que se considere entregada la mercancía.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA en todas sus partes la sentencia proferida por el Tribunal Marítimo, que decidió la excepción de prescripción promovida por NEDLLOYD LIJNEN, B. V. en el proceso marítimo ordinario que ha promovido en su contra la sociedad PARVANI INTERNACIONAL, S. A., y, DECLARA la prescripción de la acción promovida por NEDLLOYD LIJNEN, B. V.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

CON SALVAMENTO DE VOTO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Concurro con la mayoría de la Sala en que está prescrita la acción; pero considero que el año, término de la prescripción, debe comenzar a contarse desde el 21 de mayo de 1993, fecha en la cual KAM y Asociados, S. A. notifica a PARVANI que la carga había sido entregada, pues se trata de una entrega, en principio, ajena a PARVANI.

El fallo de mayoría expresa "... en todo caso, las dos fechas de referencia que pudieron aplicarse, de 4 de mayo (f. 385) o de 28 de abril (fs. 445-77),

respectivamente, indicaban que, al momento de presentarse la demanda, la acción estaba prescrita ...".

No obstante, tomando en cuenta como punto de partida el 21 de mayo de 1994, también prescribió la acción, pues la demanda fue presentada el 6 de junio de 1994. (F. 7).

Salvo el voto respetuosamente.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del negocio que contiene el recurso de apelación interpuesto por **SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A.** contra la resolución del 28 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá en el proceso ordinario que le sigue **SEABOARD MARINE LTD., y SEA CARGO, S. A. a COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A.** ahora **ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.** (POR FUSIÓN), la firma forense Moncada y Moncada y el licenciado Pedro Antonio Vásquez Arrocha, en su condición de apoderados especiales de las partes, han presentado sendos escritos contentivos de solicitudes especiales (fs. 300 y fs. 302-303).

En lo medular de las aludidas solicitudes se señala que:

1. Por un error involuntario fue presentado a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia donde se encuentra el presente negocio, un escrito de Desistimiento y Acuerdo Expreso que se refiere al proceso **COMPAÑÍA DE SEGUROS CHAGRES, S. A. -VS- SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A.** (solidariamente), que se encuentra en el Tribunal Marítimo;

2. Que el escrito fue adjuntado al presente negocio y se procedió a resolver como si fuera este negocio, cuando en verdad alude al proceso incoado por la COMPAÑÍA DE SEGUROS CHAGRES, S. A. contra SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A. y, que se encuentra en el Tribunal Marítimo;

3. Como quiera que no se manifiesta intención de desistir ni de transigir en el proceso COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. ahora ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. contra SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A., se solicita se deje sin efecto la resolución del once (11) de octubre de 1996.

Bajo este prisma, esta Sala de la Corte observa que la resolución del once (11) de octubre de 1996 que corre a fojas 296-299, en su parte resolutiva se lee así:

> "Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN entre las partes ASSA COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. y SEABOARD MARINE LIMITED y SEA CARGO, S. A". (El énfasis es suplido por la Sala).

El memorial presentado ante la Secretaría de esta Sala el día veintidós

(22) de julio de 1996 por los profesionales del derecho PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA y CELMA MONCADA, contentivo del desistimiento y acuerdo expreso, se hace necesario transcribirlo para una mayor ilustración. Dice así:

"JUICIO ORDINARIO COMPAÑÍA DE SEGUROS
DESISTIMIENTO Y CHAGRES, S. A.
ACUERDO -VS-
EXPRESO SEABOARD MARINE
LTD. Y SEA CARGO, S. A.
(Solidariamente)

ENTRADA TMP N° 1166

SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE
PANAMÁ. E. S. D.

Yo, **PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ ARROCHA**, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal N° 8-155-555, con oficinas profesionales en Vía Porras, Edificio Don Antonio, Planta Baja ciudad de Panamá, donde recibo notificaciones personales, Apoderado Legal de la parte Demandante en el proceso enunciado en la marginal superior derecha, por este medio acudo respetuosamente ante vuestro Despacho con el propósito de desistir de la demanda interpuesta en el presente Proceso Ordinario, como en efecto hago, de formal total e irrevocable, a fin de poner fin al mismo, con el consentimiento de la parte Demandada, quien acepta mediante este documento, renunciar expresamente a cualquier reclamación en contra de los Demandantes, como consecuencia de la interposición de esta demanda en el presente proceso, inclusive en lo referente a las costas, gastos y perjuicios ocasionados.

Asimismo mediante este mismo escrito las partes se dan por notificadas y se allanan del Auto que se dice admitiendo el desistimiento, por lo que solicitan el archivo del expediente.

Panamá, 15 de julio de 1996

POR LA PARTE DEMANDANTE:

(Fdo.)
LIC. PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA

POR LA PARTE DEMANDADA:

(Fdo.)
DRA. CELMA MONCADA"

Resulta obvio, que la Sala ha aprobado una transacción dentro de un proceso en el cual no ha adquirido competencia, o lo que es lo mismo, carece de competencia. Ante esta Sala no se tramita el proceso ordinario **COMPAÑÍA DE SEGUROS CHAGRES, S. A. contra SEABOARD MARINE LTD y SEA CARGO, S. A.** (Solidariamente); motivo por el cual procede la declaratoria de nulidad en el presente proceso.

El legislador patrio ha sido sabio al recoger en el Código de Procedimiento el sistema francés, según el cual no existe nulidad sin norma que la establezca (véase el artículo 721 del Código Judicial) y el principio de trascendencia contenido en el artículo 747 del citado código. Parte este principio de la base que la declaratoria de nulidad solo procede en caso de agravio o perjuicio procesal.

En el caso que nos ocupa es claro que, la falta de competencia de la Sala se erige como causal de nulidad insubsanable, siendo necesario decretar la misma (nulidad) para restablecer el curso normal del proceso.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA LA NULIDAD DE LO ACTUADO A PARTIR DE FOJAS 292 dentro del presente proceso ordinario interpuesto por **COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. ahora ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. contra SEABOARD MARINE LTD., y SEA CARGO, S. A.** para restablecer el curso normal del proceso.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

MANUEL DE JESÚS QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARÍA TERESA RÍOS HERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ Y MARÍA ELVIA Ó MARÍA ELVIRA RÍOS HERNÁNDEZ A MANUEL DE JESÚS QUINTERO, ALBINO GÓMEZ GÓMEZ, RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ, ESPERANZA GÓMEZ GÓMEZ Y AURA GÓMEZ GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIÓ A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **RICARDO ALVARADO TARACEA**, apoderado del señor **MANUEL DE JESÚS QUINTERO**, ha interpuesto recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 29 de agosto de 1995, mediante la que se desató en segunda instancia el proceso ordinario de deslinde y amojonamiento, cuyo origen radica en la acción promovida por las señoras MARÍA TERESA RÍOS, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS, y MARÍA ALBA o MARÍA ELVIRA RÍOS contra su representado.

El recurso extraordinario se interpuso en la forma, por una causal, y en el fondo, aduciéndose las causales probatorias. Cuando se decidió acerca de la admisibilidad del recurso la Sala estimó que, en cuanto a la casación en la forma, la causal invocada era inadmisible dado que el reparo procesal por ella perseguido no se reclamó oportunamente en la instancia donde se dice supuestamente se cometió la falta in procedendo, así como tampoco en la fase subsiguiente del proceso. Como quiera que no se produjo impedimento alguno que excusase las omisiones del recurrente en las instancias inferiores, la Sala, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1179 del Código de Procedimiento, no admitió el recurso de casación en la forma como ya hemos dejado dicho. En cambio, el examen de las causales de fondo llevó a la Sala al convencimiento de que las invocadas llenaban a cabalidad los requisitos y las exigencias contenidas en el artículo 1165 en concordancia con el 1160 del Código Judicial, por lo cual se declararon admisibles.

En este estado del juicio, la Sala procederá a examinar ambas causales de fondo, en el orden empleado por el recurrente, a fin de resolver lo que en derecho corresponda.

PRIMERA CAUSAL

Alega el recurrente que la resolución impugnada infringió normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. En los motivos que constituyen el fundamento de hecho para objetar la sentencia se indica que se ignoraron los testimonios del Arquitecto MELVIN SAMUDIO y del Topógrafo CARLOS OMAR MONTERO, quienes depusieron acerca de una diligencia practicada por ellos en su condición de funcionarios de la Dirección de

Ingeniería del Municipio de David, atestigüando, según el impugnante, que la construcción del edificio que realizaba JOSÉ DE JESÚS QUINTERO en la finca de su propiedad N° 6237 no interfería ni afectaba, en ningún sentido, a la finca N° 1637, predio perteneciente a las personas que constituyen la parte demandante en este juicio. La consecuencia de haberse fallado sin tomar en cuenta tales medios probatorios que, de acuerdo con el recurrente, despejaban con claridad el centro de la disputa legal de este proceso, se tradujo en la infracción del artículo 769 del Código Judicial, pues dice la censura que de haberse tenido presente la declaración de ambos testigos no se habría arribado a una decisión en donde se determinó **"que la construcción de la finca 6237 se ubica dentro de la finca 1637 de los demandantes"**, violándose de paso, además, el artículo 337 del Código Civil que consagra el derecho de todo propietario a gozar y disponer libremente de las cosas que le pertenecen.

Los testimonios de MELVIN SAMUDIO y de CARLOS OMAR MONTERO recogen una versión de lo ocurrido cuando, en su condición de funcionarios municipales, participaron en una inspección cuyo propósito fue el de dirimir la disputa surgida entre las propietarias de la finca 1637 y el dueño de la finca 6237, a raíz de la edificación de mejoras que, en el caso subjúdice, se afirman construidas dentro de parte de la primera propiedad que hemos mencionado. Es verdad que esas declaraciones forman parte de los medios de prueba que hizo llegar al proceso la parte demandada. También es cierto que tales testimonios concuerdan y son concurrentes al señalar que, al practicarse la diligencia de inspección, ellos, los testigos, pudieron verificar que el edificio que construía el señor QUINTERO no invadía ni obstruía parte alguna del predio de las señoras RÍOS HERNÁNDEZ, quienes habían sido las peticionarias de la diligencia llevada a cabo en aquella oportunidad por las autoridades municipales. Es más, y aunque eso no lo diga el casacionista, a fojas 16 del expediente se aprecia la copia de la nota enviada por el señor MELVIN SAMUDIO en su carácter de Arquitecto Municipal, al Alcalde del Distrito de David, dándole cuenta del resultado de la inspección practicada y conforme a la cual las partes en conflicto se entendieron, aceptaron que la obra no se edificaba en perjuicio de las quejosas, se avenían a una solución de los problemas entre ellos pendientes y se ponía punto final a la controversia. Por otra parte, cuando la Sala examina el contenido de la resolución dictada por el Tribunal Superior advierte que tiene razón el impugnante cuando precisa que la sentencia ignoró o no tomó en consideración las declaraciones de los dos testigos acerca de las que se han hecho los anteriores comentarios. Pero, a pesar de haber sido así, para que el cuestionamiento que se le endilgue a una sentencia en uso del recurso de casación en que se invoque el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba pueda prosperar, no basta que la pieza de convicción a que se aluda repose en efecto dentro del expediente y que la misma haya sido pasada inadvertida por el juzgador. En estos casos para que el recurso prospere es indispensable, asimismo, que el medio probatorio ignorado o pasado por alto en la sentencia esté dotado de una completa o acabada fuerza de convicción de tan especial naturaleza que permita a través de ella extraer la inequívoca conclusión de que, habiéndose hecho abstracción de su existencia, lo dispositivo de la sentencia que se censura obedezca directamente a la omisión cometida por el sentenciador. Este criterio que la Sala acaba de expresar se convierte en mucho más valedero en causas como la que se examina, en donde la pretensión demandada y los hechos que se discuten quedan inexorablemente sometidos a las verificaciones que puedan emanar de medios probatorios como la experticia, las inspecciones y los documentos, más que a los que pudieran derivarse de la prueba testimonial utilizada.

Luego de hacer un cuidadoso estudio del fallo impugnado se puede afirmar, con toda seguridad, que los testimonios dejados de valorar por el tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia no constituyen, como pretende el recurrente, pruebas determinantes y de influencia decisiva en la solución que se le ha dado a este litigio. A la inversa, la Sala constata que esas declaraciones carecen de relevancia frente a la abundante cantidad de pericias y pruebas técnicas practicadas a lo largo del proceso por ambos litigantes y que fueron, en definitiva, las que le sirvieron de base al juzgador para dictar la resolución contra la cual se ha empleado este recurso extraordinario de casación. No hay una razón de fondo que sirva para señalarle a la sentencia del Tribunal Superior el yerro que le endilga el casacionista en relación con la primera causal analizada

por la Sala, una vez que no es sustentable el cargo consistente en que la no valoración de lo dicho por los señores SAMUDIO y MONTERO influyese sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, sobre todo porque, tales declaraciones, en casi nada contribuyen a despejar la verdad de los hechos que se deben esclarecer en este juicio.

SEGUNDA CAUSAL.

Cabe ahora que la Sala le preste atención a la segunda causal de fondo empleada por el recurrente para atacar a la sentencia. Consiste la misma en la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba y los motivos, en donde se formulan los cargos de injuricidad denunciados, nos indican que la resolución dictada por el Tribunal Superior le asignó valor de plena prueba al informe visible a fojas 246 y 247 del expediente, rendido por el jefe Regional de Catastro de la Provincia de Chiriquí, dentro del cual se dictamina sobre la correcta ubicación del lindero Este de la finca N° 1637 perteneciente a las demandantes y la supuesta edificación en parte del predio ajeno de una pared o muro de la obra del demandado, no obstante que esa pieza de convicción está plagada de defectos técnicos, de confusiones y de inexactitudes, mientras que, por otra parte, el veredicto de los jueces de segundo grado desconoce y niega el valor probatorio encerrado en los dictámenes periciales rendidos por el agrimensor GENEROSO OLMOS, los técnicos Topógrafos JOSÉ LUIS BARRAZA, CECILIO CASTILLO, y LUIS VILLARREAL y los Arquitectos LETTFALAH NADER y JORGE L. MONTENEGRO, cuyo contenido reposa a fojas 201, 235 y 239 del expediente.

Cita el casacionista, en calidad de disposiciones legales infringidas, los artículos 823, 837 y 770 del Código Judicial, así como el ya mencionado artículo 337 del Código Civil.

La primera objeción que se imputa a la sentencia consiste en que ésta le atribuyó al dictamen rendido por el Jefe Regional de Catastro de Chiriquí la condición de un documento público con capacidad de concederle a su contenido el valor de plena prueba. Está obligada la Sala a abordar el examen de esa pieza de convicción con el propósito de verificar el cargo y discurrir si es cierto o no que el Tribunal Superior le otorgó a la misma un valor probatorio del cual carece. La pieza procesal, en verdad, proviene de un despacho público y fue elaborado por un funcionario en ejercicio de un cargo oficial. En cuanto a la especifidad y al valor probatorio de lo que en su contenido consta, la Sala observa que este aspecto no puede dejarse de apreciar si no en estrecha conexión con lo dispuesto por los artículos 880 y 1501 del Código Judicial.

El artículo 1501 del Código Judicial establece:

> "1501. En todo proceso de deslinde o amojonamiento, aunque el Estado no sea propietario del terreno afectado, se solicitará antes de aprobar la línea divisoria o de decidir el contradictorio, y sólo en la primera instancia, dictamen a la oficina del Catastro Fiscal."

El artículo 880 del Código de Procedimiento en aquella parte que interesa indica:

> "880. ...
> El Juez podrá asimismo solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos a los profesionales o técnicos oficiales o de la Universidad de Panamá y en general a las entidades y oficinas públicas que dispongan de personal especializado, sobre hechos y circunstancias de interés para el proceso. Tales informes deberán ser motivados.
>
> El Juez apreciará estos informes según las reglas de la sana crítica."

Estrictamente hablando, desde un punto de vista eminentemente procesal, el dictamen rendido en este caso por el Jefe Regional de Catastro de la Provincia de Chiriquí entra en la categoría de aquellas pruebas consideradas por el

Capítulo Cuarto, del Título VII, del Libro II del Código Judicial como INFORMES y como tal debió ser apreciado por el Tribunal, según las reglas de la sana crítica. Esta consideración conduce a la Sala a tener que rechazar los conceptos que acerca de esa prueba emitiera el Tribunal Superior cuando, al refutar los alegatos de la parte demandada, se expresó en los términos que literalmente se pasan a citar:

> "Es de consideración de este tribunal, que las afirmaciones realizadas por el apoderado judicial de la demandada, no puede tener cabida, puesto que el informe de catastro es un documento público, y por ende hace plena prueba, a menos que sea tachado de falso." (Pág. 297 y 298).

No es cierto ni aceptable que el informe o dictamen de la oficina de Catastro Provincial constituya un documento público al cual el juzgador deba otorgarle obligatoria-mente el valor de plena prueba. De acuerdo con las disposiciones legales que se han dejado transcritas ese dictamen es un informe y el tribunal debió apreciarlo "según las reglas de la sana crítica".

A continuación es procedente que la Sala dedique atención a considerar si, conforme al método de la prueba razonada, el informe del Jefe Regional de Catastro -convertido en virtud de la sentencia impugnada en piedra angular de la resolución dictada por el Tribunal Superior-, es ciertamente o no un elemento probatorio irrebatible con capacidad de demostrar que las mejoras construidas por JOSÉ DE JESÚS QUINTERO se levantaron, en alguna medida, dentro del predio de las partes demandantes.

Comencemos por recordar que ambas partes, en este juicio, han hecho uso de la prueba pericial y de las inspecciones judiciales, con el lamentable resultado final de que los peritos designados por cada una de ellas ofrecen dictámenes que, en cuanto a los hechos de la demanda, recíprocamente se niegan y se contradicen. En ese sentido, es de justicia reconocer que las inspecciones y los peritajes practicados en muy poco contribuyen, por no decir que en nada, a establecer si eran o no ciertas las alegaciones de cada una de las partes. En términos generales, todos los informes presentados, incluyendo los planos que se hicieron llegar al expediente, han partido de hipótesis no comprobadas que se refieren a los probables errores en la medición de las fincas cuando éstas se inscribieron en el año 1919 (la N° 1637) y en el año 1953 (la N° 6237). También se aduce, para explicar la no coincidencia de las cabidas superficiarias de los predios con lo que consta inscrito en el Registro Público, supuestos retiros de cercas que obedecen a la construcción de calles y carreteras que, alrededor de la manzana en donde se encuentran ubicadas las fincas, se construyeron en el transcurso de los años, pero sin establecer con certeza en qué medida tales eventos llegaron a afectar las particularidades de los predios involucrados en este proceso. Por supuesto, las certificaciones emanadas del Registro Público, confeccionadas en base a datos suministrados en años muy remotos, no han sido útiles para precisar linderos, medidas, cabida y demás detalles de los inmuebles colindantes, con la exactitud requerida en una causa en donde lo disputado y lo deslindable es una porción relativamente pequeña de terreno distribuida a lo largo del lindero Este de la finca N° 1637 de las demandantes. Igualmente es natural que hayan sido de menos utilidad los testimonios que en este juicio se han vertido; sin duda, por las mismas razones del tiempo transcurrido que han sido apuntadas por la Sala.

En tales condiciones, si para dirimir la controversia a favor de las demandantes se tuvo como un elemento clave el informe de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Chiriquí, la Sala no puede compartir el fallo proferido en segunda instancia. El informe en referencia -que ni siquiera vale la pena transcribir- aparte de utilizar un deficiente castellano que hace imposible entender con claridad lo que en él se expresa, no contiene un análisis ni una información técnica adecuada que permita establecer con precisión, mediante la determinación de los rumbos con mención de los grados, minutos y segundos, la línea por donde debe ser trazado el lindero Este que entre ambas fincas conforman su contigüidad.

La Sala se siente obligada a compartir con el casacionista los argumentos por medio de los cuales ha formulado los cargos de injuricidad a la resolución

impugnada, basándose y partiendo de que el juzgador no tenía por qué haberle otorgado el valor probatorio que le asignó al tantas veces mencionado informe de Catastro, a la hora de adoptar su decisión. La aplicación de las reglas de la sana crítica al valorar esa prueba demandaba la observación de los conocimientos, de la lógica y de la experiencia en lo atinente a los datos procesales que aportaba para establecer la verdad de los hechos de este juicio. Es evidente que en relación a esa prueba el Tribunal no se ciñó a tales principios.

Sobre el punto mencionado en la sentencia de segunda instancia relacionado con las normas de desarrollo urbano de la Ciudad de David que exigen un retiro posterior de cinco (5) metros mínimos de distancia en materia de construcción entre una edificación y los predios con los cuales se colinda, bueno es recordar que este tema no se puede dirimir en un juicio de deslinde y amojonamiento, pues para tales fines existe un procedimiento especial y sumario en materia de interdictos posesorios, conforme lo trae dispuesto el artículo 1346 y concordantes del Código de Procedimiento.

En virtud de lo expuesto, procede casar la sentencia impugnada y, convertida esta Sala de la Corte en tribunal de instancia, corresponde, entonces, dictar antes de la resolución de reemplazo, auto para mejor proveer a fin de ordenar de oficio la práctica de nuevas pruebas, según lo permite el artículo 1180 del Código Judicial.

AUTO QUE ORDENA PRACTICA DE PRUEBAS

Como se ha dejado expresado, la prueba consistente en el informe rendido por el jefe Regional de Catastro de la Provincia de Chiriquí (fs. 246-247) se desecha, por no tener el carácter de documento auténtico y por no ser idónea para identificar con certeza la línea divisoria entre las dos fincas. También, como se dejó dicho anteriormente en este fallo, las pruebas periciales aportadas por las partes que obran en autos resultan contradictorias por lo que no resuelven el problema sobre la certeza en cuanto al trazado de la línea que ha de dividir las fincas.

En tales circunstancias se impone ordenar de oficio que se produzcan los informes técnicos-oficiales preparados por el personal especializado de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Panamá, para determinar cuál debería ser la línea divisoria entre los predios, a fin de que dicho dictamen técnico, realizado en forma imparcial, le permita a la Corte decidir la controversia en forma definitiva.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 29 de agosto de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario interpuesto por MARÍA TERESA, MARÍA DE LAS MERCEDES y MARÍA ELVIA ó MARÍA ELVIRA RÍOS HERNÁNDEZ contra MANUEL DE JESÚS QUINTERO y otros y, REVOCA en todas sus partes la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, y en su lugar RESUELVE ORDENAR la práctica de un peritaje con levantamiento de plano a efecto de determinar lo siguiente: la demarcación de la línea divisoria en el lindero ESTE de la finca N° 1637, Tomo 138 R. A., Folio 64, Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, de propiedad de las señoras MARÍA TERESA RÍOS HERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ y MARÍA ELVIRA RÍOS HERNÁNDEZ, en la parte que colinda con la finca N° 6237, inscrita al Tomo 608, folio 496, Sección de la Propiedad, Provincia de Carece, de propiedad de MANUEL DE JESÚS QUINTERO.

Para que intervenga en esta diligencia en calidad de perito, se ordena que se oficie al Director General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que designe al técnico correspondiente, de conformidad con el artículo 1501 del Código Judicial.

Para la práctica de esta diligencia se señala el término de treinta (30) días.

Por practicada la referida diligencia, se ORDENA llevar el expediente al

despacho del Magistrado Sustanciador para que proceda a dictar el fallo que corresponda como tribunal de instancia.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

YELITSUTTH, S. A. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVER STAR CORPORATION, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de Casación Civil ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por YELITSUTH, S. A., en el proceso ordinario que le sigue a SILVER STAR CORPORATION, S. A. La corrección del recurso se efectuó en tiempo oportuno; por tal motivo se pasa a resolver la admisibilidad definitiva del mismo, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley.

El recurso se anunció y formalizó oportunamente por persona hábil.

El escrito por medio del cual se formalizó el recurso, reúne de manera general, los requisitos ordenados por el artículo 1160 y la causal invocada es la infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, está consagrada en las causales de fondo que señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil.

Los motivos por los cuales se ordenó su corrección fueron subsanados debidamente por lo que se debe admitir dicho recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación instaurado por YELITSUTH, S. A., mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RUTH HYACINTH THOMPSON RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAMES HILARY APOLLO MINOTT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario promovido por JAMES HILLARY APOLLO contra RUTH HYACINTH THOMPSON, ésta, por conducto de la Licenciada GRACIELA J. DIXON C. ha

promovido recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segundo grado, de 13 de septiembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Familia de Panamá.

Encontrándose el proceso en estado de decisión, a ello procede la Sala, previas las consideraciones que se expresan a continuación.

El recurso de casación promovido es en el fondo, por la causal de "infracción de las normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en el aspecto dispositivo de la resolución recurrida".

El recurso de casación expone, como motivos, los que, a continuación, se transcriben:

> "1. Se le concede valor probatorio a un elemento de la prueba de informe o evaluación social practicada por la Trabajadora Social de los Juzgados de Familia que no reúne los requisitos legales para ello, en virtud de que se pretende calificar como declaración de parte, a la (sic) manifestaciones hechas por el señor James Apollo en la entrevista sostenida con la Trabajadora Social.
>
> 2. Se le concede valor probatorio a otro elemento de la prueba de informe o evaluación social practicada por la Trabajadora Social de los Juzgados de Familia, que no reúne los requisitos legales de prueba que se le pretende atribuir, como lo es considerar como una declaración de testigo o prueba testimonial a las manifestaciones hechas por la vecina del demandante, señora Gladis de Gordón, en la entrevista sostenida con la Trabajadora Social.
>
> 3. Se afirma que el informe social da vigencia plena al principio de Inmediación, toda vez que supuestamente el mismo pone al Juzgador en contacto con el ambiente que rodea a las partes y con los hechos que se alegan, lo cual es contrario a la esencia misma de este principio procesal en tanto que dicha Inmediación no es delegable por el Juzgador. Este proceder constituye un error de derecho en la apreciación de la prueba en tanto que a dicho medio probatorio se le da un valor que la ley no le concede.
>
> 4. De igual modo, si bien el informe social es valorable y apreciable en base a la sana crítica, se le confiere un valor probatorio que la ley no le reconoce a los elementos contenidos en dicho informe (la declaración del señor James Apollo y su vecina Gladis de Gordón), lo cual constituye una violación al Principio de Contradictorio, esencial en nuestro derecho procesal". (F. 104).

La recurrente estima infringidos por la sentencia objeto del recurso extraordinario de casación los artículos 114, numeral 9 del Código Civil, artículos 771, 890 y 891 del Código Judicial, el primero de estos últimos, referido a la inmediación en la práctica de la prueba y los subsiguientes a la declaración de parte.

La recurrente, como se ha dicho, censura el error en la apreciación de la prueba por el tribunal de segundo grado, consistente en la errónea valoración de la prueba de declaración de parte, que considera incluido en el informe de la trabajadora social, solicitada por la parte demandada en la audiencia oral celebrada al efecto. Las pruebas que se presentaron a este proceso fueron documentales, testimoniales, y el aludido informe. Es evidente que el citado informe no tiene la categoría de plena prueba, no obstante que debe ser apreciada por el Tribunal, con arreglo a las reglas de la sana crítica, no solamente atendido en el artículo 770, sino, además, el artículo 880 del Código Judicial que regula esta prueba específica. La Sala estima que, lejos de haber errado en la valoración de la prueba que se censura, el Tribunal Superior la valoró, en conjunción con las otras pruebas en el expediente, que consistían en dos testimoniales, de los cuales, a uno de ellos se le restó su procedencia como prueba, en atención a que el dicho de ese testigo, MARIANA YRIANA MARTÍNEZ ARAÚZ,

tenía como fuente la información dada por el propio demandante, con lo que restaba el valor de prueba testimonial, y el testimonio de GENOVEVA CAMARENA RODRÍGUEZ, que acreditó que, en efecto, desde el año 1982 se había ausentado del domicilio conyugal la demandada (véase foja 23). El informe de la trabajadora social arroja luces sobre la verosimilitud de la declaración de la testigo en referencia, pues concuerda con la entrevista que le formularon a otra persona, la señora GLADIS DE GORDÓN, una vecina del demandante, quien también corroboró lo planteado por la testimonial propuesta por la parte actora.

El criterio valorativo del Tribunal Superior es del siguiente tenor:
"...
La juzgadora a quo se ha basado en que la segunda testigo no tiene fuerza probatoria, por ser de referencia y que en consecuencia un testigo no hace plena prueba. Sin embargo, en el presente negocio constan y se han practicado otros elementos y medios de prueba que no pueden desecharse, deben ser apreciados a la luz de los modernos sistemas de valoración de la prueba, más tratándose de procesos sobre relaciones familiares donde el Juzgador tiene amplias facultades para adoptar las medidas que estime convenientes, incluyendo el requerir concepto de un investigador social. Entra allí la labor del Trabajador e Investigador social con que cuentan los Juzgados de Familia, su evaluación o informe sirve de medio de prueba complementaria con todas las características que rodean a esta y debe apreciarse en conjunto con las otras pruebas evacuadas. Dicha investigación pone en contacto al Juzgador con el ambiente que rodea a las partes y con los hechos que se alegan y que se tratan de deslindar, dando vigencia plena al principio de Inmediación, esencial en procesos orales como el que se examina.

Es pues valorable y apreciable el informe social en base a la sana crítica y se tiene que el realizado en la presente litis aporta nuevos elementos como la declaración de la parte demandante y la de una vecina que relata sobre los hechos que rodean al matrimonio que se pretende disolver. La declaración de parte es un elemento que debe apreciarse tal como manda el artículo 891 del Código Judicial, esto es en concordancia con los otros medios de prueba del proceso y según la sana crítica.

En el informe se refleja la declaración del señor APOLLO y de su vecina GLADIS DE GORDÓN, ellos coinciden con la primera testigo de la audiencia (MARÍA GENOVEVA CAMARENA), en que la señora RUTH HYACINTH THOMPSON abandonó su hogar, que el señor APOLLO vive sólo en su casa, que no ha habido reconciliación entre los cónyuges.

Hay pues suficientes elementos que demuestran que el matrimonio APOLLO se ha visto truncado de hecho, que media separación de hecho entre las partes y que la misma se ha dado por más del tiempo legalmente exigido para constituirse en causa de divorcio sin interrupción por reconciliación, únicos requisitos que contempla la ley positiva en la configuración de esta causal de divorcio. Encuentra mayor sustento este criterio con la residencia que expresa la demanda en poder que otorga a foja 43, la misma no coincide en lo absoluto con la que tiene el demandante, tal como se desprende de la pruebas y constancias procesales. Se entiende entonces que los cónyuges tienen distintas y separadas residencias, incurriendo en la no convivencia o cohabitación. Esta situación no puede considerarse como causa de nulidad del emplazamiento en el presente proceso, primero porque a entender del demandante no conocía el paradero de su esposa, segundo que en el expediente no consta ni surge que ella reside en el extranjero sino después de la sentencia y tercero que al comparecer la misma al proceso no se opone al emplazamiento hecho. Cabe aplica entonces el artículo 1004 del Código Judicial que dispone que si alguno de los interesados se presentare durante el proceso, se le admitirá como parte en el estado que se encuentre la causa, sin alterar su curso, y le perjudicará o aprovechará lo actuado hasta entonces".

Es evidente que un sólo testimonio no ofrece plena prueba, pero sí gran presunción (artículo 905 del Código Judicial), en la medida en que se trate de un testigo idóneo, como lo es efectivamente, el rendido la testigo GENOVEVA CAMARENA RODRÍGUEZ. Naturalmente que el hecho de que un sólo testigo no tenga la fuerza de convicción de una prueba plena, como lo son dos testimonios contestes, no puede, sin embargo, ser desechado sin mas, restándole todo valor que pudiese tener para el juzgador. De allí que, bien se puede, valorar ese testimonio a la luz y en conjunción con la totalidad de las pruebas aportadas en el proceso, singularmente la prueba de informes representada por el informe de la trabajadora social, más aún cuando constituye una prueba que propuso la defensora de ausente de la parte demandada. Es evidente que la censura a dicho informe, por entender que las manifestaciones que se contienen constituyen declaración de parte rendida ante autoridad distinta a la competente para dilucidar esta controversia matrimonial, carece de asidero, y yerra el Tribunal Superior al apreciar lo dicho por el demandante en el dictamen pericial como una declaración de parte, que no lo es. El informe, sin embargo, bien puede servir como una prueba suplementaria para acreditar las circunstancias que rodearon el retiro de la demandada del domicilio conyugal, el establecimiento de otro domicilio fuera del país, como también aparece acreditado en el proceso, durante un período prolongado de tiempo, que se mantiene hasta el presente, y que ciertamente excede el período de cuatro (4) años, que requiere la legislación civil, bajo cuya vigencia se instauró la demanda de divorcio.

Una lectura de la sentencia de segunda instancia, refleja, sin lugar a dudas, la existencia de una ponderación de las diferentes probanzas allegadas al proceso, dentro del principio de unidad de la prueba, y de su apreciación, dentro de dicho principio, con arreglo a las reglas de la sana crítica, que es el sistema de valoración que postula el Código Judicial.

Sobre el aspecto de la valoración de un sólo testimonio, que no tiene valor de plena prueba, pero que tampoco consiste en una prueba ineficaz, se ha pronunciado el conocido procesalista Hernando Devis Echandía, en su Compendio de Derecho Procesal, en cuyo Tomo II, página 344, se pronuncia en términos que comparte la Sala, cuyo concepto se permite reproducir:

"210. EL TESTIMONIO ÚNICO Y SU VALOR PROBATORIO

> Se ha discutido acerca de este punto. Se suele citar la máxima latina: testis unus tests nullus. Sin embargo, no se justifica la exclusión total o parcial del mérito probatorio del testimonio único, en el derecho moderno, porque se trata de una cortapisa a la libre valoración por el juez de la credibilidad que le merezca el testigo. La gran mayoría de los códigos actuales dejan al criterio del juez determinar su eficacia probatoria; también los colombianos (C. de P. C., Art. 187; C. de P. L., Art. 61; C. de P. P., Arts. 254 y 294). Esta es la opinión casi general de los autores modernos. Recuérdese el sabio principio de que "los testimonios se pesan y no se cuentan"; un buen testimonio merece mayor credibilidad que varios regulares o malos (véase Núm. 189, punto 14)".

(HERNANDO DEVIS ECHANDÍA. Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales. Tomo II, Colombia, 1994, p. 344).

En estimación de la Sala, por las consideraciones expuestas, la separación de hecho por mas de 4 años ha sido acreditada, por lo que procede la confirmación de la sentencia impugnada mediante el recurso extraordinario de casación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de segunda instancia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOAQUÍN MELGAR MONTENEGRO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ENEIDA CEDEÑO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE EMANUEL DE JESÚS CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTO:

Esta Sala de la Corte dictó Resolución de 10 de julio de 1996 ordenando al licenciado Antonio A. Vargas corregir el recurso de casación que interpuso, en representación de **JOAQUÍN MELGAR MONTENEGRO**, contra la Resolución de 24 de noviembre de 1995 proferida por el Tribunal Superior de Menores, dentro del Proceso de Filiación que le sigue **ENEIDA CEDEÑO CASTRO** en representación de **EMANUEL DE JESÚS CEDEÑO.**

El recurrente presentó un nuevo escrito de casación, según se observa de fojas 185 a 191, pero no corrigió el defecto más grave, sobre el cual, la Sala advirtió que **"de no corregirse, la casación no podría ser admitida"**. Este consistía en haber omitido citar normas sustantivas, infringidas a consecuencia del yerro probatorio.

Al no cumplir con dicho requerimiento fundamental para la casación en el fondo, no es posible acoger el recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por JOAQUÍN MELGAR MONTENEGRO en el Proceso de Filiación que le sigue ENEIDA CEDEÑO CASTRO, en representación de EMANUEL DE JESÚS CEDEÑO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINACAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA en su condición de abogados de la parte demandada y demandante en reconvención, **INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A.**, han interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 7 de mayo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior dentro del proceso ordinario instaurado por **FINACAL, S. A.**.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que no utilizó ninguno de los respectivos apoderados.

La Sala procede al examen del recurso en atención a lo normado por el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, se ha podido verificar que la resolución objeto del recurso

es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso fue interpuesto dentro del término legal; el escrito de formalización cumple con los requisitos del artículo 1160 ibídem.; y, las causales invocadas son de las que determina el artículo 1154 del citado texto legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE, el recurso de casación propuesto por INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. contra la Sentencia de segunda instancia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALLI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Debe la Sala decidir acerca del recurso extraordinario de casación que el apoderado judicial de AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. interpuso para impugnar la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 4 de agosto de 1995, mediante la cual se confirma en todas sus partes la sentencia proferida por el Juez Quinto del Circuito del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario que fuera promovido en contra de ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A., donde se declaró probada la excepción de prescripción de la acción aducida o propuesta por la parte demandada.

Una es la causal invocada por el recurrente, siendo la misma en el fondo al sostenerse que hubo infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa y que ello influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Los cargos de injuricidad formulados contra la sentencia son expuestos por el casacionista en cuatro motivos cuyas consideraciones medulares resumiremos, de manera que se pueda precisar el escenario en el cual se ubica la presente controversia. Para el recurrente, el Tribunal Superior equivocó su fallo en virtud de haber declarado prescrita la acción para demandar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de seguro celebrado entre las partes, ya que computó el término de prescripción como si este hubiese comenzado a correr el día 16 de septiembre de 1992 -fecha en que ocurrió el siniestro en que se produjo la pérdida de la aeronave con matrícula HP-1192TN, donde encontró también la muerte el piloto RODOLFO TEMPONE-, cuando una correcta interpretación del contrato (póliza N° 130.0409) y de la Ley indican que ese no es el momento a partir del cual debió empezar a contarse ese plazo.

Como disposiciones legales infringidas por la sentencia el recurrente cita las siguientes:

> "1) Artículo 195 del Código de Comercio en lo concerniente a que, cualquiera sea la forma y el idioma en que se celebren los contratos de comercio, "las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse". Dice el recurrente que el Tribunal Superior no tomó en cuenta que en el contrato de seguro celebrado entre las partes existía "una cláusula de control de reclamo", de cuyo contenido se desprende claramente que el asegurado no demandaría a la compañía aseguradora sin que se

cumplieran antes determinados condiciones; circunstancia ignorada por la sentencia recurrida cuando determinó que se había producido la prescripción aceptando como fecha del inicio del término el día en que se produjo el riesgo -16 de septiembre de 1992-. En su opinión, "en esta fecha no se habían producido las condiciones acordadas por las partes para que pudiera demandar a la compañía, lo que indica que no podía comenzar a correr el término para la prescripción".

2) Artículo 214 del Código de Comercio, en donde se recoge el principio de la buena fe con que deben ser ejecutados los contratos de comercio, el respeto que le deben las partes a los términos convenidos y redactados, siempre atendiendo más a la verdadera intención de los contratantes que a la letra de lo pactado y entendiendo las palabras empleadas de acuerdo al significado con que generalmente ellas son usadas. En apoyo de su denuncia el casacionista argumenta que el Tribunal Superior, apartándose de lo establecido en la citada disposición legal, le dio al contrato de seguro celebrado por las partes un sentido distinto a lo por ellas acordado, particularmente en relación con el término de prescripción de la acción que daba derecho a reclamar judicialmente, pues en las condiciones generales de reclamo del contrato aludido se impedía iniciar demanda judicial antes del cumplimiento de tales condiciones.

3) Artículo 997 del Código de Comercio, según el cual dentro del contrato de seguro imperarán, por encima de las disposiciones legales, las cláusulas que contenga la póliza respectiva. Como el Tribunal Superior no aplicó y desestimó lo pactado en las cláusulas del contrato, culminó su veredicto dando por cierto que el término de prescripción se iniciaba el 16 de septiembre de 1992, fecha en que no era posible demandar a la compañía de conformidad con las explicaciones consignadas con anterioridad.

4) Artículo 1650 del Código de Comercio, donde se consagra que el término para la prescripción de las acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible. Para el recurrente la obligación de su representada, AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A., no era exigible desde el día 16 de septiembre de 1992, fecha del siniestro, ya que "en las condiciones generales <del contrato> se estableció que no se podía demandar a la contraparte hasta tanto no se diera cumplimiento a una serie de condiciones y se cumpliera con el procedimiento de reclamo, lo que nos indica que a la fecha del accidente no se habían cumplido las condiciones acordadas por lo que no podía correr el término de la prescripción, ya que todavía la obligación no era exigible en ese momento".

Acerca del tema de la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada que, como se ha podido apreciar, es el asunto medular de este recurso, el fallo del Tribunal Superior se pronunció de la manera que a continuación se expone:

"En efecto, el artículo 1651, numeral 5°, del Código de Comercio establece que prescriben en una año "las acciones derivadas del contrato de seguros cualquiera que sea su naturaleza".

Observa el Tribunal y en esto concurre con la opinión del Juzgador de primera instancia, que los hechos establecidos en el proceso in comento acreditan que la parte demandante presentó su acción después del término establecido para (sic) por el Código de Comercio. El artículo 1649 del Código de Comercio , citado por el a-quo, establece que "los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales e improrrogables.

"Considera el Tribunal que el contrato de seguro que ocasiona la controversia objeto de este proceso es un acto mercantil (Art. 2 nums. 13 y 14 del C. de comercio), por lo que se enmarca dentro del

ámbito de aplicación de la norma citada, sirviendo de asidero legal a la excepción presentada por la sociedad demandada".

A su vez el juzgador de primer grado, para considerar probada la excepción de prescripción extintiva de la acción empleada en contra de la parte actora, se apoyó en los siguientes razonamientos:

"Si el siniestro acaeció el 16 de septiembre de 1992 y la demanda se notificó al demandado el 9 de noviembre de 1993, como consta al reverso de la foja 8, y la publicación se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1993, como milita a fojas 10 del dossier, debemos convenir que al momento de presentarse la reclamación, la acción se encontraba prescrita; habida cuenta que ambos sucesos procesales (publicación y notificación de la demanda, ver artículo 658 C. J.) se producen con posterioridad al término dictado por el artículo 1651 numeral 5° del código de comercio. Ni huelga comentar que en materia mercantil, los términos son fatales e improrrogables como lo consagra el artículo 1649 del Código de Comercio el cual reproducimos textualmente:

"`ARTÍCULO 1649: Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales e improrrogables, y correrán indistintamente contra cualquiera clase de personas, presentes o ausentes, no cabiendo beneficio de restitución por causa alguna, título ni privilegio. "

Así las cosas, y atendiendo el factor inexorable del tiempo, estima el Tribunal que le asiste razón al demandado cuando alegó que la acción de encontraba prescrita, circunstancia esta que ha quedado evidenciada en los autos; amén de que no se ha interrumpido el término de prescripción de ninguna de las formas concebidas en el artículo 1649-A del Código de comercio, ya que ni se notificó la demanda, ni se efectuó la publicación dentro del interregno de un año y tampoco ha existido el reconocimiento de la obligación por parte del demandado, ya que el documento visible a fojas 104 y el cual fuese reconocido como consta a fojas 126 del infolio, demuestra que la reclamación fue declinada por parte de la compañía aseguradora". (Fs. 337-338).

De lo hasta ahora apreciado por la Sala se saca en conclusión que la controversia o punto a decidir en este recurso consiste, radica y se contrae a las diferencias de criterio que le han servido al juzgador y al recurrente para argumentar en torno del momento en que la obligación se hizo exigible y, en consecuencia, desde qué fecha debió comenzar a contarse el término de prescripción de la acción para demandar el cumplimiento de la obligación que, de acuerdo con la parte demandada y el fallo atacado, habíase ya extinguido cuando se interpuso la demanda en el presente juicio ordinario. Los jueces han señalado que la obligación era exigible a partir de la fecha del accidente, o sea desde el 16 de septiembre de 1992; que la parte actora presentó su demanda el 16 de septiembre de 1993, publicación de la cual fue hecha al día siguiente en un periódico de la localidad, sin conseguir, en esa forma, la interrupción de la prescripción de la acción, conforme lo señala el artículo 658 del Código Judicial, pues todas estas gestiones se hicieron tardíamente. El asegurado o parte demandante estima que su obligación sólo fue exigible a partir del momento en que se cumplieron ciertas condiciones contempladas en la póliza, algo que ocurrió mucho después de la fecha en que se produjo el percance cubierto por el contrato de seguro. En otras palabras, de acuerdo a los jueces de primera y de segunda instancia, en este caso, su decisión se sujeta y se somete a las normas que regulan en el Código de Comercio lo referente a la prescripción, sus términos y modo de computarse tratándose de obligaciones surgidas en el mundo de las relaciones mercantiles. Para la parte demandante, en cambio, debe prevalecer lo que al respecto los contratantes establecieron expresamente y de común acuerdo en el contrato, o sea, en la póliza.

Cuando se examina la póliza o contrato de seguro que los contendientes de este juicio celebraron y que en el expediente puede verse de fojas 30 a 53,

encontraremos efectivamente ciertas cláusulas que, como es alegado por el recurrente, en alguna medida parecieran establecer limitaciones en cuanto al momento en que, después de haberse producido el riesgo, el siniestrado estaría en capacidad de demandar. A fojas 40 se lee dentro del contrato de seguro lo que sigue:

"18. DEMANDA A LA COMPAÑÍA (PROTECCIÓN B)

Ninguna demanda será admisible contra la Compañía, a menos que, como condición precedente a dicha demanda el Asegurado haya cumplido totalmente con todos los requisitos establecidos en la Póliza. Tampoco será admisible demanda contra la Compañía, hasta que el monto de la obligación que el Asegurado tenga que pagar, haya sido determinado, bien sea por medio d fallo en contra del mismo, después de juicio, o por medio de acuerdo escrito entre el asegurado, el demandante y la Compañía. Cualquier persona o representante legal que haya obtenido dicho fallo o acuerdo escrito, tendrá derecho, después de ello, a recobrar bajo las condiciones de esta Póliza, de la misma manera y el mismo alcance que el Asegurado. Ninguna de las condiciones indicadas en esta Póliza, otorgará a persona (s) u Organización, derecho alguno de unirse a la Compañía como codefensor en cualquier acción contra el Asegurado, tendiente a determinar la responsabilidad del mismo.

Banca Rota o Insolvencia del asegurado o de los herederos del Asegurado no relevará a la Compañía de ningunas de sus obligaciones otorgadas bajo esta Póliza.

19. DEMANDA CONTRA LA COMPAÑÍA (PROTECCIÓN C)

Ninguna demanda será admisible contra la Compañía, a menos que, como condición procedente a dicha demanda, el Asegurado haya cumplido totalmente con todos los requisitos establecidos en la Póliza, ni tampoco sin haber dejado un lapso de treinta días después de presentar las necesarias declaraciones de reclamo a la misma Compañía." (Fs. 40).

Lo anterior, unido a lo que también se dice en dicha póliza, acerca de que:

"El Asegurado tendrá la obligación de proporcionar a la Compañía todos los documentos que ésta le solicite tales como bitácora, licencias de pilotos, facturas, certificados de aeronavegabilidad, etc."

(Fs. 37) da a entender, y así parece haber sido interpretado por el demandante, que de conformidad con lo pactado las partes variaron la estructura, la forma, el modo, el plazo y las circunstancias en que el instituto jurídico de la prescripción operaría en relación con la ejecución del contrato celebrado, alejándose, por tanto, considerable mente de lo que el Código de Comercio contempla en las normas que regulan esta materia, con el añadido de que, además, se modifica el señalamiento que la ley ha hecho para precisar desde qué instante los derechos derivados del contrato se hicieron exigibles.

En este sentido, es ilustrativo y oportuno remitirse a las opiniones del licenciado ADÁN ARNULFO ARJONA cuando, refiriéndose al tema de "las cláusulas procesales en la contratación mercantil" (Revista del Doctorado en Derecho, 1, ULACIT, 1994), hace un examen de algunos pactos que con frecuencia son incluidos en los contratos mercantiles, producto de la inventiva de los contratantes, caracterizados por no tener un reconocimiento legal expreso y denominados "Cláusulas Procesales Atípicas". Entre éstos enumera el "Convenio de No Demandar", en el que las partes asumen la obligación de no acudir a los tribunales en reclamo de sus derechos, hasta tanto se cumplan determinados supuestos, y, advierte sobre su eficacia legal, en el plano del derecho procesal, lo siguiente:

> "Ahora bien, si por el contrario el pacto es analizado en su perspectiva procesal, tendremos que concluir que el mismo carece de eficacia por la sencilla razón de que el derecho que tiene toda persona para acudir a los tribunales en demanda de protección para sus intereses no puede ser limitado o menoscabado más que por las causas expresamente establecidas en la ley (Art. 230 C. J.). Ese derecho a la tutela judicial, por representar una garantía fundamental de carácter pública, general y asbtracta no es susceptible de disposición por los particulares. De manera que, al no tener dicho pacto ninguna eficacia procesal, las partes que por él se han obligado pueden promover su demanda sin dificultades ante los organismos jurisdiccionales competentes. Es menester anotar a este respecto que el pacto de no demandar no puede tener jamás el efecto de producir la inadmisibilidad de la demanda ni tampoco el de afectar la validez de las actuaciones procesales adelantadas con motivo del ejercicio del derecho de acción. En otras palabras, si una persona, a pesar de que se obligó a no hacerlo, promueve su demanda ante los Tribunales no puede invocársele la existencia del pacto para impedir que el respectivo proceso se trámite. El único efecto que podría tener tal convención gravitaría sólo en relación con el aspecto material de la pretensión ejercitada."

Consecuentemente, debe quedar claro que el derecho a la tutela judicial no puede ser limitado por los particulares, a través de este tipo de pactos, en atención a lo normado por el artículo 230 y 459 del Código Judicial.

La prescripción de las acciones, sus términos y las disposiciones legales que las reglan y consagran, en cualquiera de las ramas en que se pueda dividir el ordenamiento jurídico, pertenecen a un ámbito especial y delicado en virtud de los intereses que tutelan y, por su naturaleza, traspasan y van más allá de lo que pudiera considerarse el mero provecho de los particulares. La cuestión tiene que ver directamente con el orden jurídico procesal, concebido dentro de lo que no vacilamos en calificar como el orden público, en contravención del cual no le es lícito a las partes establecer pactos, cláusulas o condiciones de cualquier naturaleza que estas sean. En el terreno de la prescripción sólo es concebible admitir la intervención del legislador en uso de sus especiales atributos reglamentarios. No pueden, a juicio de la Sala, los particulares, por más que se amparen en el principio de la autonomía de la voluntad o de la libertad de contratación, celebrar pactos e introducir cláusulas contractuales modificadoras o abiertamente contrarias a lo previsto en la ley en materia de prescripción. Si las partes así lo hicieron en un contrato, no importa que éste sea civil o mercantil, las cláusulas pertinentes carecerían de toda validez, pues con ellas se estaría invadiendo un terreno reservado a lo que se encuentra establecido en las disposiciones legales, se entraría de lleno en una violación del orden público y se infringiría sin dudas lo dispuesto en el artículo 1106 del Código Civil.

No vacila la Sala en apuntar que las cláusulas de la póliza que arriba fueron citadas caen en el terreno de la ilegalidad, por lo que no le está permitido a los jueces aplicarlas y dada esa condición carecen de cualquier eficacia para obligar a las partes del contrato. Dichas cláusulas se incorporaron al contrato en abierta contradicción con el artículo 1649 del Código de Comercio que es concluyente cuando dispone que "<u>los términos fijados</u> para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán <u>fatales e improrrogables</u>". La pregunta lógica que surge es la siguiente: ¿fijados por quién? Pues es evidente y natural que no puede ser por las partes, sino precisamente por la Ley. El artículo 1649A indica cómo se interrumpen los términos de la prescripción de las acciones mercantiles -por la presentación de la demanda, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor-. Son sólo esos tres los supuestos que la Ley nos permite utilizar para producir el fenómeno de la interrupción del término de prescripción de las acciones mercantiles, y no le es dado a los hombres, sin la intervención del legislador, crear nuevos modos de interrupción de esa clase de prescripción extintiva. Las razones que se han dejado señaladas vuelven a concurrir para estimar esta materia como perteneciente al orden público que las partes no se encuentran en capacidad de vulnerar a su antojo. El artículo 1640 explicita que

"el término para la prescripción de las acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible". Pues bien, conformémonos con ese mandato, porque no está en la capacidad de las partes celebrantes el modificarlo, sin poner en peligro la seguridad jurídica y sin correr el riesgo de introducir la incertidumbre en el campo de la exigibilidad de las obligaciones contractualmente concertadas. El numeral 5 del artículo 1651 del Código de Comercio especifica que "las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en un año"; entonces no queda otro camino que obedecer esa orden que la Ley imparte, entendiendo que, frente al problema de la prescripción, no hay espacio ni para su renuncia anticipada ni para que los particulares la estructuren a su antojo, capricho o conveniencia.

Si las compañías de seguro incorporan a sus pólizas -típicos contratos de adhesión- cláusulas que de alguna manera inducen o pueden llegar a inducir a los asegurados a la confusión, a equivocaciones y a errores fatales, en cuanto al punto que comentamos en este juicio o en relación con cualquier otro aspecto envuelto en la contratación, ese hecho no autoriza ni faculta a los jueces para apartarse de la aplicación rigurosa de las disposiciones legales que muchas veces, aún en casos dolorosos, hay que respetar. Para impedir que una aseguradora incluya en la póliza cláusulas destinadas a confundir al asegurado hasta llevarlo a perder de vista cuáles son los derechos y obligaciones a que lícitamente queda sometido, en el Estado existe, como organismo especializado en estos asuntos, la Superintendencia de Seguros cuya misión, entre otras, es velar para que la transparencia, la buena fe y la lealtad se conviertan en las normas de conducta prevalecientes entre las compañías aseguradoras dedicadas a la explotación de este negocio en nuestro país.

El distinguido profesor Don Renato Osores, en sus valiosos apuntes de Derecho Mercantil, al referirse al tema de la prescripción en aquella parte de su obra dedicada al estudio del seguro de daños y del seguro de personas, expresa con toda claridad:

> "Prescripción.- Transcurrido un año de la fecha del siniestro, la compañía queda libre de la obligación de pagar las pérdidas o daños, a menos que esté en trámite un arbitraje o acción judicial con motivo de la póliza." (F. 129).

Por su parte, el tratadista colombiano Hernán Fabio López Blanco, en su obra Comentarios al Contrato de Seguros, segunda edición, se encarga de advertir en términos muy precisos lo que se pasa a transcribir.

> "e) Interrupción de la prescripción emanada del contrato de seguro.
>
> A partir de la vigencia del decreto 1400 de 1970 (nuevo Código de procedimiento Civil), la única forma de interrumpir civilmente la prescripción de acciones es por medio de la demanda, es decir, que necesariamente debe presentarse esta, para de allí colegir el momento exacto de interrupción de la prescripción que será el día en que se presente,
> ...
> Es la única forma viable de interrumpir civilmente la prescripción dentro del contrato de seguro, aspecto que consideramos sumamente importante, sobre todo para el asegurado o el beneficiario, porque el hecho de presentar una reclamación extrajudicial no constituye factor que la interrumpa; de ahí que si, por ejemplo, se formaliza una reclamación faltando un mes para que venza el plazo de la prescripción ordinaria o extraordinaria para el caso poco importa- y la asequradora guarda silencio dentro del mes de que dispone, si se va a demandar pasada tal fecha, la acción habría prescrito y, posiblemente, será hecho exceptivo que el demandado (asegurador) debe alegar en su favor. Por consiguiente, en hipótesis como esta resulta medida de elemental prudencia formular la demanda para evitar la desagradable sorpresa de hallarse ante la extinción de la posibilidad de reclamar nuestro derecho, lo cual, después de todo, equivale a perderlo (desde el punto de vista práctico),
> ..."

> Debe quedar muy claro, pues, que ni la presentación de la reclamación ni el aviso del siniestro son circunstancias que tengan eficacia para interrumpir la prescripción emanada del contrato de seguro." (Fs. 238.239) (Subraya la Sala).

Se quiere hacer énfasis en que lo dispuesto en alguna de las cláusulas de la póliza sobre algún plazo para hacer el reclamo, no afecta el momento a partir del cual se debe comenzar a contar el término de prescripción que establece la ley para las acciones derivadas de los contratos de seguro. Ese término lo fija nuestro Código de Comercio en un año que ha de contarse desde que la obligación es exigible, en este caso desde que ocurrió el siniestro de aviación. Por tanto, en relación a lo que sostuvo la parte demandante en el sentido de que reclamó a la aseguradora (como consta a fojas 24) y que, de acuerdo a cláusula 19 de la póliza cuenta con 30 días más, debe advertirse que el año de prescripción, dentro del cual tenía la oportunidad de presentar la demanda, corre independientemente del referido término de 30 días. Aún en caso de que los 30 días corrieran después de iniciados los últimos días del año de prescripción, dicho término de prescripción no se extendería. Esta hipótesis es a la que se refiere el citado autor López Blanco concluyendo en que ni siquiera en ese supuesto se prolongaría el término de prescripción porque la vigencia del término de 30 días no impide la interposición de la demanda.

Luego de las reflexiones que el examen de este recurso le ha impuesto a la Sala es imperativo concluir que la decisión adoptada por el Ad-quem no es susceptible de ser casada, puesto que en autos se encuentra plenamente demostrado que por el transcurso del tiempo se produjo el fenómeno de la extinción de la acción de la cual gozaba la parte actora para reclamar el cumplimiento de la obligación demandada y, por lo tanto, la excepción de prescripción propuesta está debidamente comprobada.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 4 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior, del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario propuesto por el recurrente contra ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **SIXTO ÁBREGO**, en su calidad de apoderado judicial de **CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.**, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia recurso extraordinario de casación, con el propósito de impugnar la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 23 de mayo de 1995, mediante la cual se confirmó la proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, el 22 de diciembre de 1992, por la cual se accedió a lo demandado por el señor ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI dentro del juicio ordinario de Nulidad y Reivindicación de Bien Inmueble, iniciado por este último en su condición de promotor de este negocio jurídico.

La sentencia confirmada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

> "`ACCEDE a lo solicitado por la parte demandante originalmente, en el sentido de que se proceda a nulificar el límite actual de la finca 6836, de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. con relación a la finca 10551 de propiedad del señor ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, en forma de evitar y definir cuántos metros hay de traslape de la primera dentro de la segunda y se dé pleno cumplimiento a los términos establecidos en la sentencia de fecha siete (7) de mayo de 1954 y confirmada mediante sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo de 1955 por el Tribunal Superior. Para ello se deberá realizar peritaje por expertos nombrados por este Tribunal, en compañía de uno de cada una de las partes, los cuales deberán rendir un informe a este tribunal con los detalles aquí solicitados, a más tardar, treinta (30) días hábiles, después de ejecutoriada la presente resolución. Así mismo, se NIEGA EL INCIDENTE DE NULIDAD propuesto por la parte demandada originalmente, por razones ya expuestas y se NIEGA la demanda en reconvención promovida por ésta. Se CONDENA en costas a la parte vencida en juicio por un monto de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00)". (Fs. 395-396) ". (Fs. 438).

Inconforme con la decisión que desató la controversia, el recurrente acudió a esta Sala de la Corte para que le sea tomada en cuenta la censura que, a través de dos causales de fondo, le endilga a la resolución de segundo grado. Ambas causales fueron admitidas por la Sala y ambas partes hicieron uso del trámite de alegatos, razón por la cual el recurso se encuentra en la etapa de ser decidido, tarea que abordará de inmediato la Sala de casación.

PRIMERA CAUSAL

Como primera causal el recurrente invoca la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En respaldo del cargo de injuricidad formulado, el impugnante expone en los motivos su inconformidad con la valoración que hiciese el Tribunal Superior del informe pericial rendido por el perito de la parte actora (demandada en reconvención), Ingeniero HIPÓLITO GONZÁLEZ, denunciando la forma irregular, desde su punto de vista, como fue designado. A propósito del cargo, indica que "no se le designó, como debía ser, en el escrito de pruebas respectivo, sino que, sin justificación legal alguna, fue designado horas antes de practicarse la diligencia pericial ...". Asegura que el dictamen producido en esas circunstancias "no reúne los requisitos legales para constituir un medio probatorio válido y eficaz, debido a que emerge de una persona que, por no haber sido designada perito legalmente, no posee tal calidad", dándose su admisión sin ceñirse al cumplimiento de los términos y formalidades señalados en la ley. Añade el recurrente que, en cuanto al informe rendido por el perito que designara el tribunal, agrimensor ERNESTO JAÉN, también se ha cometido otro yerro jurídico cuando se le atribuye mérito probatorio a sabiendas de que su dictamen se basó en lo actuado, en los datos suministrados y en los percibidos, no por él, sino por el perito de la parte actora, cuya actuación, como se ha visto, se califica de ilegal. Se insiste en que la experticia que el agrimensor ERNESTO JAÉN se atribuye como propia no fue practicada por él mismo, incurriendo, debido a esa causa, en el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, pues no estudió personalmente el objeto y materia sometidos a su peritaje. Cuestionada, además, por el casacionista, resulta, así mismo, la decisión del Tribunal Superior que no le otorgó mérito probatorio al dictamen rendido por el perito de la parte demandada, para reivindicar, en cambio, las experticias que favorecen a la parte actora, aún careciendo del valor que en la sentencia se les atribuye.

El casacionista afirma que se infringieron las siguientes disposiciones legales:

1) El artículo 954 del Código Judicial que se dejó de aplicar, ya que no habiéndose designado al Ingeniero HIPÓLITO GONZÁLEZ en el escrito de pruebas para que interviniese en la diligencia pericial propuesta por el actor, sino pocas horas antes de llevarla a cabo, el Tribunal Superior admitió como legítima la intervención de ese perito y justipreció su dictamen como plenamente válido.

2) El artículo 781 del Código Judicial, porque esta norma legal señala que para que las pruebas sean apreciadas deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades establecidos en el Código de Procedimiento. No obstante, alega el recurrente, la designación del perito GONZÁLEZ se hizo de manera extemporánea, sin que la oposición interpuesta mediante el incidente de nulidad usado para impedir su participación fuese tomado en cuenta por el juzgador.

3) El artículo 960 del Código Judicial considérase infringido al dejarlo de aplicar el Tribunal Superior pues el Tribunal concedióle valor al dictamen del perito ERNESTO JAÉN, cuya versión devino de la información suministrada por el perito de la parte actora, siendo el mismo un perito designado por el Tribunal y estableciendo la norma citada la obligación de que los peritos, como auxiliares de la justicia, estudien personal y directamente la materia que les corresponde examinar. Remarca el casacionista que:

> "No obstante lo anterior, la sentencia a fojas 452, último párrafo, obtiene su fundamento en las experticias practicadas por los peritos de la parte actora y del tribunal, violando de esta forma el precepto transcrito con anterioridad". (fs. 510).

4) El artículo 967 del Código Judicial se estima violado porque se valoró una experticia (la del Ingeniero GONZÁLEZ) practicada al margen de la ley; en donde se usaron como fuente de información documentos privados sin valor probatorio alguno, no se recorrió el terreno sujeto a examen en toda su extensión y no se tomó en consideración que uno de los linderos de las fincas alrededor de las que surge esta controversia se había movido a causa de una inundación. Lo anterior se considera que provocó que, en la apreciación de la prueba, el Tribunal Superior se apartase de lo consignado en la norma legal citada; concretamente, en aquello que atañe a la relación que debe existir entre la fuerza del dictamen y el estudio del material de hecho, en concordancia con la aplicación de las reglas de la sana crítica, su conformidad con las demás pruebas y los otros elementos de convicción que se encuentren en autos.

5) Sí es obligación de las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les sean favorables y la parte actora no aportó la prueba plena con aquellos elementos de convicción en que pretende fundamentar su demanda, el resultado es que la resolución recurrida violó, en opinión de la censura, el artículo 773 del Código judicial. Como el señor BERASTEGUI no probó que los terrenos que constituyen la finca N° 6836, de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., estuviesen traslapados en la finca de propiedad del demandante, la resolución recurrida no le debió hacer este reconocimiento en la sentencia.

6) Como derivación de la infracción de las normas del Código de Procedimiento que arriba se dejan mencionadas, se denuncia la violación del artículo 582 del Código Civil, cuyo texto se transcribe a continuación:

> "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.
>
> Esta acción no procede contra el tercer poseedor inscrito que se halle en los casos de la segunda parte del artículo 1762 y de la primera parte del artículo 1763. En este evento la acción que procede es la que establece el artículo 591". (fojas. 512).

Estructurada como ha sido esta primera causal, empleándose uno de los medios de impugnación de carácter probatorio que de acuerdo con la ley se pueden utilizar para remediar aquellas decisiones defectuosas que, debido al error en

la apreciación de la prueba, hubiésense pronunciado, la Sala se dispone a abordar el examen de los cargos de injuricidad endilgados, previo el cuidadoso estudio de las imperfecciones que a la sentencia del Tribunal Superior le son imputadas.

Empieza el recurrente, como hemos visto, apuntando que el Tribunal Superior no debió conferirle valor probatorio al dictamen de un perito designado extemporáneamente, circunstancia que, en su opinión, le suprime al medio probatorio la eficacia y la validez que le fueran reconocidas por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

El tema fue tratado con detenimiento por el Tribunal Superior en la resolución de segunda instancia, por eso le parece a la Sala indicado remitirse a lo que, en cuanto a este punto, comentó el Tribunal Superior en su sentencia:

> "Se advierte que el primer argumento esgrimido por la parte apelante, con intención de enervar los efectos de la sentencia impugnada, radica en lo que a su juicio constituye una inobservancia severa del procedimiento establecido en el Código Judicial, para la designación y nombramiento de peritos.
>
> Opina esta Judicatura que con fundamento en dos razonamientos, no cabe admitir tal señalamiento. En primer lugar, basta analizar el procedimiento consignado en los artículos 954 y 956 de la excerpta judicial, que al efecto disponen:
>
> "ARTÍCULO 954. La parte que adujere la prueba pericial debe indicar el punto o puntos sobre que ha de versar el dictamen de los peritos y expresará en el mismo escrito la persona o personas que designe para desempeñar el cargo.
>
> Cuando la parte haya pedido un peritaje sin llenar los requisitos exigidos, puede el Juez practicar tal prueba, previa notificación a las partes. En caso de que indique el nombre del perito, el Juez puede designar uno.
>
> La contraparte, dentro del término de traslado, podrá formular su cuestionario, designar peritos o adherir a los ya nombrados. Vencido este término, el Juez señalará día y hora para la práctica de las pruebas y fijará el término que tienen los peritos para rendir su dictamen.
>
> El Juez deberá en todo caso, designar uno o varios peritos, los cuales participarán con las mismas facultades y deberes que los peritos designados por las partes".
>
> ARTÍCULO 956. Cada parte puede designar hasta dos peritos.
>
> Cuando cada parte designe un solo perito y alguno de ellos no concurriere a la diligencia, por cualquier causa, será reemplazado por la parte respectiva en el acto mismo o dentro de las veinticuatro horas siguientes, si hubiere tiempo suficiente para ello".
>
> Las normas transcritas se explican por sí solas. Es cierto que la parte proponente de la pericia, debe designar a sus peritos en el mismo escrito en que la promueve, pero el procedimiento contempla supuestos en que la parte no hace tal designación sin que por ello la prueba deje de ser practicada, con lo que se desestima el argumento expresado por la recurrente, en términos de que la designación extemporánea del perito del acto, impidió la consagración en la encuesta de los principios de contradicción y debido proceso". (Fs. 442 y 443).

Se puede apreciar que el criterio del Tribunal Superior fue el producto de la consideración integral de lo dispuesto en dos normas del Código de Procedimiento; una de las cuales -el artículo 954- es precisamente una de las que

también cita el impugnante con el señalamiento de que fue violada por omisión en la sentencia. Bien entendidos los alcances y los objetivos del Código Judicial en materia probatoria, no es permisible ignorar la filosofía y el pensamiento rector que inspiraron al ordenamiento jurídico procesal panameño que se coloca por encima del rigor formalista exagerado tan propio de anticuadas concepciones, ya por fortuna superadas. La obligación primordial que gravita sobre el juzgador es la de encararse a la verdad, indagándola y descubriéndola, para fundamentar en los hechos y en los datos procesales, confiablemente allegados al expediente, el criterio que le permita culminar con un veredicto justiciero. Si las cosas se miran desde ese ángulo no ve la Sala razones de peso, ni siquiera desde el punto de vista estrictamente formal, para aceptar los cargos que contra la prueba pericial practicada formula el casacionista. Aparte del argumento baladí con que la prueba es atacada, no ha logrado el impugnante convencernos de que el perito HIPÓLITO GONZÁLEZ sea persona descalificada para desempeñar el cargo por motivos de las inhabilidades e incapacidades que la ley contempla como razones para recusarlo.

Sobre la incidencia de nulidad que el recurrente denuncia como no tomada en cuenta por el Tribunal Superior, tampoco, en opinión de la Sala, el reclamo justifica el cargo. El incidente fue denegado por el Tribunal Superior utilizando los criterios que se citan a continuación:

> "A partir de la noción descrita, la designación y nombramiento del perito del actor, HIPÓLITO GONZÁLEZ, no constituye vicio o pretermisión que alcance la magnitud propicia para traducirse en la anulación de lo actuado desde aquel momento.
>
> Se hace necesario precisar también, que el motivo a través del cual pretende la recurrente lograr la nulidad de lo actuado, no se encuentra previsto en la enumeración de causales de nulidad contenidas en el artículo 721 del Código Judicial y siendo nuestro sistema de nulidad de número "clausus" y taxativo, no resulta admisible impetrar la nulidad por causales distintas a las contempladas en la ley. Actuar en forma contraria violentaría el principio de la especificidad conforme al cual no hay nulidad sin norma que la establezca." (Fs. 444).

En el escrito presentado como alegato de conclusión ante la Sala y en respaldo de sus argumentaciones destinadas a demostrar la nulidad y la ineficacia probatoria del peritaje cuestionado, el casacionista ha acudido a la sabia y reputada autoridad del Dr. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, de quien cita sus acertadas opiniones vertidas en torno a las consecuencias que surgen para cualquiera de las partes, cuando en violación del derecho de defensa o en ausencia de las garantías de la debida contradicción, se practica y se valora la prueba pericial. No será esta Sala de la Corte la que contradiga al ilustre maestro colombiano, pero, eso sí, no se abstendrá de hacerle notar al recurrente que en la misma obra citada por él (a la altura de la página siguiente del texto que transcribe) el ilustre colombiano se encarga de aclarar el contexto y las circunstancias en que, a juicio suyo, podría el peritaje, en su condición de pieza de convicción, ser inaceptable y nulificado.

A propósito de "QUE NO SE HAYA VIOLADO EL DERECHO DE DEFENSA, DE LA PARTE PERJUDICADA CON EL DICTAMEN O SU DEBIDA CONTRADICCIÓN", especifica el Dr. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA: "Se relaciona este requisito con el cumplimiento de los principios generales de la publicidad, la contradicción de la prueba y la prohibición para el juez de emplear su conocimiento privado sobre los hechos ... .

El dictamen practicado a espaldas de las partes o que se conserve secreto o que sea conocido solamente del juez antes de la sentencia o de la resolución del incidente dentro del cual sirve de prueba, carece totalmente de valor probatorio, porque viola el derecho constitucional de defensa, de la parte que resulte perjudicada". (Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, 5ta. Edic., 1995, pág. 345).

No es una situación semejante, ni cercanamente parecida, la que se nos

ofrece en un caso como éste, en donde la parte que se considera agraviada tuvo todas las oportunidades para contradecir y discutir el dictamen pericial rendido y que ahora impugna, antes de la decisión adoptada por el juzgador; fuera de que también se le respetó su derecho de designar sus propios peritos, quienes pudieron examinar y dictaminar sobre la misma materia acerca de la que se pronunció el Ingeniero HIPÓLITO GONZÁLEZ.

No debe pasarse inadvertido que, conforme al artículo 730 del Código Judicial, las nulidades sólo serán decretadas cuando la parte que lo haya solicitado sufriere o pudiese sufrir perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables. No se encuentra la alegada por el casacionista entre las nulidades que se consideran insubsanables (por ejemplo, de distinta jurisdicción, la falta de notificación del Ministerio Público o la suplantación de la persona de alguna de las partes). A lo largo de todo el debate procesal se advierte que el impugnante, por todos los medios, ha rehuido el señalar con precisión cuál fue el supuesto perjuicio procesal que se produjo por los motivos que invoca como causales de la nulidad. Mucho menos ha podido demostrar que se hubiese ocasionado efectivamente un agravio irreparable; lo que junto a la amplia facultad discrecional que el artículo 954 le confiere al juzgador en estos casos le sirve a la Sala para determinar que la queja que en este sentido formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal Superior carece de mérito para ser tomada en cuenta.

En conexión con la infracción del artículo 954 se adujo además la del artículo 781; pero si no se estiman meritados los cargos que se hacen contra el primero, mal podrían ser aceptados, entonces, los formulados en contra de esta última disposición legal.

Como ha sido dicho, dentro de esta causal se ha denunciado, también, como desacertado el hecho de que la sentencia le concediese valor probatorio al informe pericial rendido por el agrimensor ERNESTO JAÉN, perito del Tribunal, a quien se le imputa no haber cumplido formalmente su cargo y haber basado su informe en el elaborado por el perito de la parte actora. Por supuesto, de ser cierta la acusación, el perito del Tribunal habría incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, pues, de resultar su informe el producto de un plagio, la pieza de convicción estaría viciada por defectos que la convertirían en inservible con relación a los propósitos de demostrar los hechos que se disputan dentro del presente proceso; y los cargos de injuricidad que el recurrente le endilga a la resolución estarían en condiciones de prosperar, porque es verdad que tal pieza procesal se ha convertido en asiento importante de la resolución contra la cual se recurre. La Sala debe, por tanto, dedicarle especial interés al análisis de ese informe que corre en el expediente de fojas 148 a 152, calzado con la firma del señor ERNESTO JAÉN.

Lo primero que se observa, cuando se considera el grave cargo formulado contra el perito del Tribunal, es que el casacionista se ha valido de frases aisladas que, si bien forman parte del informe, no bastan para sustentar lo que se afirma. Es más, la Sala no vacila en calificar como caprichosas, subjetivas y temerarias esa clase de aseveraciones hechas por el recurrente con el propósito de respaldar sus cargos, aún cuando haya insistido en recurrir nuevamente a las enseñanzas del Dr. DEVIS ECHANDÍA, en vano esfuerzo para hacerlos convincentes. Como en el caso anterior, se vuelven a forzar los juicios y las opiniones del autor colombiano aplicándolos artificialmente a las particularidades del caso bajo examen. No es verdad, como ha tenido oportunidad de verificarlo la Sala, que el perito ERNESTO JAÉN haya copiado su informe del confeccionado por el perito HIPÓLITO GONZÁLEZ, así como tampoco ha podido demostrarse que no lo hubiese confeccionado personalmente por el mero hecho de haber dicho en una parte de su dictamen que **"procedí a verificar en el terreno lo actuado por el Ingeniero HIPÓLITO GONZÁLEZ, perito de la parte actora ... "**; o porque en otro momento expusiera: **"cabe señalar que concuerdo con la explicación dada por el Ingeniero HIPÓLITO GONZÁLEZ"**. Por otra parte, se cuida mucho el impugnante de entrar al fondo y al verdadero contenido de las experticias practicadas y una evasión de esta naturaleza no puede sino marcar a sus denuncias con un sello de malicia y de mal intencionada suspicacia, a partir de las cuales es imposible que se le conceda razón en lo que ha argüido a través del empleo de la causal del error de

derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, viéndose la Sala en la necesidad de rechazar los cuestionamientos que no alcanzan ni tienen suficiente solidez jurídica para anular la resolución dictada en segunda instancia. Así mismo, carecen de todo asidero los cuestionamientos que mediante esta causal se le endilgan a la sentencia en relación con la violación de las otras disposiciones del Código de Procedimiento y del artículo 582 del Código Civil, en este último caso como derivación de aquellas supuestas infracciones legales.

SEGUNDA CAUSAL.

Abordaremos el examen de la segunda causal invocada tomando como punto de partida lo expuesto por el casacionista en los cinco motivos de que se ha servido para alegar que hubo infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa que ha influido sustancial-mente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

"MOTIVOS EN LOS QUE SE APOYA ESTA SEGUNDA CAUSAL INVOCADA.

PRIMERO: La parte actora ejercitó una acción reivindicatoria sobre un terreno que forma parte de la finca 6836, propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., lo que hizo en demanda presentada el 26 de abril de 1991 (f. 01) esto es, después de haber transcurrido más de veinte (20) años desde la fecha en que la citada finca pertenecía a MERCEDES DÍAZ DE DURÁN, quien la había adquirido por sucesión del señor COSTA, y quien la vendió a su esposo ERDULFO DURÁN, persona que a su vez la vendió a PLUTARCO A. CASTILLO PÉREZ, quien por su parte le vendió a CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.

SEGUNDO: Lo expresado en el motivo anterior deja claramente establecido que el título de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. sobre la finca 6836 se encuentra inscrito en el Registro Público desde hace más de veinte años antes de la fecha de presentación de la demanda, hecho que no ha sido negado por la parte actora, y que fue claramente alegado, tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de ambas instancias, por la parte demandada.

TERCERO: El hecho de que la acción reivindicatoria ejercitada por la parte actora haya sido presentada después de transcurrir más de veinte (20) años desde la fecha en que el título de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. había sido inscrito en el Registro Público, hizo que se hubiese prescrito la acción ejercitada por la parte actora, cuyo término máximo de prescripción es de 15 años.

CUARTO: El hecho de que CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. hubiese adquirido el título de propiedad sobre la finca en referencia en un cuarta transacción inscrita en el Registro Público y que la enajenación de esa finca en favor de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. haya sido hecha por PLUTARCO CASTILLO PÉREZ, persona que conforme al Registro Público tenía plena facultad para ello, hace que la nulidad de los puntos y linderos relativos a la finca 10551 de propiedad de la demandante no pueda afectarlo.

QUINTO: El apoderado de la parte demandada hizo valer en ambas instancias la excepción de prescripción de la acción ejercitada y que a su mandante no podía afectarlo la anulación de los puntos y linderos solicitados por la parte actora. Sin embargo, el Tribunal recurrido desestimó ambos argumentos, lo que implicó proferir un fallo que accedió a las pretensiones de la parte actora, que infringió claras normas legales de carácter sustantivo". (Fs. 513).

La causal de violación directa se construye, además, a base de denunciar como normas legales infringidas los artículos 582, en su inciso segundo, y 1700 del Código Civil. Veamos lo expresado en cada una de esas normas.

"ARTÍCULO 582. la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que

el poseedor de ella sea condenado a restituirla.

Esta acción no procede contra el tercer poseedor inscrito que se halle en los casos de la segunda parte del artículo 1762 y de la primera parte del artículo 1763. En este evento la acción procedente es la que establece el artículo 591".

> ARTÍCULO 1700.- Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los quince años.
>
> Entiéndese esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción."

Se aprecia que en el artículo 582 del Código Civil se recoge la definición de la acción reivindicatoria o acción de dominio, precisándola como aquella mediante la que el dueño de una cosa que no se encuentra en su poder puede llegar a recuperarla, mediante la orden judicial que se le imparta al poseedor de la misma para que la restituya. El inciso segundo de la norma prescribe la improcedencia de la acción cuando el reclamo o la demanda se interponga contra un tercero que ostente la condición de poseedor inscrito "en los casos de la segunda parte del artículo 1762 y de la primera parte del artículo 1763", obviamente del Código Civil. En esas condiciones, sigue diciendo la norma, "la acción que procede es la que establece el artículo 591". Conforme al artículo 591, en correspondencia con el artículo 582, la acción reivindicatoria excepcionalmente debe ejercerse contra el enajenador de la cosa, para que éste restituya lo que haya recibido por ella, en caso de haberse hecho imposible o difícil la persecución de dicha cosa. En respaldo de su punto de vista el impugnante expone y argumenta en este apartado del recurso lo siguiente:

> "... bajo el pretexto de una demanda de nulidad de medidas de puntos y linderos, una acción reivindicatoria y una acción de rescisión del título de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. sobre la finca 6836, para recuperar terrenos que pertenecen a la finca 6836 de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. bajo el pretexto de que tales terrenos pertenecen a la finca 10551 de su propiedad, alegando un supuesto traslape de los linderos de las fincas.
>
> Debido a lo anterior el Tribunal recurrido debió reconocer que CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. con arreglo a la norma legal invocada, no podía ser afectada por la anulación de los puntos o linderos de la finca 10551, porque CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. tiene la condición de tercer poseedor inscrito, tal como quedó comprobado en el expediente. Esa sociedad adquirió la finca 6836 del señor PLUTARCO ANTONIO CASTILLO PÉREZ, este a su vez la había adquirido de la señora MERCEDES DÍAZ DE DURÁN, persona que la había adquirido por sucesión como parte de otra, en sucesivas transacciones o acto ejecutados por las personas que en Registro Público aparecían como plenamente facultados para transmitir la propiedad o enajenar tal finca." (Fs. 515).

En el análisis de la supuesta infracción de la disposición citada por el casacionista, acerca del significado y alcance del inciso segundo del artículo 582, se hace particular énfasis en el significado que debe dársele a la segunda parte del artículo 1762 y a la primera parte del artículo 1763, por ser éstas las circunstancias en donde expresamente, según lo dispuesto por la norma infringida, la acción reivindicativa **"no procede"**. Dice el casacionista:

> "Ahora bien, según el artículo transcrito, la acción reivindicatoria y la acción de rescisión del título no proceden contra el tercer poseedor inscrito que se encuentre en los supuestos contemplados en la segunda parte del artículo 1762 y en la primera parte del artículo 1763 del Código Civil, esto es, que el poseedor haya adquirido su título de la persona que conforme al Registro aparezca con derecho a transmitir o a enajenar la propiedad y que el poseedor del bien haya inscrito su título de propiedad en el Registro. Todos estos supuestos los cumple a cabalidad CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.

> pues adquirió su título de propiedad de PLUTARCO ANTONIO CASTILLO PÉREZ, quien estaba plenamente facultado para ello conforme al Registro Público (f. 204 a 207) y había inscrito su título de propiedad en el Registro Público. (Fs. 516).

La Sala decidió transcribir abundantes pasajes de la exposición hecha por la censura para apreciar con toda claridad cuáles han sido, de manera específica, los cargos de injuricidad en que se apoya la causal invocada, comenzando por los motivos de la misma (por cierto, todos ellos referidos al fenómeno de la prescripción), así como para evidenciar que los mismos no tienen absolutamente nada que ver con la primera disposición legal (582 del C. Civil) que se cita como violada por la resolución que se busca anular con este recurso. Obsérvese que el recurrente no ha hecho el menor esfuerzo argumental para intentar explicarle a la Corte cómo la violación directa del artículo 582, libre y soberanamente seleccionado por él como la norma infringida, liga o se vincula con los cargos de injuricidad expresados también por él en contra de la sentencia. Entre los motivos en que se fundamentan los cargos de injuricidad y las disposiciones legales que se denuncian como infringidas, por razones de lógica elemental, alguna relación debe existir. No es admisible, como ocurre en este caso, que se asegure en los motivos de la causal -en resumidas cuentas los vicios jurídicos que se le atribuyen a la resolución- que el problema radica única y exclusivamente en que el Tribunal Superior se abstuvo de declarar prescrita la acción utilizada por el demandante y luego se planteen como violadas disposiciones legales, por completo, alejadas del fenómeno de la prescripción como acontecimiento jurídico que produce la extinción de la acción empleada por el demandante. Pues bien, eso ha sido, ni más ni menos, lo que el casacionista ha hecho en la parte del recurso en la que nos hemos detenido antes de continuar con el análisis. La manifiesta incongruencia entre ambos apartados de la causal invocada le impide a la Sala acoger la solicitud de casar la sentencia apoyándose en las razones utilizadas hasta el momento por el recurrente.

No obstante las anteriores observaciones, la Sala reconoce que con la cita de la otra disposición legal denunciada como infringida, el casacionista retorna al escenario jurídico en donde por su propia iniciativa decidió ubicar el cuestionamiento que le formuló a la sentencia. Procederá esta Superioridad, en consecuencia, a estudiar las consideraciones y los argumentos dados por el impugnante en los motivos de la causal, por supuesto, confrontándolos con lo dispuesto por el artículo 1700 del Código Civil que, como ya sabemos, es la segunda y última disposición legal que cita el casacionista como infringida.

Acerca de la forma como se dice violado directamente por omisión dicho artículo, expresa el recurrente:

> "Esta norma legal fue violada en forma directa por omisión, porque según ella las (sic) acción reivindicatoria ejercida por el señor BERASTEGUI se había extinguido por prescripción ejercida al momento de presentar la demanda el 26 de abril de 1991, debido a que habían transcurrido más de veinte años desde que la señora MERCEDEZ DÍAZ DE DURÁN inscribió como de su propiedad los terrenos correspondientes a la finca 6836, hoy de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. La parte demandante nunca llegó ese hecho por lo que está plenamente aceptado en el proceso y no existe duda sobre el mismo."

Por otro lado, CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. por conducto de su apoderado judicial, invocó en los alegatos de ambas instancias la excepción de prescripción extintiva que le favorecía (fs. 345 y siguientes y 421, 422 y siguientes del expediente), a pesar de lo cual el Tribunal no accedió a reconocer tal excepción que tenían un claro fundamento jurídico en el artículo 1700 del Código Civil.

> "De haber aplicado el Tribunal recurrido la norma legal invocada, habría tenido que reconocer que las acciones ejercitadas por el señor BERASTEGUI habían prescrito al momento de presentar la demanda, pues habían transcurrido más de quince (15) años desde la fecha en que los terrenos respectivos constituían propiedad cuyo título habían sido registrados en favor de otras personas, incluyendo a CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A." (Fs. 517, 518).

Debe la Sala constatar, en primer término, si en efecto la excepción de prescripción extintiva contra la acción reivindicatoria empleada por ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, en su condición de parte actora, fue alegada o no por la parte demandada en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 682 del Código Judicial, ya que, como se sabe, la de prescripción no es de aquellas excepciones que se puedan reconocer por el Tribunal en caso de no haber sido propuestas por el interesado. Afirma el casacionista que así lo hizo, pero que no recibió el reconocimiento debido por parte del Tribunal.

Ciertamente, a fojas 341 y siguientes del expediente puede leerse el alegato de conclusión mediante el cual el apoderado de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., en defensa de los intereses de su representado, aduce y alega a su favor los efectos del fenómeno de la prescripción extintiva en relación con la acción reivindicatoria de dominio empleada por la parte actora con el propósito de lograr la restitución del bien inmueble, o más exactamente, de la porción de la finca cuya restitución ha demandado mediante los trámites de este juicio ordinario. A fojas 350 se lee textualmente lo siguiente:

> "La permanencia de las anteriores condiciones, frente a la inactividad de la compañía Pinel y Lombardi durante el período de tiempo que la ley establece para que accione, produce que la acción de aquella Compañía para reivindicar sus supuestos derechos haya prescrito.
>
> Y si ello es así, con mayor razón se encuentra prescrita la acción de la parte actora de este proceso, pues la negligencia de la compañía Pinel, Lombardi y Cía., le fue transmitida cuando compró los supuestos derechos sobre la finca 3833." (Fs. 350).

En el escrito de sustentación de la alzada el apoderado judicial de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. -si bien de una manera confusa, donde sin mucha fortuna trata de explicar lo que él considera constituye la necesaria correlatividad que existe entre la prescripción adquisitiva de dominio (usucapión) y la excepción de prescripción de las acciones reales sobre los bienes inmuebles- vuelve a argüir y alegar, a favor de su causa, el fenómeno de la prescripción extintiva. Es decir, hay que convenir en que la excepción fue alegada, al margen de cuáles hayan sido las implicaciones, análisis, contenidos y efectos que el interesado, o sea la parte demandada, le hubiese otorgado a la excepción, incluyendo las consecuencias o semejanzas que le atribuyó, sobre todo, en relación con el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio, tal como esta última debe utilizarse para que surta efectos como medio de adquirir y constituir el derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles.

Correspóndenos ahora establecer los términos en que el Tribunal Superior se pronunció en la sentencia acerca de la prescripción alegada, a fin de esclarecer si el cargo que se endilga en su contra está o no justificado. Sobre el tema dijo el Tribunal:

> "Por otra parte, la demandada alega que a su favor operó la prescripción adquisitiva de dominio, por lo que no resulta viable declarar la nulidad de los linderos y medidas efectuadas en base a un supuesto traslape de fincas en inobservancia de la decisión de deslinde y amojonamiento proferida en 1954 y confirmada en 1955 por el Primer Tribunal Superior de Justicia.
>
> El concepto de prescripción adquisitiva comprende desde una perspectiva "... modo de adquirir los derechos reales ajenos sobre bienes ajenos, mediante la posesión de las cosas sobre las cuales recaen esos derechos, por el tiempo y con los requisitos legales." (GÓMEZ, José J.; BIENES, Bogotá, Publicaciones U. Externado de Colombia, 1983, p. 443)
>
> Apreciada desde otro ángulo, la prescripción adquisitiva ordinaria "Es la que está acompañada, además, de los requisitos generales estudiados, de justo título y buena fe, elementos característicos de la posesión regular." (ALESSANDRI Y SOMARRIVA; LOS BIENES Y LOS

DERECHOS REALES, Santiago, Imprenta Universal, 1982, p. 163).

> En ambos casos, no se vislumbra que la posición de la parte demandada se enmarque dentro de los presupuestos exigidos para la figura de la prescripción adquisitiva, pero sobre todo, con la presentación de la demanda el actor interrumpió el término que en apariencia reivindica la parte recurrente." (fs. 445, 446) (subraya de la Sala).

Obsérvese que el Tribunal se ocupa en sus análisis solamente del aspecto relacionado con el fenómeno de la prescripción adquisitiva, cuando discierne acerca de los derechos que puedan haberse constituido sobre los inmuebles o fincas alrededor de los cuales gira la controversia. Mientras tanto, pasa por encima, no se pronuncia o no se entera de la posibilidad procesal de que, en este caso, puedan haber concurrido los elementos constitutivos de la extinción de la acción o derecho que para reivindicar la cosa reclamada utilizó la parte demandante.

Tratándose de la prescripción extintiva, la pérdida del derecho no tiene obligatoriamente que ser el resultado de que otra persona lo haya adquirido, sino que basta con que su eficacia haya desaparecido y no será indispensable que esa desaparición conduzca a constituir un nuevo titular del mismo. Simplemente, la consecuencia consiste en que la no oportuna reclamación de un derecho convierte en ineficaz o imposible su efectividad, como una sanción destinada a castigar la pereza del titular de ese derecho.

En nuestro ordenamiento jurídico la regla general es que, tanto los derechos como las obligaciones, al igual que las acciones que la ley procesal concede y reconoce para exigir su cumplimiento, están sujetos al fenómeno de la prescripción, con las salvedades expresamente señaladas en la ley. Eso quiere decir que las acciones, cuando no se hayan ejercido durante el término (período de tiempo) que la ley indique, terminarán por extinguirse, o sea, que dejarán de existir y desaparecen. No se trata, por supuesto, de nada novedoso, sino tan solo de uno de los principios generales de derecho universalmente aceptados desde tiempos inmemoriales por todos los sistemas jurídicos conocidos.

El artículo 1700 del Código Civil señala el término de prescripción de las acciones reales sobre bienes inmuebles y dice que ese término es de quince (15) años. La acción reivindicatoria empleada por la parte demandante para materializar su pretensión; en otras palabras, para obtener una sentencia en que se declarase que la parte del inmueble bajo la posesión de la demandada que reclama debe restituírsele, es por antonomasia una acción real de las que el ordenamiento civil consagra para recuperar la posesión sobre bienes de esa naturaleza. Pues bien, de acuerdo al artículo 1700 esa es una de las acciones que prescribe, o lo que es lo mismo, se extingue, en quince (15) años y, por lo tanto, puede ser, perfecta y legítimamente, invocada en un proceso como el que nos ocupa.

Veamos a continuación dos aspectos íntimamente vinculados a la sentencia y a su desenlace que, de acuerdo con la Sala, no se pueden dejar de abordar en este caso. El primero tiene que ver con el tema de la interrupción de la prescripción. De alguna manera la sentencia dictada por el Tribunal Superior da a entender o insinúa que la presentación de la demanda interrumpió, con efectos anuladores, el término de la prescripción. Se ha referido, sin dudas, el Tribunal Superior a un principio o regla válida siempre y cuando la demanda se presente y haya sido notificada antes de que haya vencido el término de la prescripción. Realmente -parece innecesario a estas alturas recordarlo- ese principio, que en el Código de Procedimiento viene consagrado por el artículo 688, sólo es aplicable en la medida en que la presentación de la demanda interrumpa o, para decirlo en otras palabras, detenga el término de prescripción que todavía no se haya cumplido. Es evidente que este aspecto del problema vinculado a la posible extinción de la acción reivindicatoria en virtud del tiempo transcurrido sin que hubiese sido ejercida, es decir, el de la prescripción extintiva, no fue tomado en cuenta por el Tribunal.

El segundo asunto, estrechamente vinculado con el anterior, estriba en

determinar si del proceso, si en el curso del mismo, el juzgador ha podido encontrar o no los elementos demostrativos de que la excepción de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria se hayan producido. Dicho en otro giro, si está probada o no esa excepción en el expediente. Para lograr ese objetivo no hay otro camino que estudiar el contenido de los autos haciendo énfasis en los hechos que se hayan podido comprobar.

De los hechos en que se funda la demanda presentada por ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI contra CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. se desprende que el derecho que el primero espera reivindicar deriva de una sentencia dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil, luego confirmada por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante la sentencia dictada el 23 de mayo 1955. Esa sentencia dirimió el proceso de deslinde y amojonamiento de la finca N° 263 inscrita al Tomo 26, folio 232, del Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Colón, de la que con posterioridad fue segregada la finca 3833, inscrita al Tomo 457, Folio 204, de la que a su vez fue segregada la finca 10551, inscrita al Rollo 750, complementario de la Provincia de Colón, y que actualmente pertenece, por compra venta, al señor ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI quien es, como sabemos, la parte demandante en este juicio. La parte demandada es la CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. en su condición de propietaria actual de la finca N° 6836, inscrita al Tomo 1254, Folio 198 del Registro Público y que es producto de las segregaciones verificadas sobre la segunda finca en la que recayó originalmente el deslinde decretado en la sentencia dictada en el año 1955 por el Primer Tribunal Superior de Justicia. La demanda propuesta por el señor BERASTEGUI persigue y tiene como finalidad que a la finca 6836 se le anulen los linderos con que aparece inscrita en el Registro Público y se le impongan, en cambio, los dispuestos por aquella sentencia dictada hace cuarenta y un (41) años. CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., como demandada, rechazó y se opuso a las pretensiones del demandante promoviendo, a su vez, demanda de reconvención en la cual formula pretensiones diametralmente opuestas a las solicitadas por el demandante original. Ya hemos visto que una de las defensas propuestas por CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. es la excepción de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria; excepción que no le fuera reconocida ni por la sentencia de primera instancia ni por la de segundo grado, debiendo la Corte pronunciarse sobre el tema porque en casación se ha denunciado como un yerro de la resolución que se ataca el no haberse hecho tal reconocimiento, dando lugar a que se influenciara por ese motivo de manera sustancial en la parte dispositiva del fallo.

Al expediente se ha hecho llegar una copiosa cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales como resultado del esfuerzo que ambas partes han efectuado para respaldar sus pretensiones. En la tarea de indagar si la prescripción de la acción alegada se produjo, resulta útil estudiar la historia de los dos inmuebles que constituyen el centro de esta disputa legal y que está debidamente acreditada a través de los certificados del Registro Público, planos, escrituras y otros documentos auténticos incorporados por ambas partes al expediente. Pero especialmente revelador de lo acontecido a lo largo de todo este tiempo es el testimonio de las personas cuyas declaraciones pueden ser apreciadas de fojas 229 a 261 del expediente. Se trata de cinco testimonios correspondientes a ESTER VDA. DE ESTÉVEZ, ADRIANA ESTÉVEZ DE TUÑÓN, JARIEL MANUEL DÍAZ, JOSÉ DANUNZIO ROSANÍA y OLGA ESTER DE LA ESPRIELLA DE GUARDIA. Todas esas personas declaran tener conocimiento, por percepción directa, que los propietarios de la finca N° 3833 a lo largo de los cuarenta años anteriores al año 1991, fecha en que se inicia el presente proceso, han venido ocupando la porción del bien inmueble ahora en disputa, con ánimo de dueños, de manera ininterrumpida y de manera pacífica, es decir, sin haber sido molestados nunca durante ese lapso por otras personas que hayan pretendido ejercer su condición de propietarios del predio o de la porción que en este juicio se reclama. Los testigos han explicado con lujo de detalles que los propietarios de la finca N° 3833 no sólo la han cultivado, sino que además han edificado mejoras permanentes en aquella porción sobre la que se ventila la presente controversia. En cambio, la parte contraria no ha podido allegar al expediente pruebas de que a partir del año 1955, cuando se dictó la sentencia de deslinde y amojonamiento cuyos efectos se pretenden hacer valer luego de transcurridos más de cuarenta y un (41) años, haya efectuado gestiones judiciales o extrajudiciales que demuestren su intención de ejercer el derecho o la reivindicación inmobiliaria de dominio que tiene como

soporte la sentencia de deslinde y amojonamiento del año 1955, interrumpiendo por alguno de esos medios el término de prescripción.

Estima la Sala que resulta oportuno abundar en torno a las consideraciones que nos permitan determinar, con claridad, si sería o no legítimo alegar la prescripción extintiva de la acción y, por lo tanto, la del derecho demandado por la parte actora. Y con esa finalidad vale la pena hacer referencia a lo que se aduce en el alegato de oposición al recurso de casación, presentado por el apoderado del señor ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, no sin advertir que el letrado supo aprovechar las evidentes contradicciones en que incurriera el casacionista, tanto dentro del presente recurso como en otros tramos del proceso, respecto al fenómeno de la prescripción adquisitiva y al fenómeno de la prescripción extintiva, como ya con anterioridad se ha dejado consignado. Dice el oponente:

> "Lo señalado y aducido por el recurrente es contradictorio, en virtud de que el casacionista recurre en reconvención aduciendo su título para ejercer una acción reivindicativa sobre las porciones de terreno del demandante original y en su alegato señala que su representado se ve favorecido de la figura de la posesión como modo de adquirir la propiedad de mi mandante por la vía prescriptiva, ambas figuras contrapuestas ya que una se basa en tener un título derivado cierto sobre un inmueble y la otra se basa en la posesión por un término de tiempo para aspirar obtener un título sobre un bien ajeno, toda vez que para poder adquirir la propiedad de un bien inmueble se debe tener una serie de condiciones para que la misma sea efectiva a través de la prescripción adquisitiva sobre el inmueble ajeno a prescribir, como la buena fe y justo título.
>
> El Código Civil en su artículo 1703, claramente señala que no prescriben entre Co-dueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir el deslinde de las propiedades contigüas. Lo anterior lo señalamos toda vez que entre las fincas madres del recurrente y de mi mandante, se realizó un proceso declarativo de deslinde y amojonamiento con la concurrencia de la totalidad de los colindantes en la cual se estableció una línea definitiva en cuanto a la finca madre del casacionista, quedando establecida una medianera entre ambas fincas desde la cual surgen los límites de colindancia de las fincas que se derivan de cada una de las fincas madres, quedando establecido los linderos en forma clara y precisa, los que fueron inscritos en el Registro de la Propiedad para hacer efectivos los derechos de los propietarios de la finca 263 y sus sucesores. No obstante, el casacionista y mi mandante mantienen propiedades que se encuentran traslapadas por la sobreposición de los linderos y medidas de la finca de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. sobre la finca de mi mandante Roberto Berastegui, tal como lo reconocen sus propios peritos cuando dicen que se da un traslape real y físico, y en virtud de que las fincas madres de ambas delimitaron sus colindancias, los linderos y medidas de la finca del casacionista, son nulos en virtud de estar ubicados en terrenos señalados en la sentencia como parte de los linderos interiores de la finca 263 madre de la finca 3833 y de la 10551, respectivamente. Y fuera de los límites que corresponde a su finca madre originaria. (F. 546).
> ...
> Por otro lado, el recurrente deja entrever la imposibilidad de Berástegui de plantea(sic) la acción reivindicatoria, pero nos preguntamos nosotros qué otra acción legal procede cuando se quiere recuperar la posesión de un terreno de que es propietario que está en manos de otra persona. La redacción de los artículos 582, 337, 450 del Código Civil no pueden ser mas esclarecedores. Al respecto el recurrente señala los requisitos para que proceda con éxito esta acción, a saber: Prueba del dominio (En el expediente hay pruebas irrefutables de que Berastegui es propietario de la finca 10551; Posesión de la cosa por el demandado (en autos consta que el demandado está en posesión y ocupa parte de los terrenos que forman parte de la finca 10551); Identificación de la cosa a reivindicar

> (Tanto la escritura pública que contiene el deslinde y amojonamiento efectuado en 1955 como el dictamen de los peritos establecen el área extralimitada de la finca 6836). O sea, que todos estos extremos en que se fundamenta el recurrente para alegar mejor derecho, son los (sic) ha cumplido Berastegui para interponer la acción reivindicatoria para recuperar la posesión de un área de terreno que está en manos de Constructora Dos Mares, S. A." (f. 565).

Ante todo, bueno es aclarar que aquello que se sostiene, en el sentido de que el señor BERASTEGUI o los propietarios anteriores de la finca no tuviesen otra acción distinta a la reivindicatoria para hacer efectiva la posesión del inmueble objeto de la demanda de este juicio, no tiene respaldo en las disposiciones legales vigentes. Para tales fines bien pudo ser utilizado el procedimiento del juicio sumario, según lo traen dispuesto y consagrado los artículos 1346 y 1348 del Código Judicial reguladores de los trámites correspondientes a los interdictos posesorios de perturbación de la posesión, o el de restitución por despojo o el de restitución por causas diversas al despojo. Como se sabe, el nuevo ordenamiento procesal es amplio y generoso en este aspecto, pero también en el antiguo Código Judicial quienes se sintiesen perjudicados en la posesión de un bien inmueble que les perteneciese estaban en capacidad de echar mano de las disposiciones que regulaban en aquel cuerpo legal el juicio sobre perturbación, el juicio sobre restitución de posesión por despojo y el juicio de restitución por causas diversas del despojo, reglados del artículo 1489 al 1512, inclusive, en el anterior Código de Procedimiento.

Apreciadas las cosas desde otro punto de vista, no puede la Sala aceptar que la discusión jurídica que surge en este pleito se tenga que reducir única y exclusivamente al tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Eso no quiere decir que la Sala piense que no sean acertadas o no comparta las apreciaciones hechas en la sentencia de primera y de segunda instancia y también, porqué no, las consideraciones que el oponente en casación elabora dirigidas a destruir la posibilidad de que, en cuanto al modo de adquirir la propiedad, se haya operado a favor de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio. Es cierto que constituiría un contrasentido el que, por un lado, no se hubiese demandado en reconvención la prescripción adquisitiva de dominio, en razón de haberse afirmado en la contrademanda presentada por CONSTRUCTORA DOS MARES que el derecho que se tenía era el de propiedad, en base a un título inscrito, y, luego por otra parte, se esgrimiese la figura de esa misma prescripción adquisitiva como excepción, con el propósito de afirmar el derecho de propiedad sobre el bien disputado. No le pasa tampoco inadvertida a la Sala la frecuencia con que el casacionista incurre en este tipo de contradicciones al pronunciarse sobre el tema que venimos tratando. No obstante, a la Sala le resulta imposible desconocer que el impugnante denunció como un vicio de la resolución atacada esa otra clase de prescripción referida a la extinción de la acción para demandar que se encuentra recogida también en el artículo 1700 del Código Civil. A propósito de la disposición comentada y los problemas envueltos en su interpretación y aplicación (artículo 1700 del Código Civil panameño y su equivalente, el artículo 1963 del Código Civil español) en la obra ya clásica de QUINTUS MUCIUS SCA EVOLA sobre los Comentarios al Código Civil, se señala: "... hay que entender que en el ámbito puramente procesal o de aducción de la excepción de prescripción, el interesado en hacerla valer podrá actuar de dos modos diferentes, con apoyo en el artículo en cuestión: alegando la prescripción extintiva, en sí, ..., o invocando una prescripción adquisitiva ...,". Más adelante se agrega que "en cuanto en el primer caso la invocación de la extinción de la acción podrá hacerse por cualquier interesado en ello ...", precisándose que para emplearla "basta con tener un simple interés en oponerse a la reivindicación ...". ("CÓDIGO CIVIL", comentado y concordado con cada institución de los principales Códigos Europeos y Americanos. Redactado por JOSÉ MARÍA REYES MONTERREAL. TOMO XXXII, Arts. 1,930 a 1,978. -Vol. Segundo- INSTITUTO EDITORIAL REUS, Madrid, 1965).

Vemos que el oponente ha hecho un esfuerzo por trasladar el problema de lo planteado por el artículo 1700 al supuesto contemplado por el artículo 1703 del Código Civil, en el cual se expresa que no prescribirá entre propietarios de fincas colindantes la acción para pedir el deslinde de las propiedades contigüas. Con todo y ser cierto que la acción para pedir el deslinde no está sujeto a

término de prescripción y por más que sea verdad que en 1955 se dictó una sentencia que, por supuesto, es firme y está ejecutoriada, en este caso no se ventila el asunto de la prescripción que no aplica contra los colindantes para pedir el deslinde y amojonamiento entre predios medianeros. En este caso el demandante no hizo uso de una acción pidiendo el deslinde y amojonamiento de los predios. Aquí de lo que se trata más bien es de otro asunto que a juicio de la Sala lo regulan otras disposiciones del Código Civil: los artículos 1707 y 1709, en relación directa con el artículo 1700 denunciado por el recurrente como violado por la resolución. Conviene transcribir las dos normas citadas.

> "Artículo 1707: El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.
>
> Artículo 1709: El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó ejecutoriada."

Las dos disposiciones citadas son claras en cuanto a su texto y sólo vienen a reafirmar la posibilidad legal y procesal de que, en caso de reunirse las condiciones y los elementos que así lo comprueben, el tiempo transcurrido es capaz de inutilizar, disipar o extinguir una acción reivindicatoria como la empleada en este juicio para hacer valer los rumbos y medidas establecidos en un juicio de deslinde y amojonamiento cuyos efectos nunca fueron llevados a la práctica por quien originalmente tenía derecho a hacerlo. La doctrina reconoce que no importa si se está en presencia de acciones reales o de acciones personales, "... si se deja de reclamar lo judicialmente reclamable, o se deja de ejercitar el derecho así adquirido durante el tiempo que determina la Ley en sus respectivos casos, se habrá extinguido por prescripción el derecho declarado en una sentencia firme, constitutiva o creadora del derecho mismo". (Ob. cit. pág. 920).

Como se desprende de los hechos y del derecho que han sido invocados, en donde destaca la conducta omisa en que incurrió la parte actora al haber dejado transcurrir mucho más de quince años desde el momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de deslinde y amojonamiento que se dictó en 1955, sin haber exigido la corrección de los linderos de la finca colindante N° 6836 de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. en los términos fijados por aquel fallo, la Sala considera que ha quedado debidamente demostrado que la acción reivindicatoria empleada por la parte actora en este juicio se extinguió por prescripción y, en consecuencia, se debe casar por esa causa la sentencia recurrida.

Decidido a favor de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. el recurso de casación interpuesto, en virtud de la extinción de la acción reivindicatoria empleada para reclamar la nulidad de los linderos de la finca N° 6836 de su propiedad, la Sala procederá a dictar la sentencia de reemplazo, cuyo propósito principal consiste en declarar que se mantienen vigentes aquellos linderos con que la mencionada finca aparece inscrita en el Registro Público y se deniegan las pretensiones de la parte actora formulada en la demanda en relación con los linderos de la finca N° 10551. Como ninguna prueba han aportado las partes que demuestren que hayan sufrido algún género de daños y perjuicios, las peticiones que se han hecho en tal sentido deberán ser denegadas; en cuanto a las costas del proceso, estima la Sala que las mismas serán como se han causado como resultado de la evidente buena fe con que los litigantes han procedido en este juicio. Por último, ante la cita de mal gusto (ver fs. 543) empleada por el letrado JERÓNIMO EMILIO MEJÍA, apoderado de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., para referirse a los Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, la Corte le llama la atención y le advierte que de repetirse la falta le será aplicada una severa sanción al infractor.

En atención a lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia del 23 de mayo de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia; REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Colón el 22 de diciembre de 1992; DECLARA PROBADA la excepción de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria empleada por la parte demandada; DENIEGA la solicitud para que se declaren nulos

los linderos con que aparece inscrita en el Registro Público la finca 6836 de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES; y, DENIEGA la solicitud de que se reconozcan daños y perjuicios.

Las costas como se han causado.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. Y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. CONTRA BANQUE SUDAMERIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por **ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A.** contra **BANQUE SUDAMERIS, S. A.** interpusieron **Recursos de Casación**, contra la sentencia de 4 de mayo de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior, **ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A.**

Esta Sala de la Corte, luego de ordenar la corrección de los recursos, admitió el presentado por el PRIMER BANCO DE AHORROS y el del BANCO GENERAL en cuanto a la primera, segunda y tercera causal.

Se procede, por tanto, al examen de fondo de los recursos, previas las siguientes consideraciones del caso.

ANTECEDENTES DEL CASO

La Compañía **ASSICURAZIONI GENERALI, S. p. A** presentó demanda ordinaria contra **BANQUE SUDAMERIS** para que sea condenado a pagarle la suma de B/.63,999.33, más intereses, costas y gastos, por el hecho de haber debitado dicha suma de la cuenta corriente que tenía en ese banco, al haber pagado cuarenta y dos cheques que giró en su calidad de cuentahabiente a la orden de determinadas personas (corredores de seguros), sin haber sido endosados por los corredores a cuya orden se expidieron.

El BANQUE SUDAMERIS, antes de contestar los hechos de la demanda, manifiesta que no conviene ni acepta lo que exige la demanda por la imposibilidad jurídica de que la pretensión sea resuelta con su sola participación, ya que hay otras personas jurídicas que deben ser llamadas a hacer frente a la reclamación. Así, en virtud de lo dispuesto por 597 en concordancia con el 595 y 596 del Código Judicial solicita que se citen al proceso al BANCO GENERAL y al PRIMER BANCO DE AHORROS -PRIBANCO-, como presentantes de los cheques objeto de esta demanda, que fueron cobrados por dichos bancos y pagados por la demandada BANQUE SUDAMERIS única y exclusivamente en base a la garantía de los `endosos previos garantizados que le otorgaron formalmente y por escrito los citados bancos, a quienes le fueron pagados los cheques mencionados en esta demanda. (Fs. 147 a 159).

El Juzgado Tercero del Circuito de Panamá admitió la denuncia presentada por la demandada y llamó a los aludidos bancos como terceros al proceso, con el objeto de que le reembolsaran el pago que eventualmente tuviera que hacer la parte demandada si la sentencia le fuere adversa. Por tanto, ambas entidades

contestaron la demanda según se observa de fojas 176 a 192 y de fojas 199 a 209. Igualmente contestaron los hechos de la denuncia que en su contra interpuso el demandado y expresaron excepciones en su defensa (fs. 182 a 192 - PRIBANCO y fs. 213 a 218- Banco General). A su vez el Banco General denunció a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA (ANAP), alegando que los cheques girados contra el Banque Sudameris fueron depositados al cobro en la cuenta que ésta (ANAP) mantiene en el Banco General, por lo que sostiene que "no se responsabilizan de los endosos que le precedieran" (fs. 208-209). En ese sentido, PRIBANCO también presentó denuncia, ésta contra CARLOS O'NEILL y MIRNA LOY de O'NEILL, señalando que estas personas presentaron y depositaron los cheques girados por la aseguradora (Generali), "con endosos falsos", en la cuenta que tenían en ese banco (PRIBANCO), por tanto solicitan que en caso que deban reembolsar al Sudameris la suma reclamada, a su vez se ordene a esas personas indemnizarles dicha suma (fs. 194).

El negocio se decidió en primera instancia mediante sentencia N° 275 de 30 de septiembre de 1991, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, que resolvió condenar al banco demandado (B. SUDAMERIS) a pagar la suma de B/.63,999.33, reclamada por la demandante (A. GENERALI), más intereses, costas y gastos; también condenó a los terceros BANCO GENERAL y PRIBANCO a reembolsar al demandado dicha suma en lo que les correspondía a cada uno (B/.49,320.87 y B/.11,684.14); y finalmente condenó a los cuenta-habientes de estos terceros, A. N. A. P. y a MIRNA LOY DE O'NEILL, a reembolsarles las sumas que tuvieran que pagar a la parte demandada (fs. 336 a 529).

Contra esta sentencia presentaron recurso de apelación ante el Primer Tribunal Superior de Justicia los apoderados del BANCO GENERAL, del PRIBANCO y de ANAP, no así MIRNA LOY de O'NEILL; a quienes en esta instancia el Tribunal les denominó **"terceros denunciados"** (a los dos primeros) y **"llamados por los terceros"** (a los dos últimos).

En tal sentido, el Primer Tribunal Superior dictó la resolución de 4 de mayo de 1995, que resolvió CONFIRMAR la sentencia dictada por el a-quo (fs. 653-721).

El Tribunal Superior accedió a la reclamación de la parte demandante, al confirmar el fallo primario, basándose en que la obligación deviene de un contrato de cuenta corriente celebrado con el demandado BANQUE SUDAMERIS, por el hecho que éste debitó incorrectamente de su cuenta unos cheques que fueron girados en debida forma pero que nunca fueron cobrados por sus beneficiarios (corredores de seguros), ya que dichos cheques fueron endosados falsamente por terceras personas, y depositados en otros bancos, quienes a su vez los presentaron al pago por compensación al banco girado, que los pagó en tales condiciones. Así, con base en la relación contractual y con fundamento en las normas correspondientes del Código de Comercio y de la Ley 52 de 1917 (sobre el cheque en particular), se responsabilizó, en primer lugar, al banco girado; y, en segundo lugar, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Interbancario N° 19 de 29 de agosto de 1985, se responsabilizó a los bancos terceros llamados al proceso.

Contra esta resolución se han interpuesto, ante esta Sala de la Corte, los recursos de casación que a continuación se pasan a examinar.

I- Recurso de Casación interpuesto por Galindo Arias & López en representación de BANCO GENERAL, S. A. (Fs. 823-857).

Como se indicó con anterioridad, una vez el recurrente corrigió el recurso, la Corte admitió la primera, la segunda y la tercera causal.

PRIMERA CAUSAL: (fs. 823-838)

"Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Esta causal ha sido fundamentada en diez motivos que, en síntesis, expresan los siguientes cargos.

1- Del primero al tercero se hace referencia a que la sentencia de segunda instancia tomó en cuenta las pruebas presentadas con la demanda, consistentes en las cartas suscritas por los "supuestos" beneficiarios de los cheques, en las que éstos expresaban que nunca recibieron ni hicieron efectivos dichos instrumentos, cuando, a pesar de que las firmas estampadas en dicha cartas estaban autenticadas por notario, en la etapa probatoria no fueron ratificadas por sus firmantes pese a "que se trataba de documentos de carácter testimonial firmados por terceros totalmente ajenos al pleito". De tal forma, la sentencia les otorgó pleno valor probatorio (fs. 51), concluyendo que las firmas de los beneficiarios de los cheques habían sido falsificadas, que los cheques habían sido pagados en forma irregular por el SUDAMERIS de modo que no podía cargarlos o debitarlos de la cuenta de la demandante y que el Banco General debía reembolsar su importe, pues él los cobró a través de la cámara de compensación. Así el fallo violó normas probatorias y, en consecuencia, normas sustantivas sobre el pago de cheques.

2- El Tribunal Superior consideró como pruebas (fs. 55) documentos que fueron incorporados al proceso en forma ilegal, ya que se pidieron como **informes**, cuando esa prueba sólo es viable cuando se trata de instituciones públicas o de utilidad pública y la Asociación Bancaria es una entidad de carácter privado que no se encuentra en la categoría a que se refiere la respectiva norma. Estos documentos fueron los que se agregaron al expediente durante la etapa probatoria, a petición de SUDAMERIS, remitidos por el Director de la Asociación Bancaria de Panamá, y son: copia de los Acuerdos Interbancarios N° 5 del 1° de marzo de 1973 y N° 19 de 29 de agosto de 1985 y, certificación de que el Banco General y el Pribanco son miembros de la Asociación Bancaria desde el 1° de marzo de 1973.

Al haberle dado fuerza de pruebas a estos documentos, el fallo de segunda instancia violó normas procesales y normas sobre obligaciones y contratos.

3- Del motivo sexto al noveno se alude a que el Tribunal Superior no evaluó de acuerdo con la sana crítica pruebas que reposan en autos, pues las mismas demuestran la negligencia grave de la demandante. Tales pruebas son la denuncia criminal presentada el 31 de julio de 1985 por la representante de la demandante, ELISA MARTÍNEZ DE SAGEL, contra dos de sus empleados de contabilidad (fs. 228 a 232 del cuaderno principal y fs. 3 a 7 del cuaderno de pruebas del PRIBANCO) y la ratificación de dicha denuncia (fs. 20 del cuaderno de pruebas del Banco General), en la cual se agregó que la falsificación imputada a dichos empleados no se refería exclusivamente a los endosos de los cheques, sino que hubo otras falsificaciones a más de las indicadas en la denuncia, como son: la confección fraudulenta de documentos para autorizar la elaboración de los cheques que expedía la aseguradora; la alteración de otros documentos internos de la empresa y la sustracción de altas sumas de dinero.

A pesar de ello, señala la censura, el fallo concluyó indicando "... la empresa demandante no actuó negligentemente, **porque** la emisión y firma de los cheques no fue irregular ..." (véase fs. 56). Lo que demuestra que el Tribunal evaluó dichas pruebas deficientemente, pues eximió a la demandante de responsabilidad por los actos de sus empleados y "responsabilizó de tales actos a quienes no tenían manera de evitarlos ni culpa alguna en su comisión", violando normas procesales y normas sustantivas sobre culpa y responsabilidad y otras de la ley de Documentos Negociables sobre falsa firma y el "estoppel".

4- Finalmente, en el décimo motivo se señala que el Tribunal no evaluó conforme a la sana crítica lo dicho en hecho 130° de la demanda, en cuanto a que la demandante le avisó al SUDAMERIS sobre la falsificación ex-post facto, o sea después que los cheques eran pagados por el SUDAMERIS. Tampoco analizó según la sana crítica las pruebas que constan en autos, que demuestran que durante 24 meses los empleados de la demandante realizaban el fraude, sin que ésta avisara a los comerciantes, en general, y al SUDAMERIS, en particular, que había cheques falsos en circulación, antes de que dichos cheques le fueran presentados al Sudameris para el cobro.

Debido a ese error probatorio, el Tribunal le achacó culpa al Sudameris y en consecuencia consideró que el BANCO GENERAL estaba obligado a devolver el importe de los cheques que cobró.

Las normas que se estiman violadas, debido a los cargos antes expuestos, son los artículos 848, 858, 880, 770 del Código Judicial; los artículos 974, 986, 988, 989 del Código Civil; el artículo 23 de la Ley 52 de 1917; y, el artículo 970 del Código de Comercio.

Con el cargo que se hace en el primer punto, sobre pruebas documentales que el Tribunal no debió apreciar, se quiere desvirtuar el hecho que se tiene por acreditado "de que las firmas de los beneficiarios de los cheques habían sido falsificadas", lo cual demuestran esas pruebas, según lo afirma el casacionista, ya que consisten en cartas de terceros (que son los propios beneficiarios) quienes dicen no haber recibido ni haber hecho efectivos tales instrumentos.

Según se aprecia en tal sentencia, proferida por el Tribunal Superior, solamente se hace referencia a las cuestionadas cartas, enviadas por los beneficiarios de los cheques a la aseguradora (giradora), en dos momentos. En primer lugar, al hacer un recuento del examen que hizo el juzgador de primera instancia de los diversos aspectos o excepciones que alegaron los terceros denunciados (Banco General y PRIBANCO) en su defensa. En tal sentido se transcribió parte del fallo de primer grado donde se alude a las cartas que los beneficiarios de los cheques enviaron a la demandante, considerando su valor probatorio aplicado a la excepción, que los terceros denominaron "existencia de cheques al portador, y la improcedencia de alegar falsificación de firmas porque en este tipo de documentos la circulación no requiere firma o endoso para su transferencia", la cual fundamentaron en los artículos 9 (ord. 3) y 30 de la Ley 52 de 1917. Parte de lo transcrito, al respecto, de la resolución impugnada es lo siguiente:

> "`... Y no se ha probado por parte de los excepcionantes, que dichos giradores tenían conocimiento del carácter ficticio de los beneficiarios a nombre de quienes giraron los cheques, tal como prescribe el artículo 773 del Código Judicial. Por lo contrario, la evidencia que emerge del expediente, no controvertida por las partes, es que los funcionarios autorizados para girar por la compañía (los antes mencionados) firmaron y expidieron los cheques en el errado entendimiento de que los mismos tenían por destinatario o corredores de seguros con los que aquélla mantenía relaciones de contratación o colocación de póliza; véase a este respecto las cartas que acompañan los cheques, debidamente autenticadas por notarios, en las que corredores de seguros que aparecen como beneficiarios comunican a la compañía de seguros que no recibieron, firmaron ni cobraron dichos instrumentos. Sobre esas cartas, que como documentos privados notarizados conviértense en públicos, no han sido redargüidos de falsos por las parte a través de los medios procesales idóneos para la obtención de dicha finalidad. ... (Ver fojas 449-450)" (Fs. 667-668, Subrayado es de la Corte).

Posteriormente, el Tribunal Superior menciona nuevamente las cartas como medios de prueba para resolver la excepción denominada **"CHEQUE AL PORTADOR"**, que fue invocada por "los Terceros" (B. General y PRIBANCO) en segunda instancia, con la finalidad de que se consideraran los cheques emitidos a la orden, como emitidos al portador, aplicando lo dispuesto sobre el particular en la Ley 52 de 1917 (art. 9, ord. 3). El Tribunal Superior reiteró el criterio de primera instancia, en el sentido de que no se cumplían las condiciones contenidas en esa norma para considerar los cheques como girados al portador, y en consecuencia expresa:

> "...
> Debe entonces, examinarse si de las constancias probatorias, se advierte que el girador tenía conocimiento que las personas eran ficticias.
>
> En autos consta que las personas autorizadas para expedir cheques por la Compañía Assicurazioni Generali, era la señora ELISA MARTÍNEZ

> DE SAGEL y los Doctores CARLOS LÓPEZ GUEVARA Y CARLOS BOLÍVAR PEDRESCHI; (fs. 37-47; 54, 56-58; 60-63; 65, 67-72; 74, 76) en esa misma dirección los cheques fueron expedidos a nombre de personas (naturales y jurídicas) conocidas como corredores de seguros, sin embargo, éstos comunican a la compañía que no recibieron ni firmaron ni mucho menos cobraron los respectivos cheques (fs. 48, 49, 53, 55, 64, 66, 73, 75, 77, 89, 91, 94, 99)." (Fs. 703).

Según se colige de lo expuesto, el fallo de segunda instancia al referirse a la cartas suscritas por los terceros como elementos probatorios, no consideró lo normado por el artículo 858 del Código Judicial, en el sentido de que, por tratarse de documentos emanados de terceros y siendo su carácter testimonial, tenían que haber sido ratificados por sus otorgantes en el proceso. Aparentemente, acogió el criterio del juzgador primario de estimar la prueba documental de la referencia, como si se tratara de documentos privados auténticos, por estar reconocidos y otorgados ante Notario, asignándoseles el mismo valor que el del documento público, en atención a lo dispuesto por el artículo 843, numeral 1, en concordancia con el 845 ibídem.

Por tanto, el Tribunal Superior reconoció, en forma errónea, eficacia probatoria al contenido de los documentos emanados de terceros, pues se trata de cartas con carácter testimonial cuyo contenido no fue ratificado por sus suscriptores, por tanto el cargo prospera en ese sentido.

Sin embargo, el hecho que comprobó el Tribunal Superior mediante esas pruebas no es el mismo que el casacionista sostiene que se concluyó al hacer su valoración. En tal sentido, según el recurrente, debido a que la sentencia otorgó pleno valor a dichos documentos, concluyó que las firmas de los beneficiarios habían sido falsificadas y que los cheques habían sido pagados en forma irregular por el Sudameris, cuando, en verdad, de lo expresado en el fallo, se observa que su valor probatorio fue utilizado, únicamente, para desechar una de las excepciones propuestas, que no cuestionaba la falsificación de los endosos, sino el supuesto de que si los cheques podían o no ser considerados al portador, a pesar de haber sido emitidos a la orden, según lo preceptuado por el artículo 9, ordinal 3 de la Ley de Documentos Negociables.

A juicio de la Corte, este cargo es contradictorio en relación con la actitud que ha asumido el recurrente BANCO GENERAL, y las otras partes, a lo largo del proceso, que ha sido la de reconocer el hecho, que ahora pretende desvirtuar cuestionando la apreciación de las cartas, o sea la falsificación de las firmas de los beneficiarios de los cheques al ser endosados. En tal sentido, dichas cartas no son las únicas pruebas que demuestran la aludida situación que originó este proceso; situación que ha sido admitida por el demandado (BANCO SUDAMERIS) y por los terceros llamados al proceso, ahora recurrentes, quienes, tanto en este recurso de casación como en las defensas que han empleado a lo largo del juicio, reconocen que si se dio la falsificación en relación con los endosos de los beneficiarios, cuestionando otras circunstancias como la negligencia de la Compañía de Seguros que giró los cheques, por haber sido sus empleados los que incurrieron en actitud dolosa en cuanto a la falsificación de los endosos.

Lo expresado resulta suficiente para considerar que aunque no se tomen en cuenta los aludidos documentos privados, por haber sido vulnerada una norma valorativa, la influencia de este hecho no es decisiva en el litigio, pues éste fue resuelto con base en otros elementos probatorios que obran en autos, cuya eficacia no ha sido desvirtuada.

En otro orden de ideas, el cargo formulado que se hace en los **motivos cuarto y quinto** se basa en la violación del artículo 880 del Código Judicial, alegando el casacionista que el Tribunal Superior incorporó los documentos emitidos por la Asociación Bancaria Nacional contentivos de los Acuerdos Interbancarios como prueba de informes, lo que no es procedente y, por tanto, la prueba es ilegítima.

La Sala ha podido verificar que el Tribunal de Segunda instancia no

solicitó los aludidos Acuerdos emitidos por la Asociación Bancaria como prueba de informes. Estos Acuerdos fueron presentados por la parte demandada, BANQUE SUDAMERIS, por tratarse de la normativa que regula su relación como banco girado con los bancos presentantes (Banco General y PRIBANCO) de los cheques con endosos falsos, ante la Cámara de Compensación.

El Ad-quem estaba obligado a aplicar estos Acuerdos Interbancarios debido al hecho de que el banco demandado llamó a otros dos bancos como terceros al proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 597 del Código Judicial, para que le reembolsaran el pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, con fundamento en el "derecho legal o contractual" que le otorga el Acuerdo Interbancario N° 19 del 29 de Agosto de 1985, **"POR EL CUAL SE ADOPTAN ALGUNOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN RESPECTO AL CHEQUE".**

El llamamiento en garantía obedece a que el Banco General y el PRIBANCO fueron los que presentaron los cheques (con endosos falsos) por conducto de la compensación bancaria, los que fueron pagados por el SUDAMERIS, presumiéndose que estos bancos presentantes eran tenedores en debido curso y respaldaban los cheques por los endosos previos garantizados, situación contemplada en el citado Acuerdo.

El sentenciador enfatizó que los Acuerdos Interbancarios son instrumentos o mecanismos creados por los bancos integrantes del Sistema Bancario para brindar un rápido y confiable servicio a sus clientes, de modo que todos están precisados a respetar los patrones convenidos contractualmente en estos Acuerdos.

Sobre el particular, el fallo acotó lo siguiente:

"...

Debe puntualizar esta Corporación que los terceros denunciados, a través de la contestación de la denuncia (fs. 182 y 214) aceptan que cobraron vía compensación los cheques objeto del presente proceso ordinario, de modo tal, que los esfuerzos irán dirigidos a resolver, por un lado la aplicación del Acuerdo Interbancario sobre endoso y por otro lado, en consecuencia, si los terceros denunciados deben o no reembolsarse las sumas cobradas al Banque Sudameris.

...

Los recurrentes (Pribanco y Banco General, S. A.) dirigen sus planteamientos para desvirtuar la aplicación del Acuerdo Interbancario en dos vertientes, a saber: a) La negligencia de Assicurazioni Generali en permitir que empleados falsificaran los endosos de los beneficiarios de estos cheques lo que exime a los Bancos representantes de estos cheques, de modo que el Banco Girado puede correctamente debitar de la cuenta corriente de Asicurazioni Generali SPA, el monto de los cheques y b) Los Bancos representantes, han sido tenedores de buena fe por lo tanto dichos cheques han sido pagados a tenedores en debido curso.

Este tribunal es concluyente al señalar que la empresa demandante no actuó negligentemente, porque la emisión y firma de los cheques no fue irregular ya que está probado que fueron firmados por las personas autorizadas por la Compañía y a ello el Juez A-quo manifestó que "la falsificación ocurrió cuando los instrumentos ya habían salido del control y posesión de la giradora, y estaban en el ámbito en que debían hacerse efectivos, **ámbito que no es de la incumbencia de ASSICURAZIONI sino más bien del BANQUE SUDAMERIS, por el cual es a éste a quien cabe la culpa ... (énfasis del Tribunal).**

...

En cuanto al segundo punto, a juicio del apoderado judicial del Banco General, el pago que se le haga a un tenedor en debido curso, es un pago en debido curso, de modo que, le da derecho al Banco pagador de cargar el importe a la cuenta del cliente girador, tal premisa en sentido general, es cierta, no obstante debe entenderse que el movimiento circulatorio de esos títulos negociables debe estar exento de todo vicio.

En el negocio sub-júdice, ha quedado claro que la emisión de los cheques no fue irregular así como también se encuentra despejado el aspecto de que Assicurazioni no ha actuado negligentemente; sin embargo, el apoderado judicial del Banco General argumenta que el Juez A-quo violó principios jurídicos consagrados en el sistema legal panameño entre ellos, la protección que otorga al tenedor de buena fe de un título, con ello deplora la errónea tesis cambiaria prohijada por el A-quo, al inclinarse sobre la doctrina jurisprudencial norteamericana.

En ese sentido, nuestra ley de documentos negociables en su artículo 23 externa:

`ARTÍCULO 23: Cuando una firma sea falsa o se haya puesto sin la autorización de la persona de quien aparente ser, se tendrá por completamente ineficaz y ningún derecho podrá adquirirse mediante tal firma para retener el documento, para dar por extinguida toda obligación consignada en el mismo, o para obligar al pago a cualquiera que figure como parte en dicho documento, a menos que aquella contra quien se ejercitara el derecho estuviese impedida de alegar la falsedad o la falta de autorización.

Precisamente, la disconformidad del recurrente (Banco General) se deriva de la aplicación de esta disposición legal, al igual que las conclusiones arribadas por el sentenciador primario, ... que se inclinan por la responsabilidad del Banco Girado que paga cheques cuyos endosos se encuentran falsificados, lo cual obliga a reacreditar esas sumas a la cuenta corriente del girador.
...
Se basa el impugnante en que los Terceros denunciados, por ser tenedores de buena fe, tenían derecho al cobro de estos cheques ya que por los arts. 52, 55 a 57 de la Ley 52 de 1917, los ampara el principio de la buena fe, heredado del sistema romanista ...

Esta Superioridad no se muestra en desacuerdo en cuanto a que nuestro derecho se encuentra inspirado en el sistema romanista que propugna el principio de la buena fe, **pero no se puede eludir otra circunstancia que no han contemplado los terceros denunciados y es la seguridad del Sistema Bancario, en cuanto a la confiabilidad de la transacciones comerciales y precisamente los bancos miembros de la Asociación Bancaria Nacional han diseñado el mecanismo a través del Acuerdo N° 19, en el sentido de que el Banco presentante debe otorgar al banco pagador la garantía del endoso previo** ...

Y así fue el procedimiento que utilizó el Banque Sudameris, el reclamo a estos Bancos de las sumas pagadas, lo que produjo el pronunciamiento de la Asociación Bancaria Nacional mediante ABP.666-86, de 2 de octubre de 1986, en cuanto a que el Pribanco y Banco General en base al Acuerdo N° 19 `... debe proceder a los pagos correspondientes (fojas 19 y 20 del cuaderno de prueba de la parte demandada)

En esta materia, a juicio de esta sede jurisdiccional, parece lo más sensato y justo que ante un evidente falso endoso (así lo demuestran las constancias de autos) que el Banco pagador se vuelva contra el Banco presentante y éste a su vez contra la persona que le entregó el cheque para su cobro y así sucesivamente hasta encontrar la irregularidad del endoso, precisamente, parece ser la filosofía de la **garantía del endoso previo**. ..." (fs. 706 a 712) (Énfasis y subrayado es de la Corte).

Seguidamente, del análisis que expresa la resolución sobre la aplicación del citado Acuerdo Interbancario sobre endosos previos, se infiere que los terceros no cuestionaron su validez y aplicación entre los bancos participantes del sistema bancario, sino que pretendían su no aplicación, basados en la

negligencia del asegurador demandante quien debía asumir la responsabilidad por los endosos falsos que realizaron sus empleados por lo que, en consecuencia, el Sudameris (demandado) tenía derecho a debitar dichos cheques.

En este caso debe quedar claro que el BANQUE SUDAMERIS como demandado, aceptó la responsabilidad que tiene para con el demandante de reembolsar a su cuenta corriente el monto de los cheques que fueron indebidamente pagados por tener endosos falsos. De allí que bien se puede deducir y no se debe descartar a priori que el Acuerdo Interbancario N° 19 de 29 de agosto de 1985, resulte aplicable, para efectos de la responsabilidad que un banco pueda tener para con otro en circunstancias como las que se examinan. En este sentido, el citado Acuerdo Interbancario en sus artículos sexto, séptimo y octavo señala:

> "**Sexto:** Los Bancos, al compensar cheques a través de la Cámara de Compensación, usarán la cláusula **"Endosos previos Garantizados"**, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la Cámara. En aquellos cheques en que se haya omitido el sello que estampa tal cláusula se consideran garantizados dichos endosos.
>
> **Séptimo:** El Banco presentante será responsable ante el Banco girado por todos los endosos previos garantizados, o por la falta de ellos.
>
> **Octavo:** El reembolso de un cheque con endoso falso, cantidad alterada o diferencia entre letras y números se hará mediante comunicaciones directas entre los Bancos, si el reembolso se solicitare después del plazo establecido para ello en la Cámara de Compensación."

La consideración o no de lo dispuesto en el citado Acuerdo resulta irrelevante para efectos de la violación de las normas sustantivas que el recurrente cita, como consecuencia del yerro probatorio, referentes a la responsabilidad por culpa o negligencia que el tercero recurrente atribuye al actor. Por tanto, los motivos cuarto y quinto resultan jurídicamente ineficaces.

Seguidamente, mediante el cargo que se establece del motivo sexto al noveno, se acusa al Tribunal Superior de haber evaluado deficientemente las pruebas que demostraban negligencia de la demandante por la emisión de los cheques en forma irregular, que las hace consistir en la denuncia criminal y la ratificación de ésta, presentadas por la demandante contra sus empleados ante el Ministerio Público. Y, debido a dicho error probatorio, según alega, en lugar de responsabilizar a la demandante por los actos de sus empleados, "responsabilizó a quienes no tenían manera de evitarlos ni culpa alguna en su comisión".

Al margen de que la empresa demandante se hubiese o no conducido negligentemente, la Sala comparte el criterio de la resolución dictada por el Tribunal Superior en donde se concluye que la causa eficiente y determinante no puede ser atribuida a la negligencia de la parte actora. Tenemos, en primer lugar, que tomar en cuenta que la emisión y la firma de los cheques (la elaboración de esos documentos) no se llevó a cabo por el demandante de una manera irregular, ya que está probado que la falsificación ocurrió cuando los instrumentos habían salido del control y posesión de la giradora. En tal sentido, la prueba relativa a la denuncia penal presentada por la demandante ASSICURAZIONI GENERALI contra dos de sus empleados de contabilidad (CANDELARIO MARTÍNEZ y JOSÉ HENRY) por delitos contra el patrimonio de la empresa y contra la fe pública, por el contrario más bien demuestra que dichos empleados realizaron una serie de actos ilícitos de los que no tenían conocimiento los directores de la aseguradora demandante, al punto que los cheque fueron girados por las personas idóneas y salieron de su control en debida forma.

Es imposible borrar la impresión de que el casacionista trata de tergiversar el punto fundamental de la litis, centrado en el contrato de cuenta corriente celebrado entre el demandante y el banco demandado; cuenta de la cual se debitaron los cheques que, aunque debidamente expedidos, al momento de ser presentados al cobro tenían endosos falsos. La responsabilidad de comprobar la veracidad del endoso, antes de acoger el documento, es de la institución bancaria

correspondiente. Por esa razón, no cabe el señalamiento de culpa o negligencia, para atribuir responsabilidad al girador (cuenta-habiente) en ese sentido, a pesar de que hubieren sido sus empleados los que incurrieron en el acto doloso de la falsificación del endoso y en otros que guardan relación con el mismo.

En consecuencia, el cargo que se imputa en los motivos antes descritos, no prospera.

Finalmente, el cargo formulado en el décimo motivo de esta causal, que guarda relación con el anterior, tampoco está justificado, pues el Tribunal Superior no violó reglas de interpretación ni de sana crítica en relación a elementos probatorios que, según alega el recurrente, giraban en torno a la negligencia grave de la demandante en la conducción de sus negocios, por falta de vigilancia a sus empleados y por haber omitido darle aviso al público en general y al SUDAMERIS, en particular, "antes de que éste cambiara los cheques expedidos por ella, de que habían algunos fraudulentos".

En este sentido el Tribunal Superior expresó que los terceros tenían que probar la excepción que alegaban, es decir, que la parte actora actuó negligentemente al permitir que sus empleados emitieran de forma fraudulenta los cheques objeto de esta controversia. Esta acusación la fundamentaron en una de las normas contenidas en el epígrafe "**De las obligaciones que nacen de Culpa o Negligencia**" (Título XVI del Código Civil, "DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN SIN CONVENIO), en el artículo 1645 del Código Civil, específicamente en lo que dice en su tercer párrafo:

> "**Artículo 1645**. La obligación que impone el artículo 1644 es exigible no sólo por actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
> ...
> Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. ..."

Sobre la interpretación de esta norma, el Tribunal Superior advierte que está unánimemente admitido que el comitente (dueño, director de una empresa) no responde de todos los actos dañosos de su comisionado, sino solamente de los actos culposos (Véase, Mezeud "Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, Vol. II, 1960, p. 174).

Sobre este particular sostiene el sentenciador que de la copia auténtica de la ratificación de la denuncia presentada por ELISA MARTÍNEZ DE SAGEL, como gerente de la aseguradora, contra sus empleados CALENDARIO MARTÍNEZ y JOSÉ HENRY, se desprende, en términos generales, que éstos "falsificaron firmas en los cheques girados por la empresa aseguradora" y "suplantaron a beneficiarios de comisiones de seguros de la empresa aseguradora". Sin embargo, destaca que durante el procedimiento de confección de los cheques "no existía ninguna irregularidad", ya que fueron firmados por las personas autorizadas por la empresa (ELISA DE SAGEL, CARLOS LÓPEZ GUEVARA, CARLOS BOLÍVAR PEDRESCHI) y fueron emitidos a favor de beneficiarios que eran corredores de seguros de la plaza; de modo que no fue hasta el momento de la circulación de dichos instrumentos cuando los dependientes "actuaron con dolo", a través de maquinaciones fraudulentas, en lo que respecta a la falsificación de firmas y endosos falsos, impidiendo que los beneficiarios pudiesen hacer uso de los cheques.

De allí que el Tribunal Superior juzgó que no se ha probado la culpa o negligencia de la empresa Assicurazioni, pues de la aludida prueba se observa que los empleados de la misma "actuaron dolosamente para su satisfacción económica, de modo que, ese actuar no alcanza a la empresa demandante" (fs. 698).

Además de lo expuesto, el Tribunal Superior hace suyo el criterio del juzgador primario sobre la naturaleza que debe atribuirse a la relación jurídica entre el girador (Assicurazioni Generali-demandante) y el Banco girado (Sudameris-demandado). Desde este punto de vista, estima "irrelevantes" los

cargos que por culpa se endilgan al girador, porque se sitúa la responsabilidad por culpa o negligencia en un fundamento jurídico propio de la culpa extracontractual; igualmente, porque "se pretende cargar la culpa a la sociedad confundiendo sus actos con los de sus empleados". Así, en atención a lo dispuesto por los artículos 986 y 989 del Código Civil, concluye en el mismo sentido que el fallo de primera instancia, y cita lo siguiente:

> "`De acuerdo a la naturaleza de la obligación, al banco cabe culpa porque de la naturaleza de la relación obligacional derivada del contrato de cuenta corriente bancaria y de lo que aquí hemos denominado el "contrato de cheque", no debió pagar un cheque en que las firmas de sus beneficiarios fueron falsificadas o puestas sin su autorización, y si lo pagó no estaba legítimamente autorizado para debitar el importe de los cheques así pagados de la cuenta de su cliente; si realizó tal debitación, ante el reclamo del cliente debió proceder a reacreditar la cuenta, y si no obró de esta manera, hay derecho en la actitud del cliente que demanda judicialmente el cumplimiento de su derecho a la protección de sus haberes en cuenta corriente, lesionados por la conducta negligente del banco." (sic)
>
> "No hay que olvidar que los cheques, prima facie, eran perfectos cuando salieron de la compañía giradora, porque en su expedición concurrían los requisitos de validez de este tipo de instrumentos (que los beneficiarios fueran "ficticios" porque no tenían interés en la operación de los cheques, es algo que se discutirá más adelante, a propósito de una excepción interpuesta por las partes), de acuerdo a la Ley 52 de 1917, y que fue en la fase de circulación donde su ley interna se violentó. La falsificación ocurrió cuando los instrumentos ya habían salido del control y posesión de la giradora, y estaban en el ámbito en que debían hacerse efectivos, ámbito que no es de la incumbencia de ASSICURAZIONI, sino más bien del BANQUE SUDAMERIS, por lo cual es a éste a quien cabe la culpa, porque hizo un pago indebido, infringiendo las normas sobre cheques de la Ley de documentos negociables y, además, el artículo 1049 del Código Civil, a la letra dice:
>
> Art. 1049. El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre.
>
> Pero es ciertamente inaceptable por inviable, esperar que una empresa de seguro, cuyo interés y operancia lo constituyen el riesgo y la prima, y sobre todo una de las dimensiones de "ASSICURAZIONI", haya podido proveer sistemas de selección de personal, de control y contabilidad lo suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de actos que, por su propia naturaleza, son fraguados y llevados a la práctica con el deliberado propósito de que no sean descubiertos, no digamos por personas ajenas a la empresa giradora, sino especialmente por directivos de la misma.
>
> La acusación de negligencia atribuida a la giradora por el lapso dilatado (aproximadamente un año) durante el cual se expidieron y cobraron los cheques fraudulentos, y en el que ella no adoptó las medidas adecuadas para ponerle fin a tal situación, tampoco tiene asidero en la realidad del expediente. Esto es así porque, como se expone en el hecho centésimo trigésimo tercero de la demanda, hecho aceptado como cierto por la demandada a quien le corresponde el reconocimiento o negación del mismo (los terceros negaron por no constarle ese hecho, pero tal negación o inadmisión en realidad de verdad no debilita la admisión hecha por el demandado principal, porque a los terceros no podía constarles un hecho que les es ajeno), junto con los 42 cheques de esta controversia se expidieron una cantidad similar en la que también se falsificaron las firmas de los beneficiarios, pero a diferencia de aquéllos, el banco girado sí reacreditó la cuenta de ASSICURAZIONI; luego entonces, el girado reconoció que pagó mal, que debitó mal y que, en consecuencia debió

> como lo hizo, revocar estos débitos; de todo lo cual se desprende que el banco girado estaba ya en autos de las operaciones fraudulentas en curso, y aún así siguió pagando por compensación bancaria cheques falsificados, sin adoptar las medidas pertinentes para conjurar, de acuerdo a sus funciones y obligaciones, el tráfico de cheques que estaban siendo falsificados en cuanto a la firma de sus beneficiarios; dichas medidas podrían ser, entre otras, la de alertar a los otros bancos del sistema o simplemente no pagar por compensación cheques sobre los que había (debía haber, al menos para el banco girado) una razonable duda sobre la autenticidad de la firma de sus beneficiarios. El banco girado no hizo ni una cosa ni la otra." (**Fs. 699-701**).

En relación al análisis hecho en la resolución impugnada en casación, donde se alude, entre otros puntos, a que la actuación dolosa ocurrió después que los cheques fueron confeccionados y luego de que "habían salido del control y posesión de la giradora, y estaban en el ámbito en que debían hacerse efectivos, ámbito que no es de la incumbencia de Assicurazioni", la Sala debe aclarar que no acoge esta tesis, a pesar de compartir la conclusión final sobre la responsabilidad de las instituciones bancarias por la verificación de los endosos, por las siguientes razones: A nuestro juicio, ese planteamiento no es valedero. Toda la operación de producir falsamente el cheque, en el sentido de hacer ver que la empresa giradora estaba pagando una obligación, cuando en realidad esta obligación no existía, constituyen una unidad. Y esa operación se origina dentro de la empresa. Ahora bien, de por sí, en el presente caso, ello no implica necesariamente culpa o negligencia de parte de la empresa.

En teoría puede plantearse el problema del caso en que haya habido culpa o negligencia en una situación similar a la que se ventila en este proceso. ¿Hasta dónde puede actuar con culpa y negligencia el girador sin ser responsable; y siendo su conducta la causa de origen de que el banco girado haya pagado el cheque, todavía pueda exigírsele responsabilidad al banco girado o depositario?

Indudablemente que en la relación girador-banco girado, si la culpa o negligencia, probada por el banco girado, es la causa necesaria de que el banco girado haya pagado el cheque, éste se vería exonerado de responsabilidad frente al girador. Pero tendría que tratarse, de cualquier modo, de una causa necesaria, eficiente o adecuada, responsable principal de la posibilidad de que no funcionara el control de los endosos en caso de que éstos fueran hechos por la persona que no debía hacerlos.

En tanto que la verificación de los endosos (que depende del banco girado o de los bancos presentantes que garantizan el endoso) pueda funcionar, pero por su falta -la de los bancos- no funcione, el banco girado y en su turno los otros bancos, son responsables.

No se descarta, pues, del todo, la posibilidad de que el banco girado se libre de responsabilidad por culpa o negligencia del girador; pero funcionarán en primer término o preferiblemente las medidas de control que la ley especial sobre documentos negociables establece.

El manejo de la cuenta bancaria por parte del girador se confía o puede confiarse en la circunstancia de que sólo el beneficiario del documento negociable, el cheque en este caso, puede hacerlo efectivo.

Por las razones apuntadas la Sala llega a la misma conclusión que el fallo de segunda instancia. Pero no por razón de que la conducta maliciosa de los empleados haya existido fuera del control de la empresa giradora.

También, debe señalarse que la culpa o negligencia que plantea el Banco General es en cuanto al control del personal de la empresa giradora, cuestión no circunscrita a la relación contractual de esa empresa con el banco girado o depositario en razón de la cuenta corriente.

No sería apropiado limitar como cuestión de principio, la culpa o negligencia de la empresa giradora a la relación contractual con su banco; por

lo tanto, no se puede concluir que la responsabilidad que recaiga sobre la empresa giradora sea puramente contractual, aunque los efectos de esa culpa o negligencia, extracontractual, se determine frente al banco girado y por razón de la relación contractual de la cuenta bancaria corriente.

No obstante, a pesar de las mencionadas discrepancias y con base en las consideraciones que se han dejado expuestas, a juicio de la Sala, las conclusiones a que ha llegado el fallo impugnado, sobre la relación jurídica suscitada y probada, son cónsonas con la realidad del caso y no contienen el yerro probatorio, en cuanto a la apreciación de la prueba como se lo imputa el casacionista. Por tanto, no se han infringido las normas procesales ni las sustantivas citadas en esta primera causal, por lo que la misma resulta injustificada.

SEGUNDA CAUSAL: (fs. 838-843)

"Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El cargo formulado en los cuatro motivos que sirven de fundamento a esta causal, en síntesis, consiste en que el Tribunal Superior fundó en pruebas inexistentes (nunca mencionadas) la conclusión de que la irregularidad en los cheques no ocurrió al momento de su emisión, sino de su circulación y pago. Por ello, a juicio de la censura, el Tribunal "olvidó que el Banco General no incurrió en culpa si la firma de los endosantes era falsa, habida consideración de que éste no tenía manera de saberlo a menos que LA DEMANDANTE o EL SUDAMERIS le hubieren dado aviso **anticipado** de ello, que no lo hicieron".

Este cargo tampoco está justificado, ya que a lo largo de la sentencia se ha reiterado que está probado y que no cabe duda sobre el hecho de que los giradores de los cheques eran las personas autorizadas por la compañía demandante para tal función y no eran los empleados que posteriormente perpetraron los actos fraudulentos en cuanto al endoso; igualmente, los beneficiarios de los cheques eran corredores de seguros que prestaban servicios para esa compañía. Esto, según el fallo, lo demuestran los propios originales y copias de los cheques que reposan en el expediente, los que se tienen como documentos auténticos; la denuncia penal que presenta la Gerente General de la empresa, quien era una de las personas autorizadas para emitir los cheques, contra los empleados, quienes además, de la falsificación de los endosos, incurrieron en una serie de otros actos dolosos contra la empresa.

También se puede apreciar que el fallo otorga importancia al hecho de que "EL BANQUE SUDAMERIS consintió o aceptó la pretensión formulada en su contra, puesto que, al notificarse del acto conclusivo de la primera instancia (la Sentencia), no opuso apelación en su contra de modo que los efectos jurídicos de esta postura reflejan un acatamiento ..." (Fs. 692).

Vemos pues que el sentenciador sí se refirió y analizó una serie de pruebas para llegar a la conclusión de que, la irregularidad, en base a la cual se fundamenta esta demanda, relativa al endoso de los cheques, no ocurrió al momento de su emisión, sino de su circulación y pago.

Por tanto, a juicio de la Sala, el tercero recurrente, Banco General, al señalar que: no tiene culpa de que la firma de los endosantes fuera falsa, ya que no tenía manera de saberlo porque ni la demandante ni el demandado le avisaron, está aceptando que la falsificación se circunscribía al endoso, por lo que tuvo que ocurrir cuando el documento estaba en circulación y, en consecuencia, por ser éste el banco depositario del cheque tenía, entre otras, la obligación de comprobar si la persona que lo presentó al cobro estaba legitimada para obtener el pago, es decir, debió identificar al último tenedor y garantizar la autenticidad de su firma.

En uso de una lógica que a la Sala le resulta impecable, sobre el procedimiento del banco frente al pago de cheques, en Colombia la Superintendencia Bancaria determinó, mediante su oficio DB-4456 de noviembre 29

de 1977, al cual se le ha otorgado fuerza de ley, lo siguiente:

> "...
> La obligación de comprobar si la persona que lo presenta al cobro está legitimada para obtener el pago comprende la de identificar al último tenedor y la de verificar si es tenedor legítimo del título según la ley de circulación.
>
> En cuanto al primer aspecto de la obligación, esto es, identificar el último tenedor, el banco librado la puede cumplir directamente si el cheque se presenta para el cobro por ventanilla. Pero si el cheque se presenta por conducto de otro banco, el librado está en la imposibilidad de hacerlo. Interviene entonces, el banco depositario el cual identifica al último tenedor y si es su cliente, según **los acuerdos interbancarios** garantiza la autenticidad de su firma, lo cual le da certeza al banco librado sobre la persona que presenta el título para su cobro.
> ...".
> (MORALES CASAS, Francisco. "**FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD Y LOS NEGOCIOS BANCARIOS**", primera edición, Bogotá-Colombia, 1991, pág. 412).
> (Énfasis y subrayado es de esta Sala de la Corte).

Consecuentemente, esta Corporación considera que no se han vulnerado los artículos 769 del Código Judicial, 986 del Código Civil, ni el 88 de la Ley 52 de 1917; y, la causal se desecha.

TERCERA CAUSAL: (fs. 843-845)

"Infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea de la ley sustantiva, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El cargo contenido en el motivo único de esta causal, es que el sentenciador de segundo grado interpretó en forma errónea el artículo 9, numeral 3 de la Ley 52 de 1917, que a la letra dice:

> "Artículo 9°. Un documento será pagadero al portador:
> ...
> 3° Cuando sea pagadero a la orden de una persona ficticia o no existente, y esta circunstancia fuere conocida por la persona que lo expidió en tal forma.

Sostiene la censura que el juzgador al interpretar mal esta norma rechazó su defensa, de que con base a la doctrina "**del tomador ficticio**" los cheques girados por Assicurazioni, que dieron lugar al pleito, tenían que ser considerados al portador. Así, señala que ello se debe a que el Tribunal al sostener que "las personas encargadas de expedir los cheques estaban en el convencimiento (de) que sus beneficiarios serían las personas, designadas en el título cambiario, ..." (pág. 53 de la sent.), únicamente tomó en consideración la voluntad negocial de los firmantes y "no la voluntad negocial de los que prepararon los cheques, que al fin y al cabo fue lo determinante para su expedición".

Al examinar la primera causal de este recurso, esta Sala de la Corte transcribió parte del análisis que hizo el Tribunal Superior, fundamentado en lo que se tiene probado, para concluir que en este caso no se han producido las condiciones que determina el citado artículo 9 de la Ley de Documentos Negociables, para considerar si el cheque es o no al portador.

Para profundizar en este aspecto, veamos algo más de lo expresado por el Tribunal Superior:

> "Resulta entonces que el extremo jurídico que contempla la norma legal sub-júdice, no es aplicable al caso concreto, toda vez que las personas encargadas de expedir los cheques estaban en el

> convencimiento que sus beneficiarios serían las personas designadas en el título cambiario, de modo que no se pueden hacer elucubraciones sobre la aplicación de la doctrina jurisprudencial norteamericana, a la que alude el Pribanco, a través de su apoderado judicial en el alegato (fs. 571-574); puesto que si bien es cierto, ésta ha sido fuente inmediata para la solución de problemas que se ventilan en torno a la interpretación y aplicación de normas contenidas en la Ley de Documentos Negociables, no obstante ello, esta doctrina jurisprudencial no puede aplicarse obligadamente, cuando de la interpretación add-peddem literae (en este caso el numeral 3 del art. 9 de la Ley 52/17) no surge margen de dudas y confrontado en este negocio, se deduce que no se cumple con el supuesto de la norma, ya que del acervo probatorio se extrae que la Empresa Assicurazioni Generali SPA., a través de los responsables de expedir estos cheques, lo hicieron a corredores de seguros que mantenían relaciones con la demandante." (Fs. 704).

La Corte comparte el criterio del Tribunal Superior, pues la recta interpretación de la norma lleva necesariamente a la concurrencia de dos elementos para que un documento pagadero a la orden se considere pagadero al portador, y éstos son: 1) que en el título se designe a una persona ficticia; 2) que tal designación sea conocida por quien lo expidió. De las constancias probatorias emerge el hecho de que los beneficiarios de los cheques no eran ficticios, pues eran corredores que sostenían relaciones con la compañía aseguradora, es decir, como señaló la gerente de la compañía en la denuncia criminal que interpuso: los cheques se expedían para que fueran cobrados por los beneficiarios designados en los mismos, cuyos nombres corresponden a Corredores de seguros que sí recibían ordinariamente sumas mediante cheques de la compañía. Pero aún si las personas a cuyas órdenes se confeccionaron los cheques se consideraran ficticias por el hecho de que los cheques no iban a llegar a sus manos, en ese caso tampoco el girador tenía conocimiento de tal hecho futuro. Lo que se acaba de indicar nos dice que no se cumplen los supuestos de la norma jurídica, porque dicha circunstancia no fue en ningún momento del conocimiento de quien expidió los cheques en esa forma.

Por tanto, el Tribunal Superior interpretó correctamente la norma, concluyendo acertadamente que no era aplicable al caso sub-júdice.

En consecuencia, la causal invocada no es pertinente.

II- Recurso de Casación interpuesto por ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE en representación del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO) (fs. 858-867).

En este recurso fueron admitidas las dos causales de fondo invocadas.

PRIMERA CAUSAL:

"Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El cargo formulado en cuatro motivos es el mismo que se revisó en el recurso de casación anteriormente examinado (también en sus cuatro primeros motivos), en que se cuestiona el hecho de que el Tribunal dio valor probatorio a unas cartas suscritas por las personas que aparecían como beneficiarios de los cheques, que según el casacionista carecían de fuerza probatoria, porque no fueron ratificadas por sus firmantes en la etapa respectiva. Debido a este yerro, el tribunal consideró plenamente probada la falsificación de los endosos de los cheques, cuyo reembolso reclama la actora, y falló como lo hizo.

Se citan como violadas las mismas normas, previamente analizadas en el recurso anterior, que son los artículos 858 y 770 del Código Judicial y 986 y 989 del Código Civil.

Por lo tanto, la Sala debe reiterar el criterio expuesto en relación a este cargo, en el sentido de que a pesar de ser procedente, puesto que se valoraron

dichas pruebas, consistentes en documentos privados de carácter testimonial, sin ser ratificadas por sus firmantes, dicho cargo no ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, debido a que el sentenciador se fundamentó en otros elementos probatorios para resolver la litis.

Por tanto, no se violaron las normas materiales citadas en esta causal, resultando así injustificada.

SEGUNDA CAUSAL:

"Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La causal error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba se fundamenta en tres motivos, el primero y último se refieren a la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador de segunda instancia de no haber incurrido en el error probatorio y, dicha conclusión hubiese sido el declarar que la demandante (Assicurazioni Generali) actuó negligentemente, que debió asumir su culpa y eximirse de cargos al Banque Sudameris y a los llamados por éste al proceso.

Señala, en el segundo motivo, que el tribunal de la alzada no llegó a esa conclusión porque no tuvo en cuenta la denuncia penal (fs. 228 a 232) que presentó Elisa Martínez de Sagel en su condición de Gerente General de la demandante contra Candelario Martínez y José Henry, específicamente en el punto segundo (fs. 229) en que dice que esos empleados confeccionaron fraudulentamente documentos para autorizar la elaboración de cheques de la empresa, que se expedían para ser cobrados supuestamente por beneficiarios que eran designados en dichos cheques y cuyos nombres corresponden a corredores de seguros, agregando que el dinero correspondiente a tales cheques, a pesar de que aparecían los corredores como beneficiarios, era recibido y cobrado efectivamente por los denunciados.

También se acusa al fallo de no tomar en cuenta lo dicho en la demanda, en los hechos que van de fs. 2 a 19, en que la actora reconoce que se expidieron 42 cheques a lo largo de nueve meses, lo que demuestra su negligencia al no tomar medidas para detener la operación de fraude.

A juicio de la Sala el primer cargo es improcedente porque la sentencia de segunda instancia sí valoró la citada prueba de la denuncia penal hecha por la demandante contra sus dos empleados. Y sobre dicho particular se hicieron diversas consideraciones en el recurso de casación examinado inicialmente, en el cual se cuestionó la valoración de esta prueba. En consecuencia, no es viable este cargo en relación a la causal invocada de error de hecho sobre la existencia de la prueba, puesto que consta en el expediente y fue valorada por el fallo de segunda instancia. En todo caso, el casacionista debió referirse a dicho cargo en la otra causal probatoria.

El cargo que se fundamenta en que no se tomó en cuenta la afirmación de la demandante sobre la expedición de los 42 cheques en nueve meses, es irrelevante ya que esa consideración no influye en lo dispositivo del fallo, ni demuestra negligencia por parte de la actora, pues se demostró que al expedir los cheques no tenía conocimiento de que posteriormente serían falsificados (sus endosos), para efectos de ser cobrados por personas distintas a sus beneficiarios, los cuales si bien fueron empleados suyos pudieron ser otras personas; pero lo cierto es que éstos últimos no fueron los que giraron los cheques. De forma tal que, si la demandante expidió los cheques en forma regular y auténtica y así, bajo ese entendimiento, los puso en circulación, era la institución bancaria correspondiente, al aceptarlos, quien tenía la obligación de verificar la autenticidad del endoso, según lo preceptúa la ley.

Consecuentemente se desecha ésta última causal, de modo que, este segundo recurso de casación también es rechazado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la

sentencia de 4 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior en el proceso ordinario que ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. le sigue a BANQUE SUDAMERIS.

Las obligantes costas de casación, a cargo cada uno de los terceros recurrentes (BANCO GENERAL y PRIBANCO), se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.300.00).

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SAMI SAMIH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO DE IBEROAMÉRICA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense FONSECA y FONSECA, en su condición de apoderados especiales del señor SAMI SAMIH, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 11 de junio de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el proceso ordinario propuesto por SAMI SAMIH en contra de BANCO DE IBEROAMÉRICA, S. A.

Fijado en término el negocio para alegar acerca de la admisibilidad, el cual fue aprovechado por ambas partes, procede el Tribunal de Casación a determinar, tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial, si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en el fondo y se alegó una causal.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo se aparta totalmente de la técnica exigida en este recurso extraordinario de casación.

El recurrente expresa su única causal en los siguientes términos: "El presente RECURSO DE CASACIÓN es de fondo, se formaliza contra la Sentencia por el Primer Tribunal Superior de Justicia, con fecha de 11 de junio de 1996, la cual ha violado Normas Sustantivas de Derecho, ha cometido Error de Derecho en cuanto a la apreciación de las pruebas, lo cual ha influido sustancialmente en el contenido con su parte resolutiva.

La Sala le recuerda al casacionista que la misma debe ser enunciada con precisión, para que de esa forma este Tribunal pueda determinar con claridad lo que trata de impugnar el recurrente. El no hacerlo así, causa la inadmisibilidad del recurso, a menos que de la enunciación de la misma se desprenda con claridad cuál es la causal invocada, lo que no ocurre en este caso. La forma correcta de invocar la causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

En cuanto a los motivos que sirven de fundamento a la causal, la Sala observa que el casacionista realiza una descripción del proceso desde sus inicios, remontándose con ello a la primera instancia, lo cual no es procedente en el recurso de casación. De igual manera los motivos se basan en meras alegaciones del recurrente, que en nada indican cuál es el error probatorio del Tribunal Superior.

La Sala debe señalarle al recurrente lo que ha expuesto en un número plural de resoluciones judiciales sobre la admisibilidad del recurso: los motivos deben constituir cargos o censuras contra la sentencia, sin que sea necesario que en cada motivo se presente un cargo, pero que, de la totalidad de ellos, aparezcan los cargos contra la resolución impugnada.

Ha dicho también la Sala que debe existir congruencia entre la causal, los hechos en los cuales se fundamenta la misma y las infracciones judiciales que se sostienen violadas. Por lo tanto, si el recurso de casación, no señala cargos a la resolución, no puede el tribunal conocer, en qué consiste la censura que se le formula a la sentencia, lo cual causa la inintelegibilidad del recurso.

El casacionista ha alegado una causal probatoria, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Insiste nuevamente la Sala que para que esta causal sea admitida, es necesario que se identifique cuál o cuáles son las pruebas que han sido mal apreciadas por el ad-quem, sin embargo el recurrente, en sus motivos, solo realiza apreciaciones subjetivas, sin mencionar cuáles son las pruebas indebidamente valoradas.

En lo referente a las normas violadas y la explicación de cómo lo han sido, el casacionista menciona como infringidos el artículo 769 y 770 del Código Judicial.

El primero de ellos, no es congruente con la causal invocada, ya que el contenido del citado artículo, se basa en la enumeración de cuáles son los documentos que sirven como prueba a las partes, pero no conceptos de valoración de pruebas.

Por otra parte, al citar el artículo 770 del Código Judicial, el cual sí es congruente con la causal, el recurrente no explica de qué forma fue violado dicho artículo, y, en su lugar, menciona ocho pruebas, en las que al final de la enunciación de cada una de ellas, dice que el ad-quem no les dio ningún valor, lo cual resulta totalmente incongruente con la causal alegada.

En consecuencia, se dan los presupuestos del artículo 1167 del Código Judicial para que se declare inadmisible el recurso por ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por SAMI SAMIH, contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 11 de junio de 1996.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ROGELIO ESQUINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO INCOADO POR LUIS ROGELIO ESQUINA CONTRA SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (EN ESPAÑOL) Y PANAMANIAN TOURIST SERVICES, INC. (EN INGLÉS) Y COMERCIALMENTE NATIONAL CAR RENTAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso de liquidación en abstracto, transformado en proceso sumario,

por razón de la indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente automovilístico, la parte actora, LUIS ROGELIO ESQUINA, por conducto de apoderado, ha promovido recurso extraordinario de casación en el fondo, contra la sentencia de segundo grado, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, de 13 de febrero de 1996. Habiéndose agotado el ritual procesal, se encuentra el asunto pendiente de decisión de la Sala, a lo que procede, previas las consideraciones que siguen.

El recurso, como se ha dicho, es en el fondo, por infracción de normas de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba y error de hecho en la existencia de la prueba.

La primera causal es en el fondo, consistente en la infracción de las normas de derecho, en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba. Los motivos de esta primera causal están expuestos en la forma que se transcribe:

"...

PRIMERO: Que la injuricidad de la Resolución recurrida consiste en que en el Proceso Sumario sujúdice, el Juez Ad-quem no valoró correctamente, según las reglas adjetivas vigentes, las pruebas documentales que corren de fojas 6 a la 14 del expediente, puesto que no le dio ningún valor probatorio a ese caudal de pruebas demostrativas de la existencia de la Colisión, del monto del daño causado y de la realidad de éste; de la existencia de la culpa y la relación de causalidad existente entre la culpa y el daño y perjuicio causado al señor LUIS ROGELIO ESQUINA, todo lo cual, de haberlas valorado correctamente, habría influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

SEGUNDO: Que la injuridicidad de la Resolución recurrida consiste en que el Juez Ad-quem valoró erróneamente también la prueba que corre a foja 45 del expediente, a la que mal ponderada dio valor de plena prueba, no obstante, ser una prueba deficiente, todo lo cual, de haberlo valorado según las normas adjetivas vigentes, habría influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. ..."

Como se desprende de los motivos, se le achacan al fallo objeto del recurso de casación, cargos consistentes en una errónea valoración de una serie de pruebas documentales, visibles de foja 6 a foja 14 y la que reposa a foja 45, es decir, cotizaciones en torno a la reparación del vehículo, la resolución del Juzgado de Tránsito decidiendo el proceso administrativo y declarando desierta la apelación promovida, además de certificación de la Tesorería Municipal relativa a la persona que, a la fecha del accidente, era propietario del vehículo responsable del accidente. A foja 45, que accede a prueba decretada de oficio por el tribunal de instancia, con fundamento en el artículo 782 del Código Judicial, figura certificación relativa a la propiedad del vehículo responsabilizado del accidente, así como el propietario del vehículo accidentado.

Esta última prueba traída a los autos por determinación del tribunal de la causa, fue censurada por el Tribunal Superior, por entender que las pruebas de oficio decretadas por el tribunal, tienen como finalidad de aclarar las afirmaciones de las partes y no introducir nuevos elementos probatorios no pedidos por las partes. La Sala comparte este criterio del tribunal de apelación.

Por lo demás, ambas certificaciones acreditan que la propiedad del vehículo responsable de la colisión es la empresa denominada SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A., domiciliada en calle 50, Edificio Universal, en tanto que la segunda certificación, ubica como propietario del vehículo colisionado como de propiedad de una empresa arrendadora de vehículos, "la Empresa de Alquileres de Automóviles con dirección CL DY CL 55 Bella Vista Apt 1. Como se aprecia sin dificultad, el vehículo que fue objeto de la colisión no era de propiedad del demandante, sino de una empresa que, supuestamente, se dedicaba al alquiler de vehículos.

El demandante, por su parte, presentó después de haberse notificado de la

sentencia de primer grado, en el escrito de la sustentación de la apelación, dirigida al tribunal de la causa y no al de apelación (fojas 56-59), otra certificación del Tesorero Municipal, visible a foja 65, solicitando al tribunal de apelación que recabase, como prueba de oficio, esta certificación, solicitud ésta que no fue atendida por el mencionado tribunal.

Aparece en el expediente, a foja 69, **otra** sustentación de la apelación, esta vez dirigido al Tribunal Superior de Justicia, la que ni aportó prueba alguna ni solicitó la apertura del proceso a prueba, en segunda instancia.

El Tribunal Superior se pronunció sobre la prueba de oficio decretada por el tribunal de la causa, en la que luego de una extensa reproducción de la sentencia de esta Sala, de 29 de enero de 1991, concluyó lo siguiente:

> "...
> De lo anteriormente expuesto, sin temor a equívocos, se puede colegir, que la facultad conferida al Juzgador, no debe estar dirigida a suplantar la actividad o gestiones de los sujetos procesales, es decir en un proceso en el que primordialmente rige el principio dispositivo, las partes, y en este caso la parte actora, tenía la obligación o la carga de la prueba sobre aquellos hechos controvertidos y no probados en el proceso, como se observa; el apoderado judicial de la parte actora, al momento de notificarse de la resolución impugnada, pudo anunciar que presentaría pruebas en segunda instancia, sin embargo, no lo hizo, haciéndose acreedor a las consecuencias jurídicas perjudiciales, producto de su omisión, por la cual, bajo ningún punto de vista, debe ser suplida por esta Superioridad, ya que lo contrario sería, como señaló la Corte Suprema, romper el equilibrio de la neutralidad, garantía esencia en el desempeño de las funciones jurisdiccionales. ..."

No obstante, a pesar de que existe confusión con respecto a las pruebas aportadas para acreditar la condición de propietario del vehículo colisionado del demandante, en dos certificaciones contradictorias, por lo que, como concluyó la sentencia de primer grado y la confirmación del tribunal de apelación, no aparecía acreditada de manera fehaciente e inequívoca la legitimación activa en cabeza del demandante, sino de una empresa arrendadora de vehículos. Es decir, que el demandante no acreditó, en la oportunidad procesal idónea, que era propietario del vehículo colisionado, y la ausencia de dicha prueba no podía haber sido suplida por una segunda prueba decretada de oficio por el tribunal de instancia, aún cuando el tribunal estimase admisibles las pruebas decretadas de oficio por el tribunal de instancia, no tendría ningún efecto con respecto a la decisión de la causa, tanto en primera instancia, como en segunda, por cuanto ésta no incidía en la parte resolutiva, cual es, negar las pretensiones de la demandante por no haber acreditado legitimación activa en el proceso, probanza ésta que le correspondía con fundamento en el artículo 773 del Código Judicial, sobre carga de la prueba. No prospera, por lo tanto, la aludida causal.

La segunda causal es, también, en el fondo, por infracción de las normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. La prueba, en apreciación del recurrente, que no fue apreciada, consiste en la certificación visible a foja 65, que consiste en una certificación, de 3 de agosto de 1995, que supuestamente corrige la remitida en acatamiento a las pruebas decretadas de oficio por el tribunal de la causa, ordenada mediante oficio de 24 de abril de 1995, y que consta que fue recibida por el tribunal de la causa el día 11 de agosto de 1995, es decir, cuando la competencia de dicho tribunal se encontraba suspendida, en virtud de tramitación, por parte del Tribunal Superior de Justicia, de recurso de apelación contra la sentencia de primer grado. Esta prueba, presentada en forma tan irregular, no podía haber sido considerada, como no la consideró, el Tribunal Superior de Justicia, en atención a que la misma fue aportada, sin que tal prueba accediese a la apertura de pruebas en segunda instancia, la que no fue solicitada oportunamente por la parte demandante, quien era competente para la apertura del período de pruebas en esta segunda instancia, cuya petición pudiese contradecir la parte demandada, y el tribunal no accedió, por las razones que se aprecian en la sentencia de segundo grado, a solicitar pruebas de oficio, como consta en la sentencia de segundo grado, parcialmente reproducida anteriormente.

Los motivos de esta causal están expuestos como sigue:
"...
PRIMERO: Que la injuricidad de la Resolución recurrida consistente en que en el Proceso Sumario subjúdice, el Juez Ad-quem ignoró la prueba que corre a foja 65 del infolio, legalmente producida y allegada al expediente por conducto de la Tesorería Municipal del Municipio de Panamá, o sea, de manera autónoma por la propia autoridad que la expidió, por medio de la cual, dicha autoridad municipal, informa al Tribunal la veracidad de lo que aparece en su registro vehicular, de manera que, de no haber sido ignorada, habría influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución.

SEGUNDO: Que la injuricidad de la Resolución recurrida consiste en que en el Proceso Sumario sujúdice, el Juez Ad-quem ignoró también las pruebas que corren a fojas 60 y 61 del infolio, por cuanto que, de haberlas observado se habría percatado que, dichas pruebas habían sido expedidas por la misma autoridad que expidió la prueba que corre a foja 45 por lo que deben tener similitud en su presentación, no obstante, resultan ser totalmente diferentes, en razón de lo cual, se hacía obligante su repetición y su cotejo, todo lo cual de no haberlas ignorado, habría influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución. ..."

Es evidente la prueba visible a foja 65 no ha podido ser tomada en cuenta por el tribunal de apelación, por cuanto no fue aportada en la oportunidad procesal correspondiente, ni solicitada como prueba de oficio por el Tribunal, por lo que dicha probanza, al no haber sido allegada al proceso con arreglo a las normas procesales correspondientes, no puede haber sido tomada en cuenta, en virtud del claro mandato contenido en el artículo 781 del Código Judicial.

Las otras pruebas que, en la perspectiva del recurrente, fueron desconocidas por el tribunal de apelación, son las visibles a foja 60 y 65, no obstante que éstas fuesen allegadas, la primera con el recurso de apelación por el propio recurrente, sin que se hubiese solicitado la apertura de pruebas para la segunda instancia, y, por esa razón, sin que la parte demandada tuviese oportunidad de contradecir dicha prueba, y la segunda desconociéndose en virtud de qué mecanismo fueron allegadas al proceso, por lo que se estima que fueron presentadas al margen de la oportunidad procesal que dispone la Ley. Por lo tanto, se desestima el segundo cargo.

Es oportuno recalcar que, en el recurso de casación, derivado de su naturaleza extraordinaria, la Sala no puede tomar en consideración otras circunstancias o elementos, ni invocar otras causales que las específicamente contenidas en el recurso correspondiente, siendo así que el tribunal de apelaciones no consideró pertinente atender la solicitud del recurrente en apelación, a pesar de que existían notorias contradicciones en los certificados aportados, tanto por el demandante, como las pruebas de oficio decretadas por el tribunal de instancia.

Se ha acreditado, en efecto, en el presente proceso la realización de un número plural de irregularidades en cuanto a su tramitación, como lo acredita la existencia en el mismo de dos certificaciones sobre el mismo aspecto, allegadas al proceso, una de ellas, al margen de las normas que gobiernan la apertura y práctica de pruebas, y otra por el propio tribunal de instancia, por lo que la Sala estima que, antes de haber decidido el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Justicia, debió proceder al saneamiento del proceso. Esta omisión del Tribunal Superior no puede ser subsanada por la Sala, por la especial naturaleza del recurso de casación, derivada de su naturaleza extraordinaria.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 13 de febrero de 1996 dictada dentro del proceso sumario de Liquidación de Condena Abstracto incoado por LUIS ROGELIO ESQUINA contra SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (en español) y PANAMANIAN TOURIST SERVICES, INC. (en inglés) y comercialmente NATIONAL CAR RENTAL.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIO QUE INTERPUSO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., (EN ESPAÑOL) INDUSTRIAS INTERNACIONALES DE PESQUERÍA, S. A. Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ASYN CONTRA BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados MORGAN & MORGAN viene ante la Sala Primera de la Corte en representación de la parte incidentista demandada, BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A., dentro del proceso ordinario propuesto por la INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC., y OTROS, con el propósito de que esta Superioridad case el auto fechado el 30 de agosto de 1995, emitido, en segunda instancia por el Primer Tribunal Superior de Justicia, confirmatorio de la resolución dictada por el Juez Primero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil.

La firma recurrente ha invocado dos causales de fondo que la Sala consideró admisibles y, cumplidas las ritualidades que la Ley contempla en estos casos, la Corte dispónese al examen de los cargos de injuricidad empleados por la censura contra la resolución que se impugna.

La primera causal de fondo es la de infracción de normas sustantivas, en concepto de aplicación indebida que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En un solo motivo se apoya el yerro de injuricidad que se le imputa por medio de esta causal a la sentencia. Consiste el cargo en sostener que el Tribunal Superior, por haber aplicado indebidamente normas de derecho relativas a costas judiciales cuando el punto controvertido nada tenía que ver con esa materia, sino con la pretensión del demandado absuelto para que el demandante -ya vencido en juicio- le resarciese e indemnizase los daños y perjuicios como consecuencia del secuestro decretado en su contra a solicitud de la parte actora derrotada, equivocó su fallo al proceder a la aplicación indebida de la Ley a un hecho no regulado por ella.

La disposición indebidamente aplicada, de acuerdo a esta causal, es el artículo 1057 del Código Judicial , el cual transcrito dice textualmente:

> "En toda sentencia o auto se condenará en costas a la parte actora contra la cual se pronuncie, salvo que a juicio del juez haya actuado de buena fe, sobre lo cual se motivará expresamente en la resolución. En ese caso de evidente buena fe, el Juez podrá condenar sólo a los gastos del proceso.
>
> No podrá estimarse que hay buena fe, entre otros casos, cuando el proceso se sigue sin que el demandado comparezca al proceso habiendo sido notificado personalmente, cuando haya habido necesidad de promover ejecución en contra del deudor para la satisfacción del crédito; cuando el vencido hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquéllas; cuando la parte hubiere aducido documentos falsos o testigos falsos; cuando no se rindiere ninguna prueba para acreditar los hechos de la demanda o las excepciones

> interpuestas o cuando se advierta ejercicio abusivo del derecho de gestión".

Estima el recurrente que la norma establece la obligación de condenar en costas a la parte desfavorecida por una decisión judicial en provecho de la vencedora, salvo las excepciones en ella prevista, y que las situaciones y hechos que debieron dirimirse con motivo de la presente controversia no se encuentran comprendidos entre los supuestos de la norma en comento, por lo que, cuando la misma fue aplicada por el Tribunal Superior, incurriose en su violación, pues se le usó para resolver un conflicto que no está incluido dentro de sus hipótesis.

Con el propósito de recoger lo más exactamente posible el planteamiento del recurrente, la Sala pasa inmediatamente a referirse a lo que se propuso en cuanto a la segunda causal invocada, que se encuadra dentro de la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa porque, como sabemos, la indebida aplicación de una norma por lo general conlleva la violación directa de la que debió ser aplicada (es el reverso de la medalla, según la atinada expresión del profesor Jorge Fábrega en su conocida obra sobre la Casación). Se impone la necesidad de examinar integralmente el contenido del recurso propuesto en virtud de la estrecha vinculación existente entre los dos componentes principales de la impugnación interpuesta.

La segunda causal de fondo, quedó dicho, se propone por la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, lo cual ha influido en forma determinante en lo dispositivo del fallo. Los motivos con que la censura describe los cargos imputados a la resolución se pueden resumir en los términos siguientes: El Tribunal Superior resolvió la controversia apartándose del punto a dilucidar, el cual reside en si debe o no el demandante perdidoso indemnizar al demandado absuelto por los daños y perjuicios provocados por la acción de secuestro practicada dentro del juicio ordinario que interpuso en contra del BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. Sostiene que, al denegársele la pretensión al incidentista, el fallo incurrió en yerro jurídico, pues "la buena fe en la pretensión denegada de los demandantes perdidosos y en su actuación litigiosa, no fue declarada ni expresada en la resolución emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, al momento de sentenciar la pretensión de los actores dentro del proceso ordinario en que se ha interpuesto el presente incidente de indemnización de daños y perjuicios". Faltando la declaración expresa de buena fe, surge automáticamente la obligación de indemnizar los perjuicios causados por los que debe responder la caución consignada para los efectos del secuestro, una vez se comprueben dichos perjuicios y el monto al cual asciendan los mismos. Este derecho no ha sido reconocido por la sentencia del Tribunal Superior, conforme lo asegura el casacionista.

Indícanse infringidos dentro de esta segunda causal los artículos 13 del Código Civil y 536A del Código Judicial.

El artículo 13 del Código Civil se dice violado directamente por omisión, ya que existiendo una disposición exactamente aplicable al punto controvertido, -artículo 536A del Código Judicial- se optó por aplicar otra disposición legal reguladora de una materia diferente. El artículo 13 del Código Civil se estima violado "al haberse desconocido el mandamiento legal sustantivo contenido en dicha norma de que se aplique la disposición legal que exactamente regula el punto controvertido".

El artículo 536A del Código Judicial también considerado infringido por la sentencia es del siguiente tenor:

> "536A. Si la resolución ejecutoriada negare la pretensión del demandante, habiendo mediado secuestro u otra medida cautelar, se devolverá la caución prestada para garantizar los perjuicios,si en el fallo se expresase que el demandante actuó de buena fe, salvo en lo se refiere al pago de las costas y expensas del proceso. Si no mediare la declaración a que se refiere el párrafo anterior, la caución sólo se liberará y devolverá si el demandado absuelto no formulase reclamación para indemnización de daños y perjuicios dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la

resolución en que resultó absuelto.

Si el demandado absuelto presentase la reclamación a que se refiere el párrafo anterior, no necesitará dar caución para asegurar la retención de la garantía retenida a su favor."

Pasaremos a citar parte fundamental de la argumentación del recurrente, con la finalidad de destacar aquellos aspectos en donde ha puesto énfasis especial en respaldo de su tesis:

"Es decir, la norma anteriormente transcrita establece la responsabilidad civil de indemnizar daños y perjuicios, atribuible al actor secuestrante, frente al demandado absuelto, en aquellos casos en que el Tribunal de la causa no hubiere declarado expresamente en la resolución judicial ejecutoriada mediante la cual se absolvió al demandado secuestrado, que el demandante actuó de buena fe, daños y perjuicios éstos de los cuales responde la fianza consignada por el actor para los efectos que se decretara la medida cautelar, una vez se hubieren acreditado en el proceso dichos daños y perjuicios y cuantificado el monto de los mismos". (Fs. 112).

Por último, cree la Sala conveniente hacer constar los criterios externados por el Tribunal Superior al dictar la resolución atacada, en aquello que concierne al punto controvertido, con el fin de situarse en una mejor posición para percatarse con precisión de lo que se debate en esta encuesta:

"... esta Superioridad logra atisbar que la resolución a la que alude el incidentista, proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de instancia, en su parte resolutiva estableció que "Las costas de ambas instancias como se han causado" estableciendo de esta forma que cada uno de los litigantes corre con sus propios gastos en el juicio (ver Reg. Jud. de febrero de 1981, pág. 43).

De lo dicho se infiere, que estando la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de instancia aplicó lo dispuesto por el artículo 1057 del Código Judicial que en lo pertinente establece que "En toda sentencia o auto se condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie, salvo que a juicio del Juez haya actuado con evidente buena fe ...", de lo expuesto se infiere que la única forma como la Corte pudo determinar que cada uno de los litigantes corran con sus propios gastos en el juicio, era aplicando lo dispuesto por la norma transcrita, en consecuencia, el argumento del incidentista queda sin fundamento.

Sobrada razón le asiste al Juzgador primario cuando en la resolución objeto de la alzada dispuso que la Coste Suprema de Justicia al declarar que las costas de ambas instancias como se han causado, lo que hacía era aplicar lo establecido en el artículo 1057 del Código Judicial donde se señala que no se condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie una sentencia, si esta ha actuado con evidente buena fe. (v. f. 68 del cuaderno del incidente)". (F. 98 y 99)

POSICIÓN DE LA CORTE.

Con el propósito de hacer manifiesto el yerro jurídico que, según se sostiene, ensombrece al fallo proferido por el Tribunal Superior, se ha venido aludiendo a la correcta invocación de determinada norma de derecho dentro de la sentencia acusada, en ocasión de dirimir la controversia. La Sala acepta y reconoce que el artículo 1057 del Código Judicial, señalado como infringido en concepto de aplicación indebida por el casacionista, no incluye en forma directa la consideración del tema de la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse en favor de la parte finalmente absuelta y que, a su vez, estuvo sometida a los efectos de una acción de secuestro practicada a solicitud de la parte que terminó siendo vencida en el proceso. Sin embargo, también la Sala

tiene conciencia de que la norma en comento encierra en su contenido determinados elementos que no se pueden marginar a la hora de hacer la valoración y tomar la decisión en cuanto a si cabe o no el reconocimiento de daños y perjuicios a favor de quien hubiese acabado siendo el favorecido con una sentencia en un juicio determinado. Hay que admitir que el problema no es de fácil ni de sencilla solución. Comenzando porque es cierto que el objeto de la controversia no se encuentra explícitamente contemplado en el artículo 1057 del Código Judicial, norma intrincada; a lo mejor no en su redacción, pero sí, en cambio, en lo atinente a su alcance y objetivo, o sea, hacia su correcta interpretación. A propósito y como se tendrá oportunidad de comprobar más adelante, el artículo 536A del Código Judicial, cuya mala aplicación denuncia el recurrente en la solución de esta encuesta, no es menos impreciso y equívoco respecto a la respuesta que se quiere obtener a través del presente recurso.

Es un hecho no discutible que la Corte al resolver el proceso principal no se refirió a la evidente buena fe con que la parte demandante actuó en el juicio. Pero por otro lado, no deja de ser verdad que sí incluyó en la parte dispositiva de la sentencia la frase "las costas de ambas instancias como se han causado", a lo que, en contra de la opinión del recurrente, la Sala le debe conceder determinada importancia al momento de deducir y calificar la conducta procesal de los protagonistas, en particular en lo que se refiere a la buena o mala fe con que los mismos hayan actuado. No se puede hacer abstracción de que, en principio, el artículo 1057 hace imperativas las costas, las hace obligantes, y que sólo por excepción la sentencia o el auto condenatorio dejarán de incluir esa especie de sanción pecuniaria que recae, por regla general, sobre el vencido, si éste no se ha conducido con lealtad, sin temeridad y con probidad dentro del proceso. De allí que una sentencia sólo podrá abstenerse de incluir la condena en costas (lo dice así el artículo 1057) cuando la parte contra la cual se dictó, a juicio del juez, ha actuado de buena fe. A contrario, deberá inferirse que las costas son el fruto del comportamiento marcado por la temeridad, la mala fe, la deslealtad y la conducta impropia de una de las partes; en otras palabras, de la ausencia de buena fe. El segundo inciso del artículo 1057 es, como se sabe, una especie de guía o medio de orientación para que el juzgador cuente con puntos de referencia que le sean útiles para establecer y valorar la conducta de las partes en cuanto a los canones procesales que sirven para catalogar la buena o la mala fe con que se haya actuado. En el caso específico que se estudia cabe señalar que a la parte que resultó vencida en juicio no le han sido imputados ninguno de los cargos que el artículo 1057 contempla en su inciso segundo como impedimentos para que se descartese en su contra la buena fe con que se presume actuó dentro de este proceso.

A diferencia de otras legislaciones procesales extranjeras (la colombiana por ejemplo), no contiene la nuestra un articulado más o menos sistemático que le permita a los litigantes y a sus apoderados tener siempre la certeza de cuáles son aquellos casos en que sus actos procesales trascienden las barreras de la buena fe para introducirse en el ámbito de la mala fe o de la temeridad. El derecho, cuando lo miramos desde el punto de vista de las soluciones jurídicas que ofrece, no se puede interpretar al margen de las circunstancias históricas en que se desenvuelve. Por ser un producto cultural, serán esas circunstancias las que nos darán la pauta para aplicar el derecho en el escenario concreto y de acuerdo a las realidades de que se trate. Es esa la situación que se presenta cuando la buena fe se utiliza como criterio para interpretar las normas del ordenamiento legal o las cláusulas de los contratos o la conducta de quienes intervienen en determinado negocio jurídico. La buena fe estará siempre estrechamente vinculada al sistema de creencias y valores imperantes o adoptados por una comunidad determinada. Todo eso hace que la noción de buena fe, en cuanto a contenido, alcance y significado, sea algo variable y de difícil precisión a la hora de encontrar para ella una definición exacta y apropiada.

La Sala entiende que, si no se produjo una condena en costas cuando la Corte Suprema desató el juicio principal, ello obedeció a que el juzgador estuvo convencido que la parte demandante no obró transgrediendo los límites impuestos por la buena fe, aún cuando no se hubiese hecho referencia directa y expresa a esas circunstancias.

No encuentra la Sala, respecto a la primera causal, fundamentos que le

sirvan para respaldar los cargos formulados por el casacionista en cuanto a la violación de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida. Y en cuanto a la segunda causal empleada, la Sala no considera que haya ocurrido la violación directa de las normas sustantivas de derecho que se aducen. Primero, porque no hubo infracción del artículo 13 del Código Civil en los términos denunciados, ya que en opinión de la Sala el Tribunal Superior no incurrió en yerro al aplicar el artículo 1057 del Código Judicial. En segundo lugar, respecto a la supuesta infracción del artículo 536A del Código de Procedimiento, la simple lectura de esta norma nos indica con toda claridad que ella se refiere a un supuesto específico y concreto consistente en la posibilidad de que se devuelva o no la fianza prestada para garantizar los posibles perjuicios ocasionados por un secuestro. En el caso subjúdice no se consignó fianza de secuestro, con el agregado, como ya se ha dicho, de que en esta causa la parte demandante no actuó al margen de la buena fe, pues de no haber sido así la Corte Suprema no hubiese podido abstenerse de condenar en costas al resolver el juicio ordinario que le sirve de antecedente al incidente resuelto por el fallo que con este recurso de casación es atacado.

Por las anteriores consideraciones la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 30 de agosto de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del Incidente de Indemnización de perjuicios propuesto por INTERNATIONAL FISHERIES INDUSTRIES, INC. (INDUSTRIA INTERNACIONAL DE PESCA, S. A.) Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ANTHONY ASYN contra BANCO DE SANTANDER Y PANAMÁ, S. A.

Las costas de casación de fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ERNESTO CHARTER DU SAIRE Y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **MARCOS TULIO LONDOÑO A.** en su condición de apoderado legal de **JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO**, demandante en el proceso ordinario que le sigue a **ERNESTO CHARTER SU SAIRE y/o ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ**, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 10 de enero de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Vencido el término para la corrección del recurso de casación y habiéndose efectuado en tiempo oportuno, la Sala procede al examen del nuevo escrito que corre de fojas 171 a 178 del expediente, para decidir en forma definitiva su admisibilidad.

Según se ha observado, cada uno de los defectos señalados al recurrente fueron subsanados, por lo que la Sala considera procedente admitir el recurso corregido.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el Lcdo. Marcos Tulio Londoño en representación de ARIEL

PIERCE SERRANO, contra la sentencia de 10 de enero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que le sigue a ERNESTO CHARTER DU SAIRE y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BALTAZAR BETEGÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO DE PERTURBACIÓN INCOADO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGÓN Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **SANTANDER TRISTÁN DONOSO**, en representación de **BALTAZAR BETEGÓN**, dentro del proceso sumario que a éste y a otros les sigue **COLÓN INTERNACIONAL, S.** A., ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la resolución de 31 de octubre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

La Corte procede a decidir la admisibilidad del recurso, para lo cual se verificará si cumple con las exigencias del artículo 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto del presente recurso de casación es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley, pues fue dictada por el Primer Tribunal Superior en segunda instancia y, aunque la misma declaró desierto el recurso de apelación, es decir, que no resolvió la apelación en sí, la Sala consideró que tal resolución tiene el efecto subsidiario de inhibir la acción al punto de poner fin al proceso sumario de interdicto posesorio; ello obedece a que la resolución contra la cual se anunció el recurso de apelación tiene carácter de sentencia, porque decide una pretensión en el proceso sumario. Así se declaró al resolver el recurso de hecho propuesto en este caso (ver Res. de 16 de mayo de 1996 a fs. 183 a 185).

De allí que el Tribunal debió emitir un pronunciamiento, aunque no se hubiese sustentado tal recurso. Sin embargo, lo declaró desierto por considerar la resolución apelada como un auto y no como una sentencia (art. 1122 C. J.).

En este sentido, es obvio que el recurso de casación debió ser en la Forma ya que el sentenciador equivocó el procedimiento o trámite que debió imprimir al proceso. Sin embargo, el casacionista interpone el recurso en cuanto al Fondo, lo que constituye el primer error en este caso.

Aunado a lo expuesto, el recurso de casación es a todas luces ininteligible, pues los que se establecen como apartados de este medio de impugnación son incongruentes entre sí y no observan la forma especial en que deben ser estructurados y desarrollados.

Así, se determinaron dos causales de fondo, las cuales están seguidas de una especie de alegatos del recurrente, los que, aunque se titulan "motivos", no expresan ni remotamente algún cargo contra la resolución impugnada. Por lo que ha de entenderse que se ha omitido ese apartado del recurso, exigido por el artículo 1160 del Código Judicial.

La Sala considera que lo antes expuesto conduce necesariamente a la inadmisión de este recurso de casación.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por el licenciado SANTANDER TRISTÁN DONOSO en representación de BALTAZAR BETEGÓN, dentro del proceso sumario de interdicto de perturbación incoado por COLÓN INTERNACIONAL, S. A. contra éste y otros.

Las obligantes cosas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.250.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO, NULIDAD DE ACTO O CONTRATO, CARENCIA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA POR LA EJECUTADA DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A. CONTRA MARIELA OLIVARES DE RANGEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **ROGELIO SINGH SANTIMATEO**, en su condición de Representante Legal de **CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A.**, ha propuesto recurso de casación contra la sentencia de 9 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en la excepción de pago, nulidad de acto o contrato, carencia de causa e inexistencia de la obligación presentada, dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía que le sigue a MARIELA OLIVARES RANGEL.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que solamente fue aprovechado por la parte demandada, según consta de fojas 87 a 89 del expediente.

Procede la Sala a decidir la admisibilidad del recurso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1165 del Código Judicial, en concordancia con el 1160 y otros del mismo Código.

Si bien, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo, la Sala observa que el escrito de formalización de este medio impugnativo presenta diversos defectos que ameritan su corrección.

En primer lugar, la causal no ha sido invocada en forma completa, sino que sólo se determina el concepto de la infracción, al expresar "**violación directa de la Ley sustantiva por omisión**". Siendo la forma correcta, la establecida expresamente en el artículo 1154 del Código Judicial.

En segundo lugar, los motivos del recurso no se limitan a expresar el o los cargos de injuricidad contra la sentencia de segunda instancia. Contienen una serie de opiniones subjetivas sobre la manera en que considera el recurrente que el Ad-quem debió actuar. En especial, el defecto más grave se evidencia en el segundo motivo que presenta el contenido propio del siguiente apartado del recurso de casación, es decir, en el mismo se citan las normas consideradas infringidas y se explica el concepto de su infracción.

El recurrente debe corregir los defectos anotados, ya que, en la forma como ha sido estructurado el recurso de casación, resulta improcedente de conformidad con la técnica propia de este extraordinario recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por CHANAN'S IMPORT & EXPORT, S. A. contra MARIELA OLIVARES RANGEL.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAGINA BAJWA GILL Y LUIS A. HINCAPIÉ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE RAGINA BAJWA GILL LE SIGUE A LUIS A. HINCAPIÉ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO VILLARREAL ALVARADO, en representación de RAGINA BAJWA GILL; y, la firma forense **MORGAN Y MORGAN**, en representación de **LUIS ALBERTO HINCAPIÉ**, han interpuesto recursos de casación contra la sentencia de 19 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario instaurado por RAGINA BAJWA GILL contra LUIS A. HINCAPIÉ, con Demanda de Reconvención propuesta por el último contra la señora RAGINA BAJWA GILL.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes presenten sus escritos sobre la admisibilidad del recurso, término aprovechado solamente por el representante del demandado en el proceso ordinario (oposición). (Fs. 269, 270).

Luego del correspondiente examen de ambos recursos de casación, visibles a fojas 344 a 355 y de 358 a 362, esta Sala de la Corte considera que es procedente la admisión sólo de las causales de fondo, en ambos recursos, pues las mismas se ajustan a las exigencias que al efecto determinan las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, es decir: 1) la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; 2) los recursos han sido interpuestos en tiempo; 3) los escritos de formalización cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 1160 del Código Judicial; y, 4) las causales expresadas son de las señaladas por la Ley.

La casación de forma formulada en los dos recursos no puede ser acogida. Veamos:

En el caso del recurso de casación propuesto por el Licenciado Ricardo Villarreal (fs. 344), se observa en relación a la causal de forma que no se cumple con el artículo 1179 del Código Judicial, porque el recurrente no reclamó la reparación de la falta en primera instancia. En este sentido, la norma expresa que en los recursos de casación en la forma se debe reclamar la reparación de la falta en la instancia en que se cometió, así como en las siguientes, pues de lo contrario resulta inadmisible.

Con respecto al recurso de casación interpuesto por MORGAN Y MORGAN (fs. 358), en representación del demandado - reconvencionista, vemos que los motivos de la causal de forma no son congruentes con ésta y se refieren, además, a la misma situación de hecho enunciada en los motivos de la casación en el fondo. En el caso concreto, que se condenó de acuerdo con la cláusula penal en vez de condenarse a una indemnización ordinaria, como pretende la demanda de reconvención. Esta situación no constituye un error in procedendo, sino in iudicando.

Por estas razones, sólo son admisibles los recursos en cuanto a las causales de fondo y no en cuanto a las de forma.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la causal de FORMA y ADMITE la causal de FONDO expresadas en el recurso de casación propuesto por la firma forense MORGAN Y MORGAN en representación de LUIS ALBERTO HINCAPIÉ; y, NO ADMITE la causal de FORMA y ADMITE la causal de FONDO determinadas en el recurso de casación formalizado por el licenciado RICARDO VILLARREAL, en representación de RAGINA BAJWA GILL, ambos, contra la resolución de fecha 19 de abril de 1996, dentro del proceso ordinario que RAGINA BAJWA GILL le sigue a LUIS ALBERTO HINCAPIÉ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAFAEL REYES RICHA RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DEMETRIO DUTARY, LUIS PICARD AMI Y FRANCISCO BRAVO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la resolución que expidiera el 9 de septiembre de 1996, ordenó al licenciado GABRIEL MARTÍNEZ GARCÉS, apoderado especial del Dr. RAFAEL REYES RICHA que corrigiera el recurso de casación que había interpuesto contra la resolución del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, calendada 10 de enero de 1996.

El recurrente corrigió en tiempo, de acuerdo al informe de Secretaría que consta a foja 636 del expediente. En cuanto al contenido de lo corregido, se aprecia que el mismo se ajusta a lo ordenado por la Sala, es decir, que el casacionista enmarca los motivos dentro de las parámetros que le fueron indicados por este Tribunal de Casación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por RAFAEL REYES RICHA, mediante apoderado especial, dentro del proceso ordinario que le sigue a DEMETRIO DUTARI, LUIS PICARD AMI y FRANCISCO BRAVO.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente observo que el recurrente en casación no corrigió el recurso de manera que plantee una proposición jurídica completa.

La causal de fondo que se invoca es la de violación directa de la ley sustantiva. En la resolución que ordenó su corrección se le señaló al recurrente que debía exponer en los motivos, "hechos concretos que fundamenten el cargo que le formula a la sentencia objeto del recurso". No obstante, los motivos del nuevo

escrito de formalización se mantienen en el mismo nivel de abstracción que le fuera censurado. Se limitan a señalar que al negarle legitimación pasiva en la causa a los demandados, se violaron normas sustantivas de derecho que obligan a las personas a responder civilmente por sus omisiones o actos culposos o negligentes. Pero no explica cuáles son esos actos (culposos o negligentes) en que incurrieron los demandados, que no fueron considerados por la sentencia impugnada.

Considero que debe declararse inadmisible el recurso de casación.

Por esas razones respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL Y EL JUZGADO MUNICIPAL DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO EN EL PROCESO DE ALIMENTO INSTAURADO POR MAGALY E. RUIZ DOLANDE CONTRA LAWRENCE A. ROUSE JOSEPH Y A FAVOR DEL MENOR LAWRENCE ARTHUR ROUSE RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Juzgado Municipal de Familia de San Miguelito ha llegado a la Sala Civil el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial, Provincia de Panamá y el Juzgado Municipal de Familia del Distrito de San Miguelito, dentro del proceso de alimento instaurado por MAGALY E. RUIZ DOLANDE contra LAWRENCE A. ROUSE JOSEPH y a favor del menor LAWRENCE ARTHUR ROUSE RUIZ.

El presente proceso de alimentos fue recibido por el Juzgado Seccional de Menores de San Miguelito el día 13 de noviembre de 1995. Dicho juzgado, después de realizar los trámites legales y de celebrar la audiencia correspondiente, fija la pensión alimenticia provisional en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS POR MES (B/.350.00).

Posteriormente, la señora MAGALY ELENA RUIZ DOLANDE, en declaración jurada rendida ante el Juzgado Seccional de Menores, expresa lo siguiente:

> "... Vengo a solicitar a este despacho para que me declinen el expediente del proceso de pensión alimenticia al Juzgado de Familia, ubicado en las Colinas, porque me queda demasiado lejos para retirar el giro, ya que es mi madre la encargada para retirarme el giro y ella es la persona que me cuida al niño ..."

En base a la anterior declaración, el Juzgado Seccional de Menores, en resolución de fecha 10 de junio de 1996, DECLINA el proceso de Pensión Alimenticia a favor del menor LAWRENCE A. ROUSE RUIZ, al Juzgado Municipal de Familia del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

Al ser recibido el expediente por el Juzgado Municipal de Familia, emite una resolución de fecha 31 de junio de 1996, en la cual REHUSA AVOCAR EL CONOCIMIENTO del presente proceso de alimento y, en consecuencia, se remite al Superior el expediente, para que dirima el conflicto.

Debe la Sala, en primer lugar, determinar si es competente para conocer del

presente conflicto entre el Juzgado Municipal de Familia de San Miguelito y el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial, Panamá. Este Tribunal observa que, los mismos, no tienen un Superior común, por lo que resulta aplicable el artículo 93 de nuestro Código Judicial, el cual en el numeral tercero establece que la Sala Primera conocerá en una sola instancia de las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común.

Corresponde a la Sala resolver a quien le corresponde la competencia.

La Sala desea recordar, que competencia, como bien expresa la Juez de Familia, es la facultad de administrar justicia en determinadas causas, lo que de ninguna manera pueden ejercer dos tribunales distintos a la vez. De cualquier manera nuestra legislación establece reglas sobre la competencia, para cuando ocurren dichos conflictos.

En el presente conflicto de competencia la Sala considera que es claramente aplicable el artículo 237 del Código Judicial, el cual reza así:

> "ARTÍCULO 237: Competencia preventiva es la que corresponde a dos o más tribunales de modo que el primero que aprehende el conocimiento del proceso previene o impide a los demás conocer del mismo.
>
> Se exceptúan los procesos de alimento en los cuales, aún cuando haya sido aprehendido el conocimiento del negocio por un Tribunal, por el cambio de residencia del alimentista y a petición de éste, se declinará el conocimiento del negocio al Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar del nuevo domicilio".

La norma transcrita es perfectamente clara al señalar que sólo puede cambiar la competencia, en un proceso de alimento, cuando el alimentista ha cambiado la residencia. En el presente proceso, el alimentista continúa residiendo en el mismo lugar, por lo que no procede la declinatoria.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley FIJA la competencia del proceso alimenticio instaurado por MAGALY E. RUIZ DOLANDE contra LAWRENCE A. ROUSE JOSEPH y a favor del menor LAWRENCE ARTHUR ROUSE RUIZ, el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL Y EL JUZGADO MUNICIPAL DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO EN EL PROCESO DE ALIMENTO INSTAURADO POR MARY ESTHER URRIOLA CALDERÓN CONTRA EGIDIO JORGE FAMIGLIETTI Y A FAVOR DEL MENOR JORGE ANTONIO FAMIGLIETTI URRIOLA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial de Panamá y el Juzgado Municipal de Familia del Distrito de San Miguelito, dentro del proceso de alimentos interpuesto por **MARY ESTHER URRIOLA CALDERÓN**, en favor de su hijo **JORGE ANTONIO FAMIGLIETTI**

URRIOLA contra **EGIDIO JORGE FAMIGLIETTI.**

Dicho proceso de alimentos fue instaurado ante el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial de Panamá y, en atención a solicitud de la señora MARY ESTHER URRIOLA CALDERÓN, ese Juzgado dictó la Resolución N° 098 de 10 de junio de 1996, por medio de la cual declinó el proceso al Juzgado Municipal de Familia del Distrito de San Miguelito, con fundamento en los artículos 233 y 237 del Código Judicial.

Por su parte, mediante Resolución N° 262 de 31 de julio de 1996, el Juzgado Municipal de Familia del Distrito de San Miguelito rehusó avocar el conocimiento del proceso de alimentos instaurado por la señora URRIOLA CALDERÓN y remitió el negocio a esta Sala, para dirimir el conflicto de competencia.

De acuerdo con lo que establece el ordinal 3 del artículo 93 del Código Judicial, la Sala Primera de lo Civil conoce en una sola instancia de las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Por su parte, el artículo 237 del Código Judicial señala lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 237.** Competencia preventiva es la que corresponde a dos o más tribunales de modo que el primero que aprehende el conocimiento del proceso previene o impide a los demás conocer del mismo.
>
> Se exceptúan los procesos de alimento en los cuales, aún cuando haya sido aprehendido el conocimiento del negocio por un Tribunal, por el cambio de residencia del alimentista y a petición de éste, se declinará el conocimiento del negocio al Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar del nuevo domicilio."

Actualmente, los jueces municipales conocen de los procesos de alimentos a prevención con las autoridades de policía, los jueces de menores y los jueces de familia. Como se señaló anteriormente, el presente proceso se interpuso ante el Juzgado de Menores del Segundo Circuito Judicial de Panamá y la demandante solicitó su declinatoria al Juzgado Municipal de Familia del Distrito de San Miguelito, en virtud de que a la persona encargada de retirar la pensión le quedaba muy lejos el Juzgado de Menores.

El artículo 237 del Código Judicial arriba transcrito, contempla como excepción dentro de los procesos de alimentos, la declinatoria de competencia del negocio, cuando el alimentista haya cambiado su residencia, al Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar del nuevo domicilio del alimentista. La solicitud realizada en el presente caso no se enmarca dentro de ese supuesto, razón por la cual la competencia le corresponde al Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial de Panamá, que fue el primero que aprehendió el conocimiento del negocio.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, FIJA la competencia del presente proceso de alimentos en el Juzgado Seccional de Menores del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN PROPUESTO POR EL SEÑOR EUGENE MCGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, ha solicitado a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se le separe del conocimiento del presente negocio, contentivo del recurso de revisión propuesto por el señor EUGENE MCGRATH RENAULD, dentro del proceso sumario de lanzamiento que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

La manifestación de impedimento está concebida en los siguientes términos:

"Respetuosamente solicito al resto de los Magistrado que conforman la Sala Civil, me separen del conocimiento del recurso de revisión interpuesto por el señor EUGENE MCGRATH RENAULD contra la sentencia del 14 de julio de 1995, dictada por la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso sumario instaurado por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra la parte recurrente.

Esta solicitud la hago en virtud de que la sentencia impugnada en el presente caso fue dictada bajo mi ponencia; por lo que estimo que se configura la causal contenida en el ordinal 12 del artículo 749 del Código Judicial.

Panamá, 7 de octubre de 1996.

(Fdo.)
RAFAEL A. GONZÁLEZ".

La Sala estima que la circunstancia expuesta por el Honorable Magistrado, es causal de impedimento y recusación, conforme lo establece el artículo 749, en su numeral 12, por lo que procede la separación del conocimiento de este negocio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, en base a lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 749 del Código Judicial, y DISPONE designar al Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal que corresponda, de acuerdo al orden alfabético.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO AUBREY OLIVER DAWKINS SAMUELS INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 13 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) INTERPUESTA POR JULIO OSVALDO MOSQUERA CONTRA MOHAMED LAFI HAMDAN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **AUBREY OLIVER DAWKINS SAMUELS**, actuando en su condición de apoderado especial de **MOHAMED LAFI HANDAM** dentro del Proceso Ordinario (Acción de Secuestro) instaurado por **JULIO OSVALDO MOSQUERA**, ha recurrido de **HECHO** contra la Resolución de 3 de julio de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual "**NIEGA**" el término para la formalización del recurso de casación interpuesto contra el auto de 21 de junio de 1996 proferido por el mismo tribunal. instancia.

La Sala de la Corte, previamente, debe decidir si admite el recurso de hecho interpuesto en atención al cumplimiento de los presupuestos que establece el artículo 1141 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que:

1- La "respectiva resolución sea recurrible", en este caso, la resolución contra la cual se pretende recurrir en casación, de conformidad con los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial.

2- El "recurso se haya interpuesto oportunamente" y el Tribunal "lo haya negado expresa o tácitamente".

3- La "copia se pida y se retire en los términos señalados" y se "ocurra con ella ante el superior" oportunamente.

En el caso bajo examen se observa que, las copias acompañadas con el escrito de interposición del Recurso de Hecho revelan claramente que la resolución contra la cual el recurrente anunció recurrir en casación, visible de fojas 5 a 9, fue dictada dentro de una acción precautoria de secuestro y decide **REVOCAR** el Auto por el cual por el cual el Juzgado Primero del Circuito ordenó al secuestrante sustituir la fianza de perjuicios, y en consecuencia "**NIEGA** la solicitud de sustitución de caución de daños y perjuicios solicitada por el apoderado judicial de la parte demandada".

El tribunal al negar el término para la formalización del recurso de casación, advierte acertadamente que el auto de 21 de junio de 1996 contra el cual se dirige el recurso de casación, no se encuentra incluido en aquéllos, que a tenor del artículo 1149 del Código Judicial son susceptibles de ser impugnados por vía de dicho recurso.

La Corte comparte el criterio del Tribunal Superior, toda vez, que resulta evidente que la resolución judicial que niega la sustitución de la caución de daños y perjuicios establecida en relación a un secuestro dentro de un proceso ordinario, no es de los supuestos que describe el artículo 1149 en su numeral 4, como pretende el recurrente. En tal sentido, el Artículo 1149 del mismo Código enmarca taxativamente las resoluciones que son recurribles en casación y en lo referente al caso de marras la resolución cuestionada no se encuentra dentro de las mismas.

Conforme a lo anterior, la Sala debe emitir el pronunciamiento que corresponde, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1141 antes citado que en la parte pertinente dispone, entre otras circunstancias procesales, para admitir el Recurso de Hecho la exigencia que "... la respectiva resolución sea recurrible ...", siendo que el caso subjúdice no es recurrible en casación.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Recurso de Hecho propuesto por el MOHAMED LAFI HAMDAM contra la Resolución de 3 de julio de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes condena en costas a cargo del recurrente se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS con 00/100 (B/.150.00).

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

EUGENE MCGRATH RENAULD INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO VILLARREAL ALVARADO, actuando como apoderado judicial del señor EUGENE MCGRATH RENAULD, ha promovido recurso de revisión contra la sentencia de 14 de julio de 1995, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, dentro del proceso sumario de lanzamiento promovido por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra EUGENE MCGRATH RENAULD.

Surtido el reparto de rigor, se fijó la cuantía de la fianza que debe consignar el recurrente, para que el recurso de revisión pueda ser acogido, tal como lo pauta el artículo 1196 del Código Judicial. Consta a foja 292 del expediente la diligencia de consignación mediante el certificado de garantía N° 16352 de 2 de agosto de 1996. En consecuencia, el Magistrado Sustanciador procedió a solicitar al Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, el expediente que contiene el proceso sumario de lanzamiento a que se refiere la revisión demandada, con el fin de determinar la admisibilidad del mismo. Realizada toda la ritualidad inherente a este recurso, se pasa a resolver, tal como lo preceptúa el artículo 1198 del Código Judicial.

El recurrente expresa en el libelo que corre desde fojas 3 a 5, lo siguiente:

"III. LA DESIGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA:

La solicitud de revisión recae sobre la sentencia del catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso sumario de lanzamiento promovido por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra el señor EUGENE MCGRATH RENAULD.

IV. EXPRESIÓN DE LA CAUSAL INVOCADA Y LOS HECHOS QUE LE SIRVEN DE FUNDAMENTO:

a). LA CAUSAL QUE SE INVOCA:

Invocamos en el presente Recurso de Revisión, la causal reconocida el artículo 1189, numeral (2°) del Código Judicial, por tratarse de una sentencia pronunciada, que después se encontraron documentos decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir en el proceso por causa de fuerza mayor.

b). HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA CAUSAL:

PRIMERO: El BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, promovió proceso sumario de lanzamiento ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Circuito Judicial de Panamá, contra el señor EUGENE MCGRATH RENAULD. Luego de los trámites correspondientes ete (sic) Tribunal de Justicia, procedió a negar la solicitud de lanzamiento esgrimido en dicho proceso, por medio de la sentencia N° 23 del veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993).

SEGUNDO: Contra la sentencia a que se alude en el hecho anterior, el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, por conducto de su apoderado judicial presentó Recurso de Apelación, y en la segunda instancia el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, previo los trámites correspondientes, dictó la sentencia del 30 de diciembre de 1993, por medio de la cual este Tribunal resolvió confirmar la sentencia N° 23 de veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993).

TERCERO: Contra la sentencia del Tribunal Superior de Chiriquí, es decir, la resolución judicial de fecha treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, como parte afectada interpuso Recurso de Casación contra dicha resolución, medio impugnativo que fuera tramitado en los términos que señala la ley, y por ende enviado a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal competente, para conocer dicho recurso extraordinario.

CUARTO: Estando el proceso en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, este Tribunal le imprimió el trámite correspondiente para poner el caso en estado para resolver en estas condiciones la Sala Civil de la Corte Suprema, dictó la sentencia de fecha catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en la cual casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Chiriquí, en la cual se niega el lanzamiento pedido por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, en el proceso de lanzamiento en contra de EUGENE MACGRATH RENAULD.

QUINTO: En la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, también se señala el término de treinta (30) días para la desocupación de las fincas arrendadas, y se ordena al Juez Segundo de Chiriquí, que proceda de conformidad con el artículo 1397 del Código Judicial.

SEXTO: Después de pronunciada la sentencia a que se alude en los hechos cuarto y quinto, se han encontrado una serie de pruebas que demuestran que el señor EUGENE MCGRATH RENAULD, sí cumplió con su obligación, con relación al contrato de arrendamiento que sirve de fundamento a la demanda de lanzamiento interpuesta por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, por lo que procede la revocación de la resolución impugnada por este recurso de revisión".

Ahora bien, el examen del escrito de interposición del recurso de revisión arriba transcrito, ilustra, sin la menor duda que, la impugnación está enderezada contra una sentencia dictada por la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia del recurso extraordinario de casación promovido por EUGENE McGRATH RENAULD dentro del proceso sumario de lanzamiento que le sigue BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Como es de todos sabidos, el recurso de revisión tendrá lugar contra sentencia dictada por la Corte Suprema, por un Tribunal Superior, o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, el mismo no se haya surtido por los motivos que se señalan en los nueve (9) numerales que contiene el artículo 1189 del Código Judicial. La referida norma señala textualmente, en el primer párrafo, lo siguiente:

"Habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por la Corte Suprema, por un Tribunal Superior, o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los siguientes motivos: ..."

El caso en estudio, se persigue la revisión de una sentencia dictada por la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia.

El presente negocio resulta a todas luces INADMISIBLE, porque no se trata de un proceso de única instancia, sino como consecuencia de un recurso de casación dictado contra una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a esta materia, esta Corporación de Justicia, en fallo de 23 de junio de 1992 y publicado en el Registro Judicial de Junio 1992, páginas 123-130, dentro del proceso de revisión interpuesto por SICK LEAVE, S. A. y otros, señaló lo siguiente:

> "...
> De acuerdo a esta interpretación del Despacho Sustanciador significa que las sentencias dictadas en procesos de doble instancia, no serían susceptibles de impugnación mediante el extraordinario recurso de revisión cuando la parte afectada apele contra el fallo de primera instancia, y, posteriormente, recurra en casación contra la resolución que pone fin al proceso en la segunda instancia."

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de revisión interpuesto por EUGENE McGRATH RENAULD, por medio de apoderado judicial.

Se dispone que por Secretaría se devuelva al recurrente la fianza consignada y al Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, los antecedentes que constan de 562 fojas útiles.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

OCTUBRE 1996

AUTO APELADO

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARCOS EMILIO RESTREPO Y BOLÍVAR E. ECHEVERRÍA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el cuadernillo que contiene la solicitud de medida cautelar, dentro del proceso penal seguido a **HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA** por el delito de homicidio en perjuicio de **MARCOS EMILIO RESTREPO y BOLÍVAR E. ECHEVERRÍA.**

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Segundo Tribunal Superior al resolver la solicitud hecha por el abogado defensor de Chen Quintana, mediante auto de 8 de agosto de 1996, sustituyó la detención preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, al considerar "que el solicitante se encuentra en un estado de salud delicado, que sólo le puede dar atención su madre en su vivienda, lo cual ha sido acreditado por el propio Médico Forense del Instituto de Medicina Legal".

También funda esa decisión en la absolución de los cargos decretada por el Juez Tercero Municipal el 9 de mayo de 1996 (fs. 6-11) al concluir en la audiencia fijada para dilucidar ese caso, que no se había configurado el delito de evasión y menos aún el de encubrimiento que se le endilgaba a Hilario Enrique Chen Quintana.

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

La impugnación del auto de 8 de agosto de 1996 fue anunciada y sustentada por la Fiscal Segunda Superior, quien argumentó señalando que la Sala Segunda de la Corte al revocar la resolución del Tribunal que le otorgaba al solicitante permanencia domiciliaria, la sustituyó por la de reclusión en un centro de salud del Estado, con la custodia necesaria, hasta tanto se mantengan sus condiciones actuales de paraplejia, con inamovilidad de las extremidades inferiores y ausencia de control de sus esfínteres abdominales, pero que en dicha resolución nunca se mencionó la comparecencia periódica del imputado a un Tribunal o despacho del Ministerio Público.

Agrega que la interpretación del informe médico-forense no permite deducir que el señor Chen Quintana deba necesariamente ser atendido en el domicilio por su madre y por último indica que la revocatoria hecha por la Corte Suprema de Justicia no se fundamentó en la posible comisión de delitos de quebrantamiento de sanciones y encubrimiento, sino en los distintos procesos penales que se le siguen y que demuestran que su condición parapléjica no es obstáculo para vincularse a otros hechos delictivos, pues lo que debe tomarse en cuenta es su alto grado de peligrosidad y proclividad delictiva.

CRITERIO DE LA DEFENSA

Considera el licenciado Isaías Barrera Rojas, en su calidad de defensor de Hilario Enrique Chen Quintana, que no le asiste razón a la apelante porque la nueva solicitud de sustitución de la medida cautelar de reclusión en un centro hospitalario del Estado por el de arresto domiciliario, se apoya en pruebas nuevas aportadas al expediente, que consisten en un fallo absolutorio de los supuestos cargos a los que se le vinculaba en cuanto al quebrantamiento de sanciones y encubrimiento y los nuevos exámenes médicos que se le practicaron por miembros del Instituto de medicina Legal del Ministerio Público que corroboran su estado de deterioro físico, además de padecer una taquicardia sinusal y la aparición de úlceras por razón de su inamovilidad de las extremidades inferiores.

CONSIDERACIONES DE LA SALA SEGUNDA

El presente caso fue objeto de conocimiento de la Sala Segunda, en virtud de la interposición de sendos recursos de apelación presentados por el representante del Ministerio Público y la acusación Particular, al disentir de la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior el 16 de octubre de 1995, en el sentido de otorgar a Hilario Chen Quintana la medida cautelar de permanencia en la residencia de su madre para ser asistido en sus dolencias, con la prohibición expresa de ausentarse del lugar salvo para asistir a sus citas médicas o a diligencias judiciales.

En aquella ocasión, se expidió la resolución de 13 de febrero de 1996, que en lo sustancial señalaba:

> "La defensa, por su parte, ha indicado que Chen Quintana fue favorecido con una medida sustitutiva de la detención preventiva, otorgada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que le permite permanecer en la residencia de su madre, ya que sus condiciones vitales son bajas y requiere de la asistencia y atención directa de otra persona hasta para llevar a cabo sus funciones fisiológicas elementales de excreción.
>
> La Sala para resolver considera que no hay duda alguna sobre el grave padecimiento de salud que sufre el procesado y por ello la medida cautelar adecuada que cabe adoptar es la de ordenar su traslado a un lugar en el que se le pueda prestar atención médica, el cual debe ser suministrado por el Estado y que bien puede ubicarse en un hospital, enfermería carcelaria o pabellón en el que se asegure su vigilancia, en virtud de que en los distintos procesos penales que se le siguen hay evidencias claras de que sus padecimientos parapléjicos no han sido obstáculo para vincularse a otros hechos delictivos.

Además de esa solicitud, la Sala resolvió la apelación del auto de 16 de octubre de 1995, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el proceso penal seguido a Chen Quintana por el delito de homicidio en la persona de ANTONIO PONZADA LÓPEZ y en el auto de 12 de febrero del presente año, hizo las consideraciones jurídicas siguientes:

> "En esta oportunidad, solicita la acusación particular que se aplique el artículo 2147-E del Código Judicial porque Chen Quintana violó anteriormente lo normado en el artículo 2147-B de ese mismo cuerpo de leyes; siendo que ya el tribunal de primera instancia, resolvió sobre el particular y admitió que el imputado Chen Quintana había **"demostrado poco interés en cumplir con sus deberes y máxime cuando representaba un peligro social su estado de libertad"** (F. 1201).
>
> En el caso sub-júdice, el tribunal de primera instancia al comprobar las condiciones de salud que presenta el imputado Chen Quintana accede a los consejos médicos, los cuales reposan en datos fácticos ciertos, convirtiéndolos en un punto de apoyo importante para su decisión y cumpliendo su misión como juzgador.
>
> Si bien desde el punto de vista humanitario, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, la opción que se ofrece en el sentido de que se le otorgue una medida cautelar de arresto domiciliario, bajo la responsabilidad de su madre, no es fiable, ya que el Ministerio Público comprobó que la residencia del imputado se convirtió en refugio de prófugos de la justicia y en depósito de armas de fuego de posesión ilícita. En esta situación corresponde al Estado asumir la responsabilidad de custodia y tutela de los imputados privados de libertad, ofreciendo a los que presentan deterioro grave de sus condiciones psico-físicas y de salud, el lugar clínico u hospitalario adecuado, sin descuidar la

vigilancia y protección necesarias.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto apelado y en su defecto ordena que el imputado sea trasladado al lugar (pabellón, enfermería u hospital) que disponga el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, que asegure su atención médica de conformidad a sus condiciones de salud".

Cabe aclarar que en los distintos procesos penales que se le siguen a Hilario Enrique Chen Quintana consta que se le han aplicado varias medidas cautelares personales, siendo la primera de ellas detención preventiva, dada la gravedad de los hechos que se le imputan y por los cuales se ha dictado auto encausatorio; que posteriormente, al considerar su estado parapléjico como consecuencia de lesión por disparo de arma de fuego en uno de los hechos delictivos por él protagonizado, se atendió la recomendación médica de sustituir la detención preventiva por la de permanencia en el domicilio de su madre. Encontrándose en ese lugar, fue detenido por unidades de la policía, quienes lo acusaron de los delitos de quebrantamiento de sanciones y encubrimiento, hecho que dio lugar a un recurso de apelación del Ministerio Público para que se le revocara la medida cautelar de permanencia domiciliaria, por la de detención preventiva. Ese recurso, como se anotó antes, fue resuelto por la Sala Segunda en el sentido de otorgarle permanencia en un centro de salud del Estado, con la debida vigilancia.

Ahora bien, como en este caso el Segundo Tribunal Superior de Justicia estimó que las condiciones físicas del procesado, acreditadas mediante certificación médica procedente del Instituto de Medicina Legal y la decisión del Juzgado Tercero Municipal del primer Circuito Judicial, ramo penal de Panamá, en conjunto, permitían retomar las consideraciones humanitarias de sustituir la medida de permanencia en un centro hospitalario del Estado por la de reclusión domiciliaria, la Fiscalía al notificarse de esta decisión ha impugnado la misma manteniendo su criterio anterior sobre la peligrosidad y proclividad delictiva del procesado Chen Quintana, pues la gravedad de los hechos punibles que se le imputan, ni siquiera admiten excarcelación bajo caución, menos aún la sustitución de la medida cautelar de detención preventiva, por otra menos grave como lo es la de reclusión domiciliaria.

La Sala Segunda al referirse a este caso, el cual llega a esta Superioridad por tercera vez, deja constancia que no pierde de vista la gravedad de los hechos imputados al solicitante que afectaron y destruyeron bienes jurídicos de suma importancia como la vida e integridad personal y el patrimonio, lo que no empece para analizar su situación procesal actual en la que es autovíctima de su conducta desviada y desvalorada, que lo mantiene en estado parapléjico, totalmente dependiente del auxilio que se le preste para realizar sus funciones excretales y de aseo personal. Nuestros centros penitenciarios y hospitalarios del Estado no cuentan con el personal especializado que atienda estos casos, por lo que la medida sustitutiva adoptada es la alternativa legal que indefectiblemente cabe con relación al solicitante.

Sin embargo, es necesario insistir que antes de la sustitución de la medida cautelar, la señora Eva Quintana, madre de Hilario Enrique Chen Quintana, debe comprometerse ante el Tribunal de la causa como garante del cumplimiento de las prohibiciones de salida, fuera de aquellas otorgadas por el Tribunal para fines de atención médica o de comparecencia a diligencias judiciales, debe facilitar la fiscalización periódica del debido acatamiento de la medida e impedir las visitas de personas con antecedentes delictivos o de conducta reprochable y además, la autoridad jurisdiccional competente está obligada a comunicar a las autoridades de policía la presencia de este procesado en la residencia de su madre, para su debida vigilancia.

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

ADICIONA la parte resolutiva del auto recurrido en el sentido de que la prohibición de ausentarse del domicilio es terminante y sólo podrá hacerlo por razones médicas o judiciales, debidamente conocidas y autorizadas por el Tribunal de la causa. Se prohíbe, igualmente, la visita de personas con antecedentes delictivos o conducta socialmente reprochable.

Como complemento de la medida anterior, debe informarse a la Policía Nacional para que mantenga la vigilancia en el sector donde está ubicada la residencia de la señora Eva Migdalia Quintana en Monte Oscuro. Se confirma en lo demás.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

PROCESO SEGUIDO A IRENE RODRÍGUEZ PERALTA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO EN PERJUICIO DE RODOLFO VEGA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Humberto A. Collado T. presentó recurso de apelación contra auto calendado 10 de junio de 1996, mediante el cual el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial abrió causa criminal contra Irene Rodríguez Peralta, como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II, en concordancia el Capítulo VI, Título II, Libro I del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Rodolfo Vega Cruz.

Alega el recurrente que "no estamos en presencia de un delito de tentativa de homicidio sino del de lesiones personales" (f. 370), por cuanto que "mi defendido desistió de la agresión contra **RODOLFO VEGA** y que en forma alguna ... está acreditado que ese desistimiento se diera porque se le habían terminado las municiones, ya que ... si su propósito era el ultimarlo ... estando **VEGA** en el suelo existían otras formas y maneras de acabar con su vida ... no existía el propósito de agredir mortalmente ... dado el hecho también de la región de la anatomía del lesionado en que se produjeron los impactos" (fs. 371-372).

Cabe resaltar que el recurso propuesto limita el conocimiento por esta Sala, como tribunal de segunda instancia, exclusivamente a los puntos que han sido objetados por el recurrente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial.

El examen del cuaderno penal permite conocer que en horas de la noche del 17 de julio de 1994, en el Jorón Macaraqueño, localizado en el Distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, se suscitó un incidente entre Irene Rodríguez Peralta y Rodolfo Vega Cruz. El altercado dio lugar a que el imputado Rodríguez Peralta empleara su arma de fuego y le disparara a Vega Cruz quien, de acuerdo al dictamen médico legal, resultó herido "a nivel del cuello lateromedial derecho ... a nivel del brazo derecho" (f. 103).

A propósito de la impugnación planteada, la Sala estima conveniente destacar que el tipo penal de lesiones personales implica el ánimo de dañar simplemente la integridad física o psíquica de una persona, mientras que el homicidio tiene como propósito suprimir la vida de alguien.

Ahora bien, la distinción entre una y otra conducta delictiva "plantea problemas cuando, tras poner la vida de otra persona en peligro como consecuencia de heridas causadas con arma idónea, no se produce la muerte del ofendido, por lo que **la comprobación de la intención queda a merced del análisis de las circunstancias que rodearon el hecho**" (Registro Judicial, septiembre de 1994, pág. 111).

El imputado Rodríguez Peralta, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, acepta la autoría de los disparos que impactaron en la anatomía de Vega Cruz; sin embargo, explica que "no lo hice con intensión, sino por de mala ... El cargó conmigo primero ... yo estuve huyéndole, yo no quería pelear con el y me jondió una trompá y me la pegó en el cachete izquierdo" (fs. 14-15). En autos consta el examen médico legal que se le practicó al encartado y, en efecto, "Presenta trauma contundente a nivel del arco cigomático izquierdo con deformación" (f. 40).

No obstante lo anterior, se advierte que en las sumarias obran elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de Rodríguez Peralta en el hecho punible que se le imputa. Así, la víctima Vega Cruz relata que el día de los hechos "iba pasando a buscar el taxi para venirme para la casa, allí fue que oí los disparos no sentí que me había tirado, cuando yo voltié a ver para atrás para ver quien me había disparado fue que vi a Irene, de allí fue que me pegó el otro disparo que me tumbó y me hizo dos disparos mas tirado en el suelo" (f. 260).

De igual manera, consta la versión de Osvaldo Enrique Rivera Bravo, miembro de la Fuerza Pública, quien manifestó que "escuchamos una detonación de arma de fuego ... vi que salía corriendo el señor IRENE RODRÍGUEZ, con un revólver en la mano, le di la voz de alto, y me gritó no me llegue porque lo tiro, yo me dirigí hacia él, accionando el revólver pero al parecer se le habían terminado las municiones pues solo escuché el chasquido, y él salió corriendo a carrera cerrada ... se dio a la fuga" (f. 36). Otro testigo, Juan Carlos Vásquez Vega, declaró que "vi cuando mi tío FITO cayó, yo Corrí hacia él y el señor IRENE RODRÍGUEZ me apuntó a mi con el revólver, el haló el gatillo de tres veces, no se si era que no cargaba bala o que no reventaron, de allí él salió corriendo" (f. 140).

El análisis de estas piezas probatorias pone de manifiesto que el comportamiento de Rodríguez Peralta no puede considerarse como simple intención de lesionar, principalmente porque el imputado agotó los medios idóneos para perpetrar la conducta ilícita, sin entrar en la especulación que propone el recurrente sobre cuán buen tirador es. Esto se evidencia cuando detona contra la víctima cuatro proyectiles de un arma de fuego, aprovechando de este modo, fuera de toda medida, la superioridad de que disponía, con el grave resultado que señala el examen médico legal efectuado a Vega Cruz, según el cual con "Las lesiones peligró la vida del lesionado. Existe imposibilidad de su curación por el daño medular causado. Afectó médula a nivel de C6. Incapacidad de por vida" (f. 103).

De lo expuesto no se puede concluir entonces menos, que el proceder del sindicado configura el concepto de dolo eventual, ya que debió prever como resultado probable de su acción, incluso la muerte de Vega Cruz.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 10 de junio de 1996 emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra Irene Rodríguez Peralta, por violación del Capítulo I, Título I, Libro II, en relación con el Capítulo VI, Título II, Libro I del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Rodolfo Vega Cruz.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO PENAL SEGUIDO A MIGUEL RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE JOLAN CASTILLO CANDANEDO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 31 de mayo de 1996 (fs. 161 a 167), proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra **MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ (legal) ó MIGUEL CANDANEDO (usual)**, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de JOLAN CASTILLO CANDANEDO, hecho ocurrido el día 17 de diciembre de 1995, en Nueva Suiza, Cerro Punta, Distrito de Bugaba.

El apoderado legal del sindicado **MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ ó MIGUEL CANDANEDO**, Licenciado **Fidel Murgas Ábrego**, de la firma forense **MURGAS & MURGAS**, presentó escrito de sustentación de apelación (f. 186), en el cual solicitó la revocatoria del Auto apelado en base a lo siguiente:

> "1- No existe en el expediente prueba alguna que demuestre la intencionalidad entre el agente y el hecho ejecutado.
>
> 2- No hay prueba testimonial de que nuestro defendido haya actuado dolosamente sino más bien la versión que dió (sic) en su indagatoria que disparó contra un matorral, lo cual está comprobado en la Inspección llevada a efecto en el lugar del hecho, sin percatarse que entre esos matorrales se encontraba incrustado su sobrino.
>
> 3- El arma o escopeta jamás fué (sic) usada ni nuestro defendido conocía que estaba cargada desde hace tiempo, porque prácticamente es un objeto que permanecía en la casa por muchos años sin que nadie supiese que tenía un proyectil dentro." (F. 186).

Por su parte, el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, no hizo uso de su derecho, al corrérsele traslado del escrito de sustentación de apelación presentado por el defensor del imputado, a fin de que presentara las objeciones de lugar.

A foja 160, consta el certificado de nacimiento de **MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ**, expedido por la Dirección General del Registro Civil.

ANTECEDENTES:

En Resolución de 6 de marzo de 1996, la Personería Municipal del Distrito de Bugaba (f. 108), dispuso recibirle declaración indagatoria a **MIGUEL RODRÍGUEZ**, por delito contra la vida y la integridad en perjuicio de JOLAN CASTILLO CANDANEDO, según lo establecido en el artículo 2115 del Código Judicial.

Mediante Vista Fiscal N° 64 de 10 de mayo de 1996 (fs. 151 a 154), el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado EDWIN ÁLVAREZ CAMAÑO, solicitó enjuiciamiento criminal contra **MIGUEL RODRÍGUEZ ó MIGUEL CANDANEDO**, como presunto transgresor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en concordancia con el Capítulo VI, Título II, Libro I de la misma excerta legal, es decir, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la Resolución

apelada, realizó un resumen de los diversos testimonios recabados durante las investigaciones, entre los que se encuentran la denuncia presentada por AMELIA CANDANEDO RODRÍGUEZ (fs. 2 a 3; -ampliación- fs. 98-99), las declaraciones juradas rendidas por JANIO CASTILLO CANDANEDO (fs. 73 a 74); ANTONIO BEROS CANDANEDO (fs. 84 a 87); JOLAN CASTILLO CANDANEDO (fs. 102 104; -ampliación de denuncia- fs. 118-119), y la declaración indagatoria de **MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ (legal) ó MIGUEL CANDANEDO (usual)** (fs. 111 a 115), a saber:

> "Esta investigación se inicia en la Personería Municipal del Distrito de Bugaba con la denuncia presentada por la señora Amelia Candanedo Rodríguez, quien señala a Miguel Rodríguez como el autor del disparo que casi le ocasiona la muerte a su hijo Jolan Castillo Candanedo. Narra que el día 17 de diciembre de 1995 como a la una o dos de la tarde cuando iba llegando a su casa, se encontró a Miguel Rodríguez con una escopeta en las cercanías de ésta, y que al tratar de abrir la puerta, este señor hizo un disparo y lesionó a su hijo Jolan, corrió a socorrerlo junto a su sobrino Antonio Beros y lo trasladaron al Hospital de David, pero antes de llevarlo allá pasaron por la Guardia de Volcán para presentarles el caso. Señala también, que entre ella y el sindicado existe una fianza de paz y buena conducta (fs. 2-3).
> ...
> En declaración jurada de Janio Castillo Candanedo, hermano del ofendido, señala que el 25 de septiembre de 1991 estaba su hermano y él labrando un predio próximo a su casa cuando se presentó Miguel Rodríguez para insultar a su madre, y que éstos le pidieron que se calmara (fs. 73-74).
> ...
> Antonio Beros Candanedo rinde declaración jurada donde manifiesta que él se encontraba almorzando en el restaurante de la señora María Castrellón, esposa de Miguel Rodríguez, cuando éste le pidió que lo acompañara a llevarle una comida a su abuela; luego se encontraron con Amelia Candanedo. Indica que el sindicado fue a la casa de su abuela mientras él se quedó en el carro; que entonces Amelia se fue y no la vio más, pero que empezó a preocuparse cuando se demoraron mucho por lo que decidió ir hasta la casa y fue cuando escuchó el disparo, pero no llegó a ver quien (sic) lo hizo, solo vio a Jolan Castillo en el suelo herido y a su madre pidiendo auxilio; lo tomó y lo levó (sic) al hospital para que fuese atendido (f. 84-87).
>
> Al declarar Jolan Castillo Candanedo expresa que el día de los hechos se encontraba limpiando los predios de su casa, cuando fue agredido físicamente por el imputado quien al encontrar en el (sic) respuesta a su agresión se retiró a la casa de Jalfen (sic) Rodríguez de donde posteriormente salió portando un arma de fuego por lo que optó por correr a protegerse dentro de su casa, procediendo el señor Miguel Rodríguez a vigilar y rondar la casa gritándole amenazas para que saliera. En esta situación le pidió que dejara el arma sin resultado positivo alguno, entra en escena entonces su madre (Sra. Amelia C.) gritando y él sale en su supuesto auxilio, cuando es alcanzado por el disparo efectuado por el sindicado y cae inconsciente (fs. 102-104).
>
> Miguel Octavio Rodríguez (N. L.) o Miguel Candanedo (N. U.) al rendir indagatoria manifestó que lo ocurrido fue un accidente. Señalando que acudió al lugar de los hechos, transportado por Antonio Beros, porque le llevaba la comida a su madre y que en este lapso, fue agredido por Jolan Castillo, lo que lo impulsó a empuñar la escopeta para amedrentarlo, pero que su hermana Amelia lo atacó verbalmente indicándole que era un cobarde por lo cual el (sic) sin saber que el arma estaba cargada disparó hacia un matorral y sin percatarse que Jolan Candanedo estaba detrás del matorral (fs. 111-115)." (Fs. 161 a 164).

Lo anterior es corroborado en los informes de 18 de diciembre de 1995,

suscritos por el Jefe Encargado de la Sub- Estación de Policía de Cerro Punta, Sargento 1° RICARDO CORREA (fs. 6-7 y 81-82, respectivamente).

La comisión del hecho punible ha quedado acreditada en el proceso con el examen médico legal practicado a JOLAN CASTILLO CANDANEDO, en el Hospital Regional Rafael Hernández L., enviado mediante Oficio-N°-95-110-"H" de 22 de diciembre de 1995 (fs. 75-76), suscrito por la Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Agencia de David, Doctora SILVIA DE BANDEL, del cual se desprenden las siguientes conclusiones:

> "1- Las lesiones tienen una evolución de: dos días aproximadamente, almomento (sic) del examen.
>
> 2- Las lesiones-SI PUSIERON en peligro la vida del examinado.
>
> 3- Son compatibles con las producidas por arma de fuego (perdigones) -por disparo de larga distancia.
>
> 4- Incapacitan por-45-días definitivos, salvo complicaciones.
>
> 5- El señor Castillo Candanedo presenta una disminución de su capacidad general orgánica del-10%-por ESPLENECTOMIA- (RESECCION DEL BAZO)-". (F. 76).

Mediante Resolución de 20 de diciembre de 1995, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial (fs. 25 a 28), concedió el beneficio de fianza excarcelaria a favor de **MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ ó MIGUEL CANDANEDO** y fijó provisionalmente en mil balboas (B/.1000.00) la cuantía de la fianza que debe consignar el peticionario a fin de recuperar su libertad ambulatoria, mientras continúa la secuela del proceso, sin perjuicio de que el perfeccionamiento de la investigación permita la aplicación de cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 2177 del Código Judicial. Dicha Resolución fue confirmada por esta Superioridad, mediante Resolución de 27 de diciembre de 1995.

A foja 39 consta diligencia de fianza de excarcelación (fs. 39-40), siendo la fiadora la señora Magaly del Carmen Lezcano Bouche.

También es visible en autos la transcripción de la diligencia de inspección ocular (fs. 132-133), de la cual se desprende, entre otras cosas, que se observan plantas ornamentales alrededor de la residencia de AURELIA CANDANEDO, madre del sujeto pasivo del delito investigado, ubicada en la propiedad del hermano del agresor HALPHEN RODRÍGUEZ, en la Comunidad de Nueva Suiza, Corregimiento de Cerro Punta, lugar donde ocurrieron los hechos bajo estudio.

De fojas 49 a 72, constan copias del expediente contentivo de la fianza de paz y buena conducta (f. 71), entre **MIGUEL RODRÍGUEZ**, quien no la firmó, y AMELIA CANDANEDO RODRÍGUEZ, madre del hoy ofendido, establecida mediante Resolución N° 20 de 25 de septiembre de 1995, por el valor de B/.600.00 (f. 70). Del expediente mencionado se desprende la enemistad manifiesta entre la madre del hoy ofendido y su agresor, puesto que en virtud de la demanda presentada por la señora AMELIA CANDANEDO, se establece que **MIGUEL RODRÍGUEZ** no estaba cumpliendo con los reglamentos de INRENARE de no cultivar a menos de 30 metros alrededor de la fuente de agua. (fs. 50-51).

En diligencia de inspección ocular de un arma de fuego (f. 89), los peritos la identifican como una escopeta, calibre 16, marca Winchester, de empuñadura de madera; además, los peritos indicaron que este tipo de arma se utiliza más que nada para cacería, también que esta escopeta es de un solo tiro, y que al disparar el cartucho, los balines se dispersan según la distancia.

Consta en autos el historial policivo y penal de JOLAN CASTILLO (f. 148), quien no registra antecedentes policivos ni penales, sancionados mediante resoluciones firmes de autoridades nacionales.

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala

pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente.

La apelación se fundamenta en tres puntos, los cuales podemos resumir en la supuesta falta de pruebas de la vinculación dolosa entre el agente y el hecho ejecutado y el hecho de que la escopeta nunca había sido usada; no obstante, por lo expuesto hasta el momento, existe mérito suficiente para el llamamiento a juicio de MIGUEL RODRÍGUEZ, según lo establecido en el artículo 2222 del Código Judicial, debido a que se ha comprobado plenamente la existencia del hecho punible, aunado al hecho de que existen graves indicios contra el mencionado imputado, lo cual se desprende de los antecedentes, tanto de la propia declaración indagatoria-confesión- del mismo, como de las demás declaraciones recabadas durante la instrucción del presente sumario.

Tanto el ofendido JOLAN CASTILLO CANDANEDO como el imputado **MIGUEL RODRÍGUEZ ó MIGUEL CANDANEDO**, en sus declaraciones el primero y en su indagatoria el último, manifiestan que minutos antes de producirse el disparo que lesionó a CASTILLO, ambos sostuvieron una pelea a los puños y confiesa **RODRÍGUEZ** que al entrar a la casa de su hermano, "me encuentro una escopeta muy antigua, de mi familia y salí llevándome en la mano dicha escopeta para amedrentar a JOLAN CASTILLO o sea, mi agresor en ese momento", agregando que en ese momento AMELIA CANDANEDO, madre de JOLAN CASTILLO, pasó por delante de él y comenzó a injuriarlo, y que cuando le estaba tocando la puerta a JOLAN para que le abriera, "ya que él estaba dentro de la casa, yo di la espalda y en eso AMELIA comenzó a decirme 'loco y cobarde, no te atreves a hacer nada' me paré y disparé, no dándome de (sic) cuenta que el arma estaba cargada, levanté el arma y disparé contra un matorral, que está cerca, dos metros de distancia de la casa de ella y jalé el gatillo aún así, le repito no sabiendo que el arma tenía cartuchos ni que JOLAN CASTILLO estaba atrás del matorral, porque no se distinguía por lo coposo de la mata. En ese momento me di cuenta que JOLAN CASTILLO estaba detrás de la mata o matorral ya que dijo 'Ay' en eso fue que me percaté de que el arma estaba cargada y JOLAN estaba detrás de la mata".

En sus palabras, el imputado **MIGUEL RODRÍGUEZ ó CANDANEDO** admite haber buscado la escopeta en casa de su hermano inmediatamente después de haber tenido una pelea a los puños con JOLAN, admite que la trajo para amedrentar al mismo y confiesa que levantó el arma que portaba y la disparó, y aunque expresa que el disparo lo hizo contra el matorral y que para él lo ocurrido fue un accidente, los antecedentes que se dan en el presente caso y la conducta observada por su persona con posterioridad al hecho dan margen suficiente para pensar que en estos momentos no hay evidencias que demuestren el carácter accidental de lo ocurrido y por el contrario sí existen razones que concurren para estimar como dolosa la acción cometida por el imputado. En ese sentido anotamos que el hecho se produce seguidamente después de ocurrida la pelea a los puños entre el agresor y el ofendido; existen circunstancias en el expediente de las diferencias personales entre la madre del herido AMELIA CANDANEDO con **MIGUEL RODRÍGUEZ ó CANDANEDO**, y el propio MIGUEL RODRÍGUEZ expresa en su declaración de fojas 112, que JOLAN CASTILLO es una persona agresiva y que existen problemas de tierra entre ellos e igualmente se tiene que **MIGUEL RODRÍGUEZ ó CANDANEDO**, después que causa la herida a JOLAN CASTILLO y que oye cuando éste dijo un "Ay" y se da cuenta de que éste se encuentra herido, no presta ninguna atención al mismo.

Por otra parte, a fojas 84 y siguientes se encuentra la declaración de ANTONIO BEROS, en la que expresa que vio a AMELIA cuando corriendo gritaba "... que Miguel le había pegado un tiro a Jolan Castillo", "... pidiéndole que fuera a auxiliarlo", y "entonces yo agarré a Jolan Castillo y lo cargué al hombro de allí a donde se encontraba el carro, que son como 50 metros de distancia ...", y "yo en ningún momento vi al señor Miguel Candanedo". Es de suponer que si el hecho hubiera tenido un carácter accidental era de esperarse que **MIGUEL RODRÍGUEZ** hubiera procurado ayudar al herido y con mayor razón cuando el hecho se produjo en un lugar solitario.

Además, este testigo expresa que conoce que entre AMELIA y sus hijos y **MIGUEL RODRÍGUEZ** existen problemas de tierra.

La calificación de accidental que manifiesta el imputado **MIGUEL RODRÍGUEZ ó CANDANEDO** como causa del hecho ocurrido no tiene en esta etapa del proceso ningún respaldo probatorio y, por el contrario, a juicio de la Sala, el elemento subjetivo del delito, es decir, la presunta responsabilidad de **MIGUEL RODRÍGUEZ,** emana principalmente de su confesión y la comisión del hecho punible se desprende de los traumas sufridos por la víctima en un órgano vital, poniéndose en peligro su vida y la utilización de un arma de fuego -escopeta-, como medio idóneo para causar la muerte. Sin embargo, el delito se vio tentado, según se desprende del artículo 44 del Código Penal, puesto que el resultado muerte no se dio por razones ajenas al agente, toda vez que el afectado fue trasladado por sus familiares hacia el Hospital Regional de David, donde recibió la atención médica que le salvó la vida. En razón de esto, se colige que el delito por el cual se llama a juicio a MIGUEL RODRÍGUEZ (legal) ó MIGUEL CANDANEDO (usual), es el de homicidio en grado de tentativa, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, sobre delitos contra la vida y la integridad personal

Recordamos a la defensa, que nuestro Código de Procedimiento Penal, prevé un término común de cinco (5) días a las partes para que aporten todas las pruebas que utilizarán en las subsiguientes fases procesales, de modo que nada impide que las pruebas que sustenten lo dicho por el recurrente sobre la escopeta, sean solicitadas al Tribunal de la causa, entre otras múltiples que puede solicitar; además de las atenuantes que le correspondan por Ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de 31 de mayo de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra MIGUEL OCTAVIO RODRÍGUEZ (legal) ó MIGUEL CANDANEDO (usual), por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de JOLAN CASTILLO CANDANEDO, hecho ocurrido el día 17 de diciembre de 1995, en Nueva Suiza, Cerro Punta, Distrito de Bugaba.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL SUMARIO INSTRUIDO CONTRA ALEXANDER ALLIN Y JOSÉ ISABEL YANGÜEZ NÚÑEZ POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROBERTO CHEN SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el sumario contentivo del proceso que se le instruye a **ALEXANDER ALLIN o ALEXANDER MINA GUZMÁN (A) BURU BURU** y **JOSÉ ISABEL YANGÜEZ NÚÑEZ (A) PIGORRO**, sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ROBERTO CHEN SOLÍS, hecho ocurrido el día sábado 16 de septiembre de 1994, en el sector de Torrijos-Carter, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.

El recurso de apelación contra el Auto de llamamiento a juicio de 30 de noviembre de 1995, fue promovido a favor de **ALEXANDER ALLIN** por su defensor de oficio, el Licdo. DANILO MONTENEGRO; y a favor de **JOSÉ ISABEL YANGÜEZ NÚÑEZ**, por el Licdo. ERNESTO CASTILLO ALMENGOR.

El licenciado ERNESTO CASTILLO ALMENGOR manifiesta su inconformidad con el auto impugnado, en los siguientes términos:

> "... los supuestos testigos que dicen haber visto a mi representado en el lugar de los hechos, fueron las mismas personas que en rueda de detenidos (9 detenidos), no pudieron reconocer frente a frente al joven estudiante JOSÉ ISABEL YANGUEZ NÚÑEZ.
>
> El Ministerio Público no ha podido comprobar fehacientemente, ya sea por el Record Policivo y Administrativo, Archivo de la P. T. J., indagatoria o declaraciones donde mi representado se le conozca con el apodo de PIGORRO, ya que este lo ha negado en su indagatoria.
> ...
> El suscrito sostiene que existe deficiencia en la instrucción del sumario, que analizados pieza por pieza objetivamente, nos lleva al conocimiento de que no tiene consistencia necesaria para tener detenido a JOSÉ ISABEL YANGUEZ NÚÑEZ y por lo tanto le solicitamos a los Honorables Magistrados de esta Sala, REVOCAR el Auto de Llamamiento a Juicio ...". (fs. 299 y 300).

Por su parte, el licenciado DANILO MONTENEGRO censura el Auto impugnado, pues en su opinión está basado en los testimonios de **BONIFACIA ASPRILLA y GLORIA CONSTANZA MORA ESPINOSA**, y sobre ellos indica:

> "Resulta entonces que la testigo BONIFACIA ASPRILLA no está segura que ALEXANDER ALLIN sea el sujeto que ella señala como BURU BURU que vio disparar; las testigo GLORIA CONSTANZA no ve a BURU BURU en el lugar de los hechos sí ve a PIGORRO pero no lo identifica en la rueda de presos; y para aumentar las contradicciones e impresiciones en este proceso, la señora BETSY DE RODRÍGUEZ describe a una persona de contextura gruesa, como el autor del hecho, pero no lo puede reconocer, puesto que en el sector residen varias personas parecidas. Es de anotar también que la señora BONIFACIA ASPRILLA acepta haber recibido información de personas que llegaron al lugar.
>
> Creo en consecuencia que existen muchas dudas que justifican la dictación, o de una ampliación de las sumarias para despejar las mismas o en su defecto hacer valer el principio reconocido universalmente como IN DUBIO PRO REO, profiriendo un sobreseimiento a favor de ALEXANDER ALLIN con base en el artículo 2211 del Código Judicial, pues éste niega categóricamente los cargos, así como ha negado reiteradas veces que lo apoden BURU BURU y tal extremo no está debidamente probado." (Fs. 305-306).

Por su parte, el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial manifestó, en la contestación de traslado, su interés porque se confirme el auto recurrido:

> "... somos del criterio que en contra de los mismos existen suficientes elementos de relevancia que justifican su encausamiento. Así vemos que en contra de ALEXANDER ALLIN (a) "Buru Buru" existe el señalamiento directo que le hacer BONIFACIA ASPRILLA y GLORIA CONSTANZA MORA así como el reconocimiento en rueda de detenidos que efectúan dichos testigos.
>
> En relación a JOSÉ ISABEL YANGUEZ NÚÑEZ (a) "Pigorro" existe el señalamiento de las testigos anteriormente mencionadas, así como también la mención que del mismo hace la testigo ANGELINA TAYLOR.
>
> Adicional a ello se ha pedido (sic) acreditar que a pesar de que ambos procesados niegan residir en Torrijos Carter, y no conocerse el uno con el otro, la residencia de ambos en el dicha barriada tal y como se pudo confirmar mediante la realización de sendas diligencias de allanamiento, en la que se acreditó, no solo el domicilio de los imputados, sino el hecho de que ambos se conocían con anterioridad al homicidio investigado." (Fs. 309-310).

Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala considera

necesario revisar las principales piezas procesales que componen el presente negocio.

El sumario revela que el día 16 de septiembre de 1994, aproximadamente a las tres (3:00 p. m.) de la tarde, perdió la vida el señor ROBERTO CHEN SOLÍS, en el sector de Torrijos-Carter de esta ciudad, cuando tres sujetos desconocidos le dispararon en momentos en que se encontraba dentro de su automóvil.

De fojas 39 a 41 del sumario consta la declaración jurada rendida por **BONIFACIA ASPRILLA**, quien narra que el día de marras el hoy occiso llegó a su casa para cobrarle una suma de dinero que ella le adeudaba; por lo cual ella se dirigió a la casa de su vecina TANTA, quien le prestaría el dinero. Indica que mientras se encontraba de espaldas, escuchó una detonación y miró inmediatamente hacia el vehículo y observó a **BURU BURU** que le disparó al señor CHEN SOLÍS. Afirma que pensó que el disparo había sido al aire y vio cuando comenzaron a halarle el cabello al occiso para sacarlo del automóvil, eso lo hacía el de baja estatura, por lo que ella les gritó que lo dejaran tranquilo e inmediatamente arrancó el automóvil y se fueron.

En diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, la señora **ASPRILLA** reconoció a **ALEXANDER ALLIN** como el sujeto apodado BURU BURU (fs. 218-219); sin embargo, preguntada si estaba segura, dijo que "se le parecía".

MENALCO EDIEL PÉREZ LÓPEZ, acompañante de CHEN SOLÍS el día de los hechos, narró que aproximadamente a las dos de la tarde (2:00 p. m.) acompañó al hoy occiso al sector de Torrijos-Carter a cobrar un dinero donde una señora que vive al pie del mirador; que cuando la señora venía hacia ellos un sujeto de tez morena, estatura mediana, contextura delgada, cabello negro crespo, introdujo la mano por la ventana del vehículo, el señor CHEN trató de subir el vidrio, pero esa persona tenía un revólver en la mano y disparó, mientras dos sujetos que acompañaban a quien disparó intentaron abrir la puerta por el lado donde él se encontraba y la señora gritó que no les hicieran nada porque ella los conocía.

La señora **GLORIA CONSTANZA MORA ESPINOZA** (fs. 55-57) declaró que el día del hecho se encontraba en su casa, cuando escuchó una detonación como de arma de fuego, se asomó a la puerta y vio al joven que le dicen **PIGORRO** cuando le halaba el cabello a una persona que se encontraba en compañía de otro sujeto dentro de un automóvil y al conductor le habían disparado; que **PIGORRO** no logró sacar a la persona del vehículo y el conductor se retiró del lugar; que entonces su hijo **OMAR GONZÁLEZ**, de seis (6) años de edad, le dijo que **BURU BURU** le disparó al señor del auto. Posteriormente, al participar en diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, esta testigo identificó a **ALEXANDER ALLIN** como uno de los partícipes en el hecho, sin embargo no pudo reconocer a **JOSÉ YANGUEZ NÚÑEZ (a) PIGORRO**.

Al rendir declaración indagatoria, **ALEXANDER ALLIN (a) BURU BURU** manifestó no tener apodo; afirma no haber conocido a ROBERTO CHEN SOLÍS y que tampoco participó en el hecho punible y considera que la señora CONSTANZA debe haberlo confundido.

Por su parte, **JOSÉ ISABEL YANGUEZ NÚÑEZ (a) PIGORRO** dijo, al rendir indagatoria a fojas 207-209, no conocer al hoy occiso, a **ALEXANDER ALLIN** y tampoco a **EDWIN ADOLFO LÓPEZ GUZMÁN**. Niega haber participado en la comisión del hecho punible, y se considera inocente.

Realizada diligencia de allanamiento a la casa de **JOSÉ ISABEL YANGUEZ**, se encontró un sobre a nombre de **ALEXANDER ALLIN** (f. 215).

Consta en el sumario, el Certificado de Defunción de ROBERTO CHEN SOLÍS (f. 97) y el Protocolo de Necropsia, (Fs. 74-85) que indica como causas de la muerte las siguientes:

"CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

La muerte se debió fundamentalmente a taponamiento cardíaco, por

acumulación de sangre de 500 cc en el saco pericárdico, proveniente de la lesión de la punta del corazón, causa por proyectil de arma de fuego en el tórax. Las lesiones satélites al orificio del proyectil debieron ser producidas por la contusión del proyectil en su recorrido semitangencial en la piel anes de penetrar al tórax.

No se encontraron evidencias de tatuajes de pólvora.

CAUSAS DE LA MUERTE
-HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN TÓRAX Y ABDOMEN."

Así, pues, se encuentra demostrada fehacientemente la comisión del hecho punible, cual es la acción de quitar la vida al señor ROBERTO CHEN SOLÍS. Pasemos ahora a examinar la vinculación de **ALEXANDER ALLIN y JOSÉ YANGUEZ NÚÑEZ** con dicho hecho delictivo.

A pesar de que ambos sindicados niegan la comisión del hecho, incluso el haberse encontrado en el sitio a la hora señalada, contra ellos militan, principalmente, las declaraciones de **BONIFACIA ASPRILLA y GLORIA CONSTANZA MORA,** quienes señalan a **ALEXANDER ALLIN** como la persona que le disparó al hoy occiso, y a **JOSÉ YANGUEZ NÚÑEZ** como el que halaba del cabello a **MENALCO PÉREZ.**

En cuanto a lo alegado por la defensa de JOSÉ YANGUEZ NÚÑEZ, respecto a la incapacidad de los testigos para identificarlo, cabe señalar que dicha situación no es extraña, si tomamos en cuenta que el homicidio sucedió el 16 de septiembre de 1994 y la diligencia de reconocimiento no se llevó a cabo sino hasta el 15 de junio y 10 de julio de 1995, nueve meses después del hecho, con lo cual se explica la duda y la imposibilidad de los testigos, que sin embargo sí pudieron reconocer a **ALEXANDER ALLIN (a) BURU BURU.**

Por otro lado, resulta sospechosa la actitud de **YANGUEZ NÚÑEZ,** cuando niega ser amigo o conocer a **ALEXANDER ALLIN** (f. 208), puesto que en diligencia de allanamiento a su residencia se encontró un sobre con anotaciones a nombre de **ALEXANDER ALLIN,** a quien supuestamente **YANGUEZ** no conoce.

Igualmente, resulta importante lo declarado por **ANGELINA TAYLOR** (fs. 203-204) quien dijo haber sido amenazada por, supuestamente, haber entregado una fotografía a las autoridades, en la que aparece junto a **ALEXANDER ALLIN, GAS YANGUEZ NÚÑEZ y EDWIN ADOLFO LÓPEZ GUZMÁN.** Respecto a estos manifestó que "ellos tres tenían un solo compinche".

Lo anterior contradice las versiones de los imputados, quienes sostienen no conocerse, aunque viven en el mismo barrio. Los graves indicios de presencia y oportunidad que concurren contra ellos, hacen que la Sala comparta el criterio de la Fiscalía, en el sentido de que deben concurrir ante un jurado de conciencia que determine su posible responsabilidad en este lamentable hecho.

Se encuentran cumplidos pues, en relación a **ALEXANDER ALLIN o ALEXANDER MINA GUZMÁN y JOSÉ ISABEL YANGUEZ NÚÑEZ,** los requisitos del artículo 2222 del Código Judicial, esto es, plena prueba del hecho punible y graves indicios que vinculan a estos sujetos con el aspecto subjetivo del delito.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 30 de noviembre de 1995, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DEL AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DIMAS ARIEL CORTEZ DE GRACIA, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE FERNANDO AGRAZAL POVEDA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 27 de diciembre de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia abrió causa penal contra **DIMAS ARIEL CORTEZ DE GRACIA**, como probable infractor de disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, o sea por delito contra la Vida y la Integridad Personal en detrimento de Fernando Agrazal Poveda (fs. 249-262).

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional el imputado y su abogado defensor, licenciado Víctor Chan Castillo, anunciaron recurso de apelación, el cual fue sustentado dentro del término de ley.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Chan Castillo considera que los elementos allegados al expediente no son suficientes para sustentar un auto de llamamiento a juicio y que faltan más pruebas técnicas y científicas que darán luces sobre la inocencia de su defendido.

Explica que no se ha probado que el hecho punible fuera querido por el señor Cortez, quien en el ejercicio de sus funciones se ve ante tal hecho; que las contradicciones de los testigos de cargos y las pruebas, denotan claramente que la verdad no ha sido dicha; que el protocolo de necropsia revela con claridad la fórmula accidental del delito; y que el examen de balística forense requiere necesariamente un análisis para probar que no hubo intención criminal.

Ante esas consideraciones solicita revocar la medida adoptada y se decline la causa a un tribunal Municipal o ante la falta de varias pruebas, ampliar el sumario (fs. 267-268).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, contrario a la defensa, estima que de autos emerge la existencia del hecho punible y de la indagatoria del procesado surge su confesión de haber sido la persona que portaba el arma de donde salió el proyectil que le causó la muerte a Fernando Agrazal.

En cuanto a que el procesado invoca la ausencia de intención dolosa en las circunstancias que rodearon el hecho punible, considera que se contradice con las declaraciones de los testigos presenciales, quienes aseguran que no fue un accidente y que el disparo se hizo sin mediar provocación del occiso, sino como abuso de su cargo.

Por tanto solicita se confirme el auto de llamamiento a juicio contra de Dimas Cortez, al concluir que existen suficientes elementos incriminatorios que justifican tal medida en su contra (fs. 271-273).

HECHOS

Se refiere la presente investigación penal a la muerte violenta de Fernando Agrazal Poveda, en horas de la tarde del día 27 de abril de 1995, en la barriada San Bernardino de Nuevo Arraiján, en la Chorrera, a consecuencias de herida producida con proyectil de arma de fuego en la cabeza que le produjo laceración meningo-encefálica. Vinculado a esa muerte fue indagado Dimas Ariel Cortez De Gracia, cabo segundo de la Policía Nacional, departamento del D. I. I. P., quien afirma que de manera accidental ocasionó el disparo fatal.

ANÁLISIS DE FONDO

Esta Sala centrará su estudio sólo en los puntos objetados por el impugnante, de conformidad con las normas que rigen el recurso de apelación.

El tribunal de segunda instancia fundamenta su decisión al indicar que la versión del imputado Cortez De Gracia y las dos unidades de la Policía Nacional que lo acompañaban, son claramente contradictorias, por lo menos con tres testimonios; que es incierto lo del empujón dado por el hoy occiso a la puerta del asiento en que viajaba Cortez De Gracia, a tal punto que se le saliera un disparo directamente a la cabeza de aquél; y que la trayectoria del disparo concuerda con la versión de los testigos presenciales, lo que contradice la versión de Cortez De Gracia y sus compañeros.

Al rendir declaración indagatoria, Dimas Ariel Cortez De Gracia, de 24 años de edad, con seis años de laborar en la Fuerza Pública, manifiesta que se le había asignado la misión junto con los cabos Luis Atencio y Sergio Amaya de ir a la comunidad de El Palmar en Nuevo Arraiján, a objeto de capturar a un sujeto prófugo de la justicia de nombre Omar Rodríguez, cuya madre vive en el mencionado lugar; que luego de tomar fotografías a la casa de ésta, se dirigieron a la barriada San Bernardino porque también se les había informado que el sujeto que buscaban estaba en ese lugar.

Señala el indagado que el vehículo color blanco, cuatro puertas marca Toyota Carina era conducido por el cabo Atencio, a su lado estaba sentado el cabo Amaya y detrás de éste estaba sentado él; que al entrar el vehículo a la barriada un sujeto se les acercó preguntándoles si querían bolsa; que el vehículo avanzó como treinta metros y luego retrocedieron; que a medida que el vehículo retrocedía el sujeto avanzaba hacia el auto trayendo en la mano izquierda un envase de bebida de cartón y con su mano derecha sacó una bolsa con polvo blanco; que el sujeto al llegar al carro quedó al frente de la puerta donde él se encontraba sentado y la cual traía abierta; que en la mano derecha llevaba el arma de reglamento y en la izquierda la placa metálica de Policía; que trató de empujar la puerta para darle captura al sujeto, quien al percatarse que eran policía en forma violenta empujó la puerta para impedir su salida; golpeándole la misma en el antebrazo lo que ocasionó que saliera el proyectil que impactó en la parte frontal del cuero cabelludo del sujeto.

Añade que una vez ocurrió lo antes narrado, inmediatamente trataron de auxiliar al sujeto, pero al advertir que la vida de ellos estaba en peligro porque una gran multitud con palabras amenazantes y piedras se acercaba hacia ellos y al escuchar dos detonaciones de arma de fuego, se retiraron del lugar hacia la estación de Ancón, dando aviso inmediato a sus superiores.

La versión del imputado es corroborada por sus compañeros de labores, los agentes Luis Ernesto Atencio Aguirre (fs. 85-91) y Sergio Enrique Amaya Ramos (fs. 92-98).

Aparecen en autos declaraciones contrarias a las anteriores, tales como:

1. La rendida por **Maryi Lisbeth Bannister de Alvarado**, de 29 años de edad. Esta testigo afirma que al ver el carro que entró a la calle, Magu (occiso) quien estaba sentado hablando con unos amigos, se paró y empezó a caminar y que del auto se bajo un muchacho de tez clara, con un arma en la mano y el sujeto que iba manejando también se bajó y también estaba armado, mientras un tercero se quedó dentro del vehículo; que el joven que bajó primero le pidió la cédula a Magu y al contestar que no tenía ese documento, le disparó en la cabeza. Narra además, un incidente ocurrido el día anterior, en el cual los mismos policías se habían llevado al joven Agrazal Poveda (a) Magu, quien tuvo que pagar una multa de veinte balboas.

2. Por su parte, **Maritza Del Carmen Agrazal Poveda**, de 34 años de edad, hermana del occiso, difiere de la versión anterior, en el sentido que dice que los sujetos no se bajaron del vehículo en el momento que se efectuó el disparo, sino después, y que el sujeto que disparó se bajó y golpeó la capota haciendo un gesto como que se lamentaba por lo que había hecho (fs. 12-14 y 64-67vt).

3. El testigo **Eduardo Alberto Núñez Quintero (a) Jhon-Jhon**, de 29 años de edad, afirma que estaba en compañía de Magu sentados en un murito y que el vehículo se paró cerca de ellos y llamó a Magu diciéndole "Tú ven acá" y aquél se acercó inocentemente, y estando como a unos treinta a cuarenta centímetros el sujeto le disparó sin bajarse del auto; que el sujeto que estaba al lado del chofer fue el que disparó; que no sabe qué pregunta le hizo el sujeto a su amigo, sólo que lo llamó y le disparó; que ninguna de las puertas del vehículo llegó a abrirse. Agrega que respeta la opinión de la señora Bannister de Alvarado pero ésta se encontraba más distante (fs. 57-61).

En oficio PB-356-95 de 8 de septiembre de 1995 el perito José Chavarría, al rendir el informe del análisis Balístico de las evidencias relacionadas con este caso, al referirse al revólver calibre. 38 especial, marca Smith Wesson serie N° C-773974 modelo 10-5, explica "**que para accionar el gatillo en simple acción, requiere de una fuerza de presión de dos (2) libras y en doble acción ocho (8) libras**" (fs. 155-156).

El Dr. Alfredo Rodríguez Lay, médico Forense-Patólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quien practicó el examen necróptico en el caso bajo examen, mediante oficio N° 486 de 31 de octubre de 1995, informa que el disparo se realizó a una distancia mayor de 50 cms, lo que puede considerarse disparo a larga distancia.

En lo que respecta a la posición y planos entre victimario y el occiso, explica que pueden darse las siguientes versiones:

> "a) Ambos protagonistas de frente, uno con respecto al otro; el victimario en plano inferior y el occiso de pie con la cabeza inclinada hacia adelante y abajo (agachada).
>
> b) Ambos protagonistas en un mismo plano y de frente, el victimario con el arma levantada y dirigido hacia la región frontal o frente del occiso.
>
> c) El victimario y occiso en un mismo plano y de frente el primero con el arma en posición inferior y el occiso con la cabeza inclinada hacia adelante y abajo, sobre el pecho (agachada) (F. 246).

No se cuenta con la respuesta al oficio N° 1506 de 27 de septiembre de 1995, en la cual la Fiscalía Segunda Superior del primer Distrito Judicial solicita a la dirección de la Policía Técnica Judicial que un perito en Balística emita opinión técnica, en la presente investigación teniendo como base el protocolo de necropsia y la diligencia de reconstrucción de los hechos (f. 209).

Observa la Sala que se ha constatado que para el día de los hechos efectivamente a los cabos Cortez De gracia, Atencio Aguirre y Amaya Ramos se les había encomendado la misión de ubicar a Omar Rodríguez, sujeto sumamente peligroso y que la presencia de los mismos en el área de San Bernardino se debía a información en el sentido de que el mencionado sujeto se encontraba en ese lugar (f. 72-75).

El Director de Información e Investigación Policial, Mayor Tomás García Tobar, informa que dada la naturaleza de la misión debían pasar desapercibidos por la comunidad, para lo cual se les suministró un vehículo Toyota Carina, color blanco, matrícula N° 345313, con código E-113, asignado por orden superior (fs. 148-149).

Siendo lógico, tal como lo han manifestado los agentes, que ellos no llevaran puesta la gorra que los identifica como agentes del D. I. I. P.; y que la única forma como se percataron los testigos que los que viajaban en el vehículo eran miembros de la Policía Nacional, es como lo señaló la hermana del occiso cuando afirma que el sujeto que iba en la parte de atrás del vehículo le mostró una placa de policía sobre el vidrio de la ventana e hizo seña de que iban como a regresar (fs. 13-14). La testigo Bannister de Alvarado corrobora lo anterior, cuando dice que sí vio que algo mostraron y le decían a Maritza Del

Carmen Agrazal Poveda (f. 10).

También, con el informe signado por los agentes Bienvenido Chiru, Balbino Quintana, José Correoso y Edwin Reyes, el 26 de abril de 1995, se desvirtúan las afirmaciones de que los agentes Cortez De Gracia, Atencio Aguirre y Amaya Ramos fueron los policías que el día anterior capturaron a Fernando Agrazal Poveda (a) Magu (fs. 126-127) y a quien la Corregidora de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, confirmó que atendió el caso (f. 112).

Aunque es atendible que la reacción de Agrazal Poveda fuera evitar ser aprehendido, si observamos el contenido del oficio 0832-95 del 23 de mayo de 1995, en donde se informa que varios años antes algunos juzgados habían solicitado su captura (f. 113), ello no corrobora las afirmaciones de los policías ni el uso del arma de fuego.

Comparte la Sala la conclusión del tribunal de segunda instancia, por cuanto basta la concurrencia de las exigencias mínimas del artículo 2222 del Código Judicial para fundamentar un auto encausatorio, más aún en este caso en el que no se trataba de un sujeto armado o prófugo o en confrontación con los agentes de la policía.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado de fecha 27 de diciembre de 1995.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

PROCESO SEGUIDO CONTRA VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ, POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE LEONARDO MOORE WEEKS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de consulta, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Auto de 7 de agosto de 1996 (fs. 121 a 124), proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se sobresee definitivamente a favor del Agente **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ**, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte de LEONARDO ALBERTO MOORE WEEKS (A) "BIG FOOT", hecho ocurrido el día viernes 24 de febrero de 1995, en el sector de Calle 14 Avenida Bolívar, Barrio Sur, Distrito de Colón.

En base a lo dispuesto en el artículo 2481 del Código Judicial, el Auto de sobreseimiento definitivo proferido por el Segundo Tribunal Superior en lo concerniente al caso en comento, debe elevarse en consulta a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la calidad de servidor público del favorecido, lo cual se desprende del Acta de toma de posesión y juramento del cargo como Agente, con la placa de orden N° 4261, de la Policía Nacional (-copia autenticada- f. 108), de **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ.**

Del historial penal y policivo de **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ**, se desprende que éste no ha sido penado por contravenciones de policía ni por delito común alguno (f. 73).

Consta a foja 53 del sumario, Poder especial otorgado por **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ**, a la licenciada Guadalupe del Carmen Martínez, de la Asesoría Legal de la Policía Nacional, para su defensa legal en el caso bajo estudio.

A foja 15 consta el prontuario policivo de LEONARDO ALBERTO MOORE WEES (a) "BIG FOOT", de donde se desprende que este había cometido aproximadamente 23 delitos al momento de su muerte.

La Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Vista N° 211 de 31 de octubre de 1995 (fs. 111 a 114), al remitir las sumarias para su calificación legal, solicitó un sobreseimiento definitivo a favor del Agente **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ**, con fundamento en el artículo 2210, numeral 3°, del Código Judicial, en concordancia con los artículos 19 y 20 del Código Penal, toda vez que:

> "Todas y cada una de las situaciones constantes en este expediente son las que nos llevan a la conclusión de que el Agente VÍCTOR ALEJANDRO BIZ (SIC) GONZÁLEZ, actua (sic), al dispararle al hoy occiso MOORE WEEKS (a) BIG FOOT, con causa de justificación que en esos momentos era el cumplimiento de un deber y la legitima (sic) defensa, al percatarse de que el hoy occiso iba a agredir a su compañero, que al intentar hacer la revisión acostumbrada y tener un leve descuido, provocan (sic) la astucia de BIG FOOT, de intentar agredirlo. Este individuo momentos antes había sido objeto de una persecución (sic) debido a que no atendiía (sic) a la voz de alto emanada de TERESO PINZÓN, dandose (sic) a la fuga al ver a los agentes del D. I. I. P. RODOLFO CORTÉS Y DOMICIANO HAYANS, quienes conocía por lo largo de su profesión delincuencial." (F. 114).

Por su parte, el Segundo Tribunal Superior, acogió la recomendación de la Fiscalía Cuarta Superior en cuanto al mérito del sumario y, en tal sentido, mediante el Auto de 7 de agosto de 1996 consultado (fs. 121 a 124), sobreseyó definitivamente, a favor del sindicado **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ**, en virtud de que, "... además de cumplir con su deber, el sindicado actuó en defensa de la vida de su compañero Pinzón, persona a quien el hoy difunto iba a asestarle con el arma blanca que sorpresivamente blandió en su mano derecha." (F. 124).

ANTECEDENTES:

La muerte de LEONARDO ALBERTO MOORE WEEKS (A) "BIG FOOT" ha quedado comprobada en autos mediante la copia autenticada del Certificado de Defunción del occiso, expedido por la Dirección General del Registro Civil (f. 44); la práctica de la Diligencia de reconocimiento de un cadáver (fs. 2-3), según se desprende de las vistas fotográficas (6) del cuerpo del exánime, donde se aprecian el orificio de entrada y salida del proyectil, en la morgue del Hospital Manuel Amador Guerrero (fs. 37 a 39); y el Protocolo de Necropsia N° N/53-02-45 (fs. 19 a 30) de la Medicatura Forense de Cristóbal, Colón, correspondiente a LEONARDO MOORE WEEKS, cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

"CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

Las heridas son mortales, poco pudo hacer después de los mismos.

CAUSAS DE LA MUERTE

A. SHCOK (SIC) HIPOVOLÉMICO.
B. LACERACIÓN DE HÍGADO, PÁNCREAS, RIÑÓN.
C. HERIDO POR ARMA DE FUEGO." (F. 30).

Según consta en Oficio N° /55-269 de 11 de mayo de 1995 (f. 35), suscrito por el Médico Forense-Director Regional del Instituto de Medicina Legal de la Provincia de Colón, Doctor Carlos A. de Bernard Mas, durante la Necropsia practicada al cadáver de LEONARDO ALBERTO MOORE WEEKS, se le tomó muestra de sangre y humor vítreo, para los exámenes de laboratorio de alcoholemia y presencia de droga en el Departamento de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de Panamá, obteniéndose el siguiente resultado:

"HUMOR VÍTREO -MARIHUANA= (-) NEGATIVO
-COCAÍNA= (+) POSITIVO.
SANGRE- ALCOHOLEMIA = 3.04 mg/dl.

Concentración de Alcohol III Período

Sangre 0.25% = 250 mg/100 ml=2.50 g/litro.
0.40 %= 400 mg/100 ml=4.00 g/litro" (f. 35).

Consta en autos, el Informe de Experticia Balística de 19 de octubre de 1995 (f. 119), sobre un (1) revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, serie N° K-425143, acabado en negro, cacha de madera, según es visible en la fotografía de foja 118.

El Segundo Tribunal Superior, en el Auto de 7 de agosto de 1996 consultado (fs. 121 a 124), realizó la siguiente exposición resumida de los hechos:

"En cuanto al aspecto subjetivo se observa que resultó indagado el señor Víctor Alejandro Briz González -miembro de la Fuerza Pública de Colón- quien admitió haber sido la persona que hiriera con arma de fuego del (sic) hoy occiso Moore Weeks. Entre otras cosas, se afirma y ratifica del Informe de Comisión fechado 24 de febrero de 1995, visible a fojas 13-14, en el cual se indica que en esa fecha, cuando eran aproximadamente las 2:50 p. m. se encontraba haciendo ronda en compañía del Cabo I Bienvenido Góndola y el Agente Tereso Pinzón y a la altura de la Calle 14 Ave. Herrera y Amador Guerrero; visualizan a Moore Weeks en la Calle 14 Ave. Bolívar, por lo que informaron a la emisora para que les confirmaran si tenía caso pendiente con las autoridades y en esos precisos momentos al notar la presencia de unidades del D. I. I. P., Cabo II Rodolfo Cortéz (sic) y el Agente Domiciano Hayans, quienes iban hacia él, dicho sujeto se dio a la fuga, siendo detenido tras haberlo perseguido.

Según el indagado, el hoy difunto portaba una bolsa plástica en su mano derecha, la cual soltó repentinamente cuando era sometido a registro por parte del Agente Tereso Pinzón y velozmente sacó de la pretina del pantalón un cuchillo de cocina con el cual intentó agredir a Pinzón, por lo que al ver esa acción, se vio en la necesidad de efectuarle un disparo, para así proteger la integridad física de su compañero (fs. 52, 55-57 y 88-90 vta.). Confirman esa versión los también signatarios del Informe de Comisión aludido **ut supra**, Tereso Pinzón Camargo (fs. 40-42) y Bienvenido Góndola Solís (fs. 45-46).

También declaró bajo juramento la Agente Jasmina Ulloa Samaniego, quien expresó que si bien no aparece en el Informe de Comisión en citas, se debió a una omisión, pues ella formó parte de ésa (sic); estuvo allí cuando el sujeto se dio a la fuga al ver a los miembros del D. I. I. P. y participó en su persecución (sic). Señaló, que por esas razones, se afirma y ratifica de ese Informe, pues los hechos sucedieron tal cual allí se plasmó. Advirtió que se (sic) no haber reaccionado en forma rápida el Agente Víctor Briz hubiera resultado herido mortalmente (fs. 48-50 y 81-82).

A fojas 84-95 y 86-87 se cuenta con las declaraciones juradas rendidas por los también miembros de la Fuerza Pública, señores Rodolfo Valentino Cortés y Domiciano Hayans Rodríguez, quienes también estaban de ronda por el sector y al escuchar que habían detenido al sujeto apodado **'Big Foot'** se dirigieron hacia allá y fue cuando los vio a ellos que el mismo se dio a la fuga, mas, son contestes en que no llegaron a presenciar el instante en que éste resultó herido, ya que cuando llegaron ya se lo llevaban en un patrulla." (Fs. 122-123).

Lo expuesto anteriormente, se desprende de la declaración indagatoria

rendida por **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ** (f. 52 y fs. 55 a 57; -ampliación- fs. 88 a 90) y también de las demás pruebas que obran en el sumario, como los son, las declaraciones juradas rendidas por el Agente TERESO PINZÓN CAMARGO (fs. 40-42; -ampliación- fs. 109 a 110); el Cabo 1° BIENVENIDO GÓNDOLA SOLÍS (fs. 45-46); la Agente JASMINA ULLOA SAMANIEGO (fs. 48 a 50; -ampliación- 81-82); el Cabo II RODOLFO VALENTINO CORTES (fs. 84-85); y el Agente DOMICIANO HAYANS RODRÍGUEZ (fs. 86-87). Y, además, constan en autos, el Oficio N° 0162 de 25 de febrero de 1995 (f. 12), suscrito por el Director de la Zona de Policía de Colón, y el Informe de comisión de 24 de febrero de 1995 (f. 13-14), suscrito por el Agente 4061 **VÍCTOR BRIZ**, el Cabo 1° 11629 BIENVENIDO GÓNDOLA y el Agente 1637 TERESO PINZÓN, todos de servicio en la Zona de Policía de Colón.

A foja 16, consta copia de la fotografía del cuchillo de cocina, con hoja plateada y cacha de color chocolate de madera, con la cual el hoy occiso intentó agredir al Agente de la Policía Nacional TERESO PINZÓN.

De los diversos testimonios recabados durante las investigaciones, se colige que sí es posible que los hechos se desarrollaran tal y como los describió el sindicado **VÍCTOR BRIZ** y, en tal sentido, se ha podido determinar indubitablemente que no hubo exceso en la actuación del Agente de la Policía Nacional, sino que el mismo se encuentra amparado dentro de la causa de justificación consignada en el artículo 21, Capítulo II, Título II del Código Penal denominada legítima defensa.

Somos de la opinión de que concurren de manera inobjetable los requisitos señalados en el artículo 21 del Código Penal antes mencionado, el cual establece:

> "ARTÍCULO 21: No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:
>
> 1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho;
> 2. Medio racional para impedir o repeler la agresión;
> 3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y
> 4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende".

No obstante, la Sala difiere de la Resolución consultada, en el sentido de que, si bien ha quedado acreditado en el proceso que el actuar del Agente BRIZ carece de antijuricidad, la causa de justificación aplicable en el presente negocio, corresponde únicamente a la denominada "legítima defensa", contenida en el artículo 21 antes citado, y no a la otra causa de justificación aplicada en la Resolución consultada, denominada "cumplimiento de un deber", del artículo 19 del Código Penal.

Se desprende de este caso que el funcionario público implicado, ejercitaba un legítimo derecho, cual es el de salvaguardar la vida de su compañero. Por lo tanto, la actuación del Agente **VÍCTOR BRIZ** se encuentra amparada dentro de las causas de justificación consignadas en el Título II, Capítulo II del Código Penal, pues no existe duda alguna que durante el cumplimiento de sus deberes como servidor público, en protección de bienes legítimamente tutelados, se vio obligado a actuar en la forma en que lo hizo en un acto de defensa de un derecho ajeno, razón por la cual procede la confirmación de la Resolución consultada en este sentido, aclarando nuevamente que el fundamento legal pertinente es el artículo 21 del Código Penal y no el artículo 19 de dicho Código, según lo explicado en líneas anteriores. Y, en virtud de lo establecido en el artículo 2210, ordinal 3 del Código Judicial, debe dictarse un sobreseimiento definitivo a favor de **VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ.**

Por lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de 7 de agosto de 1996, consultado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor del Agente VÍCTOR ALEJANDRO BRIZ GONZÁLEZ, de generales descritas en autos, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte de LEONARDO ALBERTO MOORE

WEEKS (A) "BIG FOOT", conforme a hecho ocurrido el día viernes 24 de febrero de 1995, en el sector de Calle 14 Avenida Bolívar, Barrio Sur, Distrito de Colón.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO QUE SE SIGUE A JULIO MARMOLEJO, ÁNGEL DARÍO ARGUMEDEZ Y AGAPITO VERGARA, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE OSVALDO ARIEL GUTIÉRREZ Y FERNANDO GARIBELLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de consulta, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ha remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema el expediente que contiene las sumarias instruidas por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Osvaldo Ariel Gutiérrez y Fernando Garibello Díaz, en el que se ha dictado resolución calendada 18 de marzo de 1996, que sobresee de manera provisional a Julio Marmolejo Lozano y definitivamente a Agapito Vergara Ballesteros y a Ángel Darío Argumedez Alvarez. La meritada decisión jurisdiccional también declara extinguida la acción penal en cuanto a Fernando Garibello Díaz, levanta las medidas cautelares aplicadas a Argumedez Alvarez y ordena el envío de copias del expediente a la jurisdicción especial de menores, para que se investigue la situación jurídica de Manuel Friederici y Geysi Alada Alvarado Magallón.

Las investigaciones dan cuenta de que, en la mañana del 10 de enero de 1995, Agapito Vergara Ballesteros y Osvaldo Ariel Gutiérrez Ramírez, miembros de la Policía Nacional, instalaron un retén en la entrada del poblado de Veracruz, del Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá, para aprehender a unos delincuentes que se transportaban en un vehículo por el área. Cuando el automóvil sospechoso se detuvo en el retén, el cabo Gutiérrez le solicitó a los pasajeros que salieran para registrarlos. Sin embargo, Fernando Garibello Díaz, uno de los ocupantes del vehículo, salió y disparó contra el cabo Gutiérrez Ramírez, quien también disparó contra su agresor. El repentino ataque de Garibello Díaz ocasionó que el sargento Vergara Ballesteros utilizara su fusil M-16, para repeler la agresión de que era víctima su compañero. El intercambio de disparos culminó con la muerte de Garibello Díaz y de Gutiérrez Ramírez. Según se desprende de los protocolos de la necropsia realizados por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Gutiérrez Ramírez recibió tres disparos que le ocasionaron "SHOCK HEMORRÁGICO-TRAUMÁTICO -HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO" (fs. 172-173), en tanto que Garibello Díaz presentaba dos disparos que ocasionaron "SHOCK HEMORRÁGICO-TRAUMÁTICO -HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL CUELLO" (f. 189). Cabe anotar que en el vehículo sospechoso viajaban también Andrés Mosquera Freiter, Julio Marmolejo Lozano, Geysi Aldana Alvarado Magallón y Manuel Friederici, a quienes la Policía aprehendió luego del incidente.

La Corte no tiene objeciones que formular a la decisión del a-quo en cuanto declara extinguida la acción penal contra Fernando Garibello Díaz, por considerar que los testimonios de Agapito Vergara Ballesteros (f. 22), Andrés Javier Mosquera Freiter (f. 40) y Manuel Friederici (f. 133), acreditan que éste fue el autor de la muerte del cabo Gutiérrez Ramírez (f. 578). De igual manera, la Sala comparte el criterio del auto que ahora se consulta en cuanto sobresee de manera definitiva a Ángel Darío Argumedez Alvarez, por estimar que las declaraciones de Manuel Friederici (f. 132), Geysi Aldada Alvarado Magallón (f. 26) y Julio Marmolejo Lozano (fs. 136-137), revelan que Argumedez Álvarez no participó en el homicidio del cabo Gutiérrez.

En relación con la situación jurídica de Manuel Friederici y de Geysi

Aldana Alvarado Magallón, la Sala participa también de la decisión del Tribunal Superior, que ordena la compulse de copias de este proceso penal a la esfera especial de menores, ya que los certificados de nacimiento de Alvarado Magallón (f. 19-20) y de Friederici (f. 96) comprueban que, al momento de la comisión del hecho punible, los encartados tenían la condición de menores de edad.

Por otra parte, la Sala comparte igualmente el criterio de la resolución judicial en consulta en cuanto favorece al sargento Agapito Vergara Ballesteros con un sobreseimiento definitivo, pero arriba a esa conclusión por vía de considerar que la actuación del miembro de la Fuerza Pública encuentra amparo en la excepción de legítima defensa de un tercero, causa de justificación que consagra el artículo 21 del Código Penal.

Sobre este particular, tenemos que Vergara Ballesteros relata que cuando Fernando Garibello Díaz salió del vehículo y disparó contra el cabo Gutiérrez, "Inmediatamente reaccioné efectuándole un disparo ..." (f. 21). Ese argumento coincide con la declaración de Manuel Friederici quien expresa que después de que el cabo Gutiérrez fue herido mortalmente, Fernando Garibello "... se levantó y trató de dispararle al otro guardia ... y ese guardia le dio varios tiros" (f. 456). Como se puede apreciar, el imputado estuvo sometido a una agresión injusta actual, ya que Fernando Garibello sorprendió al cabo Gutiérrez y le efectuó varios disparos, lo cual ocasionó que Vergara Ballesteros repeliera la agresión de que era víctima.

Por otro parte, sostiene este imputado que, para proteger la vida de Gutiérrez, utilizó un fusil M-16 con el cual realizó "un ... disparo "contra la anatomía del Fernando Garibello (f. 330), versión que es corroborada por el dictamen del Dr. Alfredo Rodríguez Lay, médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quien señala que la versión del sindicado Vergara "es totalmente compatible" con las lesiones que sufrió Garibello (f. 502). Entonces podemos afirmar que el sindicado utilizó su arma de fuego en forma racional, para neutralizar la agresión, la que el imputado no podía evitar o eludir de otra manera, ya que era su deber proteger tanto la integridad física del cabo Gutiérrez como la propia.

Es necesario señalar que el sargento Vergara Ballesteros en ningún momento realizó una acto de provocación que justificara la conducta de Garibello Díaz, ya que, como explica Andrés Javier Mosquera, Garibello Díaz fue quien "se abalanzó contra el guardia a dispararle varias detonaciones con una pistola ... (f. 248).

En cuanto a la situación jurídica de Julio Marmolejo, la Sala considera adecuado el sobreseimiento provisional decretado en su favor. En efecto, si bien es cierto que el deponente Andrés Javier Mosquera afirma que observó a Marmolejo cuando "... **le estaban tirando al cabo GUTIÉRREZ** ... " (f. 450), esa aseveración se debilita con las declaraciones del sargento Agapito Vergara Ballesteros, quien apunta que "No ... vi disparar ..." a Marmolejo y que sólo observó cuando huyó "hacia la bomba de gasolina ..." (f. 22), relato que coincide con las deposiciones de Manuel Friederici (f. 456) y de Geysi Aldana Alvarado Magallón (f. 26) quienes coinciden en afirmar que Marmolejo salió del automóvil "y corrió hacia la bomba" de gasolina durante los disparos. Los anteriores elementos probatorios, aunados a que el dictamen balístico practicado sobre el arma de fuego que supuestamente portaba Marmolejo, no revela que fuera detonada (f. 509), indican que contra Julio Marmolejo Lozano no existen suficientes elementos de convicción que acrediten fehacientemente que contribuyera en la muerte del cabo Gutiérrez.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, C0NFIRMA la resolución de 18 de marzo de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que, entre otras consideraciones, sobresee definitivamente a Agapito Vergara Ballesteros y a Ángel Darío Argumedez Álvarez, y que sobresee de manera provisional a Julio Marmolejo Lozano, en las sumarias instruidas por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Osvaldo Ariel Gutiérrez y Fernando Garibello Díaz.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A VICENTE DÍAZ MORENO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HERIBERTO PAZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial ha remitido a esta Sala, en grado de consulta, auto calendado 8 de agosto de 1996, mediante el cual se sobresee definitivamente a Vicente Díaz Moreno, sindicado por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Heriberto Paz.

Las constancias procesales permiten conocer que en horas de la noche del 26 de marzo de 1994, en el sector 8 de Las Colinas de Cerro Batea, Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, se suscitó un incidente en el cual se vieron involucrados Vicente Díaz Moreno, agente de la Fuerza Pública y Heriberto Paz, resultando herido de muerte este último. Según las consideraciones médico legales detalladas en el Protocolo de necropsia, Paz murió a consecuencia de: "A) LACERACIÓN ENCEFÁLICA. B) HERIDA PENETRANTE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN CRÁNEO" (f. 78).

El tribunal a-quo arriba a la decisión que ahora se consulta, tras evaluar que la conducta del imputado Díaz Moreno "se produce por **circunstancias defensivas** ya que HERIBERTO PAZ empuñó un arma de fuego a una corta distancia de donde se encontraba echado el procesado y que de acuerdo a éste no le cupo la menor duda en su mente de que le iba a disparar. Por tanto ... se encontró urgido de utilizar su arma de reglamento ... a fin de proteger su vida y la de sus compañeros" (fs. 152-153).

Le toca a la Sala entonces verificar si en el cuaderno penal se encuentra acreditada la causa de justificación denominada legítima defensa o defensa necesaria, que exige para su reconocimiento la concurrencia de los cuatro requisitos consagrados en el artículo 21 del Código Penal.

En tal empeño, se advierte inicialmente que el sumariado Díaz Moreno actuó frente a una agresión actual e injusta, tal como lo manifiesta en su declaración indagatoria, cuando explica que el día en que acaeció el hecho de sangre "recibimos una llamada de estación base de un costado del Mini Super `LAS COLINAS en una vereda había un grupo con armas de fuego. Procedimos BADO, MARES y yo ir al lugar. Llegando a unos 20 a 25 metros visiualizamos (sic) a los sujetos ... recibimos unas detonaciones de los ciudadanos ... procedí acercarme por la parte posterior en donde estaban los sujetos haciendo los disparos. Le dije: `ALTO POLIA (sic)" uno de ellos giró la mano reluciendo un revólver, al ver mi vida en peligro efectúe (sic) un disparo inmediatamente me tiré al piso. Cuando me paré pude ver a uno de los sujetos tirado en el piso ... tenía una pistola empuñada en la mano" (fs. 109-110).

Esa agresión actual e injusta que narra el sindicado, es corroborada por la declaración de Eduardo Bado Pitty, agente de la Fuerza Pública, quien sostuvo que "se encontraban unos sujetos sospechosos que portaban armas de fuego ... al observar ellos nuestra presencia, hicieron gestos de que se iban por lo que procedimos a darle la voz de alto y en ese momento se escucharon varios disparos, yo me tiré al piso ... nos percatamos que el muchacho estaba en el piso y éste tenía un arma de fuego en la mano empuñándola" (fs. 86-87). En igual sentido se pronuncia el deponente Santos Mares De La Cruz, también miembro de la Policía

Nacional, al señalar que "visualizamos a los sujetos ... al aproximarnos ellos sepusieron (sic) nerviosos y procedimos a darle la voz de alto, en ese momento nos efectuaron varias detonaciones ... tuve que tirarme al piso ... vi sobre el piso a un sujeto ... en su mano empuñaba un arma tipo pistola negra no recuerdo el calibre chica" (fs. 89-90).

Por otro lado, en cuanto a la exigencia legal referente a no poder evitar o eludir la agresión de otra manera, la misma se desprende del relato que brinda el propio sindicado, cuando afirma que "disparé justamente al que tenía el arma en la mano ... Le disparé a él porque le vi la intención de dispararme" (f. 111).

De igual manera, se observa que el medio empleado por el sumariado para repeler la acción de la víctima fue su arma de reglamento, único instrumento que tenía a su alcance para evitar ser lesionado con el arma de fuego que portaba Heriberto Paz, no siendo posible exigirle otro comportamiento debido al peligro inmediato en que se encontraba su integridad física. Valga señalar que el arma utilizada por el hoy finado era una "Pistola, calibre 32, marca DAVIS, con serie # P-155358" (f. 38).

Por otra parte, de la encuesta sumarial no se desprenden elementos de convicción que pongan de relieve que el sindicado realizara conducta alguna que suscitara la amenaza de agresión o el hecho de sangre. Por el contrario, se advierte que Díaz Moreno, como miembro de la Fuerza Pública, se apersonó al lugar con la finalidad de investigar la presencia de un grupo de personas que portaban armas de fuego, amenazando la seguridad de terceras personas, lo que hizo en cumplimiento de un deber legal de prevención de delitos.

Como quiera que la versión ofrecida por el sindicado no revela incertidumbre o alteraciones que disminuyan su fuerza probatoria, y se encuentra corroborada por las declaraciones juradas de sus compañeros de labores, Eduardo Bado Pitty y Santos Mares De La Cruz, la Sala estima correcta la resolución consultada.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 8 de agosto de 1996, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que sobresee definitivamente a Vicente Díaz Moreno en las sumarias instruidas por el homicidio de Heriberto Paz.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUSTO GÁLVEZ RAMOS, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE FRANCISCO MEJÍA TAMARA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibió en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de consulta, el proceso seguido a **JUSTO GÁLVEZ RAMOS** por el homicidio de **FRANCISCO MEJÍA TAMARA** que contiene la resolución de 2 de septiembre de 1996, en la cual esa autoridad jurisdiccional lo **Sobresee Definitivamente.**

HECHOS

Trata la presente investigación penal de la muerte violenta de FRANCISCO MEJÍA TAMARA, ocurrida en horas de la noche del 25 de octubre de 1995 como consecuencia de herida producida con arma de fuego, hecho ocurrido en el área de Punuloso, corregimiento de Yaviza, Distrito de Pinogana, provincia de Darién.

Vinculado a ese hecho fue indagado JUSTO GÁLVEZ RAMOS, subteniente de la Policía Nacional con placa N° 7807, de servicio en el puesto de la Fuerza Pública de Metetí, Darién, cuyo actuar estimó el Segundo Tribunal Superior de Justicia estuvo amparado por la causa de justificación conocida como Legítima Defensa, por lo que dictó a su favor un sobreseimiento definitivo en cumplimiento del artículo 2210 ordinal 3° del Código Judicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las constancias procesales indican que al momento de su muerte, MEJÍA TAMARA realizaba un robo a mano armada en el local comercial denominado "Mi Kiosquito".

Al respecto la dueña del mencionado lugar, señora Nilsa Rodríguez Ureña, explica que en horas de la noche se encontraba atendiendo su negocio en compañía de sus dos hijos menores de edad, de 10 y 8 años cada uno, cuando un sujeto llegó y le colocó un cuchillo solicitándole le entregara todo el dinero y también la obligó a entregarle el arma de fuego de su concubino, la cual tenía guardada debajo de un colchón.

Manifiesta que al entregarle el arma al sujeto, éste la soltó, momento que aprovechó para salir por la puerta principal pidiendo auxilio, refugiándose en la casa de su vecino de nombre Melquiades González. A los pocos minutos escuchó una voz que decía "**Alto, la Policía, estás rodeado**" y seguidamente una detonación de arma de fuego. Luego una voz masculina que le decía salga, es la policía, al salir vio que se trataba del subteniente GÁLVEZ RAMOS y dos unidades más de la Fuerza Pública de Metetí (fs. 32-37).

Por su parte, Melquiades Mateo González Domínguez, avala lo manifestado por la señora Rodríguez Ureña, y agrega que MEJÍA TAMARA (occiso) era conocido como un sujeto muy peligroso por los asaltos realizados (fs. 56-59).

Al rendir declaración indagatoria JUSTO GÁLVEZ RAMOS, informa que ingresó a la Policía Nacional en el mes de febrero de 1973 y que desempeña el cargo de subteniente de la Policía Nacional desde mayo de 1994.

Narra que la noche del 25 de octubre de 1995 realizaba un recorrido de rutina a pie hacia la comunidad de Villa Darién, en compañía del Sargento Horacio Pérez y del agente José Villamonte, cuando al entrar a la comunidad de Punuloso escucharon gritos de unos niños y de una mujer procedentes de la casa donde está la tienda "Mi Kiosquito"; que al aproximarse ubicó al agente Villamonte en la esquina delantera izquierda de la casa y al sargento Pérez en la parte trasera; en tanto, él (indagado) se desplazó hacia el frente y dado que la puerta estaba semi-abierta observó a un sujeto y le dijo que era la policía y que estaba rodeado, pero el sujeto rápidamente apuntó hacia su persona con una pistola, por lo que él (indagado) disparó y el sujeto se desplomó cayendo boca abajo en el piso. Trataron de darle los primeros auxilios pero el sujeto estaba sin vida. Luego fue informado por la señora Rodríguez Ureña que el sujeto la había asaltado (fs. 90-91).

En el mismo sentido declara el sargento segundo, Horacio Pérez Díaz y el agente, José Isaac Villamonte Cáceres (fs. 60-62 y 63-65).

Consta documento con ciento de firmas de moradores de la comunidad de Metetí y áreas aledañas que estiman que el subteniente GÁLVEZ RAMOS actuó en cumplimiento de un deber defendiendo la vida de una ciudadana más, que era atacada por FRANCISCO MEJÍA TAMARA de nacionalidad colombiana, persona de mal vivir, que mantenía aterrada a la comunidad (fs. 120-136).

Al ponderar las pruebas allegadas al expediente se advierte que el deber de GÁLVEZ RAMOS, como agente de la Policía Nacional, era vigilar y proteger a la

comunidad, por tanto brindó ayuda inmediata al grito de auxilio. Luego se encuentra con un peligroso fascineroso que, en vez de temer la presencia de la autoridad policial, de manera desafiante le apunta con un arma de fuego; donde surge la necesidad de defenderse de esa injusta agresión.

Tal como lo señaló el tribunal a-quo, la conducta de Gálvez Ramos contiene todos los requisitos de la causa de justificación que establece nuestro Código Penal en su artículo 21 conocida como legítima defensa.

Por tanto, si bien se está ante una acción típica **-homicidio-** desplegada por Gálvez Ramos, la misma esta amparada por una causa de justificación, lo que tiene la virtualidad de excluir la antijuridicidad del hecho. Siendo así, cabe el sobreseimiento definitivo emitido a su favor.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto consultado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL BURGOS SÁNCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 23 de agosto de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia estimó que el escrito casación en el fondo presentado por el licenciado Carlos M. Herrera Morán, en representación de **RAÚL BURGOS SÁNCHEZ,** quien fue procesado y condenado por un delito contra la Salud Pública relacionado con droga, cumplía con los presupuestos del recurso de que trata el artículo 2441 del Código Judicial referente a la impugnabilidad subjetiva y objetiva, lo remitió a Corte Suprema de Justicia fs. 166-168).

Ingresado el caso a la Secretaría de la Sala Penal el 2 de septiembre de 1996, fue sometido a las reglas del reparto y por medio de providencia de 11 de septiembre se dispuso fijar en lista el negocio por el término de ocho días, que señala la ley a objeto que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del mismo.

Vencido el término anterior, corresponde a esta Sala decidir sobre la segunda fase de admisibilidad del recurso presentado, tal como lo establece el artículo 2443 del Código Judicial.

Observa este Tribunal de Casación que el recurso fue presentado dentro del término legal, por persona hábil y contra una sentencia definitiva de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior, estimándose correcta la revisión concedida.

En cuanto a los requisitos formales exigidos por la ley se tiene lo siguiente:

1. El recurrente señala de manera concisa los aspectos sobresalientes del

proceso.

2. Invoca una sola causal de fondo denominada **Indebida aplicación de la ley sustancial penal en el caso juzgado**, preceptuada en el artículo 2434 numeral 1 del Código Judicial.

3. El único motivo que apoya la causal invocada guarda relación con la misma.

4. No obstante, en cuanto a las disposiciones legales infringidas no las presenta ordenada y separadamente y omite señalar el concepto de la infracción.

Conforme a la técnica de presentación de la causal invocada, el recurrente debe indicar la norma sustancial aplicada en forma indebida y después la que correspondía aplicar.

Tal como se anotó antes se advierte que el casacionista comete el error de no señalar, continuación de cada una de las disposiciones que considera infringidas el concepto en que lo han sido.

Ante estos defectos, procede ordenar su corrección, tal como lo permite el artículo 2444 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que el escrito de casación permanezca en Secretaría por el término de cinco (5) días, con el fin de que el interesado haga las correcciones indicadas.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA ALBERTO ANTONIO ALZAMORA GARCÍA POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE VERÓNICA GAITÁN DE ALZAMORA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de decisión el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Carlos Ameglio Moncada, en su condición de abogado defensor de **ALBERTO ANTONIO ALZAMORA**, contra la sentencia condenatoria dictada el 14 de octubre de 1994 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó en todas sus partes la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 4 de mayo de 1994 por el Juez Décimo Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se condena a su poderdante a cumplir la pena principal de 30 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de elección popular, o de cualquier otro derecho político por el término de un (1) año.

El recurso que nos ocupa está fundamentado en una sola causal, cual es: error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial, la cual, a su vez, está sustentada en cuatro motivos. Con base a estos motivos se alega la infracción de los artículos 2144, 904, 906, 845 del Código Judicial y los artículos 38 y 136 del Código Penal.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 2450 del Código Judicial, la Sala procederá a examinar cada uno de los motivos que fundamentan la causal.

Así se observa que, como bien sostiene el Procurador General de la Nación en la Vista N° 40 de 11 de junio de 1996, en los tres primeros motivos el casacionista hace mención de algunas pruebas testimoniales sin especificar las fojas en donde las mismas se puedan encontrar, lo que es contrario a la técnica del recurso y a jurisprudencia uniforme de esta Corporación, pues dificulta la individualización y localización de la prueba a la que se refiere.

Se acusa a la cuestionada sentencia de que le confiere un valor que la ley no le da a la declaración denuncia presentada por la señora VERÓNICA GAITÁN DE ALZAMORA, lo hace que el tribunal ad quem llegue a la conclusión de que es cierto el cargo formulado (**primer motivo**); como también le dio excesivo valor probatorio a los testimonios de los señores Javier Licona y Eduardo Amato, ya que según su parecer, "de los mismos no emerge prueba alguna para comprobar el hecho punible del delito de lesiones personales y mucho menos para demostrar la personalidad del justiciable (**segundo motivo**). Por otro lado, le negó el valor que la ley le asigna a los testimonios de Jorge Guerra Gálvez, María Cubillas, José Martínez Rosales, Carlos Araúz, Frida Sánchez, Argelis Ivette Canto de Sánchez y Julio Arango Echeverry (**tercer motivo**); y por último, se expresa que le restó valor probatorio a documentos privados que dicen tener relación con el prontuario penal y policivo del imputado, ya que de haberles dado el valor que le corresponden otro hubiera sido el contenido dispositivo de la sentencia (**cuarto motivo**).

Esta Corporación no está de acuerdo con el criterio esbozado por el casacionista en lo que al primer motivo se refiere. Está claro que el ad quem para llegar al convencimiento de la responsabilidad del imputado no sólo se basó en la declaración de la señora VERÓNICA GAITÁN DE ALZAMORA, sino que analizó además otras pruebas que confirman lo que ella denunció, como por ejemplo y entre otras, las fotografías del rostro de la ofendida, el examen médico legal practicado a su persona, la declaración del psiquiatra Eduardo Amato, quien con anterioridad trató como profesional de la psiquiatría a la pareja conformada por la señora VERÓNICA GAITÁN DE ALZAMORA y el señor ALBERTO ALZAMORA GARCÍA, por lo que perfectamente puede dar un diagnóstico con autoridad.

El Tribunal, contrario a lo que sugiere el casacionista, a más de lo expuesto por la lesionada, se apoyó en otras pruebas para convencerse de la responsabilidad del imputado, y resulta claro que el recurrente no ha logrado acreditar sus aseveraciones.

Con relación al segundo motivo, tampoco nos identificamos con lo manifestado por el recurrente porque está claro que el tribunal de segunda instancia examinó las declaraciones de Javier Licona y especialmente la del doctor Eduardo Amato con el fin de acreditar y probar la personalidad del imputado, lo que lógicamente sirve para sustentar su posición. Por ello consideramos que el ad quem le dio el valor correcto a dichas declaraciones y por lo tanto el recurrente tampoco ha podido probar la injuridicidad de la sentencia.

En el tercer motivo, el proponente del recurso argumenta que el tribunal de segunda instancia le negó el valor que la ley le asigna a los testimonios de Jorge Guerra Gálvez, María Cubillas, José Martínez Rosales, Carlos Araúz, Frida Sánchez, Argelis Ivette Canto de Sánchez y Julio Arango Echeverry, pero no expuso de manera clara los motivos por los que considera que la sentencia es injurídica.

Con sólo manifestar que el tribunal de segunda instancia le restó o no le dio el valor apropiado a los testimonios de las personas supracitadas, no alcanza a demostrar la injuridicidad que se le atribuye al fallo recurrido. Es decir, el recurrente en lugar de sustentar verdaderos cargos de injuridicidad contra el fallo, sólo se limita a señalar que no se le concedió valor suficiente a los testimonios arriba mencionados sin manifestar las razones que lo llevan a concluir de esa manera.

Finalmente, en lo que al cuarto y último motivo se refiere, consideramos

que los documentos a los que hace alusión el recurrente carecen de la fuerza probatoria necesaria para desacreditar la existencia del hecho ni la responsabilidad del imputado. Como bien señala el colaborador del Ministerio Público, se trata de documentos sin valor probatorio por tratarse de una copia simple y de documentos sin firma que identifique a la persona responsable de la confección del mismo.

Con relación a la prueba relativa al prontuario penal del imputado coincidimos con el Ministerio Público cuando dice que no tiene ninguna relación con los hechos de este proceso ya que el hecho de que el imputado no registre antecedentes penales no significa que no es responsable del delito que se le está imputando. El no tener antecedentes penales ni siquiera es una atenuante que se pueda alegar para solicitar una rebaja de la pena a una persona que ha sido encontrada responsable de un delito, es mas bien, una circunstancia que el juzgador tomará en cuenta al momento de dosificar o fijar la pena base.

Cuando se invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba como causal de casación, se parte de la premisa de que el tribunal ad quem tomó en consideración la prueba (la apreció, la tuvo en cuenta al momento de fallar) pero que se equivocó al darle el valor jurídico que le asigna la ley, trayendo como consecuencia que ese resultado influya en lo dispositivo del fallo e implique infracción de la ley sustancial, razón por la cual no se puede alegar una inadecuada valoración de un prontuario penal porque eso no tiene la fuerza probatoria como para lograr la absolución de un culpable o la condena de un inocente. En consecuencia, debe desecharse este motivo.

Ahora bien, siendo que los motivos de las causales desempeñan un papel importante en el recurso de casación, porque su misión es la de fundamentar y comprobar la causal invocada, al no haber prosperado ninguno de los cargos de injuridicidad que fueron expresados por el casacionista, no le queda otra opción a la Corte que la de no casar la sentencia impugnada.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de octubre de 1994, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR, PROPUESTA POR EL LICENCIADO RENÉ ATENCIO CONTRA MARÍA DEL C. MITRE, EMELINA VILLARREAL PITTÍ, HUMBERTO MOSQUERA Y COSME IDRYS MORENO, POR EL SUPUESTO DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, EN DETRIMENTO DE MARÍA DEL C. REYES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 30 de agosto del año que decurre, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el expediente que contiene el recurso de casación promovido contra el auto de 28 de marzo de 1996 expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que no admite la acusación particular propuesta por el licenciado **RENÉ C. ATENCIO** contra **MARÍA DEL C. MITRE**, **EMELINA VILLAREAL PITTÍ**, **HUMBERTO MOSQUERA Y COSME IDRYS MORENO**, por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.

Vencido el término de lista al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, procede examinar las exigencias de orden externo e interno, propias de este recurso extraordinario, a fin de resolver su admisibilidad.

En primer término, consta en autos que el recurrente anunció y formalizó el recurso de casación dentro del término establecido por la ley y la resolución objeto de impugnación, es de las que son susceptibles de este recurso, conforme lo prevén los artículos 2434 primer párrafo y 2435 numeral 6, ambos del Código Judicial. Igualmente aparece debidamente acreditada la legitimación activa del licenciado Atencio, a través del poder conferido por la señora María del Carmen Reyes, y que puede leerse a fojas 110 del expediente.

Con relación a los requisitos que señalan los numerales 3 y 4 del artículo 2443 del Código Judicial, es necesario examinarlos por separado. Veamos;

1. Historia Concisa del caso: Aunque la narración se excede en extensión, la falla más notoria radica en que no emerge de la relación de los hechos los vicios de injuridicidad que dan lugar al recurso presentado.

2. Causal o causales invocadas: Al determinar las causales, el casacionista hace uso de las dos causales probatorias que se encuentran en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, pero al enunciarlas se aleja de la técnica propia de este medio de impugnación, pues entra a renglón seguido en una explicación que corresponde más bien al concepto de la infracción. Además, ignora la jurisprudencia uniforme de la Corte que en forma didáctica ha señalado que las causales deben presentar por separado, cada una con los motivos que las fundamentan y luego las disposiciones que se estiman violadas por la resolución que se censura.

En el caso de autos, además de los defectos advertidos, al manejar las dos causales probatorias que versan sobre la violación de la ley sustancial penal por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha incidido en lo dispositivo del fallo, se incurre en el error de citar como objeto de ambos errores, la prueba documental consistente en el certificado de nacimiento y el certificado de defunción. No es posible, que sobre una misma prueba se dé un error de hecho y a su vez de manera coetánea, un error de derecho de valoración o apreciación probatoria. Además, en el caso que nos ocupa, el recurrente perdió de vista que la única causal compatible con el tipo de resolución que se intenta revisar, es la prevista por el numeral 6° del artículo 2435 del Código Judicial, que se refiere a resoluciones judiciales en la categoría de autos; las causales alegadas sólo proceden cuando se trata de sentencias de segunda instancia, tal cual lo prevé el artículo 2434 del Código de Procedimiento penal.

3. Motivos: Como quiera que las causales no se han invocado en la forma que lo señala la ley y la jurisprudencia nacional, los motivos al referirse a los mismos medios probatorios, adolecen de congruencia, a la vez que son reiterativos.

4. Disposiciones legales infringidas y concepto en que lo han sido: Cabe señalar que como las causales alegadas no se compadecen con la naturaleza de la resolución recurrida en casación, las disposiciones adjetivas y sustantivas alegadas devienen en impropias.

Dada la falta de concurrencia de los requisitos enumerados por el Código Judicial, al tenor del tipo de resolución que se impugna, no es posible darle curso al recurso de casación presentado en este caso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado RENÉ ATENCIO en el presente caso.

Base legal: artículos 2434, 2435 y 2443 del C. Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO, NIVALDO MADRIÑAN APONTE Y FELIPE CAMARGO AMAYA, POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE HUMBERTO MACEAS WILSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 18 de octubre de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, vía apelación, reformó el fallo proferido el 12 de enero de ese mismo año, por el Juzgado Segundo Penal del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, en el sentido de rebajar la pena de cinco años de prisión impuesta a **MANUEL ANTONIO NORIEGA** y a **FELIPE CAMARGO AMAYA** fijándola en tres (3) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y demás contemplados en el artículo 52 del Código Penal, por el mismo término, una vez cumplida aquella, a su vez revocó lo dispuesto en cuanto a **NIVALDO MADRIÑAN APONTE** y lo absolvió de los cargos a él formulados en ese proceso y la confirmó en lo demás (fs. 3,478-3,491).

A continuación de la sentencia aparece el Salvamento de Voto de la magistrada Sandra T. Huertas de Icaza quien disiente del criterio mayoritario en cuanto a la condena proferida en contra del ciudadano Manuel Antonio Noriega al considerar que no se cumplió con el debido proceso para su encausamiento y posterior condena como lo prevé la Ley, indicando que lo procedente es declarar la nulidad de lo actuado en cuanto a él (fs. 3,492-3,493).

En este caso, el Tribunal de primera instancia ordenó la libertad de Felipe Camargo Amaya al considerar que ya había cumplido en exceso el quántum de la pena impuesta, no obstante, los apoderados legales de los procesados Felipe Camargo Amaya y Manuel Antonio Noriega, licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila y la doctora Asunción Alonso de Montalvo, respectivamente, anunciaron y formalizaron oportunamente recurso extraordinario de casación (fs. 3,506-3,543 y 3,544-3,559), contra la sentencia de segunda instancia descrita en los párrafos precedentes.

El Tribunal de Casación en resolución de 30 de abril de este año, no admitió el recuso de casación presentado por la doctora Asunción de Montalvo, defensora de Oficio de Noriega Moreno; y admitió el recurso de casación mixto presentado por la defensa de Camargo Amaya, en lo que se refiere a las causales 1ª, 3ª y 5ª, no así en cuanto a la 2ª y 4ª (fs. 3,586-3,590).

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral y pública se procede a resolver el fondo del recurso.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El día 16 de marzo de 1988 como consecuencia de una asonada militar fue detenido Humberto Macea Wilson junto con otros miembros de las extintas Fuerzas de Defensa.

Afirma Macea Wilson **-en denuncia presentada el 22 de enero de 1990-** que Felipe Camargo Amaya lo esposó brutalmente y ordenó que se le golpeara.

CAUSALES INVOCADAS POR EL CASACIONISTA

El postulante fundamentó la acción en cinco causales, de las cuales fueron admitidas tres, una de forma y dos de fondo.

CAUSAL DE FORMA

Primera Causal: Falta de Competencia del Tribunal (art. 2437 ord. 1° del Código Judicial).

CAUSALES DE FONDO

Segunda Causal: Se sanciona un delito, no obstante existir una circunstancia eximente de responsabilidad (art. 2434 ord. 5 del Código Judicial).

Tercera Causal: Por haberse sancionado un delito a pesar de que circunstancias posteriores a su ejecución impiden el castigo (art. 2434 ord. 6 del Código Judicial).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., mediante Vista N° 53 de 7 de agosto de 1996 (fs. 3,591-3,616), luego de resumir lo expuesto por el casacionista, expone su concepto sobre el recurso presentado, refiriéndose a los siguientes puntos:

Con respecto a los motivos que apoyan la **primera causal**, estima que el primero y segundo no concretan cargos de injuridicidad alguno.

En cuanto al tercero, sostiene que el recurrente al formular su vicio de injuridicidad, "no señala que el tribunal que conoció de la causa de Camargo Amaya, por razón de la denuncia que presentara en su contra Macea Wilson, no tenía competencia para ello y al determinar esto, cuál lo era, por lo que no se logra concretar el cargo de injuridicidad que se aduce".

Referente a los motivos quinto y sexto, tienen igual argumento referente a que no se procedió a la acumulación de los procesos solicitada, "pero no explica el casacionista por qué el tribunal o Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, no es el competente y en su defecto cuál lo es".

Considera que en el motivo séptimo no formula cargo o vicio de injuridicidad en concreto, sino que se limita a presentar un alegato.

Al referirse al noveno motivo, considera errada la conclusión del recurrente al manifestar que con los motivos anteriores se ha concretado la causal invocada, situación que en realidad no se ha comprobado.

El representante del Ministerio Público en su Vista N° 53 procede al análisis de las disposiciones señaladas por el casacionista como infringidas y concluye señalando:

1. Que del artículo 2291 del Código Judicial que se dice violado en forma directa por omisión, no lo ha sido porque la acumulación no procede de forma automática sino que se requiere verificar y determinar si concurren los requerimientos que exige la ley y si el tribunal que conoce de la causa que se solicita sea acumulada, no es el competente, situación que no se ha producido en este caso.

2. Que el artículo 2294 del Código Judicial que sostiene el amparista ha sido violado en forma directa por omisión, considera que el mismo no exige que el tribunal que conoce en segunda instancia, al resolver ésta, debe ordenar acumulación alguna.

3. Respecto al artículo 2003 del Código Judicial, que según el recurrente ha sido violado en forma directa por omisión, "al no tratarse la acumulación de algo automático, no se puede sostener que el tribunal de mayor jerarquía está compelido siempre a ordenar la acumulación".

4. Tampoco prospera la infracción del artículo 2001 del Código Judicial, que se dice violado en forma directa por omisión, dado el precedente que sobre

esta norma sostuvo la Sala Penal **-resolución de 27 de abril de 1994-** en un caso que considera aplicable.

5. El concepto de la infracción del artículo 2002 del Código Judicial, que de acuerdo con el casacionista resulta violado en forma directa por omisión, no guarda relación con lo establecido en el artículo, por lo que no se acredita la violación aducida.

6. Que si bien el recurrente aduce como infringido el artículo 1974 del Código Judicial en forma directa por omisión, "no señala concretamente, la manera como ha resultado violada esta norma, dado que esgrime consideraciones de carácter general, sin explicar la alegada infracción".

En cuanto a los cuatro motivos que sustentan la **segunda causal de fondo**, considera que los vicios de injuridicidad no se acreditan.

Respecto a las disposiciones legales que se indican como infringidas con relación a esta causal, considera que el concepto de la infracción del artículo 19 del Código Penal que se señala ha sido violado en forma directa por omisión, no logra concretar cuál era el deber legal que, por imperativo de la ley, Camargo Amaya debía cumplir.

Sobre el concepto del artículo 35 del Código Penal, que según el recurrente ha resultado infringido en forma directa por omisión, considera que no señala cuál fue la orden impartida por el superior jerárquico de su defendido y que éste debía o estaba obligado a obedecer.

Al referirse a los siete motivos que sustentan la **tercera causal** estima que ninguno de los cargos prospera.

En cuanto al artículo 91 del Código Penal que se dice violado en forma directa por omisión, considera que el indulto decretado solo extingue la acción penal con relación a los beneficiados con el mismo y no a personas no descritas o determinadas en el decreto por el cual se concedió esta medida liberadora de la responsabilidad penal.

Finalmente, solicita que no case la sentencia de 18 de octubre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

FUNDAMENTO DE LA SALA

A objeto de resolver el recurso planteado se procederá al examen de las tres causales en que se fundamenta, con sus respectivos motivos, de conformidad con lo normado en el artículo 2450 del Código Judicial.

PRIMERA CAUSAL

De los nueve motivos expuestos por el postulante en la primera causal, la Sala observa lo siguiente:

Los dos primeros motivos se refieren a que contra Camargo Amaya se instruyen múltiples causas paralelas por supuestas infracciones al mismo tipo penal y que existen constancias en el expediente que se le han instruido, por separado, juicios por delitos contra la Libertad Individual en forma coetánea. De la redacción dada a los motivos se advierte que sólo se establecen hechos, no así cargos de injuridicidad contra la sentencia censurada.

El tercer motivo señala, que a pesar de lo expuesto en los motivos anteriores, no se procedió a la acumulación de los procesos incoados en contra de su defendido para determinar la existencia de unidad o pluralidad de delitos y la individualidad de la pena, previa determinación de la competencia del juzgado correspondiente. Por tratarse de un supuesto error in procedendo y dada la multiplicidad de casos distintos en estados procesales disímiles, no se logra precisar cargo de injuridicidad alguno contra la sentencia de segunda instancia.

En el cuarto motivo se refiere al tiempo que lleva detenido en prisión preventiva el procesado Camargo Amaya; hecho que no cumple el cometido de soporte a la causal de forma, aducida.

El quinto motivo, señala que se hizo la advertencia tanto en el acto de audiencia como en la impugnación al fallo de primera instancia, reclamo que fue desestimado, hecho éste que constituye un prerrequisito a toda causal de forma.

En el sexto motivo vuelve a referirse a que el tribunal de primera instancia y el ad-quem negaron la acumulación de procesos y aunque reconocieron la inexistencia de la competencia procedieron a dictar el fallo.

La Sala advierte que la forma escueta de presentación de estos dos motivos, no logran sustentar las razones que adujo el tribunal de segunda instancia para desestimar la alegación del recurrente, a pesar de que se dice que reconoció la inexistencia de la competencia.

En el séptimo motivo se afirma que es contrario a principios del Derecho Penal la traslación al Órgano Ejecutivo de la Facultad de unificar las penas y no le es viable hacerlo al tribunal y menos asintiendo la inexistencia de competencia.

Sobre el particular, no entiende el Tribunal de Casación la razón del motivo expuesto, toda vez que el tribunal de segunda instancia en la sentencia recurrida no alude ni traslada la mencionada facultad al Ejecutivo.

El octavo motivo vuelve a señalar que previa advertencia de que no se determinó cual era el tribunal competente, el ad-quem asumió la misma al confirmar las consideraciones del juzgador de primera instancia.

El casacionista en el noveno motivo señala que con lo expuesto en los motivos anteriores se ha concretado la causal invocada. Es evidente que no se concreta cargo de injuridicidad alguno, consustancial a la causal de forma alegada.

Respecto a las disposiciones legales que se dicen infringidas en forma directa por omisión, se hacen las consideraciones que siguen:

-**El artículo 2291** se refiere a la acumulación de procesos y el casacionista afirma que la solicitó en el escrito de apelación de la sentencia y el Segundo Tribunal desconoció las peticiones formuladas, omitiendo pronunciarse al respecto. Que dicha acumulación se solicitó desde el momento en que en el expediente se confirmó la existencia de una pluralidad de denuncias, que se instruían a la par en contra de su defendido.

El artículo en mención establece que las partes pueden hacer la solicitud de la acumulación de sumarios instruidos por separado, pero de conformidad con los presupuestos que para este efecto, establece el Código Judicial.

Ahora bien, el Código Judicial establece que los trámites para decretar y llevar a cabo la acumulación de procesos penales son los mismos que para la acumulación de los casos civiles. En ese sentido, el artículo 709, claramente dispone que la acumulación de procesos puede ser a petición de parte o de oficio, en este último supuesto los procesos deben reposar en un mismo tribunal.

Siguiendo con las reglas de la acumulación, el artículo 714 de manera taxativa indica los requisitos que debe contener el memorial que se presenta ante el juez para solicitar la acumulación.

Al examinar la resolución impugnada, la Sala se percata que en el contenido de la misma no se hace alusión a la advertencia sobre la acumulación que afirma el casacionista hizo al tribunal en su escrito de apelación.

Ahora bien, del escrito de apelación (fs. 3,427-3431), se desprende que su objeto era la revocatoria del fallo de primera instancia y en su defecto la absolución del señor Camargo Amaya. Además, en un apartado del mismo, se señala

que durante el proceso se había solicitado la acumulación de los otros procesos seguidos contra Camargo Amaya, por delitos contra la Libertad Individual, ocurridos desde el 16 de marzo de 1988 a diciembre de 1988, cuando ejercía funciones en el G-2; y que ello se reiteró en el acto de audiencia.

Por tanto, en el contexto del escrito de sustentación de la apelación no deja de ser un comentario final, no así una solicitud con las características que señala la ley procedimental. Con respecto a que la acumulación también fue solicitada al tribunal de primera instancia, cabe apuntar que no lo ha sido en debida forma, tal como se desprende de la resolución calendada 12 de junio de 1992 (fs. 1197-2005).

-El artículo 2294 de Código Judicial establece que si contra un mismo imputado se siguen dos procesos y el auto de enjuiciamiento del primero estuviere en segunda instancia por apelación, una vez resuelto el expediente se devolverá al tribunal de origen y se mantendrá en suspenso hasta cuando se decida el mérito del segundo sumario y luego se procederá a la acumulación.

Como se observa muy bien, trata el artículo citado sobre la apelación de un auto de enjuiciamiento y no de una sentencia, como ocurrió en el caso sub-júdice. Por otra parte, se alude a dos procesos que estuviesen radicados en un mismo tribunal, aunados a las reglas de la acumulación, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa.

-El artículo 2003 al señalar que el tribunal de mayor jerarquía al ser advertido de la existencia de la pluralidad de procesos o de la no acumulación por los tribunales inferiores, debe determinar en cualquier etapa del proceso, cuál es el juzgado competente.

Hemos señalado que el tribunal de segunda instancia en la sentencia recurrida no hizo alusión al punto de la acumulación presente en la parte final del escrito de apelación.

No obstante, en el expediente de 4 tomos y 3642 folios aparecen diversos oficios con fecha 26 de octubre de 1994, en los que el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, solicitó a distintos tribunales del mismo circuito judicial información sobre si en los mismos se estaba tramitando causa penal contra Felipe Camargo Amaya. Como resultado de este requerimiento, de diez tribunales, cinco manifestaron que no tramitaban causa penal en contra de esta persona.

En tanto, el Juzgado Cuarto de Circuito informó en oficio de 31 de octubre de 1994 que había acumulado tres procesos en contra de Camargo Amaya, y a la fecha existía sentencia condenatoria, pendiente de publicación del edicto emplazatorio para notificar a otro condenado en dicha resolución (f. 3,262).

El Juzgado Noveno de Circuito Penal en oficio de 31 de octubre de 1994, informó que en sentencia de 13 de enero de 1994, declaró culpable y condenó a la pena de cinco años de prisión a Camargo Amaya por la comisión de delitos contra la Libertad Individual y Lesiones Personales en perjuicio de Sánchez Peña y que el expediente había sido enviado al Segundo Tribunal Superior en Casación (f. 3,263).

El Juzgado Sexto de Circuito Penal por su parte, informó en oficio de 11 de noviembre de 1994, que mediante auto de fecha 3 de octubre de ese año, ordenó la acumulación de los procesos seguidos a Camargo Amaya y otros sindicados por delito contra la Libertad Individual en perjuicio de Raúl García y Homero Londoño y que a esa fecha el proceso estaba pendiente de dictar la sentencia correspondiente (f. 3,268).

Por su parte, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal, en oficio calendado 11 de noviembre de 1994, informó que se tramitaban dos causas en contra de Camargo Amaya, ambas contra la Libertad Individual, una en perjuicio de Alcides Núñez y la otra en perjuicio de Ernesto Gil Vega Kennedy. En cuanto al estado procesal, el primero se encontraba en la fase de formalización de un

recurso de casación y el segundo estaba pendiente de dictar sentencia (f. 3,426).

Finalmente, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal informó en oficio de 15 de noviembre de 1994, que en ese Tribunal se tramitaba causa penal contra Camargo Amaya por delito contra la Libertad Individual en perjuicio de Carlos R. Worrel Best, perpetrado el 12 de mayo de 1988 y estaba pendiente de celebración de la audiencia fijada para el 9 de febrero de 1995 (fs. 3,270).

Lo anterior es demostrativo, que de cinco juzgados que seguían causa penal contra Camargo Amaya, dos habían ordenado la acumulación, en otros casos ya existía sentencia la cual había sido objeto del recurso extraordinario de casación, mientras uno estaba pendiente de dictar sentencia y otro de llevar a cabo la audiencia.

Todo lo cual es entendible si analizamos que el artículo 2203 en su primera parte, antes de la reforma introducida por el artículo 9 de la Ley 1 de 1995 era del tenor siguiente: **"La acumulación de procesos no será dispuesta cuando ocasionen un gran retardo de alguno de ellos, aunque en todos debe intervenir el mismo tribunal"**

La sentencia del Segundo Tribunal como se dijo antes, es de fecha 18 de octubre de 1995, para esa fecha teniendo en consideración lo manifestado por los distintos juzgados cabría preguntarse ¿cuál sería el proceso que debía acumular los restantes seguidos contra la misma persona?

-En cuanto al **artículo 2001** que trata de los delitos conexos, señala el casacionista que el Tribunal Superior debió proceder a determinar la conexidad existente en las actuaciones judiciales. De conformidad con lo explicado en la disposición que precede, tampoco se infringe esta disposición.

-**El artículo 2002** que se refiere a los tribunales competentes para conocer de los delitos conexos, estima el postulante que correspondía al Tribunal Superior declarar la revocatoria de todas las actuaciones judiciales existentes en el caso bajo examen y ordenar el conocimiento al tribunal que por mandato legal era el competente. Por lo expuesto con anterioridad, tampoco se acredita la infracción a esta norma.

-**El artículo 1974** trata sobre las consecuencias procesales y penales de que son objeto los jueces y funcionarios de instrucción que no se ciñan a las reglas que establece el procedimiento judicial.

Tampoco esta disposición resulta infringida porque la realidad procesal examinada no se adecúa a los presupuestos que generan las responsabilidades civiles y penales allí previstas.

De consiguiente, al no acreditarse la infracción de las disposiciones legales señaladas por el casacionista, la primera causal no aparece comprobada.

SEGUNDA CAUSAL

La segunda causal alegada es: **"cuando sancione un delito, no obstante de existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad (numeral 5° del art. 2434 del C. J.)"** el postulante la apoya en los siguientes motivos:

> "1. Es un hecho público y notorio que el señor FELIPE CAMARGO AMAYA, pertenecía a uno de los estamentos de las extintas Fuerzas de Defensa específicamente en las instalaciones del g-2, con el rango de Mayor.
>
> 2. Dentro de sus actividades correspondió a nuestro representado el iniciar las investigaciones dentro de los hechos ocurridos el día 16 de marzo de 1988.
>
> 3. Estos hechos fueron aceptados por el hoy denunciante, ya que siendo igualmente un militar, conoce sobre la obediencia debida,

como norma de conducta dentro de un estamento militar.

4. El propio denunciante se contradice al manifestar en foja 4 del expediente que todas las actuaciones en el G-2 fueron realizadas por órdenes del CORONEL GUILLERMO WONG GUIZADO, contradiciendo su propia deposición al señalar que había escuchado una voz que era supuestamente la de Felipe Camargo Amaya".

De los motivos transcritos se advierte que no constituyen vicios de injuridicidad de la sentencia bajo censura y lo expuesto en los mismos no ha sido objeto de cuestionamiento durante el proceso.

El último motivo no guarda relación con la causal invocada, pues trata sobre los cargos hechos por el denunciante y la individualización de sus victimarios.

Con respecto a esta causal se consideran violadas dos disposiciones del código penal.

El artículo 19 cuyo tenor literal es:
"No comete delito quien obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho".

El recurrente se limita a mencionar la causa de justificación conocida como cumplimiento de un deber legal. Indica que ante la asonada golpista se produjo el inicio de las investigaciones emanaban de la alta jefatura de las extintas Fuerzas de Defensa.

Si se analiza la norma, se avala la excluyente de antijuridicidad aludida cuando la misma **se realiza dentro de los límites legales y conforme a derecho** (Muñoz Conde. Teoría General del delito. Editorial Temis. Bogotá-Colombia. 1990. pág. 116). Esto significa que cualquier exceso hace inaplicable la causa de justificación.

No se explica en el concepto de la infracción, cuál fue la disposición legal que motivó a su defendido a someter al detenido Humberto Maceas a severidades o apremios indebidos, que es la figura delictiva que recoge el artículo 160 del Código Penal, en el cual se subsumió su actuar ilícito.

-**El artículo 35** del Código Punitivo, describe la causa de inculpabilidad conocida como obediencia debida. Explica el postulante que su defendido cumplía con una misión como miembro de Seguridad del Estado y con base a una orden emanada de autoridad competente.

Sin necesidad de recurrir a la doctrina, el artículo invocado nos ofrece cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se pueda argüir que estamos en presencia de esta excluyente de culpabilidad.

Es así, que: 1) la orden debe emanar de una autoridad de jerarquía superior, quien a su vez debe ser competente para expedirla; 2) la orden debe estar revestida de las formalidades legales; 3) el agente o subordinado está obligado a cumplirla; y 4) que tal orden no tenga el carácter de una evidente infracción punible.

Referente a las órdenes dadas a Camargo Amaya, el Segundo Tribunal Superior de Justicia manifiesta que las mismas **"no las cumplía a regañadientes, sino todo lo contrario, por más que ahora quiera endilgar todo la responsabilidad de lo acaecido al que se encuentra confinado en una celda de Miami" (fs. 3489).**

De consiguiente, esta causal de fondo tampoco se ha probado.

TERCERA CAUSAL

La tercera causal alegada **"cuando se sancione un delito a pesar de que circunstancias posteriores a su ejecución impidan el castigo"** contenida en el

artículo 2434 numeral 6 del Código Judicial, la sustenta en siete motivos que sintetizamos de la siguiente manera:

1. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 469 de 23 de septiembre de 1994 el Órgano Ejecutivo concedió indulto a favor de un número plural de personas investigadas, sindicadas, enjuiciadas o condenadas por delitos contra la libertad, el honor, la Fe Pública, la Personalidad Jurídica del Estado y otras conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico.

2. Que el indulto otorgado es extensivo a los procesos en etapa sumaria, plenaria o con sentencia condenatoria.

3. Que fueron favorecidos con el indulto Jorge Humberto Correa Muñoz y Guillermo José Wong Guizado, quienes al igual que su representado estaban sindicados dentro del presente proceso.

4. Que la acción penal es indivisible y solo se puede fraccionar en los casos que de manera específica lo establece la ley.

5. Que al reconocerse el indulto convierte per se el delito investigado en político.

6. Que Wong Guizado y Correa Muñoz eran superiores jerárquicos de Camargo Amaya.

7. Que al sustentar la apelación se advirtió sobre la extinción de la acción penal en favor de su representado en vista del indulto otorgado a Wong Guizado y Correa Muñoz.

El primer motivo sólo se limita a establecer un acto de gracia otorgado por el Órgano Ejecutivo y que no alude a la persona del señor Camargo Amaya.

El segundo y tercer motivos registran hechos ciertos, pero sin vinculación directa a la situación procesal del patrocinado del recurrente.

El cuarto motivo es una apreciación genérica que no se adecúa al caso sub júdice.

El quinto motivo es una conclusión errónea, ya que los decretos de indulto per se no tienen la jerarquía legal (estricta legalidad) para cambiar la naturaleza jurídica de un hecho punible común en político. Un error de la ley material o una extralimitación funcional no legitima sus efectos por la sola voluntad de la fuente de producción de la norma.

Respecto al sexto motivo, al igual que el segundo y tercero, se tratan de hechos ciertos, pero que no representan cargo de injuridicidad.

El último motivo parte de un concepto jurídico penal errado, en virtud de que el indulto es una gracia otorgada por el Ejecutivo a título personal, debidamente individualizado en la persona y la causa que favorece y por tanto, sus efectos no son generales o erga omnes respecto a los casos de pluralidad de agentes o coautores. La afirmación hecha sólo se justificaría si se hubiere probado la obediencia debida.

En cuanto a las disposiciones legales señaladas como infringidas, el artículo 91 del Código Penal que afirma el casacionista ha sido violado en forma directa por omisión, se refiere a que tanto la amnistía como el indulto por delitos políticos, extinguen la acción penal y la pena.

Nuestra Constitución Política en su artículo 179 ordinal 12 determina que es atribución del Presidente con la participación del Ministro respectivo, decretar indultos.

Ahora bien, el indulto como gracia, concedida tal como se anotó antes, no es general sino individual, pues como se observa en el Decreto Ejecutivo N° 469 de 23 de septiembre de 1994, aludido por el casacionista, en el cual de manera

detallada se dan los nombres de las personas favorecidas con el mismo y en el punto tercero se reafirma que el **"indulto extingue la acción penal y la pena en favor de los indultados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal"** (fs. 3214-3216 vt). Por tanto, no se ha dado la infracción de la norma invocada.

Luego entonces, esta causal tampoco se ha probado.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 18 de octubre de 1995 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMISIBILIDAD DE LA CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL GUSTAVO GUARDIA JAÉN Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (A. N. A. P.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, actuando en su condición de apoderado judicial de **RAFAEL GUARDIA JAÉN**, interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 24 de mayo de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se reformó la sentencia condenatoria N° 90 de 29 de septiembre de 1995 emitida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, en el sentido que declaró penalmente responsable a su representado como cómplice primario del delito de Falsificación de documentos en perjuicio de ANAP y mantiene la condena de tres (3) años de prisión.

En este momento procesal, corresponde a este Tribunal de Casación examinar si el escrito de formalización del recurso presentado, reúne los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 2443 del Código Judicial.

Se observa que la revisión concedida por el Tribunal Superior es correcta. En efecto, la resolución impugnada es susceptible de ser recurrida mediante recurso de casación; y fue presentada dentro del término legal.

En lo que respecta a los requisitos formales que debe reunir el escrito que formaliza el recurso presentado, se tiene lo siguiente:

a) La historia concisa desarrolla los aspectos más importantes del proceso desde sus inicios.

b) La causal de fondo invocada corresponde a una de las cinco de que trata el numeral primero del artículo 2434 y está correctamente formulada.

c) Los cuatro motivos que apoyan la causal invocada, así como las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, guardan relación con la causal aludida.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la magistrada sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Rafael Guardia Jaén en este proceso penal; y DISPONE darle traslado al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días.

Base legal: artículos 2434, 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JAIME BEMUDEZ VANEGAS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jorge Gómez, apoderado judicial de Jaime Bermúdez Vanegas, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra sentencia calendada 6 de mayo de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la sentencia del 23 de enero de 1996 dictada por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de Panamá, Ramo Penal, en la que se impuso a su patrocinado la pena de 8 años de prisión, como reo del delito de tráfico internacional de drogas.

Al decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario, conforme lo preceptúan los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial, la Corte advierte, a propósito del **concepto de violación**, que el casacionista **no precisa** si la infracción directa de la disposición legal vulnerada opera por omisión, que ocurre "cuando se omite la aplicación de la norma al caso o se hace caso omiso de su contenido" o por comisión, que sobreviene "cuando habiéndose aplicado la disposición que regula la situación planteada en el proceso, se desconoce un derecho claramente reconocido en ella, es decir, que se aplica la norma en forma incompleta" (Registro Judicial, noviembre de 1995, pág. 282).

Como quiera que se trata de defecto de forma subsanable, se procede a ordenar la corrección del recurso, tal como lo permite el artículo 2444 del Código Judicial.

Por consiguiente, el suscrito magistrado sustanciador ORDENA mantener el presente negocio en la Secretaría de la Sala por el término de cinco (5) días, a los efectos de que el recurrente realice la corrección advertida, luego de lo cual corresponderá decidir en definitiva sobre la admisibilidad del recurso.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ALONSO DAVID COGLEY MOJICA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Segunda de la Corte Suprema de recurso extraordinario de casación promovido por el licenciado Abdiel González Acosta, contra la sentencia de 24 de abril de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia que condena a Alonso David Cogley Mojica a la pena de 5 años de prisión, como responsable de la comisión de delito de venta o traspaso de drogas, previsto en el inciso segundo del artículo 260 del Código Penal.

Se observa que el recurrente invoca la causal de casación en el fondo contemplada en el numeral 11 del artículo 2443 del Código Judicial, a saber: "Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado en los hechos que la sentencia de por probados". Al verificar el cumplimiento del requisito concerniente a los motivos que le sirven de sustento a la causal, se lee la afirmación del casacionista en el sentido de que de "las declaraciones que obran en el proceso, no surge plena prueba y completa que con claridad se ajuste a establecer la culpabilidad y responsabilidad del procesado con el hecho punible, es decir, con la droga" (f. 237). Como se puede apreciar, los argumentos que expone el letrado no corresponden a la causal que invoca, por cuanto trata de exculpar a su patrocinado de responsabilidad penal, cuando ésta causal lo que persigue es adecuar "el grado de participación criminal que le corresponde al sentenciado, **sin que sea parte de la discusión su responsabilidad penal** (Corte Suprema. Sala Penal. Sentencia de 3 de octubre de 1995).

A propósito del requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas, vemos que el recurrente omite la trascripción de los artículos 906 y 910 del Código Judicial, y del artículo 30 del Código Penal. En complemento de esa omisión, el letrado no indica el concepto de la infracción del artículo 906 ibídem, mientras sostiene que el artículo 30 del Código Penal ha sido infringido en concepto de "aplicación errónea" y por violación "directa" (f.238), lo cual resulta extraño a la técnica empleada para formalizar el recurso, ya que afirma la violación se una misma norma jurídica, de manera simultánea, en conceptos totalmente opuestos.

Ante la comprobación de que el libelo de casación revela que los motivos aducidos no se compadecen con la causal invocada, y que el concepto de la infracción de las disposiciones legales infringidas adolece de defectos insubsanables, todo ello a la luz del numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, resulta inevitable la consecuencia de la no admisión de este recurso extraordinario.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado contra la sentencia de 24 de abril de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia que condena a Alonso David Cogley Mojica a la pena de 5 años de prisión, por la comisión de delito relacionado con drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A JOSÉ MARÍA ZÚÑIGA, POR LA COMISIÓN DE DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ESTHER IVETH GÓMEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso de casación interpuesto por el licenciado Isaac Ladrón de Guevara Adames, en su condición de acusador particular, dentro del proceso penal que se sigue a José María Zúñiga, sindicado por la comisión del delito de violación carnal cometido en perjuicio de Esther Iveth Gómez Rodríguez.

Vencido el término de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario. En tal empeño, se observa que el recurrente solicita que se case la "Resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de mayo de 1996" (f. 166) y además la "Sentencia Absolutoria N° 21 de 6 de noviembre de 1995 y visible a fojas 131 a 135 del expediente ..." (f. 173), argumento que repite a foja 176, lo que no satisface los requerimientos del artículo 2434 del Código Judicial, según el cual el recurso de casación en el fondo se interpone "contra sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial".

Por otra parte, se advierte que el recurrente, al exponer el requisito legal concerniente a la historia concisa del caso, efectúa una extensa relación del proceso penal, pero no explica en forma sucinta y clara el vicio de injuridicidad que provocó la interposición del recurso. Cabe destacar que la Sala tiene establecido que, para cumplir con el requisito de la historia concisa del caso se "exige un esfuerzo de síntesis que permita deducir los vicios de la injuridicidad en que ha incurrido el tribunal de segunda instancia al dictar la sentencia" (Sentencia de 10 de febrero de 1995).

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el recurrente sostiene que el artículo 216 del Código Penal ha sido infringido "por omisión" (f. 175), por considerar que en el expediente "está acreditado tanto el cuerpo del delito como la autoría material recaída en la persona de JOSÉ MARÍA ZÚÑIGA RIVAS ..." (f. 175). Ahora bien, si se considera que el delito de violación carnal fue cometido el 9 de septiembre de 1994 (Cf. declaración de Esther Iveth Gómez Rodríguez, pág. 7) y que el recurrente transcribe o cita el texto del artículo 216 del Código Penal, luego de la reforma introducida por la ley N° 27 de 16 de julio de 1995, "Por la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores" (Cf. Gaceta Oficial N° 22, 811 de 23 de junio de 1995), resulta que el letrado sustenta el recurso de casación en el fondo en una norma sustantiva que, al momento de ocurrir el hecho punible, no era la aplicable al caso concreto, por no encontrarse vigente.

Luego del análisis de la presentación de la causal invocada, se comprueba que el recurso no cumple con las formalidades previstas en los artículos 2434 del Código Judicial y en el numeral 3 del artículo 2443 de esa excerta legal.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Isaac Ladrón De Guevara Adames, dentro del proceso penal que se le sigue a José María Zúñiga, sindicado por la comisión de delito de violación carnal cometido en perjuicio de Esther Iveth Gómez Rodríguez.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO NORIEGA VÁLDEZ Y JACOBO HERNÁNDEZ NORIEGA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JESÚS JAÉN CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. RENÉ CARVAJAL, en su condición de Defensor de Oficio de FRANCISCO NORIEGA VÁLDEZ, formalizó oportunamente Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia de Segunda instancia dictada el 17 de junio de 1996 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual, previa revocatoria de la sentencia absolutoria de primera instancia expedida el 19 de marzo de 1996 por el Juzgado Segundo Del Circuito de Herrera, se condena a su representado a cumplir la pena principal de 37 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal por el delito de lesiones personales, cometido en perjuicio de JESÚS JAÉN RUIZ.

Corresponde a esta Corporación de justicia examinar el recurso de casación a efecto de decidir sobre su admisibilidad. En ese sentido se observa que el Recurso de Casación es el fondo, que se interpuso oportunamente contra sentencia de Segunda instancia dictada por Tribunal Superior de Justicia y que el delito tiene establecido en el Código Penal pena superior a 2 años de prisión, por lo que cumple a cabalidad con los requisitos de los numerales 1 y 2 del Artículo 2444 del Código Judicial.

En lo que respecta a los requisito que debe contener el recurso para poder ser admitido, se aprecia que la historia concisa del caso ha sido desarrollada correctamente y que la causal invocada es de aquellas que establece la ley.

Sin embargo, los motivos que fundamentan la causal invocada contienen manifestaciones subjetivas del recurrente, lo cual contradice la técnica casacionista, conforme a lo cual es preciso que los motivos contengan cargos de injuricidad que deben ser expuestos de manera objetiva, clara y precisa. Es por ello que los motivos deben ser corregidos. Por lo demás, el recurso señala las disposiciones legales infringidas y el concepto en que no le han sido, de manera coherente.

El artículo 2445 del Código Judicial, permite que el Tribunal de Casación ordene la corrección del recurso, por el plazo de cinco (5) días a efecto de que el recurrente corrija los errores que le han sido puntualizados por la Sala.

Con fundamento en lo anterior, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la corrección del Recurso de Casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de segunda instancia dictada el 17 de junio de 1996 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se condenó a FRANCISCO NORIEGA a cumplir la pena de 37 meses de prisión, por lo cual el expediente permanecerá en Secretaría por el término de cinco (5) días con el propósito de que el recurrente pueda hacer la correcciones indicadas.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROBERTO OLMEDO LUNA PONCE, POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez en su calidad de defensor de **ROBERTO**

OLMEDO LUNA PONCE, en el proceso penal que se le sigue por el delito de posesión ilícita de drogas, anunció y formalizó recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, dictada el 12 de abril de 1996 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual revocó la sentencia absolutoria expedida por el Juzgado Décimo Tercero de Circuito y lo condenó a 5 años de prisión y a 2 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Cumplido el trámite de reparto y vencido el término de lista al cual se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde examinar el medio de impugnación extraordinario presentado, a fin de determinar su admisibilidad.

Consta en autos que el recurso fue anunciado oportunamente, tanto por el procesado como por su defensor al momento de ser notificados del reingreso del proceso al Juzgado Décimo Tercero de Circuito, Ramo Penal. Igualmente se aprecia en el expediente, que de conformidad con el artículo 2440 del Código de Procedimiento Penal, el casacionista presentó dentro del término legal la sustentación del recurso anunciado. Se trata de un hecho punible cuya amenaza de pena es superior a dos años de prisión y el recurso fue formalizado por persona hábil.

Con relación a los requisitos que debe llenar el escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, cabe hacer las siguientes consideraciones:

La historia concisa del caso, plantea los puntos más relevantes del proceso y se refiere a la valoración de las declaraciones aportadas y a la errada calificación de la tipicidad delictiva.

En lo que se refiere a las causales invocadas, en este caso se plantean dos causales de fondo, la primera de ellas de tipo probatorio, contenida en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial denominada "error de derecho en la apreciación de la prueba". Sobre esta primera causal se constata que en los motivos al referirse a la prueba testimonial, se pretermite el folio del expediente donde se encuentran dichas declaraciones y en cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, se omite también la referencia a la norma sustancial penal que, en concepto del recurrente, fue infringida con motivo de la errada apreciación probatoria en que incurrió el Tribunal de segunda instancia.

Las omisiones y defectos en que se han incurrido en la primera causal de fondo, no permiten su admisibilidad.

La segunda causal alegada, está prevista en el numeral tercero del artículo 2434 del Código Judicial, que expresa "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o la extensión de la pena aplicable".

Los motivos en que se apoya la causal antes mencionada, si bien hacen alusión a los medios probatorios, materia que no es objeto de impugnación en este tipo de causal, mencionan los vicios de injuridicidad que se atacan en la sentencia de segunda instancia sobre la calificación del delito que influyó en la extensión de la pena aplicable.

En lo que se refiere a la disposición legal infringida y al concepto de la violación, se menciona el artículo 260 del Código Penal, aclarando que la violación por indebida aplicación fue del segundo párrafo de la norma citada, porque se debió aplicar la parte que se refiere a la posesión simple.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el presente recurso de casación solamente en cuanto a la segunda causal de fondo invocada y DISPONE correr traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación por el término de cinco días para que emita concepto al tenor del artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (LESIONES PERSONALES), EN PERJUICIO DE FLORENCIO ANTONIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista, en virtud del cual se pone en conocimiento de las partes interesadas, el ingreso al Tribunal de Casación del recurso extraordinario formalizado por el licenciado Balbino Valdés Rivera en representación de **HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ**, dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de lesiones personales en perjuicio de Florencio Antonio Vásquez, corresponde resolver la admisibilidad de la impugnación presentada.

Respecto a las exigencias formales externas referidas a la oportunidad y a la legitimación objetiva y subjetiva, le asiste razón al Segundo Tribunal Superior de Justicia en su auto de 28 de agosto de 1996, cuando afirma que el recurso fue anunciado y formalizado según lo previsto en los artículos 2438 y 2439 del Código Judicial, contra una resolución susceptible de ser impugnada por esta vía y por persona hábil para ello.

Respecto a los requisitos internos, propios de este recurso, el Tribunal aprecia lo siguiente:

1. Historia concisa del caso: En el escrito que se lee de fojas 324 a 334 del expediente, la parte correspondiente a la historia sucinta del caso está incompleta en virtud de que la foja 326 es un duplicado de la 325, a pesar de que al margen superior está el número tres (3).

2. Causal o causales invocadas: Por el mismo error anotado, se desconoce cuál es la primera causal alegada, ya que a fojas 327 se lee un motivo segundo y luego el tercero al igual que las disposiciones legales infringidas, pero se desconoce la causal que presentó el recurrente.

En cuanto a la segunda causal que sí aparece completa a fojas 332, el casacionista no reproduce la denominación exacta que le da la ley, pues se refiere a la "infracción de normas sustantivas de derecho" cuando la ley nos habla de infracción de la ley sustancial penal.

3. Motivos: Dado el error de presentación del escrito de formalización del recurso, no se puede examinar la coherencia de estos con la causal alegada y en el caso de la segunda causal, su variación en la denominación legal no permite entrar a un análisis de su vinculación armónica.

4. Disposiciones legales infringidas y concepto en que lo han sido: En la segunda causal se anota como violados dos artículos, uno del Código Judicial y otro del Código Penal. Si bien es cierto que el cuerpo de normas que integran el Código de Procedimiento no necesariamente participan de su carácter adjetivo, pues muchas son proposiciones jurídicas enunciativas de principios, derechos o reglas generales, el artículo 1989 citado, describe un procedimiento, una vía procesal idónea para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE mantener el negocio en Secretaría por el término de cinco días, a fin de que se reponga la página que falta y se hagan las enmiendas del escrito conforme a las objeciones anotadas.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ ARO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el termino de lista, al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, en virtud del cual se pone en conocimiento de las partes interesadas el ingreso del negocio penal que contiene el recurso de casación promovido por la licenciada Rosario Granda de Brandao Defensora de Oficio de **JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ ARO**, corresponde en esta fase procesal resolver la admisibilidad del recurso mencionado.

Conforme al auto calendado el 5 de septiembre de 1996 (fs. 232-233), la recurrente le dio debido cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2441 del Código de Procedimiento, porque la resolución censurada es susceptible de este medio de impugnación, dada la penalidad que la ley asigna al hecho delictivo investigado, fue interpuesto oportunamente dentro de los términos de Ley y fue formalizado por persona hábil.

Respecto a los requisitos formales que debe contener el texto mismo del escrito contentivo del recurso de casación, la Sala hace las siguientes consideraciones: Respecto a la historia concisa del caso, la recurrente hace una relación de los aspectos más salientes del proceso hasta la dictación de la sentencia de segunda instancia, apegándose a la realidad procesal.

Causales invocadas: En este recurso se invocan dos causales de fondo. La primera se enuncia como "violación directa de la ley sustancial penal por indebida aplicación de la ley penal al caso juzgado". Basta leer la denominación dada para percatarnos que la casacionista incurre en el error de invocar dos causales de fondo, en virtud de que el artículo 2434 en su numeral 1° enuncia cinco causales a saber: a) Violación directa de la ley sustancial penal; b) Infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación; c) Interpretación errada de la ley sustancial penal; d) Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que implica infracción de la ley sustancial; y e) Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley penal y ha influido en lo dispositivo de la sentencia.

Simultáneamente no es posible, dentro de la técnica propia de esta materia, alegar violación directa y aplicación indebida, por ser dos causales de fondo distintas. Por otra parte, con relación a esta causal se invocan normas adjetivas, que no guardan relación con la primera causal.

Con relación a la segunda causal de fondo. se observa que la recurrente transcribe fracciones de testimonios en los mismos, lo cual no es coherente con este recurso, pues basta la citación del folio en que se encuentra la prueba no valorada o tomada en cuenta por el juzgador. Por otra parte en relación con las disposiciones legales infringidas, se aprecia que el concepto de la infracción adolece de sustento, dada su presentación descarnada, sin explicar por qué se produjo la violación directa por omisión y en el caso del artículo 255 del Código Penal se afirma que fue violado de manera directa por indebida aplicación, lo que no es correcto, especialmente porque cuando se esgrime este concepto de la infracción de una norma es indispensable anotar cuál es la norma que debió aplicarse en reemplazo o en vez de la aplicada indebidamente.

Como se trata de un recurso de casación que tiene como finalidad la revisión de la sentencia de segunda instancia que condena a una persona asistida por la Defensoría de Oficio, la Sala estima que si bien no es posible la enmienda o corrección de la primera causal, si procede acceder a que se reformule la segunda causal, tomando en cuenta las objeciones que aparecen en los párrafos precedentes.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, Dispone que se mantenga en secretaría este negocio por el término de cinco días, a fin de que la parte interesada haga las correcciones anotadas.

Base legal, artículos 2434, 2441, 2443, 2444 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A CÉSAR AUGUSTO ROMERO A., POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Guillermo Enrique Serrano Flores, defensor técnico de César Augusto Romero Avendaño, formalizó oportunamente recurso de casación en el fondo contra sentencia de 20 de mayo de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero del Circuito de Chiriquí, que impone a Romero Avendaño la pena de 46 meses de prisión como responsable del delito de hurto pecuario cometido en perjuicio de Fernando Anguizola y Gabriel Alexis Aparicio.

En este momento procesal le corresponde a la Sala determinar si el recurso propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad que establece el Código Judicial.

A tales efectos se advierte de inmediato que el libelo no satisface la exigencia legal referente a la historia concisa del caso, toda vez que el casacionista presenta una versión de los hechos que dieron existencia al juicio, en lugar de exponer en forma breve y clara la situación jurídica que ocasionó la resolución que se impugna con el recurso de casación, lo cual obstaculiza a esta Superioridad conocer en qué estriba el vicio de injuridicidad que se alega.

De otra parte, la Corte resalta que el defensor técnico recurre en casación en el fondo con apoyo en una causal inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. Así vemos que el casacionista aduce la causal de la siguiente manera:

> **"ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA"**, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Esta causal la consagra el párrafo segundo del numeral Primero del Artículo 2434 del Código Judicial" (f. 764).

Ahora bien, se advierte que el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, específicamente en su párrafo segundo, establece que habrá lugar al recurso de casación en el fondo en los siguientes casos: "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en la apreciación de ella". De allí que la causal invocada por el recurrente (error de hecho en la apreciación de la prueba) no es congruente con las señaladas en el artículo 2434 del Código Judicial, con el resultado de que el recurso incumple con el requerimiento previsto en el numeral 4 del artículo 2443 del Código Judicial, que

exige que la causal expresada debe ser **"de las señaladas por la ley"**.

Otro defecto del cual adolece el recurso consiste en que, en los motivos que apoyan la causal aducida, el recurrente se refiere a "la sentencia número 145 de 31 de octubre de 1995 que fuera dictada por la Juez" (f. 765), relato que infringe el mandato que trae el artículo 2434 del Código Judicial, según el cual el recurso de casación en el fondo se interpone "contra las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial".

Como quiera que el libelo de formalización del recurso de casación adolece de defectos insubsanables, la consecuencia inevitable es la declaratoria de su inadmisibilidad.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Guillermo Enrique Serrano Flores, apoderado judicial de César Augusto Romero Avendaño, contra la sentencia calendada 20 de mayo de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ANTONIO SORIANO GONZÁLEZ, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Raúl A. Cárdenas, apoderado judicial de Antonio Soriano González, ha interpuesto recurso extraordinario de casación contra la sentencia de 28 de junio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirma la pena de 30 meses de prisión impuesta a Soriano González, como responsable del delito de hurto pecuario cometido en perjuicio de Abraham Barrios Escudero.

El examen del libelo de casación, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, permite advertir que el recurrente invoca tres causales en el fondo, a saber:

Primera causal: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba (núm 1, art. 2434 C. J).

Segunda causal: error de derecho al calificar el delito, si la calificaciónha influido en el tipo o en la extensión de la pena aplicable (núm. 3 , art. 2434 C. J).

Tercera causal: Cuando se haya procedido por un delito que requiera acusación particular, denuncia o querella de persona determinada (núm. 7 art. 2434 C. J.).

En cuanto a los motivos relativos a la primera causal, el letrado la fundamenta afirmando que la sentencia atacada "no tomó en cuenta ... la prueba documental que aparece a Fs. 17 y 18, consistente en un contrato privado de

arrendamiento", que le otorgaba a su defendido "un título traslaticio de dominio", y que comprueba que su patrocinado "pudo haber cometido delito de apropiación indebida, y no el de Hurto Pecuario ..." (f. 830). Ahora bien, al examinar los argumentos con los cuales se sustenta el concepto de la infracción del artículo 769 del Código Judicial, y de los artículos 184 y 194 del Código Penal, vemos que el casacionista repite el razonamiento que se plasma en los motivos aducidos (fs. 831-833). Así las cosas, salta a la vista que los motivos y las disposiciones legales no se compadecen con la primera causal que se invoca, toda vez que el letrado, concomitantemente, pretende comprobar que la sentencia atacada incurre en la causal error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y en otra causal, cual es la de error de derecho en cuanto a la calificación del delito. Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte, en forma reiterada ha manifestado que "las causales deben ser expuestas por separado y a continuación de cada una para indicar los motivos, disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción en lo que se refiere a cada causal" (Auto de 5 de febrero de 1993).

En cuanto a los motivos que sirven de apoyo a la segunda causal, predomina, nuevamente, el argumento de que la sentencia atacada "se ha equivocado al tipificar la conducta delictiva desplegada por nuestro defendido como hurto pecuario, en lugar de apropiación indebida" (f. 834), sin que aparezca de qué modo la sentencia censurada pudo haber incurrido en la causal error en la calificación penal, lo cual, en consecuencia, implica que los motivos carezcan de cargos concretos de injuridicidad que pongan de relieve los errores in judicando en que pudiera haber incurrido el Tribunal Superior que profirió la sentencia.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, sostiene el recurrente que la sentencia impugnada ha violado el artículo 184 del Código Penal, "de manera directa **por comisión**", por "haberse aplicado a un caso de Apropiación Indebida" (f. 834). La jurisprudencia sentada por este tribunal ha establecido que se incurre en el concepto de violación directa por comisión cuando el tribunal aplica la norma jurídica, pero desconoce "**un derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara**" (Sentencia de 30 de septiembre de 1993). Como se puede apreciar, el casacionista no explica cuál es el derecho que, a su entender, la sentencia atacada desconoce a su patrocinado, sino que censura la indebida aplicación del artículo 184 del Código Penal. Esa comprobación revela que el letrado utiliza de manera inadecuada el concepto de violación directa por comisión, por estimar que los argumentos que sustentan la infracción de la norma en cita se adecuan al concepto de **indebida aplicación**, el cual surge cuando la sentencia impugnada aplica "una norma ... a un hecho probado **pero no regulado por ella**, ..." (sentencia de 30 de septiembre de 1993).

En lo concerniente a los motivos de la tercera causal, en el libelo se afirma que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial no tomó en consideración que el presente proceso se inició por denuncia formulada por la esposa Abraham Barrios, cuando debió iniciarse mediante querella del ofendido, ya que dentro del presente proceso penal se ha incurrido en la "comisión de un delito de Apropiación Indebida" (f. 835). En idénticos términos, el casacionista sustenta la infracción de los artículos 1979 y 2035 del Código Judicial, y del artículo 194 del Código Penal, por considerar que el delito de apropiación indebida cometido por su defendido "requiere querella que debió presentarse en el término de Ley ... contado a partir de la comisión del delito" (f. 837). La Sala recuerda que el condenado fue sancionado por la comisión de delito de hurto pecuario que prevé el artículo 184 del Código Penal, el cual es perseguible de oficio. Por consiguiente, si Soriano González fue sentenciado por la comisión de un delito que no requiere, como requisito de procedibilidad para dar impulso inicial de la acción penal, de querella del ofendido, entonces podemos concluir que los argumentos expuestos en los motivos y en las disposiciones legales infringidas no se compaginan con la causal que invoca.

Ante la comprobación de que los motivos y las disposiciones legales no corresponden a las causales que apoyan, aunado a que la Corte tiene expresado que "de nada sirve cumplir en el libelo con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 2443 del Código Judicial, cuando el recurso carece en sí mismo de

sustento lógico-jurídico" (sentencia de 5 de mayo de 1994), es del caso no admitir el recurso de casación contra la sentencia atacada, por no cumplir con las formalidades estipuladas en el literal c, numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado contra la sentencia de 28 de junio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirma la pena de 30 meses de prisión impuesta a Antonio Soriano González, como responsable de delito de hurto pecuario cometido en perjuicio de Abraham Barrios Escudero.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A ALCIDES CHANIS CEDEÑO Y RAÚL ANTONIO RIVAS, POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE DISTRIBUIDORA LA FORTUNA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de 8 días establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS, en su condición de apoderado del imputado **ALCIDES CHANIS CEDEÑO**, contra la sentencia de 22 de julio de 1994 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El recurso ha sido propuesto por persona hábil, en tiempo oportuno y la sentencia contra la que se promueve es de aquellas susceptibles de impugnación, ya que se trata de delito de Robo, cuya pena de prisión es superior a dos años.

No obstante lo anterior, observa la Corte algunos defectos formales que inciden desfavorablemente en la admisión del recurso.

La causal invocada esta contemplada en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial la que transcribe completa, sin especificar a cual de las cinco posibilidades se refiere.

Hay que aclarar que según jurisprudencia de la Corte, el numeral 1 del citado artículo 2434 consagra en realidad cinco causales de casación independientes y excluyentes entre sí, a saber: a) Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial, en concepto de violación directa; b) por interpretación errónea de la ley; c) por indebida aplicación; d) por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba; y e) por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Por consiguiente, en una misma causal no se puede alegar a la vez, por ejemplo, interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, o, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, puesto que ambos términos se fundamentan en conceptos diametralmente opuestos que, por ende, los hacen ser independientes y excluyentes como se deja expresado.

Tal como puede apreciarse, al final del escrito el casacionista invoca 2 causales como si fuera una. Conforme a la jurisprudencia reiterada de este tribunal, tales causales son excluyentes. El recurrente reitera que el error de

hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en cuanto a al apreciación de la prueba han implicado la infracción de la ley sustancial al violentar el contenido de los artículos 2135 y 905 del Código Judicial, lo que resulta a todas luces improcedente. Todo recurso de casación que aduzca el error de hecho y el de derecho con respecto a las mismas pruebas, debe ser inadmisible, ya que tales cargos planteados de esta manera son excluyentes.

Por otro lado, la forma en que se exponen los motivos que fundamentan la causal están revestidos de consideraciones subjetivas, (véase, por ejemplo, el motivo tercero, párrafo segundo), propios en todo caso de un alegato, pero sin ningún cargo que señale el porqué considera injurídica la sentencia del a quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA en representación del señor ALCIDES CHANIS CEDEÑO.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA

INCIDENTE DE CONTROVERSIA PROMOVIDO POR LA LCDA. KARIM CÉSPEDES EN CONTRA DEL PERSONERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LOS SANTOS, DENTRO DE LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR EL HOMICIDIO Y ROBO PERPETUADO EN PERJUICIO DE JOSÉ FÉLIX DE LEÓN CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la apelación presentada por el licenciado **Carlos Enrique Sumosa Marengo**, en representación de **PETRA DORALYS DOMÍNGUEZ PÉREZ y MARÍA ELISA PÉREZ PÉREZ**, contra la resolución de 9 de agosto de 1996 (fs. 20 a 22), dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Las Tablas, que admite el incidente de controversia propuesto por la licenciada Karim Céspedes contra el Personero Municipal del Distrito de Los Santos, dentro de las sumarias en averiguación por el homicidio y robo cometido en perjuicio de JOSÉ FÉLIX DE LEÓN.

El licenciado **Carlos Enrique Sumosa Marengo** en su escrito de apelación (fs. 16 a 19), alega que el incidente de controversia presentado por la licenciada Karim Céspedes, en representación de GLENYS DAMARIS DE LEÓN QUINTERO, como parte acusadora dentro de las sumarias en averiguación por el homicidio y robo perpetuado en perjuicio de JOSÉ FÉLIX DE LEÓN CÁRDENAS, es improcedente, toda vez que el incidente fue dirigido contra un funcionario -Personero del Distrito de Los Santos-, y no contra una actuación o decisión de dicho agente del Ministerio Público ni contra una diligencia o providencia específica que éste haya ordenado o practicado por escrito, puesto que el incidente bajo estudio pretende objetar una actuación verbal o de hecho del funcionario, quien no quiso recibir dos escritos que la licenciada Karim Céspedes intentó incorporar al expediente.

Según el recurrente, las situaciones advertidas por la Licenciada Karim Céspedes deben encaminarse por otras vías legales distintas y no a través de un incidente de controversia (Ver Art. 211 del C.J.), por tratarse de una actuación verbal o de hecho del Ministerio Público, que en este caso actuaba como un funcionario comisionado y no como funcionario de instrucción. En este sentido, el recurrente sostiene que el Personero del Distrito de Los Santos, Licenciado

Tomás Muñoz, era un funcionario comisionado, puesto que la competencia de la causa principal era de la Fiscalía Superior del Cuarto Distrito Judicial, en virtud de la ampliación ordenada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dictada el 16 de febrero de 1996 y, por lo tanto, el Personero del Distrito de Los Santos, actuó estrictamente dentro de los límites de su comisión, según lo establecido en los artículos 208 y 211 del Código Judicial.

Por su parte, la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, Licenciada NEDELKA DÍAZ DE CASTILLO, en contestación de traslado de 12 de septiembre de 1996 (f. 27), manifiesta que no tiene objeciones que presentar, puesto que su notificación visible de fojas 16 a 19 del cuadernillo, a su juicio demuestra tácitamente que estaba de acuerdo con la Resolución que admite el incidente de controversia y al efecto señala:

> "Como el fin único del Ministerio Público, al cual represento, es el de cumplir con el debido proceso y determinar quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho violatorio de la ley penal, consideramos que se le deben otorgar amplias oportunidades a las partes y profundizar las mismas, máxime que se trata de delitos perseguibles de oficio, esto sí, respetando los principios rectores previstos en la Constitución y demás cuerpos legales." (F. 27).

En la resolución apelada, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, indicó que, mediante auto de 30 de abril de 1996, había admitido la acusación particular promovida por la licenciada Karim Céspedes, en nombre y representación de GLENYS DAMARYS DE LEÓN DE QUINTERO; y, que la apelación presentada por el licenciado **Carlos E. Sumosa** contra dicha resolución, según lo establecido en el artículo 2430 del Código Judicial, fue concedida en el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspende el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del proceso, según el artículo 1123, ordinal 2°, del Código Judicial.

En su escrito visible de fojas 1-2, la incidentista narró que al presentarse ante la Personería Municipal de Los Santos para intervenir en la diligencia de declaración jurada de PETRA DORALYS DOMÍNGUEZ PÉREZ, en su condición de acusadora particular, el Personero, Licenciado Tomás Muñoz, por considerar que no se encontraba acreditada su condición de acusadora particular en el proceso, no le permitió participar en la diligencia de declaración jurada y suspendió dicha diligencia. En tal razón, la licenciada Karim Céspedes presentó dos escritos: Copia autenticada de la Resolución de 30 de abril de 1996 (fs. 4-5), proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que admite la acusación particular por ella presentada en nombre y representación de GLENYS DAMARYS DE LEÓN DE QUINTERO, dentro de las sumarias en comento, y otro escrito solicitando copias del expediente a partir de foja 818 en adelante. Dichos escritos el Personero los aceptó por insistencia y fueron incorporados al expediente, pero luego los retiró del expediente manifestando que no los iba a recibir.

La licenciada Karim Céspedes fundamentó el incidente de controversia en que:

> "... todos los abogados litigantes sabemos que no porque presentamos un escrito debe concedercenos (sic) lo pedido en el (sic), pero creemos que es de rigor recibirlos y si no hay merito (sic) para incorporarlos al sumario por las razones que sean hay que rechazarlos por los medios de ley, no por los medios de hecho, ya que los Funcionarios Publicos (sic) estan (sic) sobre todo para cumplir y hacer cumplir las leyes conforme lo ordena la Constitución (sic) Politica (sic) de la República (sic) de Panamá (sic)." (F. 2).

Al analizar el escrito del incidente de controversia presentado por la licenciada Karim Céspedes (fs. 1-2), observa la Sala que su pretensión se encaminó contra la no aceptación de los escritos por ella presentados, más que a la no aceptación por parte del Personero Municipal del Distrito de Los Santos de su participación en la diligencia de declaración jurada, toda vez que ésta última fue suspendida.

En tal sentido, en la contestación de traslado de 10 de julio de 1996, la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial manifestó que le asistía razón a la licenciada Karim Céspedes en el incidente de controversia mencionado, y señaló que:

> "el día en que se trataron de practicar las diligencias en la Personería de Los Santos, cumpliendo dicha dependencia del Ministerio Público con la comisión encomendada por esta Fiscalía Superior, de acuerdo a lo que establece el artículo 2068 del Código de procedimiento, fuimos consultados telefónicamente y el Personero me expresó su preocupación por cumplir fielmente con la Ley y que el Licdo. Sumosa se oponía a que la Licda. Céspedes participara ya que había interpuesto un Recurso de Apelación contra la Acusación Particular, recomendándole que reuniera (sic) las partes y trataran de ponerse de acuerdo; y que de no ser posible suspendiera las diligencias y remitiera el expediente a mi Despacho para luego tomar las decisiones correspondientes conforme a la Ley." (Fs. 9-10).

Advierte la Sala que las partes motiva y resolutiva de la Resolución apelada se refieren a la negación por parte del Personero Municipal del Distrito de Los Santos, como funcionario de instrucción comisionado, de permitir la participación de la acusadora particular, licenciada Karim Céspedes, en la diligencia de declaración jurada que debía practicarse por orden del funcionario de instrucción, en este caso la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial. Sin embargo, somos de la opinión de que la decisión en este caso, debe basarse en el hecho de la no admisión de los escritos presentados por la incidentista ante el agente del Ministerio Público mencionado, toda vez que la diligencia de declaración jurada fue suspendida sin causar así agravio alguno a los sujetos procesales, incluyendo entre éstos a la acusadora particular y, en cuanto a la no aceptación de los escritos por parte del Personero Municipal del Distrito de Los Santos, somos de la opinión de que debió aceptar ambos escritos; en primer lugar, debió recibir el escrito que acreditaba la condición de acusadora particular de la licenciada Céspedes, con base en lo establecido en el artículo 210 del Código Judicial, ya que el funcionario comisionado "... tendrá las mismas facultades que el comitente en relación con la diligencia que se le delegue", siendo que si bien en este caso, a juicio de la Sala, el Personero del Distrito de Los Santos fungía como funcionario de instrucción comisionado para la práctica de una diligencia específica, el escrito aportado por la acusadora particular guardaba relación directa con la diligencia de declaración jurada. En este aspecto esta Sala comparte el criterio del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la resolución apelada, con respecto a que la apelación de la resolución que admitía la acusación particular seguía surtiendo todos sus efectos porque la apelación se concedió en el efecto devolutivo y la parte acusadora, por lo tanto, tenía derecho a la facultad concedida por el artículo 2139 del Código Judicial de interrogar o repreguntar al testigo. En segundo lugar, en cuanto al escrito de solicitud de copias consideramos que si bien el Personero Municipal del Distrito de Los Santos debió recibirlo por insistencia, la licenciada Céspedes debió presentarlo ante el funcionario de instrucción correspondiente, en este caso la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, puesto que las facultades del funcionario comisionado se limitan al cumplimiento literal de la comisión, según lo establecido en el artículo 208 del Código Judicial.

Ahora bien, la Sala considera que le asiste la razón al recurrente, Licenciado **Carlos E. Sumosa M.**, en el sentido de que sólo pueden objetarse mediante incidente de controversia las actuaciones de los agentes del Ministerio Público, entendiéndose como tales, las que guardan relación con la tramitación del sumario, según se desprende del artículo 2009 del Código Judicial; es decir, que únicamente podrán ser objetados por las partes a través de incidentes de controversia, los actos que se practiquen en la investigación sumaria y que, según lo normado por el artículo 2065 del Código Judicial, se extiendan mediante diligencias firmadas por el funcionario de instrucción, su secretario y las personas que hayan intervenido en las mismas.

En el caso bajo estudio, a juicio de la Sala se dio el fenómeno de la sustracción de materia en relación con la diligencia de declaración jurada, al

ser ésta suspendida, y el hecho de que el agente del Ministerio Público no haya recibido los escritos mencionados anteriormente no constituye una actuación que pueda ser objeto de incidente de controversia, como hemos dicho y, en tal caso, la parte tenía la opción de presentar tales escritos ante el funcionario de instrucción competente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 9 de agosto de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Las Tablas, que admite el incidente de controversia propuesto por la licenciada Karim Céspedes contra el Personero Municipal del Distrito de Los Santos dentro de las sumarias en averiguación por el homicidio y robo cometido en perjuicio de JOSÉ FÉLIX DE LEÓN.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.)FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LICENCIADO JOAQUÍN ORTEGA Y LICENCIADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Magistrada **AURA E. GUERRA DE VILLALAZ** solicita que se le declare impedida para el conocimiento de la denuncia criminal interpuesta por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, contra los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Licenciados JOAQUÍN ORTEGA V. y SANDRA HUERTAS DE ICAZA, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública, y al efecto manifiesta que en razón de que "la licenciada Omayra García de Berbey ha promovido acusación particular en mi contra ante la Asamblea Legislativa, solicito al resto de los Magistrados que integran la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, me separen del conocimiento del presente caso" (f. 58) e invoca como fundamento de su petición el ordinal ll del Artículo 749 del Código Judicial.

Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 2283 del Libro Tercero de este Código, que regula el procedimiento Penal en esta materia, los impedimentos del funcionario que interviene en ellos "se tomarán en cuenta únicamente en relación con el imputado" y como esa situación no se da en el presente caso, en el que la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, promueve denuncia penal contra los Magistrados JOAQUÍN ORTEGA y SANDRA HUERTAS DE ICAZA, no existe fundamento legal para acceder a la declaratoria de impedimento solicitada.

Por lo expuesto, los suscritos Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ y DISPONEN que continúe conociendo del presente negocio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGDO. HUMBERTO COLLADO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A IRENE RODRÍGUEZ PERALTA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE RODOLFO VEGA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Magistrado Humberto A. Collado T. solicita a la Sala Penal que lo separe del conocimiento del proceso penal que se sigue a Irene Rodríguez Peralta, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Rodolfo Vega Cruz, por considerar que en el expediente, a foja 114, se comprueba que es defensor técnico del procesado en la presente causa (f.383).

En vista que la manifestación de impedimento tiene sustento jurídico en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por las razones expuestas, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado Humberto A. Collado, DISPONE separarlo del conocimiento, y CONVOCA para que lo reemplace al Magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL CASTILLO SANJUR Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. (ADMISIBILIDAD). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado JERÓNIMO EMILIO MEJÍA, en representación de RAÚL CASTILLO SANJUR, presentó ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia recurso de hecho contra la resolución de 29 de Julio de 1996, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó el recurso de casación en el fondo anunciado contra el auto de 16 de mayo del mismo año, que niega incidente de controversia referido a su indagatoria y al no reconocimiento de la prescripción de la acción, alegada por la parte recurrente.

LOS HECHOS

En el proceso penal seguido a SIMÓN BADI BEDA, IDA DOMÍNGUEZ CASTILLERO, RAÚL CASTILLO SANJUR Y OTROS, por el supuesto delito de falsedad documental, el señor Castillo Sanjur presentó incidente de controversia contra el proveído que disponía su indagatoria y alegó la prescripción de la acción penal, la cual fue

reconocida mediante auto N° 11 de 16 de enero de 1996, por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito, no obstante en segunda instancia el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 16 de mayo de 1996 revocó la decisión mencionada y declaró que tal causa de extinción de la acción penal no se había producido y negó el incidente de controversia. Contra la decisión de segunda instancia, el señor Raúl Castillo Sanjur anunció recurso de casación, el cual fue formalizado en el término de ley, pero el Segundo Tribunal Superior al interpretar el sentido y alcance del artículo 2435 del Código Judicial, consideró que las causales de casación en el fondo a que se refiere esa norma, limitan este medio de impugnación extraordinaria a las resoluciones judiciales que admiten las cuestiones referentes a prescripción, no así las que las inadmitan.

Como fundamento del recurso de hecho presentado, el recurrente al objetar la decisión del Tribunal, sostiene:

> "Según se aprecia, el Segundo Tribunal considera que el recurso de casación no es viable porque dicho recurso sólo procede contra los autos que le ponen término al proceso. Como quiera que no compartimos tal parecer, pasamos a expresar las razones que fundamentan nuestra posición.
>
> En primer lugar, la resolución recurrida deja de aplicar un principio de trascendental importancia para el reo, cual es, el principio de favor rei.
>
> De acuerdo a **CLARIA OLMEDO:**
>
> "El favor rei -a nuestro entender- debe ante todo constituir una regla fundamental para la interpretación. Ello supone que cuando no se pueda tener una interpretación unívoca sino sólo una situación de contraste entre dos interpretaciones de una norma legal (antinomia interpretativa), habrá que elegir la interpretación más favorable a las posiciones del imputado" (La subraya es nuestra)".
>
> En el caso que nos ocupa, el tribunal de segundo grado manifestó que la redacción del artículo 2435 del Código Judicial no era clara y, sin embargo, procedió a negar la concesión del recurso de casación, cuando lo que procedía era conceder el citado recurso, pues el proponente del mismo fue el imputado a quien se debió favorecer con fundamento en el principio del favor rei.
>
> Por otro lado, consideramos que no es cierto que la resolución de 16 de mayo de 1996 no admita el recurso de casación. Si se observa detenidamente la redacción del artículo 2435 del Código Judicial se podrá advertir que el recurso de casación procede contra los siguientes autos: 1. Los que le pongan término al proceso, mediante sobreseimiento definitivo; y 2. Los que deciden las excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena y los que deciden lo relativo a la aplicación de la ley de amnistía o al decreto de indulto.
>
> La anterior conclusión se deduce del primer inciso del artículo 2435 del Código Judicial".

Durante el período de alegatos, el acusador particular en el proceso penal antes mencionado, presentó escrito que en lo medular dice:

> **"II. HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA PRESENTE OPOSICIÓN.**
>
> A. Antecedentes.
>
> PRIMERO: La Fiscalía Sexta del Circuito de Panamá ordenó tomar declaración indagatoria a RAÚL CASTILLO SANJUR, en el curso de las sumarias por los delitos de FALSEDAD, SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTO PUBLICO, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR y OTROS que se le siguen

junto con MOISÉS DAVID MIZRACHI, ORLANDO SÁNCHEZ BERNAL, SIMÓN ABADÍ BEDA E IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTILLERO por denuncia y posterior Acusación Particular de DOLLY BTESH DE ABADÍ.

SEGUNDO: Con fundamento a INCIDENTE DE CONTROVERSIA, mediante auto 11 del 18 de enero de 1996 el Juzgado Décimo Segundo del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó revocar la orden librada por la Fiscalía Sexta de indagar a RAÚL CASTILLO SANJUR.

TERCERO: El Segundo Tribunal Superior de Justicia en auto del 29 de julio de 1996, al resolver la apelación de la Fiscalía Sexta, revocó el auto de 11 de enero de 1996 y mantuvo la orden de indagar a RAÚL CASTILLO SANJUR.

A. Improcedencia del Recurso.

CUARTO: Como antes se ha expuesto, la resolución contra la que el recurrente ha denunciado recurso de hecho no es susceptible de casación.

QUINTO: El ordinal 2 del artículo 2435 del Código Judicial en el que el imputado fundamenta su intervención, únicamente da lugar a casación.

"ARTÍCULO 2435. Contra los autos dictados en materia penal, que le pongan término al proceso mediante sobreseimiento definitivo o en que se decidan las excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, habrá lugar al recurso de casación en el fondo, en los siguientes casos:
...
2. Cuando admitan las cuestiones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, y dados los hechos tenidos por probados, se haya cometido error de derecho, al declararlos comprendidos en una sentencia anterior o al considerar prescrita la acción penal o al comprender el caso en la ley de amnistía o derecho de indulto".

SEXTO: El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el auto contra el que se recurre no admite cuestiones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena; sino que revoca el auto 11 de 18 de enero de 1996 y ordena tomar declaración indagatoria a RAÚL CASTILLO SANJUR.

SÉPTIMO: El texto de la ley es claro y la jurisprudencia repetida, lo que evidencia la actitud del justiciable de provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento".

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La casación en materia penal en Panamá, ha sido revestida de mayor flexibilidad, dada la naturaleza jurídica de esta rama del Derecho, al formar parte del Derecho Público. Es por ello que desde la década de los años treinta, cuando se regula específicamente en nuestra legislación y luego a través de la ley 86 de 1941 y en el libro tercero del Código Judicial en la actualidad, se ha permitido su anuncio y formalización a los procesados directamente, se otorgan términos de corrección de los defectos formales y se ha extendido la impugnabilidad por esta vía extraordinaria a sentencias y autos de segunda instancia por una variedad de causales de fondo y de forma.

El legislador no se limita a enumerar las causales en los artículos 2434 y 2435 del código Judicial, sino que establece un marco conceptual que recoge ciertos requerimientos que operan como denominadores comunes y condicionan el tipo de resolución que es susceptible de este medio de impugnación.

Como es sabido, la mecánica que se sigue para acceder al Tribunal de casación, lo especifica con bastante claridad la legislación vigente a través de trámites y procedimiento que deben cumplirse en distintas esferas jurisdiccionales. Así el anuncio se hace en primera instancia, mientras la formalización se cumple ante el Tribunal de segunda instancia, el cual al tenor del artículo 2441 del Código Judicial debe limitarse a examinar tres asuntos puntuales, a saber: 1. Si la resolución es susceptible de este recurso; 2. Si el mismo fue anunciado y formalizado oportunamente; y 3. Si tal recurso fue presentado por persona hábil. Una vez ingresado el recurso a la Sala Segunda y vencido el término de lista, se registra en la ley un momento procesal para resolver la admisibilidad in limine, en el que se reexaminan los requerimientos externos del recurso que fueron vistos por el Tribunal Superior y se entra a evaluar los requisitos formales a los que necesariamente debe ajustarse el escrito presentado. En el supuesto de que el Tribunal de casación estime que cabe aplicar el artículo 2444 del Código Judicial y ordenar la corrección del recurso al advertir defectos subsanables, la ley prevé una tercera fase de admisibilidad del recurso que antecede al traslado al Ministerio Público.

En el presente caso, estamos ante una resolución judicial en la categoría de auto, mediante el cual se revoca una decisión de primera instancia que resolvía un incidente de controversia en el que se alegó prescripción de la acción penal, por tanto, es una resolución que indirectamente puede ponerle término al proceso si acoge la excepción alegada porque es una causa de extinción de la acción penal. Por consiguiente, toda resolución de segunda instancia en procesos penales por delitos con pena de prisión superior a dos años, que decide las excepciones de cosa juzgada, prescripción u otras de las descritas por la ley en el artículo 2435 del Código Judicial, es susceptible del recurso de casación.

Ahora bien, en cuanto a las causales taxativas establecidas por la ley en estos supuestos, compete al Tribunal de Casación ya sea en el período de la admisibilidad in limine o en la decisión de fondo, según se trate, determinar su procedencia y correcta formulación.

Si bien es cierto que en algunos casos los medios de impugnación son utilizados por las partes como instrumentos de dilación de los procesos penales y en este caso la excepción de prescripción se alegó para oponerse a la apelación del Ministerio Público en el incidente de controversia, técnicamente se ha introducido un asunto que al ser decidido por el Tribunal de segunda instancia puede ser impugnado por este recurso, hasta el momento los elementos de juicio que se han incorporado a este cuaderno no dan pábulo para aceptar esa aserción.

Por las razones anotadas, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho presentado y en consecuencia ordena al Segundo Tribunal Superior de Justicia que remita el expediente correspondiente.

Base legal arts. 1141, 1142, 2435,2441, 2443 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OCTAVIO ENRIQUE ALVAREZ IBARRA, SINDICADO POR DELITO DE HURTO, EN PERJUICIO DE BERTA ALICIA DE CORREIRA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La doctora **ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO**, Defensora de Oficio Circuital de Panamá, en representación de **OCTAVIO ENRIQUE ÁLVAREZ IBARRA**, ha presentado ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, recurso de revisión contra la sentencia de 31 de mayo de 1990 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que condena a su representado a la pena de siete años de prisión y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el delito de hurto calificado en perjuicio de **BERTA ALICIA DUCREUX DE CORREIRA**.

Fundamenta este recurso extraordinario en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 2458 del Código Judicial, a saber:

> "3. Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena".

Dentro de los supuestos previstos en esta causal, la defensora técnica de ÁLVAREZ IBARRA, especifica que la sentencia del Tribunal Superior, que revocó la sentencia de primera instancia dictada que absolvió a su patrocinado, se basó en el testimonio falso de ILKA DAMARIS FUENTES DÁVILA, quien no declaró contra él en su primera indagatoria, pero que al ampliar ésta, manifestó que ÁLVAREZ IBARRA fue quien le pidió el favor de que empeñara la esclava y el collar productos del hurto denunciado por la señora de CORREIA.

Afirma también la recurrente, que el señalamiento incriminatorio de FUENTES ÁVILA contra el condenado fue producto de una venganza con ribetes pasionales por una supuesta infidelidad marital de su representado.

La causal de revisión aducida, denominada por la doctrina "falsedad de la prueba", debe cumplir los siguientes requisitos para que se justifique la revisión de una sentencia penal ejecutoriada:

1. La falsedad, o sea la alteración de la verdad, debe ser esencial y relevante para los fines del Código Penal.

2. La falsedad debe estar contenida en uno de los medios de prueba señalados taxativamente por la Ley para establecer judicialmente la existencia de los hechos.

3. La falsedad debe haber influido eficientemente en el error del juzgador al apreciar éste como verdadero un hecho falso.

4. La prueba falsa debe haber sido determinante para la parte resolutiva de la sentencia o decisión judicial impugnada. (Cfr. FABIO CALDERÓN BOTERO, "Casación y Revisión en materia Penal", Bogotá, 1985).

En el Derecho positivo patrio, están presentes todas estas exigencias e incluso el numeral 3 del artículo 2458 del Código Judicial establece un sistema abierto en cuanto a los medios de prueba falsos, porque no sólo pueden aducirse como causal, la falsedad de los testimonios, peritajes y documentos, sino también pruebas "**de cualquier otra clase**".

Se exige, sin embargo, que la alteración de la verdad histórica contenida en estos medios de prueba haya sido determinante para la dictación de la sentencia ejecutoriada ("**y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena**").

Pero la Ley exige algo más, exige que el recurrente demuestre la falsedad, es decir la alteración de la verdad, producida por esos medios.

Al considerar expresamente la falsedad testimonial, supuesto aducido en el negocio subjudice, la doctrina se refiere también a la demostración de esta

causal y exige para la viabilidad del recurso, que se acredite que la misma ha sido declarada por una sentencia posterior, aunque no sea de condena. Lo esencial, se dice, es que exista un fallo posterior firme el que contenga una declaración concreta sobre la falsedad de la deposición testifical, esto es, que declare y establezca el carácter típico y antijurídico de la deposición testifical. (Francisco Castillo González, "El recurso de revisión en materia penal", San José, 1980).

Al analizar el negocio subjudice se observa que en el mismo no se demuestra que el testimonio de ILKA DAMARIS FUENTES AVILA ha sido declarado falso por una sentencia posterior a la que fijó la condena que sufre ÁLVAREZ IBARRA.

Los argumentos esbozados por la recurrente se refieren más a la interpretación y al valor probatorio, que a su juicio, debió otorgarle el Tribunal, (más compatible con una causal de casación probatoria), que a la prueba fehaciente de la falsedad del testimonio; lo que solamente se puede demostrar a juicio de la Sala, y en concordancia con la doctrina, con una sentencia posterior que declare esa falsedad.

Por lo tanto, no puede admitirse el presente recurso y así debe declararlo la Corte.

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por la doctora ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO en representación de OCTAVIO ENRIQUE ÁLVAREZ IBARRA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARISTÓTELES SANTOS LEMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE LUIS ALBERTO SALAZAR CASAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

ARISTÓTELES SANTOS LEMOS, mediante el escrito que obra de fojas 1 a 15 de este cuaderno, en su calidad de sentenciado por el delito de homicidio en perjuicio de **LUIS ALBERTO SALAZAR CASAS**, desde el Centro penitenciario La Joya, presentó recurso de revisión de la sentencia calendada el 7 de septiembre de 1995.

Por tratarse de un reo, la Sala Segunda dispuso correr traslado del caso al Instituto de Defensoría de Oficio a fin de que designara un Defensor para que asistiera al recurrente en cuanto a la correcta formalización del recurso extraordinario anunciado. Correspondió al licenciado Ernesto Muñoz Gamboa estudiar el negocio penal, quien contestó el traslado en los términos siguientes:

> "Al hacer un serio análisis de los puntos o circunstancias en las que se ha basado, el procesado para requerir a una revisión de su condena de 16 años de prisión, el 7 de septiembre de 1995, con los consecuentes accesorios de inhabilitación para el de funciones públicas, por igual período de tiempo, por el delito de homicidio, nos pudimos percatar del poco conocimiento que tiene el recurrente en cuanto a la interposición de los diferentes tipos de recursos, observando que éste, lo interpreta como una apelación de la pena en

ánimo de su reducción, la que ya fue interpuesta y confirmada por esta Alta Corporación de Justicia.

Apreciamos tal condición, ya que el recurrente manifiesta, **"haber recurrido a Casación para los efectos de estricto derecho de una revisión requerida por los respetados magistrados"**, a página 2 del cuadernillo que contiene este recurso; también al pronunciarse manifiesta "que de aquí mi apelación y requisición de casación, bajo una revisión de proceso condenatorio" a página 5; otra opinión considerada por el recurrente, es cuando nos refiere que "EN MI HUMILDE ENTENDER, LA PENA FUE EXTRAMILITADA".

El recurrente con este recurso no pretende aportar nuevos hechos, que pudieran dar margen al recurso, sino una revisión total del proceso, al decir en reiteradas ocasiones, señala que ha observado "un sin número de anomalías y atenuantes no consideradas en el proceso", concluimos que pretende que se le inicie un nuevo proceso; por otro lado, la sentencia condenatoria no ha sido obtenida por ningún documento o prueba secreta, pues somos del criterio que su abogado defensor en su justo momento, si no se opuso a ella, es porque consideró como conocedor del derecho, que no existía ninguna anomalía; por consiguiente el magistrado sustanciador al confirmar la sentencia, y posteriormente al interponerse el recurso que nos ocupa, y surtirse el traslado, hemos considerado en esa alta corporación de justicia, actuó conforme a derecho, además de que consideramos que el recurso interpuesto por el recurrente no está descrito por nuestra excerta legal como uno de los casos en los que podría proceder por ello en nuestro real saber y entender, no cabe su sustentación".

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en distintos fallos ha manifestado que este recurso extraordinario para que alcance la virtualidad de excepción a los efectos de cosa juzgada, debe acoplarse en la forma y en lo sustancial a las causales específicamente previstas por la ley, por cuanto no se trata de una tercera instancia contra sentencias ejecutoriadas, sino de un recurso que por su carácter extraordinario solo es viable cuando se registran los hechos a los que la ley les confiere categoría de causal de revisión.

En las condiciones apuntadas, el recurso presentado deviene en inadmisible.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por ARISTÓTELES SANTOS LEMOS en este proceso penal.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ C., POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE APODEMIO GUTIÉRREZ DELGADO MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Luis Quintero Poveda, actuando en nombre y representación de **ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ CORTEZ**, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de fecha 17 de

noviembre de 1987 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que declaró responsable penalmente a Rodríguez Cortez por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Apodomio Gutiérrez Delgado y le condenó a la pena de 15 años de prisión; y contra la sentencia del 27 de abril de 1988 por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal, confirmó en todas sus partes la sentencia anterior.

SITUACIÓN PROCESAL

El recurrente invoca las causales 3, 4 y 5 del artículo 2458 del Código Judicial, indicando que la pena impuesta a Rodríguez Cortez debe revisarse porque es errada y excesiva. Además solicita, se decrete su libertad provisional, porque su representado tiene varios hijos menores de edad quienes requieren de ayuda y la presencia de su padre.

Entre las pruebas que aportó, consta copia de la Gaceta Oficial N° 22.474 de fecha viernes 11 de febrero de 1994, contentiva del Decreto Ejecutivo N° 1 de 5 de enero de 1994, por medio del cual se concedió rebaja de pena a varios detenidos de delitos comunes estando entre los favorecidos su representado, el señor Isabel Elías Rodríguez Cortéz.

Ante esa situación, mediante resolución calendada el 1° de agosto de 1996, esta Sala, representada por la Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, emitió auto de mejor proveer cuyo objetivo era acopiar información sobre el status penitenciario del sentenciado Rodríguez Cortez (fs. 36-37).

En respuesta, consta oficio N° 3100-DNC. 96. S del 5 de septiembre de 1996, signado por la licenciada Rosa E. Cárdenas V., Directora Nacional de Corrección, quien informa lo siguiente:

> "... el señor ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ CORTÉZ, con cédula de identidad personal N° 7-101-129, quien fuera condenado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito, mediante sentencia de fecha 17 de noviembre de 1987, a cumplir la pena de quince (15) años de prisión por la comisión del delito de Homicidio en perjuicio de Apodomio Gutiérrez Delgado, misma que fuera confirmada por la Corte Suprema el 27 de abril de 1988; estuvo detenido desde el 26 de junio de 1986 hasta el 19 de agosto de 1996, por habérsele concedido el beneficio de Libertad Condicional, mediante Resolución Ejecutiva N° 67 de 19 de agosto de 1996 en relación a la precitada pena. En virtud de lo anterior, el señor RODRÍGUEZ CORTEZ deberá reportarse cada quince días ante esta unidad administrativa hasta el 19 de septiembre de 1997, fecha en la cual concluye la respectiva pena".

Si bien al señor Rodríguez Cortéz se le ha otorgado libertad condicional, como estímulo a su buena conducta durante el tiempo que lleva cumpliendo la pena de prisión impuesta, no podemos obviar que este instituto conlleva para el beneficiario el cumplimiento de las obligaciones que enumera el artículo 86 del Código Penal y que regirán hasta el vencimiento de la pena impuesta. El incumplimiento de las exigencias establecidas acarrea la revocación del beneficio concedido.

Siendo que Rodríguez Cortez aún no ha cumplido con la pena impuesta, debemos pronunciarnos sobre la admisibilidad del recurso presentado.

El recurso cumple con las formalidades establecidas en el artículo 2459 del Código Judicial. Sin embargo, al invocar las causales 3ª, 4ª y 5ª, las cuales no transcribe, no aporta pruebas que las sustenten. Es decir, no demuestra cuál es la prueba falsa, la prueba secreta que no existía en el proceso y los nuevos hechos que puedan dar lugar a la absolución de su representado o a una condena menos rigurosa.

Igualmente, los cinco hechos en que fundamenta su pretensión son críticas a la valoraciones hechas por los magistrados que dictaron el fallo de primera instancia, no así causales de revisión previstas por la ley.

Al no satisfacer el recurso estos requisitos de fondo, la Sala no puede acceder a lo pedido.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado Luis Quintero Poveda en representación de Isabel Elías Rodríguez Cortéz, contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial del 17 de noviembre de 1987 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 1988.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MELANIO CABALLERO BATISTA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado FELIPE C. RANGEL FREDERICKSON, en representación del procesado **MELANIO CABALLERO BATISTA**, presentó ante la secretaría de esta Sala, recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 21 de enero de 1991 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la cual se le condena a la pena de 20 años prisión por el delito de homicidio en perjuicio de MARÍA FLORENTINA QUIRÓS, hecho ocurrido en el corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí.

Como fundamento del recurso, el recurrente invocó las causales 3, 5 y 6 del artículo 2458 del Código Judicial y aportó como pruebas, dos recortes de periódicos: uno de La Prensa del día 10 de agosto de 1992 (página 6-A), y otro de la columna de Juan B. Gómez que no tiene fecha ni nombre del diario que lo publicó. También adujo y anunció el recurrente una serie de pruebas testimoniales.

Al ser acogido el recurso mediante auto de 25 de febrero de 1994, se abrió el proceso a pruebas por el término que establece la ley procedimental. Dicho período precluyó sin que el recurrente hiciera uso del mismo.

Corrido el traslado al señor Procurador General de la Nación, éste presentó su escrito de alegatos, visible de fojas 30 a 58, fechado 24 de mayo de 1995.

Luego de una sinopsis tanto de los hechos como del proceso, el Procurador realiza un estudio doctrinario sobre el recurso de revisión. Indica que este recurso procede únicamente cuando reúne las condiciones que taxativamente enumera la ley, por ello hace alusión al artículo 24 de la Ley N° 1 de 3 de enero de 1995, que adiciona el numeral 8° al artículo 2458 del Código Judicial (causales de revisión), que se encuentra en período de VACATIO LEGIS, antes de su vigencia por un término de seis meses, y que trata de los procesos en que procediendo la acumulación, no se haya hecho; y cuando una persona haya sido juzgada dos veces por un mismo delito.

Como cuestión previa a la manifestación de sus consideraciones sobre el recurso de revisión instaurado, el Procurador es de la opinión que el recurso presentado por el Licdo. RANGEL FREDERICKSON no cumple con los aspectos formales exigidos por nuestro Código Judicial, "toda vez que no se acompañó, como lo exige

el párrafo 2° del artículo 2459 ídem, con el memorial del recurso las 'pruebas de los hechos fundamentales'(copia certificada de la sentencia contra la cual se instauró el recurso, etc.).". Afirma que las pruebas aportadas por el revisionista no constituyen prueba nueva para el proceso, ya que un artículo periodístico no reviste la calidad de prueba alguna y mucho menos `prueba fundamental'; en dichos artículos se hacen "algunos comentarios de corte subjetivos y especulativos en torno de la defensa del procesado, y sobre la muerte de la víctima."

En cuanto al propio libelo del recurso de revisión, el jefe del Ministerio Público indicó lo siguiente respecto a los puntos del mismo. En cuanto al primer hecho, en el cual manifiesta el recurrente que en la audiencia en derecho no se presentaron las pruebas materiales con las que se llevó a cabo el delito, sostuvo que dicha afirmación no constituye causal de revisión; además, en las sentencia de primera y segunda instancia se narra que en el proceso fueron adjuntadas las pruebas materiales con que se llevó a cabo el delito (una piedra, un cuchillo, la camisa, los billetes y una moneda de veinticinco centavos). Respecto al segundo hecho, apuntó que el mismo además de no ser causal de revisión, contradice la verdad material contenida en el infolio, "toda vez que de oficio en el período de ampliación, el tribunal del conocimiento evacuó todas las pruebas testimoniales aducidas por la madre del occiso en declaración jurada (**GREGORIA SERRANO BATISTA**) las que fueran valoradas en su oportunidad ... Además, en la audiencia el Magistrado Sustanciador permitió al defensor cuestionar a los testigos ...". En cuanto al tercer hecho del recurrente, que indica que no se investigó acerca del sospechoso que pagó con un dólar ensangrentado a la Junta Comunal, manifiesta el Procurador que ello no constituye causal de revisión, además de que no se compadece con la realidad sumarial, puesto que a tal efecto se evacuó el testimonio del señor **OSCAR MEDINA MIRANDA** -que entregó el billete a las autoridades- quien dio una descripción de dicho sujeto, aunque por ser un indio y haber tratado a muchos, no pudo hacerse un retrato hablado.

Por otra parte, y respecto al hecho cuarto del recurso de revisión, apuntó el Procurador que el recurrente especula sobre el parecido en la descripción física de la persona que entregó el dólar manchado de sangre y la persona que se vio esperando bus la noche de los hechos. Afirma que estas alegaciones por sí solas no prueban nada frente a la confesión y los hechos que incriminaron a **MELANIO CABALLERO BATISTA**; así como tampoco constituye nuevo hecho. En cuanto a los hechos quinto y sexto, en los cuales el recurrente indica que la inocencia de **CABALLERO BATISTA** se prueba con un anónimo que reposa en el proceso y que señaló a otra persona involucrada en el homicidio, sostiene el jefe del Ministerio Público que, ningún anónimo constituye prueba en favor o en contra de persona o situación alguna; sin embargo dicho anónimo fue incorporado en el proceso, por lo que fue valorado por el Tribunal y no constituye hecho nuevo en el proceso.

Con relación al hecho séptimo del recurrente, el Procurador indica que la circunstancia de que la señora MARÍA FLORENTINA QUIROZ se encontrara en el autobús en que viajara el doctor HUGO SPADAFORA el día de su desaparición, ha sido afirmado por dos testigos en el proceso; no obstante no constituye un hecho nuevo, pues dichas declaraciones reposan en el expediente desde antes de la sentencia condenatoria, y no desvirtúan la confesión y demás pruebas que pesan sobre el imputado.

Apunta el Procurador que en los demás hechos enumerados por el recurrente, éste

> "continúa en forma de circuloquio con las mismas alegaciones subjetivas, sin mayor consistencia, y propios de la primera y segunda instancia, y no de un recurso extraordinario de revisión ...
>
> ... en el párrafo denominado por el recurrente como 'Breve Análisis', se refiere a coincidencias de pruebas entre el caso seguido a MELANIO CABALLERO BATISTA y el seguido por la muerte del doctor HUGO SPADAFORA. Hechos de los que no aportó ninguna prueba. Sin embargo, es menester dejar sentado, una vez más, que por medio

> de la compulsa de copias efectuadas por el Fiscal Superior Especial, se insertaron dentro del expediente, y antes de la dictación de la sentencia, copias autenticadas de declaraciones rendidas en el caso seguido por la muerte del DR. HUGO SPADAFORA, que se relacionaban a la causa seguida a MELANIO CABALLERO BATISTA, y que fueron por tanto valoradas al momento de la dictación del fallo de la sentencia de primer grado (foja 79)".

Finalmente, el señor Procurador consideró preciso recordar que la naturaleza del recurso de revisión requiere de la aportación de nuevos elementos que constituyan novedad respecto al proceso anterior, y manifestó su interés porque se niegue el presente recurso, pues,

> "Como puede apreciarse, no existe, comprobado, ningún hecho nuevo que aunado a las pruebas anteriores concreticen la causal de revisión contenida en el ordinal 5° del Artículo 2458 del Código Judicial. Tampoco existe ninguna prueba ni de vieja o nueva data que acredite fehacientemente o ponga en duda que la confesión de MELANIO CABALLERO BATISTA se hubiere obtenido en virtud de cohecho y violencia, de conformidad con el ordinal 6°, de la prenombrada disposición de procedimiento penal."

A foja 65 se lee el escrito de alegatos que presentara el Licdo. RANGEL FREDERICKSON, el cual se fundamenta básicamente en los siguientes puntos:

-Que a la fecha de la interposición del recurso (10 de febrero de 1993) se encontraban vigentes los artículos 2450 al 2466 del Código Judicial, por lo cual la resolución en la que se admite el recurso "es indicativo que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 2458 del Código Judicial, por existir sentencia ejecutoriada dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, en especial los numerales 3, 5, 6.".

-Que el Código Judicial no indica lo que puede acontecer por el cambio de legislación en materia procesal penal, y que la

> "... vacatio legis anunciada por el Procurador General de la Nación, se refiere al plazo, inmediatamente posterior a su publicación, durante el cual no es obligatoria, lo que se refiere al período en que debe entrar en vigor una ley, después de su promulgación, pero cabe señalar que nuestro ordenamiento normativo constitucional confirma y establece el principio IN DUBIO PRO REO consagrado en el artículo 43, además de no ser una Ley de orden público e interés social, por lo que su efecto no es retroactivo."

-Que en interrogatorio rendido en el juicio a los implicados en el homicidio de HUGO SPADAFORA, el señor **ABIGAIL GONZÁLEZ** declaró bajo la gravedad del juramento delante de los tres Magistrados, que **MELANIO CABALLERO BATISTA** había sido torturado por el señor **BARTOLOMÉ MORENO** y otros miembros del antiguo régimen militar para que se confesara culpable del homicidio de MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ.

-Que en el expediente de HUGO SPADAFORA se encuentra un documento manuscrito aparecido en el Palacio Legislativo, en el cual manifiestan que su defendido no cometió el homicidio de FLORENTINA QUIROZ e involucran a **ABIGAIL GONZÁLEZ**; que dicha tesis era compartida por los Fiscales Superiores, y que este hecho puede dar lugar a la absolución de **CABALLERO BATISTA**.

Por último manifiesta el recurrente que, las pruebas que adujo y anunció al presentar el recurso, no fueron aportadas por la negativa del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial a entregarlas. Solicita que la Corte oficie a dicho tribunal a fin de envíen copias autenticadas de una lista de pruebas que anuncia; que se realice una inspección judicial sobre documentos que son pruebas y que se tomen los testimonios de una larga lista de personas que enumera. Igualmente solicita que se practiquen las pruebas aducidas, anunciadas y aportadas, puesto que no fue notificado personalmente de la providencia que abrió

a pruebas por no encontrarse en la provincia de Chiriquí, por motivos de salud.

Corresponde en este momento, analizar los antecedentes del recurso interpuesto.

El día 1 de octubre de 1985, en el Barrio de Guadalupe, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Bugaba de la Provincia de Chiriquí, se realizó el levantamiento del cadáver de MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ, quien falleció a consecuencia de hemorragia, provocada por cinco heridas de arma blanca y dos de objeto contuso. El Protocolo de Necropsia reveló que las heridas de arma blanca denotaban "gran violencia y agresividad"; además del hallazgo de una moneda de veinticinco centavos (0.25c.) a nivel de la glotis.

El día 10 de octubre de 1985 la Fiscalía Segunda de Circuito llevó a cabo una diligencia de allanamiento en la habitación de **MELANIO CABALLERO BATISTA**, en donde se decomisó una camisa color verde, un cuchillo de cocina cacha de madera, con diferentes manchas de color rojo, un puñal pequeño con hoja niquelada con cacha de metal de aluminio y un cincel de color plateado con manchas de color oscuro; todos estos objetos sometidos a la prueba de bencidina, dieron positivo para la presencia de sangre humana oculta.

En la primera indagatoria que rindiera **CABALLERO BATISTA**, declaró no saber nada sobre el homicidio, sin embargo, en indagatoria rendida ante el Departamento Nacional de Investigaciones el 12 de octubre de 1985, se declaró confeso del homicidio de MARÍA FLORENTINA QUIROZ y señaló los pormenores e incidencias del hecho. Como motivación arguyó el trato descortés y grosero que la occisa le brindó. En indagatoria rendida ante la Fiscalía el 14 de octubre, se ratificó de la anterior declaración, e involucró a "un tal CHURRASCO", quien afirmó, golpeó a la víctima con la piedra.

En diligencia de reconstrucción de los hechos, que se intentó practicar el 22 de mayo de 1986, el imputado dijo ser inocente del homicidio, e indicó haber sido torturado en el D. E. N. I. para declararse confeso, y que el Fiscal lo obligó a declarar, bajo la amenaza de que lo devolvería al D. E. N. I. donde lo "habían tratado mal". Indagados al respecto el Fiscal de Circuito y su Secretario, declararon que cuando **MELANIO CABALLERO BATISTA** rindió su indagatoria en la Fiscalía se encontraba en condiciones físicas y mentales normales y no denunció maltrato ni coacción; los detectives del antiguo D. E. N. I. negaron lo afirmado por el procesado.

Mediante Vista Fiscal N° 93 de 31 de julio de 1986, la Fiscalía Segunda Superior del Tercer Distrito Judicial recomendó el llamamiento a juicio de **MELANIO CABALLERO BATISTA**. El Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, mediante resolución de 27 de agosto de 1986, profirió un auto abriendo causa criminal contra el imputado y contra el sujeto apodado "CHURRASCO" por los delitos genéricos de robo y homicidio en perjuicio de MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ. Tanto el defensor como el imputado solicitaron al Tribunal que se realizara una audiencia en derecho y no mediante jurado de conciencia; dicho acto se llevó a cabo el 22 de noviembre de 1989.

El 19 de julio de 1990 el Fiscal Superior Especial solicitó el cuadernillo contentivo del expediente seguido a **MELANIO CABALLERO BATISTA**, en base a que de algunas declaraciones vertidas en el sumario relacionado con la muerte del doctor HUGO SPADAFORA, se indica alguna relación con la muerte de la señora MARÍA FLORENTINA QUIROZ. Mediante proveído de 26 de julio de 1990, fue devuelto el expediente al tribunal a-quo, junto a las copias compulsadas por el Fiscal Superior Especial, de las declaraciones de **ARACELLYS GONZÁLEZ DE FLORES (f. 583-586), PABLO SÁNCHEZ CENTENO (f. 587-592), ABIGAIL GONZÁLEZ (f. 593-600), ARTURO SERRANO PITTÍ (f. 601-603), LEONIDAS MARÍA GONZÁLEZ (f. 604-605) y MELANIO CABALLERO BATISTA** (f. 615-618).

Al evacuarse auto de mejor proveer dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, se tomaron declaraciones a funcionarios del antiguo D.E.N.I., del S-2, al Fiscal de Circuito que instruyó el caso, y al Secretario de la Fiscalía, y con ninguna de estas declaraciones se pudo comprobar lo dicho

por **MELANIO CABALLERO BATISTA.** Así como tampoco con los resultados del examen que, en la persona del imputado, practicara el Médico Forense, pues el mismo indicó que algunas cicatrices que presentaba el procesado no coincidían con las lesiones o vejámenes por él descritos en su declaración.

El 21 de enero de 1991 el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial encontró culpable a **MELANIO CABALLERO BATISTA** del homicidio de la señora MARÍA FLORENTINA QUIROZ MARTÍNEZ, y lo declaró inocente de los cargos por el delito de robo en perjuicio de la prenombrada. Apelada dicha sentencia por el defensor del procesado, fue resuelta la alzada por esta Sala Penal, mediante fallo de 10 de julio de 1991, en el cual se confirmó la sentencia de primera instancia.

Para resolver el presente recurso de revisión, la Sala estima prudente hacer ciertas consideraciones previas.

En cuanto a lo advertido por el Procurador General de la Nación, referente a la inadmisibilidad del recurso de revisión presentado por el Licdo. RANGEL FREDERICKSON el día 1° de febrero de 1993, la Sala reconoce que, efectivamente el escrito de recurso de revisión presentado no cumple con las formalidades que al efecto establece el artículo 2459 del Código Judicial. No se acompañó copia de la sentencia recurrida, los recortes periodísticos aportados no constituyen prueba de los hechos fundamentales alegados por el recurrente, ni pueden tomarse como prueba válida dentro del proceso, puesto que se trata de la opinión personal que de este caso tienen los autores de dichos artículos.

Sin embargo, aunque la Sala reconoce la no viabilidad del presente recurso, estima necesario, en vista del período de tiempo transcurrido, entrar a examinar el fondo del mismo a fin de llamar la atención sobre ciertos aspectos procesales que debieron observarse.

En primer lugar, el defensor de **MELANIO CABALLERO BATISTA** presentó el escrito del recurso de revisión, como ya vimos, el día 1° de febrero de 1993 con ciertos defectos de forma. Admitido el recurso, la Sala abrió el proceso a pruebas el día 25 de febrero de 1994. De fojas 17 a 28 del expediente se observa las diligencias que se hicieron por Secretaría a fin de notificar al Licdo. RANGEL FREDERICKSON de dicha Resolución; la cual finalmente hubo de hacerse a través de correo. Posteriormente, el día 12 de diciembre de 1994 se corre traslado a las partes, por quince días para que presentasen sus alegatos por escrito; así, el Procurador General de la Nación presentó su alegato el 25 de mayo de 1995. Por su parte, el Lcdo. RANGEL FREDERICKSON presentó sus alegatos el 9 de agosto de 1995; sin embargo en dicho escrito manifiesta su intención de que esta Sala evacúe una serie de pruebas tanto testimoniales como documentales, y como justificación indica que, por negativas del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial a suministrar las copias y por haber sido notificado a través de correo por no encontrarse en la provincia por razones de salud no fueron practicadas. Igualmente, adjuntó a su escrito de alegatos algunas pruebas consistentes en copias extraídas del expediente seguido a **MELANIO CABALLERO BATISTA**, pruebas éstas que la Sala no puede considerar puesto que el período procesal dispuesto para ese fin precluyó sin que la defensa hiciera uso del mismo y las únicas pruebas incorporadas debidamente al proceso son los dos recortes de periódico visibles a foja 5, aunque carecen de eficacia jurídica como fundamento de la revisión.

El recurrente, fundamenta su solicitud invocando las causales tercera, quinta y sexta del artículo 2458 del Código Judicial. La causal tercera es del tenor siguiente:

> "3.Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena;".

En cuanto al fundamento de la causal mencionada, indica que el señor **ABIGAIL GONZÁLEZ** incurrió en falso testimonio, pues en declaración rendida en el

proceso seguido a **MELANIO CABALLERO BATISTA** dijo que éste nunca fue torturado para que se declarara confeso; sin embargo se desmiente dentro del proceso por el homicidio de HUGO SPADAFORA, en el cual manifestó que **CABALLERO BATISTA** había sido torturado para confesar el homicidio de MARÍA FLORENTINA QUIROZ.

La Sala considera que el supuesto falso testimonio en que incurrió **ABIGAIL GONZÁLEZ** no aparece probado en el presente proceso, puesto que el recurrente no aportó copias de las aludidas declaraciones que se hicieron dentro de la audiencia por el homicidio de HUGO SPADAFORA. De modo que su afirmación carece de fundamento fáctico que la apoye, pues no consta que efectivamente dentro del acto de audiencia el señor GONZÁLEZ haya declarado en el sentido que indica el Licdo. RANGEL FREDERICKSON.

La causal quinta del artículo 2458 del Código Judicial, invocada por el recurrente es del tenor siguiente:

> "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

Respecto al fundamento de esta causal, el recurrente califica de "nuevos hechos" un documento manuscrito, aparecido en el Palacio Legislativo "en donde se manifiesta que mi defendido no cometió el delito de homicidio, en contra de Florentina Quiroz, e involucra a Abigail González". Con relación al aludido manuscrito, el Procurador explicó en su escrito de alegatos que dicho anónimo fue incorporado en el proceso, de modo que fue valorado por el Tribunal y no constituye hecho nuevo en el proceso. Añade que, ningún anónimo constituye prueba en favor o en contra de persona o situación alguna. Este argumento es compartido por la Sala, puesto que para que las pruebas se consideren eficaces, es necesario que cumplan con un mínimo de seriedad y formalidad procesal; de modo que no puede un Tribunal dar crédito a un documento anónimo que no prueba ni demuestra nada, pues su propia credibilidad queda en duda desde el momento en que el autor no desea ser identificado.

Por cuanto dicha prueba, pese a lo anterior, fue incorporada en el proceso y evaluada por el a-quo, formando así parte del proceso, la causal alegada por la defensa carece de asidero jurídico, pues no se encuentra debidamente configurada en este caso, ya que para ello es necesario que se descubran **nuevos hechos** que combinados con pruebas anteriores o por sí solos den lugar a absolución o a condena menos rigurosa por aplicarse disposición penal menos severa; situación que no se presenta aquí, puesto que la defensa no ha presentado prueba de nuevos hechos que afecten la situación procesal de su defendido, sino más bien hace alusión a una prueba que además de ineficaz no es nueva en el proceso.

La última causal invocada por el recurrente lo es la sexta del artículo 2458 del Código Judicial, que señala que habrá lugar a la revisión de las sentencias ejecutoriadas, cualesquiera que sean los Tribunales que las hubieren dictado:

> "6. Cuando se hubiere obtenido en virtud de cohecho o violencia;".

Como fundamento de esta causal, el recurrente afirma que de las declaraciones de **ABIGAIL GONZÁLEZ** se desprende que contra **MELANIO CABALLERO BATISTA** "se utilizó violencia física y siquica (sic) contra su persona; cuando el mismo es una persona ignorante y quien carece de conocimiento intelectuales, por lo que desconocía sus derechos en aquel entonces.".

Observa la Sala que al igual que la causal tercera, esta causal que trata de las sentencias que se hayan obtenido en virtud de violencia, no está probada en el proceso sub judice, ya que no constan las declaraciones que supuestamente rindió **ABIGAIL GONZÁLEZ** en la audiencia por el homicidio de HUGO SPADAFORA, pues el abogado no aportó dicha prueba en el período establecido para tal fin.

Del escrito de alegatos de la defensa de **MELANIO CABALLERO BATISTA**, se desprenden una serie de afirmaciones que no tienen relación directa con el recurso interpuesto; esto es, lo que se dice respecto a la VACATIO LEGIS del artículo 24 de la Ley N°1 de 3 de enero de 1995 que adiciona el numeral 8° al artículo 2458 del Código Judicial (causales de revisión). Dicho argumento carece de objetivo práctico, puesto que no es ése el numeral que invoca el recurrente como causal de revisión.

El recurso de revisión, por ser un recurso extraordinario, es sumamente formalista, y debe cumplir con los requisitos que al respecto indica el Código Judicial; por ello resulta absurdo que en el escrito de alegatos el recurrente insista en aducir y solicitar pruebas que, de haber sido más diligente, hubieran sido practicadas en el período destinado para ello. Dicho período terminó y no es posible en esta etapa procesal practicar prueba alguna.

No obstante los defectos de forma que influyen en el fondo del recurso presentado, la Sala observa que es posible que, en efecto, existan en el proceso hechos nuevos, que en este momento no se han probado, pero que podrían influir en la justicia de la sentencia que pesa contra **MELANIO CABALLERO BATISTA**; de modo que sería factible, si la situación procesal cambia, que se evaluaran dichas circunstancias, siempre y cuando se encuentren debidamente probadas y fundamentadas.

Por el momento, observamos que en el presente recurso no se configuran las causales invocadas, por tanto no procede la revisión y así debe ser declarado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO PROCEDE LA REVISIÓN de la Sentencia de 21 de enero de 1991 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el proceso seguido a MELANIO CABALLERO BATISTA por el homicidio en perjuicio de MARÍA FLORENTINA QUIROZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, SINDICADO POR DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el licenciado **Jerónimo Emilio Mejía**, en representación de **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ**, contra la sentencia ejecutoriada de primera instancia de 29 de julio de 1993 (fs. 10 a 23), dictada por el Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** a cumplir la pena principal de veinticuatro (24) meses de prisión y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de elección popular y de cualquier otro derecho político, por igual término después de cumplida la pena principal, por el delito de falsificación de cheques, cometido en perjuicio de PESQUERA TABOGUILLA, S. A.

Observa la Sala que en la sentencia cuya revisión se pretende también se condenó a ERNESTO VICENTE VERLEY Mc FARLANE a la pena principal de diecinueve (19) meses y seis (6) días de prisión, por el mismo delito.

Mediante Resolución de 3 de junio de 1996 (fs. 27 a 28), esta Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el licenciado **Jerónimo Emilio Mejía** en el presente caso, y abrió el proceso a pruebas, según lo establecido en el artículo 2460 del Código Judicial.

Tras haberse surtido el correspondiente trámite de traslado para la presentación de los alegatos por escrito, establecido en el artículo 2461 del Código Judicial (f. 35), lo pertinente es analizar el recurso interpuesto a fin de establecer si procede.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., al presentar sus alegatos mediante Vista 57 de 29 de agosto de 1996 (fs. 36 a 42), solicitó que se ordene la revisión de la sentencia de 29 de julio de 1993, dictada por el Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en virtud de "los nuevos hechos aportados en esta instancia, los cuales indican la no participación del señor MIGUEL ALGANDONA ORTIZ en la falsificación del cheque N°6956 de Pesquera Taboguilla, S. A., y la imposibilidad de que se practicara la prueba caligráfica al condenado durante el desarrollo del proceso" (f. 42).

El recurrente señala en su escrito que la sentencia cuya revisión se pretende fue dictada en un proceso en el que **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** fue juzgado en ausencia y éste último tuvo conocimiento de la misma al solicitar su historial policivo en la Policía Técnica Judicial.

Destaca el recurrente el hecho de que en el proceso mencionado se practicó una prueba grafocrítica de la firma estampada en el cheque N° 6956, la cual, al cotejarse con las pruebas caligráficas del señor CONSTANTINO MASAQUITES PALMA, arrojó resultados positivos en el sentido de que dicha firma fue estampada por dicho señor; no obstante, en razón de que el señor MASAQUITES PALMA había negado tal hecho, al practicarse otra prueba por otro perito, se concluye que la firma en cuestión no había sido realizada por ese señor y, en tal virtud, advierte el recurrente que se realizaron dos experticias para la comprobación del hecho aducido.

En este orden, el recurrente señala que durante el proceso se practicó una prueba grafocrítica a la tarjeta base de la cédula de su representado, la cual, al cotejarse con la firma puesta al reverso del cheque N° 6956 mencionado, arrojó resultados positivos. Por lo tanto, el recurrente afirma que la condena de su representado es totalmente incompatible con los principios procesales y de la justicia, pues se fundamenta "... en una prueba pericial carente de las herramientas necesarias para que el perito pueda dictaminar, con mayor precisión y cientificidad, si la firma plasmada en un documento pertenece a esa persona, a quien no se le hizo pruebas caligráficas por no haber comparecido al proceso." (F.4).

El recurrente alega como causal para la presente revisión, la contenida en el artículo 2458, ordinal 5°, del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 2458. Habrá lugar a recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, cualesquiera que sean los Tribunales que las hubieren dictado, en los casos siguientes:
> ...
> 5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa; ... .".

En tal sentido, consideramos oportuno transcribir el texto doctrinal citado por el Procurador General de la Nación, sobre dicha causal:

> "... hecho nuevo es aquel que no fue conocido por el sentenciador, pues, por cualquier circunstancia, no obró en el proceso. Se trata de una prueba que no se incorporó al proceso, que se logró después de la condena y que establece una verdad histórica desconocida en

las instancias." (CALDERÓN BOTERO, Fabio. Casación y revisión en materia penal. Edit. Librería del Profesional, Colombia, 1985, p. 342). (F. 39).

Según el recurrente, con posterioridad a la Sentencia condenatoria, se han descubierto nuevos hechos que eximen totalmente de responsabilidad a su representado, lo cual lo constituye el hecho de que la firma que aparece al reverso del cheque N° 6956 no fue estampada por **MIGUEL ALGANDORA ORTIZ**, según se desprende del Informe Pericial N° 3172 (fs. 6-7), suscrito por el Perito Grafotécnico GUSTAVO GONZÁLEZ, quien indicó que **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** "no participó en la confección de las firmas plasmadas, en el documento analizado, una vez que el patrón de grafías que presenta tanto el ejercicio caligráfico como la cédula de identidad personal señalan cualidades y gestos gráficos totalmente disímiles con las firmas del cheque, tanto en la presión de la tinta como en la calidad de la escritura" (f. 7) y, por lo tanto, arribó a la siguiente conclusión:

"1. La firma giradora del cheque visible en su anverso no presenta ningún elemento de juicio, semejante o parecido a la letra o escritura del SEÑOR MIGUEL ALGANDONA ORTIZ.

2. La firma que endosa el cheque visible en su reverso, la cual se lee 'MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, 8-202-1106', fue objeto de una falsificación por imitación de Regular Calidad." (F. 7).

Luego de la admisión del presente recurso de revisión, se abrió el negocio a pruebas; término dentro del cual, el Perito Grafotécnico GUSTAVO GONZÁLEZ, rindió declaración jurada ante el Magistrado Sustanciador de esta Sala Penal, donde se ratificó de lo dicho en su Informe Pericial N° 3172 de 1 de abril de 1996 (fs. 6-7) y, añadió que para llegar a la conclusión expuesta, se basó "... en el estudio que realice sobre el documento cuestionado y el ejercicio caligráfico practicado al Señor Miguel Algandona Ortiz, teniendo como base la lupa microscópica, con luz incorporada, la regla transparente y la plantilla 'D'" (f. 34) y que los factores caligráficos que encontró en la firma cuestionada, visible al dorso del cheque N° 6956, no son propios de la escritura del señor **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ.**

También, adjunto al libelo de revisión, se aportó fotocopia del cheque N° 6956 de PESQUERA TABOGUILLA, S. A. (F. 9); Prueba caligráfica realizada a **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** (f. 8); Resolución de 15 de noviembre de 1993 (f. 24), mediante la cual se declaró legalmente notificado de la sentencia condenatoria de 29 de julio de 1993 a **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ**; Certificación suscrita por la Secretaria Encargada del Juzgado Undécimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, donde consta que la Sentencia condenatoria de 29 de julio de 1993, quedó ejecutoriada el 30 de noviembre de 1993 (f. 25); y copia autenticada de la sentencia de 29 de julio de 1993, del Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 10 a 24), cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

"Dio inicio a esta instructiva sumarial la denuncia suscrita por el señor CONSTANTINO MASAQUITES PALMA ante la Fiscalía Auxiliar de la República, el día 13 de agosto de 1991. De acuerdo con la denuncia en cuestión, el día 9 de agosto de ese año el señor Constantino Masaquites Palma recibió llamada telefónica del Banco General en la cual le informaban que una persona que se identificó como Miguel Algandona Ortiz presentó por ventanilla para su cobro el cheque N° 6959, fechado 6 de agosto de 1991, correspondiente a la cuenta corriente de su empresa Pesquera Taboguilla, S. A., por un monto total de cuatro mil ochocientos balboas (B/.4,800.00), cheque este que luego de ser pagado, se detectó que las dos (2) firmas que lo autorizaban habían sido falsificadas.
...
El cajero del Banco General, DIOMAR POLO SOTO (fs. 21-22), afirmó que una persona que se le identificó como Miguel Algandona Ortiz se presentó a su ventanilla con el cheque N° 6956 de la empresa

> Pesquera Taboguilla, S. A., por valor de cuatro mil ochocientos balboas (B/.4,800.00), el cual luego de ser autorizado por uno de los oficiales del banco, le fue cambiado. Describió al sujeto en mención alto, delgado, trigueño y usaba lentes.
> ...
> En ampliación rendida por el cajero del banco, DIOMAR POLO SOTO (f.26), afirmó reconocer en la copia de la tarjeta-base de la cédula de identidad de Miguel Algandona Ortiz (f.88) a la persona que fue al banco a cambiar el cheque denunciado como falsificado en las firmas.
> ...
> Le fueron practicadas pruebas de ejercicios caligráficos a los señores MANUEL ZAPATEIRO CASTRO (fs. 18-19), JAIME JOU ACHU (fs. 44-45), MIRNA RODRÍGUEZ GEORGE (fs.46-48) y CONSTANTINO MOSAQUITES PALMA (fs.42-43); en tanto que con la tarjeta-base de la cédula de identidad personal de MIGUEL ALGANDONA ORTIZ se realizó la misma experticia, dando como resultado que en informe pericial (fs.73-74) suscrito por Eugenio Medina, Perito Grafocrítico de la Procuraduría General de la Nación, se determinara que Miguel Algandona Ortiz fue la persona que firmó el reverso del cheque N° 6956, por valor de cuatro mil ochocientos balboas (B/.4,800.00), y el señor Constantino Mosaquites Palma el que firmó el anverso del mismo cheque. Lo antes señalado motivó que se practicara nueva prueba caligráfica al señor Mosaquites Palma (fs.188-191), para ser analizadas en la Policía Técnica Judicial, cuyo resultado consultable en los folios 195-196 nos indica que la firma apreciable en el anverso del cheque bajo investigación no corresponde a la del señor Constantino Mosaquites Palma.
> ...
> En cuanto a la autoría y responsabilidad de MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, es importante destacar que la misma se desprende del contenido del dictámen (sic) grafocrítico practicado a la firma visible en el reverso del cheque investigado con la firma de la tarjeta base de su cédula de identidad personal en el cual se pudo establecer que la misma fue estampada por su persona y pese a lo manifestado por el abogado de la defensa de que la prueba así practicada carece de valor legal, procedemos a ponderarla conforme a los artículos 769 y 2092 del Código Judicial. Aunado a lo anterior, tenemos la declaración jurada del cajero del banco, DIOMAR POLO SOTO, quien asegura que la persona que aparece en la copia de la tarjeta-base de la cédula de identidad personal de fojas 88 (Miguel Algandona Ortiz) es la misma a la cual le cambió el cheque que originó esta investigación. ... ." (Fs. 13 a 20).

La Sala llama la atención sobre el hecho de que **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** fue declarado en rebeldía mediante Auto de 16 de abril de 1993 (Ver f. 10), razón por la cual el licenciado Guillermo Ríos lo representó en el proceso en el que éste fue juzgado en ausencia.

Ante tales circunstancias, sólo se realizó la prueba grafocrítica a la tarjeta base de la cédula de identidad personal de **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ**, pero fue imposible que se le realizara a **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** la prueba caligráfica que, al ser cotejada con la prueba grafocrítica de la firma estampada en el cheque N° 6956, arrojara mayores luces sobre su responsabilidad en la confección de la aludida firma; por lo tanto, a juicio de la Sala, el Tribunal de instancia valoró las pruebas grafocrítica y el señalamiento directo contra **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** hecho por el cajero del banco, DIOMAR POLO SOTO, en base a los principios de la sana crítica y, aparentemente, consideró la situación de reo rebelde del procesado como un indicio de culpabilidad en su contra.

No obstante, los principios de justicia y el descubrimiento de la verdad material que constituyen la plataforma sobre la cual se desenvuelve el derecho procesal penal, dan cabida a que la Sala considere que el informe pericial aportado por el recurrente es una nueva prueba que permite la revisión de la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal,

del Primer Circuito Judicial de Panamá, toda vez que desvirtúa una de las pruebas en las que se fundamentó la condena de **ALGANDONA ORTIZ.**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE PROCEDE LA REVISIÓN de la sentencia ejecutoriada de 29 de julio de 1993, dictada por el Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por el delito de falsificación de cheques, cometido en perjuicio de PESQUERA TABOGUILLA, S. A., en lo que respecta a la responsabilidad de MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, y DISPONE que la revisión de la causa la haga el Juzgado de Circuito de lo Penal que le sigue en turno, según lo establecido en el artículo 2461 del Código Judicial.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS, AGUSTÍN MONTILLA CAMPOS Y AGAPITO MARÍN FLORES, SINDICADOS POR EL DELITO DE PERJUICIO EN DETRIMENTO DE PACÍFICO DE LEÓN MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el licenciado **Venancio Villalaz**, en representación de **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, contra la sentencia de 28 de enero de 1982 (fs. 15 a 18), dictada por el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú, mediante la cual se condenó a **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, a sufrir la pena principal de cuatro (4) meses de prisión y al pago de cincuenta balboas (B/. 50.00) de multa a favor del Tesoro Nacional, como responsable directo del delito de perjuicios, que sancionaba y castigaba el Capítulo VIII, Título XIII del Código Penal, en detrimento de PACIFICO DE LEÓN MARÍN.

Observa la Sala que en dicha sentencia, de 28 de enero de 1982, también se condenó a AGUSTÍN MONTILLA CAMPOS y a AGAPITO MARÍN FLORES.

Mediante Resolución de 16 de septiembre de 1993 (fs. 24 a 25), esta Sala admitió el recurso interpuesto por el licenciado **Venancio Villalaz** en este caso.

El recurrente alegó en su escrito de revisión (fs. 1 a 2) que la decisión que condenó a su representado, como responsable del delito de perjuicios actual delito de daños, se fundamentó en las declaraciones de BERNARDINO MELA, DANIEL UREÑA SÁNCHEZ y SIMEÓN HERNÁNDEZ, las cuales según el recurrente fueron obtenidas en virtud de cohecho o violencia. Y, que en base a la sentencia mencionada, el señor PACIFICO DE LEÓN, presunta víctima del delito de perjuicios, ha perseguido y rematado los pocos bienes que poseía **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS.**

El recurrente acompañó su escrito de las declaraciones extrajudiciales rendidas ante el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera, por BERNARDINO MELA GONZÁLEZ, PAULINO MELA, CECILIO DE LEÓN, VÍCTOR DE LEÓN, EMELITO DE LEÓN MARÍN y DANIEL UREÑA SÁNCHEZ (fs. 5 a 14), las cuales solicitó que fueran ratificados oportunamente. Además, adjuntó copias autenticadas de la Diligencia de remate (fs. 19-20) y de la sentencia del Juzgado Municipal de Segunda Categoría del Distrito de Ocú, de 28 de enero de 1982 (fs. 15 a 18).

Mientras se surtía el trámite del recurso de revisión solicitado por **PEDRO**

MANUEL MONTILLA CAMPOS y para la continuidad del proceso, la hermana y heredera declarada de **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, GUILLERMINA MONTILLA CAMPOS, otorgó poder al licenciado **Venancio Villalaz** (f. 27), según lo establecido en el artículo 638 del Código Judicial. En tal sentido, para comprobar la condición de heredera de GUILLERMINA MONTILLA CAMPOS, se incorporó al expediente copia autenticada de Resolución del Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Chitré, de 2 de abril de 1993 (fs. 28-29), donde se declara abierto el juicio de sucesión intestada de **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, y se tiene como heredera del causante a beneficio de inventario a GUILLERMINA MONTILLA CAMPOS, y se encuentra inserto en el expediente el certificado de defunción de **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, expedido por la Dirección General del Registro Civil, donde consta que el mismo falleció de hemorragia cerebral en Los Llanos, Distrito de Ocú, el 6 de febrero de 1993 (F. 42).

También, el recurrente aportó copia autenticada de la sentencia de 28 de enero de 1982, dictada por el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú (fs. 15 a 18), cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> "El estudio de las constancias de éste (sic) proceso demuestra, que el acto criminal imputable a los acusados y procesados, ocurrió en la noche del ocho (8) de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1979), cuando éstos, provistos de instrumentos cortantes, presumiblemente pinzas alicates, cortaron o picaron en numerosas partes, una gran cantidad o extensión del alambre de púas que tendido o colocado a cuatro cuerdas, constituía las cercas del predio o de la propiedad denominado Las Platanillas, en la comunidad de Rincón Santo." (F. 15).

De la sentencia cuya revisión se pretende, se desprende que las pruebas sobre las que se basa fundamentalmente la condena de **PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS**, son los señalamientos directos de BERNARDINO MELA, DANIEL UREÑA SÁNCHEZ y SIMEÓN HERNÁNDEZ, y la manifiesta enemistad entre **MONTILLA CAMPOS** y el afectado PACÍFICO DE LEÓN MARÍN.

Sin embargo, a pesar de que las declaraciones extrajudiciales aportadas por el recurrente se dirigen a desvirtuar las declaraciones que se dieron en el proceso contra **MONTILLA CAMPOS** y, por lo tanto, podrían comprobar la causal del ordinal 3° del artículo 2458 del Código Judicial, para los casos en que posterior a la condena se demuestre que es falso algún testimonio de tal naturaleza que sin él no hubiese base suficiente para la condena, cabe señalar que, para estos casos en que se alegue como causal de revisión el falso testimonio, la prueba que debe aportarse es la sentencia ejecutoriada del tribunal competente que declara el falso testimonio, ya que no es a esta Superioridad la que le corresponde probar tal falsedad. No obstante, advierte la Sala que la causal alegada por el recurrente es la del ordinal 6° del citado artículo, que se refiere a los casos en que la sentencia se hubiere obtenido en virtud de cohecho o violencia.

Por el carácter extraordinario del recurso de revisión, son las partes las interesadas y las obligadas a probar las causales que permitirían la revisión de la sentencia, y a falta de prueba idónea en este caso, lo procedente es negar la revisión de la sentencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la revisión de la sentencia de 28 de enero de 1982 (fs. 15 a 18), dictada por el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú, mediante la cual se condenó a PEDRO MANUEL MONTILLA CAMPOS a sufrir la pena principal de cuatro (4) meses de prisión y al pago de cincuenta balboas (B/.50.00) de multa a favor del Tesoro Nacional, como responsable directo del delito de perjuicios, que sancionaba y castigaba el Capítulo VIII, Título XIII del Código Penal, en detrimento de PACÍFICO DE LEÓN MARÍN, y ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A VÍCTOR VÁSQUEZ PÉREZ, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA COOPERATIVA "NUESTRO PORVENIR" R. L. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma de abogados Macías y Macías ha formalizado recurso de revisión contra la sentencia de 30 de mayo de 1990, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la provincia de Colón, que condena a Víctor Vásquez Pérez a la pena de 18 meses de prisión y 50 días multa, como responsable de delito de apropiación indebida, cometido en perjuicio de la Cooperativa "Nuestro Porvenir R. L".

El libelo presentado a tales efectos identifica la sentencia cuya revisión se demanda, así como el tribunal que la pronunció, precisa el delito que motiva la condena y señala la sanción impuesta al condenado. El recurso se apoya fundamentalmente en que, luego de la sentencia condenatoria de Vásquez Pérez, "... se ha descubierto que todo lo realizado en contra del mismo, fue orquestado con antelación a su investigación y posterior juzgamiento" (f. 3). Para sustentar ese hecho fundamental, el letrado aporta copia simple de la sentencia atacada y una copia simple de una nota fechada 24 de febrero de 1987, dirigida a Miguel Alemán, entonces Jefe de la Zona Militar de Coclé (f. 3).

Luego de analizar detenidamente el libelo que propone el medio impugnativo extraordinario, se advierte que el recurrente no especifica cuál de las circunstancias previstas en el artículo 2458 del Código Judicial es la que sirve de apoyo a su recurso. La existencia del defecto anotado, que no puede escapar al análisis de rigor al que corresponde someter el libelo, aunado a que se argumenta que en el proceso se incurrió en una nulidad procesal, por considerar que el expediente se inició sin "querella del agraviado" (f. 2), revela que el recurrente pretende que la Sala examine criterios procesales que posiblemente fueron valorados por el juzgador de primera instancia, lo que no es el objeto del recurso pues, de ser así, esta vía extraordinaria quedaría convertida en una tercera instancia.

Así las cosas, y como quiera el libelo de revisión desatiende un requisito básico previsto en el artículo 2458 del Código Judicial, la Corte considera que no es posible la admisión de este recurso de revisión.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de 30 de mayo de 1990, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la provincia de Colón, que condena a Víctor Vásquez Pérez a la pena de 18 meses de prisión y 50 días multa, como responsable de delito de apropiación indebida cometido en perjuicio de la Cooperativa "Nuestro Porvenir R. L".

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR VÍCTOR PONCE BEITÍA,

SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 19 de junio de 1996, se recibe en la Secretaría de esta Sala, escrito de solicitud de recurso de revisión signado por el recluso **VÍCTOR PONCE BEITÍA.**

Mediante providencia de 1° de julio de 1996, se ordenó el traslado del negocio por el término de 15 días al licenciado Rommel Geovany Salerno, Defensor de Oficio, para que represente al recurrente y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso extraordinario interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente (f. 28).

OPINIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

El licenciado Rommel Geovany Salerno, en escrito presentado el 20 de setiembre de 1996 (fs. 30), expresa que después de una minuciosa lectura del proceso, llegó a la conclusión de que no existe causal legal para interponer el recurso.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Esta Sala ha señalado que el recurso de revisión es de naturaleza extraordinaria, y sólo es viable en los casos y por las causales que señala la Ley, además de reunir las formalidades legales correspondientes.

Al observar que en el caso que nos ocupa, no se está dentro de las causales consagradas en el artículo 2458 del Código Judicial, no procede admitir el recurso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el señor VÍCTOR PONCE BEITÍA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROGELIO MANUEL CLOUGH, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la solicitud de revisión presentada en su propio nombre por ROGELIO MANUEL CLOUGH ROBLETO, detenido en el Centro de Rehabilitación El Renacer, contra la sentencia del Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial, que lo condenó a la pena de cinco (5) años de prisión, confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por delito contra la Salud Pública (tráfico internacional de drogas).

Observa la Sala, que el detenido **ROGELIO MANUEL CLOUGH** presentó ante esta

Sala de la Corte Suprema un escrito en el mes de diciembre de 1995 pidiendo la revisión de su caso, y esta Colegiatura corrió traslado del mismo, por el término de quince días, al licenciado Rubén E. Pecchio, Defensor de Oficio. Sin embargo, el Defensor de Oficio designado no presentó escrito alguno durante el término concedido para la formalización del recurso de revisión. Por lo tanto, esta Sala, mediante resolución de 1° de marzo de 1996, no admitió el recurso y ordenó el archivo del expediente.

El recurrente señala en su escrito a manuscrito (fs. 1 a 20) que fue perseguido por las Antiguas Fuerzas de Defensa, por su condición de ex-militar y por su profesión de periodista, ya que era camarógrafo de noticias de T.V. Canal-13, televisora ésta que para el año 1989 estaba contra el Ex-General Manuel Antonio Noriega. Además, se refiere a ciertas irregularidades en su proceso, las cuales coinciden sustancialmente con lo señalado en el escrito por él presentado anteriormente ante esta Superioridad.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a esta Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, para tales fines, esta Colegiatura corrió traslado del presente negocio, por el término de quince días, al licenciado **Guillermo Ríos Valdés**, Defensor de Oficio, quien en su escrito de foja 23, manifestó:

> "hemos podido percatarnos, luego de haber revisado con detenimiento las piezas más importantes contenidas en el cuaderno penal, consideramos que no procede dicho Recurso, toda vez que el hecho que motivó la petición del señor **CLOUGH**, no está previsto ni contemplado entre los requisitos y formalidades establecidos en el **TITULO VII, CAPITULO II DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO JUDICIAL**, específicamente el Artículo 2458 del Código Judicial." (F. 23).

Por lo anterior, opina esta Sala, que no es posible ordenar la revisión del proceso, siendo que el mismo Defensor de Oficio designado para interponer el presente recurso de revisión, advirtió que no procede formalizar el recurso que trató de impetrar el propio detenido ROGELIO MANUEL CLOUGH ROBLETO.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por ROGELIO MANUEL CLOUGH ROBLETO y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ A. ORTIZ, CONDENADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, COMETIDO EN PERJUICIO DE NICOLÁS SÁNCHEZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de la Corte Suprema de recurso extraordinario de revisión que, en su propio nombre, anunció José Ángel Ortiz Espinosa contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, calendada 20 de mayo de 1996, que confirma la pena de 60 meses de prisión que le

fuera impuesta como responsable del delito de robo, cometido en perjuicio de Nicolás Sánchez Castillo.

Como quiera que tal iniciativa procesal requiere de su formalización por un abogado, el 11 de septiembre de 1996 el despacho sustanciador designó a la licenciada Miriam Jaén de Salinas, defensora de oficio de circuito, para que asumiera la representación del condenado "en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 31).

En cumplimiento de esa decisión, la defensora de oficio designada ha presentado escrito en el cual informa que "no es oportuno formalizar" (f. 33) el recurso de revisión que solicita el reo Ortiz, por estimar que fue "imposible" localizar "las nuevas pruebas que pudiesen demostrar ... que hubo falso testimonio de la testigo que hace cargos directo en contra de nuestro representado ..." (f. 35), absteniéndose así de cumplir con el requisito de formalización que le fuera encomendado.

Con vista de que la defensora de oficio no advierte causal legal que le sirva de fundamento para formalizar el recurso de revisión, la Corte no puede menos que considerar que el recurso extraordinario anunciado por el inculpado no es viable, por incumplir el presupuesto procesal previsto en el artículo 2458 del Código Judicial.

Por lo anterior, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por José Ángel Ortiz Espinosa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FRECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALFIN THEOPHILUS FALCONER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado por **ALFIN JHEOPHILUS FALCONER** en su propio nombre y a nombre de **DEVON CLIVE RICHARDS**, detenidos ambos en la Cárcel Modelo, contra sentencia que los condenara a diez (10) años de prisión por la comisión del delito de tráfico internacional de drogas.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, recibe esta Colegiatura el escrito calendado 15 de octubre de 1996 (f.6), en el cual el Licdo. **RUBÉN PECCHIO OSPINO**- Defensor de Oficio asignado por el Instituto de Defensoría de Oficio para interponer el presente recurso-, manifiesta lo siguiente:

> "OCTAVO: En la solicitud elevada a esa Sala por el reo ALTHIN JHEOPHILUS FALCONER solicita la revisión del proceso en base al numeral (sic) 5°. del Artículo 2458 del Código Judicial sin embargo no cuentan los reos con ninguna nueva prueba que pueda dar lugar a

una condena menos rigurosa.

El contenido de ese manuscrito mas bien hace alusión a una serie de circunstancias que pudieron fundamentar la apelación o un recurso de casación, mas no se cumplen ninguno de los presupuestos del Artículo 2458 del Código Judicial para formalizar un recurso de revisión.
...
Por todo lo expuesto concluímos (sic) manifestando a la Sala que no encontramos motivos de hecho o de derechoque satisfagan los presupuestos para elevar recurso de revisión del proceso seguido a ALTHIN JHEOPILUS FALCONER y DEVON CLIVE RICHARDS por Tráfico Internacional de Drogas. (Tentativa)."

..., luego de la lectura de las actuaciones judiciales pertinentes consideramos que no existe sustento legal para proceder a la revisión de este negocio penal al no encontrar sustento legal alguno de los citados por el artículo 2458 del Código Judicial.".

También llamó la atención el jurista sobre el hecho de que la sentencia condenatoria no ha sido debidamente traducida al idioma de los procesados, así como tampoco los sellos de notificación en los que no aparece indicación ni firma de intérprete público; sin embargo el recurso de revisión aparece en idioma español.

Toda vez que el defensor de oficio asignado a **ALTHIN JHEOPHILUS FALCONER y DEVON CLIVE RICHARDS**, al hacer el estudio respectivo del caso, advierte que no hay causal para interponerlo, estima esta Sala que no es posible acceder a la revisión del proceso que trataron de impetrar los sindicados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por ALTHIN JHEOPHILUS FALCONER y DEVON CLIVE RICHARDS y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HIPÓLITO MARTÍNEZ MURILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para que sea resuelta la alzada, ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, la sentencia condenatoria dictada en el proceso seguido a **LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de HIPÓLITO MARTÍNEZ MURILLO.

En audiencia pública celebrada el diecisiete (17) de agosto de 1994, un jurado de conciencia encontró culpable a **DOMÍNGUEZ** del cargo que se le imputa; y mediante sentencia fechada primero (1) de agosto de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia lo condenó a la pena principal de dieciocho (18) años de prisión y a la pena accesoria de nueve (9) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena principal. Para

dosificar la pena, el tribunal tomó en cuenta, además de los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal, que el procesado al momento del hecho era mayor de edad, que actuó con ventaja, no hubo justificación para tal conducta y el occiso no provocó la agresión.

La apelación fue sustentada tanto por el abogado defensor como por el propio procesado. Éste último indica en su manuscrito que considera injusta y exagerada la condena pues fue dictada en ausencia; que solo fue testigo del homicidio de HIPÓLITO MARTÍNEZ cuando un sujeto desconocido para él le disparó. Continúa relatando **DOMÍNGUEZ** que cuando él llegó el día de los hechos al supermercado "Hermanos Martínez", se encontró con un sujeto que al parecer estaba drogado y le invitó a robar al señor que estaba despachando, a lo cual DOMÍNGUEZ le respondió que él no quería hacer eso; asegura haber observado que el sujeto traía un arma, la cual cargó con balas sobre el mostrador del establecimiento, dejando allí uno de los proyectiles que él (DOMÍNGUEZ) tomó para advertirle al señor MARTÍNEZ del peligro; que cuando el señor MARTÍNEZ salió, hubo un forcejeo entre él y el sujeto, y que segundos después éste le disparó, cayendo el señor MARTÍNEZ al suelo y que allí fue donde él (DOMÍNGUEZ) se manchó de sangre. Afirma que se asustó mucho con lo sucedido y que por ello salió corriendo del lugar y se escondió; que fue conducido al Tutelar de Menores ya que solo tenía 17 años y que de allí se fugó porque tenía miedo del asesino y de la policía; reconoce haber cometido un error al huir en lugar de demostrar su inocencia.

Por su parte, el abogado defensor de **LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ**, el Licenciado JOSÉ FÉLIX HENRÍQUEZ C. sustenta su inconformidad con la sentencia indicando, básicamente lo siguiente: -que el motivo del hecho no fue el homicidio sino el robo; que el estado mental de su defendido no le permitía distinguir la gravedad del hecho; que el hecho de que **DOMÍNGUEZ** se hiciera pasar por menor de edad sin serlo, que mantuviera visible el collar robado al occiso, que tratara de desvanecer la mancha de sangre comiéndose la camisa, demuestra que se trata de posturas irracionales producto de una mente enferma, "digna de ser tratado por un Psiquiatra (sic)". Sigue diciendo el abogado que debió aplicársele la pena mínima (12 años), aumentada en una sexta parte "por la indefensión del occiso que constituye una agravante", y rebajarle una sexta parte por la desviación mental del acusado, o sea, por su ignorancia supina. Concluye afirmando el defensor que, en estos momentos **DOMÍNGUEZ** se encuentra arrepentido, "pero cuando pasen quince años más será un perfecto renegado, por razones obvias".

Corrido el traslado respectivo al Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, éste remitió su oposición a la apelación mediante escrito fechado 5 de febrero de 1996, en el cual manifiesta no compartir la opinión argumentada por la defensa,

> "toda vez que la conducta del procesado revela un comportamiento típico de aquel quien transgrede una norma penal y busca por todos los medios desestimar toda prueba en su contra, al punto de alterar las condiciones reales de modo, tiempo y lugar a su favor." (F. 640).

Indica el Fiscal que es común encontrarse con delincuentes que al momento de ser detenidos dicen ser menores de edad, para evadir de este modo la jurisdicción penal ordinaria, cosa que ocurrió en el presente caso, pues **DOMÍNGUEZ** con mucha habilidad logra fugarse de la institución de menores, imposibilitando así su captura. Opina el agente instructor que la actitud del procesado de mantener visible el collar robado, no constituye signo de trastornos mentales, como indicara la defensa; y que tampoco lo es el que intentara comerse la camiseta para desaparecer la sangre, pues es lógico que quien ha cometido un crimen trate de desaparecer la evidencia en su contra. Finalmente, indica el Fiscal que **LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ**,

> "demuestra una actitud correlativa con los comportamientos típicos de los delincuentes, tratando de evitar toda responsabilidad, simulando una minoría de edad que le permitió evadirse tanto de las autoridades competentes como de la investigación que se siguió en su contra." (F. 641).

De lo actuado en el sumario se colige que el día 8 de mayo de 1990, en la abarrotería "Hermanos Martínez" ubicada en el sector del Valle de Urracá, distrito de San Miguelito, murió el señor HIPÓLITO MARTÍNEZ, víctima de tres impactos de bala que fueran disparados por **LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ** al momento en que le robaba al hoy occiso un collar de oro de su propiedad.

Para resolver el presente recurso de apelación, la Sala estima necesario hacer algunas consideraciones.

En primer término, la culpabilidad del procesado fue decidida por un jurado de conciencia; veredicto que es de carácter autónomo y definitivo no sujeto a censuras. Por lo tanto, los reparos que formula el propio imputado en cuanto a las circunstancias y autoría del hecho punible, resultan improcedentes.

El homicidio que hoy nos ocupa, se encuadra dentro del supuesto contemplado en el numeral cinco (5) del artículo 132 del Código Penal, esto es, para "preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aún cuando éste último no se realice". La pena dispuesta para este delito (homicidio agravado) es la de doce (12) a veinte (20) años de prisión.

Esta Sala comparte el criterio de la Fiscalía en cuanto a que la conducta de **DOMÍNGUEZ** no evidencia ningún trastorno mental o ignorancia supina sobre lo que estaba sucediendo. Respecto a la aplicación de ésta última atenuante común (supina ignorancia del agente) pedida por el recurrente, la Sala es de la opinión de que, este factor y la poca o nula escolaridad del agente, se toman en cuenta para fijar la pena base, según el artículo 56 del Código Penal, y no como circunstancias atenuantes comunes, por lo que la atenuante de responsabilidad penal contenida en el numeral 6 del artículo 66 del Código Penal, no resulta aplicable al caso. Por el contrario, y como muestra de que el imputado conocía la gravedad de su acción, consta en autos que engañó a las autoridades de policía haciéndose pasar por menor de edad, para luego fugarse el Tribunal Tutelar de Menores; no cabe dudas, entonces, de que él comprendía totalmente la ilicitud de su acto.

Además, no es posible considerar, en este caso, al procesado como una persona con ignorancia supina, en lo que respecta al delito de homicidio, toda vez que, por aquella intuición natural que posee todo ser humano, la persona por muy ignorante que sea, entiende que la vida humana es un bien supremo que no se puede aniquilar, sin que se cause un daño grave e irreparable y sin que tal supresión atente contra las exigencias de la vida social, ya que la ilicitud de la acción de darle muerte a una persona es de todos conocida, sin necesidad de tener determinado grado de escolaridad ni mucho menos un aprendizaje especial.

En el presente negocio, consta la versión del procesado, en el sentido de que cursó hasta el tercer año del Colegio José Remón Cantera (f.74), sin embargo, en certificación expedida por el Director de dicho centro de enseñanza (f. 139) se indica que entre los años 1977 a 1991 no han tenido ningún estudiante con ese nombre; lo cual nos lleva a pensar que es probable que el nivel educacional del imputado sea mínimo o nulo.

No consta en autos que el procesado padezca de enfermedad mental alguna que lo coloque en un estado de inimputabilidad, y dicha circunstancia no se puede colegir, como pretende la defensa, de la actitud del procesado al mordisquear su camiseta para borrar la mancha de sangre, de mantener el collar robado a la vista, o de negar su mayoría de edad.

No obstante lo anterior, y el hecho de que el sindicado sea reo rebelde, la Sala considera que la pena fijada por el a-quo es alta si tomamos en cuenta que se trata de un delincuente primario, de corta edad a la fecha de los hechos, de quien no consta que haya asistido a un centro educativo y de que igualmente debemos considerar el hecho de que el jurado de conciencia lo encontró culpable como partícipe y no como autor material del homicidio que nos ocupa (ver foja 139).

De modo que consideramos que una pena base de trece (13) años de prisión

es cónsona con la gravedad y circunstancias del hecho punible, ya que a favor del procesado no concurren circunstancias agravantes o atenuantes que aplicar. Procede entonces, reformar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia de primero (1) de agosto de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de CONDENAR a LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ a la pena principal de TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de homicidio en perjuicio de HIPÓLITO MARTÍNEZ, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ (A) "BETO MAFIA", POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO) EN PERJUICIO DE MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ (A) "MARCOS TRAUMA". MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 9 de abril de 1996 (fs. 402 a 407), dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condenó a **JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ, (A) "BETO MAFIA"**, a la pena principal de veinte (20) años de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte (20) años y a la medida preventiva de carácter personal de prohibición de portar armas por un lapso de diez (10) años, ambas a cumplir con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, (A) "MARCOS TRAUMA".

Al culminar la audiencia pública, **JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ, (A) "BETO MAFIA"**, fue declarado culpable por los Jueces de Conciencia a quienes correspondió juzgarlo (f. 327), de haber causado la muerte de MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, (A) "MARCOS TRAUMA", quien falleció a consecuencia de "A. CHOQUE HEMORRÁGICO POR PROYECTIL BALÍSTICO PENETRANTE A TÓRAX Y ABDOMEN.", tal como consta en el Protocolo de Necropsia suscrito por el Dr. Andrés César Tucker Lay, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, visible de fojas 56 a 68 del expediente, todo lo cual fue el resultado de un hecho de sangre ocurrido en horas de la noche del día 23 de agosto de 1993, en Panamá Viejo, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito y Provincia de Panamá.

La licenciada **Bolivia Rosa Jaén de Bonilla**, Defensora de Oficio Suplente, solicitó en su escrito (fs. 418 a 422), la revocación de la Sentencia apelada, toda vez que debe aplicársele a su patrocinado la pena correspondiente al delito de homicidio simple que contempla el artículo 131 del Código Penal, y no la del homicidio agravado por motivo fútil, contenida en el numeral 3 del artículo 132, a que se refiere el Segundo Tribunal Superior en la Sentencia apelada. Según la recurrente, el móvil o el supuesto motivo fútil nunca fue probado fehacientemente en el proceso y, en tal sentido, se refiere a la declaración jurada de la prima del occiso NIDIA ARGELIS BOCANEGRA RUIZ, quien manifestó que creía que el motivo para la realización del hecho punible investigado era el problema que tienen los muchachos de Panamá Viejo con los de Villa del Rey. También, la recurrente se refiere a lo declarado por la madre del occiso, CORNELIA RODRÍGUEZ DE RUIZ, quien reiteró lo dicho por la prima del occiso y agregó que su hijo le había dicho que

si algo le pasaba, los responsables eran JAIRO, un muchacho de piel morena, "**BETO MAFIA**" y otros tres muchachos más.

Además, la recurrente alega que el hoy occiso nunca acudió ante las autoridades por las supuestas amenazas contra él y que los testimonios mencionados son sospechosos según el artículo 896 del Código Judicial. Otro aspecto que indica la licenciada **Bolivia Rosa Jaén de Bonilla** es que la madre y el padre del occiso, y el agente de la P.T.J. asignado al Hospital Santo Tomás, LEONARDO ROBINSON, señalaron únicamente que el hoy occiso les manifestó antes de morir, que había sido "**BETO MAFIA**" el que lo había agredido.

Finalmente, la recurrente sostiene que no se tomaron en cuenta para la fijación de la pena base, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 56 del Código Penal, siendo que en cuanto a las circunstancias de modo tiempo y lugar, "... no fue tomado en consideración porque el ilícito se cometió en un ambiente sumamente hóstil (sic) y criminógeno que facilitan la conducta de quienes viven allí". Sobre las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima, en la medida en que hayan influido en la comisión del hecho punible, "señala el Segundo Tribunal Superior que no se practicó evaluación criminológica exigencia de los artículos 2058 y 2078 del Código Judicial por lo que de la personalidad del procesado sólo se tiene lo que se infiere de su indagatoria"; y, sobre la conducta del agente, anterior, simultánea o posterior al hecho punible, contrario a lo señalado en la Sentencia apelada, "... observamos que el mismo pudo haber sido un menor infractor y no se acreditó que haya tenido Casos en el Tutelar de Menores e incluso hay sindicados que inmediatamente después de llegar a la mayoría de edad delinquen." (Fs. 421-422).

En oposición a la apelación de (fs. 425-426), el licenciado EDUARDO ULLOA, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, solicitó que la sentencia impugnada sea confirmada en todas sus partes, toda vez que:

> "... no compartimos lo dicho por la defensa en el sentido de que no ha sido comprobado el motivo fútil. Efectivamente se ha acreditado perfectamente en el expediente que **JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ (A) BETO MAFIA**, actuaron (sic) en contra de **MARCOS AUGUSTO RUIZ**, por el simple hecho de que este (sic) tenía una novia y amistades en Puente del Rey, lo que fue considerado como una ofensa por parte de **JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ** y su banda.
>
> Es decir ni siquiera puede hablarse de enfrentamiento o rencillas con el hoy occiso de manera directa, sino que todo surge a raíz de una absurda ley territorial que imponen las bandas del sector de Panamá Viejo, en el cual pretenden dirigir no sólo la conducta de sus miembros sino la de toda la comunidad.
> ...
> En cuanto a las circunstancias señaladas por la defensa como elementos que debieron considerarse al momento de evaluar la pena, es fácil advertir del contenido de la resolución impugnada que las mismas fueron debidamente valoradas por el Tribunal para la cuantificación de la pena." (F. 420).

En la sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal de doce (12) a veinte (20) años, por configurar la conducta delictiva el tipo del homicidio calificado del artículo 132, ordinal 3°, del Código Penal, es decir, por tratarse de un homicidio cometido por motivo fútil.

Para la dosificación de la pena, el a quo tomó en cuenta los parámetros previstos en el artículo 56 del Código Penal causas mediatas e inmediatas del delito descritas bajo los conceptos de aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible; la importancia de la lesión o del peligro; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos determinantes; las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que haya influido en la comisión del hecho punible y el valor o importancia de la cosa y, en tal sentido, señaló en la sentencia apelada lo siguiente:

> "Consta en autos que el procesado no registra antecedentes penales ni policivos pero es necesario señalar que al momento de ejecutar el hecho sólo contaba con 19 años de edad, o sea que, apenas había ingresado a la mayoría de edad.
>
> No puede obviarse que hirió de muerte a RUIZ RODRÍGUEZ estando éste en su hogar en compañía de su familia lo que implica un gran desapego hacia el prójimo, irrespeto a los principios de familia y, en general, una gran falta de valores." (Fs. 404-405).

En este orden, el Tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio agravado en veinte (20) años de prisión y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni atenuantes ni agravantes que aplicar, fijó la pena líquida a cumplir en veinte (20) años de prisión.

También, fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en veinte (20) años, y decretó la medida preventiva de carácter personal de prohibición de portar armas por un lapso de diez (10) años, ambos a cumplir con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión.

No obstante el hecho de que la recurrente se contradice en sus argumentos sobre el motivo fútil, puesto que por un lado niega que se haya comprobado fehacientemente en autos el móvil del ilícito y se refiere a que no se ha comprobado que el hecho de las supuestas rencillas existentes entre los muchachos de Panamá Viejo y Puente del Rey fueron el móvil del homicidio y, sin embargo, hace referencia a las declaraciones juradas de la prima del hoy occiso, NIDIA ARGELIS BOCANEGRA RUIZ, y de la madre de éste, CORNELIA RODRÍGUEZ DE RUIZ, las cuales dan fe de dicha circunstancia, tachando luego dichos testimonios de sospechosos, según lo establecido en el artículo 896 del Código Judicial; advierte la Sala, que la recurrente confunde la existencia de un motivo fútil, que "... es aquel que no es importante, que es intrascendente o que no es relevante para determinar el actuar del sujeto", con el hecho de "... que el motivo que llevó al homicida a causar la muerte no esté comprobado".

En este sentido, consideramos oportuno transcribir lo dicho por el representante del Ministerio Público, Licenciado Eduardo Ulloa, durante la audiencia pública celebrada en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el día 6 de febrero de 1996, quien al concedérsele el uso de la palabra para su primer alegato, hizo referencia, entre otros aspectos, a los supuestos problemas de pandillas existentes entre el hoy occiso y el sujeto activo del delito conocido como "**BETO MAFIA**", en los siguientes términos:

> "Una historia de problemas que incluso nos atreveríamos a decir no tenía cuasa en algo que los implicara directamente a ellos dos sino que era una historia de problemas motivada por aquella cultura de pandillas y bandas que desgraciadamente se ha venido dando en nuestro país o se ha venido copiando en nuestro país de otras sociedades y que antes no veíamos. En el sector de Panamá Viejo existe efectivamente el área de Panamá Viejo y el área de Puente del Rey, cada uno de esto lugares, tiene lo que se le llama sus bandas o lo que podíamos denominar pandillas porque psicológicamente se suele denominar bandas que son las que se dedican o que se reúnen exclusivamente para cometer actos ilícitos. En muchas de nuestras barriadas empiezan en realidad como pandillas, es una reagrupación que hacen los jóvenes, que generalmente provienen de lugares donde existen problemas económicos, donde existen problemas de integración familiar, de escolaridad limitada que los lleva a ellos a reunirse y a identificarse entre si (sic), son jóvenes que pueden ser ... que no destacan en un momento dado por ser sobresalientes en los estudios, por ser sobresalientes en el deporte o por ser sobresalientes en su trabajo, entonces ellos buscan la manera de ser importantes dentro de la comunidad y la manera que ellos encuentran de ser importantes dentro de la comunidad es agruparse en este tipo de pandillas, en donde crean verdaderas reglas de disciplina interna

> y en donde crean incluso territorio, donde si tu perteneces a esta pandilla tu no puedes cruzar al territorio de la otra pandilla y así te señalan, si tu eres de Panamá Viejo, no puedes cruzar Puente del Rey, porque como te vea en Puente del Rey tu me las vas a pagar porque estas invadiendo mi territorio. Pero, Marcos Augusto Ruiz Rodríguez, tenía un problema, que él viviendo en Panamá Viejo, tiene una prima y una novia que vive en Puente del Rey, razón por la cual Marcos Augusto Ruiz constantemente iba a Puente del Rey; se da un problema entre los muchachos de Panamá Viejo y Puente del Rey, se da una pelea, como Marcos vive en Panamá Viejo los muchachos del lugar le reclaman a él que no lo quieren ver más con los muchachos de Puente del Rey porque con ellos habían tenido la pelea, por culpa de ellos a uno se lo habían llevado detenido entonces, surge una animadversíon (sic) de la banda de Panamá Viejo hacia Marcos Ruiz por la amistad que este (sic) tenía o por ser éste habitual visitante del lugar del Puente del Rey. Por eso les decía que no surge propiamente de una situación que ellos dos provocaron sino, surge de una cultura errada que se da, él había roto las leyes que regula (sic) a las pandillas, por eso cuando se da la pelea, cuando se da ese desenlace que no es inventado por la prima de él porque inclusive existe otro testigo Heraclio Antonio De León, quien rinde declaración a foja 35 y quien señala que efectivamente se había dado una discusión en donde el imputado le había reclamado al hoy occiso que quienes habían sido los sujetos, que él tenía que saber porque él siempre parqueaba con ellos. Entonces estaba esa pica, estaba esa situación con el hoy occiso, lo veían como un traidor que viviendo acá frecuentaba y visitaba a ellos, entonces, existía el motivo. Un motivo totalmente fútil, un motivo irrelevante que jamás podía justificar el quitarle la vida a un ser humano pero dentro de esa cultura, dentro de esa necesidad de sentirse líder, de sentirse el jefe de la pandilla, lo traiciona a él y lo lleva a tomar una acción en contra de Marcos, esa acción de efectuarle un disparo y causarle la muerte." (Fs. 3334 a 336).

Advierte esta Superioridad que en estos casos debe existir una cierta jerarquía de los motivos como punto de partida para el juzgador al momento de determinar la calidad del motivo que origina un homicidio y, sin perjuicio de las circunstancias de cada caso en particular, podemos indicar que un motivo de poca importancia da lugar a que se reconozca la agravante específica del motivo fútil, no así los casos en que se da la ausencia de motivos comprobados ni los casos en que exista un motivo que tenga cierta relevancia en razón del fin, que generalmente es la defensa de los bienes individuales, propios o ajenos, en las categorías de la vida, la libertad, el honor y la propiedad, ni los motivos que son reconocidos en la Ley como eximentes de responsabilidad penal o causas de justificación de la antijuricidad, es decir, el cumplimiento del deber, el estado de necesidad y la legítima defensa (Capítulo II, Título II del Código Penal). A pesar del criterio indicado, hay que tomar en consideración la situación especial que se da en este caso en particular, que guarda relación con un grupo sub-cultural conformado por adolescentes, que se reúnen en las denominadas "pandillas", para evadir los problemas económicos, políticos, sociales y culturales, que cada día son mayores en el conglomerado social. En dichos grupos, vemos una clara disgregación de la escala de valores con la creación de normas de conducta contrarias al orden social, cuyo fin no es otro que el fortalecimiento de la pandilla, en menosprecio de los demás miembros de la sociedad. Cabe advertir, que los que conforman esos grupos sociológicos son personas que presentan una inversión de los valores y para quienes su vida gira en torno a la pandilla, olvidando su papel dentro de la sociedad, por lo que para ellos la defensa de lo que consideran su medio social y su afán de sobresalir dentro del grupo, puede conformar un motivo para realizar conductas que si bien son contrarias al interés público, para ellos constituyen motivos importantes. En ese ordenamiento, si lo que decide la actividad del sujeto activo del delito son las circunstancias o modalidades del acto, concluimos que ciertamente en el caso sub-judice el conflicto que se dio entre las pandillas de Panamá Viejo y Puente del Rey, donde mortalmente resultó herido MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, responde indiscutiblemente a conceptos valorativos errados que en no pocas ocasiones se advierte dentro de la realidad social que se vive actualmente en

nuestros países.

En cuanto al motivo fútil, el autor ORLANDO GÓMEZ LÓPEZ sostiene lo siguiente:

> "Lo que para un campesino representa un algo valioso, no tiene porqué tener el mismo significado para un intelectual, pues es la cultura la que suministra un grado de valor determinado a un hecho, situación, reacción o motivo. Así una palabra puede representar un móvil suficiente por su poder injuriante para las gentes de una región o clase, y no poseerlo para los individuos de otro grupo o región. El juez, entonces, debe examinar para justipreciar el significado del móvil, las circunstancias del hecho, las costumbres particulares del núcleo social al cual pertenece el individuo, así como también los valores más generalizados en la sociedad." (Gómez López, Orlando. El Homicidio, tomo I, p. 402).".

Por lo tanto, la Sala es de la opinión de que debe aplicársele al procesado la norma que tipifica el homicidio simple (Art. 131 del C.P.) y no la del homicidio agravado por motivo fútil (Art. 132, ord. 3 del C.P.), toda vez que en este último caso se toma en consideración la existencia de aspectos que no tienen relevancia para motivar al agente a cometer un homicidio y, en el caso bajo estudio, aquellas circunstancias motivadoras de la acción, baladíes, insignificantes, nimias o de poca importancia, que son las que definen tal agravante punitiva y que inducen a la comisión del homicidio, no se encuentran comprobadas fehacientemente en el proceso como tales y, por el contrario, puede decirse que los problemas existentes entre las pandillas mencionadas -lo cual se desprende de las declaraciones juradas de la prima del occiso, NIDIA ARGELIS BOCANEGRA RUIZ (fs. 3 a 7); la madre del occiso, CORNELIA RODRÍGUEZ DE RUIZ (fs. 9 a 11); y, el menor, HERACLIO ANTONIO DE LEÓN HERRERA (fs. 35 a 37)-, constituyen una situación que realmente alteraba emocionalmente al sujeto activo del delito, junto con la manifiesta enemistad existente entre éste y MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ.

En este orden de ideas, debe reconocerse lo argumentado por la recurrente en cuanto a que se trata de un homicidio simple y no de uno agravado. No obstante, la conclusión a la que arriba la Sala no justifica el proceder del procesado -ya que por más humilde que sea la persona y por muy valioso que sea para ella el bien objeto de defensa, las leyes de la pandilla en momento alguno pueden constituir circunstancia que justifique causar la muerte a otra persona, pues la vida no es sólo un bien jurídico tutelado por nuestro ordenamiento penal, sino también un derecho natural o derecho humano que tiene todo hombre por el hecho de existir y que, por lo tanto, sobrepasa todos los ordenamientos jurídicos existentes- tan sólo sirve para calificar el delito como homicidio simple (Art. 131 del Código Penal), puesto que en este proceso no ha podido determinarse agravante específica alguna que aumente la peligrosidad del agente al cometer el ilícito.

En este sentido, se califica el delito como homicidio simple, que conlleva una sanción penal inferior a la que da lugar el homicidio calificado.

Lo anterior nos conduce entonces a la necesidad de modificar la pena, tomando en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal.

Finalmente, sobre los demás aspectos señalados por la recurrente, como la circunstancia de delincuente primario del sujeto activo del delito, las circunstancias de tiempo modo y lugar, condiciones personales de los sujetos activo y pasivo del delito, y la calidad de los motivos determinantes, la Sala los tomará en cuenta al fijar la pena base, según el artículo 56 del Código Penal, en virtud de la discrecionalidad propia de todo juzgador, dentro del intervalo penal de cada delito.

Además, tomaremos en cuenta para la dosificación de la pena en abstracto, la prohibición de la reformatio in pejus, que se desprende del artículo 2428 del Código Judicial.

Por lo anterior, estima la Sala que una pena base de (10) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito, reconociéndose la calidad de delincuente primario del encausado y demás circunstancias del hecho, aunado lo anterior, al valor del bien jurídico tutelado. En este orden, por existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, se aumenta la pena base de diez (10) años en una quinta parte, con la aplicación de la agravante común contenida en el ordinal 7°., artículo 67 del Código Penal, por perpetrar el hecho punible con auxilio de otras personas que faciliten la ejecución o procuren la impunidad, toda vez que **JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ** (A) "BETO MAFIA", estando frente a la casa de MARCOS AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, le pidió al menor "TITO CURILA" que llamara al hoy occiso y, al salir éste, le disparó.

En razón de esto, se fija la pena líquida a cumplir en doce (12) años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia apelada de 9 de abril de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de condenar a JOSÉ FLORENCIO QUIÑONEZ DÍAZ, (A) "BETO MAFIA", a la pena principal de doce (12) años de prisión; y, la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENUEL MORALES LEZCANO, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JULIO ANTONIO SÁNCHEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante sentencia proferida el 20 mayo de 1996, impuso la pena de diez (10) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años una vez cumplida la principal, a **ENUEL MORALES LEZCANO**, quien fue declarado culpable por un jurado de conciencia, por el delito de homicidio perpetrado en detrimento de **JULIO ANTONIO SÁNCHEZ** (fs. 760-766).

Disconformes con esa decisión jurisdiccional anunciaron recurso de apelación al momento de notificarse de la misma, el imputado y el licenciado Florencio Castillo E., acusador particular.

Observa la Sala, que de conformidad con el edicto número 616 el término legal para presentar el escrito del recurso de apelación anunciado vencía el tres (3) de julio de 1996 para ambas partes (f. 773-vt). El único escrito de apelación presentado en tiempo oportuno fue el presentado por la defensa técnica. No obstante, en providencia de 4 de julio de este año se afirma que el acusador particular presentó escrito sustentatorio y se le corrió traslado al representante del Ministerio Público quien se notificó el 8 de julio, pero no presentó escrito alguno. (F. 779).

Luego se corrió traslado al acusador particular del escrito de la defensa (f. 781), quien presentó sus argumentos de oposición el 1 de agosto (fs. 783-784).

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

La licenciada Micaela Morales Miranda, defensora de Oficio, estima que su representado es merecedor a la aplicación de la atenuante establecida en el numeral 7° del artículo 66 del Código Penal, que se refiere a las eximentes incompletas, entre las cuales según jurisprudencia de la Corte, se encuentra la embriaguez.

Señala que consta en el expediente que el día y a la hora de los hechos, el señor Morales se encontraba libando licor. Esto lo corrobora el médico psiquiatra forense quien determinó que al momento de ilícito aquél se encontraba en el segundo grado de embriaguez.

Agrega la recurrente que al momento de fijar la pena no se tomó en consideración la calidad de los motivos determinantes y circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni las condiciones personales del sujeto activo del hecho, tampoco el hecho de que su defendido salió lesionado producto del enfrentamiento, ni su grado de escolaridad y las características de ambos contendientes referentes a la edad, estatura y peso (fs. 774-776).

OPOSICIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Por su parte, el licenciado Castillo, se opuso a que el delito investigado se encuadre en el artículo 131 del Código Penal que tipifica el homicidio simple e indica que la conducta ejecutada por el procesado corresponde al homicidio calificado de que trata el artículo 132 ordinal tercero. Lo que estima se acredita con la propia declaración indagatoria en la "**que no ofrece una razón lógica para ejecutar el atroz delito**" y por los testigos que informan que Morales sin razón alguna le quitó la vida al señor Sánchez.

Considera también, que se le debe aplicar la circunstancia agravante comprendida en el ordinal 9 del artículo 67 del Código Penal, al afirmar que la historia de bebedor del procesado y su historial penal demuestran que el procesado acostumbraba embriagarse deliberadamente para ejecutar delitos contra las personas y por tanto no se trata de una embriaguez fortuita (fs. 783-785).

La defensa técnica objetó lo anterior, indicando que no se debe admitir lo solicitado por el acusador particular, basada en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, Sala Penal, al respecto (fs. 787-791).

HECHOS

El presente proceso penal se refiere a la muerte violenta de Julio Antonio Sánchez ocurrida en horas de la madrugada del 16 de enero de 1994, a consecuencia de herida producida con arma blanca, hecho ocurrido en una actividad bailable realizada en la comunidad de San Martín, distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. Por ese ilícito fue llevado al plenario Enuel Morales Lezcano, quien fue declarado culpable por un jurado de conciencia en audiencia oral y pública celebrada el 6 de febrero de 1996.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Se procede al análisis de los puntos disentidos tal como lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial.

El tribunal de primera instancia subsumió la conducta del procesado en el tipo penal previsto en el artículo 131 del Código Penal y aplicó la pena discrecional de diez (10) años de prisión. Luego consideró no se daba ninguna de las circunstancias agravantes ni atenuantes, manteniendo así, la pena señalada.

La defensa técnica ha solicitado se le tome en consideración la circunstancia atenuante denominada eximente incompleta, contemplada en el numeral 7° del artículo 66 del mencionado código, por el estado de embriaguez voluntaria de Morales Lezcano en estado avanzado o segundo estadio.

Ahora bien, a lo largo del proceso se constata que efectivamente Morales Lezcano había ingerido licor, lo cual no sólo lo afirma el procesado sino los testigos presenciales y el agente que efectuó la detención, la cual se dio aproximadamente a las 8:45 a. m. del día de los hechos. El agente Víctor Julio Carrera Vásquez afirma, al referirse al victimario, que Morales Lezcano "**mostraba síntomas visibles de haber tomado gran cantidad de alcohol**" (f. 150).

No observa la Sala a través de los medios probatorios incorporados al expediente que el agente se hubiese colocado en estado de ebriedad preordenada para cometer el ilícito **-actio libera in causa-**, luego entonces se opta por la consideración de las eximentes incompletas. En este caso se registra un estado de embriaguez voluntaria con motivo de una festividad bailable, en la que el agente ingirió exceso de licor que disminuyó su capacidad de comprender a plenitud la ilicitud de sus actos, pero promovió una riña donde hizo uso de arma blanca, lo cual no permite reconocer una eximente incompleta.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ARCADIO GALLARDO PINZÓN, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, EN PERJUICIO DE SEVERINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Luego que un jurado de conciencia declarara culpable a **LUIS ARCADIO GALLARDO PINZÓN** (a) "Mamero" por los delitos de **Homicidio Agravado, Robo y Asociación Ilícita** en perjuicio de Severiano Rodríguez González; el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia del 22 de mayo de 1996 lo condenó a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, una vez cumplida ésta y al comiso del arma utilizada en la ejecución del hecho punible (fs. 497-506).

Tal decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse por el procesado y su abogado defensor, el licenciado Eliécer Chacón Arias, quien dentro del término legal presentó el escrito respectivo.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Chacón Arias señala que el jurado de conciencia conforme al cuestionario presentado declaró culpable a su representado de haber participado en el hecho delictivo, sin determinar el grado de participación; dado que no podía declararlo homicida porque quien le quitó la vida al conductor Rodríguez González fue Axel Yandil Ramos Moreno (a) "Bibi" cuyo proceso se siguió en la jurisdicción de menores.

Por tanto, determinar el grado de participación quedó en manos del Magistrado Presidente de la audiencia, quien afirmó que la calidad de

participación de Gallardo Pinzón es la de cómplice primario; afirmación que según el apelante, no está sustentada, siendo un comodín para arribar a una condena de veinte (20) años de pena carcelaria.

Señala que el magistrado calificó a Gallardo Pinzón como cómplice primario sin ninguna sustentación, remitiéndose al texto legal que señala que tanto los cómplices primarios como los instigadores responden por la comisión de un delito como si lo hubiere ejecutado. Luego calificó el delito de homicidio como agravado el cual tiene una penalidad de 12 y 20 años de prisión; fija la pena base en 15 años, construyendo así una penalidad injusta de 20 años.

Estima que la sentencia carece de técnica y está privada de elementos esenciales de metodología jurídica. Considera que el Magistrado ponente esta excedido y que sus apreciaciones no se coligen con lo plasmado en el expediente.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Cecilia Raquel López F., Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, estima que la participación de Gallardo Pinzón es de cómplice primario lo que encuadra perfectamente en lo normado en el artículo 39 del Código Penal. Señala que ello es así desde el momento en que Gallardo Pinzón incita al menor Axel Ramos a participar en el delito -convirtiéndose en instigador incluso- y le da el arma homicida para que hiciera uso de la misma de ser necesario. Siendo ésta la tónica de los delincuentes adultos en el momento actual, de utilizar a los menores de edad en la comisión de hechos punibles planeados por adultos, por ser aquellos inimputables.

En ese sentido advierte que la conducta asumida por Gallardo Pinzón al instigar al menor Ramos a tomar parte en el hecho punible, poniendo en sus manos un arma de fuego, lo lleva a la intención indirecta positiva a compenetrarse con el dolo indeterminado, debiendo prever que el hecho punible planeado, deviniera en la comisión de otro más grave, como lo fue el homicidio de Severiano Rodríguez. Indica que la agravante no se consideró en la tasación porque excedía el máximo de lo establecido en la ley, para la pena de prisión.

Solicita así, se confirme en todas sus partes la sentencia recurrida (fs. 525-531).

HECHOS

El día 24 de enero de 1993 en horas de la noche al conducir un autobús colectivo por el área de la barriada ERSA ubicada en San Joaquín, corregimiento de Pedregal; el señor Severiano Rodríguez González fue asaltado por tres sujetos armados **-dos menores de edad y un adulto-** y al tratar de impedir que uno de los sujetos se llevara el dinero que estaba en la máquina monedera, le golpeó con un hierro pero uno de los fascinerosos le efectuó un disparó que le causó la muerte, emprendiendo los tres la fuga.

El sujeto mayor de edad resultó ser **Luis Arcadio Gallardo Pinzón**, a quien el Segundo Tribunal Superior de Justicia llamó a responder en juicio criminal por los delitos de homicidio, robo y asociación ilícita en auto de 12 de enero de 1994, el cual al ser apelado por la defensa técnica fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolución de 21 de diciembre de 1994 (fs. 330-333); y por esos tres delitos fue declarado culpable por un jurado de conciencia en audiencia oral y pública celebrada el 18 de abril de 1996.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

El tribunal a-quo motivó la pena impuesta de la siguiente manera:

> "A la luz del numeral 5 del artículo 132 del Código Penal, el homicidio es agravado, porque con el mismo trató de facilitarse la comisión del delito de **robo** y ello obliga a fijar la pena entre 12 y 20 años para **Gallardo Pinzón** ya que su actuación es la de cómplice primario y, aún cuando se demostró en autos que no efectuó el

disparo, conforme al artículo 61 de la misma excerta legal, le corresponde la pena señalada para el delito.

Son tres los cargos formulados contra Gallardo y por todos fue declarado culpable, de manera que la pena será puesta en la forma que prescribe el artículo 64 del Código Penal. El más grave de estos ilícitos lo es el homicidio y este Tribunal parte discrecionalmente de la pena de 15 años, a la cual debe agregarse la mitad de cada una de las penas establecidas en la ley sustantiva para los otros ilícitos. Así tenemos que por el delito de **robo** se agregan 42 meses y por la asociación ilícita 18 meses, que hacen 60 meses (5 años) y un gran total de 20 años. Esa pena no sufre ninguna circunstancia atenuante y, aunque le es imponible la agravante contemplada en el numeral 5 del artículo 67 del Código Penal, la pena máxima señalada por la ley es hasta 20 años" (fs. 504-505).

FUNDAMENTO DE LA SALA

El examen de la Sala recaerá sólo sobre los puntos objetados por el recurrente, de conformidad con la norma procedimental que regula el recurso de apelación (art. 2428 del C. J.).

En primer lugar, el apelante desde el principio de su escrito señala que no pretende criticar el fallo de culpabilidad dictado por el jurado de conciencia sino la tasación de la pena que realizó el tribunal a-quo. No obstante, no entendemos el por qué afirma que el dolo siempre estuvo ausente en el resultado del homicidio y que en ese sentido el magistrado sustanciador ignoró el artículo 30 del Código Penal.

En reiterados pronunciamientos, esta Sala ha manifestado que el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado de conciencia impide al tribunal, al momento de imponer la sanción penal, considerar nuevamente ese aspecto, dado que sería un desconocimiento a la decisión soberana de esa institución. Ello tiene su basamento en el artículo 2389 del Código Judicial que ordena que luego de un veredicto condenatorio emitido por ese cuerpo de jueces legos, es el tribunal de la causa quien debe dictar la sentencia; además circunscribe el recurso de apelación de ese fallo, sólo a la determinación judicial de la pena impuesta.

No se puede obviar, que no son los delitos de homicidio culposo sino dolosos los que se presentan a consideración del cuerpo de jurados de conciencia (art. 2320 C. J.).

En cuanto al grado de participación de Gallardo Pinzón, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

La participación criminal, como dispositivo amplificador del tipo, no es más que la intervención dolosa de una o varias personas en un delito doloso ajeno. Por ello, el carácter accesorio de la participación, toda vez que depende de la existencia del autor para que pueda enjuiciarse al partícipe.

Nuestro Código Penal establece entre las formas de participación la complicidad **-primaria y secundaria-** y la instigación (arts. 39, 40 y 41). Determina que los cómplices primarios e instigadores sean sancionados con la pena que la ley señala al hecho punible (art. 61).

El mencionado código define a los cómplices primarios como aquellos "**que tomen parte en la realización del hecho punible o presten al autor o autores un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse**".

A objeto de emitir un juicio objetivo sobre el aporte de Gallardo Pinzón en la realización del homicidio del conductor Rodríguez González, veamos el contenido del informativo que rindiera el menor Axel Moreno Ramos el 16 de junio de 1993, quien como dijo el recurrente, fue el que cometió el homicidio.

El menor Ramos afirma que su intención era robarle al conductor del bus y

que le disparó porque se resistió al asalto, al golpear a Gallardo Pinzón. Agrega, que este último no sólo le dio el revólver sino que planeó el robo al autobús y lo invitó a participar en el mismo; que el único que no tenía arma de fuego era Gallardo Pinzón (fs. 398-399).

Es indudable que la participación de Gallardo Pinzón no sólo instigó al menor Ramos a cometer el robo sino que le proporcionó dolosamente el arma sin la cual el homicidio del conductor Rodríguez González no se hubiera realizado. Es lógico suponer que al suministrarle el arma era con el objeto de impedir **-de darse las circunstancias-** que el robo no se frustrara, tal como aconteció.

Aclarado el grado de participación de Gallardo Pinzón, pasamos al análisis de los otros puntos objetados, no sin antes hacer una especial consideración sobre lo siguiente:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia en la parte resolutiva del auto de 12 de enero de 1994 llama a responder en juicio criminal a Gallardo Pinzón por los delitos genéricos de homicidio, robo y asociación ilícita. Sin embargo, en la parte motiva del mismo, anunció que el encausamiento sería también por el delito de robo en grado de tentativa (fs. 272-273). Este auto fue confirmado por esta Sala en resolución de 21 de diciembre de 1994 (fs. 330-333).

Del extenso escrito de apelación, que refleja el enojo que embarga al recurrente, se infiere que disiente de la calificación de homicidio agravado hecha a la conducta de su defendido, pero no expone razones.

Se percata la Sala, en esta oportunidad, que en el caso sub-judice se está ante un concurso aparente de tipos penales, es decir, que **"aparentemente, son aplicables diversos preceptos penales, pero luego de una correcta interpretación se deduce que sólo uno de ellos es realmente aplicable"** (Muñoz Conde. Teoría General del Delito. Editorial Temis. Bogotá-Colombia. 1990. Pág. 222).

El concurso aparente de tipos penales es un problema de interpretación de la ley penal que tiene como fundamento no violentar el principio non bis in idem **-doble juzgamiento-**. Nuestro código punitivo es poco lo que dice al respecto, pero para solucionar el conflicto interpretativo acoge en su artículo 4° el principio de especialidad **"según el cual cuando un supuesto de hecho produce los elementos típicos de otro más general y caracteriza de manera más precisa al hecho o al autor añadiendo elementos adicionales, es este el que se aplica y no aquel"** (Fernando Velázquez Velázquez. Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá-Colombia. 1995. Pág. 595).

Consecuencialmente correspondía aplicar el homicidio agravado de que trata el numeral 5° que establece pena de 12 a 20 años de prisión y que se da **"para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aún cuando éste último no se realice"**.

A este respecto, Muñoz Conde en la obra ya citada, señala que **"cuando la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de ellos, no se hubiese cometido el otro, se debe considerar todo el complejo delictivo como una unidad delictiva y no como dos delitos distintos"** (pág. 223). Se aprecia así, que en el presente caso el homicidio es un delito conexo porque obra como instrumento o medio de ejecución de otro delito.

Así las cosas, y dado que el jurado de conciencia cuya voluntad nos está vedado alterar, responsabilizó a Gallardo Pinzón por el delito de homicidio y robo, es de justicia subsumir su conducta en el tipo penal del homicidio simple cuya sanción es de 5 a 12 años de prisión, para no juzgarlo doblemente como hizo el tribunal de primera instancia.

En cuanto al delito de robo, el cuestionario que presentó el Magistrado Presidente de la audiencia al jurado de conciencia a objeto que se pronunciara sobre la culpabilidad del procesado Gallardo Pinzón, es del tenor siguiente: **"¿si es culpable o inocente de haber participado en el intento de robo cometido en perjuicio del señor Severino Rodríguez González?"**.

Significa entonces, que fue hallado culpable del delito de robo en grado de tentativa, no entendiéndose por qué se le impuso la pena que corresponde al delito consumado.

DOSIMETRÍA JUDICIAL

A objeto de imponer la sanción penal a que se ha hecho acreedor el procesado Gallardo Pinzón, debemos recurrir a los artículos que para tal fin contiene nuestro código punitivo.

En primer lugar, al ser declarado culpable el procesado Gallardo Pinzón por tres acciones cada una constitutiva de un delito autónomo **-homicidio, robo y asociación ilícita-** lo cual denomina la doctrina como Concurso Material, lo resuelve y contempla nuestro Código Penal en su artículo 64. Como el problema de los concursos se centra en la determinación de la pena, la normativa en comento acoge el principio de acumulación jurídica.

En este caso se trata de un concurso material heterogéneo porque se encuadran en tres tipos penales que no tienen la misma pena. Se debe aplicar así, lo normado en el literal b) del artículo 64 en el sentido de imponer la pena para el delito más grave de los tres cometidos y aumentar hasta la mitad de las penas sumadas que le corresponderán por los dos restantes.

De los tres delitos cometidos por el procesado el más grave de ellos es el del homicidio de Rodríguez González, cuya sanción como cómplice primario oscila entre 5 a 12 años de prisión (arts. 61 y 131).

El artículo 56 indica al juzgador los factores que debe tomar en consideración para aplicar la pena dentro de los límites señalados para cada delito.

Si bien no se cuenta con un concepto jurídico que establezca de manera exacta la cantidad de pena que se deba aplicar. En este caso concreto, al ponderar los siete factores de manera global se establece la pena base en doce (12) años de prisión.

En cuanto al delito de robo agravado en grado de tentativa (arts. 44 y 186) el artículo 60 obliga a reprimir este dispositivo amplificador del tipo **con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de los dos tercios del máximo de la establecida para el correspondiente hecho punible"**.La pena por este delito queda en tres (3) años y cuatro (4) meses.

Como el apelante objetó de manera general la pena impuesta, por el delito de asociación ilícita se impondrá la pena de un (1) año de prisión.

Al proceder a la regla de la acumulación jurídica ya señalada, la mitad de la suma de estos dos últimos delitos es de dos (2) años y dos (2) meses; que sumados a la pena del delito más grave da un total de catorce (14) años con dos (2) meses de prisión. Al no darse circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal **-arts. 66 y 67-** la pena líquida a imponer es de catorce (14) años y dos meses de prisión. En ese sentido se reformará el fallo impugnado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dispone Reformar la sentencia apelada en el sentido de:

1. Condenar LUIS ARCADIO GALLARDO PINZÓN de generales conocidas en autos, como Cómplice Primario del delito de HOMICIDIO en perjuicio de Severiano Rodríguez González y por el delito de ROBO en grado de tentativa y asociación ilícita.

2. Fijar la pena en catorce (14) años con dos (2) meses prisión; y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual

período una vez cumplida la pena principal.

3. La confirma en lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN (APELACIÓN) A FAVOR DE DAVID ARJONA, SINDICADO POR DEL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a esta Sala el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de ll de septiembre del presente año; proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, donde se niega la concesión del beneficio de fianza de excarcelación en favor del señor **DAVID ARJONA**, imputado del Delito de Homicidio en perjuicio de TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS.

El Licdo. **VÍCTOR CHAN CASTILLO**, abogado defensor del sindicado y peticionario de la fianza, en su solicitud fundamentalmente expresa que el hecho que se dio es consecuencia de una riña consentida, donde ambos resultaron heridos y en donde se dio "lastimosamente un resultado no querido". De otro modo también señaló que existen en el expediente graves "contradicciones de los testigos y el querer ocultar la verdad cuando ninguno se atreve aceptar quién provocó la acción, quien inició el ataque" concluyendo afirmando "no podemos permitir que los testimonios sospechosos u las declaraciones contradictorias algunas de éstas carentes de verdad, siguen manteniendo en la cárcel a DAVID ARJONA, a quien le asiste el reconocimiento de una causa de justificación".

De acuerdo a la investigación realizada al efecto, el día 22 de abril del presente año, en horas de la noche y en la comunidad conocida con el nombre de Bajo de Guerra, distrito de Macaracas, Provincia de Los Santos se produjo un enfrentamiento personal y con cuchillos, entre los señores TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS Y DAVID ARJONA, donde ambos resultaron heridos y en el que falleciera el primero de ellos.

El Tribunal de Primera instancia niega la concesión de la fianza, al estimar que se está frente a lo normado por el artículo 2181, Numeral Primero del Código Judicial.

En este proceso, en el protocolo de Necropsia se deja consignado como causa de muerte de TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS, "shock y colapso cardiorespiratorio, hemorragia masiva, taponamiento cardíaco y hemotorax y herida por arma blanca a tórax" y en las consideraciones médico-legales se manifiesta que "**la herida mortal era muy grave, produciendo taponamiento cardíaco, hemorragia torácica aguada con colapso pulmonar izquierdo, que debieron producir la muerte real en pocos minutos. Después de recibir la lesión mortal la capacidad activa para defenderse o agredir solo debió durar cuestión de segundos**"

El imputado DAVID ARJONA al rendir indagatoria (fojas 46-53) confiesa el hecho que se le atribuye y al preguntarle el funcionario instructor acerca de la persona que le había propinado dos lesiones al Señor TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS,

una en la tetilla izquierda y otra en el brazo izquierdo, las cuales le causaron la muerte, contesto: "YO MISMO", y más adelante agrega que "cuando llegó Eugenia, corriendo y me agarró por la camisa y me dijo "huye" que te va a matar, yo le contestó" "Déjalo que toy pulaliao, que me acabe de mata, yo estaba botando mucha sangre, ahí cambié, me dio rabia y ahí fue que tire dos veces con un cuchillo que cargaba en mi mano derecha, la primera, le pegue en el brazo izquierdo de él y la otra se la di en el pecho, del lado izquierdo, ahí yo salí huyendo de nuevo hacia los lados de la casa de Eugenia y todavía TORIBIO venía detrás de mí".

Consta también en este proceso la declaración de DUVINA PINTO CORRALES a fojas 5, ELVIS ANELL CÓRDOBA VILLAMONTE a fojas 26 y 231, MARTÍN ALBERTO CÓRDOBA VILLAMONTE a fojas 32 y 224 y de ELISA ROSA AYARZA CASTRO a fojas 35 las cuales vinculan felacientemente al imputado en la ejecución del hecho ocurrido y no existe hasta estos momentos ninguna causa de justificación del acto ejecutado por el sumariado, como tampoco es aceptable la afirmación de que por tratarse de una riña consentida se elimina "la existencia del homicidio simple" como pretende el apelante, por cuanto que precisamente la consecuencia de ese enfrentamiento fue, por una parte, las lesiones que recibió el propio DAVID ARJONA y por la otra la muerte de TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS. De otro modo, no existe ningún fundamento jurídico para que la Sala llegue a estimar, como también lo manifestó el abogado de la defensa en la petición de fianza, que el actuar de DAVID ARJONA fue legítimo "porque ambos hombres su vida (sic) corrieron peligro".

No existe elementos probatorios que permiten la concesión de la fianza impetrada ni las constancias procesales actuales permiten la calificación provisional con una figura distinta a la del homicidio doloso cuya penalidad mínima es de 5 años de prisión, lo que conforme con el Numeral Primero del Artículo 2181 del Código Judicial excluye del beneficio de excarcelación a los imputados de dicho ilícito, razón por la cual se coincide con la decisión del Tribunal Primario.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de ll de septiembre de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que niega el beneficio de excarcelación solicitado a favor de DAVID ARJONA CASTRO, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de TORIBIO MELÉNDEZ CÁRDENAS,

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, SOLICITADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, CARLOS JOEL NAVARRO CARVAJAL, EDGARDO AUGUSTO DURAN RIVERA Y EULISES GUIZADO RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERICK ROLANDO GARCÍA BARSALLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto de 23 de agosto de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial remite el proceso que se sigue en ese tribunal contra **EULISES GUIZADO RODRÍGUEZ** (a) "Linchito" y **EDGARDO AUGUSTO DURAN RIVERA** (a) "Egarillo" por el delito genérico de homicidio en perjuicio de **ERICK ROLANDO GARCÍA BARSALLO**, a fin de que esta Superioridad corrija el auto de 18 de

agosto de 1995, mediante el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reformó la resolución de primera instancia en el sentido de abrir causa criminal también contra **FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA y CARLOS JOEL NAVARRO CARVAJAL** por el mismo delito.

Según el Tribunal peticionario, la resolución de segunda instancia, al abrir causa criminal contra los prenombrados De la Guardia y Navarro Carvajal, incurrió en un error al citar las pertinentes disposiciones del Código Penal.

Afirma, que a estos justiciables se les llamó a juicio por la infracción de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro I del Código Penal, pero que estas disposiciones no se refieren al delito genérico de homicidio, sino a la vigencia y aplicación de la ley penal.

Preceptúa el tercer inciso del artículo 986 del Código Judicial:

"Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo, pero solo en cuanto al error cometido".

Al examinar esta solicitud, considera la Corte que la misma es procedente, ya que en el momento de citarse en la parte resolutiva del auto de segunda instancia, el capítulo, título y libro del Código Penal referentes al homicidio genérico, como lo dispone el artículo 2224 del Código Judicial, se incurrió en error al hacer referencia al Libro I del Código Penal, cuando debió haberse citado el Libro II de esta excerta legal.

Por lo tanto, debe corregirse la cita y así procede a hacerlo la Corte.

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CORRIGE el auto de 18 de agosto de 1995 sólo en el sentido de llamar a juicio a los señores FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA y CARLOS JOEL NAVARRO CARVAJAL por infractores de las disposiciones contenidas en el capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA LUIS ALEXANDER PRADO VISSUETTI POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JACK GAONA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En el Proceso Penal seguido a **LUIS ALEXANDER PRADO VISSUETTI**, imputado del delito de **HOMICIDIO** en perjuicio de **JACK GAONA RODRÍGUEZ**, el Tribunal superior del Segundo Distrito Judicial profirió la resolución calendada el 19 de marzo de 1996, visible de foja 250 a 252 vuelta, donde en su parte resolutiva "Sobresee al Cabo Primero de la Policía Nacional, LUIS ALEXANDER PARDO VISSUETTI, varón, panameño, nacido en Antón, el día 17 de abril de 1958, hijo de Julio Prado y Balbina Vissuetti de Prado, Cedulado N° 2-862-248".

En esa misma resolución y en razón a la condición de Servidor Público del agente Prado Vissuetti, conforme con el artículo 2481 del Código Judicial, se

ordenó la remisión de la misma a esta Sala Penal para la consulta correspondiente y esta Sala, en auto de 18 de julio del presente año dispuso revocar el sobreseimiento decretado por el inferior y en su lugar decretó la apertura de Causa Criminal contra LUIS ALEXANDER PARADO VISSUETTI, como supuesto infractor de la disposiciones legales contenidas en el Capítulo Primero, Título Primero del Libro Segundo de Código Penal y a tal efecto señaló en ese auto que se revocaba "el auto del 13 de septiembre de 1993, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia",

Regresado el proceso al lugar de su procedencia, se recibió la Nota de 17 de septiembre último, firmado por el Magistrado del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, A. Relly Sierra Goytía, Magistrado sustanciador de la causa, donde observa que "debido a un lapsus tanto en el análisis del caso, como en la parte resolutiva, se hizo referencia a que el Tribunal A-quo es el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por un lado y en la resolutiva se revoca el auto de 13 de septiembre de 1993, tal como consta a fojas 7 de esa decisión." lo que lleva a ponerlo a nuestro conocimiento, "... pues estimamos que debe salvarse este lapsus, ya que técnicamente nos encontramos con que no se ha resuelto la apelación del auto de 13 (sic) de marzo de 1996 de este Tribunal, en el cual se sobresee al ciudadano LUIS ALEXANDER PRADO VISUETTI."

Habida cuenta de esa comunicación, se solicitó el expediente correspondiente y con vista del mismo, la Sala aprecia que si bien es cierto que en el contenido de la parte motiva de la resolución la Sala se refiere al auto que profirió el sobreseimiento consultado con fecha de 19 de marzo de 1996, erróneamente en la parte resolutiva del auto proferido por esta Sala se manifiesta que se "revoca el auto de 13 de septiembre de 1993, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia cuando en realidad debió haberse indicado que el auto revocado es de fecha 19 de marzo de 1996, dictad por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que es como correctamente debe quedar nuestra resolución de 18 de julio de 1996.

El párrafo final del artículo 986 del Código Judicial permite que toda decisión Judicial en la que se haya incurrido en su parte resolutiva en un error de escritura o de cita es corregirle en cualquier tiempo en cuanto al error cometido y como el caso en estudio se trata indudablemente de un error en el nombre correcto del Tribunal Primario que profirió la resolución venida en consulta y de un error también en cuanto a la fecha -día, mes y año- de la resolución que revoca, procede la corrección de la parte pertinente del auto de 18 de julio de 1996 dictado por esta Sala en el sentido indicado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CORRIGE** la parte resolutiva del auto de 18 de julio de 1996 dictado por esta Sala en el presente caso en el sentido de que dicha parte queda en la forma siguiente "revoca el auto de 19 de marzo de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial". El resto de la parte resolutiva queda igual a la expresada en la decisión de 18 de julio de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR JAIME PADILLA VELIZ CONTRA JORGE OBEDIENTE PECCHIO Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cursa en este despacho el negocio penal que da cuenta de la denuncia presentada por Jaime Padilla Béliz contra Jorge Obediente Pecchio, Enrique Sanson González y Maribel T. Souza A., por la comisión de delitos relacionados con drogas.

La Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante resolución de 18 de julio del año en curso, remitió el expediente a esta Sala para su calificación legal, por considerar que Jorge Obediente Pecchio "actualmente ostenta el cargo de Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y ante tal circunstancia, lo que procede es remitir la presente actuación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia" (f. 91).

Del análisis efectuado a las piezas que componen el cuaderno penal, la Sala advierte que, por la calidad funcional del servidor público acusado, corresponden a la Procuraduría General de la Nación llevar adelante tanto la instrucción de las sumarias como la elaboración de la Vista correspondiente. De allí que resulte necesario escuchar el concepto del jefe del Ministerio Público, que es a quien le atañe remitir la actuación a la autoridad jurisdiccional.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA remitir esta actuación a la Procuraduría General de la Nación.

Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LICENCIADO JOAQUÍN ORTEGA Y LICENCIADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, el sumario contentivo de la denuncia criminal interpuesta en su propio nombre y representación por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, contra los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Licenciados JOAQUÍN ORTEGA V. y SANDRA HUERTAS DE ICAZA, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública.

La licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** denunció a los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Licenciados **JOAQUÍN ORTEGA y SANDRA HUERTAS DE ICAZA**, por infracción de la Constitución Nacional y las leyes en resoluciones judiciales, abuso en el ejercicio de sus funciones judiciales y falta de cumplimiento de los deberes de su destino. Según la denunciante los Magistrados del Segundo Tribunal Superior mencionados incurrieron en las conductas antijurídicas tipificadas en el Capítulo IV, Título X, sobre Delitos contra la Administración Pública, del Libro Segundo del Código Penal y violaron los artículos 17, 32 y 212 de la Constitución Nacional; los artículos 159 ordinal 5, 201 ordinal 4, 237, 463, 464, 471, 2010, 2297, 2469 y siguientes del Código Judicial; los artículos 151, 152, 156 y 160 del Código Penal; y las normas sustantivas del Capítulo III, Título II del Libro II del Código Penal, al dictar la Resolución de 20 de febrero de 1995, mediante la cual se declaró nulo el Auto de 13 de mayo de 1994, admitido por el Juzgado Octavo de lo Penal, del Primer Circuito Judicial y se ordenó su archivo. A juicio de la denunciante, los Magistrados del Segundo Tribunal Superior, también demostraron ignorancia

inexcusable de la Ley, cometieron faltas a la ética judicial (Art. 440 del Código Judicial) y faltas comunes, al violar los deberes, responsabilidades y facultades de los Magistrados y Jueces, estatuídos en el artículo 199 de Código Judicial.

Se desprende del escrito que la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** había interpuesto con anterioridad, ante la Fiscalía del Circuito de Turno, denuncia criminal contra la Corregidora de Bella Vista Rubiela Macías y el guardia EMELDO GONZÁLEZ, adscrito a dicha Corregiduría, por la supuesta comisión de delitos contra la libertad individual en su perjuicio. Posteriormente, el 25 de abril de 1994 presentó acusación particular contra dichas personas ante el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, por ser el Tribunal de la causa; la cual fue admitida por dicho Juzgado, mediante Resolución de 13 de mayo de 1994. El representante legal de RUBIELA MACIAS, presentó recurso de apelación contra dicha Resolución, fundamentándose en el hecho de que el delito atribuido era de competencia de los Juzgados Municipales y no de los Juzgados de Circuito, por lo que debía declinarse la competencia a dicha esfera. No obstante, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 20 de febrero de 1995 (fs. 13 a 16), firmada por los Magistrados **SANDRA T. HUERTAS DE ICAZA y JOAQUÍN ORTEGA V.**, declaró nulo el Auto de 13 de mayo de 1994, emitido por el Juzgado Octavo de lo Penal, del Primer Circuito Judicial y ordenó devolver lo actuado para su archivo.

La recurrente señaló que la actuación de los Magistrados **SANDRA HUERTAS DE ICAZA y JOAQUÍN ORTEGA** tuvo las siguientes consecuencias:

> "1). Dejó en la indefensión a OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, por cuanto que al ordenar arbitrariamente el archivo de la Acusación Particular se le impidió actuar como parte en el proceso penal seguido a RUBIELA MACIAS y EMELDO GONZÁLEZ por la comisión de delitos contra la Libertad Individual, con los perjuicios graves que ello acarrea.
>
> 2). Impidió la correcta aplicación de la competencia circuital para los casos que lo requieran, tanto por la calidad de una de las partes como por la pena.
>
> 3). Causó que la Juez Octava del Circuito de lo Penal, Licda. MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI, también por ignorancia inexcusable de la ley, inadmitiera una nueva Acusación Particular, fundamentada en el artículo 1969 del Código Judicial que regula la cosa juzgada en materia penal, lo que constituye un ex-abrupto jurídico.
>
> 4). Determinó que el proceso penal seguido a RUBIELA MACIAS se le tenga como un simple denuncio por la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad bajo la normativa del artículo 156 del Código Judicial con penalidad de 6 meses a 2 años, a pesar que le son aplicables los artículos 151, 152 y 160 del Código Penal, que tienen penalidad de dos a 6 años, porque la detención de OMAYRA GARCÍA DE BERBEY fue realizada bajo tortura psicológica, con vejaciones, humillaciones y fue un castigo infamante que le ocasionó graves perjuicios morales, psíquicos y materiales que hoy día persisten.
>
> 5). Ocasionó que sea jurídicamente improbable que la competencia circuital conozca nuevamente el caso de RUBIELA MACIAS." (F. 8).

Y, en la Resolución de 20 de febrero de 1995 (fs. 13 a 16), según la denunciante, los Magistrados del Segundo Tribunal Superior denunciados, debieron, por razón de la alzada, advertir lo siguiente:

> "1. Que había dos acusados, uno de los cuales es funcionario público que por tener tal calidad y por su categoría, la competencia es de los Juzgados circuitales, de conformidad con los artículos 159 ordinal 15 y 2469, ambos del Código Judicial.
>
> 2. Que por la pena, la competencia es circuital, tomando en consideración que en el libelo se hizo la calificación genérica del

delito y el encuadramiento jurídico en el Título II, Capítulo III del Libro II del Código Penal.

-ó en su defecto-

3. Si sólo tomaban en consideración la calidad de la acusada RUBIELA MACIAS que no era funcionaria pública a esa fecha ó, aisladamente, el artículo 156 del Código Penal, debieron haberse inhibido y declinar competencia a la esfera Municipal en aras de la economía procesal, conforme lo estatuido en el artículo 212 de la Constitución Nacional y los artículos 201 ordinal 4, 463, 464 y 471 del Código Judicial y no decretar el archivo del expediente, que constituyó una medida procesal extrema y arbritaria dictada en perjuicio de OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, la cual fue dirigida a evitar su actuación en el proceso penal." (Fs. 5-6).

La denunciante aportó las siguientes pruebas:

-Resolución de 20 de febrero de 1995 (fs. 13 a 16), proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

-Escrito de acusación particular presentado por **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** contra RUBIELA MACIAS y EMELDO GONZÁLEZ, por la supuesta comisión de delitos contra la libertad individual (fs. 17 a 24). Otro escrito presentado dentro de dicho expediente, acompañado de una certificación (fs. 35 a 38). Y, escrito de acusación particular presentado en una segunda ocasión contra los mismos acusados (fs. 39 a 45).

-Resolución de 31 de marzo de 1995, del Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá (F. 25).

-Denuncia criminal presentada por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** contra la Juez Octava de lo Penal, del Circuito de Panamá, Licenciada MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración de Justicia (fs. 26 a 34).

La denunciante solicitó, además, al agente instructor la adquisición de las siguientes pruebas:

-Copias del expediente penal que se encuentra en el Juzgado Tercero Municipal de lo Penal, contentivo de la denuncia interpuesta por **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** vs RUBIELA MACIAS; y de los cuadernillos de las acusaciones particulares, contra RUBIELA MACIAS y EMELDO GONZÁLEZ, por la supuesta comisión de delitos contra la libertad individual, tanto la archivada como la inadmitida.

-Copias del expediente que se encuentra en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, contentivo de la denuncia criminal interpuesta por **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** vs MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI, Juez Cuarta del Circuito de lo Penal, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública.

Por su parte el Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 1 de 5 de enero de 1996 (fs. 47 a 50), solicitó que se dicte un sobreseimiento definitivo, de carácter impersonal, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2210 del Código Judicial, toda vez que los actos atribuidos a los denunciados no se enmarcan dentro de la conducta calificada como punible, según lo establecido en el Título X, "Delitos contra la Administración Pública", Libro I del Código Penal, referente a los delitos denunciados, puesto que para que la conducta inmutada se cumpla, "se requiere que el servidor público con abuso de su cargo ordene o someta en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario o en otro caso que indebidamente (sic) rehuse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones". El Jefe Máximo del Ministerio Público señaló además, que en la actuación de los Magistrados denunciados no se vislumbra el dolo,

"Pues los mismos sólo se limitaron a emitir una resolución judicial, de acuerdo a su criterio, con el objeto de pronunciarse respecto a

un Recurso de Apelación interpuesto ante el Juez Octavo de Circuito, actuando como Tribunal de Segunda Instancia.

Así pues, la actuación desplegada por los servidores públicos denunciados corresponde a las funciones como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia desempeñan, por lo que mal puede calificarse como delictuosa por el solo hecho de que la resolución judicial que profirieron no satisfizo a una de las partes.".

Y, "Para los casos en que una actuación judicial no sea acorde al procedimiento establecido en el Código Judicial, éste prevé los remedios procesales que puede utilizar quien se considere afectado." (F. 49).

Primeramente, advierte la Sala que los funcionarios denunciados en el presente negocio, **JOAQUÍN ORTEGA V. y SANDRA T. HUERTAS DE ICAZA**, actualmente se encuentran desempeñando la posición de Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia; en razón de esto, se trata de un proceso especial por la calidad de servidores públicos de los denunciados, y resulta aplicable lo dispuesto en el Capítulo II, Título IX del Código Judicial, sobre los procesos contra servidores públicos. En este sentido, cuando se promueve denuncia o acusación por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, se debe acompañar la prueba sumaria del relato, por cualquiera de los medios que enumera el artículo 2073 del Código Judicial.

Por otro lado, de los antecedentes sumariales expuestos se advierte que la prueba documental aportada por el denunciante con la finalidad de acreditar los ilícitos imputados reúne los requisitos de eficacia jurídica en cuanto a su autenticidad, según lo establecido por el artículo 820 del Código Judicial; pero, a juicio de la Sala, los documentos mencionados adolecen de la exigencia primordial que para este tipo de procesos contra servidores públicos establece el artículo 2471 del Código Judicial, como es la efectividad e idoneidad de la prueba sumaria para acreditar el hecho punible irrogado, siendo que los medios probatorios aportados deben ser lo suficientemente elocuentes para que por sí solos acrediten los hechos punibles que se les imputan a los denunciados.

Con relación al fondo del asunto, la Sala es de la opinión, de que la acción cuya ejecución se endilga a los funcionarios denunciados no constituye los delitos que se les imputan, ya que esas evidencias no están relacionadas con los hechos imputados a los servidores públicos denunciados, es decir, el abuso de autoridad y la extralimitación de funciones, los hechos expuestos en la denuncia no revelan en los denunciados la intención dolosa de cometer las acciones delictivas imputadas, la conducta por ellos realizada no es típica, razón por la cual, no constituye delito a la luz de lo normado en el Código Penal; tampoco se trata de faltas disciplinarias de las contenidas en el artículo 285, Capítulo IX, Título XII, Libro I del Código Judicial, ni de faltas contra la ética judicial de las contenidas en el artículo 440, Capítulo II, Título XVI, Libro I del Código citado; a juicio de la Sala, podría en todo caso tratarse de la responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados contemplada en el artículo 200 del Código Judicial, que no es más que la responsabilidad que surge de los perjuicios que Jueces o Magistrados causan a las partes dentro de un proceso al realizar ciertos actos u omisiones previstos por la ley, no obstante, para que puedan aplicarse dichas normas contentivas del régimen de responsabilidad civil propio de los Magistrados y Jueces, es necesario que se cause un daño, es decir, que exista un perjuicio efectivamente causado a las partes, de lo contrario no podrá hacerse reclamo alguno de naturaleza civil. En este caso en particular, somos de la opinión de que no puede hablarse de un daño cierto causado a la denunciante, ni de una falta disciplinaria (Art. 285, numeral 10 del C.J.), puesto que si bien los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia hicieron una indebida aplicación de la norma procedimental al declarar nulo y ordenar el archivo de la acusación particular presentada por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** -toda vez que debió declinarse la competencia de la acusación particular ante los Tribunales Municipales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, según lo establecido en el artículo 174, literal b, numeral 1, del Código Judicial-, cuando se le rechazó por segunda vez la acusación particular por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, la denunciante debió nuevamente apelar

de dicha Resolución y en el caso de que se le hubiera negado la concesión del recurso de apelación hubiera podido interponer recurso de hecho ante esta Superioridad, por lo que la denunciante pudo hacer uso de los medios ordinarios contemplados en nuestra legislación procedimental y, por lo tanto, es del caso proceder al archivo de la presente encuesta sumarial con sobreseimiento definitivo, de carácter impersonal, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE la presente encuesta sumarial, de manera impersonal, con base en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del sumario contentivo de la denuncia criminal interpuesta en su propio nombre y representación por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, contra los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Licenciados JOAQUÍN ORTEGA V. y SANDRA HUERTAS DE ICAZA, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEÑOR EUSTACIO FÁBREGA, POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresa a la Sala Penal de la Corte, para resolver la denuncia penal presentada por el Licenciado OMAR MACIAS, como apoderado del Capitán **JOSÉ ÁNGEL LIEBHARDT**, Secretario General del **SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES (SIPAC)**, contra el Director General de Aeronáutica Civil, Licenciado **EUSTACIO FÁBREGA**, a quien acusa de haber incurrido en los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

El Procurador General de la Nación mediante Vista N° 70 de 14 de octubre de 1996, emitió concepto en el sentido de que se debe archivar el presente negocio, al tenor del artículo 2471. También indicó el Procurador, que en caso de que se hubiese cumplido con el requisito de la prueba sumaria autenticada, la denuncia no procede, por cuanto que observa imprecisión en el escrito del propio denunciante en cuanto a la calificación del delito que se le imputa al Licenciado **FÁBREGA**. Por otro lado, manifiesta que éste último no ha incurrido en falta o delito alguno al otorgar la convalidación al piloto canadiense, pues con dicha actuación no ha "rehusado, omitido o retardado algún acto inherente a sus funciones", lo cual es presupuesto indispensable para que se configure el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos.

De las piezas procesales que obran en el presente sumario, se desprende que el mismo tuvo su origen en la denuncia penal que interpuso el Licenciado OMAR MACIAS como apoderado del Capitán JOSÉ ÁNGEL LIEBHARDT, Secretario General del SINDICATO PANAMEÑO DE AVIADORES COMERCIALES (SIPAC), contra el Director General de Aeronáutica Civil, el señor **EUSTACIO FÁBREGA**.

La denuncia viene motivada por la actuación del Licenciado **FÁBREGA** al expedir la convalidación al piloto canadiense **ANTAL MAYER**, donde se le autoriza a ejercer las atribuciones de PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA DE AVIÓN.

Advierte la Sala que, en efecto, tal como lo indicara el señor Procurador, de fojas 6 a 9 el denunciante aportó las pruebas de los hechos fundamentales de la denuncia en **copias simples**, es decir, no auténticas. Lo anterior constituye una irregularidad que impide el trámite y resolución de la denuncia. Así lo ha declarado esta Sala con anterioridad, veamos este fallo de 3 de julio de 1992, bajo la ponencia del Mgdo. José Manuel Faúndes:

> "En ese sentido, las conclusiones del Procurador serían plenamente compartidas por la Corte, ya que del art. 2471 del Código Judicial se infiere que en los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones de los servidores públicos, si el acusador o el denunciante no aporta prueba sumaria de su relato **o si las aportare y fueren deficientes**, el Tribunal de la causa debe ordenar el archivo del expediente.". (Lo resaltado es nuestro).

La Sala comparte el criterio del Ministerio Público en cuanto a que no se ha aportado la prueba sumaria en la presente denuncia y por tanto, no procede.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL ARCHIVO del expediente instruido al Licenciado EUSTACIO FÁBREGA por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

OCTUBRE 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO MARÍN EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO GÓMEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, SU EXCLUSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El licenciado Eduardo Marín ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, en representación de EDUARDO GÓMEZ, para que se declare ilegal, su exclusión de la Organización Docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, en el Primer Semestre del año 1995 y se le reintegre a su cargo de Profesor.

A juicio de la Sala, la demanda presentada no cumple con los requisitos señalados en el artículo 29 de la Ley 33 de 1946, cuyo tenor literal, en lo pertinente, es el siguiente:

> "Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda ..."

En el caso en estudio, en el punto II de la demanda titulado LO QUE SE DEMANDA, que se lee a foja 36 del expediente, no se individualiza el acto que se desea impugnar.

En la demanda el actor se refiere a la "Nota 422-95 del 13 de julio del mismo año", en la cual, según afirma, se demuestra su no inclusión en la organización docente de la Universidad de Panamá, en el año 1995. En autos no consta la mencionada Nota 422-95, sino la Nota 190-95 de 13 de julio de 1995, en la cual la Jefe de Sección de Planillas y de Descuentos de la Universidad de Panamá se refiere a la mencionada Nota 422-95 (foja 4). Además de fojas 14 a 16 se lee una resolución dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, el 8 de mayo de 1996, en la cual se niega, por extemporáneo, el recurso de reconsideración interpuesto por el Profesor Asistente EDUARDO GÓMEZ contra la decisión de considerar "precluído los términos para interponer nueva reclamación ante las autoridades universitarias", y se mantiene la decisión recurrida sobre su exclusión como docente en el Primer Semestre del año académico de 1995. En esta decisión se expresa que la misma agota la vía gubernativa y fue notificada el 28 de mayo de 1996.

La demanda se presentó el 17 de septiembre de 1996, cuando ya la acción había prescrito por el transcurso del término de dos meses, y además, si tal como se afirma en la decisión que resuelve la reconsideración, este recurso no fue oportunamente presentado, no puede estimarse agotada la vía gubernativa (Cfr. artículos 25 y 26 de la Ley 33 de 1946).

Por otra parte, el artículo 28 de la Ley 33 de 1946 exige que las disposiciones legales que se consideren violadas se señalen, explicando el concepto en que se estima que la ley ha sido violada por el acto impugnado, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, y en la demanda examinada el actor cita los preceptos que estima violados, pero no explica el concepto en que estos son violados por el acto impugnado, que como ya hemos expresado, tampoco individualiza en su demanda.

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, no debe dársele curso a la demanda porque no cumple con los requisitos legales.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Eduardo Marín, en representación de EDUARDO GÓMEZ, para que se declare ilegal, su exclusión de la Organización Docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OSVALDO JIMÉNEZ CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DG-076-95 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El licenciado Osvaldo Jiménez Correa, actuando en nombre y representación de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de 9 de abril de 1996, mediante la cual, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, revocaron la providencia del 12 de enero de 1996, que admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el recurrente contra la Resolución N° DG-076-95 emitida por el Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, el 5 de septiembre de 1996.

Debido a que por medio de la resolución de segunda instancia que se impugna se revoca un auto dictado en Sala unitaria, dicha resolución es susceptible de reconsideración a la luz de lo dispuesto en el artículo 1114 del Código Judicial, modificado por el artículo 31 de la Ley 15 de 9 de julio de 1991.

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El demandante en el recurso de reconsideración, hace una serie de consideraciones acerca de los preceptos contenidos en los artículos relacionados con el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo y sostiene que el artículo 44 de la ley 135 de 1943 establece como único documento que debe presentar la parte actora con la demanda, la copia del acto impugnado con la constancia de la notificación. En cuanto al artículo 46 la parte actora afirma que de conformidad con esa norma:

> "... El actor o parte demandante solamente podrá solicitar al Magistrado Sustanciador, para que este requiera al ente administrativo dos documentos.
>
> 1° El acto impugnado cuando el ente administrativo se niega a expedir copia del acto acusado.
>
> 2° Cuando el acto emitido por el ente administrativo no ha sido publicado, o se deniega la expedición del acto para su publicación o se deniega la certificación sobre la publicación. fuera de estos dos actos, no existe en la ley facultades del Magistrado Sustanciador, de pedir al ente administrativo otros documentos que deban acompañarse en la admisión de una demanda contencioso administrativa.

> ...
> Así se está incorporando un documento adicional que consiste en la certificación del ente administrativo donde consta que no ha resuelto los recursos de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el actor lo cual hace surgir un documento ilegal e improcedente." (foja 76).

II. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, no se dará curso a la demanda que carezca de las formalidades señaladas en los artículos que le preceden, que tratan, entre otras formalidades, del agotamiento de la vía gubernativa (artículo 25 de la Ley 33 de 1946), la prescripción de la acción (artículo 27 de la Ley 33 de 1946), del contenido de la demanda (artículo 28 de la Ley 33 de 1946), de la individualización del acto e indicación de las pretensiones (artículo 29 de la Ley 33 de 1946), de la copia del acto acusado que debe acompañarse (artículo 44 de la Ley 135 de 1943), de los testimonios necesarios para probar la existencia de actos, órdenes o disposiciones administrativas verbales que se compugna (artículo 48 de la Ley 135 de 1943), petición de que el sustanciador solicite prueba del acto acusado o de su notificación antes de admitir la demanda (artículo 46 de la Ley 135 de 1943).

Por tanto, uno de los requisitos que el demandante debe probar para ocurrir a la vía contencioso administrativa, es el silencio administrativo, porque este agota la vía gubernativa.

Además, es a partir de la fecha en que se da el silencio administrativo empieza a correr el término de la prescripción de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y cuando la acción está prescrita, no se admite la demanda, por razones de economía procesal.

También es importante probar, al presentar la demanda, si se produjo o no el silencio administrativo porque, si antes de promover la demanda fue revocado el acto impugnado, el objeto procesal se extinguió y si el acto fue confirmado la vía gubernativa se agotó por motivos y en fecha distinta a la alegada.

Cuando las pruebas requeridas para la presentación de la demanda, a las cuales se refieren las normas comentadas, no pueden ser obtenidas por el administrado, la Sala, aplicando por analogía el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 las solicita, siempre que se pida en la demanda, para procurar que los procesos que se inicien sean formalmente viables, evitando el inicio de procesos en los cuales jurídicamente no proceda hacer pronunciamientos sobre el fondo de la controversia planteada; cumpliendo así con los principios de economía procesal y de reconocimiento en el proceso de los derechos sustantivos de las partes, consagrados en el artículo 212 de la Constitución Política.

Tomando en consideración lo expuesto, no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que no está obligado a probar que se ha producido el silencio administrativo que agota la vía gubernativa y que se propicia la violación del derecho de defensa cuando se le exige al actor que presente esa prueba, o si no ha podido obtenerla, que le solicite a la Sala que la pida.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 9 de abril de 1996, mediante la cual se revocó la Resolución de 12 de enero de 1996, expedida por el Honorable Magistrado Sustanciador y no se admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Osvaldo Jiménez Correa en nombre y representación de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° DG-076-95 de 5 de septiembre de 1995, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE EN REPRESENTACIÓN DE EL TRIÁNGULO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3525-91-D. G. DE 16 DE DICIEMBRE DE 1991 DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

La firma forense Alemán, Cordero, Galindo & Lee, actuando en nombre y representación de **EL TRIÁNGULO, S. A.** ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 3525-91-D. G. de 16 de diciembre de 1991 dictada por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, los datos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, se observa que se ha acompañado la misma con un memorial, con sello de recibido, en el que la parte actora solicita a la Caja de Seguro Social, que autentique la copia que le adjunta de la Resolución impugnada y de los actos confirmatorios.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se ha negado la expedición de copia o la certificación sobre su publicación, siempre que se exprese este hecho en la demanda con indicación de la oficina donde se encuentra el original.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, la Sala dispone solicitar al Director General de la Caja de Seguro Social copia autenticada de la Resolución impugnada y de los actos mediante los cuales fue confirmada, con constancia de las notificaciones correspondientes.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE solicitar por Secretaría al Director General de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala copia autenticada de las siguientes resoluciones con la constancia de las notificaciones correspondientes:

1. Resolución N° 3525-91-D. G. de 16 de diciembre de 1991 expedida por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, por la cual se resuelve condenar a la empresa EL TRIÁNGULO, S. A., con número patronal 87-611-2384, a pagar la suma de B/.10,302.46 en concepto de cuotas de seguro social, primas de riesgos profesionales y recargos de ley por el período comprendido de julio de 1986 a junio de 1989, más los intereses que se causen hasta su cancelación.

2. Resolución N° 7499-95-D. G. de 23 de enero de 1995 expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social, por la cual se resuelve mantener en todas sus partes la Resolución N° 3525-91-D. G. de 16 de diciembre de 1991.

3. Resolución N° 12,940-96-J. D. de 23 de mayo de 1996 expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por la cual se resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 3525-91-D. G. de 16 de diciembre de 1991.

Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE MOTORES COLPAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE LA MOROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO N° DG-308-94 POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE, PARA QUE SE LE CONDENE AL PAGO DE LA SUMA DE B/.7,282,895.37 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 063-93 Y POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL DEMANDANTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

La firma forense Endara & Marré, actuando en nombre y representación de **MOTORES COLPAN, S. A.** ha promovido demanda contencioso administrativa para que se declare la morosidad en el cumplimiento de la formalización del contrato N° DG-308-94 por parte del Director General del IRHE, y para que se haga otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, se observa que se ha acompañado la misma con un memorial, con sello de recibido, en el que la parte actora solicita al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, que autentique copia del contrato que suscribió con esa Institución (f. 27).

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se ha negado la expedición de copia o la certificación sobre su publicación, siempre que se exprese este hecho en la demanda con indicación de la oficina donde se encuentra el original.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, la Sala dispone solicitar al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) copia autenticada del contrato suscrito entre dicha institución y Motores Colpan, S. A., distinguido con el N° DG-308-94.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE solicitar por Secretaría al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala copia autenticada del contrato suscrito entre dicha Institución y Motores Colpan, S. A., distinguido con el N° 308-94.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE BORIS SUCRE BENJAMÍN, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 3 Y 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA

PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Vásquez y Vásquez, actuando en nombre y representación del Licenciado **BORIS SUCRE BENJAMÍN**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulos, por ilegales, los artículos 3 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y como consecuencia de esta declaración se ordene al Órgano Ejecutivo restablecer al licenciado **BORIS SUCRE BENJAMÍN** en el cargo que ocupaba como Notario Décimo Segundo del Circuito Notarial de Panamá, hasta completar el período de cuatro años que le corresponde. (Fs. 27)

Por medio del acto impugnado se nombró a la licenciada Marisela Bernal Caballero, como Notaria Duodécima del Circuito Notarial de Panamá, en reemplazo del licenciado **BORIS SUCRE BENJAMÍN**, cuyo nombramiento se dejó sin efectos, y se dispuso en el artículo 6, que dicho acto entraba a regir a partir de la fecha de toma de posesión de la interesada. (Fs. 1-2)

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 440 de 19 de octubre de 1995, solicitó a esta Sala declarar legal el impedimento que manifestó (fojas 41 a 44), lo que se hizo mediante resolución de 30 de octubre de 1995, se la separó del negocio y se llamó a su Suplente, quien contestó la demanda solicitando denegar las pretensiones del demandante (fs. 49-58). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 39-40).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 2119 del Código Administrativo modificado por el artículo 1 de la Ley 53 de 1961, 2120 del Código Administrativo modificado por el artículo 2 de la Ley 53 de 6 de diciembre de 1961, y 5 de la Ley 53 de 6 de diciembre de 1961, los cuales transcribimos a continuación:

> **Código Administrativo.**
> "Artículo 2119. Los Notarios de Circuito, Principales y Suplentes, los nombrará el Órgano Ejecutivo, por un período de cuatro años, a partir del 1° de enero de 1962.
>
> Artículo 2120. Para ser Notario de Circuito, Principal o Suplente, en Panamá y Colón, se requieren las mismas cualidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
>
> Para ser Notario de Circuito, Principal o Suplente, en los otros lugares de la República, se requiere ser panameño por nacimiento o por naturalización, con más de diez años de residencia continua en la República, haber cumplido veinticinco años de edad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser graduado en Derecho en el país o en el extranjero, o poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la Abogacía en los Tribunales de la República.
>
> Tratándose de graduados en el extranjero, será preciso, además que el interesado haya revalidado su título en la Universidad de Panamá y que el mismo se halle inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto.
>
> Parágrafo: No podrá designarse Notario, Principal o Suplente, a la persona que haya sido condenada a alguna pena por delito común."
>
> **Ley N° 53 de 6 de diciembre de 1961.**

"Artículo 5° Para lo relativo al Artículo 44 de la Constitución Nacional, considérase esta Ley de orden público. No obstante, la misma no afecta a las personas que hayan ejercido o están ejerciendo los cargos a que ella alude."

Al exponer el concepto en que las normas transcritas han sido violadas por el acto impugnado, el demandante expresó que las violaciones se han dado por omisión. En primer lugar porque los Notarios son nombrados por un período fijo de cuatro años, y el Órgano Ejecutivo desconoció el derecho adquirido del licenciado **BORIS SUCRE BENJAMÍN** de ejercer el cargo de Notario Décimo Segundo del Circuito Notarial de Panamá hasta el 31 de diciembre de 1997, fecha en que vence su período, ya que su nombramiento se hizo mediante el Decreto N° 125 de 23 de marzo de 1995, por el período que termina en esa fecha (fs. 4-5). En segundo lugar, ni el Decreto Ejecutivo N° 413 de 1 de agosto de 1995, ni el Acta de Toma de Posesión de la licenciada Marisela Bernal Caballero señalan el período por el cual se hace su nombramiento violando también por omisión el artículo 2119 del Código Administrativo. En tercer lugar, afirma el demandante que "el designado Notario Público para un período fijo de cuatro años, sólo puede ser destituido de comprobársele que no cumple con algunos de los requisitos exigidos en el artículo 2120 del Código Administrativo modificado por el acuerdo 2 de la Ley 53 de 1961, que es una ley de orden público, por lo que, "no sólo es mandatoria como todas las leyes, sino que, además, su fuerza imperativa dice relación con su capacidad de exigir su cumplimiento strictu sensu, de manera que la autoridad que así no lo haga incurre en delito contra la administración de justicia por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público (s. 32)."

A estos cargos se opuso el señor Procurador de la Administración, Suplente expresando lo siguiente:

"El artículo 2129 del Código Administrativo establece:

`Artículo 2129: En los casos de renuncia, destitución u otros que no incapaciten al Notario para entregar personalmente el archivo a quien deba recibirlo, la entrega la hará el mismo Notario.

La disposición transcrita hace referencia a la destitución de los Notarios; pero llama la atención que, contrario a lo que ocurre con otros funcionarios protegidos por estabilidad, ni el Código Administrativo ni ninguna otra ley crean causales de destitución ni procedimiento para llevarla a cabo.

Existen cuatro grupos de funcionarios que disfrutan de estabilidad, a saber: a) Los elegidos por votación popular, tales como el Presidente de la República, los Legisladores, los Alcaldes, etc; b) Los nombrados por período fijo, protegidos por la Constitución o la ley, como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Procuradores, etc; c) Los funcionarios amparados por leyes orgánicas, entre los que se encuentran educadores, médicos y enfermeras; d) Los funcionarios protegidos por carreras.

Todos los funcionarios a que hemos hecho referencia, cuyas estabilidades nadie discute, están amparados por leyes o por la Constitución, y todos tienen un denominador común: existen causales de destitución y procedimientos para efectuarlas.
...
De prosperar la tesis sostenida por el demandante, los Notarios Públicos estarían en una posición ventajosa frente a todos los otros funcionarios y serían amparados por la inamovilidad absoluta, de suerte que, sin importar la gravedad de las faltas o delitos cometidos, permanecerían en sus cargos, por el lapso de cuatro años.

Importa destacar que no deben confundirse las causales de destitución con la interdicción, pena accesoria por la comisión de un delito, aplicable varios años después de cometido, luego de un largo proceso penal.

> Las consideraciones anotadas nos permiten afirmar, que interpretando el artículo 2129 del Código Administrativo y el conjunto de normas que dan estabilidad a los funcionarios públicos, los notarios de circuito son removibles a voluntad del ente nominador.
>
> En apoyo de tal tesis, invocamos, adicionalmente, el artículo 794 del Código Administrativo.
>
> Textualmente dice:
>
> `Artículo 794: La determinación del período de duración de un empleado no coarta en nada la facultad del empleado que hizo el nombramiento, para removerlo, salvo expresa prohibición de la Constitución o de la ley.
>
> ... Esta norma dispone que el ente nominador está facultado para remover el empleado nombrado **"salvo expresa prohibición de la Constitución o de la ley"**.
>
> No hay ninguna disposición que prohíba la remoción de los Notarios de Circuito; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 794 en concordancia con el 2129 del Código Administrativo, es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Órgano Ejecutivo.
> ...
> Al exponer el concepto de violación del artículo 2120 del Código Administrativo, el demandante plantea nada más y nada menos, que la **INAMOVILIDAD ABSOLUTA** de los Notarios, por espacio de 4 años, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico no concibe la inamovilidad absoluta.
> ...
> Finalmente, hace alusión al artículo 5 de la Ley 53 de 1961, conforme al cual `Para lo relativo al artículo 44 de la Constitución Nacional, considérese esta ley de orden público.
>
> La norma citada carece de relevancia jurídica para resolver el problema que nos ocupa. Según la misma, sólo vale para dar carácter retroactivo a la ley de la cual forma parte ... las leyes de orden público tienen exactamente el mismo valor que cualquier otra norma de nuestro ordenamiento jurídico." (Fs. 52-55).

Además de lo señalado, el señor Procurador de la Administración, Suplente, citó en su Vista Fiscal la Sentencia de 13 de enero de 1950 dictada por el extinto tribunal contencioso administrativo y las sentencias de 11 de marzo de 1969 y de 19 de octubre de 1995, dictadas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en las que se expresa, en su orden, lo siguiente. En la primera que los Notarios pueden ser destituidos dentro de los términos de su período y que la fijación del período de cuatro años resulta ilusoria por no haber la ley establecido mecanismos de protección que les garanticen la estabilidad en el cargo. En la segunda y tercera sentencias se sostiene que el hecho de que la ley establezca que ciertos funcionarios son nombrados por un período fijo, no es determinante para tener estabilidad en el cargo, si no se elimina la facultad que tiene el nominador para destituirlos discrecionalmente señalando expresamente las causales de destitución (fs. 56 y 57).

Evacuados los trámites legales pertinentes, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

El apoderado de la parte actora sostiene que el señor **BORIS SUCRE BENJAMÍN**, fue nombrado por un período fijo de cuatro años, como Notario Público Décimo Segundo del Circuito Notarial de Panamá, el 23 de marzo de 1994, con derecho de ejercer dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 1997, conforme los artículos décimo primero del decreto de nombramiento y 2119 del Código Administrativo, por lo que no podía ser destituido discrecionalmente por la autoridad nominadora.

A juicio de la Sala, procede en este caso analizar las normas que guardan relación con el nombramiento y remoción de los Notarios Públicos, a fin de determinar si estos funcionarios tienen derecho a la estabilidad, por estar protegidos por una ley especial o porque le son aplicables las normas de la carrera administrativa o si, por el contrario estos funcionarios son de libre nombramiento y remoción.

En cuanto a la naturaleza jurídica del cargo de Notario Público, se trata servidores públicos en los términos que los define el artículo 294 de la Constitución Nacional, toda vez que ejercen por delegación del Estado, la función de dar fe pública.

Nuestra Constitución Nacional define y consagra el régimen de los servidores públicos en su Título XI, contentivo de cuatro capítulos titulados: Disposiciones Fundamentales, Principios Básicos de la Administración de Personal, Organización de la Administración de Personal y Disposiciones Generales. En el artículo 295, que forma parte del Capítulo 1° que contiene las Disposiciones Fundamentales, preceptúa lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 295**: Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución.
>
> Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio."

Esta norma debemos estudiarla en relación con los artículos 297, 300 y 302 también de nuestra Carta Magna. El primero de estos artículos exige que sea la ley la que otorgue estabilidad y consagre los deberes y derechos de los servidores públicos de la administración y además ordena que los nombramientos que recaigan en el **personal de carrera** se haga con base en el sistema de méritos. La segunda norma constitucional citada instituye las carreras en la función pública, señalando que las mismas se rigen por los principios del sistema de méritos; y la última norma enumera los funcionarios públicos que no forman parte de las carreras públicas.

En relación con estas normas, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que la estabilidad de los servidores públicos en el empleo esté garantizada mientras dure su competencia, lealtad y moralidad en el servicio, "es menester que el legislador colateralmente a dichas normas constitucionales expida la Ley de Carrera Administrativa para todos los servidores públicos." (Sentencia de 11 de agosto de 1992, en demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 173 de 31 de diciembre de 1990, Registro Judicial, p. 31).

Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones deben ser establecidos en la Ley; por tanto, es la ley la que otorga estabilidad. Esta ha sido jurisprudencia constante de la Sala, y así lo expresó en sentencia de 13 de octubre de 1995, en los siguientes términos:

> "Observa la Sala, que el Decreto de Personal N° 389 de 20 de septiembre de 1994, mediante el cual se declara insubsistente el nombramiento del señor **N. A. C.**, tal como lo expresa la autoridad demandada a foja 9 del expediente, ha sido dictado por la autoridad nominadora en ejercicio de la potestad discrecional que tiene para destituir a quienes nombra cuando, como en el caso del señor **N. A. C.**, no están amparados por los beneficios de una carrera administrativa que les garantice un sistema de nombramiento, ascenso, suspensión, traslado, destitución, cesantía y jubilación de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución. Estas normas establecen que le está reservado a la Ley el desarrollo de la carrera administrativa, por lo que, ninguna norma de categoría

> inferior puede otorgar estabilidad a un funcionario público." (Registro Público, octubre de 1995, p. 286).

En sentencia de 23 de mayo de 1991, al resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 25 de 14 de diciembre de 1990, la Corte expresó sobre el artículo 295 lo siguiente:

> "Este inspirado precepto, al igual que casi todos los que aparecen en el Título XI, sobre los servidores públicos, está supeditado al establecimiento y existencia efectiva de las carreras públicas, ...
>
> Así, puede verse que, según el transcrito artículo, "los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos". Este sistema es típico y exclusivo de la carrera administrativa y de las otras carreras públicas. Y de igual manera lo es la regla invocada por los demandantes de que el nombramiento y remoción de los empleados públicos no es potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad.
>
> Por todo lo expuesto, pues, el invocado artículo 295 de la Constitución, como casi todos los demás del Título XI de la Constitución, sólo cobraría vigencia cuando se restablezcan las carreras públicas que dicho Título menciona." (Registro Judicial, p. 100-101).

Por tanto, si bien el artículo 295 de la Constitución Nacional preceptúa que el nombramiento y remoción de los servidores públicos no es potestad discrecional de ninguna autoridad, también exige que los servidores públicos y las carreras en la función pública se rijan por el sistema de méritos, y condiciona la estabilidad de sus cargos a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio. En tanto que el artículo 297 ídem ordena que los derechos y deberes de los funcionarios públicos, así como los principios para sus nombramientos y destituciones, sean determinados por Ley y el artículo 302 excluye de las carreras públicas los funcionarios nombrados por períodos fijos.

El texto de esta norma constitucional es el siguiente:

> "**Artículo 302**. No forman parte de las carreras públicas:
>
> 1. Los servidores públicos cuyo nombramiento regula esta Constitución.
>
> 2. Los Directores y Subdirectores Generales de entidades autónomas y semiautónomas, **los servidores públicos nombrados por tiempo determinado o por períodos fijos establecidos por la Ley** o los que sirvan cargos ad-honorem.
>
> 3. El personal de secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de ninguna carrera.
>
> 4. Los servidores públicos con mando y jurisdicción que no estén dentro de una carrera.
>
> 5. Los profesionales, técnicos o trabajadores manuales que se requieran para servicios temporales, interinos o transitorios en los Ministerios o en las instituciones autónomas o semiautónomas.
>
> 6. Los servidores públicos cuyos cargos estén regulados por el Código de Trabajo.
>
> 7. Los Jefes de Misiones Diplomáticas que la Ley determine." (Acentúa y subraya la Sala).

Nos interesa en el presente caso la norma contenida en el ordinal 2 del artículo constitucional transcrito que excluye de las carreras públicas los

servidores públicos nombrados por períodos fijos como los Notarios Públicos.

En sentencia de 12 de agosto de 1994, al resolver la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 331 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia señaló en relación con el numeral 2 del artículo 302 lo siguiente:

> "En lo que respecta al precitado ordinal 2° del artículo 302 nos interesa destacar únicamente, que de conformidad con el mismo aquellos "**servidores públicos ... nombrados por períodos fijos establecidos por Ley**" tampoco forman parte de la Carrera Judicial. Frente a este precepto constitucional, el artículo 331 del Código Judicial se encarga, precisamente, de establecer períodos fijos en el que permanecerán en sus cargos: el Fiscal Auxiliar de la República, el Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación, los Fiscales Superiores de Distrito Judicial, los Fiscales de Circuito y los Personeros Municipales.
>
> La consecuencia jurídica y lógica del anterior planteamiento estriba en que, al establecerse por medio de una ley períodos fijos por los que todos estos Agentes del Ministerio Público serán nombrados en sus cargos, se les excluye automáticamente de formar parte de la Carrera Judicial, puesto que el ordinal 2° del artículo 302 citado, preceptúa que los servidores públicos nombrados "**por períodos fijos establecidos en la Ley**" no formarán parte de las carreras públicas, en este caso, de la Carrera Judicial. (Registro Judicial, Agosto de 1994, p. 110-111)

La sentencia citada, declaró inconstitucional la segunda parte del artículo 331 del Código Judicial, que establecía el nombramiento por períodos fijos de los Fiscales y Personeros del Ministerio Público, por violar el artículo 221 de la Constitución Nacional, que ordena que los Fiscales y Personeros sean nombrados con arreglo a la Carrera Judicial, según lo dispuesto en el Título XI de la propia Constitución.

En el caso de los Notarios de Circuito, quienes son nombrados por un período de cuatro años, conforme el artículo 2119 del Código Administrativo, modificado por la Ley 53 de 1961, por la citada norma constitucional están excluidos del régimen de carrera pública. Además no existe norma constitucional que los incluya dentro de ese régimen de carrera, ni precepto legal que señale que gozan de estabilidad o que solo pueden ser destituidos por determinadas causas. La sola fijación legal del período notarial, no les da estabilidad en el cargo. Como ya hemos comentado para gozar de estabilidad en un cargo público se requiere formar parte de una carrera pública, a la cual hay que ingresar mediante concurso de méritos.

La carrera administrativa está regulada actualmente, mediante la Ley N° 9 de 20 de junio de 1990, que confiere estabilidad a quienes ingresan a la administración mediante concursos, pre-calificados por su formación académica, experiencia, habilidades y ejecutorias, pero está suspendida en razón del artículo 198 que dispone que "La incorporación de los diversos niveles funcionales e instituciones de la administración pública a la carrera administrativa, será progresiva, y se hará mediante acuerdo del Consejo de Gabinete ..." Sin embargo, los Notarios no podrán ser incluidos en la carrera administrativa por expresa prohibición constitucional, tal como se ha explicado.

El Código Administrativo regula el "Notariado" en su Título XVI, que comprende los artículos 2112 al 2139, en los cuales se establece lo siguiente: a) Requisitos para ser Notario (art. 2120), b) Nombramiento (art. 2119), c) Licencias (art. 2117), ch) Reemplazos (art. 2118), d) Incompatibilidades (art. 2121), e) Prohibiciones (arts. 2117, 2122 y 2127), f) Incapacidades (art. 2120), g) Obligaciones (arts. 2126, 2128 a 2131). También el Código Civil regula el Notariado de sus artículos 1714 al 1752, en lo referente a sus funciones, protocolo, los actos y los instrumentos que pasan ante los Notarios y las copias que se expiden.

El artículo 2119 del Código Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 53 de 6 de octubre de 1961, dispone, como hemos señalado, que "Los Notarios de Circuito, Principales y Suplentes, los nombrará el Órgano Ejecutivo, por un período de cuatro años, a partir del 1° de enero de 1962". Los artículos 2129 y 2132 se refieren a la posibilidad de que los Notarios de Circuito renuncien, sean destituidos, suspendidos y se les otorgue licencia, en los siguientes términos:

> Código Administrativo.
> "ARTÍCULO 2129. En los casos de renuncia, **destitución** u otros que no incapaciten al Notario para entregar personalmente el archivo a quien deba recibirlo, la entrega la hará el mismo Notario. (Acentúa la Sala).
> ...
> ARTÍCULO 2132. Si un Notario cesare temporalmente en el ejercicio de sus funciones por suspensión, licencia por más de treinta días u otro motivo, cuando vuelva a encargarse del archivo lo hará recibiéndolo con inventario en los referidos términos."

En ninguna de las normas del Título XVI del Código Administrativo, se declara que estos funcionarios serán elegidos mediante un sistema de méritos, ni que gozan de estabilidad, ni se señala las causas por las que pueden ser destituidos, ni se establece procedimiento disciplinario que les sea aplicable al momento de destituirlos, suspenderlos o sancionarlos.

Como a los Notarios ninguna ley especial les concede estabilidad, y por prohibición constitucional no pueden formar parte de las carreras públicas, porque son nombrados por períodos fijos, a juicio de la Sala, el hecho de que la ley establezca que sus nombramientos se harán por un período fijo no les otorga estabilidad en el cargo, y por tanto, no impide a la autoridad nominadora removerlos discrecionalmente de sus cargos. Así como es discrecional su designación, también es discrecional su remoción. Distinto sería si fueran funcionarios de carrera, o si su estabilidad estuviera amparada por la ley. El nombramiento para el cargo de Notario de Circuito es decisión discrecional del Ejecutivo, conformado por el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia, autoridad nominadora que designa a una persona que sólo debe cumplir con los requisitos del artículo 2120 del Código Administrativo.

A juicio de la Sala, ningún funcionario goza del derecho a la inamovilidad absoluta, y en el fondo esto es lo que alega el demandante, cuando afirma que los Notarios Públicos, si cumplen con los requisitos señalados en la ley para desempeñar el cargo, no pueden ser removidos por la autoridad nominadora durante el período de 4 años para el que fueron nombrados. Tampoco les da estabilidad el solo hecho de haber sido nombrados por un período fijo. Este criterio lo sostuvo el extinto Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia de 18 de mayo de 1950, al resolver la demanda interpuesta por la firma Molino y Moreno contra el Decreto N° 418 de 13 de enero de 1950, mediante el cual se nombraron nuevos Notarios de Circuito,

> "En segundo lugar, como se expresa en la justificación del acto acusado y en la Vista Fiscal, si bien es cierto que la Ley estableció un período de cuatro años para los Notarios a partir del día 1° de enero de 1927, por otra parte dicha ley dejó al Órgano Ejecutivo la facultad de nombrar los Notarios sin restricción alguna.
> ...
> No hay duda, que si la ley 15 de 1926 o el Código Administrativo trajera disposiciones protectoras de los Notarios en cuanto a sus períodos, como ocurre con el caso de los Gerentes de las instituciones autónomas por sus leyes orgánicas que expresamente establecen que éstos sólo podrán ser removidos de conformidad con lo establecido en ellas v. g. la ley 134 sobre el Seguro Social en su artículo 17 parte final dice: "sólo podrá ser removido (El Gerente) por sentencia judicial o por incapacidad manifiesta", la cuestión sería distinta.
> ...

> ... A los Notarios se les ha fijado un período de 4 años y la ley adolece del grave defecto de no garantizar su permanencia en el cargo.
>
> Cuando en el país se desarrollen los principios constitucionales creadores de la carrera administrativa, será entonces cuando los empleados públicos gozarán de ciertas prerrogativas, que deben destacarse: a)el derecho a no ser removidos de sus empleos, sino por falta a sus deberes de empleado y mediante el procedimiento que la ley señale; b) el derecho a ser ascendido en caso de que se halle vacante un cargo de mejores condiciones dentro de la jerarquía especial del ramo, según sus méritos y competencia y c) a todos los demás derechos que reconozcan la ley que reglamenta la carrera administrativa. Ahora, como se ha expresado, **en el caso concreto** de la presente demanda, **la ley se limita a fijar la iniciación y término de un período, pero omitió proteger la permanencia en el cargo,** quedando según el artículo 2119 del Código Administrativo al Órgano Ejecutivo la facultad de nombrarlo, disposiciones éstas que más bien dan la impresión de que estos funcionarios (art. 2129) pueden ser destituidos dentro de los términos de su período. La falta de desarrollo legal de las disposiciones constitucionales sobre la carrera administrativa, hace que la función pública de los empleados que no están expresamente amparados por la Constitución o las leyes, esté sometido a una disciplina de carácter administrativo, en virtud de la cual la persona que no tenga su permanencia asegurada y sus actos pueden sufrir sanciones de diversa índole, desde la simple censura o amonestación hasta la destitución, poder disciplinario que radica principalmente, en el Órgano Ejecutivo y demás funcionarios de la administración, como gobernadores, alcaldes, y demás jefes del servicio público ...
>
> Desgraciadamente para los Notarios la fijación de un período de 4 años resulta ilusorio por no haber la ley establecido ese mecanismo de que habla el autor citado para su protección y que garantizaría su permanencia en el cargo. (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, copia de los Fallos Enero-Junio, 1950, p. 662-663. Acentúa y subraya la Sala).

También en sentencia dictada por la Sala, para resolver demanda contencioso administrativa de Plena Jurisdicción promovida para que se dictara nulo, por ilegal, el Decreto N° 119 de 11 de marzo de 1969, dictado por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministro de Gobierno y Justicia, mediante el cual se nombró el Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, se concluyó que "El lapso de cuatro años fijado y la fecha inicial del período para hacer los nombramientos de dichos funcionarios, ... nada nos dice o no establece una restricción a la potestad implícita del Ejecutivo para revocar los nombramientos de los titulares de esos cargos antes de la fecha en que vence el período ... la experiencia que brinda a la Sala el legislador es que cuando quiere que algunos de los servidores del Estado obtengan estabilidad en sus cargos lo consigna expresamente en la Ley a la vez que los reviste de la debida protección".

En sentencia fechada el 22 de agosto de 1994 la Sala se pronunció en relación con la destitución de un servidor público nombrado por un período fijo, antes de que este venciera, en los siguientes términos:

> "La primera norma que estima conculcada el actor es el artículo 18 de la Ley 18 de 29 de septiembre de 1983, (G. O. N° 19.912 del 5 de octubre de 1983), señalando la infracción de la siguiente manera:
>
> "`La disposición antes transcrita, además de señalar el procedimiento para la designación del Director Nacional del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), establece el período en que el mismo debe cesar en el cargo, sin perjuicio de que dicho período sea prorrogado. En el caso que nos ocupa, el Señor Presidente de la República violó directamente por omisión la norma

> transcrita, toda vez que al designarse a nuestro representado en el Cargo de Director Nacional del INAFORP el mismo no podía ser destituido, puesto que la norma bajo examen establece un período fijo de cuatro años, y dentro de ese período sólo procede la destitución cuando la misma está fundada en justas causas, sin embargo, a nuestro representado se le despidió sin que mediara causa alguna y sin que se le formularan cargos, es decir que se tomó la medida de removerlo del cargo sin tomar en consideración que no había vencido el término para el cual había sido nombrado "

Debemos acotar que discrepamos en lo señalado por el demandante en virtud de que, si bien es cierto, el Decreto N° 17 de 1984, se nombra a E. R. P., por un período de 4 años, no es menos cierto que el Presidente de la República, tiene toda la potestad de remover a "los empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción", tal como lo señala el artículo 629, numerales 3 y 18 del Código Administrativo, cuyo texto es el siguiente:

> "rtículo 629. Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: ...
> 3° Dirigir la acción administrativa nombrando y removiendo sus agentes, reformando o revocando los actos de estos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
>
> 18. Remover los empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción.
> ...
> Adviértase que la Ley 18 de 29 de septiembre de 1983 no prohíbe la libre remoción del Director del Instituto Nacional de Formación Profesional, situación ésta que en combinación con lo estatuido en el numeral 18 del artículo 629 precitado, hacia al Director del INAFORP un funcionario de libre remoción del Presidente".
>
> (Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción promovido por E. R. P. para que se declarara la nulidad del acto mediante el cual el señor Presidente de la República lo destituyó del cargo de Director del INAFORP.)

Este es el caso de los Notarios que son nombrados por períodos fijos, no pertenecen a ninguna carrera pública y no están amparados por ninguna ley que les otorgue estabilidad e impida así su remoción discrecional.

Más recientemente, el 21 de diciembre de 1995, la Sala resolvió restituir en su cargo a un servidor público nombrado por un período fijo porque la Ley que les señala el período dispone además que, durante todo el tiempo que dure ese período, solo podía ser destituido por las causas expresas señaladas en la misma ley. En este fallo se afirmó:

> "... tratándose de funcionarios nombrados en el cargo de Tesorero Municipal, el Régimen Municipal consagrado en la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, les otorga estabilidad con fundamento en el artículo 55, toda vez que no pueden ser destituidos si no conforme a alguna de las causas enumeradas en esa norma, durante todo el tiempo que dure su período de ejercicio en el cargo, período que el artículo 52 establece en dos años y medio ..."
> (Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción promovido por Miguel Fong Rivera para que se declare nula, por ilegal, la Resolución 101-30-29 de 15 de septiembre de 1994, proferida por el Consejo Municipal del Distrito de Colón, página 71).

En mérito de lo expuesto, la Sala estima que el acto impugnado no viola el artículo 2119 del Código Administrativo y desestima este cargo.

En cuanto al cargo de violación del artículo 2120 ídem, que consagra los requisitos que se exige para el ejercicio del cargo de Notario, la Sala considera que el mismo no es aplicable al caso, toda vez que no se discute si el licenciado

BORIS SUCRE BENJAMÍN cumplía o no los requisitos para desempeñar el cargo, sino si gozaba del derecho a la estabilidad durante el período de cuatro años para el que fue nombrado.

Finalmente, en cuanto al último cargo de violación del artículo 5 de la Ley 53 de 1961, considera la Sala que esta norma tampoco es aplicable porque el hecho de que dicha ley sea de orden público, no guarda relación con el asunto en estudio, que es determinar si porque se establece en la ley un período fijo de cuatro años para el nombramiento de los Notarios Públicos, éstos gozan de estabilidad durante dicho período.

Como se han desestimado los cargos de violación que se imputan al acto administrativo impugnado, debe negarse las pretensiones del actor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, los artículos 3 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BANCO AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN CBN N° 7-96 DE 21 DE MARZO DE 1996 Y LA RESOLUCIÓN CBN N° 12-96 DE 18 DE ABRIL DE 1996, DICTADAS POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PANAMÁ, SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

Mediante escrito fechado el 20 de septiembre de 1996, el licenciado Juan Carlos Dudley Porras, actuando en nombre y representación de Dudley y Asociados, apoderados judiciales del Banco Agro-Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), ha desistido de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida el 10 de junio de 1995, para que se declare nula, por ilegal las Resoluciones CBN N° 7-96 de 21 de marzo de 1996 y CBN N° 12-96 de 18 de abril de 1996, ambas dictadas por la Comisión Bancaria Nacional y para que se haga otras declaraciones.

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1081 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, promovida por Dudley y Asociados, actuando en nombre y representación del Banco Agro-Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), para que se declare nulas por ilegales las Resoluciones CBN N° 7-96 de 21 de marzo de 1996 y CBN N° 12-96 de 18 de abril de 1996, ambas emitidas por

la Comisión Bancaria Nacional.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO, ARJONA & BRID EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A. (INISA), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 019 DE 28 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Moreno, Arjona & Brid, en representación de INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A., ha promovido, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 019 de 28 de abril de 1995, dictada por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Con la demanda, en escrito aparte, la parte actora presentó solicitud de que se suspendiera provisionalmente los efectos del acto impugnado, argumentando "que es evidente su contrariedad con la ley, y además de que si la misma llega a aplicarse se causarían daños graves a la propiedad de la sociedad INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A. (INISA)" (foja 17).

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley 135 de 1943, la Sala Tercera puede decretar la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Mediante el acto impugnado, la Dirección General de Catastro resolvió sancionar con multa de mil balboas (B/.1,000.00) a la Sociedad INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A., propietaria de la finca 22850, inscrita al tomo 546, folio 72, del Registro Público, Provincia de Panamá, por usufructuar ilegalmente 1,171.12 metros cuadrados dentro de la finca 6088, propiedad de la Nación, que constituye el Parque Recreativo y Cultural Omar (Antiguo Club de Golf), y, además se le advirtió que de no desocupar inmediatamente ordenaría la demolición y remoción de todas las obras, mejoras y demás construcciones levantadas dentro de la finca 6088. Cabe señalar que, mediante la Resolución N° 143 de 27 de junio de 1996, el Señor Ministro de Hacienda y Tesoro, Encargado, revocó la sanción de mil balboas impuesta a INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL, S. A. por considerar que "la Dirección General de Catastro al momento de expedir la Resolución N° 019 de 28 de abril de 1996, que crea la presente situación jurídica, no tenía facultad legal para sancionar con multa pecuniaria a los particulares que ocuparan tierras de LA NACIÓN ..." y confirma lo concerniente a la desocupación y demolición del bien propiedad de La Nación (foja 6).

La parte actora alega que la Ley N° 63 de 31 de julio de 1973 (por la cual se crea la Dirección General de Catastro), en que se fundamentó la administración para expedir los actos impugnados, no autoriza expresamente a la referida Dirección para imponer multas u ordenar la demolición y remoción de obras, mejoras y demás construcciones realizadas en terrenos propiedad de la Nación.

Adicionalmente, alega que la ejecución de los actos impugnados ocasionaría a la demandante perjuicios notoriamente graves, en virtud de que en los mismos se ordena no sólo la desocupación inmediata y parcial de la parte que ocupa de

la Finca N° 6088, sino también la demolición de las mejoras.

A juicio de la Sala, la petición hecha por la demandante debe resolverse favorablemente porque la demolición de mejoras que se ordena en la resolución impugnada, de ejecutarse causaría graves daños económicos de difícil reparación que deben evitarse hasta tanto se dilucide la controversia planteada sobre la legalidad de la mencionada resolución.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución N° 019 de 28 de abril de 1995, dictada por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. MIGUEL BATISTA EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL VIDAL FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 211 DE 25 DE OCTUBRE DE 1994, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Miguel Batista, actuando en representación de MANUEL VIDAL FUENTES, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994, expedida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional.

En la demanda se formula pretensión consistente en que, luego de agotados los trámites legales, la Sala revoque la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994, el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 70-94 de 22 de diciembre de 1994, la que a su vez fue confirmada por la Resolución N° E4-1 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional y, finalmente, se condene a dicha entidad crediticia a pagar gastos y perjuicios a favor de su representado.

En el acto acusado, el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, resuelve anular la adjudicación realizada a favor de MANUEL VIDAL FUENTES de la vivienda N° 966, Programa N° 26, Proyecto N° 8709, Préstamo Hipotecario, N° 03214, ubicada en Cerro Viento, Corregimiento José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito. En la Resolución N° E4-1 de 11 de abril de 12995, la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, niega la revocatoria solicitada en el recurso de apelación, y confirma en todas sus partes la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994.

I. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL DEMANDANTE:

La parte actora aduce como violados los artículos 976, 1109, 1113 del Código Civil y los artículos 2, 11, 13, literales a) y l) de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1984. El texto de los artículos mencionados en su orden respectivo es el siguiente:

> "ARTÍCULO 976: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos."

"ARTÍCULO 1109: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la Ley.

Se exceptúan los actos y contratos enumerados en el artículo 1131, los cuales no se perfeccionan mientras no consten por escrito, con especificación completa de las condiciones del acto o contrato y determinación precisa de la cosa que sea objeto de él."

"ARTÍCULO 1113: El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su consentimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta."

"ARTÍCULO 2: El Banco Hipotecario Nacional tiene como finalidad proporcionar financiamiento a programas nacionales de vivienda que tiendan a dar efectividad al derecho que consagra el artículo 113 de la Constitución Política y a dirigir, regular y fiscalizar el sistema Nacional de Ahorros y Préstamos para la vivienda de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social del Estado."

"ARTÍCULO 11: El Gerente General, quien será el Representante Legal del Banco, será nombrado y removido libremente por el Órgano Ejecutivo. El Gerente General asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz y voto y actuará como Secretario de la misma."

"ARTÍCULO 13: Serán deberes y atribuciones del Gerente General:
a) Dirigir el funcionamiento y operación del Banco;
...
l) Aprobar las operaciones y de seguro de préstamos hipotecarios, fomento de hipotecas aseguradas y de cuentas de ahorro que se propagan al Banco por sumas que no exceden de Ciento Cincuenta Mil Balboas (B/.150,000) cuando se trate de proyectos de viviendas. La Junta Directiva podrá variar este monto con la aprobación unánime de todos sus miembros y la opinión favorable del Gerente General".

El Lcdo. Batista sustenta en su escrito que la residencia N° 966 objeto de adjudicación, fue construida en 1982 y a finales de 1989 fue readquirida por la Primera Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, la cual a su vez, fue objeto de liquidación y la vivienda en referencia pasó a propiedad del Banco Hipotecario Nacional en concepto de dación en pago. Por otro lado, afirma el Lcdo. Batista que el precio de venta acordado por su representado fue de veinticuatro mil balboas (B/.24,000.00). No obstante, para el año de 1992, dicha propiedad aún no había sido adjudicada al Banco Hipotecario razón por la cual no podía adjudicársele a su representado. A su juicio, lo anterior indica que desde el momento que su representado solicitó en compra la residencia y el momento en que el Banco Hipotecario estuvo en condición de hacer el traspaso, transcurrieron varios meses, por lo que el Banco acordó con su representado un pago en concepto de alquiler por el orden de cinco mil balboas (B/.5,000.00). A ello añade, que es usual en los arriendos con opción de compra, que la suma pagada en concepto de alquiler se descuente del valor del inmueble, procedimiento que se utilizó en este caso, y se obligó a pagar a su representado la suma de veintinueve mil balboas (B/.29,000.00), que son descontados desde septiembre de 1994 a la fecha, en concepto de mensualidades de trescientos cinco balboas con 84/100 (B/. 305.84) mediante descuento directo.

En relación a las disposiciones alegadas como infringidas y en el concepto en que lo han sido, la parte actora estima que los artículos 976, 1109 y 1113 del Código Civil han sido violados de manera directa, toda vez que desde el momento de la celebración del contrato de compraventa de la casa N° 966, el Banco

Hipotecario Nacional quedó vinculado por la fuerza del pacto convenido y, en consecuencia, a cumplir con la correspondiente prestación, lo que le impide interrumpir unilateralmente, el goce y disfrute de la adjudicación que se le hizo a su cliente. Igualmente afirma que los derechos de su representado nacen de una relación contractual cuyo consentimiento consta por escrito, ínsito en la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994 que adjudicó el inmueble a su cliente y del cual se notificó en manifestación de su aceptación a lo pactado. En relación a lo anterior, el Lcdo. Batista afirma que el Gerente General del Banco Hipotecario se contradice al anular la adjudicación ordenada por el Ex-gerente General, pues, no ordenaba la cancelación de los pagos que ha hecho en forma ininterrumpida su representado, lo que evidencia el consentimiento tácito de la obligación. En cuanto al artículo 1113 del Código Civil, señala que las manifestaciones del consentimiento establecidas en dicho precepto legal, se han configurado en este caso toda vez que, por un lado, se realizó de conformidad por las partes contratantes y, por el otro lado, consta en el expediente el cumplimiento de su cliente, de las consecuencias jurídicas de su aceptación.

En cuanto a los artículos 2, 11 y 13 literales a) y l) de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1984, estima que igualmente han sido violados en el concepto de violación directa. A su juicio, el artículo 2 de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1994 ha sido violado, dado que el acto acusado obvia la función sustancial del Banco Hipotecario Nacional allí contenida, que se orienta a proporcionar el goce de una vivienda decorosa y accesible a los ingresos de los panameños sin distinción alguna. En relación al artículo 11 de la misma ley, a criterio del Lcdo. Batista ha sido vulnerado, pues, el acto administrativo contenido en la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994, desconoce la facultad inherente del Lcdo. Luis Carlos Arosemena en su calidad de gerente general, al expedir la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, que adjudicó el inmueble N° 966 a su cliente. Finalmente, sostiene que el anterior Gerente General del Banco Hipotecario Nacional actuó en uso de sus facultades legales y dentro de los parámetros jurídicos conceptuales contenidos en los literales a) y l) de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1984, ya que, por un lado, lo facultaba para efectuar operaciones entre el banco y particulares y, por el otro lado, lo autorizaba a convenir operaciones como la concertada con su cliente, lo que evidencia, a su juicio, la violación directa de la norma en cuestión.

II. INFORME DE CONDUCTA EXPEDIDO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

El Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, rindió informe explicativo de conducta mediante Nota N° 95(2000-01) 2066 de 23 de agosto de 1995. Dicho informe es del tenor siguiente:

> "II. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 16-94 DE 21 DE ABRIL DE 1994.
>
> En el transcurso del presente informe, demostraremos que tanto la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, por la cual, se adjudicó la vivienda N° 966 Cerro Viento al señor MANUEL V. FUENTES, y los actos y hechos que dan origen a la misma, están plagados de una serie de anomalías, vicios e irregularidades, ello sin perjuicio de la posible existencia de incriminaciones dolosas en la emisión y constitución del referido acto de marras, tanto por la autoridad que lo emite, el Gerente General LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, como por el beneficiario señor MANUEL V. FUENTES, lo cual pasamos a explicar en detalle, así:
>
> A) Actuación Irregular del Gerente General:
> La actuación irregular del Gerente General de ese entonces y que autorizó el acto anulado, Licenciado LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, es fácil de comprobar, más aún cuando el mismo, tenía completo conocimiento y conciencia de que su proceder lesionaba los intereses de esta institución, y en provecho del señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ.
>
> El señor AROSEMENA fue informado sobre este caso, tanto por los

funcionarios de la liquidación, Licenciado LUIS OVIEDO, Licenciado RAMÓN RODRÍGUEZ y Licenciado TOMÁS VEGA C., como por funcionarios del Banco Hipotecario Nacional, encargados de analizar el crédito. Del mismo modo que el señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, era sabedor de la alta morosidad que tenía con esta institución.

Veamos entonces en qué consisten los vicios e irregularidades que se cometieron en la aprobación y autorización de la adjudicación de la vivienda N° 966 Cerro Viento al señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, contenidos en la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994.

1°) Como ya mencionamos anteriormente, la vivienda N° 966 Cerro Viento (finca N° 77,887) fue traspasada al Banco Hipotecario Nacional, por la suma de B/.24,000.00 mediante Escritura Pública N° 262-36-1409 de 28 de septiembre de 1993,

2°) Desde abril de 1991 hasta agosto de 1994, el señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, adeudaba la suma de B/.10,250.00 en concepto de canon de arrendamiento, a razón de B/.250.00 mensuales, equivalentes a cuarenta y un (41) meses de morosidad, es decir, tres (3) años con (5) meses sin pagar, viviendo gratis en esa vivienda.

3°) A pesar de semejante antecedente como sujeto de crédito, el Gerente General, Licenciado LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, premia al señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, y en vez de lanzarlo y recuperar el inmueble, por el perjuicio que estaba causando a la institución, le adjudica la vivienda N° 966 Cerro Viento, por la suma de B/.29,000.00.

A simple vista podría parecer que el negocio era favorable al Banco Hipotecario Nacional, por cuanto que, recibió ese inmueble por la suma de B/.24,000.00 y lo estaban adjudicando por la suma de B/.29,000.00, lo cual, no es así.

Con tal transacción el Banco Hipotecario Nacional, fue objeto de un despojo como veremos a continuación:

a) El Gerente General, LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, lo que hizo fue, agregarle al valor de la vivienda (B/.24,000.00), las sumas de B/.5,000.00 en concepto de "Gastos de Administración" tomando como referencia la morosidad que el señor MANUEL VIDAL FUENTES debía a la primera Asociación de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (Central de Ahorros) en liquidación, que era de B/.5,250.00 para el mes de enero de 1993. Es decir, que no sólo, le congeló o retrotrajo la deuda a esa fecha y condonarle la suma de B/.250.00, sino que, se le cargó al señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, en concepto de "Gastos de Administración", irregularidad o falta grave inexcusable. Y es aquí, donde la anuencia y aceptación del señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, lo hace partícipe del hecho o acto, como quiera llamársele. Por ninguna parte, puede acreditarse o justificarse unos "Gastos de Administración" inexistentes y que sólo se adujeron para perpetrar la ilegalidad o irregularidad cometida en perjuicio del Banco y provecho o beneficio del señor FUENTES.

Pero es que, el Gerente General AROSEMENA, no sólo le condonó la suma de B/.250.00 al señor FUENTES, sino la suma total de CINCO MIL DOSCIENTOS BALBOAS (B/.5,200.00) restantes de los DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.10,250.00) que el señor le debía en ese entonces al Banco Hipotecario Nacional, lo cual, es totalmente ilegal y si se quiere, también ilícito, puesto que, puede ser tipificable como una modalidad de peculado.

b) Como consecuencia del hecho anterior, el Gerente General LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, adjudicó la vivienda N° 966 Cerro Viento, al señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, por la suma de B/.29,000.00,

cuando su valor según avalúos es de B/.24,000.00; lo que significa que, el crédito que se le iba a otorgar al señor FUENTES, era superior a la garantía real, hecho este que contraviene claras disposiciones financieras y normas de préstamos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional, más tratándose ésta, de una institución financiera que se rige por disposiciones de Orden Público e Interés Social.

c) Como mencionamos anteriormente, con la adjudicación a favor del señor FUENTES, el Gerente General, AROSEMENA, le condonó o perdonó la suma de B/.5,250.00 acto que no está autorizado por la Ley N° 39 de 8 de noviembre de 1984, orgánica del Banco Hipotecario Nacional. Puede incluso investigarse de oficio si tal acto es además un delito calificado como peculado en perjuicio del patrimonio de esta Institución.

III- Legalidad de la Resolución de Gerencia N° 211 de 25 de octubre de 1994.

Asimismo como expusimos anteriormente, todos los vicios e irregularidades que dieron lugar a la adjudicación contenida en la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, del modo sustentaremos la legalidad de la Resolución de Gerencia N° 211 de 25 de octubre de 1994, con la cual, se anula y se deja sin efecto la adjudicación de marras contenida en el acto antes mencionado.
...
Por encima de la alegación que ha hecho el señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, de que él no ha incumplido sus obligaciones y que él no ha violado la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, lo cierto es que tal acto está viciado de nulidad grave y evidente, y él era el único beneficiario directo del mismo, lo que, implica conocimiento de causa y aceptación tácita del acto.

De no haber sido así, y por el contrario, si tanto la adjudicación de la vivienda como el monto adeudado al Banco en concepto de arrendamiento, o bien, el pago de "Gastos de Administración" le hubiesen sido contrarios o hubiesen lesionado sus intereses particulares entonces no cabría la menor duda que lo habría impugnado tal y como lo está haciendo ahora ante esta augusta corporación de justicia contra la Resolución de Gerencia N° 211 de 25 de octubre de 1994.

De allí que la legalidad de la Resolución de Gerencia N° 211 de 25 de octubre de 1994, se fundamenta esencialmente en el Derecho Público en General y las normas especiales de la Institución, en particular, tendientes a proteger y salvaguardar el patrimonio y los intereses de la entidad pública a la cual represento.

Téngase presente, que la vivienda N° 966 ubicada en Cerro Viento, no es propiedad del señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, sino por el contrario, esa vivienda y terreno que constituye la finca N° 77,887 inscrita al tomo 1727, folio 480, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público; es de propiedad del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, por tanto es un bien del Estado sujeto a las normas de Derecho Público.

Si la adjudicación de ese inmueble al señor FUENTES, hubiese sido pagada o cancelada al contado, no había existido ninguna irregularidad, puesto que, en tal supuesto, se estaba pagando un precio mayor (B/.29,000.00) al valor, por el cual, el Banco lo recibió en dación en pago (B/. 24,000.00) con lo cual, se producía una ganancia neta de B/.5,000.00, a favor del Banco Hipotecario Nacional. Todo ello, sin perjuicio de la deuda de B/.10,250.00 que el mismo, le adeuda a la Institución, en concepto de morosidad en el pago de canon de arrendamiento de esa misma vivienda. Porque lógico es que mientras el señor Fuentes ocupe la vivienda de propiedad del

> Banco Hipotecario Nacional, debe pagar. De allí que le mantiene el descuento directo de su salario hasta que cancele toda deuda a esta Institución.
>
> Pero ese no es el caso que nos ocupa. Aquí lo que se da, es que señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, le adeuda al Banco Hipotecario Nacional, la suma de B/.10,250.00 en concepto de canon de arrendamiento, el Gerente General, LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, le condonó (cosa que es ilegal e ilícito) la suma de B/.5,250.00, cantidad que deja de percibir, y por tanto, pierde la institución, y los otros B/. 5,000.00, se lo carga o agrega al crédito que le otorga el propio banco, al señor FUENTES, en concepto de "GASTOS ADMINISTRACIÓN", acto que también es ilegal e ilícito, que sumados al valor del inmueble (B/.24,000.00) de un total de B/. 29,000.00, resultando entonces, que el "crédito" concedido supera el valor del inmueble que va a garantizar dicho "crédito" acto que también es ilegal y antifinanciero.
>
> Ante tales vicios e irregularidades, amparados o aprobados por la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, bajo el ropaje de una "adjudicación" a favor del señor FUENTES, no puede presumirse buena fe tanto de su parte como Gerente General que la aprobó o autorizó, tanto el señor MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ, como abogado y exfuncionario (Asesor Legal) de esta Institución, como el señor LUIS CARLOS AROSEMENA MEDINA, Banquero de profesión sabían perfectamente lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo.
>
> Cabe señalar que el Banco Hipotecario Nacional no ha celebrado Contrato alguno de compraventa con el señor Fuentes, y el posible crédito que se le iba a otorgar queda sin efecto por razón de la anulación de la adjudicación."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 437 de 18 de octubre de 1995, se opone a los criterios expuestos por la parte actora, por lo que solicita a esta Sala que desestime la pretensión.

III. REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CREAN SITUACIONES JURÍDICAS DE VENTAJA Y PRINCIPIO DE BUENA FE:

El asunto en controversia radica en determinar la validez del acto administrativo contenido en la resolución de Gerencia N° 211 de 25 octubre de 1994, expedida por el Gerente del Banco Hipotecario Nacional mediante la cual se "revoca" la adjudicación realizada a favor de Manuel Vidal Fuentes de la vivienda N° 966, programa N° 26, proyecto N° 8709, Préstamo Hipotecario N° 03214, ubicada en Cerro Viento, Corregimiento José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito.

Una vez efectuado el estudio del expediente, la Sala concluye que no existe fundamento jurídico alguno que sustente el procedimiento mediante el cual el Banco Hipotecario Nacional revocó la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994, que le adjudicó el inmueble motivo de esta controversia.

Lo anterior es así, toda vez que el acto que fue objeto de revocación mediante la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994, es un acto administrativo que crea una situación jurídica ventajosa de carácter particular y concreta, es decir, genera derechos subjetivos los cuales no pueden ser desconocidos de forma arbitraria ni unilateral. Así pues, el tratadista Gustavo Penagos señala que "... la Administración no puede desconocer los derechos subjetivos, para revocarlos debe ajustarse a la norma, y si el particular no da su consentimiento de forma expresa y escrita, debe demandar su propio acto." (PENAGOS GUSTAVO, El Acto Administrativo, Ediciones Librería del Profesional, Tomo II, Cuarta Edición, Bogotá, Colombia, 1987, pág. 807).

Lo anterior claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo, conferido mediante un acto expedido por la administración, el administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración en cuanto se exceda en sus facultades. Debe, pues, la

Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo en ese sentido afirma que "el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos, ante la imposibilidad en que se encuentra de revocarlos directamente ... en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido en forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe" (VIDAL PERDOMO, JAIME, Derecho Administrativo, Editorial Temis, S. A., Décima Edición, Bogotá, Colombia, 1994, pág. 143).

En el presente caso, a juicio de la Sala, el principio de la buena fe previsto en el artículo 1109 del Código Civil cuya violación se invoca en la demanda debe aplicarse, pues, del informe expedido por el Secretario General de la Contraloría General de la República visible a foja 81 del expediente, se observa que el administrado efectuó pagos al Banco Hipotecario Nacional en concepto de compra de un inmueble, desde la primera quincena de octubre de 1994 hasta la primera quincena de junio de 1996 es, decir, mucho después de la expedición del acto que ordena la revocación de dicha adjudicación, confiado en que, finalizados los pagos, sería el propietario absoluto del inmueble en cuestión.

Si bien es cierto que posteriormente a la adjudicación concedida mediante la Resolución de Gerencia N° 16-94 de 21 de abril de 1994 no se suscribió contrato alguno, no es menos cierto que se violenta el principio de buena fe que debe regir en las relaciones del Estado con sus administrados. Lo anterior es así, pues, se le creo al administrado la esperanza de adquirir una propiedad mediante pagos efectuados por un acuerdo preliminar el cual se perfeccionaría con la suscripción del contrato y su posterior inscripción en el Registro Público, no obstante, la falta de un contrato escrito, en este caso, no es una responsabilidad que se le imputa al administrado. Jesús González Pérez amplía este aspecto cuando señala que "la aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la Administración no va exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en el lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y en la propias necesidades públicas ... confianza, en fin, en que el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y administrado, no va adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones". Es de allí, que ir contra los actos propios, según el mismo autor, es una actuación contraria a la buena fe. (GONZÁLEZ PERDOMO, JESÚS, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas, S. A., Segunda Edición, Madrid, España, 1989, págs. 69 y 76).

Contraría, pues, el principio de la buena fe consagrado en el artículo 1109 del Código Civil, que ahora el Banco Hipotecario Nacional, que aceptó los pagos efectuados mediante descuento directo hechos por la Contraloría General de la Nación a Manuel Vidal Fuentes en virtud de una adjudicación, venga contra su propio acto, lo revoque ilegalmente e invoque su ilegalidad a fin de no reconocer los derechos de propiedad que fueron adquiridos por el demandante.

En razón de lo antes expuesto, concluye la Sala que al vulnerarse el principio de la buena fe, que es uno de los principios generales que sirven de fundamento al ordenamiento jurídico, el acto acusado infringe el artículo 1109 del Código Civil y el artículo 13 de la Ley 39 de 1984 que no otorga potestad al Gerente General de revocar sus propios actos que creen situaciones jurídicas de ventaja en favor de un administrado.

IV. DECISIÓN.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL la Resolución N° 211 de 25 de octubre de 1994, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, como también lo son sus actos confirmatorios y, DECLARA que el Banco Hipotecario Nacional está obligado a suscribir los documentos contractuales y ejecutar los actos necesarios para adjudicar al señor MANUEL VIDAL FUENTES la vivienda N° 966, Programa N° 26, Proyecto N° 8709, Préstamo Hipotecario N° 03214 ubicada en Cerro Viento, que constituye la finca N° 77-887 inscrita al Tomo 1727, Folio 0480, Sección de la Propiedad del Registro Público de la Provincia de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE B., EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS A. JIMÉNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6400-94 DE 29 DE JUNIO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos J. George B. en representación de **CARLOS A. JIMÉNEZ** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° 6400-94 de 29 de junio de 1994, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador, al momento de proceder a la admisión del libelo incoado se percata que la parte actora ha incluido en su demanda una solicitud de previo y especial pronunciamiento, con el fin de que se suspendan los efectos del acto impugnado.

En efecto, el recurrente al fundamentar la solicitud especial propuesta, ha señalado:

> "Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 33 de 1946, solicito al Pleno de la Sala Tercera de lo contencioso (sic) Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que decrete la suspensión de los efectos de los actos administrativos que se impugnan, en virtud del grave perjuicio que ocasionan, no sólo a mi poderdante, sino a centenares de funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social, afectados por la medida ilegal y arbitraria de la Dirección General de nuestra Primera Institución de Seguridad Social".

En relación a la petición presentada, la Sala Tercera debe destacar que en reiteradas ocasiones ha señalado que es importante que la parte actora no sólo enuncie el daño grave e inminente que alega, sino que este daño sea probado claramente y que los argumentos utilizados convenzan al Tribunal de la necesidad de adoptar la medida cautelar urgente solicitada, en vías de evitar un daño o perjuicios graves o irreparables.

Así lo ha contemplado la legislación Contencioso- Administrativa, específicamente en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, cuyo tenor literal reproducimos a continuación:

> "ARTÍCULO 73. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición,

sí, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave."

Se infiere de la excerta legal precitada que es requisito indispensable para que este Tribunal acceda a la suspensión de los efectos de un acto administrativo, que, a su criterio, el perjuicio alegado y probado sea notorio y grave.

En el caso que nos ocupa el interesado se limita a invocar la posible ocurrencia de perjuicios graves, sin entrar en el detalle de cuáles y cómo se producen. Este simple enunciamiento no amerita la medida solicitada, dado que esta Corporación Judicial no puede apreciar las circunstancias alegadas si las mismas no están acompañadas de un razonamiento debidamente fundamentado.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución N° 6400-94 de 29 de junio de 1994, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos Ayala** en nombre y representación de **TAMARA RODRÍGUEZ** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, proferido por el Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

En estado de resolver la presente demanda, se percata el Sustanciador que el Tribunal de Segunda Instancia, conformada por el Resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, no resolvió el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora en este proceso, contra el Auto de 18 de enero de 1996, el cual **NO ADMITIÓ** la demanda contencioso administrativa que nos ocupa (ver foja 27 y 28), lo que obliga al Suscrito declarar nulo todo lo actuado de foja 27 a la 46 del expediente, para que se enderece el procedimiento y se siga el curso legal correspondiente. El **numeral 10 del artículo 199 del Código Judicial**, prevé que es deber del Magistrado ejercer de oficio las funciones de saneamiento, tal como efectivamente se ha procedido.

Por las anteriores consideraciones, quien suscribe el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA NULO todo lo actuado de foja 27 a la 46 del expediente contentivo de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala en nombre y representación de TAMARA RODRÍGUEZ, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, proferido por el Ministerio de Educación y SE ORDENA el envío del expediente a la etapa correspondiente para que se resuelva el recurso de apelación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PATTON, MORENO Y ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD GRUPO MAYFER, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 981-96 D. G. DE 21 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Patton, Moreno y Asvat** en representación de **GRUPO MAYFER, S. A.** ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 981-96 D. G. de 21 de junio e 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social y actos confirmatorios.

El Magistrado Sustanciador al momento de proceder a la admisión del libelo incoado se percata que la parte actora ha incluido en su demanda, una solicitud de previo y especial pronunciamiento, con el fin de que al trámite de admisión de la demanda, se suspendan los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, el Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda encausada a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos formales que hagan procedente su admisibilidad.

Al resolver sobre la admisión de la demanda, el Suscrito observa que el recurrente no ha agotado la vía gubernativa tal como lo exige el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 25 de la ley 33 de 1946, el cual es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación". (Subrayado es nuestro).

De acuerdo al artículo transcrito, una de las formas como se agota la vía gubernativa es la utilización de los recursos administrativos por parte del afectado, tales como lo son el recurso de reconsideración y el de apelación.

En el presente caso la empresa **GRUPO MAYFER, S. A.**, fue favorecida con la adjudicación definitiva de la Licitación Pública N° 12-95(20-11-95), para el suministro e instalación y mantenimiento de un microscopio operatorio de óptica multireverso, marca Moller-Wedel, modelo Ophtamic 900 ó 900S/FS-3011 con destino al Hospital Manuel Amador Guerrero (Colón), por un monto de **cuarenta y nueve mil novecientos ochenta balboas solamente** (B/.49,980.00), más 5%. Esta adjudicación fue plasmada en la Resolución N° 560-96 D. G. de 18 de abril de 1996.

Al notificársele a HORACIO ICAZA Y CÍA., S. A., de la adjudicación definitiva, ésta propuso recurso de reconsideración ante el Director General de la Caja de Seguro Social y este funcionario reconsideró la adjudicación y cambió su criterio, adjudicándose la licitación a esta última empresa.

Posteriormente al enterarse el **GRUPO MAYFER, S. A.** de la nueva adjudicación, interpuso recurso de reconsideración, recurso éste que no procedía ya que el mismo fue incoado por la empresa HORACIO ICAZA Y CÍA., S. A. ya esta Sala en ocasiones anteriores ha indicado que no cabe reconsideración de la reconsideración, tal como puede confrontarse con **la Sentencia de 27 de septiembre de 1996 y el Auto de 19 de junio de 1995**, éste último lo reproducimos a continuación:

> "EL resto de los magistrados que integran la Sala coinciden con los criterios vertidos por el apelante en virtud de que, efectivamente la demanda interpuesta por la Sociedad Promociones Médicas, S. A., es extemporánea, toda vez que, los apoderados judiciales de la sociedad Reserma, S. A., interpusieron recurso de reconsideración contra el Resuelto N° 01361 de 31 de marzo de 1994 modificado por la Resolución N° 47 de 18 de abril de 1994, mediante los cuales se declara desierta la licitación pública N° 002-HST-93 para el suministro e instalación de un equipo de Tomografía de cuerpo entero para el Hospital Santo Tomás. Dicho recurso fue resuelto por la Resolución N° 89 de 9 de junio de 1994, donde el Ministerio de Salud revalora las propuestas presentadas dentro de la mencionada licitación y decide, en primer lugar, revocar el Resuelto N° 01361 del 31 de marzo de 1994 modificado por la Resolución N° 467 de 18 de abril de 1994 y en segundo lugar adjudica definitivamente la licitación pública N° 002-HST-93 a la empresa Reserma, S. A. Dicha resolución les fue notificada a los apoderados judiciales de la Sociedad Reserma, S. A., el 14 de junio de 1994, quedando agotada la vía gubernativa.
>
> Por otro lado, los apoderados judiciales de la sociedad Promociones Médicas, S. A., se notificaron de la Resolución N° 89, el 15 de junio de 1994, de lo cual se colige que la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por los mismos el 12 de diciembre de 1994, es a todas luces extemporánea, puesto que excede el término de dos meses que establece el artículo 27 de la Ley 33 de 1946 para la presentación de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante este Tribunal.

Retomando las ideas anteriores, lo que le quedaba al **GRUPO MAYFER, S. A.**, era interponer el recurso de apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, dado que la cuantía del contrato para el suministro e instalación y mantenimiento de un microscopio operatorio de óptica multireverso, marca Moller-Wedel, modelo Ophtamic 900 ó 900S/FS-3011 con destino al Hospital Manuel Amador Guerrero (Colón), sobrepasa la suma de **veinte mil balboas** (B/.20,000.00), tal como lo prevé el artículo 17, ordinales g) y k) y artículo 22, ordinal c) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Como puede observarse, el **GRUPO MAYFER, S. A.**, no utilizó el recurso de apelación, tal como se desprende de la actuación que reposa en el expediente.

Este Tribunal considera que la presente demanda no debe admitirse, razón por la cual es improcedente entrar a examinar la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por firma Patton, Moreno y Asvat en representación de GRUPO MAYFER, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. GERARDO A. DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DE DIOS CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-95 DE 5 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **GERARDO A. DE LEÓN**, en representación de **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 02-95 de 5 de mayo de 1995, emitida por el Rector de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Por medio de la presente acción, el apoderado judicial de la parte actora solicita a esta Sala que proceda a declarar la nulidad, por ilegal, de la prenunciada resolución mediante la cual se le destituye del cargo de Ingeniero Agrónomo III-I que ocupaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Que, consecuentemente, se ordene el reintegro del Ingeniero **CEDEÑO** al cargo que ocupaba y, se condene a dicha entidad al pago de salarios caídos a partir de la fecha de su separación real, el 1° de julio de 1995, hasta que objetivamente se cumpla con el reintegro que se pide, y conforme a su último ajuste salarial.

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El recurrente fundamenta las precitadas pretensiones fundamentalmente, en los hechos siguientes:

1. Que el Ingeniero Agrónomo **JUAN DE DIOS CEDEÑO** inició labores permanentes en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 23 de agosto de 1985, prestando sus servicios de forma contínua e ininterrumpida.

2. Que mediante nota de 23 de junio de 1992, el entonces auditor interno de la Universidad de Panamá, **MÁXIMO GUARDADO**, remite al entonces Rector, Doctor **CARLOS IVÁN ZÚÑIGA**, el informe de auditoría N° 29-92 realizado en el Centro de Enseñanza e Investigaciones Agropecuarias de Tocumen (CEIAT), donde de acuerdo a lo señalado por el citado funcionario auditor, se reflejó un faltante de cuatro mil doscientos cuatro balboas con 39/100 (B/.4,204.39), vinculándose con el resultado de esa experticia al Ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, quien fungía como administrador de aquella dependencia universitaria para esas fechas.

3. Que el referido áudito consistió en una evaluación de controles internos y operaciones financieras del CEIAT en el período comprendido entre el 1° de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1991.

4. Que el día 23 de junio de 1992, fecha en la que el precitado rector recibe el informe de auditoría interna 29-92, es el día que debe tenerse como la fecha cierta en que se tuvo conocimiento de la presunta falta en relación con el cumplimiento del plazo para solicitar la aplicación de medidas disciplinarias.

5. Que el día 18 de febrero de 1993, es decir, después de siete (7) meses y veinticinco (25) días de haber conocido y recibido el informe de auditoría interna 29-92, es cuando el Rector de la Universidad de Panamá en esa fecha, en nota N° 290-93 solicita a la Comisión de Personal la aplicación de una sanción disciplinaria.

6. Que las presuntas irregularidades administrativas que involucraban al señor

JUAN DE DIOS CEDEÑO fueron denunciadas ante el Ministerio Público para el levantamiento de la instrucción penal correspondiente y así determinar la posible existencia del hecho e individualizar responsabilidades, según consta en escrito de denuncia de 29 de octubre de 1992, suscrito por el Licenciado Virgilio E. Vásquez Pinto.

7. Que el día 19 de marzo de 1993, mediante nota DP-Rl 019-93, se le informa al ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO** su deber de acudir a dicha dependencia universitaria, sección de relaciones laborales, en un término de cinco (5) días laborables con la finalidad de atender la situación expuesta por el Rector en su misiva de 18 de febrero de 1993.

8. Que mediante nota de 26 de julio de 1993, el Presidente de la Comisión de Personal se dirigió al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para esa fecha, requiriéndole la notificación al señor **JUAN DE DIOS CEDEÑO** de la garantía especial de audiencia que podía ser solicitada por él, a partir de cinco (5) días hábiles después de la fecha de notificación por escrito de la posible imposición de la sanción disciplinaria, toda vez que en el expediente no constaba dicho trámite o garantía procesal.

9. Que efectivamente, el 28 de julio de 1993, después de que el entonces rector recibe el informe de auditoría N° 29-92, es que el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a través de la nota identificada con el N° 319-93, le comunica al ingeniero **CEDEÑO** su garantía de audiencia.

10. Que el día 6 de septiembre de 1993, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, emite Sobreseimiento Provisional a favor del ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO.**

11. Que el día 19 de noviembre de 1993, el representante de la Comisión de Personal notificó al precitado señor **CEDEÑO** que la audiencia relacionada con su proceso disciplinario se realizaría el día viernes 3 de diciembre de 1993.

12. Que el día 5 de mayo de 1995, la Comisión de Personal a través de su actual rector, suscribe y profiere la resolución N° 02-95 donde resuelve destituir del cargo que ocupaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias al ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO.**

13. Que una vez notificado el día 12 de mayo de 1995, de la precitada resolución, el señor **CEDEÑO** interpuso en tiempo oportuno, recurso de reconsideración mediante escrito calendado 15 de mayo de 1995, sin que el rector, quien era el funcionario encargado de resolverlo, procediera a pronunciarse sobre el mismo.

14. Que por otra parte, al Consejo Técnico Nacional de Agricultura no se le notificó a su debido tiempo, el inicio y adelanto del proceso disciplinario del que era objeto el ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, para que por su parte, efectuara las investigaciones necesarias en cuanto a la veracidad de los cargos que se le endilgaban.

15. Que el Consejo Técnico Nacional de Agricultura (C. T. N. A.), como ente legalmente encargado de velar por el fiel cumplimiento de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, expide la Resolución N° 027-95 de 4 de septiembre de 1995, donde resuelven solicitar a la Universidad de Panamá el reintegro inmediato a su cargo.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante informe explicativo de conducta que reposa a fs. 110-114 del expediente contencioso, el ente administrativo demandado por medio de su representante legal, el rector de la Universidad de Panamá, se dirigió a esta Sala en los siguientes términos:

> "1. Notificación al Consejo Técnico Nacional de Agricultura: Si bien es cierto que el Artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961 señala el procedimiento para la destitución de profesionales adscritos al Consejo Técnico Nacional de Agricultura al servicio del

Estado, esta disposición no es aplicable a la Universidad de Panamá por cuanto ésta, conforme al Artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá es autónoma y tiene facultad para `designar y separar su personal , por lo que no está supeditada a ninguna legislación extraña a la Universidad de Panamá.

2. Solicitud de aplicción (sic) de la sanción: El hecho de que el artículo 186 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo señala que la aplicación de medidas disciplinarias deben solicitarse `dentro de un plazo no mayor de dos (2) meses después que se tuvo conocimiento de la falta , el mismo no establece expresamente una prescripción, caducidad o preclusión del derecho de la institución a aplicar la sanción, por lo que la disposición sólo tiene un carácter de incitar perentoriamente la acción disciplinaria sin que ésta se extinga en forma alguna por el transcurso del tiempo allí señalado.

Por otra parte, es conveniente señalar que en el propio informe de Auditoría en la nota que se remitió, DAI-122-92 de 23 de junio de 1992, se señalaba que estaba sujeto a cualquier ampliación, por lo que la fecha de entrega inicial no constituye de inmediato la verificación o comprobación de la falta cometida. Esta surge realmente cuando la autoridad competente se compenetra del contenido y deduce que efectivamente se ha cometido la infracción. ...

3. La causal de destitución: Efectivamente la resolución meritada se fundamenta en el Artículo 180 del literal ch) del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo, el que señala, entre otras, la causal de faltas graves de probidad, que quedó debidamente establecida tanto por el faltante de Cuatro Mil Doscientos Cuatro Balboas con 39/100 (B/.4,204.399,), como con la forma en que manejaba el Ingeniero Juan de Dios Cedeño las finanzas del Centro de Enseñanzas e Investigaciones Agropecuarias de Tocumen (CEIAT), lo que evidencia un desgreño administrativo inaceptable que configuran las causales contenidas en la disposición legal citada en que se sustenta la resolución meritada.

4. El sobreseimiento provisional en lo penal: El hecho de que se hubiese dictado un sobreseimiento provisional en el Juzgado Undécimo del Circuito de lo Penal en el caso del Ingeniero Juan de Dios Cedeño, esto no implica una absolución total y absoluta de los cargos por los que fue investigado, antes bien, indica que hubo evidencias comprometedoras, pero no totalmente comprobadas, sujetas a posibles investigaciones futuras, por lo que entonces, el procedimiento disciplinario administrativo, que es independiente de la acción penal, y por tanto, no sujeto a prejudicialidad alguna, tiene la capacidad de evaluar y determinar la existencia de una causal que amerita la sanción disciplinaria correspondiente.

5. La decisión de la reconsideración: En cuanto a que el recurso de reconsideración no fue resuelto en un plazo de diez (10) días hábiles, ello no implica necesariamente una acción que invalida la resolución recurrida ... debido a diversas gestiones que hizo el propio recurrente acompañado de colegas del Consejo Nacional de Agricultura, la Rectoría de la Universidad de Panamá decidió el 11 de julio de 1995, mediante Nota N° 1207, ordenar una ampliación con el propósito precisamente, de darle mayores garantías al Ingeniero Juan de Dios Cedeño para aclarar el caso, ampliación que se efectuó parcialmente, ya que el Ingeniero Juan de Dios Cedeño no participó en la misma a pesar de que fue citado a comparecer, quien alegó al respecto que ya había ocurrido el silencio administrativo al que él se acogía para presentar su demanda."

DISPOSICIONES ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Mediante el acto cuya ilegalidad se solicita, se considera infringido el

Artículo 10 de la Ley N° 22 de 30 de enero de 1961, "Por la cual se dictan disposiciones relativasa la prestación de Servicios Profesionales Agrícolas" y los artículos 180 (literal ch.), 186 y 191 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo que desarrolla en parte la Ley 11 de 8 de julio de 1981, Ley Orgánica de la Universidad de Panamá.

El artículo 10 de la Ley 22 de 1961 dispone:

> "**Artículo 10**. Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo de esta Ley."

Las precitadas disposiciones del Reglamento de Carrera de Personal Administrativo de la Universidad de Panamá en el orden establecido, señalan:

> "**Artículo 180.** Son causales de destitución:
> ...
> **ch**. Incurrir en faltas graves de probidad, conducta inmoral o comisión de hechos delictivos que perjudiquen el buen funcionamiento de la Institución."

> "**ARTÍCULO 186.** La aplicación de las sanciones disciplinarias deben solicitarse a las autoridades u órganos competentes dentro de un plazo no mayor de dos (2) meses, después que se tuvo conocimiento de la falta."

> "**ARTÍCULO 191.** La reconsideración se interpone por escrito ante la misma autoridad que dictó la medida disciplinaria dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.
>
> Dicha autoridad debe resolver el recurso en un plazo de diez (10) días hábiles."

En cuanto a la violación del artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, indica el recurrente que dicha norma ha sido infringida por razón de que el acto atacado dejó de aplicar su texto para los efectos de su destitución. Además, que es definitivamente cierto que a él de ninguna manera se le había declarado incompetente, ni moral, ni técnica ni físicamente; que no fue escuchado previamente a su destitución, por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, y, por lo tanto, se le desconoció el derecho que le asistía a por lo menos, ser escuchado.

Sobre la infracción del literal ch) del artículo 180 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo, la parte actora sostiene que dicha disposición fue violada en el concepto de infracción literal por indebida aplicación. En este sentido, manifiesta el recurrente que no es aceptable desde ningún punto de vista legal, que la Comisión de Personal de la Universidad de Panamá se atribuya la facultad de responsabilizar al señor **JUAN DE DIOS CEDEÑO** por un delito o hecho punible que nunca existió, porque así lo consideró el Ministerio Público y el Órgano Judicial por conducto del Juzgado Undécimo de Circuito Penal de Panamá.

Dice también el demandante que lo que ha hecho la Universidad de Panamá al pronunciarse, transcurridos más de dos años después de haber tenido conocimiento de la presunta falta disciplinaria, no es nada menos que juzgar dos veces a su representado por la misma situación convirtiéndola a su vez, en una causal de destitución, entendiéndose por tal, incurrir en la comisión de hechos delictivos.

En lo que concierne a la violación del artículo 186 del referido

Reglamento, sostiene la parte actora que el mismo se produjo en el concepto de violación directa. Ello, en atención a que el señor rector aplicó dicha disposición transcurridos 7 meses y veinticinco días después que se le comunicó y se le puso en antecedente del áudito N° 29-92 que presuntamente detectaba la falta merecedora de la sanción. De esta forma, se pasó por alto el término perentorio que ofrece la norma para requerir de las autoridades universitarias la posible aplicación o imposición de la sanción disciplinaria establecida en el precitado artículo 186.

Sobre la transgresión del artículo 191 del aludido reglamento, manifiesta el demandante que la misma se ha producido en razón de que las autoridades correspondientes han omitido su texto claro al no pronunciarse sobre el recurso de reconsideración interpuesto y sustentado dentro del término legal estipulado. De esta manera considera que se han conculcado las garantías procesales disciplinarias legalmente establecidas a su favor.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Mediante Vista Fiscal N° 546 de 22 de diciembre de 1995, que corre a fojas 115-130, la Procuradora de la Administración actuando en defensa del acto acusado, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 348 del Código Judicial, solicitó a esta Superioridad desestimar las pretensiones incoadas en el libelo de la demanda.

La prenombrada funcionaria sostiene que la aplicación de la destitución al ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO** como medida de carácter disciplinario tiene su asidero jurídico en los artículos 164 y 165 del referido Reglamento de Personal que rigen el buen funcionamiento de la Institución basado en la regulación de la conducta y las relaciones del empleado universitario con la Administración. Aunado a que establecen que los empleados administrativos que no cumplan con sus deberes y obligaciones serán objeto de sanciones administrativas, independientes de aquellas de carácter civil o penal.

Por consiguiente, manifiesta la precitada funcionaria que al habérsele comprobado al Ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, la apropiación de dineros pertenecientes a la Institución, su conducta se adecúa a la causal de destitución contemplada en el artículo 171, literal d), desarrollada en el artículo 180 del aludido reglamento. Aunado a que para proceder a la aplicación de la misma, se le siguió el procedimiento contemplado en los artículos 181, 184 y 185 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo.

Por otro lado, en lo que respecta a la infracción del artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, alude la señora Procuradora que el mismo, lejos de ser infringido, se le dio cabal cumplimiento, toda vez que el Ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO** era un profesional al servicio del Estado que fue destituido por razón de su incompetencia moral. De allí, que se realizaran las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los hechos, escuchando a las partes involucradas.

En cuanto al Sobreseimiento Provisional en el proceso penal al que se refiere el demandante, señala la aludida funcionaria que éste no incide en el proceso administrativo porque la omisión en el cumplimiento de las obligaciones que se impone a los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones puede dar lugar a tres tipos de responsabilidades a saber; la penal, la civil y la administrativa. Indica que ello es así porque el Derecho Disciplinario comprende los deberes de los empleados públicos, sus faltas disciplinarias, el procedimiento disciplinario y las sanciones también de índole disciplinarias que sean aplicables, según cada caso o la gravedad de la falta.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos, la Sala procede a resolver la presente controversia.

En lo que respecta a la infracción de los artículos 180 y 186 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo de la Universidad de Panamá,

que por la relación que guardan entre sí, analizaremos conjuntamente, esta Superioridad estima procedente señalar lo siguiente:

Contrario a lo manifestado por el recurrente, la Sala estima que al proceder la autoridad administrativa correspondiente a aplicarle la sanción disciplinaria de destitución a la que alude el precitado artículo 180 (acápite c) del referido reglamento, sí se cumplieron con las garantías procesales consagradas en dichas disposiciones reglamentarias. Esta aseveración se desprende de las constancias procesales incorporadas en el expediente contencioso que indican a este Tribunal la existencia de suficientes elementos probatorios que evidencian que el demandante incurrió en faltas graves de probidad en perjuicio y detrimento de la Institución.

A fs. 18 del expediente principal consta copia del Informe #29-92 con fecha de 23 de junio de 1992, en el cual el Auditor Interno para esa fecha **MÁXIMO GUARDADO** remitió al Rector en aquella época **CARLOS IVÁN ZÚÑIGA** el Informe de Auditoría realizado al Centro de Enseñanzas e Investigaciones Agropecuarias de Tocumen **(C. E. I. A. T.)** sobre la evaluación de los controles internos y las operaciones financieras en el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1990, y del 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 1991. Dicha investigación arrojó el resultado de una diferencia faltante de los fondos del **(C. E. I. A. T.)** por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.4,244.39), indicándose que la misma era producto de la retención de dichos fondos, al igual que de los malos manejos de los mismos por parte de la Administración del Ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**. (ANEXO 1) Tales irregularidades están plenamente establecidas de fojas 27-28 (ANEXO #9 - ANEXO #10).

Posteriormente, y en base al aludido informe, el Rector de la Universidad de Panamá en nota N° 290-93 de 28 de febrero de 1993, procedió a solicitar a la Comisión de Personal la aplicación de una sanción disciplinaria en contra del precitado funcionario **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, denunciado por delito contra el Patrimonio de la Universidad, consistente en hacer depósitos inferiores a lo recibido y retener ingresos por la suma de B/.4,204.39. (Cfr. f. 1).

De igual forma consta a fs. 22 la Nota ND-319-93 de 27 de julio de 1993, mediante la cual el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá procedió a notificar al precitado funcionario, del proceso disciplinario que se le seguía en su contra. (ANEXO #4) De dicha misiva se dio por notificado el señor **JUAN DE DIOS CEDEÑO** el día 28 de julio de 1993, en nota remitida al Presidente de la Comisión de Personal de la Universidad de Panamá en la cual acusa recibo de la notificación, además de que acogiéndose al artículo 182 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo, le solicita una audiencia ante la Comisión de Personal con el fin de presentar descargos referente al aludido Informe de Auditoría Interna N° 29-92. (ANEXO #5).

También se observa a f. 24, la Nota N° C. P. 302-93 de 19 de noviembre de 1993, mediante la que el Presidente de la referida Comisión de Personal, le notifica al precitado ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO** que su audiencia se efectuaría el día viernes 3 de diciembre de 1993, en la Dirección de Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá. Además de que se le informa que en ese acto tendría derecho a expresar personalmente su versión de los hechos, a presentar las pruebas (testigos, documentos, peritos) que estimara pertinentes y solicitar la realización de una investigación adicional por parte de la Comisión de Personal para demostrar su inocencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 181, 184 y 185 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. (ANEXO #6).

Como se puede apreciar, al proceder a la destitución del ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, la entidad administrativa demandada sí cumplió con el procedimiento legal establecido en las normas procedimentales contempladas en el Título V de el Reglamento de Carrera del Personal Administrativo, correspondientes al Régimen Disciplinario, cumpliendo a cabalidad, y contrario a las aseveraciones del actor, con el literal ch) del artículo 180. Aunado a que la referida sanción le fuera aplicada tomando en consideración la falta cometida, como hemos dejado sentado

en párrafos anteriores, y en atención al precepto legal contemplado en el artículo 187 del precitado reglamento, que a la letra dispone:

> "**ARTÍCULO 187.** Las sanciones disciplinarias deben aplicarse de acuerdo con la falta cometida."

Por otro lado, el recurrente alega que la aplicación de la sanción de destitución de la que fue objeto está prescrita, de acuerdo con el artículo 186 del referido reglamento. Este Tribunal considera que no le asiste razón al recurrente, y en este punto coincide con los planteamientos esgrimidos por el ente administrativo demandado, en el sentido de que esta norma no contempla ninguna sanción de prescripción del derecho de la institución de aplicar la sanción. Debe entenderse entonces que lo que esta norma procura es que la aplicación de la sanción se haga efectiva dentro de un período de tiempo razonable, y no que su aplicación se posponga indefinidamente.

Además, es de lugar observar que el citado artículo alude a que la aplicación de las sanciones disciplinarias **"deben"** solicitarse dentro del término de dos meses con lo cual se quiere indicar que más que una **"obligación"** que lleva implícita una sanción **(prescripción)**, contra la autoridad que tiene conocimiento de la falta, lo que se pretende es dejar sentada la responsabilidad que tiene el funcionario al momento de tener conocimiento de la falta de solicitar la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

Por lo expuesto, no prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 180 y 186 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo.

En lo concerniente a la violación del artículo 10 de la Ley N° 22 de 1961, la Sala estima pertinente indicar que pese a que el recurrente era un profesional en ciencias agrícolas al servicio del Estado, dicha ley no es de aplicación al caso en referencia porque el recurrente era un funcionario público al servicio de la Universidad de Panamá, y siendo ésta una entidad autónoma de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional, la normativa aplicable lo eran las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el régimen disciplinario aplicable a dicha institución, que, como hemos visto, se les dio fiel cumplimiento. Por tanto, no se ha producido violación alguna del artículo 10 de la Ley 22 de 1961.

En lo que atañe al Sobreseimiento Provisional declarado a favor del ingeniero **JUAN DE DIOS CEDEÑO**, la Sala estima oportuno señalarle al demandante que el procedimiento disciplinario no está sujeto a las mismas garantías que el proceso penal. Por tanto, si un funcionario es procesado penalmente, de igual manera, puede ser sancionado disciplinariamente como ha ocurrido en su caso, en el cual la sanción de destitución que le fuera aplicada es estrictamente disciplinaria, y de naturaleza administrativa. En igual sentido se pronunció esta Superioridad en Sentencias de 20 de octubre de 1995, y de 23 de mayo de 1991. Para mayor ilustración veamos el criterio establecido en esta última:

> "Es preciso aclarar que cuando el artículo 32 de la Constitución dice que nadie será juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria, lo que establece es que una persona no puede ser juzgada más de una vez penal, policiva o disciplinariamente. **El precepto no impide, pues, que alguien sea sancionado disciplinariamente y que lo sea también penalmente o viceversa. Así, puede ocurrir que un Ministro o un Director de una institución autónoma destituya a un empleado porque ha cometido un delito; pero esta sanción disciplinaria no impide, ni mucho menos, que la persona sancionada sea luego juzgada y penada por la autoridad jursidiccional competente.**
>
> De ahí que SAYAGUEZ LASO se exprese a este respecto en los siguientes términos:
>
> `Hemos señalado antes que las responsabilidades penal y disciplinaria no se excluyen una a la otra y que, por lo tanto, un

> mismo hecho puede motivar la aplicación de sanciones penales y disciplinarias (SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, 5a. ed., Montevideo, 1987, p. 337)." ... (Lo resaltado es de la Sala).

En cuanto a que la Universidad de Panamá, al no pronunciarse sobre el recurso de reconsideración interpuesto y sustentado dentro del término de diez (10) días siguientes a su presentación, ha infringido el artículo 191 del Reglamento in examine, la Sala estima pertinente indicar lo siguiente.

El hecho de que la administración pública no se haya pronunciado en tiempo oportuno sobre el recurso de reconsideración interpuesto, no da lugar a que se piense que se han violado las garantías procesales administrativas, en virtud de que dentro de la Ley 135 de 1943, reformada por la ley 33 de 1946, específicamente en su artículo 36, existe la figura jurídica conocida como silencio administrativo. Este fenómeno jurídico precisamente, tiene la función de suplir la omisión por parte del funcionario administrativo de no pronunciarse sobre los recursos interpuestos, y, por otro lado, da lugar a trasladar la controversia a la vía jurisdiccional (contencioso administrativa) por parte del administrado para la revisión judicial del acto administrativo. Por consiguiente, no prospera el cargo de infracción contra el artículo 191 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 02-95 de 5 de mayo de 1995, emitida por el Rector de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE VELKIS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO E 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Norberto Castillo**, en representación de **VELKYS YARIELA SANTAMARÍA**, ha interpuesto recurso de reconsideración contra el Auto de 10 de mayo de 1996, por el cual, **PREVIA REVOCATORIA** de la Providencia calendada 5 de febrero de 1996, **NO SE ADMITIÓ** la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

El resto de los Magistrados de acuerdo con el criterio de la Procuradora de la Administración, no admitió la demanda incoada en virtud de que no se adjuntó a la misma la correspondiente certificación que acredita la negativa tácita de la decisión por silencio administrativo invocado.

A juicio de este Tribunal Colegiado, el recurso propuesto es viable a la luz de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 1114 del Código Judicial, cuyo texto es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 1114.** El recurso de reconsideración tiene por objeto que el Juez revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución.
> ...
> Los autos expedidos por un Tribunal Colegiado que se limiten a confirmar una providencia o auto de primera instancia o una resolución del sustanciador no admiten reconsideración. Sí la admiten en cambio las resoluciones que revoquen, reformen, decreten prestaciones o hagan declaraciones nuevas no discutidas por las partes, salvo que se trate de resoluciones contra las cuales se admite recurso de casación." (El subrayado es nuestro).

De acuerdo a lo anterior, procede el Tribunal Colegiado al nuevo estudio de las formalidades del libelo, para determinar si le asiste la razón al demandante, quien se opuso a la decisión de este Tribunal de segunda instancia en los siguientes términos:

> "... Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley 135 de 1943, adicionada y modificada por la Ley 33 de 1946, el cual define lo que es la figura del `**Silencio Administrativo** , cuándo ella se da y sus efectos; es igualmente cierto que esta misma Ley exija el **AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA** para poder acudir en demanda ante la Jurisdicción de la Sala Tercera, De lo Contencioso Administrativo, de la **Honorable Corte Suprema de Justicia**. Esta exigencia de la Ley conlleva una sanción para el Actor si no cumple con ella, cual es el rechazo o no admisión de la demanda; más sin embargo, el **DEMOSTRAR o PROBAR QUE NO SE HA DADO DICHO AGOTAMIENTO** es parte en la defensa de la Parte Demandada, quien pudiera, al contestar la Demanda, aducir la extemporaneidad en la presentación de la misma, arguyendo y probando (**AHORA SI**) con copia autenticada del Recurso interpuesto o con copia de la resolución que decidió el Recurso de Reconsideración y/o Apelación, que el tiempo de presentación de la Demanda excede de los tres (3), meses contados a partir de la fecha en que se interpuso el Recurso o de los dos (2) meses señalado por la Ley, contados a partir de la fecha en que se emitió dicha resolución. Es irrelevante para el Demandante, ni tampoco lo exige la Ley, demostrar al momento de presentar la Demanda con certificación como pretende la Procuraduría General de la Nación) que la **Vía Gubernativa** se ha agotado, ya que la extemporaneidad que en un caso dado se pudiera dar es parte de la defensa del Demandado.
>
> **Sexto.** En cuanto al argumento del agotamiento de la Vía Gubernativa enarbolado por la **Procuraduría General de la Administración** no ha debido ser tomada en cuenta por el Juzgador ya que, el aducir el texto del artículo 46 de la Ley 135 de 1943, en esta situación, está fuera de todo contexto puesto que dicha norma hace alusión a la falta de acompañar el "**acto impugnado**" a la demanda, más no a establecer la figura del agotamiento de la vía gubernativa, como han logrado hacer creer al Tribunal de Segunda Instancia. Y si fuese aplicable a esta situación, no sería ello razón para inadmitir la demanda, puesto que, por el contrario, la referida norma precisamente da la oportunidad al Magistrado Sustanciador de solicitar la "**certificación**" que dice la Procuraduría de la Administración ser necesario allegar en caso de considerarla necesaria." ...

Quienes suscriben observan que el recurrente no ha aportado nuevos elementos de juicio que conlleven a modificar la decisión adoptada por esta Superioridad en Auto de 10 de mayo de 1996.

En efecto, en el caso in examine, se constata que el recurrente a f. 6 del expediente, específicamente en el punto N° 6 correspondiente al aparte Lo que se Demanda; alega la ocurrencia del "**silencio administrativo**" por parte de la entidad demandada (Ministerio de Educación), al no pronunciarse luego de transcurridos dos (2) meses, sobre el recurso de reconsideración que alega haber

presentado en tiempo oportuno contra el Decreto Ejecutivo N° 204 del 14 de agosto de 1995. Situación que a su juicio, debe entenderse como decisión negativa del recurso y con ello, agotada la vía gubernativa.

Sin embargo, tales aseveraciones no han sido debidamente comprobadas como bien lo manifestara este Tribunal **ad-quem** en el Auto objeto de impugnación. Se observa a f. 9 del expediente, que pese a que el recurrente solicitó al Magistrado Sustanciador requerir del Ministerio de Educación el envío de una serie de copias autenticadas, así como también, ciertas certificaciones relacionadas con su mandante, en ningún momento solicitó al Magistrado Sustanciador requerir de dicho Ministerio, certificación de si sobre el referido recurso, había recaído o no decisión, a los efectos de acreditar debidamente el agotamiento de la vía gubernativa.

Retomando la idea anterior, tal exigencia no es suficiente para acreditar la negativa tácita de la administración si no se hace acompañar necesariamente a la demanda, copia autenticada del escrito contentivo del recurso gubernativo con fecha de presentación ante la institución demandada, más la constancia o certificación de esta última, de que pasados los dos (2) meses a los que alude el artículo 36 (ordinal 1), de la Ley 135 de 1943, no ha recaído decisión resolutoria sobre el mismo.

El cumplimiento de este requisito por parte de la jurisprudencia reiterada de esta Sala tiene como finalidad y encuentra plena justificación en el hecho de que en la medida en que se acredite debidamente dicha negativa, se comprueba plenamente el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley. Además de que, por ser el silencio administrativo **un acto presunto de la administración con efectos negativos sobre lo pedido**, el mismo por tratarse precisamente de un acto, debe ser plenamente acreditado tal como lo exige el artículo 46 de la Ley 135 de 1946.

Aunado a lo antes dicho, es de lugar indicar, que la exigencia de este requisito da lugar a que no se inicien ante esta jurisdicción, procesos que terminen en fallos inhibitorios. Esto, en razón de que podría ocurrir que el silencio administrativo no se ha producido porque existe una decisión administrativa de revocatoria o confirmatoria del acto impugnado, y, que de este hecho, el afectado no tenga conocimiento puesto que no se ha cerciorado de si sobre el recurso ha recaído o no pronunciamiento, a través de una certificación de lo ocurrido solicitada mediante memorial.

En tal sentido, conviene traer a colación el Auto de 3 de febrero de 1995, que para mayor ilustración transcribimos a continuación:

> "Tal como lo señala el recurrente el artículo 212 de la Constitución Política preceptúa que las leyes procesales deben inspirarse en los principios de simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos, a fin de que se cumpla el objeto del proceso que es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva.
>
> Inspirada en esos principios, tendiente esta jurisdicción al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos frente a la administración, la Sala interpreta cuidadosamente las normas que regulan el procedimiento contencioso administrativo de manera que no se inicien procesos que terminen con fallos inhibitorios. En el caso que nos ocupa podría ocurrir que el silencio administrativo no se ha producido porque existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado y que este hecho no sea del conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado de si el recurso ha sido o no resuelto, pidiendo una certificación de lo ocurrido mediante memorial. En el supuesto de que el acto hubiera sido revocado el objeto procesal ya no existiría y si hubiera sido confirmado no existiría silencio administrativo.

> Evitando el fallo inhibitorio que habría que dictar en el primer supuesto se aplica el principio de la economía procesal. La simplificación de trámites y la ausencia de formalismos no tiene como fin que se inicien procesos sin que se haya probado la existencia de los presupuestos procesales que hacen viables las demandas, y esto es así porque para que se cumpla el fin de la ley procesal que es el reconocimiento de los derechos sustantivos de las partes, el juzgador debe cumplir con los trámites procesales previos que le permitan dictar fallos de fondo para resolver la controversia que se plantea.
>
> La tramitación de los procesos judiciales se encomienda a los profesionales del derecho, y no a legos, a fin de que estos sean tramitados de conformidad con las normas legales, las cuales son interpretadas por los juzgadores al aplicarlas y es responsabilidad de los abogados conocer tanto aquéllas como su interpretación y aplicar esos conocimientos cuando actúan como apoderados judiciales." (Registro Judicial de Febrero de 1995, págs. 259-260).

Por las anteriores consideraciones, el auto reconsiderado debe confirmarse.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMAN el Auto de 10 de mayo de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL E. RODRÍGUEZ C., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 124 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Roberto Enrique Fuentes**, en representación de **ÁNGEL RODRÍGUEZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, emitido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Señala el demandante mediante apoderado judicial que por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, se ha vulnerado el artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 1 de 29 de diciembre de 1989, modificado éste por el Decreto de Gabinete N° 28 de 7 de febrero de 1990 y el artículo 124 de la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, ley ésta que establece y regula la Carrera Administrativa.

Indica el recurrente que el señor **ÁNGEL E. RODRÍGUEZ**, fue nombrado el 6 de agosto de 1974, en el Ministerio de Hacienda y Tesoro y que al momento de decretarse la insubsistencia de su nombramiento, ocupaba el cargo de Analista de Cobros. Que mediante Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio del presente año,

dictado por el Presidente de la República con la participación del Ministro de Hacienda y Tesoro, se procedió a declarar insubsistente el nombramiento del señor **RODRÍGUEZ.** Que el precitado fue injusta e ilegalmente destituido de su cargo público, para cuyo efecto la administración utilizó el mecanismo indirecto y encubierto de la insubsistencia de su nombramiento.

INFORME DE CONDUCTA

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador, en virtud de la demanda incoada por **ÁNGEL RODRÍGUEZ**, le solicitó al Ministro de Hacienda y Tesoro, rindiera informe de conducta en relación al reclamo judicial mencionado. Mediante Nota N° 101-01-819-DM. HYT de 29 de noviembre de 1995, el Ministro Encargado de Hacienda y Tesoro, informó que efectivamente, mediante Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, se declaró la insubsistencia del señor **ÁNGEL E. RODRÍGUEZ.**

POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

De igual manera, se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien por medio de la Vista N° 123 de 15 de marzo de 1996, se opuso a la pretensión del demandante.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

CRITERIO DE LA SALA

El recurrente sostiene que su cargo fue declarado insubsistente por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro, en violación a las siguientes normas: artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, modificado por el Decreto de Gabinete N° 28 de 7 de febrero de 1990 y el artículo 124 de la ley N° 9 de 20 de junio de 1994.

Este Tribunal quiere aclarar, que el Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, modificado por el Decreto de Gabinete N° 28 de 7 de febrero de 1990, los cuales fueron dictados para la estabilización de la organización de las dependencias estatales, fueron derogados por el artículo 197 de la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994 la cual establece y regula carrera administrativa, lo que hace inaplicables los referidos Decretos de Gabinete al presente caso.

En lo que respecta al artículo 124 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, también es importante recalcar que esta Ley no ha sido implementada en su totalidad, dado que la misma incorpora a manera progresiva los diversos niveles funcionales e instituciones de la administración pública. No es hasta marzo de 1997, que el Ministerio de Hacienda y Tesoro se incorpora al sistema de carrera administrativa, tal como lo prevé el artículo 198 de la Ley antes mencionada. Por tanto, de igualmente resulta inaplicable al reclamo del señor **ÁNGEL RODRÍGUEZ.**

El demandante lamentablemente, está desprovisto de las prerrogativas y garantías que ofrece una ley de carrera administrativa, por lo que su nombramiento y destitución, o declaratoria de insubsistencia del cargo, está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad nominadora. El señor **RODRÍGUEZ** ingresó al Ministerio de Hacienda y Tesoro por el sistema de libre nombramiento y remoción.

Las medidas disciplinarias que tomen las autoridades correspondientes dentro de una institución gubernamental, se encuentran dentro de las facultades discrecionales de que están revestidas las autoridades para la imposición de sanciones, nombrar y remover al servidor público, en aras del buen funcionamiento de la Administración Pública.

Cuando se trata de un empleado no amparado por fuero especial que otorga la carrera administrativa, el mismo puede ser removido de su cargo en virtud de una **declaratoria de insubsistencia**, que según palabras de **YOUNES MORENO**, **"es el producto de la facultad discrecional de remover de la cual están investidas las autoridades nominadoras, para declarar sin efecto el nombramiento hecho a un**

funcionario público, con el propósito de hacer cesar su vinculación con el empleo para el cual fue designado". (YOUNES MORENO, Derecho Administrativo Laboral, 5a., edición, Editorial Temis, S. A. Bogotá, Colombia, 1993).

Dicha declaratoria de insubsistencia puede ser declarada libremente, por la autoridad nominadora **sin** tener necesariamente que **motivar** la providencia siempre y cuando la autoridad nominadora se haya persuadido de su conveniencia y oportunidad.

La declaratoria de insubsistencia es una medida instituida **en pro de la administración** y como todos sus actos está amparada por la presunción de legalidad.

Lo anterior, en resumidas cuentas, confirma el hecho de que la declaratoria de insubsistencia del cargo del señor **ÁNGEL RODRÍGUEZ**, corresponde a una decisión discrecional de la autoridad que lo nombró.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Personal N° 124 de 29 de junio de 1995, el cual declara insubsistente el nombramiento de ÁNGEL RODRÍGUEZ en el Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA PROVIDENCIA N° 1 DE 14 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Emilio De León Lokee**, en nombre y representación de **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Providencia N° 1 de 14 de octubre de 1994, expedida por la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Señala la demandante, mediante procurador judicial, que la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, al dictar la Providencia N° 1 de 14 de octubre de 1994, ha violado las siguientes normas: artículos 129, 131, 135, 136 y 141 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

Para sustentar lo señalado anteriormente, el recurrente manifiesta básicamente que la educadora **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, ha prestado servicios en el Ramo de Educación por más de 27 años. Que la referida maestra, mantiene el cargo permanente de Educadora B-1 en la Escuela Llano Grande Arriba, ubicada en el Corregimiento de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.

Que desde el primero (1°) de junio de 1990 hasta el primero (1°) de septiembre de 1994, a la educadora **JIMÉNEZ DE ARAÚZ** se le concedió una licencia

con sueldo, para desempeñarse como Representante del Corregimiento de Las Lomas.

Sigue manifestando la parte actora, que el dos (2) de septiembre de 1994, la señora **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ** reingresó a su cargo de maestra en la Escuela Llano Grande Arriba. Que el 14 de octubre de 1994, la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, expide la Providencia N° 1 acogiendo una queja en contra de la precitada y la suspendió preventivamente de su cargo de maestra en la Escuela de Llano Grande Arriba.

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador le solicitó a la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada por **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ.**

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota N° DPECH/660 de 29 de septiembre de 1995, la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, señaló que la maestra **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ** fue sometida a una investigación disciplinaria, conforme lo dispone el artículo 129 y siguientes de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, por la supuesta comisión de la falta que consiste en el irrespeto manifiesto a su superior jerárquico, representado en la persona de la Profesora **Carmen de Cano.** Que durante la investigación se presentaron copias del expediente que se incoaba en la jurisdicción penal, contra la precitada funcionaria por el delito de calumnia e injuria en perjuicio del educador **Orlando Pittí Arosemena**, así como la queja formulada por los padres de familia de la Escuela, en que dicha educadora trataba indebidamente a los estudiantes y padres de familia, lo que ameritó la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación.

Sigue manifestando la autoridad de educación, que consta en los folios 4 al 10 del expediente copia de la sentencia condenatoria contra la educadora **ARAÚZ** y en la cual se le inhabilita para ejercer funciones públicas por dieciocho (18) meses. Que en este estado de la investigación, se emitió la Resolución N° 1 de 14 de octubre de 1994, ordenándose la suspensión por falta pública, conforme a lo que dispone el artículo 144 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

Por último manifiesta la Directora Provincial de Educación, que debido al caudal probatorio en el expediente, ameritaba la aplicación de la medida preventiva de suspensión, para proteger el Ramo de Educación del desprestigio, no obstante que el expediente se inició por la falta consistente en el irrespeto a un superior, a la cual se agregó un delito penal, así como la disconformidad de los padres de familia con el desempeño de la educadora demandante. Que el acto administrativo impugnado, consiste en una providencia de trámite que no decide, ni directa, ni indirectamente el fondo del asunto, hasta tanto se determine si la educadora **JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, incurrió en una de las faltas disciplinarias tipificadas en el Decreto N° 618 de 1952, para proceder a dictar la resolución definitiva, cumpliéndose así la obligación consignada en el artículo 141 de la Ley antes citada.

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, de la demanda propuesta por **GLORIA ZEILA JIMÉNEZ DE ARAÚZ** para que contestara lo pertinente.

CRITERIO DE LA PROCURADORA

Mediante Vista N° 480 de 14 de noviembre de 1995, la Procuradora de la Administración contestó la demanda incoada oponiéndose a la pretensión de la educadora demandante.

La oposición de la funcionaria antes mencionada, se basa en que el conjunto de cargos debidamente fundamentados de índole disciplinaria dirigidos contra la demandante, así como la sentencia condenatoria en la cual se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por dieciocho (18) meses, hacen obligante la actuación de la Dirección Provincial de Educación, dado que debe tomarse en cuenta que las entidades públicas, exigen disciplina para su organización de forma tal que el alto nivel ético y moral de sus servidores, puedan garantizar

el prestigio de la institución. Que de acuerdo al artículo 141 de la Ley 47 de 1946, se procedió con la suspensión del cargo de la educadora para asegurar el prestigio del Ramo de Educación.

CRITERIO DE LA SALA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

La primera norma que estima conculcada la parte actora, es el artículo 129 de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación, que es del tenor siguiente:

> **"ARTÍCULO 129.** Las quejas que sobre algún miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación tenga un superior, que le han llegado por algún conducto digno de crédito, serán inmediatamente investigadas por el superior tan prolijamente como su importancia demande".

Señala el afectado, que la disposición antes transcrita ha sido violentada de forma directa por comisión, ya que la Providencia decreta la aplicación de una medida cautelar, sin que la precitada norma legal la contemple. Que dicho artículo dispone que la queja será investigada prolijamente, mas no faculta al superior para suspender del cargo al investigado.

Frente a lo manifestado por el recurrente, esta Corporación Judicial quiere indicar, que la excerta legal que dispone la suspensión del cargo por faltas públicas o de escándalo social, es el artículo 141 de la Ley 47 de 1946. Esta disposición señala:

> **"ARTÍCULO 141.** Sólo tratándose de faltas públicas o de escándalo social, que requieran una acción rápida para salvar al Ramo del desprestigio consiguiente, el funcionario a quien corresponda, procederá a suspender de su cargo al inferior en falta y a llenar inmediatamente los demás requisitos que en ésta Ley se establecen".

Como podemos apreciar, la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, fundamentó la suspensión en dicha norma. El hecho que el artículo 129, no contemple la suspensión del cargo por investigaciones de las quejas que sufre un miembro del personal docente, no significa que la medida preventiva no procede, pues como ya hemos visto, el artículo 141 antes transcrito, es claro al preveer la suspensión como medida rápida para salvar al Ramo de Educación del desprestigio, que puede adoptar el superior jerárquico.

El artículo 129 de la Ley Orgánica de Educación, preceptúa que las investigaciones al personal docente, entre otros, del Ramo de Educación serán inmediatas, es decir sin demora. La propia Directora Provincial de Educación de la Provincia de Chiriquí, señaló en la Providencia acusada de ilegal que suspendía a la maestra **GLORIA DE ARAÚZ**, por varias razones: 1. queja formulada por los padres de familia de la escuela; y 2. por la interdicción judicial de que es sujeta la precitada educadora, "hasta tanto se realizaran las diligencias administrativas que sean indispensables para el esclarecimiento de la causa", lo que confirma los lineamientos previstos en el citado artículo 129.

Por tanto, consideramos que no prospera el cargo endilgado.

Otra norma, que se señala violada, es el artículo 131 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que dice:

> **"ARTÍCULO 131.** Si de la investigación se desprende que hay indicios de culpabilidad que haga acreedor al subalterno a alguna sanción, caso de resultar comprobados los hechos, el superior pasará al subalterno el pliego de cargos por el término de ocho (8) días para que se defienda."

Manifiesta la demandante, que esta disposición ha sido transgredida de

manera directa por comisión, dado que la Providencia impugnada, no dispuso correr traslado a la educadora **GLORIA JIMÉNEZ DE ARAÚZ** de la supuesta queja interpuesta en su contra. Que una vez acogida la queja, la funcionaria demandada debió haberle pasado a la precitada, y por el término de ocho (8) días, un pliego con los cargos para que se defendiera. Que no obstante la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, suspendió a la educadora sin permitirle defenderse.

Este Tribunal Colegiado, disiente del argumento esbozado por el recurrente, ya que la excerta es clara al señalar que si de las investigaciones se desprenden indicios de culpabili dad, que conllevan en medida disciplinaria, el superior pasará al subalterno el pliego de cargos para que se defienda, etapa que de acuerdo a la Providencia N° 1 de 14 de octubre de 1994, no se ha cumplido, ya que sólo se ha procedido a iniciar las investigaciones de las circunstancias que motivaran la suspensión del cargo a la educadora **JIMÉNEZ DE ARAÚZ.**

El artículo 131, prevé dos etapas a seguir: la primera consiste en que debe existir una investigación previa; y en segundo lugar, que en caso de que de las investigaciones se desprenda indicios de culpabilidad que conlleve una medida disciplinaria, es aquí en donde se procede con el traslado del pliego de cargos por ocho (8) días, al afectado, para que se defienda.

La situación de la señora **GLORIA JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, según la Providencia acusada de ilegal, se encuentra en la primera etapa, por lo que mal puede dársele traslado del pliego de cargos, y esto nos conduce a no aceptar el cargo impetrado.

También se señala transgredido el artículo 135 de la Ley 47 de 1946, que señala lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 135.** Mientras el sujeto de la investigación no haya sido declarado culpable y se le hayan impuesto las penas del caso, gozará de todas las prerrogativas de su cargo entre las cuales está incluida, naturalmente el apoyo moral de parte de sus superiores jerárquicos".

La violación es sustentada, en el hecho de que la disposición ha sido violada de manera directa por comisión, en virtud de que al ordenarse la suspensión del cargo y del sueldo contra la educadora demandante, se adoptan medidas contrarias al precepto legal reproducido.

Esta Sala, quiere señalar que la Providencia N° 1 de 14 de octubre de 1994, no ha desconocido las prerrogativas que tiene la educadora **JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, pues consideramos que le ha sido aplicado el procedimiento para las investigaciones de los hechos de que se le acusa, a parte de que existe Sentencia N° 50 de 16 de junio de 1993 proferida por el Juez Cuarto de Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Penal, la cual establece una pena de prisión de 18 meses y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período, y esta Resolución fue sustituida por el Auto N° 820 de 18 de octubre del mismo año, el cual reemplaza las penas antes enunciadas por días multas; todo esto motivó que la educadora demandante fuera suspendida en cumplimiento del artículo 141, comentado en párrafos anteriores. En este orden de ideas la Directora Provincial de Educación consideró que la situación en que se encontraba la señora **GLORIA JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, ameritaba la medida preventiva para salvar al Ramo de Educación del desprestigio, hasta tanto se aclararan los hechos. Tanto es así, que el principio de presunción de inocencia se está respetando, desde el momento en que el Ministerio de Educación representado por sus respectivas autoridades, no ha impuesto sanción alguna, hasta tanto culmine las investigaciones pertinentes. De todo esto considera este Tribunal que no prospera la acusación incoada.

El artículo 141 de la Ley 47 de 1946, es igualmente considerado vulnerado por la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, ya que la educadora **GLORIA JIMÉNEZ DE ARAÚZ** no ha cometido una falta pública, ni se ha visto implicada en un escándalo social. Que del mismo texto de la Providencia recurrida, se lee los pretextos utilizados para suspender del cargo a la precitada: una queja y una interdicción judicial con motivo de sentencia penal. Que la queja sólo genera

investigación, no así una suspensión del cargo, y sobre la denominada interdicción judicial, que vale indicar que dicha figura es inexistente en la Ley 47 de 1946.

Este Tribunal observa, que si bien es cierto una queja no es motivo de una suspensión, no es menos cierto que existe sentencia penal en perjuicio de la señora **JIMÉNEZ DE ARAÚZ**, que a concepto de las Autoridades de Educación, puede ser considerado como falta pública o de escándalo social. Este concepto es perfectamente permisible, dado la gravedad de la sanción penal de que fue objeto la educadora. Esta última fue sancionada con dieciocho (18) meses de prisión y quedó inhabilitada por el mismo período para el ejercicio de funciones públicas. Esta pena fue sustituida posteriormente con días multas, lo que no niega que la educadora fue sancionada penalmente, es decir no fue absuelta de los cargos de calumnia e injuria de que fue acusada (ver de foja 49 a 53). Lo señalado en líneas anteriores, nos conduce a no aceptar el cargo impetrado.

Por último en lo que respecta a la violación del artículo 136 de la Ley 47 de 1946, este Tribunal no entrará a conocerlo, ya que el mismo no es aplicable al caso en concreto, debido a que la Providencia fue dictada por la Directora Provincial de Educación de Chiriquí, y no por un Director de Escuela Secundaria ni por un Inspector Provincial.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados, que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Providencia N° 1 de 14 de octubre de 1994, dictada por la Directora Provincial de Educación de Chiriquí.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO GUARDIA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA SUCASA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1546 SLC, DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1990, EXPEDIDA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Resolución fechada el 19 de julio de 1996, la suscrita Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Roberto Guardia, en nombre y representación de **INMOBILIARIA SUCASA, S. A.**, para que se declare nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 1546 SLC del 8 de noviembre de 1990 y N° 493-V. F. del 14 de junio de 1995, expedidas por la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá; el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

La mencionada demanda no fue admitida porque el apoderado judicial de la parte actora omitió presentar con su libelo la prueba o constancia de la notificación del acto mediante el cual quedó agotada la vía gubernativa, requisito que, además de ser esencial para comprobar si la acción intentada estaba o no prescrita, está exigido por el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943.

Como la parte actora corrigió la demanda presentada y la omisión anotada, mediante presentación de la copia autenticada del Edicto N° 4 de la Secretaría

General del Concejo Municipal de Panamá, quien suscribe estima que la misma debe ser admitida.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Roberto Guardia, en nombre y representación de INMOBILIARIA SUCASA, S. A., contra las Resoluciones N° 1546 SLC del 8 de noviembre de 1990 y N° 493-V. F. del 14 de junio de 1995, expedidas por la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá; el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Envíese copia de esta demanda al Tesorero Municipal del Distrito de Panamá para que rinda un informe de conducta dentro del término de cinco (5) días.

Córrasele traslado a la Procuradora de la Administración por el término de cinco (5) días.

Ábrase a pruebas el presente negocio por el término de cinco (5) días.

Téngase al licenciado Roberto Guardia como apoderado judicial de la parte actora.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9334-94 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz, actuando en nombre y representación de **ALEXIX ELÍAS MORÓN MALEK**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 9334-94 de 5 de diciembre de 1994, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Agotados los trámites procesales, previos a la etapa decisoria, los Magistrados que integran la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, con el fin de recabar la siguiente información:

1. Si el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK** es un funcionario de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos; y

2. Si el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK** quien fue removido del cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social, como Médico Especialista de III Categoría en el Cuarto de Urgencias de Adultos, ha sido reintegrado por la autoridad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera al Director de Personal de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco (5) días rinda un informe en el cual conste:

1. Si el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK** es un funcionario de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos; y

2. Si el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK**, con cédula de identidad personal N° 8-257-1008 y número de Seguro Social 315-6470, quien fue destituido por medio del acto impugnado, Resolución N° 9334-94 de 5 de diciembre de 1994, ha sido reintegrado al cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social como Médico Especialista de III Categoría en el Cuarto de Urgencias de Adultos, o a algún otro cargo en dicha institución; y

3. De ser afirmativa la respuesta anterior, nos remita copia autenticada de la Acción de Personal por medio de la cual fue reintegrado como funcionario de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CASTRO & CASTRO EN REPRESENTACIÓN DE HORMOZ SAFI ARDESTANI Y SAFI HERMANOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 712-04-12 DE 29 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS, ZONA CENTRAL Y AZUERO, Y LA N° 715-04-033 DE 20 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Castro & Castro, actuando en nombre y representación de **HORMOZ SAFI ARDESTANI y SAFI HERMANOS, S. A.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 712-04-12 de 29 de marzo de 1995, dictada por la Administración Regional de Aduanas, Zona Central y Azuero, y la Resolución N° 715-04-033 de 20 de junio de 1996, dictada por la Dirección General de Aduanas.

En la parte final del libelo de la demanda, la parte demandante solicita a la Sala suspenda provisionalmente la sanción impuesta, en tanto se decide el presente negocio, porque su cumplimiento le causaría graves perjuicios (foja 25).

De acuerdo al artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Como ha expresado esta Sala en oportunidades anteriores, la existencia de un perjuicio notoriamente grave **(periculum in mora)** de difícil o imposible reparación, si bien constituye uno de los requisitos para la suspensión de los

efectos del acto que se acusa, no es el único, pues también es indispensable la apariencia de buen derecho **(fumus bonus iuris)** a favor del demandante. Se trata sin duda de requisitos evidentemente vinculados, porque aún cuando del acto o resolución acusada puedan derivarse determinados perjuicios en detrimento del demandante, la suspensión provisional de sus efectos procedería siempre que el mismo sea ostensiblemente ilegal.

En el presente caso la Sala considera que, del examen preliminar que ha hecho de los cargos de violación que se imputa a los actos impugnados, para resolver la solicitud de suspensión provisional, no se desprende, prima facie, violaciones manifiestas o evidentes de las normas que se cita como violadas en la demanda. Los problemas jurídicos planteados por la firma Castro & Castro al exponer el concepto en que el acto impugnado viola diversas disposiciones del Código Fiscal, ameritan ser examinados en el momento procesal en que proceda resolver el fondo de la controversia, razón por la cual no es posible acceder a la medida cautelar impetrada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de los actos impugnados, solicitada por la firma Castro & Castro, en nombre y representación de HORMOZ SAFI ARDESTANI y SAFI HERMANOS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LIC. JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO SANTOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO SANTA FAMILIA, SOR FAUSTINA DELGADO, LA RESOLUCIÓN N° 8 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA Y LA RESOLUCIÓN N° 5 DE 9 DE MARZO DE 1989, DICTADA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante apoderado legal el señor Arturo Santos presentó demanda contencioso administrativa, de plena jurisdicción, a efecto de que se declare lo siguiente:

1. Que es ilegal y por tanto nula, la resolución N° 3 de 22 de noviembre de 1988, dictada por la Directora del Colegio Santa Familia, Sor Faustina Delgado.

2. Que es ilegal y por tanto nula, la resolución N° 8 de 29 de diciembre de 1988, expedida por el Director de Educación Profesional o Técnica.

3. Que es ilegal y por tanto nula, la resolución N° 5 dictada por el Ministerio de Educación fechada 9 de marzo de 1989.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones el Ministro de Educación está en la obligación de reintegrar al cargo de Educador N° 2, en el Colegio "La Santa Familia" al profesor Arturo Santos y todos los sueldos que ha dejado de percibir en este Ministerio desde la fecha de su ilegal destitución.

La demanda se fundó en los siguientes hechos:

PRIMERO: El 29 de abril de 1977 el señor Arturo Santos fue designado profesor 6-G de la Cátedra de Ciencias por el Ministerio de Educación.

SEGUNDO: Mediante resolución N° 2 de 21 de octubre de 1988 expedida por la Directora de la Escuela Santa Familia, se formularon cargos al profesor Arturo Santos, relacionados con una supuesta conducta que riñe con la moralidad que debe observar un educador.

TERCERO: Por resolución N° 3 de 22 de noviembre de 1988, la Directora de la Escuela solicitó al Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección de Educación Profesional y Técnica del Ministerio de Educación, la destitución del cargo del profesor Arturo Santos.

CUARTO: La resolución N° 8 de 29 de diciembre de 1988, el Director de Educación Profesional y Técnica de confirma la resolución N° 2 y N° 3 mencionada.

QUINTO: El Ministro de Educación al expedir resolución N° 5 de 9 de marzo de 1989 desestima el recurso de revisión instaurado y confirman las anteriores resoluciones.

SEXTO: Es obvio que cualquier proceso disciplinario, sin previa y completa investigación, no puede provocar un decreto de destitución sin comprobar fehacientemente los hechos.

Se invocó como infringidas los artículos 129, 138 y 141 de la Ley 47 de 1946.

Para resolver, se considera:

1. No es necesario sentencia penal para que se imponga la sanción de despido. No existe prejudicialidad. Como expuso el Ministerio de Educación en la Resolución N° 5 de 9 de marzo de 1989:

> "Que luego de analizar detenidamente tales argumentos, consideramos que los mismos no arrojan pruebas que desvirtúen los cargos imputados; además carecen de asidero legal en el ámbito administrativo, por lo siguiente:
>
> 1° El expediente disciplinario en esta instancia administrativa no se fundamenta en la comisión de un delito, sino en la comisión de una falta. Téngase en cuenta que una cosa es la jurisdicción penal y otra es la jurisdicción administrativa.
>
> 2° El escándalo público se dio efectivamente, no sólo a nivel de la escuela sino fuera, ya que fue conocido por personas, inclusive, ajenas al plantel."

La actuación de un servidor público puede dar margen de responsabilidad de distinta naturaleza: administrativa, penal e incluso -en determinados supuestos- de índole civil.

2. El señor Santos incurrió en actos censurables, inaceptable por su condición de Profesor. Acreditada por la Administración los cargos incumbía al actor en este proceso la carga desvirtuada, lo que no ha hecho.

3. Las resoluciones impugnadas se fundaron en los artículos 136 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, Artículo 5°, literal c y e del Decreto N° 618 de 9 de abril de 1952.

Por tanto, la Sala Tercera (Contenciosa Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES la resolución N° 3 de 22 de noviembre de 1988 dictada por la Directora del Colegio Santa Familia, Sor Faustina Delgado, la resolución N° 8 de 29 de diciembre de 1988, expedida por el Director de Educación Profesional o Técnica; ni la resolución N° 5 de 9 de marzo de 1989 dictada por el Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTELBLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista N° 199 de 8 de mayo de 1996, la Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la resolución fechada el 29 de febrero de 1996, que admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el Dr. Norberto Castillo, en nombre y representación de RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTELBLANCO contra el Decreto de Personal N° 204 de 14 de agosto de 1995, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La señora Procuradora de la Administración estima que la resolución impugnada debe ser revocada, porque "si bien es cierto el acto acusado de ilegal fue expedido por la autoridad jerárquicamente superior de la entidad demandada, es decir, el señor Ministro de Educación, en cuyo caso sólo es viable el recurso de reconsideración en la vía gubernativa, que le permite al interesado hacer uso de ese medio de impugnación o demandar directamente en la jurisdicción contencioso administrativa ..." (foja 56), la parte actora no ha demostrado el agotamiento de la vía gubernativa porque no hay constancia alguna en el expediente, de que la Administración haya resuelto el recurso de reconsideración y tampoco de que se haya producido la negativa tácita por silencio administrativo. Agrega la señora Procuradora que la parte actora, en ningún momento, presentó certificación en tal sentido, ni indicios de haberla solicitado a la institución demandada.

Advierte la señora Procuradora de la Administración que la certeza sobre el agotamiento de la vía gubernativa es imperativa, lo que no parece haber sido analizada por el Tribunal en su resolución de 7 de febrero de 1996, como se lee a fojas 33 y siguientes, y afirma que está de acuerdo con la primera resolución dictada el 14 de diciembre de 1995, por la cual no se admitió la citada demanda porque la parte actora no acompañó copia del acto impugnado, ni acreditó en el proceso que hubiese realizado gestiones ante la Administración tendentes a obtener la precitada copia.

Como se observa a fojas 61 y ss. la parte demandante no se opuso a la apelación de la señora Procuradora de la Administración, y evacuados los trámites legales, los Magistrados que integran el resto de la Sala proceden a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

II. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Tal como consta a foja 15 del expediente el Magistrado Sustanciador decidió, en Resolución fechada el 14 de diciembre de 1995, no admitir la presente demanda porque no se aportó copia del acto impugnado. El demandante apeló de esta decisión y, al sustentar su alzada, alegó que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, prevé que en aquellos casos en que se deniega la expedición de copia o la

certificación sobre el acto impugnado, esta puede ser solicitada por el sustanciador antes de admitir la demanda.

El resto de los Magistrados de la Sala mediante Resolución de 7 de febrero de 1996, al resolver la alzada ordenó solicitar copia del acto impugnado al Ministro de Educación, antes de decidir sobre la admisión de la demanda. Recibida la copia pedida, mediante Resolución de 29 de febrero de 1996, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda. Dicha resolución fue apelada por la señora Procuradora de la Administración, y el resto de los Magistrados proceden, a continuación, a resolver este recurso.

En los hechos quinto y sexto de su libelo, el demandante expresó que contra el Decreto de Personal N° 204 de 14 de agosto de 1996, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación, interpuso y sustentó recurso de reconsideración el día 31 de agosto de 1995 y que el mismo nunca fue resuelto por dicho Ministerio, con lo cual consideró agotada la vía gubernativa en virtud del artículo 36 de la Ley N° 135 de 1943. Sin embargo, el demandante no acreditó el silencio administrativo que alegó. En profusa jurisprudencia la Sala ha expresado que el silencio administrativo se prueba mediante una certificación expedida por el funcionario competente para resolver el recurso, que indique que este no ha sido decidido. En caso de que se pida esa certificación y no sea extendida deberá presentarse con la demanda constancia de la presentación del escrito en que se solicitó dicha certificación y pedirle al Magistrado Sustanciador que requiera al funcionario que la extienda y envíe.

La comprobación del silencio administrativo es vital como ha dicho la Sala en su fallo del 8 de marzo de 1996, "porque podría ocurrir que éste no se haya producido porque existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado y que este hecho no sea de conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado de si el recurso ha sido o no resuelto, pidiendo una certificación de lo ocurrido mediante memorial. En el supuesto de que el acto hubiera sido revocado el objeto procesal ya no existiría y si hubiera sido confirmado, no existiría el silencio administrativo". Además la Sala debe establecer en cada caso si la acción fue ejercida dentro del término de su vigencia que es de dos meses, término que debe contar a partir del agotamiento de la vía gubernativa.

La Sala considera que le asiste la razón a la Señora Procuradora de la Administración ya que por falta de prueba del agotamiento de la vía gubernativa la demanda presentada no cumple con los requisitos legales para su admisión, y por tanto, debe revocarse la resolución de primera instancia, que admite la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 29 de febrero de 1996, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, propuesta por RAMIRO DEL CARMEN DÍAZ CASTELBLANCO, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 204 de 14 de agosto de 1995, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. IRLENA BROWN VILLALOBOS, EN REPRESENTACIÓN DE AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 18 DE MAYO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE:

EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **IRLENA BROWN VILLALOBOS**, en representación de **AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare, nula, por ilegal, la Nota de 18 de mayo de 1995, emitida por el Director de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE

El representante legal de la parte actora solicita a esta Sala que declare nula, por ilegal, la resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante la cual la Dirección de Educación de Adultos dejó sin efecto el nombramiento del profesor **AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS** de la cátedra de Plomería en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, y, de igual forma, el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 67 de 4 de julio de 1995, dictado por el Ministro de Educación. Además, que se mantenga al señor **AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS** en su cátedra de Plomería en el precitado centro de enseñanza, y se le paguen todos los salarios caídos dejados de percibir por su representado, hasta el momento de su reintegro al cargo.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El ente administrativo demandado en esta ocasión, la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, rindió su informe de conducta legible a fs. 16-19, alegando lo siguiente:

1. Que el señor **AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS** concursó para la cátedra de Plomería en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, mediante el Decreto de Personal N° 114 de 18 de abril de 1995, que le fuera comunicado al Director de dicho plantel, mediante Nota fechada 19 de abril de 1995, asignándole la cátedra por 18 horas hasta finalizar el año escolar.

2. Que lo anterior es contrario a la única forma en que esta entidad podía utilizar los servicios de personas declaradas supernumerarias o jubiladas, debido a que la misma se da mediante contratos no mayores de nueve (9) meses, en cumplimiento del artículo 4 del Resuelto 1102 de 1980, "que regula todo lo concerniente a los nombramientos y traslados del personal docente del Ministerio de Educación", en correlación con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 382 de 4 de mayo de 1971, "que reglamenta la contratación de maestros y profesores supernumerarios o jubilados".

3. Que, consecuentemente, el Ministerio de Educación con fundamento en las precitadas excertas legales, al considerar que la única forma en que puede utilizar los servicios de personas declaradas supernumerarios o jubiladas es mediante contratos no mayores de nueve (9) meses, con fecha de 18 de mayo de 1995, remite nota al Director del referido plantel para declarar sin efecto el nombramiento realizado a favor del demandante, actuación que fuera confirmada por el Ministro de Educación por Resolución N° 67 de 4 de julio de 1995.

NORMAS ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El apoderado judicial de la parte actora estima infringidos los artículos 116 y 127 de la Ley 47 de 1946. Las mismas en el orden establecido señalan lo siguiente:

> "**Artículo 116**. No podrán ejercer la docencia en ningún plantel de enseñanza de la República, sea éste oficial o particular, pre-primario o secundario, quien no ha comprobado previamente su capacidad física, moral y profesional, ante el Ministerio de Educación.

La capacidad física se comprueba por medio de certificado médico digno de crédito.

La capacidad moral la establecerá el Ministerio sobre la base de declaraciones de personas de honorabilidad reconocida o de certificado de buena conducta expedido por las autoridades judiciales de distrito donde resida el aspirante.

La capacidad profesional se comprueba con el título o diploma correspondiente."

"**Artículo 127**. Todo miembro del personal docente, o administrativo del Ramo de Educación inclusive quienes presten servicios de portería, como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre, de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicio durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia cuando se trate de maestro o profesor.

Los empleados del Ramo de Educación no podrán ser trasladados a otra Escuela, o a otro lugar sino en concepto de recompensa para lo cual debe dárseles previo aviso para que den a conocer al Ministerio de Educación su conformidad o disconformidad con la misma, o en los casos previstos en el Parágrafo de este Artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley."

Sobre el concepto de la infracción del artículo 116 de la Ley 47 de 1946, sostiene el recurrente que el mismo ha sido violado, tanto en su aspecto literal como en su aspecto de fondo, toda vez que esa decisión no fue dictada luego de que se hubiese acreditado la incapacidad física o insuficiencia para ejercer la docencia, mediante certificación facultativa acreditada. Además, que el hecho de que el profesor **VILLALOBOS** se acogiera a la jubilación no es causal para que se le considere inhábil físicamente para ejercer la docencia, lo cual se constituye un acto ilegal y arbitrario.

En lo que a la violación del artículo 127 de la precitada Ley 47 de 1946, respecta, el demandante manifiesta que dado que esta norma establece que todo miembro del personal docente puede seguir prestando sus servicios durante el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta, significa entonces, que mientras el profesor **VILLALOBOS** no tenga ningún informe negativo por parte de las autoridades de la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá no puede ser removido, pues ésa es su garantía de estabilidad.

También indica el actor que contrario a lo que establece esta norma, su destitución se dio de forma inmediata, y sin previo aviso, para que pudiera tener la oportunidad de oponerse a esa medida. Máxime cuando viene laborando en esa escuela desde 1982, hasta el momento en que fue cesado, sin otra consideración que la de haberse acogido a la jubilación por años de servicios.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 504 de 22 de noviembre de 1995, la Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones del recurrente alegando que independientemente, de si el recurrente era jubilado o no, o si se le comunicó intempestivamente la resolución de su relación contractual, lo que es indudable, es que el Director de Educación de Adultos, como Jefe inmediato, y el Ministro de Educación como Jefe mediato, podían resolver administrativamente el Contrato de Servicios Docentes que habían suscrito la Administración con el Profesor **VILLALOBOS.**

Lo anterior lo sustenta la aludida funcionaria, argumentando que el referido profesor no estaba amparado por el status de estabilidad o de permanencia en el cargo, por razón de que era un trabajador contratado a título

eventual, y que, por tanto, la Administración ha ejecutado un poder público de carácter unilateral de contenido estatutario. Esto significa, a su juicio, que el exfuncionario demandante, se encontraba en una situación jurídica de carácter objetivo y general, creada unilateralmente en forma previa a su ingreso a la función pública que podía ser modificada en cualquier momento para adaptarla a las necesidades de la Administración.

Por consiguiente, finaliza diciendo la representante de los intereses de la Administración, que al haber sido el demandante un funcionario eventual, no era funcionario de Carrera Educativa, y por ello, no detentaba la estabilidad ni los derechos inherentes a ella, que hoy pretende reclamar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de procesos, la Sala procede a resolver la controversia.

Quienes suscriben estiman pertinente señalar que el acto administrativo acusado, conlleva vicios de ilegalidad por las siguientes razones:

De las constancias procesales se desprende primeramente, que el profesor **VILLALOBOS** era jubilado. En segundo término, que el mismo fue designado por concurso en la cátedra de Plomería en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, mediante el Decreto de Personal N° 114 de 18 de abril de 1995, por un período de 18 horas hasta finalizar el año escolar, es decir, desde el 19 de abril de 1995, hasta diciembre de 1995, que hacen un período de nueve (9) meses. (Cfr. f. 3 del expediente).

De conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 382 de 4 de mayo de 1971, "por el cual se reglamenta la contratación de maestros y profesores supernumerarios o jubilados", el Ministerio de Educación sólo puede utilizar los servicios de maestros y profesores supernumerarios o jubilados mediante la firma de un contrato de trabajo por un período no mayor de nueve (9) meses. El texto legal de dicha disposición es el siguiente:

> "**ARTÍCULO SEGUNDO:** El Ministerio de Educación utilizará los servicios de maestros y profesores supernumerarios o jubilados mediante la firma de un contrato de trabajo por un período no mayor de nueve (9) meses."

De lo expuesto se colige que al procederse al nombramiento del profesor **VILLALOBOS** por concurso, el mismo se dio con pretermisión de las formalidades legales establecidas en el referido Decreto Ejecutivo N° 382 de 4 de mayo de 1971. Y es que, según el precitado artículo segundo de dicho Decreto, su nombramiento debió darse mediante contrato de trabajo, y no por concurso.

Sin embargo, este Tribunal es del criterio de que al proceder la Administración (Ministerio de Educación), a dejar sin efecto el nombramiento que le fuera otorgado mediante concurso al profesor **VILLALOBOS**, se extralimita en sus facultades legales, lo que constituye una clara y manifiesta violación al consagrado principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Este principio prohíbe a la Administración revocar de oficio sus propios actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo a favor de los particulares. En este caso, y como hemos visto, el derecho subjetivo consiste en el nombramiento por concurso del profesor **VILLALOBOS** en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, mediante el Decreto de Personal N° 114 de 18 de abril de 1995, por un período de 18 horas hasta finalizar el año escolar, es decir, desde el 19 de abril de 1995, hasta diciembre de 1995, que hacen un período de nueve (9) meses. (Cfr. f. 3 del expediente).

Aceptar que la Administración revoque libremente su actuación como lo ha hecho el Ministerio de Educación al dejar sin efecto el nombramiento del profesor **VILLALOBOS**, sería contradecir el principio de certeza jurídica del que gozan todos los actos administrativos hasta tanto, el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se pronuncie acerca de

su ilegalidad o no.

Por consiguiente, al no ser procedente el nombramiento por concurso del profesor jubilado **VILLALOBOS**, el Ministerio de Educación debió contratarlo por un período de nueve meses, de acuerdo con el referido artículo segundo del Decreto Ejecutivo N° 382 de 4 de mayo de 1971, y no separarlo del cargo. Por tanto, prosperan los cargos de violación endilgados, y así procede declararlo.

En vista de que el apoderado judicial de la parte actora ha solicitado que además de declararse la ilegalidad del acto impugnado, se ordene el reintegro del profesor **VILLALOBOS** en su cátedra de Plomería en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, la Sala considera que no es dable acceder a dicha pretensión, en virtud de que su nombramiento era hasta finalizar el año escolar de 1995. (Cfr. f. 1 del expediente).

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN: QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Nota de 18 de mayo de 1995, suscrita por el Director de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, mediante la cual se deja sin efecto el nombramiento del profesor AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS, de la cátedra de Plomería en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, y que, consecuentemente, se le paguen todos los salarios caídos dejados de percibir desde el momento en que su nombramiento fue dejado sin efecto hasta finalizar el año escolar de 1995, conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 47 de 1946, modificado por la Ley 34 de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA DOLORES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

la firma **Troyano, Visuetti y Villalaz**, en nombre y representación de **LA DOLORES, S. A.**, ha interpuesto demanda contenciosos administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor de la República, el cual ha ordenado al Director General del Registro Público que se **abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue**, entre otras, la Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano.

CONSIDERACIONES DE LA PARTE ACTORA

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado resulta violatorio de los artículos 1, 2, 11, 29, 55 literales f) y g), y 82, todos de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República; los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal; y artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1943.

El demandante fundamenta su apreciación en el hecho de que con fecha de 14 de diciembre de 1993, el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, emitió una Resolución mediante la cual autorizó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que en su condición de Presidente de dicho Comité, solicitara la excepción de licitación pública y se autorizara la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en la Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, inscritas en el Registro Público, Provincia de Panamá, antiguos arrendatarios y expropietarios. Que dicha Resolución, establecía un precio de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00) por hectárea y se otorgó un plazo de 90 días calendario para la formalización del contrato de compra venta y para el pago del precio de venta, contados a partir de la publicación de la Resolución del Consejo de Gabinete.

Continúa exponiendo la parte actora, que al adoptar el Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano la decisión de venta, estuvo presente, con derecho a voz, la Contraloría General de la República, representada por el licenciado Tomás Ugarte, quien participó avalando todas y cada una de las decisiones, sin que se evidenciara dentro de la función fiscalizadora que tenía alguna objeción a las mismas. Que el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución N° 768 del 22 de diciembre de 1993, resolvió exceptuar del requisito de Licitación Pública al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y autorizar la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en las Fincas N° 48088, 639 y 490, y en dicha sesión participó el Ex-Contralor General de la República, licenciado José Chen Barría, quien nada objetó.

La Resolución N° 768, estableció como precio de venta la suma **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00) por hectárea, en donde el plazo y condición estaban plasmadas en la Resolución del Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano. Que esta Resolución fue adicionada por la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, en donde se exceptuaba al Ministerio de Desarrollo Agropecuario del trámite de Licitación Pública y lo autorizó para que vendiera directamente a los arrendatarios que desde 1992, mantiene contrato con la Corporación, y ese es el supuesto en que quedó incluida **LA DOLORES, S. A.**

Sigue indicando el recurrente, que en virtud de la celebración del contrato de compraventa, de los globos de terreno de propiedad de la Corporación Bayano, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Escritura Pública N° 3467 de 14 de abril de 1994 otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, ingresa al Registro Público para cumplir con la exigencia legal de transferir el dominio sobre los bienes inmuebles aprobados.

Que posteriormente la Contraloría General de la República emite Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, ordenándose al Director del Registro Público que se abstenga de inscribir dichas fincas.

Finalmente manifiesta el recurrente, que el Contralor General de la República para tomar la medida cautelar que afecta la inscripción de la Escritura Pública que contienen los contratos de compraventa celebrados por **LA DOLORES, S. A.**, con la Corporación sostuvo que la Resolución del Consejo de Gabinete no se ajustaban a lo regulado por el Código Fiscal sobre la materia concerniente a la disposición de Bienes Nacionales, sin tomar en cuenta que los bienes no son nacionales sino pertenecientes a una Institución Autónoma regida por su propia Ley.

Una vez admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador, le solicitó al Contralor General de la República rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada por **LA DOLORES, S. A.**

INFORME DE CONDUCTA DEL CONTRALOR

Mediante Nota N° 158-DC-1-F-28 de 30 de agosto de 1995, el Contralor General de la República señaló que La Contraloría General de la República dictó la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, mediante la cual ordenó al Director General del Registro Público de Panamá se abstuviera de inscribir cualquier acto,

medida o resolución que enajene, traspase, o segregue las fincas pertenecientes a la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, descritas detalladamente en dicha Resolución. Igualmente se ordenó a la Dirección general de Ingeniería de la Contraloría que efectuara sobre las fincas aludidas diligencia pericial, para que se determinara las medidas, los linderos, la superficie, la ubicación y el valor o avalúo por hectárea de cada uno de los terrenos, además de que se le dio instrucciones a esta Dirección para que elaborara un informe de auditoría que reflejara todo lo relacionado a la enajenación de los terrenos y las fincas de la Corporación Bayano para precisar si se han cometido actos que lesionen el patrimonio público.

Que la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, se dictó toda vez que el Consejo de Gabinete emitió las Resoluciones de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993, N° 96 de 9 de febrero de 1994 y N° 137 de 9 de marzo de 1994, mediante las cuales se dispuso enajenar parte de los terrenos que ocupan y administra la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. Que el Consejo de Gabinete igualmente autorizó la venta directa de algunas fincas a antiguos arrendatarios, entre ellos a la empresa **LA DOLORES, S. A.**, y se fijó un precio de venta de la hectárea en la suma de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00). Que este precio es objetado por parte de esa institución, y fue lo que motivó la expedición de la Resolución recurrida.

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la sociedad precitada para que defendiera el acto.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración por medio de la Vista N° 391 de 21 de septiembre de 1995, se opuso a la pretensión de la parte demandante bajo el argumento de que las supuestas violaciones de los artículos 11, 55, 82, 1, 2 y 29 de la ley Orgánica de la Contraloría general de la República, no se dan bajo ningún concepto, ya que la intervención de esta institución de fiscalización se dio dentro de las normas legales y constitucionales, y que con el dictado de la Resolución N° 33-94, que es el acto acusado, se está dando cumplimiento a las estipulaciones legales; que caso contrario sería el hecho de que la Contraloría se hubiera abstenido de actuar como lo hizo. Que en lo que respecta a las normas que aluden a los bienes nacionales, las tierras vendidas por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano no pueden ser consideradas como tales.

Por último en lo concerniente a los artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1943, señala la funcionaria que las disposiciones antes mencionadas se refieren a la notificación personal de los actos. Que la resolución N° 33-94, no pone término al proceso o actuación administrativa, y en ella, no ha intervenido particular alguno, ni ha quedado obligado. Que por el contrario, este acto administrativo va dirigido al Director del Registro Público y lo obliga a abstenerse de realizar inscripciones sobre las fincas que enumera la Resolución. Que la Contraloría General actuó conforme a derecho y notificó la Resolución impugnada por Edicto N° 37 de 3 de junio de 1994.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala entran a resolver la presente controversia.

MOTIVACIONES DE LA SALA

Mediante Resolución de Gabinete N° 768 de 29 de diciembre de 1993, modificada por la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, el Consejo de Gabinete autorizó el traspaso a favor de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a título de donación, de cierta cantidad de hectáreas de una finca propiedad de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO.**

En la parte motiva de la Resolución del Consejo de Gabinete N° 768, se expresaba que la Corporación era propietaria de bienes inmuebles de gran potencial agropecuario. Algu-nas de ellas permanecían incultas, otras habían sido

deterioradas y apropiadas de hecho por invasiones de precaristas, y otras habían sido dadas en arrendamiento a productores agropecuarios que habían realizado mejoras a tales tierras y que manifestaban su interés de adquirirlas en propiedad para ampliar su explotación.

En vista de que los fines inmediatos de la Corporación no habían sido logrados a cabalidad o no habían podido implementarse eficazmente, y que la situación económica de la misma eran precarias, su Comité Ejecutivo decidió solicitar al Consejo de Gabinete que se autorizase el traspaso de ciertas fincas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad principal de:

1. Se otorgase en propiedad ciertas hectáreas a comunidades o asentamientos humanos que eran moradores de las mismas;

2. Se procediese a la venta directa de otras fincas a los siguientes grupos de personas: a) quienes venían arrendándolas a la Corporación y que manifestaban su interés de adquirirlas para explotación agropecuaria; b) a quienes habían sido previamente expropiados tales inmuebles;

El resto de las tierras serían vendidas mediante el trámite de Licitación Pública.

Así quedó establecido en la Resolución de Consejo de Gabinete N° 768 adicionado por la Resolución de Gabinete N° 96 de 9 fe febrero de 1994, en los cuales se plasma un listado de arrendatarios a quienes se les beneficiaría con una primera opción de compra de los globos de terreno que venían arrendando hasta 1992. En este orden de ideas algunas de las fincas que se encontraban en esta situación son: Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95.

Esta Sala desea aclarar, que la parte demandante al indicar qué normas habían sido conculcadas, no lo hizo ordenadamente, por lo que este Tribunal las ha agrupado y ha cambiado el orden de como fueron enunciadas para un mejor análisis.

Los primeros cargos de ilegalidad presentados por la parte demandante, descansan en los artículos 1, 2, 11, 29, 55, y 82, todos de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República.

En relación a la supuesta violación del artículo 1° de la Ley 32 de 1984, texto legal que establece que la Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos, el demandante aduce que resulta infringido, toda vez que el Contralor General de la República, lo invoca como fundamento legal para la expedición de la Resolución N° 33-94, entre otras normas contenidas en la Ley 32.

Esta Superioridad es del concepto, que la norma aludida es descriptiva de la naturaleza y marco de funciones generales de la entidad Fiscalizadora de las finanzas del Estado, y por tal razón fue aducido entre el articulado que sustenta el acto expedido.

Para poder determinar si la resolución proferida resulta o no violatoria del principio de legalidad, debemos examinar en su conjunto, y de manera armónica, los restantes cargos de ilegalidad aducidos, que guardan relación con la Ley 32 de 1984, ya que el precepto legal cuya transgresión se impetra,por sí solo no contiene derechos susceptibles de ser violados a ningún particular, pero representa el marco legal de las actuaciones de la Contraloría General.

El segundo cargo de violación aducido, guarda relación con el artículo 2° de la referida Ley 32, norma legal que establece que las acciones de la Contraloría se ejercen sobre todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado, de los Municipios; Juntas Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y semi-autónomas, en el país o en el extranjero, y también sobre aquellas personas u organismos en las

que tenga participación económica el Estado o las entidades públicas.

El recurrente sustenta la violación, indicando que la medida adoptada a través del acto acusado se está ejerciendo sobre personas de derecho privado que estaban en espera que se inscribiera la Escritura Pública, porque pagado el precio, sólo existía la obligación de parte de la vendedora, Corporación Para el Desarrollo Integral del Bayano, de transferir el dominio que se produce conforme a la Ley, por medio de la inscripción del contrato de compraventa en el Registro Público. Que la norma conculcada señala sobre qué personas y organismos se ejercita la acción de la Contraloría General de la República, los cuales son aquellos que tengan a su cargo la custodia o manejo de fondos o bienes del Estado, situación esta que no tiene la sociedad **LA DOLORES, S. A.**

Este Tribunal advierte que el artículo 29 de la misma excerta legal también ha dispuesto que cuando la Contraloría descubra irregularidades en el manejo de los bienes y fondos públicos, está facultada para adoptar cualquier medida precautoria sobre bienes o fondos del Estado, a fin de proteger los intereses públicos.

A juicio de esta Corporación Judicial, este es el punto medular en que se sustenta la actuación de la Contraloría General de la República al cautelar las Fincas N° 48088, N° 639, y N° 490 cuando se encontraban en la etapa final de inscripción en el Registro Público, su enajenación a los demandantes.

En complemento con la norma comentada, el artículo 11 de la Ley 32 confiere en sus numerales 2 y 4 las atribuciones a la Contraloría de fiscalización, regulación y control de todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que tales actos es realicen con corrección, para lo cual adelantará las inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten a esos bienes. Estas mismas atribuciones se reiteran en los literales **f** y **g** del artículo 55 de la Ley 32 de 1984.

El demandante manifiesta, a propósito de las disposiciones arriba mencionada que las mismas han sido violentadas por las Resolución emitida por el Contralor General de la República, dado que el artículo 11 y los numerales 2 y 3, no facultan a este Funcionario a adoptar medidas cautelares que afecten a personas naturales o jurídicas, como es el caso de **LA DOLORES, S. A.**, porque la facultad allí consagrada, se concreta a determinar en que momento se ejerce el control previo o posterior. Que además resulta inaceptable el acto administrativo impugnado que la medida cautelar procede en función de lo que dispone el artículo 11, numeral 4, como si la medida cautelar sirviese para asegurar los efectos de la instrucción o investigación dirigida a recabar pruebas. Que en lo relativo a los literales **f** y **g** del artículo 55 de la ley 32 de 1984, la existencia de dos actos administrativos perfectos, válidos y vigentes, como los dictados por el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y el Consejo de Gabinete, debe concluirse que sólo le competía al Contralor, presentar la demanda ante los tribunales y acusarlos de que no se ajustaban a lo regulado en el Código Fiscal sobre materia concerniente a la disposición de Bienes Nacionales.

La Sala procede de inmediato a analizar los cargos endilgados y a externar lo siguiente:

Este Tribunal Colegiado reconoce que la Contraloría General de la República efectivamente está dotada legal y constitucionalmente del poder fiscalizador del manejo del patrimonio estatal. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución Nacional, el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se extiende a todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, control fiscal que tiene como finalidad la protección del patrimonio del Estado y la correcta y legal utilización de los recursos públicos.

Debemos reparar sin embargo, en el hecho de que existen dos actos administrativos cuya legalidad se presume hasta tanto no sea declarado

judicialmente lo contrario, mediante los cuales el Consejo de Gabinete, en sesiones dentro de las cuales estuvo presente el Contralor General de la República, autorizó, entre otras medidas, la excepción de Licitación Pública para la enajenación de ciertas propiedades de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. Esta decisión, como quedó expuesto en párrafos precedentes, obedeció a la solicitud que la misma entidad elevara, con el fin de lograr la privatización y consecuente aprovechamiento máximo de bienes inmuebles que le pertenecían, pero que no habían podido ser explotados de manera eficaz.

En cuanto a la capacidad legal que tenía la **CORPORACIÓN** para solicitar tal autorización, debemos recordar que nos encontramos frente a una institución del Estado, que tiene un régimen especial que le otorga **autonomía administrativa**, y **patrimonio propio** (art. 1 de la Ley 93); facultada para ejercer derechos y contraer obligaciones; comprar, **vender**, permutar etc. los bienes inmuebles que pertenecen a su patrimonio (art. 10 de la Ley 93) y que en gran medida fueron adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y cedidos con posterioridad a la **CORPORACIÓN**. (Art. 15 de la Ley 93).

El papel fiscalizador de la Contraloría General de la República en la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO**, se encuentra previsto en el Artículo 1° de la Ley 93 de 1976, estableciéndose que la Contraloría ejercerá las funciones de fiscalización y control que la Constitución y las Leyes establecen.

Esta Superioridad, ya ha señalado que el control fiscal que ejerce la Contraloría General debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, a las particularidades que reviste esta institución, y este control se debe ejercer de manera razonable y compatible con el interés público.

La petición de la **CORPORACIÓN** fue acogida, respaldada, autorizada e implementada a través de las Resoluciones del Consejo de Gabinete que sentaron los parámetros para proceder a la venta directa de estos inmuebles, siempre motivadas en el sentido de que el interés colectivo y del Estado mismo en este asunto radicaba en la posibilidad de que la explotación agrícola y agropecuaria de ciertas tierras de propiedad de la **CORPORACIÓN** pudiese ser efectuada por los particulares directamente, habida cuenta de la incapacidad de la propietaria de cumplir con los objetivos para los cuales les fueron otorgados estos inmuebles.

En este orden de ideas, la Corte considera que si bien la Contraloría está facultada para la adopción de medidas precautorias cuando estime que ha existido incorrección en el manejo de los fondos públicos, debemos tener claro que en este caso las operaciones de enajenación tienen su fundamento legal en autorizaciones expresas, expedidas por la autoridad competente mediante actos concretos y legítimos, y cuya legalidad no fue cuestionada por el Contralor General, como lo permite el artículo 276 numeral 7 de la Constitución Nacional.

Según se desprende tanto de las Resoluciones del Consejo de Gabinete antes mencionadas, como de los documentos probatorios aportados, **LA DOLORES, S. A.** cumplía con las exigencias contenidas en el texto de las Resoluciones de Gabinete, que además autorizaban la venta directa a aquellos que aún no teniendo un contrato de arrendamiento en existencia formalizado, ocupaban ciertas tierras de la **CORPORACIÓN**, ya sea como habitat o con fines de explotación agropecuaria comprobada, y de lo cual tenía conocimiento la propietaria de los inmuebles.

Los otros dos puntos en que descansa la medida de cautelación adoptada por la Contraloría en el caso sub-júdice, tienen relación, por un lado, con la fijación de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00), como precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación, precio establecido en la resolución del Consejo de Gabinete, y en la omisión de realizar un avalúo de las tierras, conforme establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal.

En Sentencia de 6 de julio de 1995, en el caso **ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA, S. A. Y HERNÁN DELGADO**, proceso similar al que se encuentra bajo estudio, se señaló **que la privatización de las propiedades de la Corporación no parece haber surgido de manera improvisada o sin que se adelantaran las investigaciones pertinentes. Que así lo revelaron los estudios, a partir de los**

cuales se desprende que la privatización de tierras de Alto y Bajo Bayano se realizarían conforme a los lineamientos de la Ley 16 de 1992 que regula la privatización de empresas, bienes y servicios estatales, y obedecía a la incapacidad de la entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el área por razón de la invasión de precaristas, el asentamiento de indígenas y colonos que de hecho ocupaban grandes extensiones de tierras, sumado al abandono de terrenos cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar.

Por último se señaló en dicha Resolución Judicial **que en ese estudio pormenorizado se contemplaron las mejores opciones que garantizarían el éxito en la privatización de las tierras que aún no habían sido ocupadas, así como la legalización de los asentamientos humanos y la donación al INRENARE de las tierras necesarias para la conservación de Cuenca Hidrográfica y Bosques Forestales, y en este estudio se le dio participación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que en avaluaran íntegramente las propiedades de la Corporación que podían ser enajenadas.**

Lo anterior deja aclarado el por qué se le asignó el precio a las tierras por **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00), además de que la Contraloría General de la República estuvo anuente desde el momento que no se opuso a dicho valor, por lo que no prosperan los cargos endilgados.

El artículo 12 de la Ley 93 de 1976, es igualmente señalado como violado, y esta norma dispone que la Corporación está facultada para disponer de su patrimonio: entre otras, para ejercer derechos, contraer obligaciones, así como comprar y vender bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la política que establezca la Junta Directiva. Esta disposición debe ser analizada en asocio con el artículo 7 literal **d** de la citada excerta legal, que es clara al señalar que corresponde al Comité Ejecutivo de la Corporación **autorizar los gastos y contratos que excedan de cincuenta mil balboas.**

El Ministerio de Hacienda y Tesoro había realizado un avalúo del conjunto de bienes muebles e inmuebles de la Corporación y éste superaba los ciento cincuenta mil balboas. Por esta razón, y en atención a que las funciones de la Corporación habían cesado, se requería la fijación del precio de venta oficial y la autorización de venta, a través de Resolución del Consejo de Gabinete.

Retomamos en este punto los conceptos vertidos por la Sala con anterioridad, en el sentido de que la Contraloría puede y debe ejercer su poder fiscalizador, pero dentro de la normativa legal que regule la materia.

Conforme establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal, la venta de bienes nacionales requiere un avalúo de la Contraloría General y del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Sin embargo, la Sala ya ha advertido que tales disposiciones legales dicen relación con la manera de disponer de los **bienes nacionales**, definidos en el artículo 3 del Código Fiscal como se transcribe a continuación: "... además de los que pertenecen al Estado y de los de uso público, según los enumera la Constitución en sus artículos 208 y 209, todos los existentes en el territorio de la República **que no pertenezcan** a los Municipios, a las entidades autónomas y semi-autónomas, ni sean individual o colectivamente de propiedad particular, y los bienes cuya enajenación se dispuso, pertenecían a una entidad autónoma.

Un punto importante a destacar por parte de esta Corporación Judicial, es que en el proceso que nos ocupa no debía entrar en discusión la legalidad de las ventas, sino de la cautelación de los bienes enajenados por la Corporación a **LA DOLORES, S. A.**

Ello se desprende del hecho irrefutable de que el señor Contralor no ha impugnado a través de los recursos pertinentes las disposiciones y autorizaciones concedidas en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y N° 96, sino sus efectos en

el caso particular de inscripción de la enajenación de las fincas 1720 y 1455, como medida precautoria, invocando entre otros fundamentos legales, el contenido del artículo 29 de la Ley 32 de 1984.

Esta norma, que efectivamente faculta a la Contraloría General de la República para adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos, lo limita a los casos en que se trate de funcionarios o personas que hayan incurrido en las irregularidades señaladas en esa norma. Reproducimos el texto legal en comento para mayor ilustración:

> "Artículo 29. Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el manejo de los bienes y fondos públicos que, a su juicio, ameriten la suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien corresponda y así deberá ordenarse por el período que resulte necesario. En este caso la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente su petición.
>
> Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago de salario, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública debe hacer a favor del agente o empleado de manejo o de otro funcionario o persona que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios, a fin de proteger los intereses públicos.
>
> Cuando sea del caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor."

La Sala Tercera, en resolución de 30 de noviembre de 1994, al analizar la aplicación del artículo 29 de la Ley 32 de 1984, señaló lo siguiente:

> "Del transcrito artículo 29 de la Ley 32 de 1984, se infiere la facultad conferida por dicha Ley a la Contraloría General de la República para adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos de personas o funcionarios que incurran en las irregularidades señaladas en el mismo. El artículo 5 del Decreto de gabinete N° 36 de 1990, establece que los funcionarios que tengan su cargo la investigación de alguno de los casos mencionados en el artículo 3 de la misma norma, deben preparar un informe de antecedentes el cual será presentado ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con las evidencias del caso, indica que al elaborarse el informe debe participar un abogado al servicio de la Contraloría General de la República y que la información que debe contener dicho informe, consiste en la identificación del responsable o responsables, el cargo desempeñado, la cuantía estimada o estimable del perjuicio económico y referencia a los hechos que pudieron originar la responsabilidad patrimonial o cualquier otro elemento que contribuya al esclarecimiento de la irregularidades advertidas."

Consideramos pertinente reproducir parcialmente el contenido de la resolución transcrita, en vías de señalar que al momento en que la Contraloría adoptó la medida de cautelación, no existían investigaciones que precisaran ninguno de los puntos específicos a los que se hace alusión en el párrafo que antecede, que a su vez reproduce el contenido de las normas del Decreto de Gabinete 36 de 1990 que resultan aplicables en asocio con la Ley 32 de 1984.

En efecto, al momento de expedirse la Resolución N° 33-94 que cautelaba las fincas enajenadas, la Sala observa que se presentaban las siguientes circunstancias:

1. El precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación, objetado en la Resolución del Contralor, no podía haber sido efectivamente determinado previamente por esa institución revelando incongruencia con el precio de venta fijado por las Resoluciones de Gabinete, puesto que era precisamente en esa

resolución donde se giraban órdenes a la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría para que procediera a efectuar diligencias periciales que determinaran medidas, linderos, superficies, ubicación y **valor o avalúo** por hectárea de cada uno de los bienes cautelados.

2. Si la Dirección de Ingeniería había realizado ciertos avalúos a los bienes de la Corporación, éstos se hicieron de manera general a todos los bienes muebles e inmuebles que componían su patrimonio, pero que obviamente no tomaban en cuenta que cualquier incremento en la valorización de ciertos inmuebles había sido a consecuencia de las mejoras e inversiones introducidas por los arrendatarios y custodios de esos bienes.

3. No existía un informe de Auditoría que precisara de qué manera se había podido producir lesión al patrimonio público con la enajenación, y ello se desprende lógicamente del punto tercero de dicha resolución, en que se ordenaba a la Dirección General de Auditoría de la Contraloría que iniciara la elaboración de un informe al respecto.

4. Si el argumento principal de oposición a la enajenación en este caso es el precio de venta y la falta de avalúo previo, resulta contradictorio que entre los considerandos de la resolución emitida que ordenó la cautelación, se esgriman argumentos relativos a que algunos de los beneficiados por la enajenación no eran arrendatarios, circunstancia ésta que tendría poca o ninguna incidencia en el hecho que sustenta la oposición de la Contraloría a la inscripción de las fincas, y esto es, la supuesta omisión de cumplir con los requisitos de los artículos 23 y 25 del Código Fiscal antes de fijar el precio de venta.

La situación alegada afectaría en todo caso, el hecho concreto de venta a una persona específica, contrariando o desconociendo los parámetros fijados en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y N° 96, pero resultaría también contradictorio aducir que se ha transgredido lo establecido en estos actos administrativos, por ser precisamente estas resoluciones cuyo contenido es objetado, aunque indirectamente, a través de los actos de ejecución.

La Sala Tercera ha entrado al análisis de todas estas circunstancias porque reconoce las delicadas funciones de fiscalización que la Contraloría General de la República debe realizar en cada transacción que pueda afectar el patrimonio del Estado. Sin embargo, en este caso, el Tribunal considera que los cargos de violación endilgados al acto acusado, relativos a las facultades que conferidas a la Contraloría en la Ley 32 de 1984, que establece también los procedimientos a seguir en los casos en que se acredite la afectación de patrimonios públicos, deben ser aceptados, y que la medida de cautelación afecta la inscripción de fincas que fueron enajenadas cumpliendo con lo previsto en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y 96, actos cuya legalidad no ha sido controvertida.

En estas circunstancias, la Sala no está obligada al examen de los restantes cargos de violación endilgados. Sin embargo, considera procedente indicar a las partes que los cargos relativos a los artículos 3, 23, 25, 26 y 59 del Código Fiscal, en su mayoría ya fueron examinados al momento de determinar que conforme al artículo 3 de la citada excerta legal, los bienes pertenecientes a las entidades autónomas, entre otros, no entran en la clasificación de bienes nacionales. Resulta pertinente comentar el contenido del artículo 6° del mismo Código Fiscal, que ha dispuesto que los bienes de los Municipios (que tampoco son descritos en el artículo 3° como bienes nacionales), en cuanto a su administración y la manera de disponer de ellos deben sujetarse a lo dispuesto en el Código en relación a la Hacienda Nacional, mientras que tales disposiciones no riñan con lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, lo que hace privar las disposiciones especiales de la ley que regenta el funcionamiento del Municipio, sobre las del Código Fiscal.

En relación a la supuesta violación a los artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1943, a partir de las cuales el demandante ha señalado que fueron evidentemente transgredidas al procederse a la notificación de la Resolución N° 33-94 por vía de edicto, sin cumplir con el rigor de la notificación personal, la Sala estima que resultan improcedentes, puesto que aún en el caso de que efectivamente se hubiese omitido el trámite de notificación personal sin realizar

las diligencias pertinentes antes de proceder a la notificación por vía de edicto, estas deficiencias quedaron subsanas, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 135 de 1943 con su modificación, puesto que el actor pudo accionar contra el acto administrativo que le afectaba, y la Sala Tercera ha conocido de su pretensión.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal conceptúa que la labor de la Contraloría General de la República en los casos en que considera que pueden afectarse los fondos del Estado debe seguir siendo adelantada en la manera correcta y eficiente en que se ha venido produciendo, pero que cualquier medida que se adopte se realice con fundamento en hechos y circunstancias probadas, para que no se afecte el funcionamiento de otras instituciones, o a quienes de buena fe contratan con el Estado, como en el caso que nos ocupa, en que la cautelación ordenada ha perjudicado a quien adquirió, conforme con lo previsto en autorizaciones del Consejo de Gabinete **LA DOLORES, S. A.**

Finalmente debemos acotar, que la Resolución N° 33-94 contempla la cautelación de otras fincas de la Corporación, enajenadas con base en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y 96. Cada caso de enajenación debe ser analizado de manera individual y exhaustiva, tal como ha verificado este Corporación Judicial en el negocio sub-júdice, por lo que el Tribunal sólo puede limitarse a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto acusado, en lo relativo a la pretensión de los demandantes.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República, que ordenó la abstención de inscripción en el Registro Público de la Escritura Pública 3467 de 14 de abril de 1994 de la Notaría Cuarta de Circuito, suscritas por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO por una parte, y por otra LA DOLORES, S. A., en relación a los globos de terreno de las Fincas N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y N° 490 y ORDENA la inscripción definitiva de las fincas en las porciones determinadas en la Escritura a favor de LA DOLORES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DE MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO GERENCIAL N° 14 DE 29 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR LA GERENTE DE LA GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORROS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Corporación de Asesores Jurídicos**, en nombre y representación de **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal el Decreto Gerencial N° 14 de 29 de junio de 1995, emitido por el Gerente de la Gerencia Ejecutiva de Operaciones de la Caja de Ahorros.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante sostiene que el decreto impugnado viola las siguientes normas: artículo 20 de la Ley 33 de 1946; artículos 2, 4 literal b, y 5 de la Resolución N° JD-1-90 de 1990.

Para sustentar su apreciación señala el recurrente que la señora **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ** ha sido agraviada por la declaratoria de insubsistencia del cargo que desempeñaba en la Sucursal de la Caja de Ahorros de Arraiján. Que durante el ejercicio de sus funciones, la señora **DE SÁNCHEZ** ha demostrado diligencias, iniciativa, moralidad y eficiencia, lo cual acredita con las demostraciones públicas y escritas que reconocen sus dotes como buena funcionaria de la institución.

Por último, que luego de aproximadamente de 17 años de servicios continuos en la Caja de Ahorros la Gerencia Ejecutiva de Operaciones declara insubsistente el nombramiento de la señora **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ**, con el sólo fundamento de la discrecionalidad contemplada en el artículo 21 de la Ley 87 de 1960.

INFORME DE CONDUCTA

Posteriormente el Magistrado Sustanciador procedió a solicitarle a la Gerente Ejecutiva de Operaciones de la Caja de Ahorros, informe de conducta. Mediante Nota N° 95 (361-01) 205 de 6 de diciembre de 1995, la Gerente Ejecutiva de Operaciones, señaló que se procedió a declarar insubsistente el nombramiento de la señora **MILVIA DE SEDAS SÁNCHEZ**, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 87 de 1960, tal y como fue reformado por el artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 208 de 8 de julio de 1969 y la Resolución de Junta Directiva de la Caja de Ahorros N° 1-90 del 1° de marzo de 1990.

POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

De igualmente se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien mediante Vista N° 6 de 3 de enero de 1996, se opuso a la pretensión de la demandante.

CRITERIO DE LA SALA TERCERA

Las primeras normas que estima conculcada la parte actora es el artículo 20 de la Ley 33 de 1946, y el artículo quinto de la Resolución N° JD-1-90, de 1° de marzo de 1990 que son del tenor siguiente:

> "Artículo 20. Por la vía gubernativa proceden los siguientes recursos en los asuntos administrativos de carácter nacional:
>
> 1. El de reconsideración ante el funcionario administrativo de la primera instancia, para que se aclare, modifique o revoque la resolución;
>
> 2. El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto"...
>
> "QUINTO. Las decisiones de cesación hechas por los Gerentes son recurribles en reconsideración ante el propio funcionario y mediante apelación al Gerente General".

Las infracciones son sustentadas, bajo el argumento de que la señora Gerente Ejecutiva de Operaciones, quien firma el Decreto N° 14 de 1995, sólo tiene competencia para declarar insubsistente el nombre de la señora **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ** y conocer de la reconsideración de tal medida. Que la falta de competencia jerárquica trae como consecuencia la nulidad del acto emitido por lo que la Ejecutiva.

Frente a lo manifestado por la parte actora, este Tribunal Colegiado quiere manifestar que de acuerdo a la constancias procesales que reposan en el

expediente la Gerente Ejecutiva de Operaciones en ningún momento resolvió la apelación interpuesto por la señora **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ**, sino que declaró extemporáneo el recurso **(ver foja 10)**.

La Procuradora de la Administración, advirtió la situación antes comentada al señalar:

> "Desde nuestro punto de vista, esos dos ataques parten de un lamentable equívoco: la Gerente Ejecutiva de Operaciones, no contestó en el fondo, el recurso de apelación.
>
> Ciertamente, según se puede ver en el expediente administrativo de marras, la demandante ya había dejado de pasar el término legal para presentar y sustentar el recurso de apelación; en función de esta preclusión, la Gerente Ejecutiva de Operaciones, no quiso darle respuesta al Memorial de la demandante denominado recurso de apelación. O sea, no se le dio el trámite correspondiente, (someterlo a la consideración de la Gerencia General) dado que ya no había oportunidad procesal para ello, puesto que había caducado o precluido la instancia.
>
> Ante la insistencia de la demandante, la Gerente Ejecutiva de Operaciones, por vía de una Nota sin número y sin fecha, le hace ver a la hoy demandante, esta situación de preclusión y consiguientemente, desestima la tramitación procedimental por la improcedencia del recurso."

En la vía gubernativa, ni en el derecho contencioso administrativo panameño no existe el recurso de hecho, por lo que al negarse una apelación se entiende agotada la vía gubernativa, de acuerdo al numeral 2 del artículo 36 de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946. Agotada la vía la afectada recurrió a la Sala Tercera. El artículo antes mencionado es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 36. Se considerará agotada la vía gubernativa:
> ...
> 2. Cuando no se admita al interesado el escrito en que se interponga cualesquiera de los recursos señalados en el artículo 33"...

De acuerdo a lo anterior no prospera el cargo endilgado.

También se indica que se ha violentado el artículo Segundo de la Resolución N° J. D. 1-90 de 1° de marzo de 1990 que prevé lo pertinente:

> "SEGUNDO: Los Gerentes, Subgerentes y empleados de la Caja de Ahorros podrán ser cesados de sus cargos en la Caja de Ahorros ya sea por destitución o declarando insubsistentes sus nombramientos. La destitución se produce por faltas cometidas o causales imputables al afectado de cualquier naturaleza que afecten la Institución. La insubsistencia del nombramiento se produce por razones de índole administrativo o financiero de la Caja de Ahorros, que no conllevan falta de la persona separada. El funcionario al cual corresponde hacer la separación hará la calificación de la terminación y determinará la existencia de la falta si fuere el caso."

La violación de la norma según el recurrente ha sido por omisión, ya que la Gerente Ejecutiva de Operaciones no ha señalado la calificación para la declaratoria de insubsistencia de la señora **MILVIA DE SEDAS DE SÁNCHEZ**, es decir que a pesar de que para la declaratoria de insubsistencia no es requisito invocar una causal, si es necesario señalar que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento se produce por razones de índole administrativo o financiero de la Caja de Ahorros.

De acuerdo a lo manifestado por la parte demandante, queremos indicar que no coincidimos con su planteamiento, ya que la Ley 87 de 23 de enero de 1960, Orgánica de la Caja de Ahorros, prevé que los Altos Ejecutivos de esta entidad

bancaria no gozan de estabilidad en el empleo, dado que son de libre nombramiento y remoción por parte del Gerente General. Por esto no es relevante que el gerente, en este caso la Gerente de Operaciones, califique o no la insubsistencia del cargo de la señora **SÁNCHEZ.** La Resolución N° J. D. 1-90 de 1° de marzo de 1990, al tener rango inferior frente a la Ley 87 de 23 de enero de 1960, Orgánica de la Caja de Ahorros, se aplica preferentemente esta última. De esta manera no prospera el cargo impetrado.

Por último, otra norma que se señala como violada es el artículo 4, literal b) de la Resolución JD-1-90 de 1° de marzo de 1990, que dice:

> "CUARTO: Corresponde hacer las cesaciones:
> ...
> b. En el caso de los Gerentes Asistentes y de los Sub-Gerentes, el gerente respectivo siempre que informe con la debida antelación al Gerente General.
> ...
> Las facultades otorgadas a los Gerentes en este Artículo constituyen delegación de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica al Gerente General. En consecuencia, éste podrá suspender o revocar, dicha delegación a cualquiera de los Gerentes."

Conceptúa la recurrente que esta disposición ha sido violentada por parte de la Gerente Ejecutiva de Operaciones, ya que esta última funcionaria omitió informarle al Gerente General de la medida que tomó contra la señora **DE SÁNCHEZ.**

Considera esta Corporación Judicial, que la disposición antes transcrita no ha sido conculcada, en virtud de que la delegación de facultades del Gerente General a la Gerente Ejecutiva de Operaciones se concretizó desde el momento en que esta última funcionaria dictó el Decreto Gerencial N° 14 de 29 de junio de 1995.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Decreto Gerencial N° 14 de 29 de junio de 1995 y actos confirmatorios proferidos por la Gerente Ejecutiva de Operaciones de la Caja de Ahorros.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SANSÓN, TORRIJOS Y ASOCIADOS-ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SARA COSME CARVAJAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° C. P. N° 358-93 DE 5 DE ENERO DE 1993, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sansón, Torrijos y Asociados ha interpuesto, en nombre y representación de SARA COSME CARVAJAL, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución de C. P. N° 358-93 del 5 de enero de 1993, y la resolución confirmatoria, ambas dictadas por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y para que se haga otras declaraciones.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante la Resolución impugnada, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social resolvió:

"1. CONSIDERAR como incremento excesivo en los salarios durante los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, la suma de Ciento tres mil setecientos cinco balboas con 92/100 (B/.103,705.92).

2. CONSIDERAR como los cuatro (4) mejores años de cotizaciones de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social los años de 1986, 1987, 1988 y 1989 cuyo monto de salario corresponde a la suma de catorce mil trece balboas con 52/100 (B/.14,013.52).

3. RECONOCER a la asegurada SARA COSME CARVAJAL, nacida el 14 de noviembre de 1941 portadora de la cédula de Identidad Personal N° 9-80-1023, Seguro Social N° 93-3609, Sexo femenino, una Pensión por riesgo de vejez anticipada, por la suma mensual de ciento ochenta y un balboas con 43/100 (B/.181.43) a partir del cese de labores, calculado sobre un salario promedio mensual de doscientos noventa y un balboas con 95/100 (B/.291.95) de acuerdo con lo prescrito en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social." (Fs. 2).

Con motivo de la revisión de dicha resolución solicitada por la asegurada, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, dictó la Resolución N° 3845 de 17 de marzo de 1995, manteniendo en todas sus partes su Resolución N° 358-93 de 5 de enero de 1993.

II. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

La parte demandante estima que los actos administrativos impugnados violan el artículo 54 del Decreto Ley 14 de 1954, modificado por la ley 15 de 31 de marzo de 1975 y por la ley 30 de 1991, los artículos 1 y 2 del Reglamento de Incrementos Excesivos, y los artículos 10 y 159 del Código de Trabajo.

Estas normas son del siguiente tenor literal:

"Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social

Artículo 54: Se tomará como salario base mensual para el cómputo de las pensiones, el promedio de los salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta individual.

Si tratándose de pensión de invalidez el asegurado no llegare a tener siete (7) años de cotizaciones, se tomará el promedio de los sueldos correspondientes a los meses de cotizaciones que tuviese acreditadas.

Para los efectos de método de cálculo se aplicará el reglamento correspondiente, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Técnico.

Reglamento de Incrementos Excesivos

Artículo 1. La Caja de Seguro Social presumirá que ha habido aumento excesivo en los remuneraciones tendientes a aumentar el monto de las prestaciones en los Programas de Vejez, Invalidez y Muerte, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario y el salario total de un año sea mayor en más de 10% que el salario total del año anterior.

Se podrá investigar, por lo tanto, cualquier período de dos años consecutivos, comprendidos en los últimos quince años de cotización, siempre que el salario de un año sea mayor en más de 10% que el salario del año anterior.

> Artículo 2. La Caja de Seguro Social presumirá que no ha habido aumento excesivo en los salarios declarados, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario, aun cuando se haya establecido una de las situaciones señaladas en el Artículo anterior, si se comprueba que tales aumentos se han producido por haber cambiado el asegurado a cargos mejor remunerados, o los mismos se deban a funciones de mayor responsabilidad o a nuevos empleos, siempre y cuando los nuevos salarios correspondan a lo que se paga en el país por los cargos o funciones que tuviera asignado el asegurado.
>
> Tampoco se presumirá que ha habido incremento indebido en los salarios, cuando el aumento sea consecuencia de la aplicación de las disposiciones legales, convencionales o políticas empresariales aplicables a grupos de trabajadores.
>
> Código de Trabajo
>
> Artículo 10. Se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde el mismo salario, comprendido en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieren a un trabajador por razón de la relación de trabajo.
>
> Artículo 159. El salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador."

A juicio de la parte actora los actos impugnados violan el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, en forma directa, por omisión, porque en dichos actos se tomó como base para el cómputo de la pensión los salarios correspondientes a los cuatro mejores años de cotizaciones de la señora Sara Cosme Carvajal (1986, 1987, 1988 y 1989), pero en realidad el cómputo no se hizo sobre dicha base, sino sobre los salarios reducidos en la cantidad considerada como incrementos excesivos, desvirtuando el concepto de salario base mensual.

El demandante señaló que, el artículo 1 del Reglamento de Incrementos Excesivos, admite prueba de que los aumentos salariales del asegurado se deben a funciones de mayor responsabilidad y de que estos salarios son los que se pagan en el país por funciones similares, y consideró igualmente violado el artículo 2 del precitado reglamento, de manera directa, por omisión, porque no se tomó en cuenta como pruebas, las que reposan en el expediente administrativo que son las declaraciones de renta de los años 1983 a 1989, la certificación del contador público autorizado que acredita el incremento en las declaraciones de renta de Empresas Sarita, S. A., los informes de los auditores de la Caja de Seguro Social, que demuestran que se desvirtuó completamente la presunción establecida por el reglamento de incrementos excesivos.

Finalmente, indicó que los artículos 10 y 159 del Código de Trabajo fueron violados en forma directa, porque las resoluciones impugnadas, no le reconocieron a la asegurada Sara Cosme Carvajal, el derecho que tiene todo ciudadano de mejorar su posición en el mundo económico y social, con un incremento de su salario en la empresa, y que según el apoderado de la parte actora, es mucho más bajo que el que devengan la mayoría de los Gerentes Generales de Industrias y Comercios. También agregó que la Caja de Seguro Social ha confundido como la misma persona a la Sociedad y a sus accionistas, contrariamente a lo que establece la Ley 32 de 1927.

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 04 de 3 de enero de 1996, solicitó a esta Sala que niegue lo pedido por la actora en la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

A juicio de la señora Procuradora de la Administración, el cargo de violación del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social debe desestimarse, porque la Resolución N° 358-93 de 5 de enero de 1993, emitida por la Comisión de Prestaciones, tuvo como fundamento el Informe N° 118-A. I., del Departamento de Auditoría de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, en el que se concluyó que los aumentos de salarios recibidos por la demandante no se enmarcaban dentro de los principios contemplados en el Reglamento de Incrementos Excesivos, como lo son: aumento de funciones de mayor responsabilidad, o política de salarios aplicables a grupo de trabajadores.

Manifestó además, que la asegurada Sara Cosme Carvajal no logró desvirtuar lo establecido en las disposiciones del Reglamento de Incrementos Excesivos, y que consta en el proceso administrativo que se consideró toda la documentación relativa a su situación, por lo cual no se violaron los artículos 1 y 2 de este Reglamento.

En relación con los cargos de violación de los artículos 10 y 159 del Código de Trabajo, la señora Procuradora de la Administración señaló que también deben desestimarse, porque dichas normas no son aplicables al caso de la demandante, puesto que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social no ha conculcado el derecho al salario que tiene la señora Sara Cosme Carvajal, ni le ha reducido dicho salario, sino que se limitó a calcular la suma que le corresponde en concepto de pensión por vejez anticipada.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala desestima los cargos de violación de los artículos 10 y 159 del Código de Trabajo, en virtud de que no son aplicables al presente caso, puesto que el primero trata del principio de la igualdad de salario en iguales condiciones de trabajo, mientras que el segundo establece la prohibición de reducir el salario, derechos que no han sido conculcados por los actos acusados de ilegales, porque los mismos tratan de la aplicación de un reglamento de incrementos excesivos en los salarios recibidos por la señora Sara Cosme Carvajal, sólo para el cálculo de la pensión de vejez anticipada sin fondo complementario, solicitada por ésta.

Corresponde por tanto a esta Sala determinar si la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social aplicó correctamente el "Reglamento por medio del cual se fijan las pautas a seguir en los casos de los asegurados que reporten incremento excesivo en las remuneraciones", para el cálculo de la pensión de vejez anticipada solicitada por la asegurada Sara Cosme Carvajal.

Consta en el expediente administrativo de la asegurada Sara Cosme Carvajal, que ella trabajó desde 1964 en el local comercial denominado Abarrotería Sarita, y desde 1973 trabajó en Empresas Sarita, S. A., sociedad constituida mediante la Escritura Pública N° 149 de 16 de abril de 1973, inscrita en el Registro Público el 24 de abril de 1973 (fs. 59 a 60 del expediente administrativo).

El 27 de noviembre de 1987, la asegurada solicitó pensión de invalidez sin fondo complementario, lo que motivó una investigación por parte del Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social, la que concluyó con el Informe N° 118-A. I. de 16 de noviembre de 1989, firmado por el auditor Ariel Arosemena, en el cual se señaló lo siguiente:

> "I. Generales de la empresa: Este patrono opera con licencia comercial Tipo B. N° 5910 en la ciudad de Aguadulce y su actividad es la venta al por menor de víveres en general, supermercado, hotel y restaurante.
>
> II. Comprobación de los salarios pagados: En esta labor se comprobó que los salarios pagados contra los declarados a la institución, guardan relación entre sí.
>
> III. Cargos ocupados y funciones desempeñadas: La asegurada nos manifestó que actualmente ocupa en la empresa un cargo de supervisora y asesora aunque anteriormente, realizaba otras

funciones como la de cajera, cálculo de precio, compras, etc., y que por motivos de salud no pudo seguir desempeñando.

IV. Relación de los aumentos concedidos:

Fecha	De	A	Monto	%
Nov. 1978	60.32	110.32	50.00	83
Jun. 1979	110.32	135.32	25.00"	23
Enero 1981	135.32	160.32	25.00"	18
Feb. 1982	160.32	185.32	25.00"	16
Nov. 1983	185.32	225.32	40.00	22
Feb. 1984	225.32	1500.00	1274.68	566
Enero 1985	1500.00	1660.00	160.00	11
Abril 1986	1660.00	1860.00	200.00	12

Incluidos aumentos por decreto ley.

V. Causa de los aumentos recibidos: El motivo o razón de los aumentos de salario según la Sra. Cosme, obedece al aumento de actividades en la empresa, y su dedicación al buen funcionamiento de esta. A pesar de estar plasmadas en el libro de actas, estos no se enmarcan dentro de los principios contemplados en el reglamento de incrementos excesivos, como lo son: aumento de funciones de mayor responsabilidad o política de salarios aplicables a grupo de trabajadores.

VI. Nexo Familiar: La asegurada guarda vínculos familiares con los directivos de ésta empresa.

VII. Observaciones: Su cargo en la empresa será ocupado por su hijo, señor Franklin Barrios.

Actualmente sigue cotizando al Seguro Social.

Los empleados de la empresa cobran en efectivo su salario.

El negocio opera regularmente más de ocho horas diarias, hasta los domingos a las 12:md.

VIII. Conclusión: Fundamentados en las consideraciones expuestas, se pudo comprobar la prestación del servicio, por la documentación presentada por el patrono Empresas Sarita, S. A.

En lo respectivo a las alzas remunerativas otorgadas a la asegurada en mención, opinamos que tras no haberse sustentado éstas, ya que no se enmarcan dentro de políticas salariales colectivas o a nuevos cargos con mayores responsabilidades se deben aplicar los ordenamientos legales que rigen en materia de incrementos excesivos no justificados a partir de febrero de 1984." (Fs. 64 y 65).

Dicho informe se acompañó con copia de las Declaraciones Juradas del Impuesto de Patente o Licencia Comercial N° 5910, Tipo B, de Empresas Sarita, S. A., correspondiente al Establecimiento Super Mercado Sarita, así como copia de sus Declaraciones Juradas de Renta de los años fiscales de 1979 a 1984 y de la lista de sus empleados y los sueldos de los mismos. (Fs. 32 a 58 del expediente administrativo).

Igualmente a fojas 62 y 63 del citado expediente, reposa la Serie Histórica del Movimiento financiero de Empresa Sarita, S. A., elaborado por la Dirección Técnica de Administración y Finanzas del Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social, en el cual se reflejan los ingresos de la empresa desde 1979 hasta 1984, de la siguiente manera:

INGRESOS

1979 426,386

1980 452,759
1981 470,363
1982 443,297
1983 589,981
1984 889,422

Producto de dicho informe, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social dirigió a la Directora Nacional de Prestaciones Económicas el Memorando de 7 de febrero de 1990, en el que se señaló que mediante sesión celebrada el mismo día, se conoció el caso de la asegurada Sara Cosme Carvajal con seguro social N° 93-3609, y que previo análisis del expediente se acordó "aprobar el Informe de Auditoría N° 118-A. I. de 16 de noviembre de 1989, que concluyó en que (sic) **se pudo comprobar la prestación del servicio de la asegurada**, en virtud de documentación presentada por el patrono Sarita, S. A., **por lo que aceptan las cuotas aportadas por la asegurada con este patrono, para el cálculo de la prestación solicitada.**" (Fs. 69 del expediente administrativo. El subrayado es de la Sala.)

Dicho Memorando motivó que el Jefe del Departamento de Fondo Complementario, Fideicomiso y Cálculo, consultara a la Directora Nacional de Prestaciones Económicas, si procedía la aplicación del reglamento de incremento excesivo, como lo señala el transcrito informe N° 118-A. I. Ante una respuesta afirmativa se aplicó el citado Reglamento para el cálculo de la pensión por invalidez, concedida a la asegurada Sara Cosme Carvajal mediante la Resolución N° 4558-90 de 23 de abril de 1990, en la que se le reconoció una pensión de invalidez por la suma mensual de B/.192.76, a partir del 30 de mayo de 1988, calculada sobre un salario promedio mensual de B/.265.87. De esta resolución no se notificó la asegurada.

Posteriormente, el 25 de septiembre de 1991, la señora Sara Cosme Carvajal, presentó solicitud de pensión de vejez anticipada sin fondo complementario. Esta pensión le fue concedida mediante la Resolución N° 358-93 de 5 de enero de 1993, en la que también se aplicó el reglamento de incremento excesivo en las remuneraciones, por lo que la señora Sara Cosme Carvajal pidió a la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social que revisara dicha pensión. La Comisión acogió la solicitud, y ordenó la ampliación de las investigaciones hechas en el caso, diligencias que practicó el aditor Ariel Arosemena, quien rindió el Informe de Auditoría A. I. N° 299-93 Coclé, de 23 de diciembre de 1993, en el que señaló lo siguiente:

> "... como resultado de la investigación realizada en la Empresa Sarita, S. A. y de acuerdo a las pruebas presentadas por la interesada, se desprende que la Sra. SARA COSME CARVAJAL, obtuvo en el año de 1984 como promoción a cargo de la Gerencia General de esta empresa, un incremento de salario por aumento de responsabilidades en el cargo desempeñado estando bajo su dirección las Empresas SARITA, S. A., las que comprenden Hotel Sarita, Restaurante Sarita, Bar Sarita y Supermercado Sarita.
>
> Lo mismo se deriva de los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas las que se muestran en Declaración Juradas de Rentas Internas del año 1984 hasta el año 1991, en esta empresa como prueba fehaciente del auge comercial de estos negocios se adjunta fotocopia de los préstamos otorgados a ésta en virtud del aumento de la actividad comercial que dio origen a la creación de las nuevas empresas.
>
> Es por estas circunstancias y de acuerdo a las pruebas recabadas a raíz de esta segunda intervención en empresa Sarita, S. A., consideramos que el aumento otorgado en febrero de 1984, es procedente de acuerdo a la documentación presentada por la interesada en donde se justifica claramente el aumento otorgado por pasar a ocupar un nuevo cargo mejor remunerado por aumento de responsabilidades y por ende de funciones." (Fs. 3 y 4).

Con base en este informe y en la documentación recabada en la investigación, el Jefe de la Sección de Investigaciones de Coutas de la Caja de Seguro Social mediante su Memorando APE. IE. 45-94 de 28 de febrero de 1994, concluyó que el incremento de responsabilidades en las funciones de la señora Sara Cosme Carvajal en Empresas Sarita, S. A., se debió a la ampliación y mejoras de sus locales comerciales y al aumento del personal, del capital de trabajo y de sus ingresos, y recomendó a la Comisión de Prestaciones revocar la Resolución atacada y en su defecto reconocer la pensión de vejez anticipada "de acuerdo a los nuevos cálculos resultantes de la no aplicación del Reglamento de Incrementos Excesivos".

La Comisión de prestaciones conoció nuevamente del caso y acordó ordenar la ampliación del informe de auditoría con el fin de determinar si con posterioridad al préstamo obtenido por la empresa Sarita, S. A. la planilla se mantuvo con los mismos salarios o hubo aumento para los demás trabajadores y si los establecimientos de esa empresa "funcionan en el mismo lugar".

Mediante la Nota A. I. N° 111-94 Coclé, la Jefa Provincial de Auditoría de Coclé y el auditor Ariel Arosemena, informaron el resultado de la ampliación ordenada indicando que Empresas Sarita, S. A. ocupa tres edificios ubicados en una manzana, entre la Ave. Alejandro Tapia y la Calle Paulo Arosemena, desde donde puede ejecutarse fácilmente las labores de gerencia de dichos negocios, y que en 1984 hubo aumento de personal, lo que comprobó con copia de las planillas y nuevamente recomendó a la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social que revocara la resolución impugnada y que concediera a la señora Sara Cosme Carvajal el derecho a la pensión de vejez anticipada sin aplicar el Reglamento de Incrementos Excesivos, porque los aumentos de salario se justificaban.

El expediente fue enviado una vez más a la Jefe de Auditoría de Coclé para "Anexar planilla interna de la empresa" con el objeto de corroborar si en 1984 hubo o no aumento para el resto del personal. A esta nueva investigación se opuso la asegurada alegando, que era innecesaria porque ya se había comprobado que el incremento salarial se debió a las nuevas funciones y mayores responsabilidades del cargo que desempeñaba.

Agotada la investigación reseñada la Comisión de Prestaciones dictó la Resolución N° 3845, el día 17 de marzo de 1995, mediante la cual decidió mantener en todas sus partes la Resolución N° 358-93, cuya revisión había pedido la asegurada.

Para resolver la controversia planteada ante la Sala por la asegurada Sara Cosme Carvajal, debe tomarse en consideración, en primer lugar que la relación laboral existía porque ella prestaba sus servicios en Empresas Sarita, S. A. y así lo ha aceptado la Caja de Seguro Social (foja 69 del expediente administrativo).

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que con las pruebas presentadas por la parte actora en el proceso administrativo y en el presente proceso contencioso, se ha podido comprobar que para los años de 1980, 1982, 1984 y 1985, Empresas Sarita, S. A. celebró contratos de préstamo y líneas de crédito con dos Bancos, incrementando su capital de trabajo y su crédito comercial, lo que influyó positivamente en el movimiento comercial de dicha empresa, tal como lo demuestran los informes de auditoría que rindió el Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social, las declaraciones de renta de Empresas Sarita, S. A. y certificación de contadora pública (fs. 101). Mediante estos documentos se comprueba que en el año de 1984, como consecuencia de la expansión de sus actividades, la empresa incrementó sus ingresos brutos en la suma de B/.299,441.00 sobre los ingresos del año 1983, crecimiento que es notorio comparándolo con los ingresos de los años anteriores, y que se mantuvo, con ligeras altas y bajas hasta el año de 1990.

Tal como se lee en los informes de auditoría rendidos por el Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social, los servicios y operaciones de la empresa crecieron, y al supermercado, se sumó el hotel, el bar y el restaurante, lo que trajo como consecuencia un auge comercial durante el año en el que la asegurada fue nombrada Gerente General de la empresa y recibió el

primer aumento considerado excesivo, auge que se mantuvo, con aumentos y disminuciones del año 1984 al año 1990.

El artículo 2 del Reglamento de Incrementos Excesivos contiene tres supuestos en los que **no se presumirá** que ha habido aumento excesivo en los salarios declarados, estos son: si se comprueba que tales aumentos se han producido por **cambiar el asegurado a cargos mejor remunerados**, o si los mismos se deben a **funciones de mayor responsabilidad**, y finalmente, si es por causa de nuevos empleos. Todos estos supuestos están condicionados a que los nuevos salarios correspondan a lo que se paga en el país por los cargos o funciones que tuviera asignado el asegurado.

Como se expresó, las constancias procesales demuestran que en el caso de la asegurada Sara Cosme Carvajal, se configuraron el primero y segundo supuesto contemplado por el artículo 2 del reglamento precitado, ya que la asegurada fue nombrada en un cargo mejor remunerado y adquirió mayores responsabilidades justificadas por el crecimiento de la empresa. Además, el salario que recibió como producto del incremento en el trabajo desempeñado, está más acorde que el que devengaba, y con el salario que se paga en el país para esa clase de trabajo o empleo. Y, por último, los ingresos de la empresa le permiten pagar el aumento.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala debe declarar que los actos administrativos impugnados violaron directamente los artículos 1 y 2 del reglamento de incrementos excesivos. El primero por comisión al aplicarlo a pesar de que no hubo en el caso en estudio incremento excesivo y el segundo por omisión, porque no se tomó en consideración al resolver que se probó la existencia de los hechos que justifican el incremento del salario.

El artículo 54 del Decreto Ley 14 de 1954, transcrito por la parte actora en el libelo de la demanda, no es aplicable al presente caso, porque la modificación que le hizo la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, no estaba vigente cuando la señora Sara Cosme Carvajal solicitó la pensión por vejez anticipada el 25 de septiembre de 1991.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON ILEGALES Y POR TANTO NULAS, las Resoluciones N° 358-93 de 5 de enero de 1993 y N° 3845 de 17 de marzo de 1995, dictadas por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, mediante las cuales se consideró que hubo incremento excesivo en los salarios de la asegurada Sara Cosme Carvajal, los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989, por la suma de B/.103,705.92, y ORDENA que se le conceda a SARA COSME CARVAJAL, con cédula de identidad personal N° 9-80-1023, asegurada N° 9-33609, pensión de vejez anticipada sin fondo complementario, sin considerar como incrementos excesivos los salarios con base en los cuales cotizó durante los años de 1984 a 1989.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTY Y ASOCIADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE Y H. L. M., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 157 DEL 19 DE AGOSTO DE 1996, DICTADA POR LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO (PAN/95001) MIPPE-SALUD-PNUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

La firma forense Pitty y Asociados, actuando en nombre y representación del consorcio **CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE Y H. L. M., S. A.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 157, del 19 de agosto de 1996**, expedida por la señora Ministra de Salud y el Director del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público (PAN/95/001) MIPPE-SALUD-PNUD y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo (f. 90), la apoderada judicial de la actora pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos del "**Resuelto N° 71 de 30 de septiembre de 1996**", expedido por la Dirección General de Proveduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través del cual se inhabilitó a los miembros del referido consorcio para celebrar contratos con el Estado por un período de tres meses.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender provisionalmente los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Sin embargo, en el presente caso, esta medida cautelar no procede, pues, tal como se desprende de la simple lectura del petitum de la demanda, la apoderada judicial del actor pidió la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo distinto del que ha impugnado en la demanda (Cfr. 75-76).

Como es evidente, cuando el citado artículo 73 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos "de un acto, resolución o disposición", alude exclusivamente a aquellos que previamente se hayan acusado de ilegales en la demanda.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la suspensión provisional de los efectos del Resuelto N° 71 del 30 de septiembre de 1996, expedido por la Dirección General de Proveduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Troyano, Visuetti y Villalaz**, en nombre y representación de **ISAAC DANIEL SERRANO**, ha interpuesto demanda contenciosos administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor de la República, el cual ha ordenado al Director General del Registro Público que se **abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue**, entre otras, la Finca

N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano.

CONSIDERACIONES DE LA PARTE ACTORA

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado resulta violatorio de los artículos 1, 2, 11, 29, 55 literales f) y g), y 82, todos de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República; los artículos 3, 23, 25, 26 y 59 del Código Fiscal; y artículos 1 y 12 de la Ley 93 de 1976.

El demandante fundamenta su apreciación en el hecho de que con fecha de 14 de diciembre de 1993, el Comité Ejecutivode la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, emitió una Resolución mediante la cual autorizó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que en su condición de Presidente de dicho Comité, solicitara la excepción de licitación pública y se autorizara la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en la Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, inscritas en el Registro Público, Provincia de Panamá, antiguos arrendatarios y expropietarios. Que dicha Resolución, establecía un precio de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00) por hectárea y se otorgó un plazo de 90 días calendario para la formalización del contrato de compra venta y para el pago del precio de venta, contados a partir de la publicación de la Resolución del Consejo de Gabinete.

Continúa exponiendo la parte actora, que al adoptar el Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano la decisión de venta, estuvo presente, con derecho a voz, la Contraloría General de la República, representada por el licenciado Tomás Ugarte, quien participó avalando todas y cada una de las decisiones, sin que se evidenciara dentro de la función fiscalizadora que tenía alguna objeción a las mismas. Que el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución N° 768 del 22 de diciembre de 1993, resolvió exceptuar del requisito de Licitación Pública al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y autorizar la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en las Fincas N° 48088, 639 y 490, y en dicha sesión participó el Ex-Contralor General de la República, licenciado José Chen Barría, quien nada objetó.

La Resolución N° 768, estableció como precio de venta la suma **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00) por hectárea, en donde el plazo y condición estaban plasmadas en la Resolución del Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano. Que esta Resolución fue adicionada por la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, en donde se exceptuaba al Ministerio de Desarrollo Agropecuario del trámite de Licitación Pública y lo autorizó para que vendiera directamente a los arrendatarios que desde 1992, mantiene contrato con la Corporación, y ese es el supuesto en que quedó incluido el señor **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**.

Sigue indicando el recurrente, que en virtud de la celebración del contrato de compraventa, de los globos de terreno de propiedad de la Corporación Bayano, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Escritura pública N° 2284 del 25 de abril de 1994 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, ingresa al Registro Público para cumplir con la exigencia legal de transferir el dominio sobre los bienes inmuebles aprobados. Que la Escritura Pública N° 7893 de fecha de 26 de agosto de 1994, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, donde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, segrega siete (7) globos de terrenos de las Fincas N° 48088, N° 639, y N° 490 y lo vende al entonces Ministro de Desarrollo Agropecuario, doctor César Pereira Burgos. Que en atención a las autoridades del Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano, del Consejo de Gabinete y autorización expresa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Banco Continental de Panamá, S. A., por instrucciones del señor **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**, emite carta irrevocable de pago por la suma de B/.247,750.00 para el pago de estas fincas al Tesoro Nacional y contenidas en la Escritura Pública N° 7893 de la Notaría Cuarta, fechada 26 de agosto de 1994. Que aprobada y notificada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a la Contraloría general de la República dicha carta irrevocable de pago, de parte del Banco Continental

de Panamá, S. A., se emite la Resolución N° 33-94 de 18 de 18 de mayo de 1994, ordenándose al Director del Registro Público que se abstenga de inscribir dichas fincas.

Además manifiesta el afectado que la medida adoptada por el Contralor de la República, rebasa el marco de la legalidad, toda vez que resulta contrario a la ley y la naturaleza de las medidas cautelares que sean adoptadas para llevar adelante una investigación con la finalidad de determinar la corrección o incorrección de actos y manejos de bienes públicos, cuando ese tipo de medidas, como accesorios sirven para asegurar los resultados de un proceso principal.

Una vez admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador, le solicitó al Contralor General de la República rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada por **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA.**

INFORME DE CONDUCTA DEL CONTRALOR

Mediante Nota N° 151-DC-1-F-28 de 22 de agosto de 1995, el Contralor General de la República señaló que La Contraloría General de la República dictó la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, mediante la cual ordenó al Director General del Registro Público de Panamá se abstuviera de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase, o segregue las fincas pertenecientes a la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, descritas detalladamente en dicha Resolución. Igualmente se ordenó a la Dirección general de Ingeniería de la Contraloría que efectuara sobre las fincas aludidas diligencia pericial, para que se determinara las medidas, los linderos, la superficie, la ubicación y el valor o avalúo por hectárea de cada uno de los terrenos, además de que se le dio instrucciones a esta Dirección para que elaborara un informe de auditoría que reflejara todo lo relacionado a la enajenación de los terrenos y las fincas de la Corporación Bayano para precisar si se han cometido actos que lesionen el patrimonio público.

Que la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, se dictó toda vez que el Consejo de Gabinete emitió las Resoluciones de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993, N° 96 de 9 de febrero de 1994 y N° 137 de 9 de marzo de 1994, mediante las cuales se dispuso enajenar parte de los terrenos que ocupan y administra la Corporación para el Desarrrollo Integral del Bayano. Que el Consejo de Gabinete igualmente autorizó la venta directa de algunas fincas a antiguos arrendatarios, entre ellos al señor **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**, y se fijó un precio de venta de la hectárea en la suma de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00). Que este precio es objetado por parte de esa institución, y fue lo que motivó la expedición de la Resolución recurrida.

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por **SERRANO ESPINOSA**, para que defendiera el acto.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración por medio de la Vista N° 391 de 21 de septiembre de 1995, se opuso a la pretensión de la parte demandante bajo el argumento de que las supuestas violaciones de los artículos 11, 55, 82, 1, 2 y 29 de la ley Orgánica de la Contraloría general de la República, no se dan bajo ningún concepto, ya que la intervención de esta institución de fiscalización se dio dentro de las normas legales y constitucionales, y que con el dictado de la Resolución N° 33-94, que es el acto acusado, se está dando cumplimiento a las estipulaciones legales; que caso contrario sería el hecho de que la Contraloría se hubiera abstenido de actuar como lo hizo. Que en lo que respecta a las normas que aluden a los bienes nacionales, las tierras vendidas por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano no pueden ser consideradas como tales.

Por último en lo concerniente a los artículos 1, y 12 de la ley 93 de 22 de diciembre de 1976, si bien es cierto la corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, si bien es cierto es una entidad autónoma, no escapa a la fiscalización de la Contraloría General de la República, ni de la política del

Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. que esta intervención de la Contraloría, no puede adoptarse o ejercerse de una manera pasiva, como pareciera pretender el demandante con su argumento.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala entran a resolver la presente controversia.

MOTIVACIONES DE LA SALA

Mediante Resolución de Gabinete N° 768 de 29 de diciembre de 1993, modificada por la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, el Consejo de Gabinete autorizó el traspaso a favor de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a título de donación, de cierta-cantidad de hectáreas de una finca propiedad de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO.**

En la parte motiva de la Resolución del Consejo de Gabinete N° 768, se expresaba que la Corporación era propietaria de bienes inmuebles de gran potencial agropecuario. Algu-nas de ellas permanecían incultas, otras habían sido deterioradas y apropiadas de hecho por invasiones de precaristas, y otras habían sido dadas en arrendamiento a productores agropecuarios que habían realizado mejoras a tales tierras y que manifestaban su interés de adquirirlas en propiedad para ampliar su explotación.

En vista de que los fines inmediatos de la Corporación no habían sido logrados a cabalidad o no habían podido implementarse eficazmente, y que la situación económica de la misma eran precarias, su Comité Ejecutivo decidió solicitar al Consejo de Gabinete que se autorizase el traspaso de ciertas fincas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad principal de:

1. Se otorgase en propiedad ciertas hectáreas a comunidades o asentamientos humanos que eran moradores de las mismas;

2. Se procediese a la venta directa de otras fincas a los siguientes grupos de personas: a) quienes venían arrendándolas a la Corporación y que manifestaban su interés de adquirirlas para explotación agropecuaria; b) a quienes habían sido previamente expropiados tales inmuebles;

El resto de las tierras serían vendidas mediante el trámite de Licitación Pública.

Así quedó establecido en la Resolución de Consejo de Gabinete N° 768 adicionado por la Resolución de Gabinete N° 96 de 9 fe febrero de 1994, en los cuales se plasma un listado de arrendatarios a quienes se les beneficiaría con una primera opción de compra de los globos de terreno que venían arrendando hasta 1992. En este orden de ideas algunas de las fincas que se encontraban en esta situación son: Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95.

Esta Sala desea aclarar, que la parte demandante al indicar qué normas habían sido conculcadas, no lo hizo ordenadamente, por lo que este Tribunal las ha agrupado y ha cambiado el orden de como fueron enunciadas para un mejor análisis.

Los primeros cargos de ilegalidad presentados por la parte demandante, descansan en los artículos 1, 2, 11, 29, 55, y 82, todos de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República.

En relación a la supuesta violación del artículo 1° de la Ley 32 de 1984, texto legal que establece que la Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos, el demandante aduce que resulta infringido, toda vez que el Contralor General de la República, lo invoca como fundamento legal para la expedición de la Resolución N° 33-94,

entre otras normas contenidas en la Ley 32.

Esta Superioridad es del concepto, que la norma aludida es descriptiva de la naturaleza y marco de funciones generales de la entidad Fiscalizadora de las finanzas del Estado, y por tal razón fue aducido entre el articulado que sustenta el acto expedido.

Para poder determinar si la resolución proferida resulta o no violatoria del principio de legalidad, debemos examinar en su conjunto, y de manera armónica, los restantes cargos de ilegalidad aducidos, que guardan relación con la Ley 32 de 1984, ya que el precepto legal cuya transgresión se impetra,por sí solo no contiene derechos susceptibles de ser violados a ningún particular, pero representa el marco legal de las actuaciones de la Contraloría General.

El segundo cargo de violación aducido, guarda relación con el artículo 2° de la referida Ley 32, norma legal que establece que las acciones de la Contraloría se ejercen sobre todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado, de los Municipios; Juntas Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y semi-autónomas, en el país o en el extranjero, y también sobre aquellas personas u organismos en las que tenga participación económica el Estado o las entidades públicas.

El recurrente sustenta la violación, indicando que la medida adoptada a través del acto acusado se está ejerciendo sobre personas de derecho privado que estaban en espera que se inscribiera la Escritura Pública, porque pagado el precio, sólo existía la obligación de parte de la vendedora, Corporación Para el Desarrollo Integral del Bayano, de transferir el dominio que se produce conforme a la Ley, por medio de la inscripción del contrato de compraventa en el Registro Público. Que la norma conculcada señala sobre qué personas y organismos se ejercita la acción de la Contraloría General de la República, los cuales son aquellos que tengan a su cargo la custodia o manejo de fondos o bienes del Estado, situación esta que no tiene el señor **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA.**

Este Tribunal advierte que el artículo 29 de la misma excerta legal también ha dispuesto que cuando la Contraloría descubra irregularidades en el manejo de los bienes y fondos públicos, está facultada para adoptar cualquier medida precautoria sobre bienes o fondos del Estado, a fin de proteger los intereses públicos.

A juicio de esta Corporación Judicial, este es el punto medular en que se sustenta la actuación de la Contraloría General de la República al cautelar las Fincas N° 48088, N° 639, y N° 490 cuando se encontraban en la etapa final de inscripción en el Registro Público, su enajenación a los demandantes.

En complemento con la norma comentada, el artículo 11 de la Ley 32 confiere en sus numerales 2 y 4 las atribuciones a la Contraloría de fiscalización, regulación y control de todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que tales actos es realicen con corrección, para lo cual adelantará las inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten a esos bienes. Estas mismas atribuciones se reiteran en los literales **f** y **g** del artículo 55 de la Ley 32 de 1984.

El demandante manifiesta, a propósito de las disposiciones arriba mencionada que las mismas han sido violentadas por las Resolución emitida por el Contralor General de la República, dado que el artículo 11 y los numerales 2 y 3, no facultan a este Funcionario a adoptar medidas cautelares que efecten a personas naturales o jurídicas, como es el caso del señor **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**, porque la facultad allí consagrada, se concreta a determinar en que momento se ejerce el control previo o posterior. Que además resulta inaceptable el acto administrativo impugnado que la medida cautelar procede en función de lo que dispone el artículo 11, numeral 4, como si la medida cautelar sirviese para asegurar los efectos de la instrucción o investigación dirigida a recabar pruebas. Que en lo relativo a los literales **f** y **g** del artículo 55 de la ley 32 de 1984, la existencia de dos actos administrativos perfectos, válidos y

vigentes, como los dictdos por el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y el Consejo de Gabinete, debe concluirse que sólo le competía al Contralor, presentar la demanda ante los tribunales y acusarlos de que no se ajustaban a lo regulado en el Código Fiscal sobre materia concerniente a la disposición de Bienes Nacionales.

La Sala procede de inmediato a analizar los cargos endilgados y a externar lo siguiente:

Este Tribunal Colegiado reconoce que la Contraloría General de la República efectivamente está dotada legal y constitucionalmente del poder fiscalizador del manejo del patrimonio estatal. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución Nacional, el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se extiende a todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, control fiscal que tiene como finalidad la protección del patrimonio del Estado y la correcta y legal utilización de los recursos públicos.

Debemos reparar sin embargo, en el hecho de que existen dos actos administrativos cuya legalidad se presume hasta tanto no sea declarado judicialmente lo contrario, mediante los cuales el Consejo de Gabinete, en sesiones dentro de las cuales estuvo presente el Contralor General de la República, autorizó, entre otras medidas, la excepción de Licitación Pública para la enajenación de ciertas propiedades de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. Esta decisión, como quedó expuesto en párrafos precedentes, obedeció a la solicitud que la misma entidad elevara, con el fin de lograr la privatización y consecuente aprovechamiento máximo de bienes inmuebles que le pertenecían, pero que no habían podido ser explotados de manera eficaz.

En cuanto a la capacidad legal que tenía la **CORPORACIÓN** para solicitar tal autorización, debemos recordar que nos encontramos frente a una institución del Estado, que tiene un régimen especial que le otorga **autonomía administrativa**, y **patrimonio propio** (art. 1 de la Ley 93); facultada para ejercer derechos y contraer obligaciones; comprar, **vender**, permutar etc. los bienes inmuebles que pertenecen a su patrimonio (art. 10 de la Ley 93) y que en gran medida fueron adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y cedidos con posterioridad a la **CORPORACIÓN**. (Art. 15 de la Ley 93).

El papel fiscalizador de la Contraloría General de la República en la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO**, se encuentra previsto en el Artículo 1° de la Ley 93 de 1976, estableciéndose que la Contraloría ejercerá las funciones de fiscalización y control que la Constitución y las Leyes establecen.

Esta Superioridad, ya ha señalado que el control fiscal que ejerce la Contraloría General debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, a las particularidades que reviste esta institución, y este control se debe ejercer de manera razonable y compatible con el interés público.

La petición de la **CORPORACIÓN** fue acogida, respaldada, autorizada e implementada a través de las Resoluciones del Consejo de Gabinete que sentaron los parámetros para proceder a la venta directa de estos inmuebles, siempre motivadas en el sentido de que el interés colectivo y del Estado mismo en este asunto radicaba en la posibilidad de que la explotación agrícola y agropecuaria de ciertas tierras de propiedad de la **CORPORACIÓN** pudiese ser efectuada por los particulares directamente, habida cuenta de la incapacidad de la propietaria de cumplir con los objetivos para los cuales les fueron otorgados estos inmuebles.

En este orden de ideas, la Corte considera que si bien la Contraloría está facultada para la adopción de medidas precautorias cuando estime que ha existido incorrección en el manejo de los fondos públicos, debemos tener claro que en este caso las operaciones de enajenación tienen su fundamento legal en autorizaciones expresas, expedidas por la autoridad competente mediante actos concretos y legítimos, y cuya legalidad no fue cuestionada por el Contralor General, como lo permite el artículo 276 numeral 7 de la Constitución Nacional.

Según se desprende tanto de las Resoluciones del Consejo de Gabinete antes mencionadas, como de los documentos probatorios aportados, **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA** cumplía con las exigencias contenidas en el texto de las Resoluciones de Gabinete, que además autorizaban la venta directa a aquellos que aún no teniendo un contrato de arrendamiento en existencia formalizado, ocupaban ciertas tierras de la **CORPORACIÓN,** ya sea como habitat o con fines de explotación agropecuaria comprobada, y de lo cual tenía conocimiento la propietaria de los inmuebles.

Los otros dos puntos en que descansa la medida de cautelación adoptada por la Contraloría en el caso sub-júdice, tienen relación, por un lado, con la fijación de **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00), como precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación, precio establecido en la resolución del Consejo de Gabinete, y en la omisión de realizar un avalúo de las tierras, conforme establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal.

En Sentencia de 6 de julio de 1995, en el caso **ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA, S. A. Y HERNÁN DELGADO,** proceso similar al que se encuentra bajo estudio, se señaló **que la privatización de las propiedades de la Corporación no parece haber surgido de manera improvisada o sin que se adelantaran las investigaciones pertinentes. Que así lo revelaron los estudios, a partir de los cuales se desprende que la privatización de tierras de Alto y Bajo Bayano se realizarían conforme a los lineamientos de la Ley 16 de 1992 que regula la privatización de empresas, bienes y servicios estatales, y obedecía a la incapacidad de la entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el área por razón de la invasión de precaristas, el asentamiento de indígenas y colonos que de hecho ocupaban grandes extensiones de tierras, sumado al abandono de terrenos cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar.**

Por último se señaló en dicha Resolución Judicial **que en ese estudio pormenorizado se contemplaron las mejores opciones que garantizarían el éxito en la privatización de las tierras que aún no habían sido ocupadas, así como la legalización de los asentamientos humanos y la donación al INRENARE de las tierras necesarias para la conservación de Cuenca Hidrográfica y Bosques Forestales, y en este estudio se le dio participación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que en avaluaran íntegramente las propiedades de la Corporación que podían ser enajenadas.**

Lo anterior deja aclarado el por qué se le asignó el precio a las tierras por **trescientos setenta y cinco balboas** (B/.375.00), además de que la Contraloría General de la República estuvo anuente desde el momento que no se opuso a dicho valor, por lo que no prosperan los cargos endilgados.

El artículo 12 de la Ley 93 de 1976, es igualmente señalado como violado, y esta norma dispone que la Corporación está facultada para disponer de su patrimonio: entre otras, para ejercer derechos, contraer obligaciones, así como comprar y vender bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la política que establezca la Junta Directiva. Esta disposición debe ser analizada en asocio con el artículo 7 literal **d** de la citada excerta legal, que es clara al señalar que corresponde al Comité Ejecutivo de la Corporación **autorizar los gastos y contratos que excedan de cincuenta mil balboas.**

El Ministerio de Hacienda y Tesoro había realizado un avalúo del conjunto de bienes muebles e inmuebles de la Corporación y éste superaba los ciento cincuenta mil balboas. Por esta razón, y en atención a que las funciones de la Corporación habían cesado, se requería la fijación del precio de venta oficial y la autorización de venta, a través de Resolución del Consejo de Gabinete.

Retomamos en este punto los conceptos vertidos por la Sala con anterioridad, en el sentido de que la Contraloría puede y debe ejercer su poder fiscalizador, pero dentro de la normativa legal que regule la materia.

Conforme establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal, la venta de bienes nacionales requiere un avalúo de la Contraloría General y del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Sin embargo, la Sala ya ha advertido que tales disposiciones legales dicen relación con la manera de disponer de los **bienes nacionales**, definidos en el artículo 3 del Código Fiscal como se transcribe a continuación: "... además de los que pertenecen al Estado y de los de uso público, según los enumera la Constitución en sus artículos 208 y 209, todos los existentes en el territorio de la República **que no pertenezcan** a los Municipios, a las entidades autónomas y semi-autónomas, ni sean individual o colectivamente de propiedad particular, y los bienes cuya enajenación se dispuso, pertenecían a una entidad autónoma.

Un punto importante a destacar por parte de esta Corporación Judicial, es que en el proceso que nos ocupa no debía entrar en discusión la legalidad de las ventas, sino de la cautelación de los bienes enajenados por la Corporación a **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA.**

Ello se desprende del hecho irrefutable de que el señor Contralor no ha impugnado a través de los recursos pertinentes las disposiciones y autorizaciones concedidas en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y N° 96, sino sus efectos en el caso particular de inscripción de la enajenación de las fincas 1720 y 1455, como medida precautoria, invocando entre otros fundamentos legales, el contenido del artículo 29 de la Ley 32 de 1984.

Esta norma, que efectivamente faculta a la Contraloría General de la República para adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos, lo limita a los casos en que se trate de funcionarios o personas que hayan incurrido en las irregularidades señaladas en esa norma. Reproducimos el texto legal en comento para mayor ilustración:

> "Artículo 29. Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el manejo de los bienes y fondos públicos que, a su juicio, ameriten la suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien corresponda y así deberá ordenarse por el período que resulte necesario. En este caso la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente su petición.
>
> Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago de salario, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública debe hacer a favor del agente o empleado de manejo o de otro funcionario o persona que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios, a fin de proteger los intereses públicos.
>
> Cuando sea del caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor."

La Sala Tercera, en resolución de 30 de noviembre de 1994, al analizar la aplicación del artículo 29 de la Ley 32 de 1984, señaló lo siguiente:

> "Del transcrito artículo 29 de la Ley 32 de 1984, se infiere la facultad conferida por dicha Ley a la Contraloría General de la República para adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos de personas o funcionarios que incurran en las irregularidades señaladas en el mismo. El artículo 5 del Decreto de gabinete N° 36 de 1990, establece que los funcionarios que tengan su cargo la investigación de alguno de los casos mencionados en el artículo 3 de la misma norma, deben preparar un informe de antecedentes el cual será presentado ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con las evidencias del caso, indica que al elaborarse el informe debe participar un abogado al servicio de la Contraloría General de la República y que la información que debe contener dicho informe,

> consiste en la identificación del responsable o responsables, el cargo desempeñado, la cuantía estimada o estimable del perjuicio económico y referencia a los hechos que pudieron originar la responsabilidad patrimonial o cualquier otro elemento que contribuya al esclarecimiento de la irregularidades advertidas."

Consideramos pertinente reproducir parcialmente el contenido de la resolución transcrita, en vías de señalar que al momento en que la Contraloría adoptó la medida de cautelación, no existían investigaciones que precisaran ninguno de los puntos específicos a los que se hace alusión en el párrafo que antecede, que a su vez reproduce el contenido de las normas del Decreto de Gabinete 36 de 1990 que resultan aplicables en asocio con la Ley 32 de 1984.

En efecto, al momento de expedirse la Resolución N° 33-94 que cautelaba las fincas enajenadas, la Sala observa que se presentaban las siguientes circunstancias:

1. El precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación, objetado en la Resolución del Contralor, no podía haber sido efectivamente determinado previamente por esa institución revelando incongruencia con el precio de venta fijado por las Resoluciones de Gabinete, puesto que era precisamente en esa resolución donde se giraban órdenes a la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría para que procediera a efectuar diligencias periciales que determinaran medidas, linderos, superficies, ubicación y **valor o avalúo** por hectárea de cada uno de los bienes cautelados.

2. Si la Dirección de Ingeniería había realizado ciertos avalúos a los bienes de la Corporación, éstos se hicieron de manera general a todos los bienes muebles e inmuebles que componían su patrimonio, pero que obviamente no tomaban en cuenta que cualquier incremento en la valorización de ciertos inmuebles había sido a consecuencia de las mejoras e inversiones introducidas por los arrendatarios y custodios de esos bienes.

3. No existía un informe de Auditoría que precisara de qué manera se había podido producir lesión al patrimonio público con la enajenación, y ello se desprende lógicamente del punto tercero de dicha resolución, en que se ordenaba a la Dirección General de Auditoría de la Contraloría que iniciara la elaboración de un informe al respecto.

4. Si el argumento principal de oposición a la enajenación en este caso es el precio de venta y la falta de avalúo previo, resulta contradictorio que entre los considerandos de la resolución emitida que ordenó la cautelación, se esgriman argumentos relativos a que algunos de los beneficiados por la enajenación no eran arrendatarios, circunstancia ésta que tendría poca o ninguna incidencia en el hecho que sustenta la oposición de la Contraloría a la inscripción de las fincas, y esto es, la supuesta omisión de cumplir con los requisitos de los artículos 23 y 25 del Código Fiscal antes de fijar el precio de venta.

La situación alegada afectaría en todo caso, el hecho concreto de venta a una persona específica, contrariando o desconociendo los parámetros fijados en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y N° 96, pero resultaría también contradictorio aducir que se ha transgredido lo establecido en estos actos administrativos, por ser precisamente estas resoluciones cuyo contenido es objetado, aunque indirectamente, a través de los actos de ejecución.

La Sala Tercera ha entrado al análisis de todas estas circunstancias porque reconoce las delicadas funciones de fiscalización que la Contraloría General de la República debe realizar en cada transacción que pueda afectar el patrimonio del Estado. Sin embargo, en este caso, el Tribunal considera que los cargos de violación endilgados al acto acusado, relativos a las facultades que conferidas a la Contraloría en la Ley 32 de 1984, que establece también los procedimientos a seguir en los casos en que se acredite la afectación de patrimonios públicos, deben ser aceptados, y que la medida de cautelación afecta la inscripción de fincas que fueron enajenadas cumpliendo con lo previsto en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y 96, actos cuya legalidad no ha sido controvertida.

En estas circunstancias, la Sala no está obligada al examen de los restantes cargos de violación endilgados. Sin embargo, considera procedente indicar a las partes que los cargos relativos a los artículos 3, 23, 25, 26 y 59 del Código Fiscal, en su mayoría ya fueron examinados al momento de determinar que conforme al artículo 3 de la citada excerta legal, los bienes pertenecientes a las entidades autónomas, entre otros, no entran en la clasificación de bienes nacionales. resulta pertinente comentar el contenido del artículo 6° del mismo Código Fiscal, que ha dispuesto que los bienes de los Municipios (que tampoco son descritos en el artículo 3° como bienes nacionales), en cuanto a su administración y la manera de disponer de ellos deben sujetarse a lo dispuesto en el Código en relación a la Hacienda Nacional, mientras que tales disposiciones no riñan con lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, lo que hace privar las disposiciones especiales de la ley que regenta el funcionamiento del Municipio, sobre las del Código Fiscal.

En relación a la supuesta violación a los artículos 1 y 12 de la Ley 93 de 1976 que crea y regula a la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, estas normas también han tenido oportunidad de ser analizadas en el curso del examen de los cargos anteriores, reconociéndose la autonomía de la entidad del Estado.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal conceptúa que la labor de la Contraloría General de la República en los casos en que considera que pueden afectarse los fondos del Estado debe seguir siendo adelantada en la manera correcta y eficiente en que se ha venido produciendo, pero que cualquier medida que se adopte se realice con fundamento en hechos y circunstancias probadas, para que no se afecte el funcionamiento de otras instituciones, o a quienes de buena fe contratan con el Estado, como en el caso que nos ocupa, en que la cautelación ordenada ha perjudicado a quien adquirió, conforme con lo previsto en autorizaciones del Consejo de Gabinete **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA.**

Finalmente debemos acotar, que la Resolución N° 33-94 contempla la cautelación de otras fincas de la Corporación, enajenadas con base en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y 96. Cada caso de enajenación debe ser analizado de manera individual y exhaustiva, tal como ha verificado este Corporación Judicial en el negocio sub-júdice, por lo que el Tribunal sólo puede limitarse a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto acusado, en lo relativo a la pretensión de los demandantes.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República, que ordenó la abstención de inscripción en el Registro Público de la Escritura Pública 2284 de 25 de abril de 1994 de la Notaría Segunda del Circuito y la Escritura Pública 7,893 de 26 de agosto de 1995 de la Notaría Cuarta de Circuito, suscritas por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO por una parte, y por otra ISAAC DANIEL SERRANO, en relación a un (1) globo de terreno de la Fincas N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; seis (6) globos de terreno de la Finca N° 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y tres (3) globos de terreno de la Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, además de siete (7) globos de terreno de las Fincas N° 48088, N° 639, y N° 490 y ORDENA la inscripción definitiva de las fincas en las porciones antes descritas a favor de ISAAC DANIEL SERRANO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO JOSÉ A. TEJADA M., EN REPRESENTACIÓN DE ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7397-95 DNP, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José A. Tejada M. ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en nombre y representación de **ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 7397-95 DNP fechada el 26 de septiembre de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Al revisar la demanda, para establecer si cumple con los requisitos de ley para su presentación, se observa a fojas 26 y siguientes del libelo de la demanda, que no se ha señalado el concepto de la infracción de los preceptos que se cita como violados por el acto originario impugnado, como lo preceptúa el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, los cuales son: la infracción literal, la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder.

También debió señalarse la forma en que se produjo la infracción de los preceptos legales, ya sea por violación directa, omisión, interpretación errónea o indebida aplicación.

La Sala ha reiterado en innumerables ocasiones que la demanda debe contener además de la expresión de las disposiciones que se estiman violadas, el concepto en que fueron infringidas mediante una explicación detallada, de modo que la Sala pueda conocer y examinar el fondo de las infracciones que se alegan (Cfr. Sentencia de 30 de enero de 1996, Registro Judicial, página 313).

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, no debe dársele curso a la demanda porque no cumple con los requisitos de Ley.

De consiguiente, la Suscrita Magistrada Sustanciadora administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado José A. Tejada M., en representación de ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ , para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 7397-95 DNP, de 26 de septiembre de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 201-850 DE 16 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Salvador Muñoz, actuando en nombre y representación del doctor CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo el acto administrativo contenido en la Nota N° 201-850 de 16 de agosto de 1996, expedido por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no cumple con los requisitos legales para ser admitida, ya que los actos administrativos impugnados no causan estado, es decir, que no son definitivos ni ponen término a un negocio o actuación administrativa o hacen imposible su continuación, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946 para ocurrir contra los mismos en demanda contencioso-administrativa ante la Sala Tercera.

Lo anterior es así, porque al contestar, a través de los actos impugnados, la petición de nulidad de las Declaraciones Rectificativas de Rentas de los años 1991, 1992 y 1993, presentadas por el doctor ANGUIZOLA, el Director General de Ingresos se limita a indicarle que tales declaraciones fiscales pueden ser revisadas por esa Dirección, mediante la presentación, ante el Administrador Regional de Ingresos de nuevas declaraciones rectificativas de rentas "con todas las consecuencias legales que de ellas se deriven, dentro de los tres años siguientes a su presentación". Es contra los actos emanados de la autoridad administrativa como consecuencia de las declaraciones juradas de renta hechas por el contribuyente que procede la vía gubernativa y la vía contencioso administrativa y no contra las declaraciones hechas por el contribuyente (Cfr. artículos 710, 718, 719, 720 y 721 del Código Fiscal).

Como los actos impugnados no son de aquéllos definitivos a los que se refiere la parte final del citado artículo 25 de la citada Ley 33 de 1946, no puede dársele curso a la presente demanda, por disponerlo así el artículo 31 ibidem.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Salvador Muñoz, en representación del doctor CARLOS RAÚL ANGUIZOLA VIAL, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 201-850 de 16 de agosto de 1996 expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Nota confirmatoria y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN C. DOWNER PARCHMENT, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 1777-95 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Basilio Chong Gómez actuando en nombre y representación de JUAN C. DOWNER PARCHMENT, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1777-95 de 21 de septiembre de 1995, expedida por la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, el acto confirmatorio, la negativa tácita por silencio administrativo de la Comisión de Apelaciones del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la demanda se observa que el demandante solicita que, antes de admitirla, el Magistrado Sustanciador solicite a la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, copia autenticada de los actos impugnados y certificación acerca de si ha sido o no resuelto el recurso de apelación promovido contra estos actos.

El ordinal 1° del artículo 36 de la Ley 135 de 1946 preceptúa que interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 de la Ley 135 de 1946 (Reconsideración y/o Apelación), se entienden negados por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se ha negado la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación, siempre que se exprese este hecho en la demanda con indicación de la oficina donde está el original.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, la Sala dispone solicitar al Presidente de la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, copia auténtica de la Resolución N° 1777-95 de 21 de septiembre de 1995 y de la resolución s/n que la confirma, con la constancia de su notificación y, al Presidente de la Comisión de Apelaciones del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, certificación en la cual conste si ha sido o no resuelto el recurso de apelación promovido el 5 de junio de 1996 contra la Resolución N° 1777-95 de 21 de septiembre de 1995, a fin de comprobar el silencio administrativo y el agotamiento de la vía gubernativa.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1777-95 de 21 de septiembre de 1995, emitida por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, DISPONE SOLICITAR por Secretaría al Presidente de la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala: 1. Copia autenticada de la Resolución 1777-95 de 21 de septiembre de 1995, que resolvió no acceder a la solicitud de jubilación por antigüedad de servicios del señor JUAN C. DOWNER PARCHMENT con la constancia de su notificación; 2. Copia autenticada de la resolución que confirmó la Resolución 1775-95 de 21 de septiembre de 1995, con la constancia de su notificación; y SOLICITAR al Presidente de la Comisión de Apelaciones del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos que certifique si ha sido resuelto o no el recurso de apelación promovido contra la Resolución N° 1777-95 de 21 de septiembre de 1995 y su acto confirmatorio, y envíe a la Sala dicha certificación y, si ha sido resuelto extienda y envíe copia de la resolución dictada.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VIVES, SAAVEDRA & BERROCAL, EN REPRESENTACIÓN DE AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE 7 DE JUNIO DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Vives, Saavedra & Berrocal, actuando en nombre y representación de **AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, al no contestar la solicitud de 7 de junio de 1996, y para que se haga otras declaraciones.

A foja 40 del expediente la demandante solicita al Magistrado Sustanciador que, previa a la admisión de la demanda, solicite al BANCO NACIONAL DE PANAMA certificación acerca de si ha sido contestada o no la solicitud formulada el 7 de junio de 1996 y reiterada el 4 de octubre de 1996, ambas con constancia de recibido. Mediante dicha solicitud el recurrente pide al Gerente General del Banco Nacional de Panamá la entrega de una hectárea con cinco mil metros cuadrados a dos hectáreas, saneadas y libres de todo intruso o moradores existentes, que forman parte de la Finca 38,930, inscrita al Tomo 950 de la Reforma Agraria, Folio 200 de la Sección de la Propiedad del Registro Público de Panamá, comprada por AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A. en venta judicial realizada el 5 de junio de 1995 al Banco Nacional de Panamá, y que está siendo ocupada por un individuo de nombre **VICENTE**; o en su defecto, el pago en dinero de B/.825.00 a B/.1,100.00, más los intereses correspondientes, que representa la parte proporcional del dinero pagado por AGRO-FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A. al Banco Nacional de Panamá por la venta judicial de la precitada Finca.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y ante la falta de respuesta del funcionario demandado, se dispone solicitar al Gerente General del Banco Nacional de Panamá, la certificación solicitada por el recurrente.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Vives, Saavedra & Berrocal en representación de AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A., DISPONE solicitar por Secretaría al Gerente General del Banco Nacional de Panamá, que expida y envíe a la Sala certificación en la cual conste si ha sido contestada o no la solicitud hecha el 7 de junio de 1996 por AGRO-FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A., en la que pide al Gerente General del Banco Nacional de Panamá la entrega de una hectárea con cinco mil metros cuadrados a dos hectáreas, saneadas y libres de todo intruso o moradores existentes, que forman parte de la Finca 38,930, inscrita al Tomo 950 de la Reforma Agraria, Folio 200 de la Sección de la Propiedad del Registro Público de Panamá, comprada por AGRO FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A. en venta judicial

realizada el 5 de junio de 1995 al Banco Nacional de Panamá, y que está siendo ocupada por un individuo de nombre **VICENTE**; o en su defecto, el pago en dinero de B/.825.00 a B/.1,100.00, más los intereses correspondientes, que representa la parte proporcional del dinero pagado por AGRO-FORESTAL GANADERA (AGROFOGA), S. A. al Banco Nacional de Panamá por la venta judicial de la precitada Finca.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS DE MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13374-91 DE 29 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA RESOLUCIÓN N° 102008-95 J. D. DE 16 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante apoderado legal la señora GLADYS DE MORALES presentó demanda contencioso administrativa, de plena jurisdicción, a efecto de que se declare lo siguiente:

1. Que es nula por ilegal la resolución N° 13374-91 de 29 de agosto de 1995, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, en la cual se declaró ilegales las cuotas aportadas por los patronos GANADERA CANTA GALLOS, S. A., y AGRÍCOLA CANTA GALLOS, S. A., desde octubre de 1974 a enero de 1982, y de febrero de 1982 a enero de 1990, y no se accedió a solicitud de pensión de vejez formulada por GLADYS ENEIDA VEGA DE MORALES, porque no cumplió con el requisito de cuotas que establece el artículo 50, acápite b) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

2. Que es nula por ilegal la resolución N° 5576 de 27 agosto de 1992, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social en la cual se mantuvo en todas sus partes la Resolución N° 13347-91 de 29 de agosto de 1991.

3. Que es nula por ilegal la Resolución N° 10208-95-J. D. de 16 de febrero de 1995, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que revocó las resoluciones anteriores, y en su lugar consideró incrementos excesivos en los salarios de GLADYS ENEIDA VEGA DE MORALES, la suma de B/.760.00, con la empresa GANADERA CANTA GALLO, S. A., durante el período de julio de 1980 a enero de 1982, y la suma de B/.5,340.52, con la empresa AGRÍCOLA CANTA GALLO, S. A., del período de agosto de 1983 a enero de 1990, y le concedió una pensión de vejez por el monto mensual de B/.148.78.

La demanda se fundó en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, consideró incrementos excesivos de las cuotas aportadas por mi representada GLADYS ENEIDA VEGA DE MORALES, como incrementos excesivos en los períodos de julio de 1980 a enero de 1982, y de agosto de 1983 a enero de 1990, el primero con la empresa GANADERA CANTA GALLO, S. A., y el segundo con AGRÍCOLA CANTA GALLO, S. A.

SEGUNDO: Que las empresas antes mencionadas (GANADERA CANTA GALLO, S. A. y AGRÍCOLA CANTA GALLO, S. A.), le descontaron las cuotas obrero-patronales a la Caja de Seguro Social, tal como lo demanda la

Caja de Seguro Social, por considerar a la señora GLADYS ENEIDA VEGA DE MORALES, empleada de las mismas.

TERCERO: Que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, de acuerdo a informes de auditoría 003-91, consideró ilegales las cuotas correspondientes al período de octubre de 1974 a enero de 1982, con la empresa GANADERA CANTA GALLO, S. A., y febrero de 1982 a enero de 1990, en base a la relación laboral existente.

CUARTO: Que mi poderdante fue empleada de la empresa mencionada en los períodos antes mencionados, y en vista de ello, se le hicieron descuentos de ley (cuota obrero patronal).

QUINTO: Contra la resolución número 13347-91, se interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio, con lo cual se agotó la vía gubernativa.

SEXTO: Que la Comisión de Prestaciones en virtud de Recurso de Reconsideración dictó la resolución N° 5576 de 27 de agosto de 1992, que mantuvo en todas sus partes la resolución N° 13347-91 de 29 de agosto de 1991.

SÉPTIMO: En virtud del Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto contra la Resolución N° 13347-91 de 29 de agosto de 1991, dictada por la Comisión de Prestaciones, este conflicto llegó a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, quien a través de la Resolución N° 10.208-95-J. D. de 16 de febrero de 19993, revocó la Resolución N° 13347-91 de 29 de agosto de 1991, mantenida por la Resolución N° 5576 de 27 de agosto de 1992, y consideró incrementos excesivos en los salarios de la asegurada, la suma de SETECIENTOS SESENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.760.00), con la empresa GANADERA CANTA GALLO, S. A., por el período de julio de 1980 a enero de 1982, y la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 52/100 (B/.5,340.52), con la empresa AGRÍCOLA CANTA GALLO, S. A., por el período de agosto de 1983 a enero de 1990, y que concede una pensión por vejez a GLADYS ENEIDA VEGA DE MORALES, por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 78/100 (B/.148.78)." (Fs. 10 a 11).

La parte actora considera violados los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social: literal b) del artículo 2, artículo 35 B, literales b), c) y d) del artículo 62, artículo 66 A y el artículo 62 del Código de Trabajo.

Estas normas se refieren, en su orden, a la aplicación del régimen obligatorio de pago de cuotas obrero patronales al Seguro Social, a la obligación del patrono de deducir del sueldo de los trabajadores las cuotas de seguro social, a las definiciones de los conceptos sueldo, trabajador y patrono o empleador para los efectos de la Caja de Seguro Social, a la sanción al patrono que incumple con la obligación de deducir del sueldo de los empleados las cuotas obrero patronales y remitirlas a la Caja de Seguro Social y finalmente, el artículo 62 del Código de Trabajo define el contrato de trabajo, la relación de trabajo y los efectos que de estos se derivan.

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 490 de 17 de noviembre de 1995, señaló que las resoluciones impugnadas no violaron las normas que la demandante considera infringidas, porque se reconoció a la asegurada su condición de trabajadora, y se le aplicó el Reglamento de Incrementos Excesivos en el cálculo de la pensión de vejez que solicitó, en virtud de que ésta no probó que los aumentos salariales que recibió en exceso eran justificados.

La Resolución N° 10,208-95-J. D. de 16 de febrero de 1995, mediante la cual la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social revocó las resoluciones N° 13347 de 29 de agosto de 1991 y N° 5576 de 27 de agosto de 1992, dictadas por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, concedió a la señora Gladys

de Morales una pensión de vejez por B/.148.78 mensuales, aplicándole el Reglamento de Incrementos Excesivos.

Después de examinar el expediente administrativo la Sala considera que en el presente caso hubo incrementos excesivos del salario devengado por la señora Gladys de Morales de julio de 1980 a enero de 1982, en Ganadera Canta Gallo, S. A. y de agosto de 1983 a enero de 1990, en la empresa Agrícola Canta Gallo, S. A., porque en julio de 1980 recibió un incremento de 50%, en junio de 1981 recibió un incremento de 20%, cuando laboraba en la empresa Ganadera Canta Gallo; en julio de 1983 recibió un incremento de 27% y en enero de 1987 recibió un incremento de 40%, cuando laboraba en la empresa Agrícola Canta Gallo (Memorando 140-91 CdeP de 27 de marzo de 1991 de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, fs. 35 a 38 del expediente administrativo).

El artículo 1 del Reglamento de Incrementos Excesivos establece que se presumirá que hay aumento excesivo en las remuneraciones, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario y el salario total de un año sea mayor en más de 10% que el salario total del año anterior.

Los incrementos en el salario de la señora Gladys de Morales son superiores al 10% permitido por el Reglamento de Incrementos Excesivos, y no se acreditó en el proceso que son justificados por estar enmarcados dentro de las excepciones contempladas por el artículo 2 del precitado reglamento, que son: a) acceder a cargos de mejor remuneración, b) ejercer funciones de mayor responsabilidad, o c) desempeñar un nuevo empleo, y finalmente, d) aplicación de políticas empresariales a grupos de trabajadores.

Como en la Resolución N° 10,208-95-J. D. de la Caja de Seguro Social se concedió a la demandante Gladys de Morales la pensión de vejez que solicitó y se le aplicó el reglamento de incrementos excesivos del salario, a juicio de la Sala, dicha Resolución no viola las normas que la parte actora considera infringidas y por tanto deben desestimarse todos los cargos de violación.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 10,208-95-J. D. de 16 de febrero de 1995, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante la cual revocó la Resolución N° 13347-91 de 29 de agosto de 1991 y la Resolución N° 5576 de 27 de agosto de 1992, y le concedió a GLADYS DE MORALES, con cédula N° 4-49-383, asegurada N° 85-8875, una pensión de vejez de B/.148.78 al mes, considerando incrementos excesivos en sus salarios la suma de B/.760.00 durante el período comprendido entre julio de 1980 a enero de 1982, en la empresa Ganadera Canta Gallo, S. A. y la suma de B/.5,340.52 durante el período comprendido entre agosto de 1983 a enero de 1990, en la empresa Agrícola Canta Gallo, S. A. y NIEGA las demás declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RANDOLPH LAWSON, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CONTRA EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTA N° 95 (1001-01)22, DEL 25 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Randolph Lawson, actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción contra la Nota N° 95(1001-01)22, del 25 de julio de 1995, expedida por la Junta Directiva de del Banco Nacional de Panamá.

I. EL PETITUM DE LA DEMANDA

La actora solicita a la Sala que declare nulo el contenido de la referida nota "en lo atinente a que dicha institución bancaria se niega a reembolsar a sus empleados el saldo pendiente de la suma correspondiente al mes de salario que les fuera descontado forzosamente en el año de 1988, no se pronuncia sobre el pago a éstos de las diferencias correspondientes a la 2ª partida del décimo tercer mes de los años de 1988 y 1989, la tercera partida del año de 1989, la primera, segunda y tercera partida del año de 1990 y la primera partida del año de 1991, y se restablezca el derecho particular violado, ordenando en consecuencia al Banco Nacional de Panamá, lo siguiente:

> "a) A devolver a sus empleados, de manera proporcional el saldo pendiente de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL BALBOAS (923,000.00), correspondiente al mes de salario que les fuera descontado forzosamente en el año de 1988;
>
> b) A pagarles las diferencias correspondientes a la 2ª partida del décimo tercer mes de los años de 1988 y 1989, la tercera partida del año de 1989, la primera, segunda y tercera partida del año de 1990 y la primera partida del año de 1991, las cuales ascienden a la suma de B/.3,266,666.64;
>
> c) A pagarles un interés del 7% anual sobre las sumas aludidas, desde las fechas en que se adeudan hasta que sean canceladas totalmente." (Cfr. 35-36).

II. EL ACTO ACUSADO

La parte pertinente del acto impugnado por la demandante expresa lo siguiente:

> "MES DE SALARIO DE 1988 ANTECEDENTES EXAMINADOS
>
> Es sabido que en el año 1988 el país enfrentaba una crisis financiera y económica que llevó tanto a la empresa privada, como a las entidades estatales a establecer mecanismos para disminuir sus costos de funcionamiento. La empresa privada incluso disminuyó considerablemente su planilla.
>
> El Banco, como otros entes estatales implementó un plan de ahorros en los renglones de gastos. El del Banco incluiría la reducción del costo de la planilla, lo que originó la medida que los empleados donaran al Banco un mes de salario. Ello se efectuó a partir del 1° de julio de 1988 y se estableció al efecto el siguiente procedimiento:
>
> a- El funcionario indicaba si la donación o aporte del salario se ejecutaba en un determinado mes;
>
> b- Si distribuía el descuento en 6 meses, del 1° de julio al 31 de diciembre de 1988;
>
> c- Si solicitaba un préstamo sin intereses por el monto de su salario mensual, suma que posteriormente se les descontó.
>
> Resultado de lo anterior, fue un ahorro presupuestario por el orden de B/.1.4MM. Según Resolución de la Gerencia General de 21 de septiembre de 1988, se trataba de una donación. Sin embargo, la figura administrativa utilizada fue la de "LICENCIA ESPECIAL SIN

SUELDO", la cual se documentó con los respectivos decretos para los empleados. Como consecuencia de lo anterior, un cuantioso número de funcionarios tomaron el tiempo de ese mes de licencia sin sueldo, en tanto que algunas áreas operativas y jefaturas debieron permanecer en el ejercicio de su cargo.

La Gerencia General del Banco, en marzo de 1989, devolvió a TODOS los empleados un tercio del mes de salario donado, el cual calificó como "un gesto de buena fe y esperanza en el futuro".

Entendemos que la devolución de este tercio del mes de salario es la base de la aspiración de ASEMBANAL, que concluye que si con posterioridad a los hechos se ordenó ese pago, se les adeuda a todos los 2/3 restante, independientemente de que el funcionario hubiere o no trabajado el tiempo de la LICENCIA SIN SUELDO.

ANÁLISIS

La investigación efectuada por la administración anterior y corroborada por ésta, concluye que no ha sido posible determinar con certeza, quienes tomaron el tiempo del mes de licencia sin sueldo y quiénes laboraron. La dificultad en la comprobación se debió a que no existen las tarjetas de registro de asistencia de ese período, las cuales fueron procesadas conforme a los procedimientos establecidos para la disposición física de los archivos según la tabla de vida de documentos.

Lo anterior implica una compleja situación legal, dado que el Banco como entidad estatal sólo puede hacer lo que la Ley expresamente le autoriza, a diferencia de los particulares que pueden hacer lo que la Ley no les prohiba. Según el Art. 273 de la Constitución Nacional "no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley". Las Leyes de presupuesto de los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 no contemplan las partidas requeridas para hacerle frente a este reclamo que podría ascender a la suma de B/.923.000 aproximadamente.

Además, según el Art. 297 de la Constitución Nacional los "servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones ...", lo que aunado a la definición del concepto de salario, significa que éste en estricto sentido jurídico, es la contraprestación por el desempeño del trabajo realizado.

Luego, considerando que un gran porcentaje de los funcionarios del Banco por razón de esta "LICENCIA ESPECIAL SIN SUELDO" no desempeñaron sus funciones, y no habiendo la Administración anterior, ni la presente, encontrado hasta ahora un fundamento legal expreso para pagar este reclamo, ni existiendo hasta el momento orden de autoridad competente al efecto, pues el Recurso Contencioso Administrativo que interpuso ASEMBANAL ante la Corte Suprema de Justicia no fue admitido por no haberse agotado la vía gubernativa, lamentablemente no disponemos de una alternativa legal viable para acceder a este reclamo.

De existir una orden de tribunal competente, que decida favorablemente este asunto, es evidente que el Banco la acataría. Cabe señalar que una decisión judicial de esta naturaleza requiere de una programación financiera, ya sea mediante un crédito extraordinario o de su inclusión para el próximo presupuesto. Esta decisión jurisdiccional es necesaria para evitar en el futuro cualquier cuestionamiento legal, tanto a la administración como a los funcionarios por un pago que podría ser cuestionable legalmente.

DÉCIMO TERCER MES (SEGUNDA PARTIDA DE 1989)

Corroboramos que el Décimo Tercer Mes correspondiente a la 2da.

> partida del año 1989 se pagó sobre la base de una suma máxima de B/.400.00 tope que establece la Ley 52 de 1974. Corroboramos asimismo que desde 1971, el Banco se rige en esta materia por el Decreto de Gabinete N° 221 de 1971 que se aplica a todas las actividades privadas y a las instituciones públicas que no reciben subsidio del Gobierno Nacional, como lo es el BNP y que dicho Decreto contempla el pago de Décimo Tercer mes sobre la base del salario completo.
>
> Revisamos la respuesta que al respecto dio la anterior Administración en nota de 31 de marzo de 1994, en la cual se expresa que la Administración de 1989 determinó aplicar por instrucciones precisas del Órgano Ejecutivo la ya citada Ley 52 de 1974 que estableció el referido tope de B/.400.00.
>
> El equipo administrativo actual revisó también la legislación respectiva del Décimo Tercer Mes y la documentación existente en el Banco. Más aún, revisando le Decreto N° 17 de 16 de agosto de 1989, "por el cual se estableció el procedimiento para el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes y se acuerda la emisión de pagarés del Estado", se considera que dado que el Art. 5 de dicho decreto hace la salvedad de que no era aplicable el límite de B/.400.00, si por disposición legal expresa existía la obligación de pagar el Décimo Tercer Mes sobre una base salarial distinta, y habiendo encontrado sólo una Circular General de la Contraloría General al respecto, la cuál (sic) se presume legal, procederemos a consultar a la Procuraduría General de la Administración para aclarar la viabilidad jurídica de este reclamo." (Cfr. fs. 1-4).

II. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

En opinión del apoderado judicial de la demandante, el acto acusado violó el artículo 1° de la Ley N° 92 del 24 de noviembre de 1974, cuyo texto expresa lo siguiente:

> "Artículo Primero: Las deducciones sobre el salario del servidor público sólo podrán ser ordenadas por ley, por orden judicial por razón de secuestro o embargo, pensión de alimentos, o por orden voluntaria del afectado a favor de entidades bancarias, financieras, cooperativas, asociaciones de servidores públicos o empresariales legalmente constituidas que representen el sector comercial, industrial y de seguro."

El licenciado Lawson estima que el acto acusado violó en forma directa, por comisión, la norma transcrita porque a través del mismo la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá se negó a devolverle a sus empleados el saldo correspondiente al mes de salario que les fue descontado forzosamente en el año de 1988, a pesar de que dicha norma establece taxativamente que las deducciones al salario de los servidores públicos sólo pueden hacerse mediante ley, orden judicial o por voluntad del afectado.

El apoderado judicial de la ASEMBANAL también cita como infringido el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 211 del 18 de noviembre de 1971, cuyo texto es del contenido siguiente:

> "Artículo 4. Este Decreto de Gabinete es aplicable a todas las actividades privadas y las instituciones públicas que no reciben subsidio del Gobierno Nacional."

En el concepto de la infracción el licenciado Lawson manifestó, que esta norma se violó porque aún cuando en el acto acusado se reconoce que el Decreto de Gabinete N° 211 de 1971 es aplicable a los empleados del Banco Nacional de Panamá, no lo aplicó, excusándose de pronunciarse en torno al pago de las diferencias de las partidas del décimo tercer mes mencionadas en la presente acción, bajo la alegación de que se consultará primero con la Procuraduría de la Administración.

Finalmente, la demandante considera infringido el artículo 5° del Decreto N° 17 del 16 de agosto de 1989, precepto cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 17. Las sumas serán las que correspondan de la aplicación de la Ley 114 de 1973 sobre la base de un salario de CUATROCIENTOS BALBOAS (B/.400.00), salvo que por disposición legal expresa exista la obligación de pagar la bonificación del Décimo Tercer Mes; sobre una base salarial distinta".

A juicio de la demandante, la violación de esta norma se dio porque a pesar de que la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá corrobora la salvedad expuesta en el transcrito artículo 5°, tampoco lo aplica y se excusa de pronunciarse respecto del pago de las diferencias de las partidas del Décimo Tercer Mes, aduciendo que consultará primero a la Procuraduría de la Administración (fs. 39-40).

III. EL INFORME DE CONDUCTA

La Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá rindió su informe de conducta a través de su Nota N° 95(03000-01)85, del 27 de septiembre de 1995, reconociendo, con relación a la primera pretensión de la demandante, que en 1988 a los funcionarios de esa institución bancaria se les descontó un mes de salario, del cual se les restituyó un tercio en marzo de 1989. En la práctica, esta medida se implementó a través de una licencia sin sueldo por un mes, la cual fue tomada por muchos de los funcionarios del banco, quienes no tienen derecho a la compensación del salario por ese mes de licencia.

Si se toma como bueno el criterio anterior, habría que llegar a la conclusión de que el Banco Nacional de Panamá está obligado a pagar las sumas descontadas a quienes no tomaron el descanso de la licencia, lo cual conduce a un problema práctico, porque ni la actual administración ni la anterior han podido determinar quiénes tomaron el mes de licencia en descanso y quiénes no, toda vez no existen tarjetas de registro de asistencia del año 1988, por haber sido procesadas físicamente, según la tabla de vida de documentos del Banco. Por lo anterior, no es viable para la administración del Banco autorizar pagos de salarios que no corresponden estrictamente a la prestación de un servicio, pues, ello rompería el principio constitucional contenido en el artículo 297 de la Carta Magna.

En cuanto al pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes del año 1988, la demandada expresó que, según los registros contables del Banco, ésta se pagó sobre la base del salario completo de los funcionarios en dos etapas así: la primera, el 31 de octubre de 1988 por el 75% (B/.367,142.96) y la segunda, por el 25% restante (B/.112,290.10), cancelada con pagarés redimibles en nueve (9) meses.

La segunda partida del Décimo Tercer Mes del año 1988 fue pagada sobre una base máxima de B/.400.00, en virtud de que había entrado en vigencia el Decreto Ejecutivo N° 17 del 16 de agosto de 1989, el cual autorizó el pago de esa partida mediante pagarés. Lo que más incidió en el pago de esa partida sobre la base de B/.400.00 fue que, previo a la expedición del Decreto antes mencionado, la Contraloría General de la República emitió la Circular DISIST DEL 4 DE AGOSTO DE 1989 que centralizaba en esa entidad fiscalizadora la emisión de los referidos pagarés, debiendo cumplir la información que serviría de base para la emisión de dichos pagarés, con la revisión y refrendo por parte de los auditores de la Contraloría.

Finalmente, la demandada afirma que la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 1989, así como las correspondientes al año 1990 y las dos primeras partidas del año 1991, no fueron pagadas a los funcionarios del Banco Nacional de Panamá, porque el pago de este beneficio fue suspendido provisionalmente a los servidores públicos en general mediante el Decreto-Ley N° 3 del 9 de octubre de 1989. Cabe agregar, que este Decreto-Ley fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 23 de septiembre de 1991, indicando que el pago del aludido bonificación comenzaría a regir a partir de la tercera partida del año 1991. Por estas razones, el ente demandado estimó

que no son atendibles los reclamos hechos por la ASEMBANAL con relación al pago de las mencionadas partidas del Décimo Tercer Mes.

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Al contestar la demanda, mediante Vista N° 461 del 31 de octubre de 1995, la señora Procuradora de la Administración pidió a la Sala Tercera que rechace las pretensiones de la parte actora, toda vez que no se han dado las alegadas infracciones al ordenamiento legal (Cfr. 65-78).

V. LOS ALEGATOS

En la etapa de alegatos, la señora Procuradora de la Administración presentó un escrito alegando la existencia de cosa juzgada, toda vez que las pretensiones que la actora desea realizar por medio de este proceso, ya fueron previamente planteadas ante esta Sala mediante demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, que no fue admitida por haberse omitido el agotamiento de la vía gubernativa.

La representante de la corporación demandada también señaló que, que en el presente caso, la parte actora tampoco agotó la vía gubernativa, toda vez que no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto que ahora demanda.

La señora Procuradora de la Administración también pidió a la Sala que declare la nulidad de todo lo actuado en este proceso, toda vez que la demandante carece de legitimación sustantiva para solicitar el restablecimiento de derechos subjetivos que pertenecen a particulares (a los empleados del Banco Nacional de Panamá), quienes son las únicas personas que pueden recurrir en la vía gubernativa y ejercitar la acción de plena jurisdicción, tal como se desprende de los artículos 203 (N° 2) de la Constitución Política y 43b de la Ley N° 135 de 1943.

Finalmente, la representante del Ministerio Público pidió a la Sala que negara las pretensiones de la parte actora por estimarlas del todo infundadas (fs. 124-136).

Durante el mismo período de alegatos, la parte actora reiteró los conceptos vertidos en la demanda (fs. 110-123).

V. DECISIÓN DE LA SALA

Antes de examinar el fondo de la presente controversia, la Sala estima necesario referirse a los aspectos procesales medulares planteados por la señora Procuradora de la Administración en su escrito de alegatos, a saber: la existencia de cosa juzgada, la falta de agotamiento de la vía gubernativa y la existencia de ilegitimidad de personería sustantiva de la parte actora.

Con relación a la existencia de cosa juzgada, la Sala debe indicar que no le asiste razón a la representante del Ministerio Público, pues, tal como se afirma a foja 124, la primera demanda interpuesta por la ASEMBANAL no fue admitida por esta Sala, por lo cual, mal pueden considerarse resueltas las pretensiones formuladas en aquella oportunidad por la demandante. Además, como se desprende del examen de ambas demandas (Entradas 139-94 y 346-95), en la primera de ellas, el acto acusado lo constituye una nota suscrita por el Gerente General del Banco Nacional, mientras que en el presente caso, se pide la nulidad de un acto dictado por la Junta Directiva de dicha institución.

Adicionalmente y contrario a lo expresado por la señora Procuradora de la Administración, no existe exacta coincidencia entre las pretensiones formuladas en ambas demandas, toda vez que, en el presente caso, además de la devolución proporcional de las sumas descontadas del salario de los servidores públicos del Banco Nacional de Panamá durante el segundo semestre de 1988, también se formulan otras pretensiones relativas al pago de varias partidas del XIII Mes.

En cuanto a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, la Sala considera que tampoco le asiste razón a la representante de la administración

pública, toda vez que el acto acusado por la ASEMBANAL fue expedido por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá y, al ser éste el máximo organismo administrativo de esa entidad bancaria, no era necesario interponer el recurso de reconsideración para agotar la vía gubernativa, tal como lo ha reconocido reiterada jurisprudencia de esta Sala (Cfr. los fallos de 18 de junio de 1993 y 19 de mayo de 1995, Registros Judiciales de junio de 1993, pág. 278, y mayo de 1995, pág. 360, respectivamente).

Finalmente, la Procuradora de la Administración considera que la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ carece de legitimación sustantiva para promover la presente acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, argumento que esta Sala comparte plenamente.

En el presente caso, la ASEMBANAL pidió a la Sala Tercera la nulidad de la Nota N° 95(1001-01-)22, del 25 de julio de 1995 y, consecuentemente, la devolución **a los empleados del Banco Nacional de Panamá** del mes de salario que les fue descontado durante el segundo semestre del año 1988 y el pago de las distintas partidas del XIII Mes mencionadas en el petitum de la demanda. Como se aprecia a simple vista, la referida asociación reclama ante esta Sala el pago de ciertas prestaciones económicas cuyos titulares exclusivos son aquellos funcionarios públicos del Banco Nacional de Panamá a los que se le hizo el aludido descuento y se les negó el pago de **algunas** partidas del XIII Mes comprendidas dentro del período de diciembre de 1988 a diciembre de 1991.

En otras palabras, la ASEMBANAL pretende el restablecimiento de derechos subjetivos que sólo pueden ser reclamados por quienes gozan de la titularidad de los mismos, es decir, por quienes tienen la llamada "**legitimación sustantiva**" respecto del objeto procesal. Este concepto, propio del Derecho Procesal y, por tanto, aplicable a las distintas clases de procesos, ha sido definido por el ilustre tratadista Enrique Véscovi, "**como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz**. Este es un concepto procesal, pero referido a la pretensión y al objeto del proceso, esto es, al derecho sustancial reclamado ... Es, por tanto, una peculiar situación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto que se controvierte, que es lo que lo autoriza a pretender en forma eficaz. O, por parte del demandado, a contradecir hábilmente". Agrega el citado autor, que la legitimación constituye, entonces, "un presupuesto de la sentencia de mérito; el juez previamente (dicho en términos lógicos) a la decisión, debe analizar si las partes que están presentes en el proceso ("las partes") son las que deben estar, esto es, aquellas que son titulares de los derechos que se discuten ... Es indispensable para que pueda dictarse una sentencia **eficaz**, la cual, naturalmente, podrá ser favorable o desfavorable" (VÉSCOVI, Enrique. **Teoría General del Proceso**. Editorial Temis. Bogotá. 1984. Págs. 196-197).

Sobre el mismo punto, el Dr. Pedro Barsallo explica, que la legitimación sustantiva o "legitimación en la causa significa que para solicitar determinadas declaraciones del órgano jurisdiccional y tener derecho a que sobre ella se resuelva por sentencia de fondo, es indispensable ser titular del interés en ese proceso o del interés en la relación jurídica cuya declaración o constitución se solicite; y se requiere además que la persona demandada sea también titular del interés en contradecir las peticiones materia del proceso". Agrega, que "No se trata en este caso de un interés suficiente para el ejercicio de la acción procesal y obtener con ello el inicio de un proceso civil, facultad que corresponde a cualquier persona que necesite la intervención del órgano jurisdiccional para resolver un conflicto o declarar o constituir una relación jurídica material que es el caso de cualquier demandante; ni del interés que pueda tener el demandante en defenderse y contradecir las pretensiones del actor, interés suficientemente demostrado por el solo hecho de haber sido señalado como demandado al admitirse la demanda; **se trata en esta ocasión de tener derecho a que se decida en la sentencia que ponga fin al proceso** (El subrayado es nuestro)" (BARSALLO, Pedro. **Apuntes de Derecho Procesal I**. Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Panamá. 1988. págs. 76-77).

Como en el presente caso, la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ no es la titular de los derechos que este Banco negó a sus empleados,

carece de legitimación para reclamarlos en nombre de éstos y, por tanto, para agotar la vía gubernativa y promover la presente acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, según se ha indicado. Es importante aclarar, que si bien el acto acusado responde a una solicitud hecha por esta asociación a la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, la misma se hizo en nombre de cada uno de los empleados del Banco, según se infiere de su primer párrafo, en el cual se alude a **"cuatro aspiraciones específicas de los funcionarios del Banco"**.

Tal como se desprende de una detenida lectura de las constancias procesales, en autos no existe ninguna prueba de que la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ esté facultada por medio de sus Estatutos o por razón de alguna disposición legal, para representar individual o colectivamente a sus asociados en cualquier tipo de demandas y, particularmente, en las reclamaciones laborales que hagan al Banco Nacional de Panamá.

Además, cabe anotar, que a pesar de que en el acta de la reunión extraordinaria de los delegados de la mencionada asociación, que consta de foja 14 a 17, se indica que dichos delegados estaban "facultados por los compañeros de sus respectivas áreas" para otorgar poder al Presidente de la Junta Directiva de esta asociación a fin de que interpusiera la presente demanda, en autos no existe ninguna documentación que pruebe estas afirmaciones. Es decir, que en el expediente no consta que cada uno de los miembros de la referida asociación, en forma expresa, otorgaron poder a la misma para que, a través de apoderado judicial, reclamara las pretensiones laborales que se demandan, lo que, como se indicó, sólo sería jurídicamente posible en el caso de que los Estatutos de la precitada asociación o alguna disposición legal especial así lo hubiere autorizado. Igualmente, no se ha probado en el expediente que todos los empleados del Banco Nacional de Panamá están afiliados a la precitada asociación.

Como es evidente, la interposición de una acción de plena jurisdicción por parte de **"los funcionarios afectados"**, supone la existencia de una **"reclamación individual"**, así como el posterior agotamiento de la vía gubernativa. Es decir, que cada funcionario debe reclamar y probar su derecho ante el Banco Nacional de Panamá y, en caso de que el reconocimiento del mismo le fuere negado, agotar la vía gubernativa para poder recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, además de cumplirse con el procedimiento contencioso-administrativo consagrado en la Ley N° 135 de 1943, modificada por la Ley N° 33 de 1946, podrían conocerse con exactitud las prestaciones que reclama cada uno de los funcionarios, contrario a lo ocurrido en el presente caso. Sobre este particular, observa la Sala que en el punto **a)** del petitum de la demanda se reclama el pago proporcional de novecientos veintitrés mil balboas (B/.923.000.00), sin que se haya precisado el nombre de los empleados a los cuales supuestamente corresponde ese derecho, ni el monto que debe pagarse a cada uno de ellos por este concepto. Igual observación se hace respecto del pretendido pago proporcional de varias partidas del XIII Mes que, según la propia demandante, sólo se debe a un grupo de funcionarios del Banco Nacional de Panamá y no a todos ellos (Cfr. hechos 4° al 8°).

El artículo 43A de la Ley N° 135 de 1943 dispone en este sentido, que en las demandas de plena jurisdicción **"deberán indicarse las prestaciones que se pretenden"**, lo cual conlleva a individualizar las prestaciones que se deben a cada uno de los titulares del derecho reclamado. A juicio de la Sala, no sería procedente emitir una sentencia condenatoria genérica contra el Banco Nacional de Panamá, como la pretendida por la parte actora, cuando no se ha señalado en forma específica y concreta las prestaciones que corresponden a cada uno de los supuestos titulares de los derechos en litigio, máxime, cuando en el acto acusado y en el informe de conducta rendido por la entidad demanda, se indica, con relación al mes de salario descontado en 1988, que hasta el momento no ha sido posible determinar cuales funcionarios tomaron el mes de licencia con sueldo y cuales no (Cfr. fs. 3, 53).

De conformidad con el numeral 2° del artículo 90 de la Ley N° 135 de 1943, la ilegitimidad de personería de una de las partes es causal de nulidad en los

procesos contencioso administrativos y, al no ser ésta **subsanable**, procede resolver conforme a lo pedido por la señora Procuradora de la Administración, es decir, declarando la nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro de este proceso.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO dentro de este proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por el licenciado Randolph Lawson, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 95(1001-01)22, del 25 de julio de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA WYNTER, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO PROFERIDO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN SU REUNIÓN N° 31-95 DE 26 DE JULIO DE 1995, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista Fiscal N° 332 de 25 de julio de 1996, la señora Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 8 de mayo de 1996, por medio de la cual se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por MARITZA WYNTER.

En opinión de la representante del Ministerio Público, la demanda no debe admitirse por los siguientes motivos:

1. La parte demandante no aportó copia autenticada del acto impugnado, es decir, del Acta de la Reunión N° 31-95 de 26 de julio de 1995 del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, sino el original de la Nota N° 1104/95/SGP de 31 de julio de 1995 en la cual se le comunica a la profesora MARITZA WYNTER la decisión del Consejo Académico de no adjudicarle la posición docente en el concurso de Inglés de la Facultad de Humanidades, incumpliendo con lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 que señala que la demanda debe ser acompañada por copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según el caso.

2. El acto impugnado es de carácter instrumental o preparatorio porque el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en Reunión N° 31-95 de 26 de julio de 1995, adjudicó una posición docente en la Facultad de Humanidades, área de Inglés General, y esta adjudicación no constituye el acto definitivo de nombramiento en dicha posición docente.

El demandante objetó dicho recurso en los siguientes términos:

En primer lugar, no le asiste la razón a la señora Procuradora de la Administración al alegar la no presentación del acto impugnado, porque a foja 1 del expediente, hay constancia de que en la Nota N° 1104/94/SGP de 31 de julio de 1995, se le comunica a la profesora MARITZA WYNTER la decisión del Consejo

Académico de no adjudicarle la posición de docente por haber obtenido una puntuación menor a la persona favorecida en el concurso.

En segundo lugar, la representante del Ministerio Público está desconociendo que "el concurso contiene una serie de actos (aprobación, publicación, evaluación, adjudicación y nombramiento) que culmina con la adjudicación de posición docente sometida a concurso que es el acto definitivo y que causa estado, todos los demás anteriores al mismo son actos trámite y el nombramiento constituye un claro ejemplo de acto ejecución no acusable en la vía contencioso administrativa" (foja 34).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada con base en las consideraciones que a continuación expresan.

Vemos que el recurrente omitió cumplir con la formalidad exigida en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, de presentar copia debidamente autenticada del acto administrativo impugnado en la demanda, o en su defecto solicitar al Magistrado Ponente que antes de admitir la demanda pidiera al funcionario demandado copia del acto acusado, previa comprobación de que dicha copia le había sido negada (Cfr. artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943). También observamos que la representante del Ministerio Público no alega que el acto impugnado es inexistente, lo que aduce es que **no fue aportado** con la demanda. Lo que la demandante presentó es la constancia de que le fue notificada la no adjudicación del concurso a la profesora MARITZA WYNTER mediante la Nota N° 1104/94/SGP de 31 de julio de 1995, emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá.

Y por último, la Sala ha decidido en reiterados fallos de 28 de febrero de 1994 (Registro Judicial, febrero 1994, pág. 228) y 29 de abril de 1994 (Registro Judicial, abril 1994, pág. 221), que en las demandas sobre Adjudicación de Concursos, el recurrente debe necesariamente impugnar el acto administrativo por el cual se adjudica el concurso (acto preparatorio), y el acto administrativo que contiene el nombramiento (acto definitivo), el cual seguirá surtiendo efectos hasta tanto la Sala lo anulara, por ilegal, si esto procediera.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 8 de mayo de 1996, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa propuesta por MARITZA WYNTER, para que se declare nulo, por ilegal, el acto proferido por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en su reunión N° 31-95 de 26 de julio de 1995, acto confirmatorio, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TERMINALES DAVID PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 88 DEL 14 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

La firma forense Guerra y Guerra, actuando en nombre y representación de la sociedad TERMINALES DAVID PANAMÁ, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 88 del 14 de mayo de 1996, expedida por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En la parte final de su demanda, la apoderada judicial de la actora pide a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, argumentando para este efecto lo siguiente:

> "Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera Contencioso Administrativo - Corte Suprema de Justicia, con fundamento a lo que preceptúa el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, solicitamos que se ordene la suspensión provisional de la Resolución N° 88 de 14 de mayo de 1996 y toda vez que, conforme a lo dispuesto en la parte resolutiva de la misma, se ha conferido un plazo de 120 días a la empresa TRANSPORTE Y TURISMO, PANAFROM, S. A., para que presente y entregue al Ente Regulador "Toda la documentación que se desprende de los requisitos exigidos para tal fin en las leyes y reglamentos de tránsito y transporte". Los 120 días han de vencerse el 14 de septiembre del año que decurre, esto es, dentro de 12 días. De llegar a implementarse lo resuelto por el acto administrativo impugnado, se estarían causando perjuicios notoria y manifiestamente graves en detrimento de nuestra patrocinada.
>
> Además de lo anterior, la violación a la Ley 14 de 1993, por parte de la aludida resolución, tal y como ha quedado indicado en este recurso, es clara, manifiesta y notoria, no cabiendo duda alguna de que nuestra patrocinada, no solamente tiene apariencia de buen derecho sino que la razón jurídica le asiste en todo momento. Con fundamento, pues, a lo planteado solicitamos que se ordene la suspensión del acto cuya nulidad pretendemos en estricto derecho." (Fs. 37-38).

De conformidad con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera puede suspender los efectos de la norma, resolución o acto administrativo impugnado si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

De acuerdo con los cargos de ilegalidad formulados en la demanda, la parte actora considera que el acto acusado de ilegal violó varios preceptos de la Ley N° 14 del 26 de mayo de 1993 y del Decreto Ejecutivo N° 186 del 28 de junio de 1993, ya que el mismo se expidió sin que se cumpliera con el procedimiento señalado en estos cuerpos legales para otorgar las concesiones de líneas, rutas o piqueras de transporte y los cupos o certificados de operación.

La Sala estima que la medida cautelar pedida no procede, toda vez que la demandante no ha probado que a través del acto acusado se creó una nueva línea, ruta o piquera de transporte, con lo cual tampoco es posible determinar si la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre cumplió o no con el procedimiento establecido en la Ley N° 14 de 1993 y disposiciones reglamentarias, para el otorgarmiento de las referidas concesiones de transporte.

Lo anterior es así porque, como se indicó, la Resolución N° 88 idem únicamente alude al atorgamiento de trece (13) certificados de operación o cupos a favor de la empresa Panafrom, S. A. y no a una concesión para la operación de una nueva línea, ruta o piquera, como sostiene la demandante. Además, en esta incipiente etapa procesal, tampoco se ha probado si la empresa Panafrom, S. A. existía o no en el momento en que se dictó la resolución impugnada.

Lo mismo cabe expresar acerca de la supuesta lista elaborada por la empresa TERMINALES DAVID PANAMÁ, S. A. y de la cual, afirma la demandante, debió seleccionarse a los aspirantes de los trece (13) cupos otorgados a Panafrom, S. A., de cuya existencia no consta ninguna prueba en el expediente.

Por estas razones, la Sala estima que la medida cautelar solicitada debe negarse y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 88 del 14 de mayo de 1996, dictada por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 31 Y N° 31-1, AMBAS DEL 20 DE ABRIL DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Guerra y Guerra, actuando en nombre y representación de la sociedad UTRACOLPA, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de nulidad contra las Resoluciones N° 31 y 31-1, ambas del 20 de abril de 1995, expedidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En la parte final de su libelo, la apoderada judicial de la demandante pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, no obstante, la suscrita Magistrada Sustanciadora, por razones de economía procesal, pasa a comprobar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

De acuerdo con la parte actora, las resoluciones acusadas no fueron promulgadas en la Gaceta Oficial, por lo cual se aportó copia simple de las mismas y "ante la eventualidad de cualquier defecto de dichas copias", se pide al Magistrado Sustanciador que las solicite al Departamento de Asesoría Legal de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, tal y como ordena el artículo 46 de la Ley N° 135 de 1943, en concordancia con el artículo 803 del Código Judicial.

Estima la Magistrada Sustanciadora que la petición de la apoderada judicial de UTRACOLPA, S. A., es improcedente, pues, cuando la parte inicial del artículo 46 ibidem exime al demandante de la obligación de presentar la copia autenticada del acto acusado **por no haber sido publicado**, se refiere específicamente a actos de carácter general y a actos que, por expresa prescripción de un precepto legal, deben promulgarse en la Gaceta Oficial o en algún otro órgano de publicidad oficial. Al examinar el contenido de la Ley N° 14 de 1993 se aprecia que, ni este cuerpo legal ni las disposiciones reglamentarias, ni en el Decreto de Gabinete N° 26 del 7 de febrero de 1990 (Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la Gaceta Oficial), ordenan la promulgación de los referidos actos en la Gaceta Oficial.

Siendo las Resoluciones N° 31 y N° 31-1 del 20 de abril de 1995, actos de carácter particular o individual que no requieren ser publicadas en la Gaceta Oficial, la demandante debió aportar copia autenticada de cada uno de ellos,

según exige el mencionado artículo 46, en concordancia con el artículo 820 del Código Judicial.

Adicionalmente, la parte actora tampoco aportó ninguna prueba para demostrar que hizo las gestiones pertinentes a fin de obtener la autenticación de las referidas copias y que la misma le fue negada, requisito indispensable para que, en tal caso, pueda el Magistrado Sustanciador requerirlas al funcionario demandado.

Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que la presentación de la copia autenticada de los actos acusados constituye uno de los requisitos esenciales para la admisión de las demandas contencioso administrativas, tal como se expuso en los fallos del 28 de junio y 15 de septiembre de 1995 (Cfr. Registros Judiciales de junio, págs. 439-440 y septiembre, págs. 283-284, respectivamente).

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense Guerra y Guerra, en nombre y representación de la sociedad UTRACOLPA, S. A., para que se declare nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 31 y N° 31-1, del 20 de abril de 1995, expedidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. EHRMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 140 DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **José E. Ehrman**, en representación propia, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de Gabinete N° 140 de 11 de julio de 1996, dictada por el Consejo de Gabinete.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si reúne los requisitos mínimos para su admisión.

Se observa que el libelo presentado no cumplió con los requisitos contenidos en el **artículo 28 de la ley 33 de 1946**. Dichos requisitos son de gran relevancia para decidir la admisión de toda demanda contenciosa administrativa.

Existen numerosos precedentes emitidos por esta Corporación de Justicia en los que se ha pronunciado en el sentido de que el desconocimiento de estos requisitos formales, por ser de obligatorio cumplimiento, impiden dar curso a este tipo de demanda.

Se observa, en primer lugar, que en el renglón concerniente **a la designación de las partes y sus representantes**, el recurrente no hace mención expresa de la participación del Procurador de la Administración, sino que se refiere de manera muy general, señalando: "La parte demandada es el Consejo de Gabinete representado por su Presidente y **con la obligada participación de la respectiva agencia del Ministerio Público** en defensa del orden jurídico". (Énfasis nuestro).

Es preciso recordar al actor, que nos encontramos ante un proceso Contencioso Administrativo de Nulidad, que persigue anular un acto administrativo objetivo, general e impersonal, por transgredir el orden legal, y en el cual el señor Procurador de la Administración interviene emitiendo su concepto sobre la legalidad del acto acusado y en interés y defensa precisamente del ordenamiento legal supuestamente violado, por lo que es obligación nombrarlo de manera precisa.

También se observa que el libelo ha sido dirigido al **conjunto de Magistrados que integran la Sala Tercera** de la Corte Suprema, contraviniendo con tal proceder lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial, que expresamente ha dispuesto la imperatividad de que toda demanda que competa a alguna de las Sala de la Corte Suprema debe dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala.

Así la norma en comento, es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 102: Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, **deberán dirigirse al Presidente** de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los **Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera**, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto". (Subrayado nuestro).

De igual forma el actor no señala con precisión "**lo que se demanda**", y en esta parte, a la que él denomina "PROCESO DENTRO DEL CUAL SE PROPONEN IMPUGNACIONES", hace una transcripción del contenido del acto impugnado, y **no explica claramente qué es lo que está demandando**. Tampoco hace mención de los hechos y omisiones fundamentales de la acción, tal cual lo dispone el numeral 3 del artículo 28 en mención.

Finalmente ha incumplido el último numeral referente a la **expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación**.

En efecto, ha sido doctrina constante de la Corte dictaminar que para poder apreciar el fondo de la violación alegada, el demandante **debe explícitamente describir la infracción,** y explicar de qué manera el ente administrativo ha violado la norma legal. Al respecto son consultables las sentencias de 17 de julio de 1992, 23 de marzo de 1995, 24 de enero de 1995 y 2 de mayo de 1990.

Así, el recurrente debe formular su cargo señalando a cuál de los motivos de ilegalidad se ajusta, de conformidad con el artículo 16 de la ley 33 de 1946, ya sea la infracción literal de los preceptos legales en alguna de sus modalidades, es decir, debe especificar si se trata de **violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación**; la falta de competencia o jurisdicción, el quebrantamiento de las formalidades legales o la desviación de poder.

En su defecto la demanda no prospera puesto que no podrá estudiarse el fondo del negocio, debido a que el libelo está incompleto.

Dado que la demanda no ha sido debidamente interpuesta, lo precedente es no admitirla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado JOSÉ E. EHRMAN en su propio nombre y ORDENA devolverla al interesado para que la CORRIJA en base a los defectos señalados.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. BOLÍVAR RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE PATRONATO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONAGRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 10 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHITRÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El licenciado Bolívar Rodríguez, actuando en nombre y representación del PATRONATO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONAGRILLO, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 10 de 22 de febrero de 1995 dictado por el Consejo Municipal de Chitré, por medio del cual dicho Consejo creó y otorgó personería jurídica a la Junta de Síndicos de la Casa de la Cultura de Monagrillo, como una agrupación cívico-cultural autónoma y con patrimonio propio desligado del Instituto Nacional de Cultura (INAC).

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, la suscrita Magistrada Sustanciadora estima que la misma no debe admitirse, porque la parte actora, tal como se lee a foja 36 del expediente, en el punto V de la demanda sobre el CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN, no expresa, en relación con cada una de las disposiciones legales que consideraba infringidas por el acto impugnado, los motivos de la ilegalidad invocada.

La Sala ha expresado en reiterados fallos que, mediante un enjuiciamiento lógico-jurídico debe puntualizarse que circunstancias de hecho dieron lugar a la violación de las normas, de modo que queden configurados los motivos de ilegalidad que se imputa al acto administrativo impugnado, establecidos en el artículo 16 de la Ley 33 de 1946 que son: infracción literal de las normas, falta de competencia del funcionario que expide el acto, el quebrantamiento de las formalidades legales que se exigen para la validez y eficacia del mismo, o desviación de poder.

En virtud de lo expresado la presente demanda carece del requisito señalado en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 porque no expresa el concepto de la violación de las disposiciones invocadas como infringidas, hecho que impide darle el curso de Ley por expresa prohibición del artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Bolívar Rodríguez, en nombre y representación del PATRONATO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONAGRILLO, para que se declare nulo por ilegal el Acuerdo N° 10 de 22 de febrero de 1995 dictado por el Consejo Municipal de Chitré.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR JOSÉ CANO CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLEGA, PARA QUE SE DECLARE QUE ES ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DEL CINCO (5) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMANADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Bolívar José Cano Cruz, actuando en nombre y representación del Municipio de Dolega, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare que es ilegal, el acto administrativo en el Orden del día del 5 de febrero de 1996, emanado de la Dirección General de la Policía Nacional.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado Cano solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo contenido en el Orden del día del 5 de febrero de 1996, emanado de la Dirección General de la Policía Nacional, por medio del cual se publican los procedimientos para la solicitud de puestos pagos a los miembros de la Policía Nacional tanto en actividades públicas como privadas, a los cuales los Directores de Zona y Jefes de Áreas de Policía deben darle estricto cumplimiento.

El apoderado judicial de la parte actora fundamenta su petición en los siguientes términos:

"SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO.

Pido a la Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en base al Artículo 73 de la Ley, la suspensión provisional del Acto, a fin de evitar perjuicios notoriamente graves para la personalidad interna del Estado y de los ciudadanos de la República de Panamá."

La Sala pasa a examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir, conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

El Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) está facultado por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

En este caso el recurrente no logra probar el perjuicio notoriamente grave y de imposible reparación que le puede causar el acto impugnado. El demandante debió señalar detalladamente en qué consiste el daño que puede causar el acto impugnado y de qué manera dicho perjuicio es grave o de imposible reparación. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo contenido en el Orden del día del 5 de febrero de 1996, emanado por la Dirección General de la Policía Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ABEL MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE JORGE H. BRISTÁN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS ELECCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL DARIÉN REALIZADAS EL 26 DE JULIO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Abel Martínez, quien actúa en representación de JORGE BRISTÁN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo por ilegal, las elecciones del Consejo Provincial de Darién, realizadas el 26 de julio de 1996.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar el libelo incoado en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos formales de admisión.

El suscrito observa que, en primer lugar, el apoderado judicial del demandante se limita a mencionar las normas que considera infringidas y omite la transcripción literal de las mismas.

En segundo término, no se señala el concepto en que dichas normas han sido violadas y la explicación correspondiente de la infracción alegada, todo lo cual incumple con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

Finalmente, el apoderado judicial de la parte actora omite mencionar a la Procuradora de la Administración como parte en proceso, la cual según el artículo 58 de la Ley 135 de 1943 interviene en interés de la Ley en este tipo de acciones, incumpliéndose de esta forma lo establecido en el precitado artículo.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la presente demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el Lcdo. Abel Martínez, en representación de JORGE BRISTÁN.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS A. VALLECILLA EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA CONTENIDO EN EL ACTA N° 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE COCLÉ CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Luis Alberto Vallecilla, actuando en representación de Pedro Castillo, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el punto sexto del Orden del día contenido en el Acta N° 11 de la Sesión Ordinaria del Consejo Provincial de Coclé celebrada el 25 de julio de 1996.

Encontrándose el presente negocio pendiente de resolver la admisión la Sala

observa que se ha presentado escrito de desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto, por lo que procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el representante legal está facultado entre otras cosas para desistir, y, dado que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el mismo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el Lcdo. Luis Alberto Vallecilla, DECLARA que ha terminado el presente proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. FÉLIX ALBERTO PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL RENGLÓN N° 1. 2. 5 48 DEL ARTÍCULO 2° DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 13 DE 10 DE ABRIL DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Félix Alberto Pérez** en representación de **EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC.** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Renglón #1. 1. 2. 5 48 del Artículo 2° del Acuerdo Municipal N° 13 de 10 de abril de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de David.

La Sala se percata que consta en el expediente una solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado que debe ser surtida, previo al trámite de admisión de la demanda.

ARGUMENTO DEL DEMANDANTE

La parte demandante solicita que la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, suspenda provisionalmente los efectos del Renglón #1. 1. 2. 5 48 del Artículo 2° del Acuerdo Municipal Número 13 de 10 de abril de 1995 dictado por el Consejo Municipal del Distrito de David.

La solicitud de la medida cautelar es sustentada básicamente en el hecho de que la creación del impuesto municipal sobre bienes o actividades previamente gravadas por la Nación, es ilegal, ya que se violenta los artículos 3, 21 numeral 6, y 79 de la ley 106 de 1973 así como el artículo 5 del Código Civil.

Indica el petente que los funcionarios del Municipio de David han procedido ilegalmente a cautelar máquinas electrónicas de **EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC.** y mediante la interposición de un Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales, se suspendió la orden ilegal. Que después de interpuesto el Recurso Amparo de Garantías Constitucionales contra el Tesorero Municipal del Distrito de David y que luego de desfijado el Edicto de Notificación de la Sentencia N° 77 de 22 de agosto de 1996, el cual resuelve el precitado amparo, el Juez Ejecutor del Municipio de David ordenó el secuestro de las máquinas dentro de un proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva, por lo que dichas máquinas no están

funcionando hoy día, ocasionándose perjuicios graves a los dueños, empleados, concesionarios y las personas que pudieran ganarse premios en efectivo por varios cientos de balboas. Que a pesar de que estas máquinas electrónicas no están funcionando, siguen pagando mensualmente el derecho de operación a la Junta de Control de Juegos del Ministerio de hacienda y Tesoro.

Continúa exponiendo el demandante, que el impuesto impugnado, cuya suspensión se solicita, no sólo afecta a **EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC.**, sino también a otras compañías que se dedican al mismo negocio en el Distrito de David, por lo que eventualmente se verán afectadas. Que en este caso se configura el Fumus Bonis Iuris, es decir la existencia probable del derecho reclamado o la apariencia de buen derecho.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la solicitud de suspensión.

CRITERIO DE ESTA SALA

El Consejo Municipal de David, mediante Acuerdo N° 13 de 10 de abril de 1995, derogó los Acuerdos relacionados con impuestos, tasas, derechos y contribuciones y estableció el nuevo régimen impositivo del Municipio de David. El Código de dicho Acuerdo que ha sido impugnado, trata del Renglón #1. 1. 2. 5 48 del artículo 2°, el cual es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 2°:

a) Son impuestos los tributos que impone el Municipio a personas jurídicas o naturales por realizar actividades, comerciales o lucrativas de cualquier clase.

b) Son Tasas y Derechos, los tributos que imponga el Municipio a personas jurídicas o naturales por recibir de el los servicios sean estos administrativos o finalistas.

c) Son Tributos varios, aquellos que el municipio imponga a personas naturales o jurídicas tales como arbitrios y recargos, los arbitrios con fines no fiscales, las contribuciones a las personas especialmente interesadas en las obras, instalaciones o servicios municipales, multas, reintegros y otros.
...
1. 1. 2. 5 48 Aparatos de Juegos Mecnicos y electrónicos

Se refiere a los aparatos mecánicos de diversión que se basan en la colocación previa de moneda pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.10.00 a
B/.30.00 por aparato"

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala, procede la suspensión como medida cautelar en las demandas de nulidad, no sólo para evitar perjuicios de carácter económico o patrimonial sino también cuando el acto acusado puede producir una lesión a la integridad del ordenamiento legal, que puede ocurrir cuando el acto administrativo impugnado es manifiestamente incompatible con una norma de superior jerarquía. **(Cfr. Autos de 2 de enero de 1991, 25 de febrero de 1994 y de 12 de octubre de 1995).**

De igual manera, la Sala Tercera ha sostenido en ocasiones similares a la que nos ocupa, que la excepción a la regla general prevista en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, por la que se establece que no habrá suspensión en las acciones relacionadas con tributos, ya se trate de impuestos, tasas o contribuciones especiales, sólo le es aplicable a las acciones que recaen sobre tributos Nacionales, ya que se encuentran regulados íntegramente en la ley, y este Tribunal como regla general no puede suspender los efectos de una ley, sino solamente de actos administrativos. No así sucede con los tributos de carácter municipal que, por el contrario, sólo se encuentran parcialmente regula-

dos en la ley, y los aspectos importantes de su estructura, tales como el hecho generador de la obligación tributaria o la tarifa del impuesto que deben pagar los contribuyentes municipales, se encuentran regulados mediante actos administrativos (Acuerdos), los cuales la Sala sí puede suspender.

El ordinal 8 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, señala que los Consejos Municipales tienen competencia exclusiva para establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas de conformidad con las leyes, para atender los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales.

De igual manera, el artículo 242 de la Constitución Nacional preceptúa que son municipales los impuestos que **no tengan incidencia fuera del Distrito**, y que la ley podrá establecer excepciones para que determinados impuestos sean municipales, a pesar de tener esa incidencia. Por su parte, el ordinal 6 del artículo 21 de la Ley 106 de 1973, establece la prohibición para los Consejos Municipales de "gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación".

Tal como se señaló en líneas anteriores, el Consejo Municipal del Distrito de David creó nuevos impuestos municipales, mediante Acuerdo N° 13 de 10 de abril de 1995 y entre ellos gravó los **aparatos de juegos mecánicos y electrónicos**.

La operación de las máquinas de juegos mecánicos y tragamonedas, es considerada como una actividad dentro de los juegos de suerte y azar, y el artículo 1043 y siguientes del Código Fiscal otorga facultades reglamentarias, sobre esta materia a la Junta de Control de Juegos. En virtud de lo anterior, mediante Resolución N° 028 de 18 de diciembre de 1995 esta entidad reglamentó las operaciones de las máquinas electrónicas accionadas por monedas o papel moneda.

De acuerdo a la precitada Resolución, específicamente el artículo 7, existen tres tipos de máquinas tragamonedas, que a continuación describimos: las de **Tipo A**, que son las de uso común y corriente en los casinos o salas de juegos operados por el ESTADO de manera directa o a través de Contratos de Administración, que pagan directamente a sus usuarios en monedas o por medio de cualquier otro mecanismo de pago directo en monedas, tokens, fichas, o dinero en efectivo de cualquier forma; las de **Tipo B**, que son aquellas que sólo registran los créditos a favor del usuario por medio de dispositivos visuales, electrónicos, electromecánicos o magnéticos, que indican la cantidad de dinero o premio ganado en un boleto generado por la máquina o que registra la reducción o acumulación de créditos a través del empleo de elementos magnéticos (tarjetas), electromagnéticos, que servirán en cualquier caso para el reclamo de la redención en cualquiera de las cajas del establecimiento operador, y cuyo monto de apuesta es de B/.3.00 y su premio mayor no más de B/.5,000.00; las de **Tipo C**, que son aquellas con características y funcionamiento similares a las de Tipo B, pero que su apuesta máxima no puede ser mayor a B/1.00 y el premio mayor no puede ser más de B/.200.00. Las máquinas **Tipo A y C** pueden ser explotadas y administradas por personas naturales o jurídicas o por asociaciones accidentales, consorcios que hayan sido autorizadas expresamente por la Junta de Control de Juegos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la misma Resolución.

Como puede observarse, de la clasificación que se hace en párrafos anteriores se desprende que las máquinas que explota y administra la empresa **EMAR ELECTRONIC INTERNATIONAL, INC.**, entran en la clasificación **Tipo B ó C**. En este mismo orden de ideas el artículo 17 de la Resolución N° 028 de 18 de diciembre de 1995, preceptúa que las autorizaciones que se expidan para la operación de las máquinas **Tipo B y C**, están sujetas a un pago mensual de cien balboas (B/.100.00) por cada máquina, en concepto de derecho de explotación. Esta situación deja entrever que estas máquinas tragamonedas están gravadas por el Estado y no dan cabida a otro impuesto. El numeral 2 del artículo 685 del Código Fiscal confirma nuestra apreciación, debido a que el mismo determina que el producto de juegos de suerte y azar y de actividades que originan apuestas son consideradas rentas nacionales.

Lo anterior conduce a esta Superioridad a señalar que en este caso se produce la apariencia de buen derecho a favor del peticionario de la medida

cautelar, es decir el **FUMUS BONIS IURIS**, ya que claramente se desprende de las normas comentadas que el Estado ha gravado ya la explotación de **aparatos de juegos mecánicos y electrónicos**, lo que se traduce en que, en principio, el Municipio estaría impedido para gravar los mismos, y que de hacerlo, tal como ocurrió, se verificaría la doble tributación que habla el ordinal 6 del artículo 21 de la Ley 106 de 1973.

Daniel **SUÁREZ HERNÁNDEZ** ha señalado, a propósito de la suspensión, que cuando el acto administrativo es manifiestamente contrario a la ley, la jurisdicción de lo contencioso administrativo encargada del juzgamiento de tales actos, puede ordenar la suspensión provisional de sus efectos, con el objetivo de que no pueda ejecutarse hasta tanto no se pronuncie una sentencia definitiva. **(SUÁREZ HERNÁNDEZ, Daniel. El Proceso Contencioso Administrativo en Colombia en XV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal.** Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Primera Edición. Editado por el Departamento de Publicaciones de la **Universidad Externado de Colombia. Colombia, Agosto de 1996. Pág. 828).**

Cabe señalar que la suspensión del acto, en este caso no constituye un adelanto de la decisión de esta Sala, ya que en su momento se deberá verificar el fondo de la situación planteada para arribar a una conclusión final.

En definitiva, a criterio de este Tribunal Contencioso, es procedente la suspensión del renglón #1. 1. 2. 5. 48 del artículo 2° del Acuerdo Municipal N° 13 de 10 de abril de 1995, dictado por el Consejo Municipal.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley SUSPENDEN el renglón #1. 1. 2. 5. 48 del artículo 2° del Acuerdo Municipal N° 13 de 10 de abril de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de David.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE EUSEBIO VERGARA CERRUD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, DEL 26 DE OCTUBRE DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio F. Barba, en nombre y representación de EUSEBIO VERGARA CERRUD, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, del 26 de octubre de 1992, y como consecuencia de ello, se ordene al Vice-Rector Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, que ocupe dicha posición y que convoque a nueva elección dentro de un período no mayor de dos (2) meses.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

La parte demandante solicitó que esta Sala declare lo siguiente:

> "PRIMERA: Que es NULA por ILEGAL, la medida adoptada por el Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su reunión N° 02-87 del 20 de mayo de 1987, por medio de la cual

confiere a la Junta de Centros Regionales, la facultad de elegir a los Directores de Centros Regionales;

SEGUNDA: Que por razón de la declaración anterior es NULA por ILEGAL, la participación como votantes en la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, efectuada el día 26 de octubre de 1992, de los siguientes miembros del Consejo General Universitario, por carecer de idoneidad para ocupar dicho cargo, y por ende actuar como electores:

Ing. Luis Muñoz, Director del Centro Regional de Veraguas;

Arq. Aristides Palma, Director del Centro Regional de Chiriquí;

Ing. Urbano Alaín, Director del Centro Regional de Azuero;

Ing. Horacio Apolayo, Director del Centro Regional de Coclé.

TERCERA: Que es NULA por ILEGAL, la decisión del Consejo General Universitario, aprobada en su reunión número 02-86 del seis (6) de noviembre de 1986, mediante la cual se concedió sólo derecho a voz a aquellos Directores de Centros Regionales y Directores de Centros de Investigación, Post-Grado y Extensión que para esa fecha no fueran profesores a tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Panamá, y los cuales por mandato de la Ley forman parte del Consejo General Universitario, hasta tanto el propio Consejo determinase lo contrario;

CUARTA: Que como consecuencia de la declaración que precede, es NULA por ILEGAL la presencia en el acto de la elección del Ingeniero Héctor Montemayor Ábrego como Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, efectuada el día veintiséis (26) de octubre de 1992 de:

Ing. Boris Gómez, Director del Centro de Cómputo;

Ing. Saida de Grimaldo, Directora Encargada del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidroeléctricas;

Ing. Patrocinio Romero, Director Encargado del Centro Regional de Colón;

Ing. Clemente Rincón, Director Encargado del Centro Regional de Colón;

Ing. Gerardo Sánchez o Gerardo Romero, Director Encargado del Centro Regional de la Chorrera;

QUINTA: Que es NULA por ILEGAL la intervención como miembros del Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá de los funcionarios:

Ing. Amador Hassell, Director del Centro Experimental de Ingeniería,

Ing. Irma Arjona, Directora del Centro de Producción e Investigaciones Agropecuarias y Dr. David Wong, Director del Centro de Proyectos; quienes a la fecha de la reunión del veintiséis (26) de octubre de 1992 en la cual se eligió como Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá al Ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, no estaban ratificados por el Consejo de Investigación, Post-grado y Extensión;

SEXTA: Que es NULA por ILEGAL la medida acordada por el Consejo General Universitario de excluir de la lista oficial de votantes, a cinco miembros de dicho Consejo por cuanto que con ello se les negó la libertad de expresión y se les impidió la participación en el acto de la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de

Panamá a los miembros con derecho a voto:

Ing. Amador Hassell,

Ing. Irma Arjona,

Dr. David Wong y;

Los Representantes Estudiantiles: Aristides Martínez, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Marlene Lara del Centro Regional de Colón;

SÉPTIMA: Que es NULA por ILEGAL el Acta de Votación levantada por la Secretaría del Órgano de Gobierno, porque no registra todos los detalles relacionados con la elección y porque no toma en consideración el número de votantes hábiles al momento de la votación.

OCTAVA: Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, es NULO por ILEGAL el ACUERDO aprobado por el Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá en su reunión del veintiséis (26) de octubre de 1992 mediante el cual se valida el proceso de votación para la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y con base en su resultado se proclamó electo para dicho cargo, al Ingeniero Héctor Montemayor Ábrego y se le hizo entrega del Acta y de su respectiva credencial; y

NOVENA: Que por virtud de la declaración anterior, al producirse vacante absoluta del cargo de Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, deberá ocupar dicha posición el Vice-Rector Académico, Ingeniero Rodolfo Cardoze quien deberá convocar a nueva elección dentro del período no mayor de dos (2) meses, según lo indicado por el artículo treinta y seis (36) de la Ley 17 de 1984, Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá." (Fs. 63 y 64).

II. LAS NORMAS INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante considera que debe anularse la Elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, llevada a cabo el 26 de octubre de 1992, porque viola el literal a) del artículo 31, literales a), f), g), j), k), m) y n) del artículo 11, literal g) del artículo 34, literal i) del artículo 19, artículo 6, artículo 13, todos de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, así como también los artículos 9 y 7, numeral 6 del Reglamento para la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y de las Disposiciones generales para la elección de Autoridades Universitarias, respectivamente.

Las precitadas normas son del siguiente tenor literal:

Ley 17 de 9 de octubre de 1984:

"Artículo 6. La Universidad Tecnológica de Panamá se regirá por principios democráticos. Garantizará la libertad ideológica y de expresión, la pacífica convivencia de las personas y el respeto a la propiedad.

Artículo 11. El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno y está integrado de la siguiente forma:

a. El Rector, quien lo presidirá;
...
f. El Director de Planificación Universitaria, con derecho a voz;

g. El Director de Bienestar Estudiantil, con derecho a voz;
...
j. Los Directores de Institutos y Centros de Investigación, Post-Grado y Extensión;

k. Los Directores de los Centros Regionales;
...
m. Un (1) estudiante por cada uno de los Centros Regionales, elegido entre ellos; y

n. Dos (2) estudiantes por cada una de las Facultades elegidos entre ellos.

Artículo 13. Las siguientes son funciones del Consejo General Universitario, además de las que le señalan el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá:

a. Elegir al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá;

b. Aprobar la política de desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como precisar los fines y objetivos que orientarán su estrategia de desarrollo;

c. Elaborar y aprobar el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como futuras modificaciones de los mismos, de acuerdo con la política de desarrollo, fines y objetivos de la Institución;

ch. Ratificar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier tipo de gravamen que sobre los bienes que forman el patrimonio de la Universidad se planeen realizar. Así como ratificar expresamente la aceptación de herencias, legados y donaciones que hicieren a la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales se entenderán hechos a beneficio de inventario;

d. Entregar credenciales al Rector elegido;

e. Remover al Rector cuando el caso lo exija de acuerdo a las causas y en las formas que determina esta ley y el Estatuto;

f. Resolver, en última instancia, las apelaciones y asuntos de mayor importancia referentes a la vida universitaria y para las cuales no existan organismos competentes claramente establecidos;

g. Velar por el cumplimiento y realización de todos los fines y objetivos establecidos por la Universidad Tecnológica de Panamá;

h. Analizar y sancionar la creación, supresión o modificación de todo o parte de los organismos administrativos, académicos y de investigación, post-grado y extensión propuestos por el consejo respectivo.

i. Ratificar los nombramientos de los Vice-Rectores y el Secretario General efectuados por el Rector;

j. Ratificar las categorías académicas del personal docente, de investigación, las posiciones administrativas y las escalas salariales aprobadas por el Consejo respectivo;

k. Aprobar el Informe Anual que presente el Rector;

l. Velar por el buen funcionamiento de los otros Consejos de la Universidad Tecnológica de Panamá;

ll. Ratificar los empréstitos, contrataciones, compras de equipos y bienes según la Ley, el Estatuto y los Reglamentos;

m. Ratificar el presupuesto final de la Universidad Tecnológica de Panamá presentado por el Consejo Administrativo; y,

n. Aprobar y reformar el reglamento de fiscalización de las

Universidades y Centros de Estudios Superiores particulares que se dediquen a la enseñanza tecnológica en Panamá, propuesto por el Consejo Académico.

Artículo 19. Las siguientes son funciones del Consejo de Investigación, Post-Grado y Extensión, además de las que señale el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá:
...
i. Ratificar el nombramiento de los Directores de Institutos y Centros de Investigación;

Artículo 31. Son funciones de la Junta de Centros Regionales, además de las que señalan el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá las siguientes:

a. Garantizar el desarrollo democrático del proceso de elección del Director del Centro Regional respectivo, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y los Reglamentos;

Artículo 34. Los requisitos para ejercer los principales cargos de autoridad en la Universidad Tecnológica de Panamá, son los siguientes:
...
g. Los Directores de los Centros Regionales deben ser panameños y profesores regulares de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Panamá;
...
i. Los directores de los Institutos de Investigación y los Directores de Centros de Investigación deben ser panameños y profesores regulares o investigadores regulares de tiempo completo."

Los artículos 9 del Reglamento para la Elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, y 7 numeral 6 de las Disposiciones Generales para la Elección de Autoridades Universitarias aprobadas por el Consejo General Universitario en su Sesión N° 02/87, celebrada los días 29 y 30 de abril de 1987, establecen:

"Artículo Noveno: Para los efectos de la votación y escrutinio de los votos que deba realizar el pleno del Consejo General para la escogencia del Rector, se observarán las reglas contenidas en los artículos Séptimo y Octavo de las disposiciones Generales para la elección de Autoridades Universitarias.

Artículo Séptimo: En la sesión convocada para ejecutar la votación de la autoridad universitaria, se deberán observar las siguientes reglas de procedimiento eleccionario:
...
6. La Junta de Elección se encargará del escrutinio de los votos, y la Secretaría del Órgano de Gobierno levantará acta en donde se hagan constar todos los detalles relacionados con la elección.

Este acta deberá estar firmada por el Presidente del Órgano de Gobierno y por los miembros de la Junta de Elección.

Este acta será prueba del nombramiento correspondiente y copia autenticada de la misma le será entregada al candidato electo.

Las actas originales serán conservadas en la Secretaría General de la Universidad."

La parte actora indicó que mediante el Acuerdo del Consejo General Universitario adoptado en Reunión 02-87 de 20 de mayo de 1987, se dispuso que el nombramiento de los Directores de Centros Regionales y Decanos de la Facultad lo hiciera la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Centros Regionales o Junta de Facultad respectivamente, violando por indebida aplicación el literal a) del artículo 31 de la ley 17 de 1984, según el cual las Juntas de Centros

Regionales sólo están autorizadas para garantizar el proceso democrático de la elección y no para elegir a los respectivos Directores.

Señala que, contraviniendo a disposiciones legales vigentes, el referido acuerdo hizo posible que en la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá participaran como miembros del Consejo General Universitario, varios Directores de Centros Regionales elegidos como integrantes de este organismo de Gobierno Universitario, quienes carecían de idoneidad para participar en la elección del Rector. El demandante indicó que estos miembros son: Ing. Luis Muñoz, Director del Centro Regional de Veraguas, Ing. Urbano Alaín, Director del Centro Regional de Azuero, Ing. Horacio Apolayo, Director del Centro Regional de Coclé y el Arq. Aristides Palma, Director del Centro Regional de Chiriquí.

La parte actora considera que, al reconocerle el derecho a voz a los funcionarios docentes que no tenían la categoría de profesores regulares de tiempo completo para esa época, el Consejo General Universitario violó, por indebida aplicación, los artículos 11 y 34 de la Ley 17 de 1984, y se extralimitó en sus funciones, ya que negó el derecho al sufragio a los Directores a los que dicha ley reconoce como miembros del Consejo General Universitario con derecho a voto, a pesar de que estos funcionarios no son de los mencionados en los acápites e), f) y g) del precitado artículo 11, que sólo gozan de derecho a voz.

El apoderado de la parte actora señaló además, que de conformidad con los literales g) e i) del artículo 34 de la ley 17 de 1984, es requisito sine-quanon ser profesor regular de la Universidad para poder integrar el Consejo General Universitario, por lo cual, una decisión de ese organismo no puede modificar la ley en este sentido, y en el presente caso, se violó el referido precepto legal al emitir el acto mediante el cual se declaró inhábiles para votar en la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá al Ing. Boris Gómez, Director del Centro de Cómputo, Ing. Saida de Grimaldo, Directora Encargada del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, Ing. Patrocinio Romero, Director Encargado del Centro Regional de Bocas del Toro; Ing. Clemente Rincón, Director Encargado del Centro Regional de Colón, e Ing. Gerardo Sánchez o Gerardo Romero, Director Encargado del Centro Regional de la Chorrera.

Considera el actor que el Consejo General Universitario, al reconocer como sus miembros al Ing. Amador Hassell, del Centro Experimental de Ingeniería, a la Ing. Irma Arjona de Producción e Investigaciones Agropecuarias y al Dr. David Wong, del Centro de Proyectos, violó en forma directa, por omisión, el artículo 19 de la ley 17 de 1984, porque según su literal i), era necesario que el Consejo de Investigación, Post-Grado y Extensión ratificara a dichos directores, para que adquieran la condición de miembros actuantes de dicho organismo, y como al 26 de octubre de 1992, no habían sido ratificados, no podían votar, ya que dicho requisito se cumplió posteriormente en la reunión 02-92 celebrada el 16 de noviembre de 1992.

En cuanto a la violación de los artículos 6, literales j), m) y n) del artículo 11 y 13 de la ley 17 de 1984, el demandante señaló que los mismos fueron violados por aplicación indebida, porque el Consejo General Universitario, abrogándose una facultad que no le confiere el precitado artículo 13, aprobó un Acuerdo que le negó el derecho de libre expresión a través del voto al Ing. Amador Hassell, Director del Centro Experimental de Ingeniería; Ing. Irma Arjona, Directora del Centro de Producción e Investigaciones Agropecuarias; Dr. David Wong, Director del Centro de Proyectos; del estudiante Aristides Martínez, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de la estudiante Marlene Lara, representante estudiantil del Centro Regional de Colón, ya que por su condición de miembros del Consejo General Universitario, tenían derecho a voz y voto.

Indicó que la violación de los literales j), m) y n) del precitado artículo 11, se produjo cuando el Acuerdo del Consejo General Universitario estableció una integración totalmente distinta del Órgano de Gobierno a la establecida en dicho artículo, excluyendo del ordenamiento a miembros acreditados, unos por el cargo que desempeñan y otros, por su calidad de Representantes Estudiantiles.

Finalmente expresó que la presencia de estos miembros, en el acto de

elección, fue tomada en cuenta por el Consejo para constituir el quórum reglamentario, pero no para la votación.

El demandante señaló que el Acta de elección del Rector violó, en forma directa, por omisión, el artículo 9 del Reglamento para la elección del Rector y el artículo 7, numeral 6 de las Disposiciones Generales para la Elección de Autoridades Universitarias, porque en ella no consta que no fue tomado en cuenta el número real de votantes que al momento de la elección estaban dispuestos a ejercer su derecho, y que era de cincuenta y siete electores. Agregó, que en ella tampoco se plasmaron las razones que originaron la exclusión de la lista Oficial de Votantes de cinco miembros, puesto que a su juicio, la no participación es aplicable sólo a los miembros del Órgano de Gobierno que por mandato legal no tienen derecho a votar, no así en el caso de aquellos con voz y voto, cuya no participación requiere de justificación.

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante Vista Fiscal N° 316 de 26 de julio de 1995, en la que señaló que no le asiste la razón al demandante, ya que el Consejo General Universitario actuó conforme a las disposiciones legales vigentes.

Indicó que el artículo 28 de la Ley 17 de 1984, establece que los Directores de Institutos Tecnológicos Regionales serán elegidos por los profesores, estudiantes y administrativos de cada Instituto según los Reglamentos correspondientes, pero como estos no desarrollan la forma en que debe hacerse, se decidió que lo haría la Junta de Centros Regionales.

A juicio de la señora Procuradora de la Administración la facultad del Consejo General Universitario de dar a la Junta de Centro Regional la función de elegir al Director del Centro, proviene del artículo 13, literal c) de la Ley 17 de 1984, facultad que utilizó en la Sesión N° 02-86, en la cual aprobó el procedimiento para la elección de los Directores de los Institutos Tecnológicos Regionales, para así suplir el texto legal del artículo 28 de la Ley 17 de 1984.

En cuanto a la Sesión N° 10-92 de 10 de octubre de 1992, la señora Procuradora de la Administración manifestó que en ella se discutió el calendario de elección del nuevo Decano de la Universidad Tecnológica de Panamá, las postulaciones, las impugnaciones y el antecedente de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula la elección de 1987 del Rector, acordándose, para evitar que sucediera nuevamente, que no votaran los Directores de Centros: Ing. Amador Hassell, Ing. Irma Arjona y Dr. David Wong, quienes no fueron ratificados sino hasta el día 16 de noviembre de 1992, así como tampoco debían hacerlo los estudiantes Aristides Martínez y Marlene Lara, porque al momento de la votación se desconocía si cumplían con el requisito de ser estudiantes regulares, o sea, "aquel que cumpla o haya cumplido con todas las materias que aparezcan en el Plan de Estudios Oficial que cursa y que se ofrecen en el Semestre en el cual está matriculado, o una carga académica de 15 créditos."; ya que no fue sino hasta el 28 de septiembre de 1994, que la Secretaría General certificó que dichos estudiantes eran regulares con un índice académico de 1.69 puntos, 14 créditos, y un índice de 1.80 puntos, con 12 créditos, respectivamente.

Manifestó en relación con los Ingenieros Patrocinio Romero, Clemente Rincón, Gerardo Romero, Boris Gómez y Sayda de Grimaldo, que en la ley o sus reglamentos no hay ninguna norma que prohiba que sus miembros puedan abstenerse de votar, tal como sucedió en este caso, conforme a la decisión adoptada en la Reunión N° 10-92 de 1° de octubre de 1992, porque se desconocía si por su condición de Directores Encargados tenían el derecho de hacerlo.

Finalmente manifestó que el Profesor Jorge Ruiloba, Representante de los Profesores de Ingeniería Eléctrica, no votó, porque llegó tarde a la sesión del Consejo General Universitario el día 26 de octubre de 1992.

En relación a la participación de los Ingenieros Amador Hassel, Irma Arjona y del Doctor David Wong, en las reuniones del Consejo, la señora Procuradora consideró que tenían todo el derecho de participar en ellas, porque fueron

debidamente nombrados, tal como se observa en la Certificación emitida por la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá (fs. 35), y señaló que los mismos se abstuvieron de votar, porque dudaban de su condición de electores, y así mismo, se mostró en desacuerdo con las aseveraciones de la parte actora acerca de que se ignoró y negó el derecho a la libertad de expresión de los miembros del Consejo, puesto que se explicó la situación individual de cada uno de los que no votaron y se pudo constatar que no se infringió la ley 17 de 1984, ni sus actas reglamentarias, debiendo desestimarse todos estos cargos de violación.

Por último, la señora Procuradora indicó que contrariamente a lo señalado por la parte actora, el Acta sí refleja la realidad de lo ocurrido en la elección del Rector, e incluso contiene la lectura de la lista oficial de votantes y la decisión de un grupo de miembros del Consejo General Universitario que acordaron no votar.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La parte actora pretende que se declare nula la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá celebrada el 26 de octubre de 1992, y como consecuencia de ello se ordene al Vicerrector que ocupe dicha posición y que convoque a nuevas elecciones dentro de un período de dos meses.

Las copias autenticadas del Acta de la Reunión Extraordinaria N° 13-92 del 26 de octubre de 1992, del Acta de la Junta de Elección del Rector y la Lista de Votantes que participaron en la Elección del Rector, reposan, entre otros documentos, en el Anexo presentado por el señor Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, con el informe explicativo de conducta que este funcionario remitió a esta Superioridad, y de fojas 1 a 11 del expediente, están las copias autenticadas del Resumen de Acuerdos de la Reunión N° 13-92 (Extraordinaria) celebrada por el Consejo General Universitario el 26 de octubre de 1992, la lista de asistencia a dicha Reunión y el listado oficial de los miembros del Consejo General Universitario con indicación de los que participaron en la votación de las elecciones del 26 de octubre de 1992, en las que resultó electo el Ingeniero Héctor Montemayor.

Consta en el Acta del Consejo General Universitario de la Reunión N° 13-92 de 26 de octubre de 1992, lo siguiente:

> "Ing. Hassell manifiesta: Por lo que escuché pareciera que el Órgano decidirá, no sé si la decisión del Órgano es en base a una votación y si esa es la interpretación que se le va a dar. Entonces, quería aprovechar la oportunidad para anunciar que yo no participaré en la votación, por si hay alguna duda con relación a algunos aspectos y quisiera aprovechar, si es necesario, ese proceso; no obstante, haré uso de la palabra todas las veces que considere pertinente, gracias.
> ...
> El Ing. Héctor Montemayor responde: En primer lugar quiero decirle que desde la semana pasada estoy retirado como Rector; por lo tanto, no tengo conocimiento claro y preciso del contenido de esa carta. Sin embargo, ha escuchado algunos comentarios y creo que si hay algo que debe hacer este Consejo, es revisar con mucho detenimiento todos los aspectos que puedan hacer no idóneo a un miembro de este Consejo para ejercer su voto. Yo creo que vivimos una experiencia lamentable hace un par de años atrás y consideramos que por la salud de la Universidad Tecnológica de Panamá, debe hacerse una revisión de la idoneidad de todos los participantes en este Consejo; ya escuchamos inicialmente al distinguido Prof. Hassell plantear que no iba a participar por algunas reservas que habían sobre la interpretación, a pesar de que hoy podemos decir, como lo anunciamos, que los Directores de Centros de Investigación se abrieron a concurso, fueron publicadas en los periódicos, fueron publicadas por todas las Secciones de la Universidad Tecnológica, se hicieron avaluaciones, se llevaron al Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, fueron aprobados y fueron acciones que ejecutó el Rector después de que ese Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión los aprobó;

sin embargo, como hay otro artículo allí que habla de ratificación, pareciera que el Consejo dice que lo nombre, el Rector lo nombra y parece que hay que llevarlo otra vez a ese mismo Consejo para que digan que hizo lo que le mandaron a hacer; eso es lo que yo entiendo que hay, pero lamentablemente si esto puede dar a dudas sobre la transparencia de una elección, pensamos que la posición del Prof. Hassell sería muy conveniente y lamentamos que perdamos ese voto.

El Ing. Rodolfo Cardoze solicita al Asesor Legal, el Lic. Luis Cedeño, que amplíe la respuesta de la carta que señala el Prof. Santos.

El Lic. Cedeño manifiesta: aprovechando el período de preguntas y respuestas, ya que una pregunta se dirigió hacia ese punto, debí decir que efectivamente el día viernes 23 de octubre llegó a Secretaría General una nota de la Asociación de Profesores donde llamaban la atención de tres puntos medulares que pudieran repercutir positiva o negativamente en la Elección del Rector, hacia un llamado a que se hicieran las consultas legales pertinentes para evitar que una cuestión de impugnación o una acción de nulidad pudiera ser motivada debido a que se pasará por alto algunos de estos puntos que ellos planteaban.

Los tres puntos son: el primero está relacionado con el nombramiento o la escogencia del Director de Centro Regional; el segundo tiene que ver con los nombramientos y ratificación de los Directores de Centros o Institutos de Investigación, y el tercer punto tiene que ver con el período de vigencia de los miembros del Consejo General. Secretaría General remitió inmediatamente esta nota a la Rectoría y el Ing. Cardoze remitió de una vez consulta legal al Departamento de Asesoría Legal, a fin de que examinaran los puntos planteados y absolvieran las mismas, por si acaso era motivo de alguna impugnación o de alguna ilegalidad. Este Departamento de Asesoría Legal inmediatamente inició gestiones que incluso se extendieron hasta el fin de semana y hemos dado el siguiente examen.

En el punto N° 1 se señalaba que la Junta de Centro Regional no tiene la facultad, según la Ley, de elegir al Director del Centro. El Art. 31 de la Ley efectivamente no establece entre de las funciones del Centro, específicamente la elección del Director del Centro, establece en su primer punto que velará por que el proceso se desarrolle en un ambiente democrático; sin embargo, esta observación pudimos confirmar en la Junta Académica acuerdo N° 02-86 del 19 de febrero del mismo año, que la Junta Académica otorgó a la Junta de Centros Regionales la función de elegir al Director del Centro y el Reglamento para la Elección de Autoridades Universitarias aprobado en la reunión N° 02-87 del Consejo General Universitario también estableció que se nombraría Director del Centro Regional a aquel que obtuviese la mayoría absoluta de votos de los miembros de la Junta de Centro; luego con eso queda solucionado el problema de la verificación de a quien compete esa elección ya que la Ley dice: "son funciones de la Junta de Centro, además de las que establecen el Estatuto y el Reglamento las siguientes, y estipula como seis o siete, pero deja abierto que el Estatuto o los Reglamentos, salven cualquier obviación que se haya dado dentro de la Ley; así que ese punto queda totalmente resuelto.

El punto del período de vigencia, una revisión que se hizo con anterioridad por este Departamento y la Secretaría General dio como resultado que nadie está en la situación de que tenga vencido su período de vigencia.

En el punto de los Centros de Investigación, estuvimos observando que la misma ley tiene algunas discrepancias porque trata al final como de llevar a una última ratificación lo que ellos mismos aprueban inicialmente y después ratifican. Como quiera que esa

última ratificación, si es que ese caso se diera, no se ha dado, entonces nosotros responsablemente aconsejamos que los Directores en esa situación se abstengan de votar con el objetivo de evitar una posible acción a algún posible impedimento. Así que este fue el único punto en duda, no decimos que sea así, pero creó duda y ante la duda lo mejor sería evitar que esa duda se convierta en un motivo futuro de impugnación, así que ya ha sido examinada y responsablemente podemos dar ese dictamen.
...
Los que estén de acuerdo en aprobar que la votación sea hoy, 30 minutos a partir del momento en que se estableció la votación, sírvanse levantar la mano.

Con 46 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones fue aprobado.

El Ing. Hassell expresa: sume a esas abstenciones la no participación de 3.

El Ing. Cardoze manifiesta: Si, ya que los tres Directores de Centros de Investigación se abstuvieron de votar, en total los 5 Directores de Centros se abstuvieron de votar.
...
El Estudiante Aristides Martínez manifiesta: A raíz de un pequeño problema que ha habido en la revisión de mis créditos me voy a abstener de votar en estas elecciones, hasta cuando se logre subsanar el problema y se hagan las investigaciones pertinentes del caso. Quiero dejar muy en claro esta situación, pues creo que se lo debo a las personas que me eligieron que fue más del 60% de mi Facultad, y creyendo que es lo mejor para la Institución y para el desarrollo de estas elecciones considero lo más prudente es que mi voto abstenerme (sic), para no dañar así las elecciones del Rector.

La estudiante Marlene Lara, del Centro Regional de Colón manifiesta que también se abstiene de votar en estas elecciones. El Dr. David Wong, al igual que la Ing. Irma Arjona, asintieron en no participar en la votación.
...
El Lic. Luis Cedeño manifiesta: Como el objetivo primordial de estas abstenciones ha sido el de evitar que surja algún motivo que pudiera empañar jurídicamente esta elección del Rector, yo quisiera, desde el punto de vista legal, preguntar a la Secretaría General si ellos salen del quórum o presentan tal vez algún problema que puediese ser subsanado posteriormente ya que considero que si es oportuno que no se cuente en el quórum los que están en estos casos, para evitar cualquier duda y cualquier problema futuro.

La Ing. Ana Teresa Quintero expresa: Entonces serían 5 personas menos, los Directores de Centros de Investigación, Amador Hassell, Irma Arjona, David Wong y los Estudiantes Martínez y Lara; serían 52 miembros los que van a votar.

El Ing. Cardoze aclara: Hay 52 votantes, entendiéndose que eran 57 menos 5 quedan 52 votantes.
...
La Ing. Quintero procede a dar lectura al Artículo Primero, Parágrafo Primero, de las Disposiciones Generales para la Elección de Autoridades Universitarias. En este caso, señala la Ing. Quintero, son 67 miembros establecidos, la mitad más uno serían 35 redondeando hacia arriba.
...
La Ing. Ana Teresa Quintero procede a dar lectura al Acta de la Junta de Elecciones para la Elección del Rector.

Los resultados fueron los siguientes:
Candidato: **ING. HÉCTOR MONTEMAYOR**
TOTAL DE VOTOS

Votos Válidos 48
Votos en Blanco 4
Votos Nulos 0

Total de Votos Emitidos 52" (fs. 1 a 21 del Acta del Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá de la Reunión N° 13-92 (Extraordinaria) celebrada el 26 de octubre de 1992).

En la demanda la parte actora listó tres grupos de personas, cuya participación o no participación en el acto de elección del rector, considera, vició la elección. Estas personas son:

1. Ingeniero Luis Muñoz, Director del Centro Regional de Veraguas; Arquitecto Aristides Palma, Director del Centro Regional de Chiriquí; Ingeniero Urbano Alaín, Director del Centro Regional de Azuero e Ingeniero Horacio Apolayo, Director del Centro Regional de Coclé, quienes, a juicio del demandante, no debieron participar en la elección del Rector, porque fueron elegidos de acuerdo con un reglamento ilegal para ocupar sus cargos y a pesar de ello participaron y votaron.

2. Ingeniero Boris Gómez, Director del Centro de Cómputo; Ingeniera Saida de Grimaldo, Directora Encargada del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas; Ingeniero Patrocinio Romero, Director Encargado del Centro Regional de Bocas del Toro; Ingeniero Clemente Rincón, Director Encargado del Centro Regional de Colón e Ingeniero Gerardo Sánchez o Romero, Director Encargado del Centro Regional de La Chorrera, cuya presencia el día 26 de octubre de 1992, considera la parte actora, anula el acto de elección del Rector, porque el Consejo General Universitario sólo les concedió derecho a voz y no a votar.

3. Ingeniero Amador Hassell, Director del Centro Experimental de Ingeniería; Ingeniera Irma Arjona, Directora de Producción e Investigaciones Agropecuarias, Doctor David Wong, Director de Proyectos y los representantes estudiantiles Aristides Martínez, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Marlene Lara del Centro Regional de Colón, porque el demandante considera que los Directores Hassell, Arjona y Wong no podían ser miembros del Consejo General Universitario, al no estar ratificados en sus puestos, y a su vez señaló que a estos directores, junto a los dos representantes estudiantiles, se les impidió participar en el acto de la elección del Rector, porque fueron excluidos de la lista oficial de votantes.

Tal como consta en el "Listado oficial de los miembros del Consejo General Universitario con la indicación de los que participaron como electores en la votación que eligió al Ing. Héctor Montemayor como Rector el 26 de octubre de 1992" (fs. 9 a 11) y de la lista de asistencia firmada por los presentes en la Reunión N° 13-92, del 26 de octubre de 1992 (fs. 4 a 8), se observa que los señores Boris Gómez, Saida de Grimaldo, Patrocinio Romero, Clemente Rincón, Gerardo Sánchez, Amador Hassell, Irma Arjona, David Wong, Aristides Martínez y Marlene Lara, formaban parte de la lista oficial de votantes, firmaron su asistencia y estuvieron presentes en la Reunión Extraordinaria del Consejo General Universitario N° 13-92 en la que se llevó a cabo la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, pero consta que no se les tomó en cuenta para integrar el quórum reglamentario, ni emitieron su voto.

Estas personas decidieron abstenerse de votar, lo cual no les está prohibido por ley, y por tanto, no podían ser considerados dentro del número de votantes presentes, pues los mismos no votaron.

Esto es así, porque tal como se dejó constancia en el Acta de la Junta de Elección del Rector, el número de personas que se presentaron a votar según el listado oficial fue de cincuenta y dos personas (52), y el número total de personas que votaron fue de cincuenta y dos personas (52), lo cual concuerda con el listado oficial de los miembros del Consejo General Universitario, conformado por sesenta y siete personas (67), de las cuales se dejó constancia que sólo cincuenta y dos (52) votaron, señalándose que catorce personas (14) no participaron y que una (1) de las posiciones estaba vacante.

En la lista oficial de miembros del Consejo General Universitario consta que hay sesenta y siete miembros, por lo que el quórum para celebrar la sesión extraordinaria mediante la cual se eligiría al Rector, según el artículo 12 de la ley 17 de 1984, es de la mitad más uno de sus miembros, contando la fracción como entero, o sea que el quórum necesario era de 35 miembros, cifra que también representaba la mayoría absoluta de los miembros del Consejo General Universitario, y que estuvo presente para constituir el quórum y para elegir al señor Rector Héctor Montemayor.

Con relación a las formalidades del acto de elección, consta que fueron cumplidas, ya que el Acta de la Reunión extraordinaria plasma las intervenciones de los participantes y los detalles ocurridos durante el proceso.

Igualmente el Acta está firmada por los miembros de la Junta de Elección, integrada por los comisionados ingenieros Delia de Benítez, Iván Corsen, el investigador Toribio Domínguez, el técnico Emilio Dutari, así como también por la Presidenta, ingeniera Ana Teresa Quintero, quien también es la Secretaria del Consejo General Universitario y el Presidente del Consejo General Universitario, ingeniero Rodolfo Cardoze.

Expuesto lo anterior, procede ahora determinar si las personas que conforman el primer grupo, cuya participación objeta la parte actora, o sea quienes sí integraron el quórum y votaron el día de la elección del Rector, viciaron o no de nulidad el proceso eleccionario.

En autos reposa certificación N° SGSP-675 de 28 de septiembre de 1994, en la que la Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Panamá señaló los nombres de los electores que participaron en la Reunión N° 13-92 de 26 de octubre de 1992 (fs. 51). En dicha lista consta que los señores Luis Muñoz, Aristides Palma, Urbano Alaín, Horacio Apolayo ocupaban en ese momento las posiciones de Director del Centro Regional de Veraguas, Director del Centro Regional de Chiriquí, Director del Centro Regional de Azuero y Director del Centro Regional de Coclé, respectivamente.

Sin embargo, en autos no existe ninguna constancia de la forma en que dichas personas llegaron a ocupar esos cargos, ni se impugna su elección.

Como la parte actora pretende que se declare nula la participación de estos miembros del Consejo General Universitario en el acto de elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, porque según manifiesta, fueron elegidos conforme a un Reglamento que facultó a la Junta de Centros Regionales para elegir a los Directores de Centros Regionales en contravención a la Ley Orgánica de la Institución, debía probar que en efecto fueron elegidos de esta forma y además debía impugnar el acto de elección de dichos Directores de Centros Regionales. En vista de que no consta en autos la impugnación de su elección, no puede esta Sala declarar nula su participación como miembros del Consejo General Universitario.

La parte actora pide que se declare nula por ilegal adoptada por el Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su reunión N° 02-87 del 20 de mayo de 1987, por medio de la cual confiere a la Junta de Centros Regionales la facultad de elegir a los Directores de Centros Regionales.

Lo acordado por el Consejo General Universitario en la Sesión N° 02/87, celebrada el 20 de mayo de 1987, en uso de sus facultades reglamentarias, para conceder a la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Facultad o de la Junta de Centro Regional la potestad de elegir a los Decanos y Directores de Centros Regionales, no está vigente porque la Ley 17 de 1984 fue modificada por la Ley 57 de 1996, en su artículo 7 establece que los Decanos, Vicedecanos, Directores de Institutos Tecnológicos Regionales y los Centros Regionales serán elegidos por votación directa, secreta y ponderada, en forma similar a la elección del Rector, dos meses antes de concluir el período de las autoridades en ejercicio. Por tanto, esta norma reglamentaria ha desaparecido del mundo jurídico, produciéndose en consecuencia el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

Por todo lo expresado, esta Sala considera que el proceso eleccionario cumplió con los requisitos establecidos relativos al quórum reglamentario y a la cantidad de votos necesarios para la elección del Rector y no se violó el literal a) del artículo 31, literales a), f), g), j), k), m) y n) del artículo 19, artículo 6, ni el artículo 13 de la Ley 17 de 1984.

En virtud de lo expuesto, la Sala debe desestimar todos los cargos de violación esgrimidos por la parte actora, así como también negar todas las declaraciones pedidas en la presente demanda contencioso administrativa de nulidad.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ES ILEGAL el Acuerdo aprobado por el Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá en su Reunión del 26 de octubre de 1992, mediante la cual se valida el proceso de votación para la elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y se proclamó electo para dicho cargo al ingeniero Héctor Montemayor Abrego y se le hizo entrega del Acta y de su respectiva credencial; declara que se ha producido SUSTRACCIÓN DE MATERIA en relación con el Reglamento adoptado en la Sesión N° 02-87 de 20 de mayo de 1987, por el Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá; y NIEGA las demás declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO J. VARGAS D., EN REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCIÓN N° 768 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1993 Y EL ARTÍCULO 7 DE LA RESOLUCIÓN N° 96 DE 9 DE FEBRERO DE 1994, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de noviembre de 1995, mediante la cual se admite la demanda contenciosa administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Ricardo J. Vargas D., actuando en nombre y representación de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 10 de la Resolución N° 768 de 29 de diciembre de 1993 y el artículo 7 de la resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, emitidas por el Consejo de Gabinete.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda por considerar que la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

La Procuradora de la Administración fundamenta el recurso de apelación señalando que las disposiciones, sobre las cuales la parte demandante solicita su nulidad, fueron subrogadas por la Resolución de Gabinete N° 678 de 29 de diciembre de 1994 y que, por lo tanto, han desaparecido del ordenamiento jurídico vigente.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema observan que la señora Procuradora de la Administración no ha señalado

ningún tipo de defecto formal que haría inadmisible la demanda. Simplemente solicita a la Sala Tercera que revoque la resolución apelada dado que se produjo la sustracción de materia, por haber desaparecido del ámbito jurídico el objeto litigioso.

En virtud de lo anterior, este Tribunal de Apelación considera que no puede revocar la resolución apelada, debido a que es a la Sala Tercera a la que le corresponde decidir en un fallo de fondo si se ha producido o no la sustracción de materia. En este sentido el profesor Jorge Fábrega P. señala que "la razón por la cual el Juez ha de decidir este extremo en el fallo de fondo, es que, en nuestro sistema la instancia se termina mediante el fallo de fondo o mediante los supuestos especiales previstos en la ley (caducidad; cosa juzgada; nulidad de lo actuado, etc.)" (Jorge Fábrega P. Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña, Segunda Edición, Panamá, 1990, Tomo II, págs. 1195 y 1196).

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 15 de noviembre de 1995, mediante la cual SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Ricardo J. Vargas, actuando en nombre y representación de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 10 de la Resolución N° 768 de 29 de diciembre de 1993 y el artículo 7 de la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, emitidas por el Consejo de Gabinete.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SDEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL J. OSSA, EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DOMÍNGUEZ, LASTENIA DE PRUETT, LUIS CARLOS JAÉN, JORGE CASTILLO GARCÍA Y OMAR DE FRÍAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 43 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1995, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado RAÚL J. OSSA, actuando en nombre propio y en representación de los señores LUIS DOMÍNGUEZ, LASTENIA DE PRUETT, LUIS CARLOS JAÉN, JORGE CASTILLO JAÉN y OMAR DE FRÍAS, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo N° 43 del 5 de octubre de 1995, expedido por el Concejo Municipal del Distrito de La Chorrera.

I. EL ACTO ACUSADO

En la demanda se acusa de ilegal el Acuerdo Municipal N° 43 del 5 de octubre de 1995, por el cual "se modifica el ACUERDO N° 4 del 19 de enero de 1995, y se regulan los Terrenos Municipales donde está ubicada la Cantera El Coco", expedidos ambos por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera.

De acuerdo con las constancias procesales, el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera, a través del Acuerdo N° 4 del 19 de enero de 1995, aprobó un contrato mediante el cual el Alcalde de ese distrito dio en arrendamiento a la empresa Constructores y Asociados, S. A., un globo de terreno de 49 hectáreas, más 4.120.96 metros cuadrados, que forman parte de la Finca N° 9535, inscrita al Tomo 2797, folio 472, asiento 36. Dicho contrato se pactó por el

término de cinco años y un canon total de ochenta y cuatro mil balboas (B/.84.000.00)

Posteriormente, y en virtud de la solicitud hecha por la empresa Cantera El Coco, S. A., el mismo ente municipal dictó el Acuerdo Municipal N° 43 del 5 de octubre de 1995, mediante el cual modificó el aludido Acuerdo N° 4 del 19 de enero de 1995 y, en consecuencia, vendió y arrendó a Cantera El Coco, S. A., dos globos de terreno (de 25 y 24 hectáreas, respectivamente) que integran las 49 hectáreas objeto del contrato de arrendamiento anterior.

Las primeras 25 hectáreas fueron vendidas por la suma de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250.000.00), de los cuales ciento veinticinco mil (B/.125.000.00) serán cancelados en efectivo por la compradora durante los años 1996 (B/.75.000.00) y 1997 (B/.50.000.00) y el resto mediante material pétreo que dicha empresa entregará anualmente a las distintas Juntas Comunales y a la Administración Municipal durante los años 1996, 1997 y 1998, respectivamente.

Las restantes 24 hectáreas, más 4,120.96 metros cuadrados, fueron arrendadas a la misma empresa por un período de 20 años y canon total de cuatrocientos treinta y dos mil balboas (B/.432.000.00).

En su artículo 5°, el acuerdo municipal demandado autoriza al Departamento de Ingeniería Municipal para que haga el plano de la segregación necesaria para celebrar, mediante escrituras públicas, los contratos de venta y arrendamiento; así como al señor Alcalde del Distrito de La Chorrera y al Tesorero Municipal para que, indistintamente, firmen los contratos a que se refiere el mencionado Acuerdo Municipal N° 43.

El licenciado Ossa pidió a la Sala que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado, declare también la nulidad del contrato de venta de 25 hectáreas de la Finca 9535, inscrita al Tomo 297, Folio 72, Asiento 36, propiedad del Municipio de La Chorrera, y el contrato de arrendamiento con opción de compra de 24 hectáreas y media de la misma finca, por un período de 20 años.

II. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte actora considera que el Acuerdo Municipal impugnado violó los artículos 98, 99, 100, 101, 102, 104 y 21 (Numeral 4°) de la Ley N° 106 de 1973, normas que, en el mismo orden, preceptúan lo siguiente:

> "ARTÍCULO 98. Todos los bienes municipales que no sean necesarios para un uso o servicio público, podrán venderse o arrendarse por medio de licitación pública, siguiendo las normas que para los bienes nacionales tienen establecidos el Código Fiscal y leyes que lo reforman. Se exceptúan los terrenos adquiridos por el Municipio para área y ejidos, los cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca esta Ley y los Acuerdos Municipales.
>
> PARÁGRAFO. Se excluye el requisito de la licitación pública en las transacciones contractuales que celebren los municipios, ya sea con la Nación o con las Instituciones Autónomas o Semiautónomas del Estado."
>
> "ARTÍCULO 99. La venta de bienes municipales deberá ser decretada por el respectivo Concejo, mediante acuerdo, y se llevará a efecto por medio de licitación pública de conformidad con las reglas establecidas por la ley para la venta de bienes nacionales en cuanto fueren aplicables. Cuando se trate de bienes inmuebles se requerirá un acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) partes del Concejo."
>
> "ARTÍCULO 100. En el caso de que no circulara ningún periódico en el lugar donde debe llevarse a cabo la licitación el anuncio se hará por medio de carteles, que se fijarán en las esquinas de las calles y lugares públicos de mayor circulación de la cabecera del

respectivo distrito y de la población en que estuviere situado el bien."

"ARTÍCULO 101. La licitación se llevará a cabo por el Tesorero Municipal del respectivo distrito y para ser postor hábil en ella se necesita consignar previamente el diez (10%) por ciento del avalúo del bien que vaya a ser rematado."

"ARTÍCULO 102. El Tesorero devolverá a los postores vencidos en las licitaciones las sumas consignadas por ellos en calidad de fianza. El postor favorecido que no pagare el precio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la adjudicación provisional, perderá el depósito dado en garantía."

"ARTÍCULO 104. El arrendamiento de bienes municipales se efectuará en lo pertinente con arreglo al procedimiento establecido para la venta de dichos bienes."

"ARTÍCULO 21. Es prohibido a los Concejos:

3° Condonar obligaciones a favor de los Municipios, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 57 de esta Ley.
4° ..."

Los demandantes sostienen que el acto acusado violó el transcrito artículo 98 porque a través del mismo se autorizó la venta de 25 hectáreas de terrenos municipales sin cumplir con el trámite de la licitación pública ordenado por aquélla norma. Pero para mejor ilustración veamos lo que al respecto expresan los demandantes:

"El artículo 98 cuya violación denunciamos autoriza la venta o arrendamiento de bienes municipales por dos vías distintas según el destino señalado a dichos bienes, a saber:

a- Si los bienes municipales de que se trate no son "necesarios para uso o servicio público, pueden venderse o arrendarse por medio de licitación pública aplicando las normas establecidas en el Código Fiscal.

b- Si se trata de terrenos destinados a áreas (sic) o ejidos, "pueden ser vendidos o arrendados de conformidad con lo que establece esta Ley (106/73) y los acuerdos municipales.

¿Qué establece esta Ley? La Ley 106 de 1973, en sus artículos 99, 100 y siguientes establece detalladamente el proceso de licitación pública a que está obligado el Municipio para este tipo de operación o contrato.

En conclusión de acuerdo con el artículo 98 no hay manera de vender un inmueble de propiedad municipal que no sea mediante el trámite de licitación pública, unas veces aplicando lo dispuesto en el Código Fiscal y, en otros casos, aplicando la Ley 106 de 1973, pero siempre mediante el procedimiento de licitación pública, para evitar los favoritismos, las componendas y amañamientos que están siempre presentes en las operaciones relativas a la cosa pública que no se manejan a la luz diurna y en público.

Obviamente, pues, la regla anterior encuentra sus excepción, en el caso de La Chorrera, cuando se trata de lotes de terrenos no mayores de 600 metros los cuales se pueden adjudicar con fines sociales para la construcción de viviendas, conforme lo establece el acuerdo 11-A de 1969, sin licitación pública pero en apego al proceso que establece el citado acuerdo municipal". (F. 37)

Con relación al artículo 99 antes mencionado, la parte actora señala que esta disposición indica el camino a seguir cuando se trate de terrenos adquiridos

por el Municipio para área o ejidos, o sea, que el artículo 99 expresa claramente la voluntad del legislador en el sentido de que este tipo de terrenos únicamente puedan ser vendidos "por medio de licitación pública de conformidad con las reglas establecidas por la Ley para la venta de bienes nacionales en cuanto fueren aplicables." Según la norma en cita, la potestad del Concejo Municipal se limita a tomar la decisión de vender, autorizar la venta. Luego corresponde a los funcionarios competentes, como al Alcalde y al Tesorero con el visto bueno de la Contraloría General de la República, establecer precio base, condiciones, términos, convocatoria del proceso de licitación pública y demás trámites, garantizando la libre participación y competencia de quienes muestren interés y así obtener el resultado más favorable posible al Municipio.

Los demandantes estiman, asimismo, que el acto acusado violó los artículos 100, 101 y 102 de la Ley N° 106 de 1973 porque al dictarlo, el Consejo Municipal de La Chorrera no cumplió con el procedimiento de licitaciones señalado en estas normas. Respecto del artículo 104 ibidem, éstos sostienen que el mismo resultó infringido por el artículo 3° del Acuerdo Municipal acusado, toda vez que el contrato de arrendamiento de las 24 hectáreas más 4,120.96 metros de tierras municipales, tampoco se hizo siguiendo los trámites de la licitación pública.

En el concepto de la infracción del numeral 3° del artículo 21 ibidem, los demandantes expusieron lo que sigue:

> "El acuerdo N° 43 de 5 de octubre de 1995, viola el artículo 21 numeral 3 de la Ley 106 de 1973, por cuanto que el acuerdo anterior, N° 4 de 19 de enero de 1995, aprobó el contrato de arrendamiento celebrado entre CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S. A. y el MUNICIPIO DE LA CHORRERA, sobre el área donde está ubicado el yacimiento minero en la finca 9535, tomo 297, folio 297 (sic), folio 472, asiento 36, contrato éste que establece la obligación del arrendador de pagar la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.84,000.00) en concepto de canon de arrendamiento durante los próximos cinco años. No obstante, el acuerdo N° 43 de 5 de octubre de 1995, rebaja el canon de arrendamiento a la suma de CUARENTA Y DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.42,000.00) durante los próximos 5 años y eso constituye una condonación disfrazada del 50% del monto de la obligación que tenía la arrendataria."

II. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración contestó la demanda por medio de la Vista N° 554 del 29 de diciembre de 1995, coincidiendo con los demandantes en que la venta y el arrendamiento de las 25 y 24 hectáreas, respectivamente, de terrenos municipales a que se refiere el Acuerdo Municipal impugnado debió realizarse previo el trámite de la licitación pública, por no estar contempladas dichas tierras dentro de las dos excepciones consagradas en el artículo 98 de la Ley N° 106 de 1973.

IV. EL INFORME DE CONDUCTA

La entidad municipal demandada rindió su informe de conducta a través de la Nota S/N° de 22 de noviembre de 1995, indicando que no le asiste razón a los demandantes porque la regla general relativa a la venta y arrendamiento de bienes municipales mediante licitación pública tiene como excepciones "los terrenos adquiridos por el Municipio para áreas y ejidos y efectivamente este Consejo es del criterio que todos los terrenos de las fincas de su propiedad que no han sido segregados para formar finca nueva son evidentemente para áreas municipales y por ende exceptuados del procedimiento de licitación pública. Aún más desde que se autorizó la venta de las tierras del Municipio 1969, se han venido adjudicando áreas de terrenos municipales sin licitación pública, sin concurso de precio y sin solicitud de precio. Entre la competencia de los Consejos Municipales por Ley, está la competencia exclusiva de reglamentar la venta, arrendamiento y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones y de los demás terrenos municipales (Artículo 17, Ley 106 de 1973)" (fs. 54-56).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Mediante el Acuerdo Municipal N° 43 del 5 de octubre de 1995, el Concejo Municipal del Distrito de La Chorrera dio en venta a la empresa Cantera El Coco, S. A., un globo de terreno de veinticinco (25) hectáreas y le alquiló otras veinticuatro (24), las cuales forman parte de la Finca N° 9535, inscrita al Tomo 2797, Folio 472, Asiento 36, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá. Según el propio acuerdo municipal demandado, en estos terrenos está ubicada la Cantera El Coco, S. A.

De acuerdo con los demandantes, el Acuerdo Municipal N° 43 citado debe declararse nulo porque no cumplió con el requisito de la licitación pública, exigido por el artículo 98 de la Ley N° 106 de 1973, tanto en lo que se refiere a la venta de las primeras 25 hectáreas como en lo atinente al arrendamiento de las 24 restantes a la empresa Cantera El Coco, S. A.

La representante del Ministerio Público estima que la venta y arrendamiento de las 25 y 24 hectáreas, respectivamente, debió hacerse por medio de licitación pública, toda vez que una cantera no puede considerarse como un área o ejido municipal, por lo cual su venta o arrendamiento debió llevarse a cabo por medio de licitación pública.

La Cámara edilicia demandada considera que no le asiste razón a la demandante, toda vez que los terrenos a que se refiere el impugnado Acuerdo Municipal N° 43 son áreas municipales y, siendo esto así, su venta o arrendamiento está exceptuada del procedimiento de licitación pública, de conformidad con el primer párrafo del artículo 98 de la Ley N° 106 de 1973.

De acuerdo con el citado artículo 98, todos los bienes municipales que no sean necesarios para un uso o servicio público podrán venderse o arrendarse por medio de licitación pública, siguiendo para tales efectos, las normas del Código Fiscal que regulan la venta o arrendamiento de los bienes nacionales. De esta regla general se excepcionan "los terrenos adquiridos por el Municipio para área y ejidos, las cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca esta Ley y los Acuerdos Municipales". En otras palabras, la venta o arrendamiento de dichos terrenos debe hacerse con arreglo a la reglamentación que establezcan los Concejos Municipales a través de los Acuerdos respectivos, en virtud de la facultad que les confiere el numeral 9° del artículo 17 de la Ley N° 196 de 1973.

En el caso que nos ocupa, el Acuerdo Municipal N° 11 del 6 de marzo de 1969, "reglamenta la adjudicación en venta y arrendamiento de los **lotes** de propiedad del Municipio de La Chorrera", entendiéndose por lotes o solares, "Cada una de las parcelas en que se divide un terreno destinado a edificación" o aquella "Porción de terreno donde se ha edificado o que se destina a edificar" (Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa-Calpe, S. A. 21ª ed. Madrid. 1992. Págs. 899 y 1345, respectivamente).

Partiendo de esta base conceptual, la Sala estima que le asiste razón al demandante, toda vez que el citado Acuerdo Municipal N° 11, que es el cuerpo normativo aplicable a la venta o arrendamiento de tierras del Municipio de La Chorrera, sólo autoriza la venta o arrendamiento directo de los lotes que poseen una superficie de seiscientos metros cuadrados (600 mts. 2), destinados particularmente a fines sociales o habitacionales; al igual que de aquellos cuya superficie sea de hasta una (1) hectárea, siempre y cuando éstos últimos tengan fines o propósitos comerciales o industriales. Con ello queda entendido que la venta o arrendamiento de solares con una extensión mayor de una (1) hectárea, debe hacerse por medio de licitación pública.

El artículo 8° del citado Acuerdo Municipal, modificado por el artículo 1° del Acuerdo Municipal N° 35 del 11 de agosto de 1971, dice textualmente:

> "Artículo 8. A partir de la vigencia del presente Acuerdo **los lotes Municipales tendrán una extensión de Seiscientos metros** cuadrados, con un frente máximo de Treinta (30) metros. Ninguna persona podrá

> poseer más de dos lotes. Los lotes Comerciales e Industriales **hasta de una (1) hectárea** de terreno serán adjudicados en venta directamente por el señor Alcalde del Distrito. Los lotes **de más de una (1) hectárea** para su adjudicación en venta y con fines Comerciales e Industriales, para su adjudicación venta, **deberán ser autorizados** por la Junta Municipal de Síndicos, previo el informe favorable de una Comisión Especial compuesta por el Alcalde y Presidente de la Junta Municipal de Síndicos y Auditor Municipal." (Acentúa y subraya la Sala).

Al examinar el contenido de la disposición transcrita se advierte, en primer lugar, que la misma hace una clasificación de los lotes municipales en atención a la extensión o superficie que los mismos poseen, a saber:

> a) Los lotes de con una extensión de seiscientos metros cuadrados (600 mts. 2)
>
> b) Los lotes comerciales e industriales de hasta una (1) hectárea, y;
>
> c) Los lotes de más de una hectárea, con fines comerciales e industriales.

Esta norma también clasifica los lotes según su uso, en comunes o destinados a fines sociales o habitacionales (los de hasta seiscientos metros cuadrados) y lotes destinados a fines comerciales o industriales.

El Acuerdo Municipal N° 11 de 1969 consagra también el procedimiento que debe seguir el Municipio de La Chorrera para la adjudicación a título de venta o arrendamiento de estos lotes o solares. A este respecto, los artículos 11 y 12 establecen que toda persona que desee ocupar un lote de terreno municipal mediante arrendamiento o compra, debe presentar al Alcalde una solicitud en papel sellado, acompañada de una copia de dicha solicitud, del original y dos copias del plano topográfico, del recibo de pago de la tasa de aprobación del plano topográfico y del paz y salvo municipal. Recibida la solicitud, debe pasarse al Departamento de Ingeniería Municipal a fin de que en el mismo se elabore un informe acerca de la viabilidad o no de la solicitud y, de ser ésta factible, se apruebe el plano del lote solicitado, previa inspección del mismo por parte del Agrimensor del aludido Departamento.

Posteriormente, deben publicarse los edictos relativos a la solicitud (art. 14) y, transcurrido el término de la fijación de los edictos, el expediente contentivo de la solicitud, junto con el informe de Ingeniería Municipal debe pasar a la Secretaría General de la Alcaldía para que ésta tome conocimiento. Si no existe oposición de ningún particular ni de la Secretaría General, el Alcalde del Distrito, previo pago del terreno, debe dictar una resolución mediante la cual declara adjudicatario provisional al solicitante, quien "... tiene autorización para construir dentro de un plazo de seis meses, prorrogables por seis meses más, después de los cuales, sino ha construido, el terreno revertirá al Municipio con las mejoras realizadas" (art. 17). Asimismo, el artículo 18, modificado por el Acuerdo Municipal N° 17 del 28 de mayo de 1992, establece que una vez que la persona "... construye hasta la viga del techo, previo el Informe del Ingeniero Municipal, el adjudicatario provisional tiene derecho a que se le conceda el título de Propiedad mediante Resolución que apruebe el Contrato de Venta, y que deberá ser firmado por el señor Alcalde y la Secretaría General de la Alcaldía, siempre y cuando el Adjudicatario haya cancelado el precio del lote".

Finalmente, el artículo 19, modificado por el Acuerdo Municipal N° 17 del 28 de mayo de 1992, dispone que "La Resolución que aprueba el Contrato descrito en el Artículo anterior tiene que ser protocolizado ante cualquiera Notaría de Circuito de Panamá".

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo N° 11 de 1969, este mismo procedimiento se aplica a las solicitudes de **arrendamientos** de lotes o solares, cuyas "... adjudicaciones tienen las mismas limitaciones en

extensión que las adjudicaciones en propiedad".

El ámbito de aplicación de este procedimiento está claramente definido en el artículo 1° del Acuerdo N° 11 de 1969, el cual establece que partir de la vigencia de dicho cuerpo normativo, "... todas las tierras que formen parte del patrimonio municipal, especialmente, las fincas 6,028 y **9,535**, y sobre las cuales la nación y el municipio no hayan conferido el respectivo título de propiedad, se regirán en cuanto a su tenencia, uso, arrendamiento, y venta por el presente acuerdo".

Tal como se ha visto, la venta o arrendamiento de los lotes con una extensión de seiscientos metros cuadrados (600 mts. 2) puede hacerla el Alcalde del Distrito de La Chorrera en forma directa, es decir, sin licitación pública, siguiendo para estos efectos el procedimiento señalado en el Capítulo III del Acuerdo N° 11 del 6 de marzo de 1969. Lo mismo ocurre con los lotes comerciales o industriales que tienen una superficie de **hasta una (1) hectárea** los cuales, de conformidad con el transcrito artículo 8°, pueden ser adjudicados mediante venta directa por el señor Alcalde. Según esta norma, "Los lotes Comerciales e Industriales hasta una (1) hectárea de terreno serán adjudicados en venta directamente por el señor Alcalde del Distrito de La Chorrera", entendiéndose que previos los trámites establecidos en los artículos 11 al 20 del Acuerdo N° 11 de 1969.

Una situación distinta ocurre con los lotes o solares cuya extensión es superior a una (1) hectárea, con respecto a los cuales el Acuerdo N° 11 de 1969 no indica que pueden adjudicarse mediante venta directa, es decir, sin cumplir con el requisito de la licitación pública. A este respecto, el comentado artículo 8 ibidem se limita a expresar que "... su adjudicación en venta y con fines Comerciales e Industriales, para su adjudicación venta (sic) deberán **ser autorizados** por la Junta Municipal de Síndicos, previo el Informe favorable de una Comisión Especial compuesta por el Alcalde y Presidente de la Junta Municipal de Síndicos y Auditor Municipal".

En este punto es importante dejar claramente establecido, que la autorización por parte del Concejo Municipal a que se refiere la aludida norma constituye un acto distinto y previo a la celebración de la licitación pública, cuya expedición tiene fundamento en el numeral 7° del artículo 17 de la Ley N° 106 de 1973 (modificado por la Ley N° 52 de 1984), que señala como una función de **"competencia exclusiva"** de los Concejos Municipales, la de **"Disponer de los bienes y derechos del Municipio"**. En otras palabras, si al Concejo Municipal corresponde la facultad de disponer de los bienes y derechos del Municipio, es evidente que se requiera la autorización previa de esta corporación municipal para la venta o arrendamiento de los mismos.

El artículo 99 de la Ley N° 106 de 1973 no deja duda alguna sobre este razonamiento, al indicar que "La venta de bienes municipales deberá ser decretada por el respectivo Concejo, mediante acuerdo, y se llevará a efecto por medio de licitación pública ...".

En atención a lo expuesto, la Sala estima que el Acuerdo Municipal N° 11 de 1969 sólo faculta al señor Alcalde del Distrito de La Chorrera para vender o arrendar en forma directa lotes de terrenos municipales de seiscientos metros cuadrados (600 mts. 2) y lotes comerciales o industriales de hasta una (1) hectárea de extensión. La venta o arrendamiento de solares con una superficie de más de una (1) hectárea debe hacerse mediante licitación pública y previa autorización del mencionado Concejo Municipal.

En el caso bajo examen, el Concejo Municipal del Distrito de La Chorrera, a través del Acuerdo N° 43 del 5 de octubre de 1995, procedió a modificar el Acuerdo N° 4 del 19 de enero de 1995 y dio en venta a la empresa Cantera El Coco, S. A., un globo de terreno de 25 hectáreas por un monto de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250.000.00) y le arrendó otro lote de 24 hectáreas más 4,120.96 metros cuadrados, por un canon total de cuatrocientos treinta y dos mil balboas (B/.432.000.00). Según el texto del Acuerdo N° 4, las 49 hectáreas dadas originalmente en arrendamiento serán utilizadas por el arrendatario para la

ubicación de una cantera, cuya operación, administración y venta fue previamente adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas mediante licitación pública a la empresa Cantera El Coco, S. A. Dicha cantera está ubicada dentro de las 49 hectáreas más 4,120.96 metros cuadrados, propiedad del Municipio de La Chorrera, a las que se refiere el acto impugnado (Ver. G. O. N° 22.565, del 24 de junio de 1994).

Al examinar el texto del mencionado acuerdo, así como el contenido del Acta N° 40 del 5 de octubre de 1995, correspondiente a la Sesión Ordinaria del mismo día y en la que se sometió a la aprobación de los miembros del Concejo Municipal chorrerano el contenido del acto impugnado, se observa que la venta y el arrendamiento a la empresa Cantera El Coco, S. A. de las 25 y 24 hectáreas de tierras, respectivamente, fueron hechas en forma directa por la cámara edilicia chorrerana, esto es, sin que cumplieran con el requisito previo de la licitación pública ordenada por el artículo 98 de la Ley N° 106 del 8 de octubre de 1973, la cual debió celebrarse con arreglo a las normas que para los bienes nacionales contiene el Código Fiscal, en cuanto le fueren aplicables. A los ediles los faculta la Ley N° 106 de 1973 y el Acuerdo Municipal N° 11 de 1969 y sus modificaciones sólo para autorizar la venta y el arrendamiento de terrenos municipales con una extensión de más de una (1) hectárea, pero estos contratos deberán celebrarse mediante los trámites de la licitación pública, como ha quedado explicado.

Por estos motivos, la Sala considera que el Acuerdo Municipal N° 43 del 5 de octubre de 1995 violó los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 104 de la Ley N° 106 de 1073, que el actor cita como violados en su demanda. Comprobados los cargos de violación formulados respecto de estas normas, la Sala estima que, por razones de economía procesal, es innecesario examinar la supuesta infracción del numeral 3° del artículo 21 ibidem.

Por las razones anotadas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULO, POR ILEGAL, el Acuerdo Municipal N° 43 del 5 de octubre de 1995, expedido por el Concejo Municipal del Distrito de La Chorrera.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARGO TOURS, S. A., Y AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS TRIBUTOS O GRAVÁMENES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL N° 9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TABOGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis Alberto Gutiérrez, en representación de **ARGO TOURS, S. A.** y **AGRO GANADERA SANTA FE, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, los gravámenes contenidos en el Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, expedido por el Consejo Municipal de Taboga.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de las partes demandantes solicita a esta Superioridad que declare la ilegalidad de los tributos o gravámenes establecidos en el precitado Acuerdo Municipal "Por el cual se derogan todos los acuerdos

relacionados con impuestos, tasas, derechos y contribuciones, y se establece el nuevo régimen impositivo del Municipio de Taboga", específicamente los Códigos **1. 1. 2. 5. 93, 1. 1. 2. 5. 99, 1. 1. 2. 5. 94 y 1. 2. 1. 1. 4. 02 (ordinal e),** todos correspondientes al Artículo 2 del referido acuerdo, que crean impuestos y tasas municipales bajo el rubro de actividades turísticas e ingresos por venta de servicios, específicamente para el aseo, recolección y mantenimiento de playas. El texto de los mismos es el siguiente:

"**ARTÍCULO 2°**: ...
1. 1. 2. 5. 93 Empresas Turísticas:

Todo barco o lancha que se dedique a la actividad comercial de transporte o paseo de bienes y personas por la circunscripción dentro de los límites del distrito.

Pagarán por mes o fracción de mes B/.100.00 a B/.200.00.

1. 1. 2. 5. 99 Otras actividades n. e. o. c. pagarán por mes o fracción de mes; B/.5.00 a B/.200.00.

1. 1. 2. 5. 94 Todo yate de Lujo que se dedique a Actividades Recreativas y permanecen en aguas Territoriales del Distrito de Taboga, pagarán una tasa de B/.10.00 a B/.20.00, para satisfacer el Servicio Público de Aseo y Ornamento y mantenimiento de las Playas, el cual debe ser pagado por los Propietarios o Representantes legales de dichos Yates."
...
1. 2. 1. 4. 02 Aseo, Recolección de Basura y Mantenimiento de playas. Incluye los ingresos que percibe el municipio por brindar el Servicio de recolección de Basura a la comunidad y aseo de playas, pagarán:
...
e) Todo turista, nacional, o extranjero que visite la Isla de Taboga, pagará para su limpieza, mantenimiento, etc.
B/.0.25 a B/.050".

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El ente administrativo demandado en esta ocasión, el Presidente del Consejo Municipal de Taboga, por conducto de su presidente, en su informe explicativo de conducta, legible a f. 83-84, indicó a esta Superioridad que al proceder a regular la materia tributaria municipal, mediante las normas cuya ilegalidad se acusa lo hizo con fundamento en las siguientes consideraciones:

"En primer lugar, las empresas Argo Tours, S. A. y Agro Ganadera Santa Fe, S. A. prestan el servicio de transporte colectivo de pasajeros y de carga hacia y desde la Isla de Taboga, aproximadamente transportan de 6,000,00 a 8,000,00 pasajeros mensualmente, y carga de todo tipo de mercadería.

Es un hecho público y notorio el aprovechamiento de estas empresas de los recursos naturales de la isla de las flores (Taboga).

En base a lo anterior y con fundamento en el Artículo 75, ordinal 4 y Artículo 76, ordinal 18, el Municipio de Taboga gravó a las mencionadas empresas.

En segundo lugar, la Isla de Taboga se ha convertido en los últimos años en un atractivo turístico, de tal manera que recibimos mensualmente de 6,000,00 a 8,000,00 visitantes. Ellos provocan un deterioro creciente de las playas de esta codiciada Isla, el medio ambiente se afecta diariamente por la cantidad de desechos sólidos que se despiden en este territorio tabogano, y existe el peligro de que la mencionada isla sufra mayores perjuicios y en consecuencia su atracción turística.

Ante esta realidad el Municipio de Taboga facultado por el Artículo 17, ordinal 14 de la Ley 106 de 1973 reformada por la Ley 52 de 1984, es el encargado de brindar el servicio de aseo urbano y domiciliario en Taboga. Dicho servicio público se brinda mediante el pago de una tasa que tiene, como hecho generador, la prestación efectiva del mencionado servicio. Dicho tributo se le carga al usuario o contribuyente, y en el caso que nos ocupa sería las empresas Argo Tours, S. A. y Agro Ganadera Santa Fe, S. A. y cada uno de sus visitantes.

Quien produce la basura está obligado a disponer de ella de la manera correcta, la misma debe ser depositada en los vertederos que para el efecto se han destinado, pero como a cada turista y a cada empresa que se dedica al transporte de los mismos le es difícil o casi imposible cumplir con este requerimiento necesario, entonces aparece la municipalidad como la responsable de mantener la ciudad limpia, a fin de evitar la contaminación del medio ambiente y las epidemias que puedan aparecer por la acumulación de basura.

Por las razones expuestas el Municipio de Taboga con fundamento en el Artículo 176, ordinal 14 y Artículo 76, ordinal 19 de la Ley de base municipal gravó a las empresas Argo Tours, S. A. y Agro Ganadera Santa Fe, S. A. y a cada uno de los turistas que visiten la Isla de Taboga, como usuarios de este servicio público.

Ahora bien, según los demandantes los tributos mencionados (Código 1, 1, 2, 5, 93 Empresas Turísticas; 1. 1. 2. 5. 99 Otras Actividades n, e, o, c,: 1. 1. 2. 5. 94; y 1. 2. 1. 4. 02 Literal E) tienen por una parte incidencia fuera del territorio del Distrito de Taboga, por el hecho de que las empresas en cuestión tienen su domicilio en otro distrito, se grava lo ya gravado por la Nación y por otra se está cobrando una entrada a la isla a los visitantes." ...

NORMAS ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El demandante estima que el Acuerdo Municipal impugnado es violatorio de los artículos 75 (ordinal 1), 17 (ordinal 8), 72 (ordinal 5), 21 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984.

Las precitadas normas legales en el orden establecido señalan:

"**ARTÍCULO 75.** Son gravables por los Municipios los negocios siguientes:

1. Agencias y representaciones de fábricas o empresas, comisionistas, distribuidores, publicitarias y de viajes en los municipios donde tengan su domicilio."

"**ARTÍCULO 17.** Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:
...
8. Establecer impuestos, contribuciones derechos y tasas, de conformidad con las leyes, para atender los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales."

"ARTÍCULO 72. El Tesoro Municipal lo componen, sin que ello constituya limitación;
...
5. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios."

"**ARTÍCULO 21.** Es prohibido a los Concejos:
...
6. Gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación."

En cuanto a la violación del artículo 75 (ordinal 1), de la Ley 106 de

1973, el demandante sostiene que la misma se ha dado en atención a que si bien la misma autoriza a los municipios a gravar una serie de negocios y actividades comerciales, no los faculta a gravar empresas turísticas, barcos o lanchas que se dediquen al transporte de bienes y personas dentro de los límites del distrito, como tampoco a otras actividades n. e. o. c. Agrega que en su caso, **ARGO TOURS, S. A.**, propietaria de la nave **FANTASÍA DEL MAR**, está domiciliada en el Municipio de Panamá, encontrándose desvinculada del ámbito municipal del Distrito de Taboga, creándose un gravamen que tiene incidencia fuera de éste.

En lo que respecta a la infracción del artículo 17 (ordinal 8), de la Ley 106 de 1973, el recurrente indica que la misma se ha dado de manera directa, por omisión o inaplicación. En tal sentido sostiene que, el Consejo Municipal de Taboga ha establecido gravámenes que no están de conformidad con las leyes, al pretender gravar una actividad no establecida en la ley, resultando a todas luces ilegal, no teniendo el Consejo Municipal de Taboga competencia para gravar barcos, yates o lanchas, así como tampoco para gravar el ingreso de turistas nacionales o extranjeros que visiten la isla.

Sobre la infracción del artículo 72 (ordinal 5), de la Ley 106 de 1973, el demandante sostiene que al ser gravadas las empresas marítimas, turísticas, barcos o yates, así como la visita de los turistas a la isla que se dediquen a la actividad de transporte o paseo de bienes o servicios dentro de los límites del distrito, constituye una ilegalidad por cuanto, dichas empresas marítimas, turísticas, barcos o yates, así como la visita de los turistas a la isla no autorizan, ni usan bienes o servicios municipales alguno.

En lo que respecta a la infracción del artículo 21 (numeral 6), la parte actora señala que el mismo ha sido violado de manera directa por comisión, puesto que los barcos o lanchas dedicadas a la actividad comercial de transporte de bienes y personas, son gravadas con impuestos por parte del Estado, de conformidad con lo dispuesto en lo artículos 1057- a y 1057- b del Código Fiscal, y el artículo 1 de la Ley 63 de 9 de diciembre de 1976 "por medio de la cual se establece el paz y salvo a las naves de la Marina Mercante Nacional".

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 292 de 1° de julio de 1996, que corre a folios 85-93, la Procuradora de la Administración, actuando en interés de la ley, en atención a lo dispuesto en el artículo 348 (ordinal 1), del Código Judicial, al referirse a la presunta violación del acto impugnado, coincidió con los pretensiones del recurrente para que se declare la ilegalidad de los precitados Códigos 1. 1. 2. 5. 93, y 1. 1. 2. 5. 99 y 1. 1. 2. 5. 94 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995. En este orden de ideas sostiene que el Consejo Municipal del Distrito de Taboga ha establecido un tributo que tiene incidencia fuera de éste, al afectar actividades que se desarrollan dentro y fuera de sus límites, contrariando lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. Además señala que el Consejo Municipal de Taboga pretende gravar una actividad que no se encuentra contemplada en la ley.

También sostiene que es ilegal el referido Acuerdo, en razón de que las embarcaciones o lanchas dedicadas a la actividad comercial de transporte de bienes y personas que persigue gravar el Consejo Municipal del Distrito de Taboga, se encuentran gravadas por el Impuesto a la Navegación en aguas jurisdiccionales que establece el Código Fiscal. Por consiguiente, agrega que pretender gravar nuevamente esta actividad, conlleva a que se configure la doble tributación que prohíbe expresamente el numeral 8, del artículo 21 de la Ley 106 de 1973. Aunado a que la potestad tributaria de los Municipios está limitada a las materias que la ley formal autoriza, y en el caso subjúdice, la Ley 106 de 1973 no autoriza al cobro de estos impuestos, a los barcos, yates, y demás embarcaciones, los cuales ya han sido gravados por la Nación.

En cuanto al Código 1. 2. 1. 4. 02, que establece la tasa por Aseo, recolección de basura y mantenimiento de playas, para todo turista nacional o extranjero que visite la Isla de Taboga, la Procuradora de la Administración sostiene que el mismo no infringe disposición legal alguna.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales que rigen este tipo de procesos, la Sala procede a resolver la controversia planteada.

En lo que respecta a los Códigos 1. 1. 2. 5. 93., 1. 1. 2. 5. 99 y 1. 1. 2. 5. 94 del Artículo 2 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, que establecen la imposición de un impuesto a todo barco que se dedique a la actividad comercial de transporte o paseo de bienes y personas por la circunscripción dentro de los límites del distrito, u otras actividades análogas; además de la imposición de una tasa para todo yate de lujo que se dedique a actividades recreativas y permanezca en aguas territoriales del distrito de Taboga, la Sala considera que las mismas transgreden las disposiciones relativas a las facultades que tienen los Consejos Municipales para gravar una serie de actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el distrito.

El ordinal 8 del artículo 17 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984, establece que los Consejos Municipales tienen competencia para establecer **impuestos**, contribuciones, rentas, derechos y tasas, de **conformidad con las leyes**, para atender a los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales. En el artículo 75 de la precitada Ley, se establece una serie de negocios, actividades o explotaciones gravables por los Municipios, entre las que no se incluye el cobro de estos impuestos a los barcos, yates, y demás embarcaciones, que efectúen las precitadas actividades.

El artículo 21 (ordinal 6), por su parte, prohíbe a los Consejos gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación. De igual manera, el artículo 242 de la Constitución Nacional preceptúa que son **municipales** los impuestos **que no tengan incidencia fuera del Distrito**, y que la ley podrá establecer excepciones para que determinados impuestos sean municipales a pesar de tener esa incidencia.

De conformidad con las precitadas disposiciones legales y constitucionales, el Consejo Municipal de Taboga ha establecido un tributo que tiene incidencia fuera de los límites del Distrito de Taboga, ya que afecta una serie de actividades (lucrativas y recreativas), que se desarrollan dentro de los límites del Distrito y fuera de éste, y que de conformidad con la ley, no constituye excepción al precitado artículo 242 de la Constitución Nacional.

Aunado a que las embarcaciones o lanchas dedicadas a la actividad comercial de transporte de bienes y personas, así como las que se dedican a efectuar actividades recreativas por el Distrito de Taboga, se encuentran previamente gravadas con el Impuesto a la Navegación en Aguas Jurisdiccionales, según lo dispuesto en los artículo 1057-a y 1057-b del Código Fiscal, como veremos a continuación:

> **"ARTÍCULO 1057-a:** Las lanchas, yates o motonaves dedicadas a uso particular en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, deberán obtener y portar a bordo una licencia de navegación que será expedida por la Dirección Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
>
> Esta licencia de navegación será válida por el término de un (1) año, comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre, la cual puede ser prorrogada sucesivamente por igual período de tiempo. El costo de expedición de dicho documento, así como sus prórrogas será de cinco balboas (B/.5.00).
>
> Las que pertenezcan a un Registro extranjero que ingresen con carácter temporal en aguas jurisdiccionales de la República obtendrán su respectiva licencia de navegación, la cual en ningún caso podrá ser otorgada por término menor de tres (3) meses."

"**Artículo 1057-B:** Se establece un impuesto a la navegación en aguas jurisdiccionales de la República que pagarán los propietarios de las naves a que hace referencia el artículo anterior, conforme a las siguientes tarifas:

a) Los propietarios de lanchas, yates o motonaves dedicadas a uso particular pagarán la siguiente tarifa anual:

1. Hasta 6 metros de eslora
   B/.24.00
2. Mayores de 6 hasta 10 metros de eslora
   B/.120.00
3. Superiores a los 10 metros de eslora
   B/.240.00

En los casos en que la licencia de navegación no coincida co el respectivo año calendario, se pagará la parte del impuesto correspondiente al tiempo que falte para completarlo. Deberán pagar previamente el doble de este impuesto, las que estando así clasificadas, deseen efectuar actividades con fines lucrativos.

Para esos efectos, se expedirá una licencia especial en la cual se harán las referencias correspondientes.

b) Los propietarios de lanchas, yates o motonaves de uso particular, pertenecientes a un Registro extranjero, que ingresen en aguas jurisdiccionales de la República con carácter temporal hasta por tres (3) meses pagarán la siguiente tarifa:

1. Hasta 6 metros de eslora
   B/.15.00.
2. Mayores de 6 hasta 10 metros de eslora
   B/.30.00.
3. Superiores a los 10 metros de eslora
   B/.50.00".

De conformidad con lo expresado, al pretender el Municipio de Taboga gravar esta actividad, se viola flagrantemente la prohibición legal de la doble tributación, establecido en el artículo 21 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, pues resulta evidente que tales actividades ya han sido previamente gravadas con el Impuesto Nacional a la Navegación en Aguas Jurisdiccionales.

Debe estimarse entonces que los Códigos 1. 1. 2. 5. 93; 1. 1. 2. 5. 99 y 1. 1. 2. 5. 94, correspondientes al artículo 2 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, son violatorios de los Artículos 75 (ordinal 1), 17 (ordinal 8), 72 (ordinal 5), 21 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984.

Con relación al Código 1. 2. 1. 4. 02 (literal e), del acuerdo impugnado, que establece la tasa por Aseo, recolección de basura y mantenimiento de playas, para todo turista nacional o extranjero que visite la Isla de Taboga, la Sala estima que el mismo no infringe disposición legal alguna. En efecto, tal disposición no contraviene las normas relativas a las facultades que tienen los Consejos Municipales para establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas para atender los gastos de la Administración, servicios de mantenimiento, aseo de playas e inversiones municipales, de conformidad con el artículo 17 (ordinal 8), 72 (ordinal 5) y 77 (ordinal 19), todos, de la Ley 106 de 1973.

En abono a lo expresado, y como bien lo indicara el Pleno de esta Sala, en Auto de 27 de marzo de 1996, al resolver sobre la Suspensión Provisional del acto impugnado, actualmente en la Calzada de Amador en el Distrito Capital, se cobra un gravamen similar. Por tanto, debe considerarse que dicha disposición no viola el ordenamiento legal vigente.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, DECLARA NULOS POR ILEGALES, los Códigos 1. 1. 2. 5. 93; 1. 1. 2. 5. 99 y 1. 1. 2. 5. 94, correspondientes al artículo 2 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de Octubre de 1995, expedido por el Consejo Municipal de Taboga, y DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Código 1. 2. 1. 4. 02 (literal e) del referido Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de Octubre de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. HOYOS DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CNR-17 DE 7 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **ARTURO HOYOS** a presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Bufete Vallarino, en representación de LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, y para que se hagan otras declaraciones.

Sostiene el Magistrado **HOYOS**, para fundar su solicitud de impedimento que:

> "Solicito, muy respetuosamente, a los Honorables Magistrados que declaren que es legal el impedimento que invoco para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Bufete Arturo Vallarino, en representación de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., para que se declare nula por ilegal la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la Comisión Nacional de Reaseguros del Ministerio de Comercio, toda vez que en la actualidad tengo pendiente una acusación particular interpuesta por el Honorable Legislador Arturo Vallarino (apoderado judicial de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A.) en mi contra ante la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asunto Judiciales de la Asamblea Legislativa.
>
> Fundamento, mi impedimento en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial."

Considerando la solicitud del Magistrado **HOYOS** a la luz del numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial es dable acceder a la solicitud de impedimento en este caso.

En los casos como éste la precitada disposición legal en su numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial es claro al establecer que son causales de impedimento:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
...
11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez o Magistrado, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos; ...".

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre del República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento del Magistrado ARTURO HOYOS, para conocer de este caso propuesto por el Bufete Vallarino, en representación de LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.

De acuerdo con el artículo 78 del Código Judicial se designa al Magistrado, ELIGIO A. SALAS para que reemplace al Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PLUTARCO ANTONIO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4-1 DE 20 DE FEBRERO DE 1992, PROFERIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y EL CONTRATO CELEBRADO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare, nula, por ilegal, la Resolución N° 4-1 de 20 de febrero de 1992, proferida por la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, y el contrato celebrado por el Banco Hipotecario Nacional y Berasvas.

La Magistrada de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer del proceso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la firma Rosas y Rosas, en representación de **PLUTARCO ANTONIO CASTILLO**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 4-1 de 20 de febrero de 1992, proferida por la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, y el Contrato celebrado por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL y BERASVAS, S. A., porque en estos actos actuó como Presidente de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional el Ingeniero Rodríguez Sánchez Delgado, con quien me unen vínculos de parentesco por consanguinidad, ya que somos primos, en segundo grado.

Aún cuando este grado de parentesco no está comprendido entre los señalados en el ordinal 3 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 y el

ordinal 1° del artículo 749 del Código Judicial, su existencia podría suscitar dudas acerca de la imparcialidad y transparencia de la decisión final y definitiva que se dicte en el proceso, por lo que respetuosamente solicito que se me separe del conocimiento de este negocio."

El impedimento manifestado por la Magistrada de Aguilera no se configura dentro de los presupuestos señalados por el ordinal 3 del artículos 78 de la Ley 135 de 1943 y el ordinal 1° del artículo 749 del Código Judicial, ya que el parentesco que los une no está dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° grado de afinidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente es no admitir el impedimento.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. MOLINO MILA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO H. ALLS J., PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 20-88 DE 30 DE MAYO DE 1988 Y LA N° 37-88 DE 20 DE JULIO DE 1988, DICTADAS POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIEMNTO). MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 20-88 de 30 de mayo de 1988 y la N° 37-88 de 20 de julio de 1988, dictadas por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Molino Mola fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Honorables Magistrados de la Sala Tercera:
En esta demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción propuesta por la firma forense **AROSEMENA Y AROSEMENA** en representación de **ARTURO H. ALLS J.**, para que se declaren nulas, por ilegales las Resoluciones N° 20-88 de 30 de mayo de 1988 y la N° 37-88 de 20 de julio de 1988, dictadas por el CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, y para que se hagan otras declaraciones, debo informarles que en mi condición de Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, intervine como miembro del Consejo Académico de dicha Universidad en el proceso disciplinario que se siguió al estudiante **ARTURO HORACIO ALLS JOHNS**, siendo la resolución ahora demandada parte de las actuaciones posteriores que se han ventilado en este proceso.

> En vista de lo expresado, reitero respetuosamente a mis colegas de la Sala que se me separe del conocimiento de este negocio, con fundamento en lo dispuesto en el numeral dos (2) del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en asocio con el numeral doceavo (12) del artículo 749 del Código Judicial."

El Magistrado Molino Mola fundamenta su impedimento en el ordinal 2 del artículos 78 de la Ley 135 de 1943 y el ordinal 12 del artículo 749 del Código Judicial, motivo que es suficiente y que da lugar para separarlo del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA, lo separan del conocimiento del negocio interpuesto y proceden a llamar al MAGISTRADO ROGELIO A. FÁBREGA Z., de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAG. FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NILSA CHUNG DE GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de 10 de junio de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Honorables Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia:
>
> Pongo en su conocimiento que estoy impedida para conocer de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado Teófanes López en representación de NILSA CHUNG DE GONZÁLEZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de 10 de junio de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones, porque tengo interés en la actuación por ser socia de la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial de la República de Panamá, tal como consta en el acto impugnado, en el que se hace referencia a la intervención de esta Asociación en el proceso disciplinario.
>
> Esta manifestación de impedimento se fundamenta en el numeral 4 del

artículo 78 de la Ley 135 de 1943, que literalmente preceptúa, en lo pertinente:

"Artículo 78. Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso-administrativo las siguientes:
...
4. Tener interés en la actuación o tenerlo alguno de los parientes expresados en el inciso anterior.

En vista de lo expresado, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera que declaren legal el impedimento que manifiesto y me separen del conocimiento del negocio."

La Magistrada de Aguilera sustenta su solicitud en el numeral en el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, motivo que es suficiente y que da lugar para separarla del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separan del conocimiento del negocio interpuesto y proceden a llamar al MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ, de la Sala Primera, para que integre la Sala.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN QUE SE RECLAMA, COBRO DE LO NO DEBIDO Y PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE POSADAS DE AMÉRICA CENTRAL, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, actuando en representación de la sociedad POSADAS DE AMÉRICA CENTRAL, S. A., ha presentado excepciones de inexistencia de la obligación que se reclama, cobro de lo no debido y prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Encontrándose el presente negocio pendiente de resolver, la Sala observa que se ha presentado escrito de desistimiento de las excepciones interpuestas, por lo que determinar su admisibilidad.

Dado que el artículo 1080 del Código Judicial señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso y una vez efectuado el traslado allí requerido a la parte demandada, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán en representación de POSADAS DE AMÉRICA CENTRAL, S. A., DECLARA que ha terminado el proceso y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JUAN RAMÓN CASTAÑEDA EN REPRESENTACIÓN DE MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Juan Ramón Castañeda**, en nombre y representación de **MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ**, ha interpuesto excepción de prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante sustenta el incidente, manifestando que la señora **MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ** le fue expedida por el Ministerio de Comercio e Industria la Licencia Comercial N° 22946 de 15 de noviembre de 1982 y que amparaba el local comercial denominado CAPRI. Que el establecimiento comercial de propiedad de la señora **MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ**, dejó de operar en el mes de febrero de 1988.

Sigue manifestando el recurrente, que desde la fecha en que dejó de operar el local comercial, han transcurrido más de cinco (5) años y el artículo 96 de la ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984 establece el término de prescripción de las deudas a favor del Tesoro Municipal en cinco (5) años. Que por ende la obligación exigida por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, está prescrita.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador procedió a correrle traslado del escrito de excepción incoado por **MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ** al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la Procuradora de la Administración, para que contestara dicho incidente.

POSICIÓN DEL JUEZ EJECUTOR

El Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, contestó mediante procurador judicial, la excepción de prescripción, oponiéndose a la pretensión. Además señaló que no toda la deuda está prescrita, sino que sólo ha prescrito lo correspondiente al tiempo que va desde octubre de 1990 hacia atrás, ya que en noviembre de 1995 se dictó auto de mandamiento de pago, interrumpiéndose así la prescripción.

CONCEPTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 265 de 17 de junio de 1996, la Procuradora de la Administración señaló que a su juicio la excepción de prescripción alegada ha sido probada parcialmente. Esto es que consta en el expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que la morosidad del impuesto municipal se genera desde el 30 de noviembre de 1987 hasta el 31 de octubre de 1995, los cuales suman B/.5,014.80, desglosándose B/.3,000.00 de impuestos municipales y B/.2,014,80 en concepto de recargos. Que no es hasta el 6 de noviembre de 1995, cuando se libra mandamiento de pago a través del Auto Ejecutivo, el cual interrumpe la prescripción que corría desde el 6 de noviembre 1990.

Sigue manifestando la Procuradora, que no obstante lo anterior queda prescrito el período adeudado que corre del mes de noviembre de 1987 al 5 de noviembre de 1990, por el mero transcurso del tiempo, tal como lo preceptúa el artículo 96 de la Ley 106 de 1973.

CRITERIO DE ESTA SALA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver la presente controversia.

Al respecto esta Corporación coincide con el razonamiento vertido por la Procuradora de la Administración, y que fue aceptado por el Juez Ejecutor del Municipio, puesto que se observa claramente que ha prescrito parcialmente los tributos adeudados por la señora **MARCELA FERGUNSON DE RODRÍGUEZ** al Municipio de Panamá, tal como se colige de lo dispuesto en la Ley 106 de 1973, ya que la prescripción alegada por el incidentista fue interrumpida el 6 de noviembre de 1995 cuando el Municipio dictó Auto de mandamiento de pago ejecutivo contra la precitada por la suma de **cinco mil catorce con ochenta centésimos (B/.5,014.80).** En este sentido, la deuda tributaria que corresponde cancelar a la incidentista se debe computar a partir del 6 de noviembre de 1990, el resto de la deuda, es decir del 5 de noviembre de 1990 para atrás, ya prescribió.

En los procesos de ejecución coactiva, el auto que libra mandamiento de pago equivale a la presentación de la demanda. Similar criterio externó esta Corporación en el Auto de 13 de mayo de 1994, Auto de 5 de enero de 1995 y Auto de 23 de julio de 1996.

Frente a lo expuesto no procede el cobro al excepcionante de los impuestos que se surtieron con anterioridad al 6 de noviembre de 1990.

La obligación tributaria cuyo origen se encuentra con posterioridad a la fecha ut supra, debe ser saldada por la recurrente puesto que todo contribuyente de acuerdo al texto del artículo 86 de la ley 106 de 1973, tiene la obligación de notificar por escrito al tesorero Municipal el cese de sus operaciones quince (15) días antes de retirarse de la actividad, o de lo contrario, deberá cumplir con el pago de las sumas que se generen y en consecuencia se adeuden, por la omisión de no comunicar dicho cierre de operaciones a la autoridad destinada para tales efectos.

En virtud de lo expresado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción en lo atinente a los tributos municipales adeudados con anterioridad al 6 de noviembre de 1990, por lo que sólo es exigible las sumas no saldadas, derivadas de los tributos municipales que se surtieron con posterioridad a esta fecha.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ISIDRO A. VEGA EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES LE SIGUE A HÉCTOR MELÉNDEZ ARAÚZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Isidro A. Vega, en representación de la CAJA DE AHORROS, ha interpuesto incidente de rescisión de secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES le sigue a HÉCTOR MELÉNDEZ ARAÚZ.

El incidentista fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

PRIMERO: La Caja de Ahorros otorgó un préstamo al señor **HÉCTOR MELÉNDEZ ARAÚZ**, por la suma de B/.18,200.00, mediante Escritura Pública N° 698, de 30 de mayo de 1985, de la Notaría Primera de Chiriquí, préstamo con garantía de Primera Hipoteca y Anticresis, a favor de la Caja de Ahorros, sobre la finca N° 23771, inscrita al Rollo Complementario 3171, Documento 3, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá.

SEGUNDO: Los gravámenes hipotecarios y anticréticos mencionados en el hecho anterior constan en el Registro Público desde el 27 de junio de 1985 a la ficha 50602, Rollo 3171, Documento 3, de la Sección de Hipoteca y Anticresis del Registro Público, que aún está vigente.

TERCERO: Mediante Auto de fecha 17 de junio de 1993, adicionado por Auto de 4 de junio de 1995, el Juez Ejecutor del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, decretó secuestro sobre la Finca N° 23771, inscrita al Rollo Complementario 3171, Documento 3, Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, hasta por la suma de B/.272.59, inscrito el 2 de abril de 1995.

Expresa el incidentista que la medida cautelar cuya rescisión pide, decretada el 17 de junio de 1993 e inscrita el 2 de abril de 1995, es posterior a la inscripción de los gravámenes reales constituídos a favor de la Caja de Ahorros en 1985 e inscritos en el Registro Público en ese mismo año.

Mediante Vista N° 341 de 29 de julio de 1996, la señora Procuradora de la Administración contestó el incidente señalando que es improcedente (fs. 19 a 23).

El incidentista sustentó su pretensión en los siguientes elementos probatorios: Escritura Pública N° 698 de 30 de mayo de 1985 de la Notaría Primera de Circuito de Chiriquí, en la cual Héctor Meléndez Araúz y la Caja de Ahorros celebran contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre la finca N° 23771; Certificación del Registro Público de la vigencia del gravamen hipotecario y anticrético a favor de la Caja de Ahorros, por la suma de B/.18,200.00, sobre la finca N° 23771, inscrita al Rollo Complementario 3171, Documento 3, Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, y en la cual consta que está vigente el secuestro que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones decretó sobre dicha finca mediante el Auto de 17 de junio de 1993, adicionado por Auto de 4 de marzo de 1995, hasta la cuantía de B/.272.59; y Certificado expedido por el Registro en que consta la inscripción y vigencia del poder General para pleitos, conferido por el Gerente General de la Caja de Ahorros al licenciado Italo Nicolás Salcedo Medina.

Según el párrafo segundo del artículo 1705 del Código Judicial el embargo, y consiguiente depósito, cuando lo hubiere de una cosa se rescindirá si al Juez que lo decretó se le presenta **copia auténtica de un auto de embargo de dichos bienes dictado en un proceso hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha de embargo**. Al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio, la fecha del auto de embargo, y que dicho embargo está vigente. Esta certificación deberá ser de fecha no anterior a seis meses. El Juez que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el proceso hipotecario, de manera que éste pueda verificar si el depósito, en virtud del auto de embargo, está vigente.

En el presente caso la Caja de Ahorros acreditó que la hipoteca constituída a su favor por Héctor Meléndez Araúz, sobre la finca N° 23771, es de fecha anterior al auto de secuestro dictado por el Juzgado Ejecutor del Instituto Nacional de Telecomunicaciones sobre dicha finca, pero no aportó copia auténtica

de auto de embargo dictado por su Juzgado Ejecutor sobre la referida finca, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario seguido contra Héctor Meléndez Araúz.

Como el presente incidente no cumple con las exigencias del artículo 1705 del Código Judicial, esta Sala debe declararlo no probado.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el Incidente de Rescisión de Secuestro interpuesto por el Lcdo. Isidro A. Vega, en representación de la Caja de Ahorros, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones le sigue a HÉCTOR MELÉNDEZ ARAUZ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA, EN REPRESENTACIÓN DE ANGELINA DE BÁRCENAS CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 1988, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ANGELINA DE BÁRCENAS -VS-GRENBAY OVERSEA INTERNATIONAL, INC. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

Surtida la tramitación correspondiente, se procede a conocer el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la señora Angelina de Bárcenas en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 12 de febrero de 1988. La dilación en la sustanciación y decisión del proceso se ha debido a que fue destruido en los actos de diciembre de 1989 y fue necesario sustanciar la reposición. Realizada éste, se procede a decidir.

Al efecto se considera:

El recurso se funda en que, según el demandante, la empresa demandada tiene varios establecimientos y por ello el Sindicato tiene derecho a constituir representantes en cada uno de los establecimientos que existen en el edificio y que ella opera. La sentencia dio por establecido, después de examinar la prueba aportada, que se trata de un sólo establecimiento o centro de trabajo, en el cual se desenvuelven las actividades de la empresa.

La parte recurrente no ha impugnado la situación de hecho reconocida por la sentencia, razón por la cual, en el recurso de casación, no puede desconocerse.

Como consecuencia, la imputación que se le hace al fallo de instancia no es de un error causal. La sentencia impugnada no desconoce que el texto de la Ley en el sentido de que si hay varios establecimientos, puede haber varios dirigentes. Lo que sostiene es que existe un solo centro de trabajo y por ello el sindicato tenía derecho a un solo dirigente sindical amparado por fuero. Siendo así -y, cabe agregar, las constancias de autos no los desvirtuamos por lo demás- no es dable casar la sentencia impugnada. En otras palabras: el cargo que se le formula a la sentencia es una cuestión de derecho, cuando en todo caso la discusión debió haberse dirigido en contra de la determinación de los hechos que hizo la sentencia y que consiste en que la empresa solo tiene un centro de trabajo. Afirmación fáctica, que además, tiene amplio respaldo en los elementos

probatorias del proceso.

En virtud de las consideraciones que anteceden, esta Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 12 de febrero de 1988, en el proceso laboral Angelina de Bárcenas vs Grenbay Oversea International Inc.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

OCTUBRE 1996

CARTA ROGATORIA

CARTA ROGATORIA NÚMERO 002R6662, DE 1° DE MARZO DE 1996, LIBRADA POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL POR FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO QUE SE ADELANTA CONTRA LIBARDO BRU MACÍAS Y RODRIGO RONCALLO FANDIÑO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresa a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Carta Rogatoria N° 002R6662 de 1 de marzo de 1996, librada por el Juzgado Quinto Penal de Circuito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia, dentro del proceso penal por falsedad de documento privado y Fraude Procesal que se adelanta contra **LIBARDO BRU MACÍAS** y **RODRIGO RONCALLO FANDIÑO.**

La Comisión Rogatoria antes descrita, tiene la finalidad de que la República de Panamá les permita escuchar en la ampliación de la declaración jurada que se le practique a **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ**, y que además las autoridades panameñas le practiquen el prenombrado, el interrogatorio plasmado en el presente exhorto, haciéndose la salvedad de que se faculta al funcionario de instrucción panameño para realizar inclusive, las preguntas adicionales que estime convenientes. (Cfr, foja 6).

Igualmente solicita el Estado Colombiano que se les remita, copias debidamente autenticadas de los procesos que se adelantan en contra de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ**, y que se mencionan a renglón seguido:

1. Del Juzgado Tercero de Circuito Penal: Copia auténtica de todo el proceso que se surte por el delito de apropiación indebida según denuncia instaurada por **LIBARDO BRU MACÍAS;**

2. Del Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal: Copia auténtica de la providencia o auto fechado 26 de abril de 1989 mediante la cual se abrió causa criminal a **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ** por el delito de calumnia, y , de la providencia de 8 de septiembre de 1989 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que al parecer "sirvió para finalizar el respectivo proceso";

3. De la Fiscalía Auxiliar o en su defecto del Juzgado Quinto de Circuito, Ramo penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, copia autenticad de la denuncia promovida por **LIBARDO BRU MACÍAS** en contra de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ** y de la providencia calendada 27 de septiembre de 1991 emitida por este último ente jurisdiccional;

4. Del Juzgado Segundo del Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Distrito Judicial, Copias autenticadas de todo el proceso o demanda ejecutiva propuesta por **LIBARDO BRU MACÍAS** en contra de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ** en el cual se dispuso el desglose de una letra y archivo de dicho expediente el 21 de junio de 1989.

A continuación requiere el suplicante que se certifique el estado actual de cada uno de los procesos en comento, y se señala que las diligencias solicitadas encuentran su destino en el "proceso judicial adelantado en esta oficina contra LIBARDO BRU MACÍAS y RODRIGO RONCALLO FANDIÑO, por un delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y FRAUDE PROCESAL, donde figura como víctima PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ CASTILLO ..."

A través del móvil procesal de carácter internacional que se evacúa, el Juez Quinto Penal de Circuito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia, ofrece reciprocidad para casos similares conforme a la Ley Colombiana, los Tratados y las Costumbres Internacionales.

Ante estas circunstancias es pertinente acotar en primer lugar, que en atención a lo preceptuado en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial, es competencia de esta Sala de la Corte, "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo."

En este sentido se observa que la República de Panamá y el Estado Colombiano no han suscrito convenios en lo referente a la obtención y práctica de pruebas, por lo que la viabilidad de dicho auxilio o asistencia judicial dependerá de la reciprocidad ofrecida por el petente, y la buena fe que debe imperar entre los Estados miembros de la comunidad internacional, siempre y cuando no se conculque el derecho interno de los países requeridos.

No obstante, es preciso tener presente que específicamente en materia penal la República de Panamá se reserva la potestad discrecional de acceder a las peticiones efectuadas por el suplicante, dadas las limitaciones que pudieran presentarse en nuestra legislación procesal o sustantiva.

A continuación se pone de manifiesto que la documentación aportada, cumple el requisito imperativo de la legalización consular tal como lo estatuye el artículo 864 del Código Judicial, estableciendo como corolario, el vínculo mínimo que debe relacionar la petición realizada por la vía de la comisión rogatoria, con el proceso que se surte en Colombia; por lo que seguidamente, procede adentrarse al examen del exhorto en cuestión.

En este orden de ideas se observa que la colaboración judicial peticionada por el Estado requirente, tiene su génesis en el proceso adelantado por la comisión del supuesto delito de falsedad de documento privado y fraude procesal, en el cual se investiga la responsabilidad en la que probablemente incurrió el señor **LIBARDO BRU MACÍAS** en perjuicio de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ.**

A estos efectos se pone de relieve, que el hecho punible denominado falsedad de documento privado se encuentra tipificado en el artículo 267 de nuestro ordenamiento penal vigente, al contemplarse que será sancionado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien "falsifique en todo o en parte un documento privado, de modo que pueda resultar perjuicio ...".

Lo expuesto evidencia que en lo referente a la falsedad de documento privado se produce el fenómeno de la doble criminalidad, que implica que la conducta investigada en el Estado petente y en la República de Panamá configure delito, como presupuesto básico para que las diligencias solicitadas puedan ser practicadas por agente de instrucción competente. De lo contrario, no podría accederse a la viabilidad de las pruebas que se requieren mediante la presente comisión rogatoria, puesto que el funcionario designado incurriría en extralimitación de funciones, ya que, concretamente, la ampliación de la declaración jurada que se solicita que se practique, recae directamente en el sujeto procesado en la República Colombiana.

Distinto sería que solamente se aspirara a la declaración jurada de quienes no estuvieran siendo investigados o instruidos penalmente en el negocio que se surta, para lo cual se podría acceder a dicha petición en virtud de que esencialmente no se conculcaría el derecho panameño, ya que el agente asignado no estaría ponderando o investigando una conducta delictual inexistente en nuestro país, sino que estaría prestando una mera colaboración o asistencia judicial en la toma de declaraciones de quienes puedan aportar positivamente en algún negocio que se surta en otro país y, del que a su vez, no se encuentran directamente procesados o implicados.

Los criterios vertidos permiten a esta Corporación de Justicia reconocer la viabilidad de la solicitud de que funcionarios colombianos escuchen en la ampliación de la declaración del señor **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ**, instruido penalmente en la República de Colombia por el delito de Falsificación de documento privado, de acuerdo a las disposiciones preceptuadas en el artículo 2247 y siguientes del Código Judicial; interrogándose además al señor González según el cuestionario e instrucciones que se nos suministró por medio del exhorto

que se analiza; y, enfocándose dicha diligencia, únicamente en lo concerniente al delito de falsificación de documento falso. (Cfr. foja 6).

Esta acotación se subraya dado que el fraude procesal no se encuentra incorporado dentro del Código Penal panameño como conducta típica, antijurídica y culpable y por tanto sancionable.

En dicho articulado se ha establecido solamente la simulación de hecho punible dentro del título de los delitos contra la administración de justicia, como probable equivalente al fraude procesal invocado por El Estado requirente. Empero, esta figura presupone la denuncia de una infracción punible a sabiendas de que ésta no se ha cometido, o se simulen pruebas o indicios de ella que puedan dar lugar a la instrucción sumarial.

Ahora bien, se pondera prima facie que de los motivos y la documentación que impulsaron la petición de asistencia judicial a la República de Panamá, y que reposan en el mencionado negocio, no se desprende que la letra de cambio supuestamente falsificada (que provocó la reclamación civil mediante demanda ejecutiva promovida por **LIBARDO BRU MACÍAS** en contra de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ**), tenga relación directa con los procesos que se ventilaron en los Juzgados Tercero, Quinto y Noveno de Circuito, del Primer Circuito de Panamá, Ramo de lo Penal, por los delitos de calumnia y apropiación indebida; por lo que en todo caso, si la inconformidad del suplicante se fundamenta en la utilización con dolo o mala fe del derecho a accionar por parte de **LIBARDO BRU MACÍAS** en perjuicio de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ**, debemos concluir que ello solamente podría ser indemnizado por la vía civil, tomándose como parámetro jurídico la responsabilidad extracontractual consagrada en los artículos 1644 y sgts. del Código Civil; ya que como no se establece la relación directa entre la falsificación de la letra de cambio en controversia con los procesos penales antes mencionados, no puede en este caso en particular, llevar a cabo el equiparamiento de las figuras de fraude procesal invocado, con la simulación de hecho punible.

Sin embargo, ello no es óbice para rehusar a la petición de enviar fotocopias autenticadas de las piezas procesales pertenecientes a los expedientes que se surtieron en los Juzgados Tercero, Quinto y Noveno, las cuales se encuentran detalladas en los literales b, c, y d de la comisión rogatoria bajo estudio (cfr. foja 5); así como del proceso ejecutivo localizado en el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial promovido por **LIBARDO BRU MACÍAS** en contra de **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ** descrito en el literal e del exhorto que nos ocupa, puesto que ello no infringe el derecho positivo panameño, en virtud de que quienes solicitan dichas fotocopias autenticadas son igualmente partes en esos procesos (cfr. art. 478 del Código Judicial); teniéndose únicamente en consideración, que el costo de las fotocopias autenticadas, será íntegramente asumido por el Estado Colombiano.

En lo atinente a la certificación del estado actual de dichos procesos penales y civiles se debe indicar, que los secretarios judiciales suministrarán las fotocopias debidamente autenticadas de la última resolución que conste en cada negocio en concreto, con los sellos o edictos de notificación según el caso y términos de ejecutoria, dado que en atención al tenor del artículo 184 de la precitada excerta legal, "Los Secretarios no pueden certificar sobre lo que conste en el proceso."

Finalmente se resalta que no es dable aplicar la legislación penal de carácter sustantiva Colombiana, contenida en los artículo 172 de su Código Penal, puesto que ello está expresamente prohibido por el texto del artículo 304 de la Ley 15 de 26 de septiembre de 1928 (Código de Bustamante).

Con respecto al artículo 285 del Código de Procedimiento Penal del Estado Requirente, referente a la juramentación del declarante con acotación por remisión directa de las sanciones penales consagradas en la República de Colombia por incurrir en falso testimonio, se destaca a renglón seguido, que la República de Panamá en materia penal se reserva el derecho a practicar no el requerimiento de practicar procedimientos propios de la suplicante; por lo que dado que, aplicar la norma de procedimiento obliga a dar lectura a la norma sustantiva

penal que sanciona el falso testimonio, se puntualiza que Panamá se abstiene de aplicar dichos artículo 172 y 285 del Código Penal y de Procedimiento Penal Colombiano.

Sin embargo, ello no debe preocupar a las autoridades Colombianas puesto que igual procedimiento (lectura de la disposición que castiga el falso testimonio) se lleva a cabo en la República de Panamá. (Cfr. artículo 2251 del Código Judicial panameño y 360 del Código Judicial).

En mérito de lo expresado,la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Carta Rogatoria N° 002R6662 de 1° de marzo de 1996, librada por el Juzgado Quinto Penal de Circuito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia, dentro del proceso penal por falsedad de documento privado que se adelanta contra LIBARDO BRU MACÍAS y RODRIGO RONCALLO FANDIÑO, y en consecuencia se ORDENA que se le permita escuchar a los agentes designados por el Estado Colombiano en la ampliación de la declaración jurada del señor PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ y además,que los funcionarios del Ministerio Público Panameño previamente designados por el Procurador General de la Nación le practiquen el interrogatorio legible a foja 23 del presente negocio, conforme lo estatuído en los artículo 2247 y siguientes del Código Judicial;así como que los siguientes Tribunales de Circuito Penal y Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá obtengan y autentiquen las fotocopias que se detallan a continuación, a costo del Estado Requirente:

1. Del Juzgado Tercero del Circuito de lo Penal, Primer Circuito Judicial de Panamá: Fotocopias autenticadas de todo el proceso que se sigue a PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ por denuncia instaurada por LIBARDO BRU MACÍAS por el delito de Apropiación Indebida;

2. Del Juzgado Quinto del Circuito de lo Penal, Primer Circuito Judicial de Panamá: Fotocopias autenticadas de la denuncia propuesta por LIBARDO BRU MACÍAS en contra de PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ, así como de la providencia de 27 de septiembre de 1991 emanada por dicho tribunal;

3. Del Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal, Primer Circuito Judicial de Panamá: Fotocopia autenticada de la providencia o Auto de 26 de abril de 1989 mediante la cual se abrió causa criminal en contra de PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ por el delito de calumnia, y de la Providencia de 8 de septiembre de 1989 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia;

4. Del Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil, Primer Circuito Judicial de Panamá: Fotocopia autenticada de todo el proceso o demanda ejecutiva promovida por **LIBARDO BRU MACÍAS** contra **PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ** en el cual el 21 de junio de 1989 se dispuso el desglose de una letra y el archivo de expediente.

Igualmente se ORDENA a los Tribunales de Justicia antes mencionados, proporcionar debidamente autenticada la ultima resolución con las constancias de ejecutoria y notificación de los procesos precitados.

Una vez realizadas las diligencias, remítase el presente exhorto a la Sal de Negocios Generales para su posterior devolución al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

SARA ENTEBI SMILOVICE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

EXTRANJERA PROFERIDA PRO EL JUZGADO DEL CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR ERNEST HARLAN JILISON. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Hernán García actuando en nombre y representación de **SARA ENTEBI SMILOVICI**, ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia de 28 de marzo de 1995, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a la demandante con Ernest Harlan Jilson.

CONSIDERACIONES.

La solicitud de exequátur se fundamenta en el hecho cierto de que el matrimonio entre la peticionista y Ernest Harlan Jillson, celebrado en el Juzgado Quinto Municipal del Distrito de Panamá el 5 de junio de 1992, fue declarado disuelto en el Juzgado de Circuito Undécimo de Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América; y en consecuencia, la solicitante tiene el interés de que dicha Resolución se inscriba en la República de Panamá para que surta sus efectos.

Ante estas circunstancias la demandante suministra como elementos probatorios dentro del presente negocio:

1. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Civil del Tribunal Electoral, en el cual consta su matrimonio con el señor Ernest Harlan Jillson.

2. Sentencia de Divorcio proferida por el Juzgado del Circuito Undécimo del Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, debidamente autenticada por el Cónsul de Panamá en Miami, Florida, y por la Jefa de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. (Cfr. foja 1 y 4 reverso).

3. Traducción de la Sentencia en referencia al idioma castellano por intérprete público autorizado.

Seguidamente se destaca que la Procuraduría General de la Nación estima que se han cumplido con los requisitos que al respecto exige la ley para su reconocimiento y ejecución, por lo que puntualiza que debe accederse a la petición incoada. (Cfr, foja 5).

Así las cosas es importante destacar que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo estatuido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial, es el ente competente para "Examinar las resoluciones pronunciadas por país extranjero, incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos."

DECISIÓN

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, entran a resolver la solicitud de reconocimiento y ejecución de Sentencia extrajera.

Sobre el particular coincide esta Corporación de Justicia con el criterio vertido por la Procuraduría de la Nación, en atención a que efectivamente la petente cumple con los requisitos que para el presente procedimiento preceptúa el artículo 1409 del Código Judicial, dado que, evidentemente, la pretensión lícita y de carácter personal que se ejercita en esta oportunidad, se ventiló ante Tribunal competente en el extranjero sin que se haya producido el fenómeno de rebeldía, (que implicaría en esta oportunidad, la omisión en la notificación

del señor Haralan Jillson) por lo que se concluye que no se vulnera el derecho positivo panameño.

Se afirma lo anterior, puesto que de la misma sentencia de divorcio se infiere la aquiescencia de ambas partes en disolver el vínculo matrimonial realizado en la República de Panamá.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio emitida por Juzgado de Circuito Undécimo de Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América el 28 de marzo de 1995, caso N° 95-04444 FC 07, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a **SARA ENTEBI SMILOVICI Y ERNEST HARLAN JILLSON, y AUTORIZA** a la Dirección del Registro Civil para que realice las actuaciones respectivas en su libro de divorcios, en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JIMMY PHILLIPS ROJAS Y OLAGA GLADYS DE PHILLIPS, SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 337/96 DEL JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL DE LA PAZ, BOLIVIA, SOBRE DECLARATORIA DE HEREDEROS; RESOLUCIÓN N° 865/95 DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL SOBRE DECLARATORIA DE FALLECIMIENTO PRESUNTO DEL SEÑOR WILLIAMS PHILLIPS MENDOZA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

JIMMY PHILLIPS ROJAS Y OLGA GLADYS ROJAS DE PHILLIPS, por medio de su apoderado judicial, Roger Anel Araúz Saldaña, ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la Resolución N° 33796 del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Civil de la Paz, Bolivia sobre Declaratoria de Herederos, Resolución N° 865/95 del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil sobre Declaratoria de Fallecimiento presunto del señor WILLIAMS PHILLIPS MENDOZA; Acta de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas y la Orden Judicial de Protocolización de la Minuta presentada el 10 de abril de 1987, mediante Escritura Pública N° 233/96 ante el Juzgado de Mínima Cuantía N° 55 de la Paz, Bolivia.

El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos

"PRIMERO: El señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA fue declarado muerto el día 19 de octubre de 1990, según consta en Certificado de Defunción expedido por la Oficina de Registro Civil, Corte Nacional Electoral de la Paz, Bolivia, inscrito al N° D-4, Libro N° 1-85, Ptda. 82, folio 92 de 12 de marzo de 1993, por medio de la Resolución N° 865/95 del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil de la Paz, Bolivia, del 11 de septiembre de 1995, en la que se inscribe una orden judicial mediante la cual se declara la Muerte Presunta del señor William Phillips Mendoza.

SEGUNDO: Que en Acta de audiencia de Declaración Jurada con fecha 7 de Junio de 1995 se nombró como Curadora a la señora Olga Gladys Rojas de Phillips dentro del trámite civil Voluntario de declaratoria del fallecimiento presunto del señor Williams Phillips

Mendoza, para que provea cargo y cuidado y conservación del Patrimonio.

TERCERO: Que cumplido con el trámite de las publicaciones y con la inscripción en el Registro Civil de la República de Bolivia fue declarado presuntamente fallecido el señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA y se abrió el proceso de sucesión intestada a favor de sus herederos WILLIAMS PHILLIPS BOYCE, JIMMY PHILLIPS ROJAS, JORGE WILLIAMS PHILLIPS ROJAS, CRISTIAN PHILLIPS ROJAS, PATRICK ALEX PHILLIPS ROJAS.

CUARTO: Que la Resolución N° 337/96 del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Civil fechada 26 de febrero de 1996 nombró como herederos universales del de cujus, señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA, a sus hijos WILLIAMS PHILLIPS BOYCE, JIMMY PHILLIPS ROJAS, JORGE WILLIAMS PHILLIPS ROJAS, CRISTIAN PHILLIPS ROJAS Y PATRICK ALEX PHILLIPS ROJAS.

QUINTO: Que mediante escritura Pública N° 233/91 se protocolizó con orden judicial la minuta presenta voluntariamente por el señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA el 10 de abril de 1987 ante el Juzgado de Mínima Cuantía N° 55 de la Paz, Bolivia referente a una Donación y un anticipo de la legítima efectuada por el de cujus en vida a favor de sus hijos WILLIAMS PHILLIPS ROJAS, JIMMY PHILLIPS ROJAS, CRISTIAN PHILLIPS ROJAS, sobre los fondos económicos y dineros depositados en el Swiss Bank Corporation (Overseas), S. A. de la República de Panamá, entre otros.

SEXTO: Que el señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA mantenía la cuenta de ahorros N° 204,385/15,06 en el Banco Swiss Bank Corporation registrado en el Tomo 794, Folio 514, Asiento 122064 y actualizado en la Ficha 21979, Rollo 1069, Imagen 125 del libro de Personas Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

SÉPTIMO: Que el estado de cuenta con la cuenta referida en el hecho anterior tenía para el 31 de diciembre de 1990 un saldo total de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 47/100 (B/.55,348.47), más los intereses causados hasta la fecha como consta en fotocopia de fax enviado por el Banco a nuestros mandantes, suma ésta que corresponde a los mismos como legítimos herederos del señor WILLIAMS PHILLIPS MENDOZA.

OCTAVO: Que no existe un conflicto de calificación entre el derecho civil panameño sobre la presunción de muerte y el derecho civil boliviano sobre la declaración de fallecimiento presunto.

SOLICITUD ESPECIAL: Se declare como únicos beneficiarios de la cuenta de ahorros N° 204,385/15,06 del Swiss Bank Corporation (Overseas) S. A. WILLIAMS PHILLIPS ROJAS (O JORGE WILLIAMS PHILLIPS ROJAS, quien es la misma persona), CRISTIAN PHILLIPS ROJAS, JIMMY PHILLIPS ROJAS y se ordena a dicho banco que ponga los fondos que aparezcan en la cuenta, junto con los intereses a que hubiera lugar, a disposición de los herederos o así como cualquiera otros fondos que aparezcan en otras cuentas y que estén a nombre del señor WILLIAM PHILLIPS MENDOZA.

ANTECEDENTES DEL CASO

La referida solicitud se funda en el hecho que existe una Resolución N° 865/95 Declaración de Herederos dictada por el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil, de fecha 11 de septiembre de 1995, que declara probado el fallecimiento presunto del Capitán WILLIAM PHILLIPS MENDOZA, cuyo deceso se produjo el 19 de octubre de 1990.

Que en fecha 26 de febrero el Juzgado Cuarto de Instrucción dicta la Resolución N° 337/96, mediante la cual se instituye como herederos forzosos ab

intestato al fallecimiento de William Phillips Mendoza a: William Phillips Boyce, Jimmy, Jorge, Cristian y Patrick Alex Phillips Rojas.

Que se dio un Acta de reconocimientos de firmas y rúbricas y la Orden Judicial de protocolización de la minuta presentada el 10 de abril de 1987, mediante Escritura Pública 233/91 ante el juzgado de Mínima Cuantía N° 55.

De igual forma, se anota que la solicitud recae sobre la existencia de una cuenta bancaria de ahorros N1204,385/15,06 en Swiss Bank Corporation (Overseas) S. A. a nombre del señor William Phillips Mendoza.

Los documentos presentados por los apoderados han sido presentados con su debida autenticación por el Cónsul General de Panamá en La Paz, Bolivia, y a la vez la debida certificación de la firma de efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Por su parte, el Procurador General de la Nación en su Vista N° 42 de 20 de septiembre de 1996, visible de fojas 55 a 64 del expediente, manifestó que "procede que la Sala de Negocios Generales ordene que la resolución cuyo reconocimiento y ejecución se ha solicitado tenga eficacia en la República de Panamá en los términos previstos en el artículo 1549 y concordantes del Código Judicial, ya que su contenido no viola los principios generales que regulan la sucesión en general, ni el orden público interno, ni nuestra soberanía jurídica."

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales, pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la Resolución 337/96 emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Civil, la Resolución N° 865/95 dictada por el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil sobre la Declaratoria de Herederos, así como el Acta de Reconocimiento y Protocolización del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Civil, todas dictadas en la Paz, Bolivia, pueden reconocerse en la República de Panamá.

Es necesario precisar que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 101 del Código Judicial es facultad de la Sala examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero. El artículo comentado no excluye ninguna resolución, y por tanto, se entiende que las mismas pueden ser resoluciones que le ponen fin al proceso, pero también le compete a la Sala examinar la posible eficacia que pueden tener en el territorio nacional otras clases de resoluciones que no son precisamente sentencias ni autos que hagan concluir el proceso como ocurre, en el caso sometido a consideración en esta oportunidad. Sin embargo, es de primer orden determinar la ubicación de la resolución judicial subjúdice dentro de las distintas categorías a fin de precisar la eficacia que se le debe dar.

Ante lo planteado por el solicitante, se debe tener presente que para que una sentencia requiera el trámite de exequátur, es menester que tenga el carácter de cosa juzgada, toda vez que, cuando a una resolución se le otorga el carácter de cosa juzgada en el territorio nacional, su ejecución traería consigo la reclamación de derechos en Panamá.

Visto lo anterior, se considera que las resoluciones judiciales que están sujetas al control del exequátur tienen como denominador común:

1. Que se trate de sentencia extranjera, entendiéndose por tal, aquella resolución jurisdiccional que decide la pretensión,

2. Que el acto jurisdiccional haga tránsito a cosa juzgada.

En otros términos, se subordina al control del exequátur, a determinadas resoluciones o autos que sin ser propiamente sentencias le ponen fin al proceso.

En la solicitud de exequátur bajo estudio, la resolución cuyo reconocimiento se solicita tiene la naturaleza de un acto declarativo, en virtud del cual se declara como herederos forzosos ab intestato al fallecimiento de William Phillips Mendoza a: William Phillips Boyce, Jimmy, Jorge, Cristian y Patrick Alex Phillips Rojas.

Los apoderados judiciales han señalado en su escrito que el causante William Phillips Mendoza tenía entre otras propiedades, depósito bancario en el Banco Swiss Bank Corporation (Overseas) localizado en la Ciudad de Panamá, bajo la cuenta de ahorros N° 385/15,06, datos que han sido citados en líneas anteriores lo que nos confirma que la resolución extranjera de declaratoria de herederos está subordinada al juicio universal de sucesión y que el mismo debe iniciarse en la República de Panamá y cuyo fundamento es la resolución dictada por la autoridad de la Paz, Bolivia.

Frente a lo expuesto, se considera que la resolución presentada tiene el carácter de probatoria, puesto que la misma es un título jurídico que el Juez panameño debe considerar como documento probatorio en el proceso de sucesión en lo que respecta a los bienes que se encuentran en la República de Panamá, según se desprende del artículo 1549 del Código Judicial, cuyo texto señala lo siguiente:

> "Artículo 1549: Cuando el auto de declaratoria de herederos o la resolución de adjudicación haya sido dictada por Tribunal extranjero y el causante hubiese dejado bienes en el país, se fijarán y publicaran los edictos y se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 1534 y siguientes".

Conforme al texto transcrito, tanto el auto de declaratoria de herederos como el de adjudicación de bienes están sujetos al proceso establecido en el artículo 1534 y concordantes del Código Judicial.

Por lo anteriormente expuesto, se comprende que la resolución judicial en este caso en particular, no tiene efectos de cosa juzgada, y sólo tiene la función de probar el hecho de la declaratoria de herederos en país extranjero sin efectos en la República de Panamá sino hasta que se haya cumplido con el proceso establecido en la Sección 3ª, numeral 5 de los Procesos de Sucesión en General, es decir que está supeditada la Sucesión al juicio principal de sucesión cuya ley procesal y substantiva aplicable son las leyes del lugar.

De allí que la resolución comentada sólo puede servir de prueba y titulo para solicitar la apertura del proceso en sucesión, en virtud que los bienes objeto de la sucesión se encuentran en la República de Panamá.

A juicio de la Sala, en el caso bajo examen, no procede el exequátur por cuanto que a los herederos no les es factible solicitar directamente, sin juicio previo de sucesión instaurado ante la jurisdicción panameña, en donde cualquier nacional o extranjero pueda considerarse heredero de la masa de bienes sujeta al juicio universal de sucesión.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

1) Que la presente resolución no requiere el trámite del exequátur, puesto que según el orden público panameño dicha resolución judicial no hace tránsito a cosa juzgada respecto a los bienes que se encuentran en la República de Panamá.

2) Se autoriza que la presente resolución tenga eficacia en la República de Panamá, en los términos establecidos en el artículo 1549 del Código Judicial, ya que su contenido no viola los principios generales del orden público panameño.

3) Compúlsense copias de todas las sentencias a efecto que los documentos

originales sean devueltos a los peticionarios, a fin de que puedan gestionar con estos ante el Juez competente en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL FUSHMAN Y YAEL FUSHMAN, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE SAN DIEGO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1978. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Servando Vergara Quiroz en representación de los señores Miguel Fushman y Yael Fushman, solicita se declare ejecutable en Panamá la sentencia proferida por la Corte Suprema del Estado de California para el Condado de San Diego, Estados Unidos de América.

De acuerdo al numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

La solicitud de ejecución de sentencia extranjera se apoya en las siguientes pruebas: copia autenticada de la sentencia de fecha 7 de septiembre de 1978, en idioma inglés, así como la traducción de la misma, visible a foja 6 del expediente.

El Procurador General de la Nación en Vista N° 46 de fecha 8 de octubre de 1996 manifiesta: "es pertinente concluir que la solicitud impetrada cumple con los requisitos de ley, por lo cual procede que esa honorable Sala acceda a la misma" (f. 10).

La sentencia de fecha 7 de septiembre **"ORDENA que el nombre Miguel Fuchs sea cambiado de Miguel Fuchs a Miguel Fushman; y que el nombre de Yael Fuchs sea cambiado a Yael Fushman"**.

En la solicitud de ejecución de sentencia extranjera se manifiesta que el señor Miguel Fushman es "varón, mexicano, mayor de edad, casado, comerciante, con pasaporte mexicano N° A-0306". No obstante, no se han aportado los certificados de nacimiento de los interesados o los documentos que acrediten sus generales.

De igual forma es necesario aportar el certificado de matrimonio de los señores Miguel Fuchs y Yael Fuchs, para acreditar el vínculo matrimonial contraído entre las partes y a la vez comprobar los apellidos de las partes al momento de registrar el matrimonio celebrado entre ellas.

Asimismo resulta pertinente solicitar el certificado de nacimiento de la hija de ambos Jeannette Fuchs, la cual se presume nacida en la República de Panamá, ya que la ejecución de sentencia extranjera se solicita en todo y no en parte; con la cual resulta afectada Jeannette Fuchs, quien al momento de dictarse la sentencia bajo examen era menor de edad, pues se "ORDENA que el primer nombre del hijo menor de los solicitantes, Jeannette Fuchs, sea cambiado por el nombre de los solicitantes" (f. 7).

Por lo anteriormente expuesto se observa que la sentencia en examen no reúne los presupuestos procesales consagrados en nuestro ordenamiento Jurídico

en el artículo 1409.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, EN SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE a los peticionarios, el término de cuarenta y cinco (45) días para que subsanen las omisiones señaladas al tenor de las disposiciones procesales vigentes sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAQUELINE ESTHER MARÍA TUÑÓN BUSTAMANTE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA DOCEAVA CORTE DEL DISTRITO JUDICIAL CONDADO DE OTERO, ESTADO DE NUEVO MÉJICO, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FECHADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1992, EN LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR WILLIE EUGENE HEARN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Luis A Guevara, actuando en nombre y representación de **JAQUELINE ESTHER MARÍA TUÑÓN BUSTAMANTE**, ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia de 2 de noviembre de 1992, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a la demandante con Willie Eugene Hearn.

CONSIDERACIONES

La solicitud de exequátur se fundamenta en el hecho cierto de que el matrimonio entre la peticionista y Willie Eugene Harlan, celebrado en el Juzgado Quinto Municipal del Distrito de Panamá el 1 de junio de 1989, fue declarado disuelto en la Duodécima Corte Judicial, Condado de Otero, Estado de Nuevo Méjico de los Estados Unidos de América; y en consecuencia, la solicitante tiene el interés de que dicha Resolución se inscriba en la República de Panamá para que surta sus efectos.

Ante estas circunstancias, la demandante suministra como elementos probatorios dentro del presente negocio:

1. Certificado N° 0223630 expedido por la Dirección General de Registro Civil del Tribunal Electoral, en el cual consta su matrimonio con el señor Willie Eugene Hearn.

2. Sentencia de Divorcio proferida por la Duodécima Corte Judicial, Condado de Otero, Estado de Nuevo Méjico de los Estados Unidos de América, debidamente autenticada por el Cónsul General de Washington D. C., y por la Jefa de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. (Cfr. foja 8).

3. Traducción de la Sentencia en referencia al idioma castellano por intérprete público autorizado.

Seguidamente se destaca que la Procuraduría General de la Nación estima que se han cumplido con los requisitos que al respecto exige la ley para su reconocimiento y ejecución, por lo que puntualiza que debe accederse a la petición incoada. (Cfr, foja 13-16).

Así las cosas es importante destacar, que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo estatuido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial, es el ente competente para "Examinar las resoluciones pronunciadas por país extranjero, incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin

perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos."

DECISIÓN

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, entran a resolver la solicitud de reconocimiento y ejecución de Sentencia extrajera.

Sobre el particular coincide esta Corporación de Justicia con el criterio vertido por la Procuraduría de la Nación, en atención a que efectivamente la petente cumple con los requisitos que para el presente procedimiento preceptúa el artículo 1409 del Código Judicial, dado que, evidentemente, la pretensión lícita y de carácter personal que se ejercita en esta oportunidad, se ventiló ante Tribunal competente en el extranjero sin que se haya producido el fenómeno de rebeldía, (que implicaría en esta oportunidad, la omisión en la notificación del señor Haralan Jillson) por lo que se concluye que no se vulnera el derecho positivo panameño.

Se afirma lo anterior, puesto que de la misma sentencia de divorcio se infiere la aquiescencia de ambas partes en disolver el vínculo matrimonial realizado en la República de Panamá, al aprobar y firmar ambos la Sentencia en referencia y comprometerse a cumplir con el acuerdo marital de 9 de octubre de 1992.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio emitida por la Duodécima Corte Judicial, Condado de Otero, Estado de Nuevo Méjico, Estados Unidos de América el 2 de noviembre de 1992, caso N° DR-92-514, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a JAQUELINE ESTHER MARÍA TUÑÓN BUSTAMANTE y WILLIE EUGENE HEARN, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios, en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL LEE ARAUZ, SOLICITA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDO POR EL JUZGADO DE CIRCUITO DE LA CIUDAD DE ALEXANDRÍA, ESTADO DE VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Luis R. Armstrong, actuando como apoderado especial del señor Miguel Araúz Delgado ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio extranjera dictada por la Corte de Circuito de la Ciudad de Alexandría, Estado de Virginia, Estados Unidos de América el 17 de enero de 1995 dentro del proceso N° 941392, instaurado por Carmen Cecilia Alvarez Añino Carmen Araúz) de fecha 17 de enero de 1995.

Observa la Sala, que la solicitud reúne las formalidades de ley, pues en ellos se adjunta la copia autenticada de la sentencia de divorcio y la autenticación procedente de Cónsul General en Washington, D. C., que legaliza los documentos surtidos en el Estado de Virginia, Estados Unidos, lugar donde se emitió la sentencia de divorcio, además de la correspondiente certificación de

dicha firma expedida por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

La petición fue admitida por lo que de acuerdo al trámite para estos negocios, se le corrió traslado al señor Procurador General de la República, tal como lo dispone el artículo 1410 del Código Judicial.

El señor Procurador General de la República, mediante Vista N° 45 de 7 de octubre de 1996, consideró que se debe acceder a la ejecutabilidad de la sentencia extranjera, toda vez que cumple con los requisitos de ley.

El análisis de los documentos aportados, permite señalar que la sentencia que nos ocupa, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, toda vez que es el propio demandado quien solicita la ejecución de la sentencia extranjera, además que existe constancia de que fue debidamente notificado tal y como lo establece la traducción de la demanda cuando señala que "se presentó para audiencia ... habiéndose notificado el proceso de la Escritura de Demanda contra el demandado." (f. 13).

En cuanto a la licitud de la obligación, la misma no viola nuestro ordenamiento jurídico, por lo que esta Sala coincide con la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación, en cuanto a que la sentencia objeto de estudio, cumple con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte del Circuito para la ciudad de Alexandría, Virginia, Estados Unidos de América de fecha 17 de enero de 1995, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial que existía entre la señora Carmen Cecilia Alvarez Añino Carmen Araúz) y el señor Miguel Araúz Delgado, celebrado el día 6 de abril de 1988.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio, en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO S/N DE 24 DE AGOSTO DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL N° 453-1-95 SEGUIDO CONTRA TRILBY WASHINGTON CUMMNINGS Y OTROS POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO Y ESTAFA EN PERJUICIO DE ABDUL ALSAME. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, exhorto s/n de 24 de agosto de 1995, librado por el Juzgado Sexto de instrucción de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso penal N° 453-1-95 seguido contra **Trilby Washington Cummings y otros**, por la supuesta comisión del delito de uso de documento falso y estafa en perjuicio de

Abdul Alsame.

La finalidad de la Carta Rogatoria bajo estudio se circunscribe a que en la República de Panamá, las autoridades competentes realicen las diligencias que se describen a continuación, a efecto que las mismas sean remitidas a la República de Costa Rica en su calidad de pruebas dentro del proceso penal antes mencionado.

Sobre el particular se observa que toda la documentación aportada se encuentra debidamente autenticada por la vía regular consular, y por la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este sentido se pone de relieve que entre el Estado Costarricense y la República de Panamá no hay convenios de asistencia legal en materia penal que se encuentren actualmente en vigor, por lo que la petición judicial se ponderará con fundamento en el principio de reciprocidad y buena fe que debe caracterizar a los Estados miembros de la comunidad internacional.

En este orden de ideas se hace la salvedad de que el Estado panameño se reserva la potestad discrecional de acceder a las solicitudes efectuadas, en atención a las limitaciones que pudieran confrontarse en el ordenamiento positivo vigente.

Ante esta circunstancia se constata que tanto el uso de documento falso como la estafa constituyen delitos tipificados en el Código Penal panameño, tal como se encuentra regulado en sus artículos 190 y 271, por lo que se aprecia que efectivamente, se verifica el principio de la doble criminalización en lo concerniente a las figuras delictuales investigadas en Costa Rica y Panamá, y en virtud de las cuales se sustenta la solicitud de auxilio internacional de carácter jurídico penal.

Siendo ello así, se procede a examinar a renglón seguido las peticiones formuladas específicamente por el peticionista:

a). "Ordenar el secuestro del Protocolo de la licenciada **NOEMY MORENO ALBA**, notaria Pública Décima (sic) del Circuito de Panamá (sic) donde se encuentra la escritura número 6215 de fecha 2 de julio de 1992. y (sic) que es un poder otorgado al señor Gerardo Luis Nimango Ramos, (sic) la oficina de dicha profesional se encuentra en calle 50 y Elvira Méndez, Edificio Ejecutivo, apartado 66-39-Z5, teléfono 23-94-93,"

b). "Además de tomarle **DECLARACIÓN COMO TESTIGO** sobre dicho poder, si constató que las personas comparecientes fueran realmente quienes decían ser y si tuvo conocimiento que dicho poder es falso."

c). "Además se solicita pedir los movimientos migratorios en la República de Panamá (sic) del señor Abdul Alsame, de nacionalidad canadiense, pasaporte N° FV 212750."

A estos efectos, la Sala debe puntualizar las consideraciones que se exponen a continuación para mayor ilustración:

1. Con respecto a la medida cautelar de secuestro penal requerida sobre el protocolo contentivo de la Escritura Pública N° 6215 de 2 de julio de 1992, que reposa en la Notaría Décima de Circuito de Panamá de acuerdo a la información suministrada en la presente carta rogatoria, esta entidad colegiada estima improcedente declarar su viabilidad, dado que del análisis exhaustivo realizado a dicho requerimiento se desprende la incompatibilidad de la petición en comento con la legislación vigente que rige la figura del notariado en Panamá, en virtud de que como presupuesto básico el artículo 1726 del Código Civil señala que los protocolos no podrán extraerse o sacarse de las notarías, ya que su titular (el notario) los custodiará para mayor vigilancia como depositario de la fe pública y de la confianza respecto de los documentos que se ponen bajo su guarda; por lo que en todo caso lo que procedería es una inspección judicial (ocular) conforme lo establece el artículo 1726 del Código Civil y el 2098 del Código Judicial

(dejándose constancia detallada en actas de la diligencia llevada a cabo), y no el secuestro penal peticionado por la República de Costa Rica ante esta Corporación de Justicia, máxime cuando el notario podrá proveer a cualquier persona que lo solicite, copias autenticadas de los documentos protocolizados, tal como lo preceptúa el artículo 1752 del Código Civil.

Aunado a lo expresado debe puntualizarse que los artículos 1722, 1723 y 1724 del precitado Código Civil, en concordancia con el artículo 1731 del mismo cuerpo legal, estatuyen que los volúmenes de los protocolos serán foliados con numeración seguida y contendrán: expresión de los instrumentos vigentes y cancelados, índice anual en el cual se anota por orden alfabético los instrumentos que se hayan otorgado en el protocolo de cada año, su contenido y la firma entera de los testigos y el notario; estableciéndose inclusive en los artículos 1733 y 1734 que en caso de error de lo escrito en los instrumentos, será necesario que al frente de lo corregido conste una nota reproduciéndose íntegramente la palabra enmendada, subrayada o sobrepuesta, con la firma de los otorgantes, testigos y notarios, y si, por mucha extensión de lo corregido no cupiera nota al margen, se pondrá aquella al fin del instrumento; y si éste estuviera firmado, seguido de él se firmará la nota como queda dicho, por los otorgantes, los testigos y notarios; haciéndose la aclaración de que si no aparecen debidamente firmadas las notas de dichas correcciones, éstas no valdrán; dándose en consecuencia crédito a lo originalmente escrito, "sin perjuicio de exigir la responsabilidad en la que haya incurrido el notario o el que resulte haber hecho las correcciones."

En este sentido debe tenerse presente que el objeto inmediato del secuestro penal, es que las pruebas que se recaben no desaparezcan en detrimento del afectado por el ilícito, situación esta que no se verifica en el caso de los documentos protocolizados, puesto que la legislación que rige la figura y el ejercicio del notariado en Panamá está diseñada especialmente para que dichos protocolos permanezcan en debido resguardo y custodia como documentos confiados a quienes ocupen el cargo público de notario, dada su solvencia moral, tal como prevén las normas que se mencionaron en párrafos superiores. Por ende se deniega la petición de secuestro de la Escritura Pública N° 6215 de 2 de julio de 1992, en mención.

En lo atinente al punto dos (2) de la solicitud de asistencia judicial referente a la declaración como testigo de la licenciada Noemy Moreno Alba (notaria décima del circuito de Panamá), en relación a si constató que las personas comparecientes eran quienes decían ser y si tuvo conocimiento de que el poder concedido a Gerardo Luis Nimango era falso, considera la Sala que esta petición es inconducente por cuanto que, en atención a los argumentos vertidos en párrafos superiores, se infiere que el documento otorgado goza de la presunción de autenticidad y por tanto, de que la notaria en cuestión cumplió con los pasos necesarios tendientes a la elaboración del instrumento que se protocolizó, verificando efectivamente la veracidad de los hechos y personas que solicitaban sus servicios, máxime cuando el artículo 1738 del Código Civil estatuye el siguiente precepto:

> "El notario debe conocer a las personas que le pidan la prestación de su oficio; si no las conoce, no deberá prestárselo a menos que se le presente dos personas conocidas y de buen crédito, en quienes concurran las otras cualidades exigidas para los testigos instrumentales, que aseguren conocer a los otorgantes, y que se llaman como estos expresan. Estas personas se denominarán testigos de abono. En el instrumento se hará mención de esta circunstancia, nombrando a los testigos de abono, quienes suscribirán el instrumento con los otorgantes, los testigos instrumentales y el notario."

Por consiguiente es el interesado quien tendrá que comprobar por los medios de pruebas admitidos por la legislación procesal, la falsedad de los comparecientes y del poder otorgado que se protocolizó ante la notaria décima del Circuito de Panamá, no procediendo la solicitud incoada.

No obstante, se accede a la petición de certificación migratoria

concerniente a las entradas y salidas del señor **Abdul Alsame** de la República de Panamá, puesto que en su calidad de denunciante de **Trilby Washington Cummings** de los delitos de los cuales afirma ser el afectado, y en los cuales se fundamenta y se sustenta la presente petición de asistencia jurídico penal solicitada a la República de Panamá, se plasma concretamente su petición de que sus movimientos migratorios (entradas y salidas) sean determinados para demostrar sus argumentos ante la justicia costarricense. (Cfr. foja 5).

Por consiguiente, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Sexto de instrucción de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso penal N° 453-1-95 seguido contra Trilby Washington Cummings y otros, por la supuesta comisión del delito de uso de documento falso y estafa en perjuicio de Abdul Alsame, en el sentido de que NO SON VIABLES las peticiones de secuestro del Protocolo custodiado por la licenciada NOEMY MORENO ALBA, notaria pública décima del circuito de Panamá en la cual se encuentra la escritura número 6215 de fecha 2 de julio de 1992, contentiva del poder otorgado al señor Gerardo Luis Nimango Ramos, y de tomarle DECLARACIÓN COMO TESTIGO a NOEMY MORENO ALBA sobre el poder conferido a Gerardo Luis Nimango inserto en la escritura pública N° 6215 de 2 de julio de 1992, únicamente en lo referente a si constató que las personas comparecientes a dicho acto fueron realmente quienes decían ser y si tuvo conocimiento que dicho poder es falso; y se DECLARA VIABLE la certificación de los movimientos migratorios (entradas y salidas) de ABDUL ALSAME, de nacionalidad canadiense, pasaporte N° FV 212750, en la República de Panamá. Ante esta circunstancia, se **ORDENA** remitir la comisión rogatoria en comento a la Dirección de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia para que certifique los movimientos migratorios (entradas y salidas) del señor **ABDUL ALSAME** en la República de Panamá.

Una vez realizada la diligencia cuya práctica se ordena, remítase a esta autoridad para su posterior envío al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien autenticará con apostilla la certificación efectuada en la Dirección de Migración, y devolverá a la República de Costa Rica.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR LUIS ERNESTO CAMPOS BOLAÑOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 80-96 DE 9 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia el cuaderno contentivo del recurso de apelación, propuesto por la licenciada Yolanda Bustamante De León, quien actúa en nombre y representación del señor Luis Ernesto Campos Bolaños, contra la decisión contenida en la Resolución N° 80-96 de 9 de mayo de 1996, la cual resuelve el Concurso N° 031-96 (mixto) para la Posición N° 1124 de Oficial Mayor I del Juzgado Sexto Municipal, Ramo Civil de Panamá.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el escrito de apelación se

puede apreciar diáfanamente en los hechos cuarto, quinto, sexto del referido instrumento de impugnación, que a continuación transcribimos:

> "TERCERO: Dentro de la lista de los no seleccionables nuestro representado LUIS E. CAMPOS B., aparece como "No es estudiante de Progreso Normal.
>
> CUARTO: Nuestro representado actualmente cursa el VII año de Derecho como estudiante del plan viejo.
>
> QUINTO: Dentro de los requisitos mínimos exigidos en el Aviso de Convocatoria para el concurso N° 031-96 se requería ser estudiante de los dos (2) últimos años de Derecho, por lo cual a nuestro representado se le debió evaluar sólo hasta el V año de la carrera de Derecho, sin embargo, nos asombra el hecho de que la Comisión de Personal del Órgano Judicial haya tomado en consideración para descalificar al señor LUIS E. CAMPOS B., asignaturas que se cursan en Vi y VII año de Derecho, igualmente nos extraña que dicha Comisión tomara en consideración la asignatura Trabajo de Grupo, toda vez que la misma no se cursa en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, desde que fue modificado el plan de estudio en 1993.-
>
> SEXTO: Al considerar a nuestro representado como un estudiante que no es de progreso normal, la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, no lo valoró por puntaje, dejándolo fuera de la lista de seleccionables, cuando el mismo reúne todos los requisitos y puntaje requerido para ser elegible a la posición N° 1124".

Una vez transcrita la parte medular del reclamo presentado por el recurrente, es menester pasar a analizar lo resuelto por la autoridad que conoció del recurso de reconsideración en primera instancia.

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo De lo Civil, resolvió el recurso de reconsideración mediante Resolución N° 118-96 de 22 de agosto de 1996 en la que se decide confirmar en todas sus partes la Resolución N° 80-96 de 9 de mayo de 1996, y concedió al atacante subsidiariamente ante esta Superioridad el recurso de apelación, previo los trámites de notificación.

Al ponderar la Sala los argumentos aportados por la parte recurrente con la resolución dictada por la Comisión de Personal, ésta manifiesta que coincide con lo actuado en primera instancia en el sentido que no es posible valorar u otorgarle una puntuación a la parte afectada con fundamento en los documentos aportados en el expediente y específicamente lo concerniente a los reparos que hemos transcrito en líneas anteriores, una vez que esta Magistratura al examinar detalladamente cada una de las piezas probatorias que componen el expediente de marras, manifiesta con suficiencia que efectivamente, cada una de ellas fue debidamente revisada y valorada por la Comisión de Personal y oportunamente, también, por los analistas de personal que laboran en el Departamento de Carrera Judicial, que para el caso concreto vienen a constituir los técnicos en dicha materia.

Tanto es así que, de acuerdo al hecho tercero y cuarto del escrito de alzada presentado por la jurista Bustamante De León en nombre del atacante Campos Bolaños, "no es estudiante de progreso normal" este argumento obliga a esta Sala expresar lo siguiente: A) Que el recurrente al presentar sus documentos entrega los créditos universitarios oficiales (registro de estudiante) en los cuales se puede apreciar que le falta el primer semestre y segundo semestre de Trabajo de Grupo, el primer semestre de Derecho Civil (Flia. y Suc.), y la primera parte de Derecho Mercantil III (fs. 64), por ende, no se puede determinar que es *estudiante de progreso normal*, ya que le hacen falta las materias antes señaladas. En este mismo orden de ideas señalaremos que estudiante de progreso normal según el propio estatuto universitario, es aquel estudiante que cursa todas las materias correspondientes al pensum del plan de estudio del turno

diurno o nocturno del semestre correspondiente y las aprueba con la nota mínima de "C" que le permite continuar al año o semestre siguiente sin materias pendientes.

Con relación al punto anterior, la Sala al argumentar dicho criterio viene a complementar lo esgrimido tanto por la Dirección de Recursos Humanos y la Comisión de Personal, en el sentido que con respecto a dicho reparo no le asiste la razón a la atacante en virtud de que consta en autos que la concursante no es un estudiante de progreso normal y que de acuerdo a los requisitos para ocupar el cargo de Oficial Mayor según el artículo 84 del Código Judicial se requiere ser panameño y por lo menos, ser estudiante de derecho de los dos últimos años, es decir si el aspirante es estudiante diurno, deberá estar iniciando el cuarto o el quinto año de la carrera y a contrario sensu si es estudiante nocturno debe estar iniciando el sexto o séptimo año lectivo. Esto se sostiene tomando en consideración los actuales planes de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y el concursante al no reunir este requisito de nivel académico evidenciado con los créditos universitarios oficiales por éste aportados, observamos que los mismos, se constituyen en el único documento que nos permite determinar si es o no el aspirante estudiante de progreso normal, por lo que basados en todo lo anteriormente expuesto, se desestima pues este cargo.

Que en relación al sexto reparo esbozado por la parte que recurre, y que guarda estrecha relación con los dos anteriormente analizados, hace alusión a que el concursante reúne todos los requisitos y puntaje para ser elegible a ocupar la posición N° 1124. Le reiteramos al recurrente de manera respetuosa que el único documento que exige el reglamento de Carrera Judicial en su artículo 30 para los participantes en los concursos de Oficial Mayor son los créditos universitarios oficiales, y es de los mismos que se deduce, que no es un estudiante de progreso normal, al no tener evaluación en todas las materias académicas que contempla el pensum del VI año de Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Es importante señalar que los créditos universitarios fueron aportados dentro del tiempo que exigen las reglas del propio concurso, por lo que esta Corporación coincide de forma plena con lo esgrimido por la Dirección de Recursos Humanos sobre el caso, visible a foja 74 del presente cuadernillo, cuando manifiesta que **"El señor Campos Bolaños para ser considerado estudiante de Progreso Normal y pretender ser evaluado debió presentar los créditos donde conste que ha aprobado las materias correspondientes al Primer Semestre de Sexto año de la Carrera de Derecho. Habiendo revisado el código de asignatura y las materias presentadas, hemos podido confirmar que el señor LUIS CAMPOS BOLAÑOS -NO ES ESTUDIANTE DE PROGRESO NORMAL-"**, criterio que en fallos anteriores esta Sala ha establecido como sano y correcto y que está destinado a lograr la integridad procesal y formal de los Concursos de Carrera Judicial.

Por lo tanto y con fundamento en lo señalado, esta Sala considera que al recurrente no le asiste la razón.

De esta manera, se conceptúa que tanto la Comisión de Personal de Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, como la Dirección de Recursos Humanos de este ente público, han manifestado acertadamente todos y cada uno de los argumentos necesarios, tanto de hecho como de derecho, para establecer que lo actuado por la parte impugnante de la resolución que se aduce como violatoria dentro del concurso ampliamente referido en la presente resolución; lleva a esta colegiatura a concluir que, efectivamente, ha de confirmarse en todas sus partes la Resolución N° 80-96 de 9 de mayo de 1996 dictada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 80-96 de 9 de mayo de 1996 proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta

materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO KOURUKLIS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 117-96 DE FECHA DE VEINTE (20) DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación en subsidio, propuesto por el licenciado José Martín Moreno Pujol en representación del licenciado Alejandro Basilio Kouruklis Sáenz, en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 117-96 de veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), la cual resuelve el concurso N° 379-96 (mixto) posición (687) para el cargo de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el apoderado judicial del recurrente se pueden resumir de la siguiente manera:

> PRIMERO: En el recibo de documentos expedido por la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Carrera Judicial el 26 de julio de 1996, la funcionaria Analista agregó "No Cumple requisito de experiencia". Esta aseveración (sic) fue refutada mediante nota del 29 de julio de 1996 dirigida al Honorable Magistrado Presidente de la Sala Civil y se solicitó que esta fuese incluida dentro del concurso.
>
> SEGUNDO: La Comisión de Personal al estudiar la documentación de los candidatos confirió a 8 candidatos puntaje situando a mi poderdante entre dichos ocho. Sin embargo, determinó que sólo cinco eran elegibles.
>
> TERCERO: ... Es obvio que los ocho candidatos son elegibles de acuerdo a esta definición y por el hecho de habérseles concedido puntaje. La ley 8 de 1982 indica los requisitos para ser Juez del Tribunal Marítimo. La única forma legalmente de declarar no elegible a uno de estos ocho candidatos sería si no reuniese los requisitos de este artículo y mi representado si los reúne.
>
> CUARTO: El articulo 30 del Acuerdo N° 46 del 27 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia que establece el reglamento de la carrera judicial indica que no serán admitidos al concurso los candidatos que no reúnan los requisitos mínimos o que no adjunten la documentación pertinente esta es la única facultad que le confiere el reglamento a la Comisión de Personal para declarar no elegible a un candidato. Consecuentemente es la obligación legal de esa Comisión de Personal para declarar no elegible a un candidato. Consecuentemente es obligación legal de esa Comisión de presentar a los 8 candidatos a consideración del ente nominador. De lo contrario la Comisión estaría en violación del Artículo 18 de la Constitución Nacional.
>
> QUINTO: El articulo 34 del Acuerdo N° 46 de 1991 de la Corte Suprema

> de Justicia establece que la Comisión de Personal debe RECOMENDAR A LOS ELEGIBLES para la vacante sometida a concurso. Entendemos por esto que se trata de una recomendación y no debe ser considerada como una EXCLUSIÓN, toda vez que es el jefe del Despacho el que va a elegir, tomando en cuenta la recomendación de la Comisión de Personal y a su criterio propio cual va a ser la persona que va a designar para dicho cargo.
>
> SEXTO: Consideramos que lo que la Comisión de Personal puede hacer y así lo ha hecho es darle el puntaje a cada candidato. No obstante en el caso particular de mi representado este sistema numérico no cumple el propósito de determinar la preparación del Candidato con respecto a un cargo tan especializado. Mi poderdante laboró por 12 años en el Tribunal Marítimo y cuenta con una vasta experiencia y dominio en el manejo de los negocios que se ventilan en el Tribunal Marítimo.

Una vez transcrita la parte esencial del recurso de reconsideración, La Sala Cuarta de Negocios Generales pasa a conocer el recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación a lo argumentado por el recurrente en el hecho primero esta Sala le señala categóricamente al aspirante que este tipo de recurso sólo se puede fundamentar sobre los agravios de lo que considera el participante ha sido objeto en la valoración de su documentación aportada. De acuerdo al Reglamento de Carrera Judicial, a la Comisión de Personal le corresponde la evaluación de cada concursante de manera individual y ningún recurso presentado en esta instancia puede tener como base notas dirigidas al Magistrado Presidente de la Sala Civil, debido a que no es el canal regular para entrar a evaluar a los participantes; esta Sala desea dejar sentado manera clara que no se desprende del negocio bajo examen nota alguna que confirme el argumento esgrimido por el recurrente, y ante la falta de pruebas, esta Superioridad desestima este cargo.

En cuanto al segundo, tercer y cuarto reparo del presente escrito, esta Magistratura Colegiada es del criterio que, no es posible pretender resultar seleccionable dentro de un determinado concurso cuando sólo fueron adjuntados documentos mínimos para participar en el mismo y no los suficientes para resultar elegible, pues para ocupar el cargo sometido a concurso, será escogido aquel que aporte la mayor cantidad de elementos que demuestren su capacidad y actuaciones profesionales.

De esta forma, la Sala procede conforme al artículo 15 del Reglamento de Carrera Judicial, en el cual se establecen las descripciones o especificaciones inherentes al cargo. De ahí, que surjan los Avisos de Convocatoria que reúnen requisitos tomando en consideración la naturaleza del cargo, de forma tal, que la Dirección de Recursos Humanos no puede cambiar, alterar o modificar lo establecido para favorecer a todos los individuos que participan en la posición, sometida a concurso; el cumplir con los requisitos mínimos no le garantiza a ninguno de los participantes el ser elegible, de ser así, la Comisión de Personal incurriría en atribuciones no asignadas a ésta y desvirtuaría la naturaleza jurídica y administrativa que intrínsecamente contiene la Carrera judicial en cada una de las normas que la regulan, tanto a nivel sustantivo como adjetivo y, que además permite a todos los concursantes gozar del principio de equidad que debe privar en los concursos y que sólo dependerá indefectiblemente, como ya le hemos señalado, del grado de preparación académica y demás documentos que los aspirantes aporten para acumular la mayor cantidad de puntos a su favor, puesto que de ser elegibles todos los participantes que reúnen los requisitos mínimos del Aviso de Convocatoria, no tendría objeto la convocatoria de concursos de la Carrera Judicial, por lo que se desestiman estos cargos.

Con relación a lo argumentado en el hecho quinto y sexto del escrito, considera esta Sala que la Comisión de Personal y el propio Departamento de Carrera Judicial, tienen autonomía para establecer los sistemas de trabajo que van utilizar en la resoluciones de los diferentes concursos que ellos mismos convocan. La evaluación de los concursantes y la elegibilidad de los mismos

dependerá del comportamiento de los puntajes arrojados por los aspirantes, promedios que variarán de acuerdo a lo que aporten los interesados. El conceder el beneficio de elegibilidad al funcionario por el sólo hecho de tener 12 años como miembro de nuestra institución, implicaría la desvalorización de la Carrera Judicial en cada una de las normas que la regulan, eliminando de manera abrupta la oportunidad a todos los concursantes gozar del principio de uniformidad, sin distingo de su desempeño laboral en esta institución o en cualquier otra, ya que el criterio que debe privar en los concursos debe depender exclusivamente, del grado de instrucción universitaria que exige el cargo a ejercer y demás documentos que los aspirantes aporten para acumular la mayor cuantía a su favor; por ende todas aquellas personas que aspiran a dicho cargo, aún el que lo ejecutó, por el tiempo y de la manera que fuere, debe ajustarse y cumplir con lo exigido, por lo que se desestima este cargo.

Se desprende del análisis del expediente y de las afirmaciones manifestadas en el recurso de reconsideración, hecho sexto, que el licenciado Alejandro Basilio Kouruklis Sáenz sólo adjuntó los documentos mínimos exigidos para participar en el concurso y ningún otro documento adicional que pudiera aumentar la puntuación a él asignada.

El criterio de esta Superioridad con respecto a los Avisos de Convocatoria es que dicha notificación a los participantes, sirve de base o punto de partida para que cada concursante aporte los requisitos mínimos y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para tratar de aumentar su puntuación. Radica pues, en la voluntad de cada cual, tratar al máximo de aportar la mayor cantidad de documentos o pruebas que acrediten su capacidad.

Esta Superioridad ha manifestado en reiteradas ocasiones que, para poder acreditar los conocimientos y capacidades de los concursantes, ha de incorporarse dentro del término establecido para tal finalidad y adjunto al formulario de inscripción, documentos que ratifiquen la capacidad del aspirante de acuerdo a los requerimientos del cargo en concurso. Los requisitos mínimos estaban claramente definidos en el Aviso de convocatoria # 379 de julio de 1996.

Una vez efectuado el análisis de los documentos aportados resulta evidente que, dicha documentación se aportó acreditándose la capacidad del concursante de acuerdo a los requerimientos exigidos en el concurso del cargo de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial, observándose que la evaluación de los mismos no alcanzó el puntaje mínimo estipulado para figurar en la lista de elegibles del citado concurso, además en torno a los documentos en mención, no observa esta Sala razón alguna para modificar la puntuación obtenida en virtud que no se presentó ninguna prueba, reparo o argumento que determine que el puntaje no fue valorado correctamente.

Aunado a lo anteriormente manifestado, esta Magistratura desea anotar que la valoración de los concursantes se efectúa en base a hechos objetivos efectivamente documentados. No es objeto de estudio de esta Corporación la valoración subjetiva de la calidad de persona de los concursantes; tales apreciaciones sólo son posibles una vez que el aspirante queda dentro de la lista de los elegibles, por la autoridad nominadora.

Esta Colegiatura ha manifestado en reiteradas ocasiones el criterio que, la valoración subjetiva de los hechos recurridos contraviene los principios de la Carrera Judicial y atenta contra el principio de justicia que debe prevalecer al momento de evaluar a todos los concursantes.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 117-96 de 20 de agosto de 1996 emitida por la Comisión de Personal del Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, la cual decidió la lista de los elegibles y no elegibles para el concurso 379-96 (Mixto) posición (687) de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial y ORDENA una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO, INTERPUESTO POR CALIXTO MALCOLM CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 117-96 DEL 20 DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, el expediente contentivo de la Resolución N° 117-96 de 20 de agosto de 1996 proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, mediante la cual se seleccionó a las personas elegibles para ocupar el cargo de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial (posición N° 687) de Panamá.

En la resolución impugnada, dentro de la lista de elegibles para ocupar el cargo de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial, aparece el licenciado Calixto Malcolm, en segundo lugar, con un total de noventa y cinco punto veinte (95. 20) puntos.

Luego del puntaje otorgado por la Comisión de Personal y a pesar de haber ocupado el segundo lugar en la lista de seleccionables, el licenciado Malcom manifiesta su disconformidad con el puntaje obtenido en base a los documentos por él aportados, y en virtud de ello, interpone en su propio nombre, recurso de apelación.

El recurso en mención, se fundamenta principalmente, en el hecho que a el licenciado Calixto Malcolm no le fueron tomadas en consideración diversas monografías, como lo son los Programas Académicos científicamente elaborados, de asignaturas de Maestrías y Licenciaturas en la especialidad objeto de concurso, incluyendo la asignatura de Maestría en los aspectos fundamentales del Proceso Marítimo, en virtud que todos aquellos trabajos se produjeron en el marco de sus labores como docente universitario y que por tal motivo, los mismos debían ser tomados en cuenta.

Manifiesta además el recurrente, que la elaboración de los programas no es una tarea obligatoria del Profesor Universitario, sino que la iniciativa es un estímulo para aquellos que desean ganar concursos académicas, por ello es que los citados programas son altamente ponderados por el Consejo Académico (cuatro puntos por semestre), y sólo los más diligentes y esforzados que los confeccionan, logran ganar concursos.

También se indica en el recurso en mención, que no ha sido justa la ponderación de las ponencias presentadas porque las mismas han sido dictadas en el campo de Derecho Marítimo, incluyendo Procesal Marítimo a nivel de Maestría. Por lo expresado en líneas anteriores, el recurrente solicita que se reconsidere la puntuación asignada por la Comisión de Personal, en dicho concurso.

Por su parte, la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial resolvió el recurso de reconsideración mediante su Resolución N° 122-96 de 5 de septiembre del año que decurre, en la que resuelve lo siguiente:

> "Primero: Mantener en todas sus partes la Resolución N° 117-96 de fecha veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996);

Segundo: Conceder el Recurso de Apelación anunciado".

Ahora bien, al analizar el cuadernillo contentivo del recurso, se observa que con respecto a las Monografías que presentó el recurrente, se muestra efectivamente que las mismas no fueron valoradas.

Con respecto a los trabajos efectuados por el recurrente bajo el renglón de Monografías (programas académicos científicamente elaborados), la Sala coincide con la opinión vertida por la Comisión de Personal, en el sentido de no otorgarle ninguna puntuación sobre tales ejecutorias. Lo anterior obedece a que resulta imposible poder cuantificar o ponderar el trabajo realizado por el licenciado MALCOLM dentro de los planes de los programas de licenciatura o maestría, cuando los mismos implican en sí mismos un planeamiento del desarrollo de una materia dentro del pensum de la licenciatura o Maestría en Derecho. De ninguna manera desmeritamos los aportes valiosos que ha realizado el jurista Malcolm, pero mal podríamos otorgarle puntuación a los trazos generales que marcan pautas a seguir en un curso universitario determinado. Cabe resaltar que la diagramación de un programa académico no equivale a la publicación de un manual, folleto u obra jurídica, que venga a complementar el programa académico diseñado, pero se desprende del presente negocio que este no es el caso.

Debe comprenderse que otorgarle puntuación al licenciado MALCOLM en dicho sentido, sería contra el criterio vertido por la Sala en torno a que existen diversos tipo de publicaciones que son parte del trabajo del concursante y, como tal, no pueden ser valorados como obra de éste. Su colaboración en el diseño de los programas académicos se realiza en el marco de su trabajo, como docente comprometido a dar lo mejor de sí.

Distinto es el caso, a juicio de esta Sala, con respecto a los artículos publicados bajo el nombre y firma del Licenciado Calixto Malcolm. La autoría de tales artículos, publicados tanto en Anuarios, Manuales, Libros, Revistas o cualquier clase de publicación de esta índole, son creación intelectual del recurrente, y como tal, es susceptible de ser divulgada a través de distintos medios.

Resulta claro indicar que las Ponencias son sujetas a valoración de acuerdo a la Tabla que para tal efecto la Carrera Judicial ha implementado, es por esto que luego de examinar el presente reclamo, considera la Sala que las mismas fueron evaluadas correctamente, por lo que se desestima este cargo.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución N° 117-96 de 20 de agosto de 1996 que establece la lista de seleccionables para el concurso N° 379-96 (Mixto), posición 687 de Juez de Tribunal Marítimo del Órgano Judicial y ORDENA una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=